

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN  
ORTEGA Y GASSET**

**Programa de Doctorado  
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**



**TESIS DOCTORAL**

**La ventana de oportunidades del gobierno abierto en España: un  
análisis desde el ámbito local**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Juana López Pagán**

DIRECTOR

**Manuel Villoria Mendieta**  
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Madrid, 2016



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
MADRID



FUNDACIÓN  
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN  
JOSÉ ORTEGA Y GASSET

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN  
ORTEGA Y GASSET

Programa de Doctorado

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Título de la Tesis Doctoral

**LA VENTANA DE OPORTUNIDAD DEL GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA:  
UN ANÁLISIS DESDE EL ÁMBITO LOCAL**

Doctoranda

**JUANA LÓPEZ PAGÁN**

Director de la Tesis

**DR. D. MANUEL VILLORIA MENDIETA  
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS**

Madrid, 2015



*A mi padre, in memoriam*





## AGRADECIMIENTOS

El ser humano tiene una tendencia natural a buscar el sentido de las cosas, de ahí que queramos ampliar el horizonte de lo conocido para entender el mundo que nos rodea. El proceso de investigación y elaboración de una tesis es una etapa larga y exigente, llena de estímulos y contrariedades que conducen a lugares y aprendizajes nuevos. Se trata de un proceso que, en gran medida, se hace de forma individual. Sin embargo, la colaboración y el apoyo de una serie de personas ha sido esencial para llevar a cabo este recorrido. Así pues, quisiera dedicar unas palabras a los que me han acompañado en este viaje.

En primer lugar, a Manuel Villoria, Director de esta Tesis, profesor y maestro, por ser la gran inspiración que me hizo encontrar una nueva pasión. Sin su sabiduría, apoyo, guía y afecto a lo largo de estos años no hubiese sido posible abordar este desafío.

Asimismo, quisiera también destacar el apoyo del magnífico equipo del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Mi más sincera gratitud a aquellos que me orientaron y animaron a llegar a la que hoy siento como mi casa, a Julio Alberto, que desde el cariño siempre me colmó de buenos consejos y a Jesús Sánchez Lambás por abrirme las puertas de la Institución. En el Instituto encontré a los más reputados académicos y a los mejores maestros, en especial a Esther del Campo, a Manuel Arenilla, y como no, a Manuel Villoria. A ellos quiero agradecerles la confianza que depositaron en mí durante aquellos primeros años. A Miriam Álvaro y a Pilar Lorrio, por ayudarme siempre con una sonrisa en todas las etapas de esta apasionante aventura.

Este trabajo no hubiera sido posible sin la valiosa colaboración del mundo local español, principalmente de los ayuntamientos que han participado en la encuesta. Por ello quiero agradecer el compromiso de numerosos profesionales de la administración pública que trabajan para hacer mejor el gobierno de nuestras ciudades. De ahí que en este punto no pueda dejar de mencionar a Carmen Mayoral y Pelayo Espinosa, amigos y compañeros

de la Federación Española de Municipios y Provincias, por su inestimable ayuda, aportaciones y paciencia.

Finalmente quisiera agradecer de corazón el apoyo recibido por parte de familiares y amigos, pilares básicos de este intenso recorrido. A mi familia, a mi padre, Antonio, a mi madre, Encarna, y a mi hermano, Joaquín, por quererme, cuidarme y creer en mí. A mis amigas Elena, Isabel, María José y Mercedes, por comprender mis ausencias y estar siempre ahí cuando las necesito. Y a mi proyecto vital, Arnau, por su apoyo, inteligencia y por sus inestimables contribuciones; llegar al final ha sido posible gracias a su amor y a su enorme generosidad.

Sin estas personas e instituciones hubiese sido imposible elaborar esta tesis doctoral. Sin embargo, cualquier error que pueda contener la misma es responsabilidad exclusiva de la que suscribe estos sinceros agradecimientos.

Esta tesis está dedicada a la memoria de mi padre pues ambos comenzamos juntos la aventura de nuestros respectivos doctorados. Él sostenía que era más enriquecedor investigar desde la serenidad y el conocimiento adquirido a lo largo de los años, mientras yo defendía que siempre era un buen momento para afrontar ese reto. A su tesis doctoral dedicó sus últimos años; fue un camino emocionante, aunque no exento de exigencias. Después de un inmenso esfuerzo, finalmente no pudo llegar a defenderla. Hoy puedo afirmar que esta aventura se ha convertido en uno de los aprendizajes más importantes de mi vida. Ahora más que nunca entiendo sus palabras. Sé que su fuerza me ha acompañado a lo largo de este camino, por eso mi último y más emotivo agradecimiento es para él.





## ÍNDICE

	Pág.
<b>SIGLAS Y ACRÓNIMOS</b>	15
<b>ÍNDICE DE FIGURAS</b>	17
<b>RESUMEN</b>	21
<b>SUMMARY</b>	25
<b>CAPÍTULO I. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b>	31
I. INTRODUCCIÓN	31
II. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y MARCO ANALÍTICO	36
III. LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	37
IV. EL SISTEMA DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	38
1. La hipótesis conceptual	38
2. Las hipótesis específicas	39
V. SISTEMA DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN	40
VI. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN	41
VII. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INVESTIGACIÓN	44
1. La estrategia metodológica	44
2. Las técnicas de la investigación	45
3. La investigación cuantitativa	47
A) Descripción del procedimiento y metodología	47
B) Resultados alcanzados	52
VIII. PLAN DE EXPOSICIÓN DE LA TESIS	53
<b>CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN: EL ENFOQUE DE LAS CORRIENTES MÚLTIPLES</b>	57

I. CONSIDERACIONES PREVIAS	57
II. MARCO TEÓRICO SOBRE PROCESOS DE CAMBIO EN LAS POLÍTICAS	59
1. Introducción	59
2. Las teorías sobre el proceso de cambio de políticas públicas	61
3. El proceso del cambio en los diferentes marcos teóricos	64
III. EL MARCO DE LAS CORRIENTES MÚLTIPLES Y SU DESARROLLO TEÓRICO	72
1. Base del Enfoque de las Corrientes Múltiples	72
2. El Enfoque de las Corrientes Múltiples frente al Ciclo de Políticas Públicas	74
3. Las corrientes: problemas, políticas y política	78
A) Diseño de la agenda: definición de los problemas	78
B) Elaboración de alternativas	85
C) La corriente política	91
4. El acoplamiento de las corrientes: la ventana de oportunidad	93
A) Ventana de oportunidad	94
B) Acoplamiento	95
C) Aparición de las ventanas y desbordamientos	96
5. Limitaciones del Enfoque de las Corrientes Múltiples	101
<b>CAPÍTULO III. GOBIERNO ABIERTO: ESTADO DEL ARTE</b>	105
I. INTRODUCCIÓN	105
II. ANTECEDENTES, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO ABIERTO	107
1. Secretos de Estado versus normas de acceso a la información	108
2. De la Nueva Gestión Pública a la Gobernanza	111
3. La visión y evolución del gobierno abierto en la perspectiva de la OCDE	120

4. Del Memorándum sobre Transparencia y Gobierno Abierto al <i>Open Government Partnership</i>	125
A) El gobierno abierto en Estados Unidos: el impulso de un nuevo paradigma	126
B) La Alianza para el Gobierno Abierto: referencia internacional e isomorfismo institucional	129
III. REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE EL CONCEPTO, DIMENSIONES Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL GOBIERNO ABIERTO	136
1. Delimitación conceptual	136
2. Dimensiones del gobierno abierto	140
A) La gobernanza colaborativa a través de las TIC	141
B) Gobierno electrónico y <i>open data</i>	143
C) Derechos fundamentales e inteligencia cívica	145
D) Reforma del Estado y fortalecimiento de la democracia	147
E) Participación y colaboración: ciudadanía 2.0.	149
3. Fundamentos teóricos y etapas	151
A) Gobierno promotor de bienestar social	152
B) Gobierno transparente que rinde cuentas	154
C) Gobierno participativo y promotor de civismo	155
D) Gobierno colaborador y generador de conocimiento colectivo	157
E) Etapas	160
<b>CAPÍTULO IV. EL GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA</b>	165
I. ORIGEN Y CONTEXTO: DE LA AGENDA DIGITAL AL GOBIERNO ABIERTO	165
II. ESPAÑA EN EL <i>OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP</i>	168
1. Introducción	168



2. Primer Plan Nacional de Gobierno Abierto (2012-2013)	169
3. Informe del Mecanismo de Revisión Independiente (2012-2013)	174
4. Segundo Plan Nacional de Gobierno Abierto (2014-2015)	178
5. Principales actuaciones del Gobierno de España	182
A) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno	184
B) Portal de Transparencia	196
C) Consejo de Transparencia y Buen Gobierno	198
III. EL GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO	201
<b>CAPÍTULO V. LA VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA EL GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA</b>	207
I. CONSIDERACIONES PREVIAS	207
II. LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ( <i>AGENDA</i> ): LA DESAFECCIÓN POLÍTICA	209
1. La desafección en España	209
2. Indicadores	214
A) Corrupción y percepción de la corrupción	214
B) Desafección institucional y desapego político	222
3. Acontecimientos relevantes: manifestación de la crisis de confianza	230
A) 15M y el surgimiento de nuevos movimientos ciudadanos	231
B) La emergencia de la corrupción como segundo problema del país	233
4. Estudios específicos sobre gobierno abierto	236
A) Objetivos, estrategias y actuaciones en materia de gobierno abierto	236
B) Estudio de la demanda y uso del gobierno abierto en España	238
5. Retroalimentación en materia de políticas de gobierno abierto	241

A) Informe de Autoevaluación del Primer Plan Nacional de Gobierno Abierto	242
B) Informe del Mecanismo de Revisión Independiente del Primer Plan Nacional de Gobierno Abierto	243
III. LA CORRIENTE DE POLÍTICAS ( <i>THE POLICY STREAM</i> )	244
1. El <i>primeval soup</i> y las comunidades de expertos: ideas, alternativas y soluciones al problema de crisis de confianza	245
2. El ablandamiento ( <i>softening up</i> ) del concepto de gobierno abierto	246
3. La selección de ideas, el consenso emergente y la alternativa disponible	248
IV. LA CORRIENTE POLÍTICA ( <i>THE POLITICAL STREAM</i> )	250
1. El clima político en España 2011-2014	250
2. El cambio de Gobierno: las Elecciones Generales de 2011	252
3. Intereses organizados y políticas de gobierno abierto	255
V. EL ACOPLAMIENTO DE LAS CORRIENTES: LA VENTANA DE OPORTUNIDAD DEL GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA	260
<b>CAPÍTULO VI. EL GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO LOCAL ESPAÑOL</b>	263
I. DEL DIAGNÓSTICO (DESAFECCIÓN) A LAS PROPUESTAS DE REFORMA: BUEN GOBIERNO Y GOBIERNO ABIERTO LOCAL	263
II. INSTRUMENTOS PARA LA TRANSPARENCIA, EL BUEN GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN	267
1. Ordenanza Tipo de transparencia, acceso a la información y reutilización	267
2. Nuevo Código de Buen Gobierno Local	270
3. El trabajo en red en materia de transparencia y participación	272
A) La Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación	272
B) La Red de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia	273
III. POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO LOCAL ESPAÑOL: UN ANÁLISIS CUANTITATIVO	274

1. Presentación	274
2. Descripción y metodología	276
3. Análisis de resultados	285
A) Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno	285
B) Participación, colaboración y redes sociales	297
C) Cuestiones generales sobre gobierno abierto	300
D) Comentarios adicionales	302
4. Resumen de aspectos destacados y demostración de hipótesis	303
<b>CAPITULO VII. CONCLUSIONES</b>	307
I. LA MARCA <i>OPEN GOVERNMENT</i> : ISOMORFISMO INSTITUCIONAL DE UN NUEVO MODELO DE RELACIÓN ENTRE GOBIERNO Y CIUDADANÍA	308
II. LA VENTANA DE OPORTUNIDAD DEL GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA: UNA RESPUESTA A LA DESAFECCIÓN CIUDADANA	311
III. POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO LOCAL: HOMOGENEIZACIÓN, LEGITIMACIÓN DE PROCESOS Y ESTRATEGIA ELECTORAL	313
IV. RETOS EN MATERIA DE GOBIERNO ABIERTO	316
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	323
<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	347

## SIGLAS Y ACRÓNIMOS

15M	Movimiento asociado a las movilizaciones iniciadas el 15 de marzo de 2011
ACF	Marco de Coalición Promotora ( <i>Advocacy Coalition Framework</i> )
AEPD	Agencia Española de Protección de Datos
AEVAL	Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
AGE	Administración General del Estado
BRIE	Barómetro del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales
CCAA	Comunidades Autónomas
CIS	Centro de Investigaciones Sociológicas
CIU	Convergencia i Unió
CC	Coalición Canaria
CPLRE	Consejo de Poderes Locales y Regionales de Europa (Consejo de Europa)
CTBG	Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
DBO	<i>Desires, Beliefs, Opportunities</i> (Deseos, Creencias, Oportunidades. Hedström, 2010)
DOI	Modelos de Difusión de la Innovación ( <i>Diffusion of Innovation Models</i> )
EAJ-PNV	Partido Nacionalista Vasco
ECM	Enfoque de las Corrientes Múltiples (Kingdon, 1984; 1995)
EELL	Entidades Locales
ESS	<i>European Social Survey</i>
EUDEL	<i>Euskadiko Udalen Elkarte</i> (Asociación de Municipios Vascos)
FEMP	Federación Española de Municipios y Provincias
FOIA	<i>Freedom of Information Act</i> (Ley de Libertad de Información), EE.UU. 1966
IAD	Marco de Análisis y Desarrollo Institucional ( <i>Institutional Analysis and Development Framework</i> )
IPC	Índice de Percepción de la Corrupción
IRM	<i>Independent Review Mechanism</i> (Mecanismo de Revisión Independiente)
IU	Izquierda Unida
ITA	Índice de Transparencia de Ayuntamientos (Transparencia Internacional)
LRJPAC	Ley 30/92 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común
LTAIBG	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno

NGP	Nueva Gestión Pública
NPF	Marco de la Narrativa de las Políticas ( <i>Narrative Policy Framework</i> )
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OGP	<i>Open Government Partnership</i> (Alianza para el Gobierno Abierto)
ONG	Organización No Gubernamental
ONTSI	Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
OPIEX	Observatorio Permanente sobre la Imagen de España en el Exterior
PET	Modelo del Equilibrio Interrumpido ( <i>Punctuated Equilibrium Theory</i> )
PFT	Teoría de la Retroalimentación de Políticas ( <i>Policy Feedback Theory</i> )
PNA	Marco del Acercamiento de Redes ( <i>Policy Network Approach</i> )
PNL	Propuesta No de Ley
PP	Partido Popular
PPN	Primer Plan Nacional (de Gobierno Abierto)
PSOE	Partido Socialista Obrero Español
SCF	Modelo de Construcción Social y Diseño de Políticas ( <i>Social Construction Framework</i> )
SEAP	Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
SESF	Marco de los Sistemas Sociales Ecológicos ( <i>Social Ecological System Framework</i> )
SPN	Segundo Plan Nacional (de Gobierno Abierto)
TIC	Tecnologías de la Información y Comunicación
UE	Unión Europea
UPyD	Unión Progreso y Democracia
WWS	<i>World Values Survey</i>
W3C	World Wide Web Consortium

## **ÍNDICE DE FIGURAS**

	Pág.
Figura 1. Principales teorías y enfoques para explicar el cambio de políticas	61
Figura 2. Tramos del proceso de las políticas para cada teoría	70
Figura 3. Ciclo de las políticas públicas	76
Figura 4. Diagrama Enfoque de las Corrientes Múltiples (I)	77
Figura 5. Incorporación de los problemas a la Agenda	80
Figura 6. Preguntas clave para el análisis del cambio de política basado en el ECM	98
Figura 7. Diagrama del Enfoque de las Corrientes Múltiples (II)	101
Figura 8. Diferencia entre la Nueva Gestión Pública y la Gobernanza	118
Figura 9. La experiencia de la OCDE en gobierno abierto	122
Figura 10. Marco de evaluación para el gobierno abierto	124
Figura 11. Países miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto	130
Figura 12. Fundamentos teóricos del gobierno abierto	152
Figura 13. Desarrollo de un modelo de gobierno abierto	161
Figura 14. Compromisos del PPN de gobierno abierto 2012-13	171
Figura 15. Clasificación de los compromisos del PPN de gobierno abierto	176
Figura 16. Compromisos del SPN de gobierno abierto 2014-15	180
Figura 17. Elementos básicos de la LTAIBG	189
Figura 18. Iniciativas autonómicas en materia de transparencia, participación y gobierno abierto	203
Figura 19. Índice de la percepción de la corrupción en España (2004-2014)	216
Figura 20. Encuesta Eurobarómetro sobre corrupción (octubre 2013)	219
Figura 21. Datos Eurobarómetro octubre 2013 (I)	220
Figura 22. Datos Eurobarómetro octubre 2013 (II)	221
Figura 23. Confianza en los gobiernos nacionales en 2012 y evolución desde 2007	223
Figura 24. Confianza en los Parlamentos Nacionales en Europa 2002-12 (media en una escala de 0 a 10)	224
Figura 25. Confianza en los actores políticos (políticos y partidos políticos) en Europa 2004-10 (media en una escala de 0 a 10)	225
Figura 26. Confianza en las instituciones del Estado (tribunales de justicia y policía) en Europa 2002-12 (media en una escala de 0 a 10)	227

Figura 27. Interés por la política en Europa 2002-12 (porcentaje de los bastante o muy interesados)	228
Figura 28. La corrupción como problema público en España entre octubre de 2012 y enero de 2015	235
Figura 29. Clima social en España (enero 2013)	251
Figura 30. Fórmula utilizada para calcular el tamaño de la muestra	279
Figura 31. Gobiernos locales que han respondido al cuestionario (+20.000 hab.)	280
Figura 32. Resumen de participación por comunidades autónomas	282
Figura 33. Distribución de respuestas por rango de población	284
Figura 34. Distribución de respuestas por partido político	284
Figura 35. Conocimiento de la Ley 19/2013	286
Figura 36. Órgano responsable políticas de transparencia y buen gobierno	287
Figura 37. Normativa sobre transparencia y buen gobierno	288
Figura 38. Disponibilidad portal transparencia	289
Figura 39. Valoración del grado de desarrollo de políticas de transparencia	291
Figura 40. Desarrollo de políticas de transparencia y gasto público	293
Figura 41. Valoración de políticas de transparencia por CC.AA	293
Figura 42. Valoración de políticas de transparencia por partido político	295
Figura 43. Mandato de inicio de políticas de transparencia y buen gobierno	296
Figura 44. Comunicación vía redes sociales	298
Figura 45. Debates <i>on line</i>	298
Figura 46. Entornos web de colaboración	299
Figura 47. Publicación de datos reutilizables	300
Figura 48. Conocimiento de actuaciones de gobierno abierto en España	301







## RESUMEN

### **LA VENTANA DE OPORTUNIDAD DEL GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS DESDE EL ÁMBITO LOCAL**

El gobierno abierto se ha convertido en un nuevo modelo de política pública que sitúa la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana como ejes primordiales para la acción política. El gobierno abierto fomenta que las administraciones y los gobiernos afronten el reto de recuperar la legitimidad y la confianza de la población a través de la transparencia y la responsabilidad, así como mediante la generación de espacios de intercambio y participación que promuevan la inteligencia colaborativa.

Desde hace más de una década, el concepto de gobierno abierto ha formado parte de los estudios de Ciencias Políticas en relación a la transparencia, la participación, la modernización de la administración pública y el gobierno electrónico. Sin embargo, no fue hasta 2009 cuando alcanzó su máxima notoriedad debido a la presentación del Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto presentado por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como punto de partida orientado a cerrar la brecha existente entre el pueblo americano y su gobierno. Poco después, un pequeño grupo de países (Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica y Reino Unido, bajo el liderazgo de Brasil y los EE.UU.) crearon la Alianza para el Gobierno Abierto u *Open Government Partnership* (OGP) una iniciativa destinada a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la participación gracias a las oportunidades que brinda las nuevas tecnologías y la web 2.0. A partir de ese momento, el gobierno abierto entró a formar parte de la agenda internacional, ofreciendo prácticas y conocimientos en red basados en un nuevo esquema de relación entre gobierno y ciudadanía a través del uso de las nuevas tecnologías.

El Gobierno de España se unió al OGP en 2011, asumiendo los compromisos que estipula la red internacional y que, a su vez, debían concretarse en planes de acción

nacional con medidas específicas en materia de gobierno abierto. El principal exponente a nivel nacional ha sido la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Sin embargo, las iniciativas en materia de gobierno abierto en España no han sido exclusivas del Gobierno central; comunidades autónomas y gobiernos locales han adoptado políticas para incorporar este modelo de gobernanza en sus propios territorios.

La inserción en la agenda política del gobierno abierto en España no sólo se encuentra ligada a la aparición de un nuevo paradigma, extendido a lo largo de todo el mundo que ha derivado en un proceso de isomorfismo institucional, sino a un contexto nacional que en los últimos cuatro años ha estado marcado por una profunda crisis económica, política e institucional. Diversos indicadores y estudios muestran que durante 2013 la crisis ha puesto en tela de juicio el sistema democrático español. La aparición de numerosos casos de corrupción ha situado la desafección ciudadana en un lugar preeminente de la agenda política en todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local). Esa falta de confianza en el gobierno se ha visto amplificada consecuencia de la posibilidad de acceso global a la información y a la capacidad de interacción y comunicación de la ciudadanía. Pero a su vez, las nuevas tecnologías también están proporcionando nuevos instrumentos para luchar contra esta crisis multidimensional. De ahí que la pregunta principal a la que esta investigación pretende dar una respuesta es por qué el gobierno abierto se ha convertido en una prioridad en la agenda gubernamental de los gobiernos locales.

El marco teórico que utiliza esta investigación es el modelo de las corrientes múltiples de Kingdon (1984; 1995), que permite analizar cómo la crisis de confianza en las instituciones públicas y el estado de ánimo nacional generalizado han abierto una oportunidad para el cambio de las políticas en materia de transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción. La existencia de alternativas viables para reaccionar ante la crisis ha permitido el acoplamiento de las corrientes —problemas, política y políticas— abriendo una ventana oportunidad para el gobierno abierto en España, en especial en la esfera local.

La presente investigación describe los orígenes y la evolución de las políticas adyacentes a este nuevo paradigma hasta su incorporación en la agenda de los gobiernos locales españoles. Desde 2012 diferentes niveles de gobierno han puesto en práctica políticas de gobierno abierto. Sin embargo, este nuevo modelo encuentra en el ámbito local un escenario favorable para el desarrollo del trabajo en red a través de una gestión transparente y colaborativa. En consecuencia, esta tesis incluye un análisis cuantitativo basado en una encuesta online a gobiernos locales de más de 20.000 habitantes que ilustra cómo los poderes locales han optado por la actualización de sus sistemas de gestión en términos de transparencia y participación ciudadana.

El objetivo principal de la investigación es explorar la apertura de una ventana de oportunidad para el gobierno abierto en España, con especial incidencia en el nivel local, donde han confluído las tres corrientes: i) la crisis de confianza de la población en relación al sistema político (problema); ii) la existencia de alternativas en términos de transparencia y gobierno abierto para luchar contra la desafección (políticas); y iii) el cambio de gobierno en 2011 y el estado de ánimo nacional, propicio para la reforma normativa plasmada en la nueva Ley de Transparencia (política).

Asimismo, el estudio sobre gobierno abierto en el ámbito local arroja luz sobre el grado de desarrollo de las políticas de transparencia, participación y colaboración, analiza en qué medida un nivel efectivo de transparencia puede contribuir a la mejora de las prácticas participativas y colaborativas, e identifica posibles mejoras en la implementación de iniciativas de gobierno abierto. Los resultados muestran cómo un número creciente de gobiernos locales están desarrollando acciones en el ámbito de la transparencia gubernamental centradas en la promoción de transparencia, gobierno electrónico, open data y redes sociales. La encuesta, llevada a cabo entre enero y marzo de 2015, ha reunido los datos de 120 gobiernos locales de más de 20.000 habitantes (de un total de 399 en España), que representan a más de 19 millones de personas (alrededor del 41% de la población total de España).

Los resultados muestran que estos actores están experimentando una profunda transformación en su gestión en favor de políticas de gobierno abierto con el fin de

responder a la crisis antes mencionada. Los datos muestran que el 61,2% de los gobiernos locales han comenzado a desarrollar políticas de transparencia durante el período 2011-2015 y que el 87% de los representantes locales está familiarizado con las actividades sobre gobierno abierto del gobierno nacional (aunque sólo el 50,4% sabe que se deriva de la pertenencia de España al OGP).

Otro bloque de resultados indica que los avances en materia de gobierno abierto han sido resultado de la aprobación de nueva legislación: el 97,7% de los gobiernos locales encuestados conoce las obligaciones derivadas de la nueva Ley de Transparencia; más del 80% de las ciudades tiene un área específica para desarrollar políticas de participación ciudadana; y más del 70% de los gobiernos locales han desarrollado recientemente portales de transparencia en sus sitios web. Por otra parte, el 92,4% de los gobiernos locales encuestados tiene una cuenta de Facebook o Twitter como herramienta de comunicación entre la administración y la ciudadanía. Sin embargo, sólo en el 40% de los casos los gobiernos locales ofrecen datos en un formato reutilizable, hecho que demuestra que todavía hay un importante margen de mejora.

Se establece como principal conclusión de esta investigación que el grave problema de desafección, manifestado por indicadores y acontecimientos relevantes, por la existencia de una red como el OGP y por la influencia de ésta en el desarrollo de nueva normativa, han creado una ventana de oportunidad para la aparición de las políticas de gobierno abierto en España, en especial en el ámbito local, debido a su proximidad a la ciudadanía e idoneidad para desarrollar políticas de transparencia y gobierno abierto en sus respectivos territorios. Sin embargo, en materia de gobierno abierto en España aún existen importantes retos como diseñar una estrategia multinivel, fomentar cambios en la cultura de la administración pública española y crear entornos reales de colaboración en el ámbito local, como excelentes laboratorios de gobierno abierto, destinados a mejorar la transparencia y la gobernanza.

## SUMMARY

### **THE POLICY WINDOW FOR OPEN GOVERNMENT IN SPAIN: AN ANALYSIS FROM A LOCAL LEVEL**

Open government has emerged as a new model of public policy that places transparency, participation and collaboration with citizens as axes of political action. It fosters administrations and governments to face the challenge of recovering the legitimacy and the confidence of the population by being transparent and accountable, as well as by generating spaces of exchange and participation that lead to collaborative intelligence.

Since more than a decade ago, the concept of open government has been part of the Political Science studies on transparency, participation, modernization of public administration, and electronic government. However, it was not until 2009 when its notoriety peaked due to the presentation of the *Memorandum on Transparency and Open Government* by the President of the United States, Barack Obama, which represents the starting point of an initiative to close the existing gap between the American people and its government. Shortly after that, a small group of countries (Indonesia, Mexico, Norway, The Philippines, South Africa and United Kingdom, under the leadership of Brazil and the USA) created the Open Government Partnership (OGP), an initiative aimed at improving public accountability, transparency and participation. Thus, open government became part of the international agenda and offered practices based on a new scheme of relations between governments and citizenry through the use of new technologies.

The Spanish Government joined the OGP in 2011 and assumed the commitments of the international network, which should be detailed via biannual action-plans with specific measures. The main exponent of this has been the Law 19/2013 on Transparency,

Access to Public Information and Good Governance (*Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno*). However, open government initiatives in Spain are not exclusive of the Central Government; Autonomous Communities and Local Governments are as well adopting policies in line with this model of governance in their own territories.

The introduction of open government in the agenda in Spain is not only linked to the appearance of a new paradigm, extended all over the world generating a trend based in a context of institutional isomorphism, but also to a national context marked in recent years by a deep economic, political and institutional crisis. Numerous indicators and studies show that during 2013 the crisis puts into question the democratic system. The emergence of numerous corruption cases placed the lack confidence in government in a preeminent spot of the political agenda at every level (national, regional and local). The lack of confidence in government has been amplified by the global access to information and the capacity to interact and communicate with the citizenry. And yet, new technologies also provide instruments to fight against this multidimensional crisis. Thus, the main question of this research is why open government has become a priority in the agenda of the Spanish local administration.

The theoretical framework used in this research is Kingdon's Multiple Streams Model (1984; 1995), which allows for a fluid analysis of how the crisis of confidence in public institutions and the pervasive national mood opened an opportunity for the change of policies in terms of transparency, good governance and fight against corruption. The existence of viable alternatives to react to the crisis allowed the coupling of streams — problems, policy and policies— opening of a policy window for open government in Spain.

The research describes the origins and evolution of policies adjacent to this new paradigm until its incorporation in the agenda of Spanish local governments. Since 2012 different spheres of government have put into practice policies of open government. This new paradigm finds at local level a favorable scenario to develop from hierarchical structures to transparent and collaborative networks. In consequence, this thesis includes

a quantitative analysis based on an online survey of local governments of more than 20.000 inhabitants that illustrate how local powers have opted for the actualization of their management systems in terms of transparency and citizen participation.

The main goal of the research is to explore the opening of a policy window for open government policies in Spain, with special attention to the local level, where there is a confluence of three streams: i) the confidence crisis of the population vis-à-vis the political system (problem); ii) the existence of alternatives in terms of transparency and open government to fight against disaffection (policies); and iii) the 2011 change of government and the national mood which fostered the normative reform of the new Transparency Law (policy).

Furthermore, the study of open government at local level sheds light on the degree of development of transparency, participation and collaboration politics, discusses to what extent an effective level of transparency contributes to the improvement of participatory and collaborative practices, and identifies potential enhancements in the expansion of open government initiatives. The results show how a growing number of local governments are developing actions in the realm of open government focused on the promotion of transparency, e-government, open data, and social networks.

A survey conducted between January and March 2015 gathered data of 120 local governments of more than 20.000 inhabitants (of a total of 399 in Spain). Surveyed local governments account for more than 19 million people (around 41% of the total population of Spain). The results show that these actors are undergoing a deep transformation of their open government capacities in order to respond to the aforementioned crisis. Data shows that 61.2% of local governments developed transparency policies during the period 2011-2015 and that 87% of local representatives is familiar with the activities of the Spanish national government on open government (even though only 50.4% know that stems from Spain's membership of the OGP).

A different section illustrates that the advances in the realm of open government have been fostered by the creation of new legislation; 97.7% of the surveyed local governments know the obligation derived from the new transparency law, more than 80%



of cities have a specific department in charge of participation, and more that 70% of local governments have recently developed transparency portals in their websites. Furthermore, 92.4% of the surveyed local governments have a Facebook or Twitter account as a tool of communication between the administration and the population. However, only in 40% of the cases local governments offer data in a reusable format, showing that there is room for improvement.

The main conclusion of this research is that the profound problem of disaffection, manifested through relevant events, the existence of the OGP and its influence in the development of new legislation, have created a window of opportunity for the blossoming of open government policies in Spain. Local governments are an advanced disciple, provided their proximity to population and the potential benefits of developing transparency and open government practices. Following the Open Government Partnership, the Spanish Law 19/2013 and the subsequent National Action Plans, there is a need for a coordinated multilevel strategy that brings about reforms in all the spheres of government. In order to do so, there must be deep changes in the culture of Spain's public administration as well as in the minds of the citizenry. Local governments are excellent laboratories for the design and implementation of this new governance model, and information and communication technologies should facilitate the creation of collaborative environment aimed at improving transparency and governance.

*We will work together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and collaboration. Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Government.*

*Trabajaremos juntos para garantizar la confianza de la ciudadanía y establecer un sistema basado en la transparencia, la participación pública y la colaboración. La apertura fortalecerá nuestra democracia y promoverá la eficiencia y la eficacia de los gobiernos .*

Barack Obama



## **CAPÍTULO I. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

### **I. INTRODUCCIÓN**

El gobierno abierto ha surgido como un nuevo modelo de política pública que sitúa a la transparencia, a la participación y a la colaboración ciudadana como ejes principales de la acción política. Su estudio en un momento como el presente ofrece una oportunidad única de reflexión y análisis, ya que los paradigmas que han inspirado la forma de conducción de la sociedad están siendo cuestionados por la ciudadanía como consecuencia de la crisis del sistema. De ahí que el problema que ha dado lugar a esta investigación sea la creciente desconfianza ciudadana en el funcionamiento del sistema democrático, y como en este contexto han emergido nuevas formas de legitimación basadas en la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana. Ello ha permitido que se abra una ventana de oportunidad en relación a un paradigma que recupera una reivindicación propia de las democracias desarrolladas, el derecho fundamental a saber, pero que a su vez explora nuevas formas de información, comunicación y legitimación en un mundo cada vez más global y conectado.

La actualidad del tema ha permitido observar el fenómeno del gobierno abierto desde una doble perspectiva: de un lado, la puramente científica mediante el estudio de su origen, evolución, concepto, dimensiones y fundamentos teóricos; de otro lado, la de la praxis del movimiento que se ha generado en relación a este nuevo modelo en menos

de un lustro a nivel nacional e internacional. De este modo una primera pregunta que cabe plantear es ¿cómo se ha producido la inserción en la agenda política del problema que ha promovido la asunción de este nuevo paradigma? y ¿qué factores explican este fenómeno?. Esta investigación parte de la reflexión de que el proceso de creación de una política que busca solucionar un problema no ocurre en un espacio vacío de ideas, intereses u otras prioridades en la agenda pública. Al contrario, se trata de un proceso donde lograr la ubicación de un problema en la agenda puede estar marcado por la competencia entre varias alternativas donde una puede ser la elegida para ser objeto de una decisión formal por parte de una autoridad pública (Kingdon, 1984; 1995). Asimismo, los gobiernos experimentan con fórmulas institucionales aceptadas y consolidadas en su entorno de referencia de forma más o menos mimética, a través de procesos de isomorfismo institucional (DiMaggio, Powell, 1991). Entender que factores explican el cambio y que impacto pueden tener en la formulación de las políticas públicas constituye una esfera que merece ser explorada.

Resulta relevante señalar en el marco de esta investigación que desde hace más de una década, la idea de gobierno abierto forma parte del análisis que ha venido produciéndose en el ámbito de la ciencia política en torno a la transparencia, la participación ciudadana, la modernización de las administraciones y el gobierno electrónico. Sin embargo, su notoriedad no llegó hasta que el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, presentó en el año 2009 su ‘Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto’<sup>1</sup>, punto de partida de una iniciativa que tenía como objetivo principal cerrar la brecha existente entre el pueblo estadounidense y su gobierno. Las nuevas fórmulas de relación que ofrecían las TIC, la web 2.0 y la inteligencia en el uso de las mismas, abrieron la posibilidad de que el Ejecutivo favoreciera que los ciudadanos norteamericanos pudiesen hacer suyo un proyecto de país, otorgándoles el papel de protagonistas de los cambios necesarios que debía abordar la nación. Sin embargo, para lograr que esa declaración de intenciones se convirtiera en realidad, era imprescindible reforzar una serie de pilares básicos en la propia cultura de la administración

---

<sup>1</sup> Gobierno de EEUU (2009), *Memorandum on Transparency and Open Government*, Executive Office of the President of United States of America, Washington DC.

[http://www.whitehouse.gov/the\\_press\\_office/TransparencyandOpenGovernment](http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment)

estadounidense: la transparencia, la participación y la colaboración, los tres principios que configuran el gobierno abierto.

Poco tiempo después, el 20 de septiembre de 2011, un significativo grupo de países (Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica y Reino Unido, bajo el liderazgo de Estados Unidos y Brasil) impulsaron una plataforma internacional de carácter multilateral, la Alianza para el Gobierno Abierto —más conocida por su denominación en inglés, *Open Government Partnership* (OGP)— comprometida con las políticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. La consecuencia inmediata ha sido la difusión, isomorfismo o replica de este novedoso modelo en latitudes muy diferentes. A través de esta red, el gobierno abierto ha pasado a formar parte de la agenda internacional, ofreciendo conocimiento, instrumentos y experiencias basadas en un nuevo esquema de relación entre ciudadanía y gobierno, favorecido a su vez, por los nuevos canales de comunicación que posibilitan las herramientas tecnológicas.

El Gobierno de España se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto en septiembre de 2011, consecuencia natural de una década en la que se habían producido importantes avances en materia de administración electrónica, agenda digital y reutilización de la información del sector público. Desde ese momento España asumió los compromisos establecidos por la iniciativa internacional, que se han plasmado en planes de actuación bienal cuya medida más significativa ha sido la aprobación de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Sin embargo, las políticas de gobierno abierto no sólo se han circunscrito a las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de España; comunidades autónomas y gobiernos locales han diseñado políticas encaminadas a la adopción de este nuevo modelo de gobernanza en sus respectivos territorios. Si bien es cierto que determinados gobiernos autonómicos como el País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura y Castilla y León, lideraron en un primer momento la puesta en marcha de iniciativas de *open government* en el ámbito nacional, a partir del año 2012 los gobiernos locales advirtieron que el modelo que propugnaba el gobierno abierto podía encontrar un espacio idóneo de desarrollo en la esfera de su gestión. De ahí que la pregunta que preside la presente tesis

**plantee ¿por qué la adopción de políticas de gobierno abierto se ha convertido en una de las estrategias más incorporadas a la agenda gubernamental de los gobiernos locales en España?**

El análisis del gobierno abierto en España está vinculado al contexto nacional de los últimos años, marcado por la profunda crisis económica, política e institucional que ha definido el actual escenario del gobierno abierto en el país y el tipo de acciones emprendidas en la materia. La creciente desafección ciudadana, consecuencia del desencanto con las instituciones y la opacidad que las ha caracterizado, se ha visto amplificada como consecuencia de las posibilidades de acceso a la información, la oportunidad de compartirla y el surgimiento de movimientos ciudadanos que prometen nuevas formas de legitimación política. Como muestran diversos indicadores y estudios, a lo largo del año 2013 la grave crisis política e institucional logró que el nivel de desconfianza política se convirtiera en uno de los principales problemas de la agenda sistémica del país. Aunque la desafección ciudadana ha sido una constante en España, la grave crisis económica, la emergencia de casos de corrupción y el inadecuado comportamiento de las instituciones, logró situar a la crisis de confianza en un lugar preeminente de la agenda política de todos los niveles de gobierno (nacional, autonómico y local). A la luz de este contexto, la transparencia, el buen gobierno y el gobierno abierto aparecen como opciones de políticas públicas destinadas a paliar la desafección ciudadana.

Desde el año 2012 el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales han comenzado a poner en marcha políticas de gobierno abierto como respuesta a las expectativas cambiantes del entorno que se estaban produciendo en el contexto nacional e internacional a través de un proceso de isomorfismo institucional o de reproducción mimética de fórmulas de gobierno abierto. Puede adelantarse que este nuevo paradigma ha encontrado en el ámbito local un escenario favorable para transitar de una lógica jerárquica y cerrada a una de creación de redes, de transparencia y de colaboración ciudadana. De ahí la oportunidad de incorporar a esta investigación un análisis cuantitativo sobre políticas de gobierno abierto en el ámbito local español que

muestre cómo los poderes locales han optado por agilizar la actualización de sus marcos de gestión en materia de transparencia, participación y colaboración ciudadana.

El estudio de las políticas de gobierno abierto en España precisa de la revisión del estado de la cuestión del gobierno abierto desde sus orígenes hasta su inserción en la agenda nacional. Ello permitirá obtener una visión holística para analizar el porqué del gobierno abierto en el país. Si se parte de la premisa de que el grave problema de desafección ciudadana, la existencia de alternativas viables para dar respuesta a la crisis de confianza y el clima social del momento han abierto una ventana de oportunidad (*policy window*) para el cambio de políticas en materia de transparencia, buen gobierno, y gobierno abierto en los gobiernos locales en España cabe preguntarse ¿cuál fue el proceso a través del cual se insertó el problema en la agenda? ¿qué papel jugaron las ideas existentes y los intereses organizados para solucionar el problema? y ¿de qué manera influyeron los cambios políticos para que la alternativa en cuestión se adoptase?. A responder a estas preguntas está destinado este trabajo de investigación que para encontrar respuestas se ha servido del planteamiento teórico y metodológico del Enfoque de las Corrientes Múltiples de John W. Kingdon (1984; 1995) cuyo objeto de estudio es la explicación del cambio de las políticas públicas, finalidad asimismo, de la presente investigación. Un esquema teórico de gran utilidad porque pone el énfasis en la fase de inserción de los problemas en la agenda desde una perspectiva fluida en relación a la formulación de políticas pues parte de la existencia de tres corrientes independientes, los problemas, las políticas y la política, que pueden confluir en un momento y espacio propicio y permitir el surgimiento de una política concreta como respuesta a un problema público.

El gobierno abierto sitúa a gobiernos y administraciones ante el reto de recuperar la legitimidad y la confianza de los ciudadanos a través de transparentar la acción de gobierno, rendir cuentas de manera permanente, generar espacios de conversación y participación para promover la inteligencia colaborativa. Puede que el *open government* constituya el gran cambio de paradigma de este siglo, aunque aún sea difícil certificarlo con rotundidad. Pero sí cabe afirmar que la sociedad de hoy es la más informada y menos



mediatizada en la historia de la humanidad. Ante esta realidad, los cambios son inexorables.

## II. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y MARCO ANALÍTICO

Este trabajo de investigación analiza los cambios que se han producido en España, en el ámbito local, en relación a las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana, ejes del gobierno abierto, a lo largo del periodo 2011- 2015. La elección de este marco temporal corresponde al intervalo que siguiendo el Enfoque de las Corrientes Múltiples permite analizar cómo se ha producido el proceso de cambio de políticas y se ha abierto una ventana de oportunidad en materia de gobierno abierto en España.

Este periodo ha permitido observar diferentes hitos en materia de gobierno abierto en el país, tales como la entrada del Gobierno de España en septiembre de 2011 en la Alianza para el Gobierno Abierto, la presentación de dos planes nacionales de actuación en la materia y la aprobación de la primera Ley de Transparencia del país. Asimismo, este intervalo temporal ha permitido analizar las tres corrientes independientes de Kingdon, el problema — la grave desafección ciudadana plasmada en acontecimientos relevantes como el Movimiento de los Indignados o 15M—, las políticas o alternativas disponibles para dar respuesta al mismo — las reformas tendentes a transparentar la acción de gobierno y a establecer cauces para recuperar la confianza perdida — y los cambios políticos producidos en la etapa analizada— generación de un clima social propicio y cambios de gobierno a nivel nacional — que han confluído y permitido el cambio de políticas a favor de la transparencia y el gobierno abierto.

La presente investigación centra su atención en la formulación de políticas de gobierno abierto en el ámbito local español, en concreto en ciudades de más de 20.000 habitantes pues son las que competencialmente se encuentran en disposición de poner en marcha estrategias de *e-government*. Para ello, ha sido necesario incorporar a esta investigación un análisis del contexto general, circunscrito fundamentalmente al ámbito

nacional en relación con la iniciativa internacional de la Alianza para el Gobierno Abierto. Ello ha permitido controlar la variable política en el ámbito nacional, por cuanto el Gobierno de España es quien tiene la legitimidad de impulsar políticas de gobierno abierto a nivel país en el marco del OGP. Sin embargo, es relevante señalar que quedan fuera de esta investigación, las iniciativas autonómicas en relación a esta materia, aunque se proporcione un breve esbozo y reflexión sobre las mismas.

Las observaciones del caso elegido han permitido identificar el problema que da origen a la presente investigación a través de diferentes indicadores e hitos relevantes, determinando los actores que han impulsado las reformas y los intereses organizados en torno a la misma, que permite ofrecer una explicación causal del cambio en las políticas públicas, así como conocer los motivos que han impulsado a los gobiernos locales en España a instaurar un giro en materia de transparencia y proponer modelos de gobierno abierto siguiendo la estela de reformas que en torno a esta materia se está produciendo en la mayor parte de los países desarrollados.

### III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo central del presente trabajo es proporcionar un análisis de cómo se ha abierto una ventana de oportunidad para las políticas de gobierno abierto en España en el ámbito local como una de las respuestas a la enorme desafección política en el país.

Asimismo, la investigación también plantea una serie de objetivos específicos que se sintetizan a continuación:

- Presentar el origen, los antecedentes, la evolución y la expansión del gobierno abierto como nuevo modelo de gobernanza.
- Delimitar el concepto, las dimensiones y los fundamentos teóricos del gobierno abierto.
- Examinar las acciones en materia de gobierno abierto del Gobierno de España con especial detenimiento en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

- Analizar el problema de grave desafección ciudadana en España y su incorporación a la agenda política
- Exponer cuales fueron las alternativas y los procesos políticos que dieron lugar al cambio de políticas a favor de la transparencia y el gobierno abierto
- Profundizar sobre el grado de desarrollo de las políticas de transparencia y gobierno abierto en el ámbito local
- Señalar los retos de futuro del gobierno abierto en España.

#### IV. EL SISTEMA DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

##### 1. LA HIPÓTESIS CONCEPTUAL

La adopción de políticas de gobierno abierto se ha convertido en una de las estrategias más incorporadas a la agenda gubernamental de los gobiernos locales en España, debido a que los poderes públicos han visto en el gobierno abierto una oportunidad y una herramienta ampliamente extendida en diversos niveles y contextos geográficos, para luchar contra el alto grado de desafección ciudadana causada por los dos problemas que más preocupan a los españoles: la grave crisis económica, que sitúa a España como el segundo país europeo con mayor tasa de desempleo<sup>2</sup> y la crisis de confianza global en las instituciones debido a un importante aumento del nivel de percepción de la corrupción. La elección por parte de gobiernos y administraciones de modelos de gobierno abierto que incorporen los principios de la buena gobernanza puede otorgar la legitimidad necesaria para superar la crisis de confianza de la ciudadanía, aumentar el nivel de interés en lo público, revalidar mandatos electorales y lograr avances en medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción.

---

<sup>2</sup>Eurostat, 57/2015, 31 de marzo, <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6764147/3-31032015-AP-EN.pdf/6e77d229-9c87-4671-9a52-b6450099597a>

## 2. LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Las hipótesis específicas que han orientado esta investigación se detallan a continuación:

**Hipótesis 1: El alto grado de desafección ciudadana en las instituciones y en el sistema democrático es el punto de partida de la elaboración de políticas de gobierno abierto en el ámbito local.**

La inserción de políticas de gobierno abierto en España es fruto de la existencia en la agenda sistémica de un grave problema de desafección. La desafección en España en el periodo analizado ha alcanzado a todas las instituciones representativas de la ciudadanía — a nivel nacional, autonómico y local — pero también ha afectado a los partidos políticos, al Poder Judicial, a los sindicatos, e incluso a la Jefatura del Estado. Los significativos casos de corrupción, a nivel nacional, y el elevado número de imputados, especialmente en el ámbito local, han provocado unos niveles de desconfianza hasta ahora desconocidos en el país suscitando un amplio debate sobre la debilidad del sistema democrático. Para luchar contra esa desafección e incentivar la integridad de los servidores públicos, los gobiernos locales han puesto en marcha reformas institucionales en materia de transparencia y gobierno abierto con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos tanto en el sistema como en las instituciones.

**Hipótesis 2: El creciente número de gobiernos locales que han puesto en marcha políticas de transparencia y gobierno abierto es fruto de un proceso de isomorfismo institucional**

La incorporación de políticas gobierno abierto se debe a la existencia de una moda que atraviesa el mundo y que genera un proceso de isomorfismo institucional. La llegada al Gobierno de los EE.UU del Presidente Barak Obama supuso un tiempo político para el cambio, para avanzar en una estrategia de apertura del gobierno federal. Asimismo, la constitución del OGP fue determinante para condicionar la agenda propia de los Estados miembros. Esa tendencia homogeneizadora en el ámbito local español se encontró condicionada por las siguientes razones: en primer lugar, la presión normativa

consecuencia de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia, así como las de las normativas autonómicas existentes, que han conformado un contexto favorable para la puesta en marcha de acciones en materia transparencia; en segundo lugar, las fuerzas coercitivas del entorno que mediante iniciativas autonómicas, nacionales e internacionales en la materia han influido en el desarrollo de políticas de gobierno abierto a nivel local; y en tercer lugar, las tendencias miméticas para afrontar determinados escenarios de incertidumbre, donde el trabajo en red, en el que los gobiernos locales tienen gran experiencia, ha fomentado la difusión y réplica de iniciativas de gobierno abierto.

**Hipótesis 3: La adopción de políticas de gobierno abierto es consecuencia de acciones de cálculo electoral.**

La demanda social de mayor transparencia ha provocado que todas las fuerzas políticas hayan puesto en marcha una ofensiva para hacer propuestas en torno a la participación, la transparencia y la regeneración democrática para neutralizar la opinión de la ciudadanía sobre la ineficacia de los gobiernos para enfrentarse a la corrupción y a la opacidad de manera ejemplar. Así en escenarios de alta competencia electoral la puesta en marcha de políticas de gobierno abierto en el ámbito local responde al objetivo de legitimación de su acción de gobierno a través de la renovación del mandato electoral.

## V. SISTEMA DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

A fin de explicar los cambios en el marco de las políticas de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración ciudadana, es necesario identificar las variables que han determinado las decisiones públicas de asunción de una posición favorable a la instauración de una política pública de gobierno abierto, especialmente en el ámbito local. Esta investigación ha definido cuatro variables básicas que en su conjunto están en el centro de la explicación del problema planteado, las hipótesis y los objetivos propuestos:

La variable dependiente de la investigación es la formulación de políticas de gobierno abierto en el ámbito local español. En concreto, se trata de explicar el cambio que se ha producido en la agenda gubernamental de los gobiernos locales al incorporar políticas de transparencia y gobierno abierto como prioridad de su acción de gobierno, debido a tres factores que responden a la tres variables independientes de la investigación: 1) la desafección ciudadana, manifestada a través de diferentes indicadores y acontecimientos relevantes; 2) el isomorfismo institucional relacionado con las ideas y la alternativas disponibles en otros contextos; y 3) el interés político y electoral en un escenario de creciente demanda de la ciudadanía y alta competencia electoral. El fin de la tesis ha sido averiguar el grado de correlación existente entre las mismas y su ciclo; además, una vez establecida esta relación, se han buscado explicaciones causales que permitieran comprender el comportamiento de las variables en el tiempo de estudio.

## VI. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

España se enfrenta a uno de los momentos más complejos para los gobiernos y administraciones públicas. Al mismo tiempo, vive un momento de cambio histórico global donde las nuevas tecnologías de la información y comunicación (internet, redes sociales, la web 2.0) abren infinitas posibilidades para transformar las relaciones establecidas entre gobierno y ciudadanía. En España, junto a otras democracias desarrolladas, se ha generado un sistema de creencias basado en que el sistema democrático puede mejorar gracias a las nuevas tecnologías y que, a través de éstas, los ciudadanos volverán a sentirse sus legítimos propietarios, pues dispondrán de información pública, comprensible y tratable y podrán participar y colaborar con los gobiernos y administraciones en una relación más directa e igualitaria.

La entrada del Gobierno de España en la Alianza para el Gobierno Abierto marcó un compromiso con la filosofía y principios de la iniciativa, pero este compromiso no fue un hecho aislado. El marco temporal en el que surgió la red internacional, los factores que la acompañaron y el efecto de homogeneización con el resto de países dio como resultado que el Gobierno de España se adhiriese a la misma y se generase un amplio debate sobre

la necesaria transición del actual modelo a un sistema más abierto, horizontal y participativo. El camino hacia este nuevo esquema de relación entre gobierno y ciudadanía no comenzó el día de la adhesión al OGP. La apuesta por políticas de buen gobierno, gobernanza multinivel y una ambiciosa agenda digital en esta última década posicionaban a España en un punto de partida óptimo para avanzar en la senda del *open government*.

De ahí que la actualidad del tema investigado esté determinada por dos factores interrelacionados: i) la adhesión de España a la Alianza para el Gobierno Abierto y ii) los procesos de reforma institucional que se han derivado como resultado de la misma, especialmente mediante la aprobación y entrada en vigor de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta norma en la actualidad constituye la columna vertebral del modelo de gobierno abierto en España, pues no sólo ha conseguido homologar el ordenamiento jurídico español al del resto de democracias consolidadas, sino que ha configurado un marco de obligaciones aplicable a todas las administraciones públicas.

En cuanto al alcance del estudio, esta investigación se circunscribe al ámbito geográfico del Estado español, que afecta a los tres niveles de gobierno. Sin embargo, el análisis y las observaciones han tenido como objetivo primordial el estudio de las políticas de gobierno abierto en el nivel local. La investigación propone un análisis descriptivo del estado del arte en dos niveles: el general, cuya pretensión es deslindar aquellas cuestiones que se han estimado imprescindibles como punto de partida para la comprensión del gobierno abierto; y el nacional y autonómico que permite obtener una foto fija de la cuestión en el momento presente. En segundo lugar, un análisis empírico que permite observar el fenómeno en el ámbito local circunscrito a ayuntamientos de más 20.000 habitantes. De este modo queda fuera del alcance de esta investigación aquellas iniciativas locales en materia de transparencia y gobierno abierto de entidades locales cuyo umbral de población es de menos de 20.000 habitantes y de las entidades locales intermedias, Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares.

El estudio de esta materia se justifica y se entiende de gran interés para la

comunidad científica puesto que se enmarca en el análisis de los cambios en las políticas públicas en España en torno a políticas de transparencia, buen gobierno y nuevas formas de participación ciudadana. En primer lugar, la investigación trata de situar el estado de la cuestión desde una doble perspectiva: la global, marcada por el impulso del *open government* a nivel internacional y la tendencia generada en todo el mundo; y la nacional, que permite delimitar como ese modelo también se ha considerado como una práctica legítima en el ámbito gubernamental encontrando en el nivel local el escenario propicio para el desarrollo de políticas de gobierno abierto. En segundo lugar, el estudio expone cómo se ha abierto una ventana de oportunidad para las políticas de gobierno abierto en España, insertándose en la agenda política a través del análisis de la confluencia de las tres corrientes independientes que expone Kingdon (1984; 1995) —problemas, políticas y política— que han favorecido la formulación de esta política pública. En tercer lugar, se analiza cuantitativamente el nivel de desarrollo de las políticas de gobierno abierto en el ámbito local español y qué elementos de profundización y mejora pueden establecerse para los próximos años.

Asimismo, este trabajo pretende contribuir a la discusión sobre el comportamiento de los gobiernos en los procesos de formulación de políticas, así como el papel que juega la sociedad en la conformación de la agenda política, las ideas y creencias en contextos de isomorfismo institucional y las estrategias que emprenden los actores para impulsar o restringir las políticas. Por ello, se ha estimado relevante conocer en qué medida los sistemas políticos actuales son permeables a la incidencia de los factores exógenos— ideas, valores y paradigmas— y su vínculo con los procesos endógenos en el arreglo del juego político y sus resultados: las políticas públicas. Para ello se ha estimado de gran utilidad contrastar las teorías de explicación del cambio, en concreto a través del marco de las corrientes múltiples, aplicándolas al caso de la formulación de políticas de gobierno abierto en el ámbito local español.



## VII. METODOLOGÍA Y FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN

### 1. LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La presente investigación utiliza el método del estudio de caso como método de aprendizaje que implica un entendimiento comprensivo, una descripción extensiva de la situación a través de un análisis conjunto y dentro de su contexto. Esta metodología, ampliamente utilizada en las ciencias sociales, es apropiada en los casos en los que se desea conocer cómo o por qué ocurre algo (Yin, 2003). La estrategia metodológica seleccionada posee ventajas e inconvenientes: por un lado, el análisis de un aspecto concreto de la realidad permite profundizar en el conocimiento; sin embargo, concentrar el análisis en un tipo de actor determinado dificulta la extrapolación de los resultados. En palabras de Yin, “los resultados de un caso de estudio no son generalizables, puesto que su finalidad principal no es expandir y generalizar teorías” (Yin, 2003: 10). El estudio de caso es un método que lo abarca todo (*all-encompassing method*) en la medida en que la investigación debe incluir diseño, recolección de información y datos, y técnicas de análisis (Yin, 2003: 14).

No obstante lo anterior, el investigador debe trabajar de forma rigurosa para sortear dichas limitaciones, seleccionando adecuadamente la estrategia de investigación de acuerdo con el tema de estudio y eligiendo un buen método de obtención de información. El método de estudio de caso es apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues la investigación empírica cuenta con los siguientes rasgos distintivos: examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real; las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes; se utilizan múltiples fuentes de datos, y puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos (Yin, 1989:21-27). De ahí que Eisenhardt (1989) conciba un estudio de caso contemporáneo como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencias cualitativas y/o cuantitativas con el fin de describir, verificar o generar teorías.

Ante la pregunta sobre la utilidad de este tipo de investigación, cabe destacar que un estudio de caso de estas características permite obtener datos sobre los que se pueden establecer comparaciones o desarrollar hipótesis. Los expertos señalan que los estudios de caso son el fundamento de gran parte de la investigación comparada, puesto que se aplican como material secundario para los investigadores que realizan trabajos de carácter comparado, proporcionan ideas, facilitan la aparición de nuevas hipótesis o contribuyen a poner en duda las teorías existentes (Anduiza, Crespo y Méndez, 2011).

Yin recomienda la utilización de múltiples fuentes de datos y el cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la validez interna de la investigación. Esto permitirá verificar si los datos obtenidos a través de las diferentes fuentes de información guardan relación entre sí (principio de triangulación); es decir, si desde diferentes perspectivas convergen los efectos explorados en el fenómeno objeto de estudio (1989:29). En consecuencia, el investigador puede utilizar diferentes fuentes de información bases de datos, Internet, entrevistas a investigadores del área, cuestionarios, organismos públicos o privados, documentos y estadísticas relacionadas con el fenómeno abordado en la investigación (Martínez Carazo, 2006, 185).

En la presente investigación de carácter explicativa y descriptiva se establece una estrategia metodológica en la que se pone en relación el marco teórico aplicado—Enfoque de las Corrientes Múltiples— idóneo para demostrar la hipótesis conceptual, y la investigación empírica, a través del estudio cuantitativo sobre políticas de gobierno abierto en el ámbito local, que permite reforzar y validar las hipótesis específicas expuestas en este capítulo.

## 2. LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación utiliza varias técnicas de investigación para obtener los datos e información necesarios para la misma. Para ello, la investigación se ha desarrollado en tres etapas:

- Revisión bibliográfica y documental
- Diseño, difusión y seguimiento del cuestionario destinado a los gobiernos locales

- Análisis de los datos

En primer lugar se procedió a la revisión documental y bibliográfica de diversas fuentes escritas y digitales para realizar una adecuada aproximación al objeto de estudio. En esta primera fase se identificaron y estudiaron las obras y autores autorizados en el ámbito objeto de estudio, se revisaron los documentos e iniciativas pertinente de diversos organismos internacionales, se analizó la legislación y normativa nacional, autonómica y local relevante en la materia, se examinó la tramitación parlamentaria de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, incluidos los discursos de los diferentes grupos parlamentarios, se investigó y obtuvo la información de estudios de opinión, y barómetros de los organismos y medios de comunicación más relevantes para obtener los indicadores necesarios para la investigación.

La segunda etapa consistió en el desarrollo de un cuestionario *on line* como elemento central del estudio cuantitativo que fue contestado por 120 de ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes. El cuestionario ayuda a obtener la información necesaria si una investigación tiene como objetivo conocer la magnitud de un fenómeno social, su relación con otro fenómeno o porqué ocurre, especialmente en el caso de que sea necesario obtener información de una gran cantidad de sujetos o instituciones (Fernández, 2007: 1). Este método y sus resultados han facilitado a la investigadora la recopilación de numerosa y valiosa información que no se encuentra recogida en normas, documentos oficiales o en los sitios web de las ciudades encuestadas. Esta fase de la investigación ha requerido de una enorme inversión de tiempo para definir y estructurar adecuadamente el cuestionario, puesto que los ayuntamientos reciben periódicamente numeras encuestas relativas a esta materia que se han intensificado tras la entrada en vigor de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Asimismo, se llevó a cabo un intenso seguimiento telefónico en aras a alcanzar el mayor número de respuestas posibles. En este sentido y teniendo en cuenta las limitaciones materiales de la investigación y del espacio temporal en el que se llevó a cabo la misma no puede dejar de agradecerse la generosa colaboración de las numerosas personas que han contribuido a desarrollar esta parte de la investigación.

En la tercera etapa, se procedió a realizar el examen de los datos, revisando y depurando los posibles errores que pudieran distorsionar los resultados del estudio. Se procedió a hacer un análisis de los mismos para situar la investigación en la realidad de la información obtenida. Finalmente se organizaron y resumieron los datos prestando especial atención a los aspectos básicos que refuerzan las hipótesis planteadas en la investigación.

### 3. LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

#### **A) Descripción del procedimiento y metodología**

La investigación cuantitativa está directamente basada en el paradigma explicativo. Este paradigma utiliza preferentemente información cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos que estudia, en las formas que sea posible hacerlo y en el nivel de estructuración lógica más adecuado (Briones, 1996: 3). El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina fundamentalmente en la obra de Auguste Comte (1804) y Emile Durkheim (1859). Ellos propusieron que el estudio sobre los fenómenos sociales requiere ser “científico”, es decir susceptible a la aplicación del mismo método que se utilizaba con éxito en las ciencias naturales. Tales autores sostenían que todos los fenómenos que estudiaban las ciencias eran medibles. En la publicación de 1849 del Discurso sobre el espíritu positivo del filósofo francés Auguste Comte, se inicia en las ciencias sociales un paradigma denominado positivista. La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio.

El método cuantitativo tiene su base en el positivismo que busca las causas mediante métodos tales como el cuestionario y produce datos susceptibles de análisis estadístico, por ello es deductivo. Para el positivismo, la objetividad es muy importante, el investigador observa, mide y manipula variables; además de que se desprende de sus propias tendencias puesto que la relación entre éste y el fenómeno de estudio es independiente. Lo que no puede medirse u observarse con precisión se descarta como

objeto de estudio. Rodríguez Peñuelas (2010, p.32), señala que el método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas, además regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico.

En la presente investigación, de carácter no experimental<sup>3</sup>, en la que se analiza la formulación de políticas de gobierno en el ámbito local en un periodo de tiempo concreto — desde la entrada en vigor de la LTAIBG a finales de 2013 hasta el momento presente — el amplio número de sujetos de los que se pretendía obtener respuesta aconsejó la utilización del método cuantitativo ya que éste permite reforzar las hipótesis de la investigación y describir una tendencia, la del cambio de las políticas públicas a favor de la transparencia y el gobierno abierto en el ámbito local. Para observar esta realidad se utilizó la técnica del cuestionario *on line* para favorecer la participación del mayor número de entidades locales. A continuación se especifican aquellas ventajas inherentes al cuestionario *on-line*, que se han identificado como decisivas a la hora de emplear este instrumento de recogida de datos:

- El cuestionario ha permitido obtener información de un elevado número de ayuntamientos de forma simultánea en un período temporal relativamente corto desde finales de enero a finales de marzo de 2015. De hecho, y gracias a la versión *on-line* creada, se pudo recibir de forma automatizada a través de una base de datos todos los cuestionarios contestados por las entidades locales encuestadas.
- Desde un punto de vista temporal, los encuestados respondieron al cuestionario en el día, la hora y momento que han considerado oportuno. Este hecho ha supuesto flexibilidad horaria pero también ha permitido que puedan finalizar el

---

<sup>3</sup> Dentro de las tipologías de investigación cuantitativa, el presente estudio se enmarca en la clasificación de investigación no experimental, por cuanto el investigados no tiene control sobre la variable independiente, esto es, la variable independiente ya ha ocurrido cuando el investigador realiza el estudio (Briones, 1996: 46).

mismo por fases de manera que, a través de su pre-visualización, han podido proporcionar respuestas más meditadas que las que se obtendrían a través de otros métodos de indagación.

- Otra ventaja de la utilización de este método es el anonimato y la protección de datos que se asegura a los participantes. El hecho de poder expresar opiniones amparándose en el anonimato podía ser un aspecto que condicionase la participación de los responsables públicos. Ello, tiene un valor añadido, que no ha sido otro que estimular la sinceridad en las respuestas.
- Finalmente, tratándose de una investigación sobre *open government*, un modelo que nace al albur de las nuevas tecnologías y la web 2.0 el cuestionario se aplicó a través de Internet, adquiriéndose un hosting con soporte en lenguaje PHP y MySQL, para hospedar la base de datos.

Sin embargo, a pesar de las ventajas expresadas, existen limitaciones e inconvenientes en el uso de cuestionarios *on line* como instrumento de recogida de datos. Siguiendo a González Sanmamed (1993, 593), uno de los principales peligros es que el cuestionario es una técnica de exploración indirecta e impersonal donde se corre el peligro de que sólo devuelvan el cuestionario una pequeña parte de los sujetos, pudiendo quedar afectada la muestra e incidiendo negativamente en la representatividad pretendida. También hay que tener presente que no siempre es posible tener la certeza de que la información proporcionada por los encuestados se corresponde con la realidad; tanto es así, que las respuestas pueden variar en diferentes períodos temporales, en función de la situación personal del sujeto en el momento en que se aplica el cuestionario, o de otras circunstancias como por ejemplo la situación emocional de la persona (González Sanmamed, 1993). Además de todo ello, Torrado (2004, 245) señala una serie de desventajas específicas para las encuestas realizadas por Internet. De todas ellas, la que realmente podía suponer un aspecto que afectase al estudio eran los riesgos derivados de posibles fallos informáticos y de aquellos relativos al diseño, gestión, mantenimiento y procesamiento de los datos. Para evitar que ello pudiera suceder, previa aplicación del cuestionario on-line se realizaron multitud de pruebas y testeos que asegurasen la fiabilidad de la aplicación. En relación a los contenidos y al momento de lanzamiento del

cuestionario, éste coincidió en el tiempo con una serie de cuestionarios y estudios relacionados con la materia objeto de investigación de diversas instituciones y organismos, lo que en algunas ocasiones supuso la necesidad de aclarar la procedencia, objetivos y finalidad del mismo.

En relación al proceso de diseño del cuestionario *on-line*, se establecen seguidamente las características que lo definieron y que se tuvieron en consideración para su construcción:

- Desde el punto de vista de su formato, los ítems utilizados siguen un formato cerrado (también denominado ítems estructurados, selección de respuesta o cerrado- finalizado).
- Según su estructura, el cuestionario se articula en un total de 23 ítems divididos en 4 bloques de contenido.
- Por el fin científico u objetivo para el que se ha diseñado, el cuestionario es de tipo descriptivo y explicativo (Torrado, 2004).
- Por su forma de administración es un cuestionario aplicado por vía electrónica.
- Según su dimensión temporal, el cuestionario es de tipo seccional, sincrónico o transversal, debido a que la información es recogida una única vez en un período de tiempo limitado (enero-marzo de 2015)
- Según el sentido y momento de recogida de información es una encuesta retrospectiva.

Hay que tener en cuenta que el instrumento de medida es una herramienta construida ad-hoc para este trabajo de investigación, en consecuencia, resultó de vital importancia contar con la colaboración de expertos de diferentes entidades locales que pudieron valorar previamente la validez de contenido del instrumento. Las valoraciones realizadas por el grupo de expertos sirvieron para tomar decisiones a la hora de poder rechazar, mejorar o mantener en el cuestionario cada uno de los ítems. Una vez elaborado el cuestionario en su versión impresa, se procedió a su diseño digital. Finalmente, antes de aplicar el cuestionario, se realizó una prueba piloto seleccionando a un grupo de responsables públicos locales a través de un muestreo intencional. De esta forma se

consiguieron varios objetivos:

- Saber el tiempo que llevaba completar el cuestionario.
- Conocer las opiniones de los encuestados, obteniendo una crítica constructiva acerca de la estructura del cuestionario.
- Valorar, a través de las ideas aportadas por los encuestados, la idoneidad de suprimir, rediseñar o mejorar determinados ítems.
- Determinar si en el momento de cubrir el cuestionario tuvieron algún problema de índole técnico.

La selección del universo al que finalmente se dirigió el cuestionario se basó en criterios de competencia normativa de ahí que se estimó oportuno obtener la muestra en relación a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, puesto que son los que se encuentran en disposición de prestar por sí mismos los servicios de administración electrónica, en base a los artículos 31.2.a) y 36.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (texto consolidado con las modificaciones introducidas por el artículo primero de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local).

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2014 el número de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en España asciende a un total de 399, de los cuales la presente encuesta recoge los resultados de 120 ayuntamientos. Así pues, los gobiernos locales encuestados representan un 30% del número total de ciudades españolas de más de 20.000 habitantes, con una población de 19.080.013 ciudadanos, cifra que representa un 41,06% de la población total de España.

En lo que concierne al esquema de diseño del estudio cuantitativo, resulta evidente que éste se encuentra condicionado en gran medida por el tipo de investigación, por ello acorde con los presupuestos teóricos y metodológicos en un esfuerzo de síntesis a continuación se presentan los sucesivos momentos y la multiplicidad de elementos implicados que reflejan las principales preocupaciones de la investigación y que configuraron esta parte del proceso de estudio:



1. Fase inicial: se identificó el problema, se definieron los objetivos, se revisó la información sobre el tema, se examinaron los recursos — tiempo y costes — y se decidió el modelo y diseño de investigación.
2. Fase preparatoria: se elaboró una base de datos propia para poder realizar el envío a los ayuntamientos seleccionados, se determinó la muestra óptima, se diseñó el cuestionario *on line* y se redactó la comunicación que contenía la presentación y los objetivos de la investigación.
3. Fase de concreción: se realizó la aplicación *on line* siguiendo las recomendaciones Blaxter et al (2000) y Martínez (2002), se envió el cuestionario a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, se recopilaron y exportaron los datos. Se respondieron a consultas y aclaraciones puesto que se habilitó un correo electrónico expresamente para ello.
4. Fase analítica: se analizaron, trataron e interpretaron los datos
5. Fase informativa: se realizó la síntesis de los resultados, se elaboraron los gráficos, tablas y se extrajeron conclusiones.

## **B) Resultados alcanzados**

El gobierno abierto se ha situado en el ámbito local español como una política pública emergente que impulsa la transparencia y el acceso a la información, la participación ciudadana y la colaboración entre múltiples actores. Las condiciones idóneas de proximidad en la gestión del ámbito local, la generación de un movimiento *open* a nivel nacional y la rápida difusión de este nuevo modelo a través del proceso de homologación o isomorfismo en el nivel local ha ofrecido una oportunidad propicia para realizar un análisis cuantitativo que ha permitido acreditar los avances producidos en torno al mismo desde la incorporación de España al OGP, así como verificar si la formulación de este tipo de políticas ha emergido en la esfera local producto de la grave crisis de confianza que también ha afectado a los niveles locales de gobierno.

La proximidad en la gestión pública de los gobiernos locales, las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y el trabajo en red, en el que los gobiernos locales tienen gran experiencia, constituyen algunas de las premisas que enmarcan el estudio de las políticas de gobierno

abierto en el ámbito local. Ello responde a los siguientes objetivos: i) ofrecer información sobre el nivel de desarrollo de políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana en las entidades locales españolas; ii) analizar en qué medida un nivel efectivo de transparencia y apertura informativa puede contribuir a instaurar dinámicas de participación y colaboración ciudadana; e iii) identificar líneas de mejora en el desarrollo de iniciativas de gobierno abierto en el ámbito local.

A través del análisis cuantitativo se ha examinado si la desafección política de los ciudadanos en las instituciones guarda relación con la puesta en marcha de políticas de gobierno abierto en el ámbito local. Además, se valora si se han producido avances como consecuencia de la aparición de nueva legislación en la materia y si existe una estrategia electoral a la hora de implementar políticas de gobierno abierto a nivel local. Finalmente, se presenta la relación entre el diseño de políticas de gobierno abierto, la identidad política de los gobiernos locales y el gasto público por habitante.

Con carácter preliminar puede señalarse que los resultados de la encuesta revelan que un número creciente de gobiernos locales ha emprendido el camino hacia el gobierno abierto. La mayoría de ellos basan su actuación en la promoción de políticas de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana mediante el impulso del *e-government*, la apertura de datos accesibles en sus portales y la generación de dinámicas de conversación *on line* que permite la web 2.0. No obstante, del estudio se deriva que los esfuerzos actuales se han centrado fundamentalmente en hacer más transparente la gestión del gobierno municipal, quedando aún pendiente el desarrollo en profundidad de políticas de participación adaptadas a las demandas de los ciudadanos y a las nuevas tecnologías, que permitan construir modelos integrales de gobierno abierto.

## VIII. EL PLAN DE EXPOSICIÓN DE LA TESIS

Este trabajo de investigación consta de siete capítulos. El capítulo I aborda el planteamiento de la pregunta de investigación, delimita los objetivos, presenta las hipótesis y el sistema de variables, justifica y determina el alcance de la investigación, define la metodología y las fuentes del estudio así como las estrategias y técnicas

metodológicas utilizadas

El capítulo II presenta el marco teórico de la investigación, expone los diferentes marcos teóricos sobre los procesos de cambio en las políticas así como el marco teórico elegido para la tesis, la teoría de Kingdon publicada en su obra *Agendas, Alternatives and Public Policies* (1984; 1995), que ofrece un marco flexible para explicar de qué manera se produce la formulación de políticas, o cómo los asuntos se insertan en la agenda política y logran convertirse en políticas públicas. A lo largo de este capítulo se expone en detalle el cambio y la formulación de políticas según el enfoque planteado por Kingdon (1984; 1995) que describe tres corrientes independientes (*streams*) que cuando concurren en el tiempo (*coupling*) crean ventanas de oportunidad (*policy windows*) que permiten a los emprendedores de políticas (*policy entrepreneurs*) incorporar asuntos en la agenda a través de su promoción o defensa. Seguidamente se exponen los principales elementos del enfoque utilizado: i) la definición de la agenda; ii) la relación de alternativas que pueden convertirse en solución a los problemas existentes; y iii) la convergencia de las tres corrientes que abren una ventana de oportunidad para el cambio.

El capítulo III se dedica a presentar el estado del arte del gobierno abierto a través de la revisión de su origen y antecedentes así como mostrar las referencias internacionales que han dotado de popularidad a este nuevo paradigma. Asimismo, a lo largo de este capítulo se muestra como se ha producido una tendencia a adoptar fórmulas institucionales de gobierno abierto aceptadas y consolidadas en otros entornos, tanto nacionales como internacionales, a través de procesos de isomorfismo institucional (DiMaggio & Powell, 1983). De ahí la importancia de incorporar una referencia en detalle del OGP y la dinámica generada en torno a sus presupuestos para los países miembros. Finalmente se exponen las diferentes aproximaciones conceptuales, dimensiones y fundamentos teóricos que subyacen a la esencia del gobierno abierto.

El Capítulo IV titulado el gobierno abierto en España, constituye una aproximación descriptiva del contexto en el cual España entra a formar parte del OGP, y las obligaciones derivadas de ello. De ahí la oportunidad de incorporar a este capítulo, los dos Planes Nacionales presentados hasta la fecha, la evaluación independiente de los

resultados del primer Plan, y las actuaciones más significativas llevadas a cabo en materia de transparencia y gobierno abierto como son: la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el Portal de Transparencia del Gobierno de España y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El capítulo termina con unos breves apuntes sobre el gobierno abierto en el ámbito autonómico.

El capítulo V sobre la ventana de oportunidad del gobierno abierto en España analiza el caso objeto de análisis siguiendo el modelo de Kingdon, para demostrar la hipótesis conceptual de la investigación: como la crisis de confianza de los ciudadanos en el sistema (problema), la alternativa disponible encarnada por el gobierno abierto como una respuesta viable para vencer la desafección ciudadana (políticas), el clima político (política)-, y su consiguiente acoplamiento ha dado lugar a la efectiva ventana de oportunidad del gobierno abierto en España. Para ello en este capítulo se expone: el grave problema de desafección en España; los acontecimientos relevantes que elevaron la desafección a cotas desconocidas hasta la fecha; la existencia de las alternativas (soluciones) para dar respuesta al problema; la alineación de los grupos de interés; la influencia de los cambios políticos; el surgimiento de las políticas de transparencia y gobierno abierto como una respuesta idónea al problema desafección y los procesos políticos concretos que están siendo determinantes para la adopción de dicha alternativa.

El capítulo VI aborda las políticas de gobierno abierto en el ámbito local español. A lo largo de este capítulo se describen las principales iniciativas en materia de buen gobierno, transparencia y participación ciudadana impulsadas por las principales redes de gobiernos locales del país. Seguidamente se presenta el estudio cuantitativo en el que exponen los objetivos, se señalan las hipótesis específicas, y se presentan los resultados. Concluye el capítulo con un resumen de aspectos destacados en los que se validan las hipótesis de la investigación.

Finalmente, el capítulo VII de conclusiones expone las principales cuestiones planteadas a lo largo de la investigación, en tres bloques coincidiendo con las tres hipótesis planteadas. Se cierra este capítulo y consecuentemente la presente investigación con algunas reflexiones sobre el futuro y los retos aún pendientes de alcanzar en torno al

gobierno abierto en España, señalando algunas cuestiones que sólo han podido subrayarse de forma tangencial pero que han vuelto a despertar la curiosidad de quien suscribe estas palabras identificándose como nuevas líneas de investigación.

## **CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN: EL ENFOQUE DE LAS CORRIENTES MÚLTIPLES**

### **I. CONSIDERACIONES PREVIAS**

En las últimas dos décadas, uno de los principales focos de interés en la ciencia de las políticas públicas ha sido el estudio de los procesos que dan lugar al cambio en las políticas. Comprender por qué, cuándo y cómo las políticas públicas cambian o se mantienen, ha dado lugar a numerosos esfuerzos de desarrollo teórico que han cristalizado en diversas teorías que explican cómo se produce dicho cambio. Determinar el alcance y la profundidad de este aspecto de análisis de la ciencia de las políticas públicas es significativo, puesto que los fenómenos que revela suelen poseer una naturaleza compleja, resultado del carácter dinámico del proceso, de la existencia de múltiples causas, del elevado número de actores que participan y del carácter interactivo entre las diferentes variables que intervienen en el proceso. Por ello, partiendo de esa complejidad inherente al proceso de políticas públicas, el marco teórico conceptual debe intentar ordenar ese entramado y reducirlo a dimensiones manejables y comprensibles (Dato, 2007: 2).

Entre los diferentes enfoques analíticos propuestos por la literatura sobre el proceso de formulación de políticas públicas vinculados a los modelos del individuo tendentes a proponer modificaciones en la unidad de análisis, tres han obtenido un mayor grado de aceptación entre los investigadores e inspirado un gran número de trabajos empíricos

(Dato, 2007: 2): el Enfoque de las Corrientes Múltiples — *Multiple Stream Model, MSA* — (Kingdon, 1984; Kingdon 1995); el Enfoque de las Coaliciones Promotoras — *Advocacy Coalition Framework, ACF*— (Sabatier, 1987; Sabatier, 1988; Sabatier y Jenkins-Smith, 1993; Sabatier y Jenkins-Smith, 1999); y la Teoría del Equilibrio Interrumpido —PET— (Baumgartner y Jones, 1993).

Los tres enfoques mencionados se caracterizan por ser marcos alternativos para el estudio del proceso de las políticas, siendo uno de sus máximos exponentes el Enfoque de las Corrientes Múltiples de Kingdon. A través de la pregunta “¿cómo llega el tiempo de una idea?”, Kingdon al inicio de su obra *Agenda, Alternatives and Public Policies* (1984) plantea cómo esa cuestión captura el movimiento de una idea hasta que ésta logra captar la atención, no sólo de los responsables políticos, sino de la sociedad en su conjunto, y cómo esa inercia puede llegar a desplazar todo lo que pueda interponerse en su camino. Este movimiento puede producirse bien por cambios sostenidos en la opinión pública, por la movilización reiterada de personas con determinados intereses o por las preferencias de los responsables políticos que deciden ubicar una determinada cuestión en el orden de prioridades de los asuntos públicos (Kingdon, 1995).

El Enfoque de las Corrientes Múltiples inspirado en el modelo de *garbage can model* (Cohen, March y Olsen, 1972), ofrece un marco alternativo y flexible para explicar de qué manera se produce la formulación de políticas, o cómo los asuntos aterrizan en la agenda y logran convertirse en políticas públicas. Para explicar el cambio, la formación o adopción de políticas, Kingdon identifica tres corrientes o flujos independientes (*streams*) que cuando convergen o coinciden en el tiempo (*coupling*) generan ventanas de oportunidad (*policy windows*) que permiten a los emprendedores de políticas (*policy entrepreneurs*) la adecuada incorporación de los asuntos en la agenda a través de su promoción o defensa. Este marco de análisis proporciona los elementos necesarios para abordar el objeto de estudio de esta investigación. Por ello, a lo largo de este capítulo se describen los principales elementos que lo conforman: la definición de la agenda, la especificación de la alternativa que puede convertirse en solución al problema planteado, el clima social o cambio político propicio para que estas tres corrientes independientes pueden y abran una ventana de oportunidad para el cambio.

## II. MARCO TEÓRICO SOBRE PROCESOS DE CAMBIO EN LAS POLÍTICAS

### 1. INTRODUCCIÓN

El foco de la presente investigación se encuentra en los procesos de cambio en las políticas. A pesar de la multiplicidad de definiciones existentes, existe cierto consenso a la hora de delimitar este concepto. Las políticas públicas se pueden entender como un “proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática” (Velásquez, 2009: 149) o como “las decisiones (incluyendo tanto acciones como no acciones) de un gobierno o una autoridad equivalente” (Weible, 2014: 4). Por lo tanto, la investigación sobre los procesos de cambio en las políticas públicas se define como “el estudio de las interacciones en el tiempo entre política pública y sus actores circundantes, sus eventos y contexto, así como los resultados de las políticas o de la política” (Weible, 2014: 5).

A partir del análisis de estos procesos, se conforman teorías en base a las que organizar los conocimientos. Así pues, podemos establecer que el termino *teoría* “es definido genéricamente para significar una gama de enfoques que especifican el alcance de la investigación, diseñar supuestos, proporcionar un vocabulario compartido entre miembros de un equipo de investigación, y claramente definir y relatar conceptos en forma de principales y comprobables hipótesis y proposiciones” (Weible, 2014: 3).

Para Weible, las teorías, enfoques, marcos y modelos del proceso de las políticas que cumplen con los criterios de definición de una teoría, presentan desarrollos teóricos y aplicaciones empíricas, y cuentan con un alcance amplio para explicar una parte considerable del proceso son los siguientes (Weible 2014: 4):

- Enfoque de Corrientes Múltiples (ECM)
- Teoría del Equilibrio Interrumpido (PET)
- Marco de construcción social (SCF)
- Teoría de la retroalimentación de política (PFT)



- Marco de coalición promotora (ACF)
- Marco de narrativa de políticas (NPF)
- Marco de análisis y desarrollo institucional (IAD)
- Marco de sistemas socio-ecológicos (SESF)
- Modelo de innovación y difusión en investigación de política (DOI)

Según Cairney y Heikkila (2014: 363), la comparación de las teorías sobre el proceso de las políticas se basa en tres criterios:

- Los elementos básicos de la teoría: centrado en el alcance y los niveles de análisis, el vocabulario compartido y los conceptos definidos, las suposiciones explícitas, las relaciones identificadas entre conceptos y variables claves, y el modelo de individuo.
- El desarrollo de un programa de investigación: relacionado con la utilización y socialización de la teoría, la prueba de la teoría en múltiples contextos y métodos, el desarrollo de protocolos, métodos y enfoques de investigación compartidos, y la adaptación o modificación de la teoría en el tiempo.
- La identificación de los elementos clave para explicar el proceso de las políticas: entendidos como actores, instituciones, redes o subsistemas, ideas o creencias y contextos y eventos.

Así pues, cada una de las teorías señaladas utiliza estos elementos y describe su interacción para producir una explicación sobre alguna de las partes del proceso de la política, ya que tratan de manera ambigua, combinada y fluida estos conceptos y exploran el proceso de las políticas en determinados segmentos (Cairney y Heikkila, 2014: 366-372).

Las teorías sobre el cambio político (*policy change*) están estrechamente ligadas al enfoque procesal de las políticas públicas que ha dominado la disciplina durante más de veinte años (Parsons, 2007). A pesar de que ambos conceptos están entrelazados y que en muchos textos no se haga una distinción clara, es necesario diferenciar ‘cambio político’ (*policy change*) y ‘cambio de las políticas públicas’ (*policies change*); la palabra *policy* hace referencia a las grandes líneas políticas, mientras *policies* hace referencia a

las políticas públicas. Se trata de una confusión poco metodológica, pero al tratarse de una noción bastante intuitiva es fácilmente utilizable. En este sentido, es necesario recordar que uno de los criterios que se usan para juzgar la calidad de una teoría es su sencillez; uno de los ejemplos más conocidos es el concepto de gobernanza (*governance*), cuya indefinición deja poco margen para la investigación empírica sin tener que justificar constantemente los criterios y definiciones elegidas.

## 2. LAS TEORÍAS SOBRE EL PROCESO DE CAMBIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Existen diversas teorías sobre el proceso de cambio en las políticas públicas. Las que ofrecen un entendimiento general se caracterizan por tomar en cuenta muchas variables. Siguiendo a Parsons (2007), las teorías se pueden agrupar en cuatro corrientes principales: i) de redes y comunidades de políticas públicas; ii) de corrientes de políticas públicas; iii) de coaliciones promotoras; y iv) de equilibrio interrumpido. A estas cuatro también habría que añadir la del análisis y desarrollo institucional de Ostrom, que construye una perspectiva neo-institucionalista (McGinnis y Walker, 2010). La centralidad y visibilidad conseguida por la publicación de Sabatier (2007) y de Sabatier y Weible (2014) hace que las teorías tomadas en consideración en la literatura se resuman a las tratadas en dichas ediciones. Ello no implica que no haya aproximaciones teóricas alternativas, pero sí se tiende a considerar que, por su capacidad explicativa y por ser las que han inspirado más trabajos de investigación, éstas son las más sustanciales.

**Figura 1: Principales teorías y enfoques para explicar el cambio en las políticas**

Nombre en inglés	Traducción al castellano	Principales autores	Siglas
<i>Incrementalism</i>	Incrementalismo	Charles Lindblom	-
<i>Multiple Streams Approach</i>	Modelo enfoque de las corrientes múltiples	John W. Kingdon Nikolaos Zahariadis	ECM
<i>Punctuated Equilibrium Theory</i>	Modelo del equilibrio interrumpido	James L. True Bryan D. Jones Frank R. Baumgartner Peter. B. Mortensen	PET
<i>Social Construction and Policy Design</i>	Modelo de la construcción social y diseño de políticas	Helen Ingram Anne L. Schneider Peter deLeon	SCF
<i>Policy Feedback Theory</i>	Teoría de la retroalimentación de políticas	Suzanne Mettler Mallory SoRelle	PFT

<i>Advocacy Coalition Framework</i>	Marco de coaliciones promotoras	Paul A. Sabatier Christopher M. Weible Hank C. Jenkins-Smith Daniel Nohrstedt	ACF
<i>Narrative Policy Framework</i>	Marco de la narrativa de las políticas	Michael D. Jones Elizabeth A. Shanahan	NPF
<i>Institutional Analysis and Development Framework</i>	Marco de análisis y desarrollo institucional	Elinor Ostrom	IAD
<i>Diffusion of Innovation Models</i>	Modelos de difusión de la innovación	Frances Stokes Berry William D. Berry	DOI
<i>Social Ecological Systems Framework</i>	Marco de los sistemas sociales ecológicos	Elinor Ostrom Michael Cox Edella Schlager	SESF
<i>Policy Network Approach</i>	Marco del acercamiento de redes	Silke Adam Haspeter Kriesi	PNA

**Fuente:** elaboración propia a partir de Sabatier (2007), Sabatier y Weible (2014) y Parsons (2007)

A continuación se presentan algunos elementos clave de cada una de las teorías en base al estudio de Cairney y Heikkila (2014: 368), entre los que destacan el alcance y los niveles de análisis, las suposiciones, el modelo de los individuos y las relaciones entre conceptos clave.

En cuanto al alcance y niveles de análisis, las teorías enumeradas estudian la formulación y el cambio de las políticas y definen con cierta precisión su alcance y sus niveles de análisis. A pesar de ello, éstas presentan variaciones. Algunas teorías enfatizan las etapas del proceso de la política: i) ECM explora cómo el gobierno formula políticas en condiciones de ambigüedad; ii) el PET explica por qué y cómo los procesos políticos, caracterizados por estabilidad e incrementalismo, producen salidas a largo plazo desde el pasado; y iii) DOI considera cómo se difunden las políticas a través de estados y otras jurisdicciones (Cairney y Heikkila, 2014: 368). Otros marcos estudian muy bien cuestiones alternativas del proceso. Mientras ACF se centra en la formación de coaliciones y aprendizaje, NPF se focaliza de qué manera las narrativas influyen la opinión pública, cómo están estructuradas y cómo estas reflejan creencias de las políticas. Además, SCF y PFT se centran en cuestiones de diseño y dinámicas de la política como la retroalimentación de políticas dentro de la sociedad. IAD considera cuestiones relativas a cómo instituciones influyen en el comportamiento humano, especialmente en los efectos

de los diseños políticos en situaciones de acción. Para las teorías descritas, el nivel de análisis es generalmente un sistema o subsistema de las políticas. Sin embargo, algunas teorías son más explícitas que otras en este sentido: i) NPF investiga tres posibles niveles de análisis (macro, meso, micro); ii) ACF identifica y define dos niveles de análisis (subsistemas de políticas y coaliciones); iii) PET, SCF, ECM y PFT exploran indistintamente cuestiones relativas a sistemas de las políticas; y iv) IAD revisa situaciones de acción en variados niveles de análisis (Cairney y Heikkila, 2014: 368-369).

En cuanto a las suposiciones de cada aproximación teórica, cabe destacar que las teorías cuentan con suposiciones implícitas que subrayan su lógica teórica: i) IAD esboza algunas suposiciones acerca de instituciones o reglas; ii) ECM tiene tres supuestos claves (el procesamiento de información individual versus el sistémico, las restricciones de tiempo de los responsables de las políticas, y la independencia de la política de las políticas y las corrientes de problemas; iii) PET con base en ECM, presenta una lógica de toma de decisiones individual y colectiva más sofisticada; iv) varias, especialmente PET y ACF, asumen que el enfoque de la actividad de formulación de políticas es el subsistema; y v) SCF y NPF asumen que el mundo está construido socialmente y que ello afecta las políticas públicas (Cairney y Heikkila, 2014:369).

En cuanto al modelos de los individuos, prácticamente la totalidad de las teorías adoptan un modelo de individuos con base en un enfoque de racionalidad limitada. Si partimos de un rango de investigaciones sobre las consecuencias de esos límites: i) ECM y PET incorporan actores que enmarcan el mismo problema muy rápidamente de diferentes maneras, cambiando repentinamente su atención de un problema a otro; ii) SCF se centra en los actores a través de valoraciones sesgadas con información selectiva para el entendimiento de los problemas y su solución; iii) ACF analiza coaliciones que compiten por encumbrar su opción a la par que demonizan a sus oponentes; y iv) DOI se centra en estados emulando a otros, sin tener en cuenta el aprendizaje puesto que son percibidos teniendo éxito; y v) SCF y NPF van más allá en el reconocimiento de las emociones en la toma de decisiones. Asimismo, estas teorías también difieren en cómo trabajar con el modelo de individuo: i) IAD y DOI se acomodan a diferentes modelos de los individuos; ii) NPF sintetiza y matiza el modelo de individuo pero aun así resulta

difícil de falsear; y iii) para PFT los individuos están influenciados por los diseños de la política (Cairney y Heikkila, 2014: 370).

En cuanto a las relaciones entre conceptos clave, cada una de las teorías presenta de qué forma las relaciones entre las diferentes variables claves afecta al resultado del proceso y a la eficacia de la política: i) ECM argumenta que tres corrientes (los problemas, las políticas, y la política) se reúnen durante ventanas de oportunidad para causar mayores cambios políticos; ii) PET identifica los factores que producen o constriñen el cambio (institucionales, subsistémicos y de toma de decisiones); iii) DOI se centra en explicar por qué un lugar de formulación de las políticas es probable que adopte una nueva política; iv) NPF detalla cómo narrativas influyen la opinión pública, las estrategias de la coalición y el aprendizaje de las políticas; v) SCF y PFT destacan la importancia de la retroalimentación y dinámicas de las políticas; vi) ACF y AID se encuentran abiertos a abordar diversos conjuntos de relaciones entre conceptos o variables claves (ACF se dirige a la naturaleza de las coaliciones, el aprendizaje de la política y el cambio de la política); y vii) IAD se concentra en configurar las condiciones e instituciones para la acción colectiva de la gobernanza de recursos de fondos comunes (Cairney y Heikkila, 2014: 370).

### 3. EL PROCESO DEL CAMBIO EN LOS DIFERENTES MARCOS TEÓRICOS

La mayoría de las teorías han producido numerosas publicaciones (con excepción del NPF) a nivel nacional o estatal y en un número muy inferior a nivel local, especialmente IAD y SES. PET y DOI tienden a emplear métodos cuantitativos con técnicas de modelado sofisticado; ECM, SCF, PFT han confiado en aplicaciones cualitativas o estudios de caso; y ACF, IAD y NPF han desarrollado enfoques cualitativos y cuantitativos y múltiples tipos de recursos de información, tales como encuestas, codificación de documentos y experimentos (Cairney y Heikkila, 2014: 372).

Frente a las fortalezas y debilidades de cada una de las teorías Cairney y Heikkila apuntan que: i) cuando ECM es aplicado, las explicaciones logradas son difíciles de generalizar debido a su carácter temporal; ii) la aplicación del PET es cada vez más generalizable a través de los niveles de gobierno de los Estados Unidos y en múltiples

países, en particular respecto a la distribución presupuestal de recursos; iii) SCF se considera difícil de operacionalizar más allá de estudios de caso en profundidad, debido al rol de las ideas que sostienen las relaciones de poder, aunque su alcance y enfoque ha sido llevado a múltiples áreas de las políticas; iv) los conceptos e interacción del ACF han sido aplicados en diversos ámbitos caracterizados por situaciones conflictivas que involucran coaliciones, aprendizaje y cambio de las políticas; v) NPF ha desarrollado libros de códigos y métodos compartidos para identificar y cuantificar la naturaleza y efectos de narrativas y avanzar en probar hipótesis no comprobadas; vi) la fortaleza del IAD está en el estudio de recursos comunes compartidos y la demostración de cómo la gente puede crear y aplicar reglas para alejar el agotamiento de recursos compartidos; y vii) DOI ha crecido en términos del número de aplicaciones y de avances en métodos y modelos (Cairney y Heikkila, 2014: 372-375).

Cairney y Heikkila (2014: 364-365) explican que para proveer una explicación total del sistema de formulación de las políticas, las teorías describen y desarrollan la interacción entre los siguientes elementos:

- *Actores tomando decisiones*: Para simplificar las personas incluidas en la formulación de las políticas, las teorías categorizan y describen sus actores claves, ya sean individuales o colectivos.
- *Instituciones*: Son las reglas, normas, prácticas y relaciones formales e informales en varios niveles y lugares que influyen los comportamientos individuales y colectivos por entendimiento y adherencia a las mismas. Permiten a determinados tipos de actores o ideas entrar en el proceso político.
- *Redes o subsistemas*: Son las relaciones entre los actores responsables por las decisiones de política y los grupos de interés con los cuales se consulta e intercambia información y se negocia su influencia dentro del gobierno, mediante procedimientos operativos que favorecen particulares fuentes de pruebas y algunos participantes sobre otros.
- *Ideas o creencias*: Las teorías definen el rol en el proceso de la política de las maneras de pensamiento o conocimiento y su capacidad de ser cuestionadas o no en razón a ser vistas como creencias fundamentales, valores, o paradigmas o

simplemente como soluciones de política. Pueden incluir creencias, conocimientos, visiones del mundo, y definiciones compartidas de problemas de las políticas, imágenes, y soluciones dentro de grupos, organizaciones, redes y sistemas políticos.

- *Contexto de las políticas:* Se refiere a la descripción del entorno y de las condiciones en las que se puede influenciar y enmarcar la identificación de problemas y la toma decisiones de los formuladores de políticas. Puede incluir el sistema de geografía política, el perfil biofísico y demográfico, la economía y actitudes y comportamientos de masa y el conjunto de leyes, reglas, instituciones y programas heredados.
- *Eventos:* Describen situaciones tanto rutinarias como cambiantes, impredecibles no teorizables, que se tratan como factores externos o fallos de las políticas o algunas veces dentro de teorías de gestión de eventos. Pueden incluir a las elecciones que producen cambios limitados o introducir actores con nuevas ideas o incidentes imprevistos, inclusiones sociales, crisis naturales o avances y cambios científicos y tecnológicos importantes.

Asimismo, Cairney y Heikkila (2014: 375-381) resumen de qué forma cada una de las teorías tratadas describe y desarrolla la interacción de los elementos presentados anteriormente. A continuación se presenta para cada uno de los enfoques teóricos:

- *Enfoque de corrientes múltiples (ECM)*

Este marco enfatiza la interacción entre el tipo de solución de las políticas que podría llamar la atención y adoptarse rápidamente y el conjunto establecido de creencias en una comunidad política que frenaría su progreso. Pone de relieve el rol de la interacción entre los grupos de actores en una comunidad política para depurar una solución, los emprendedores de políticas tratan de encontrar el momento correcto para proponer soluciones y los formuladores de políticas necesitan el motivo y la oportunidad para adoptarla (Cairney y Heikkila, 2014: 375). El rol de las instituciones en el ECM nace del reconocimiento de los lugares de las políticas y de las reglas informales en cada sistema de políticas, sin que se conceptualice de manera significativa. El ECM se centra

en el hecho que otros procesos ocurran antes de que un evento tenga más importancia. Por ello, para este marco es clave que los formuladores de políticas interpreten el contexto del estado de ánimo nacional (Cairney y Heikkila, 2014: 375).

- *Teoría del equilibrio puntuado (PET)*

Esta teoría enfatiza la interacción entre lo que denomina ‘monopolio de entendimientos’ y las nuevas soluciones. Ello descansa en el hecho que los subsistemas son un recurso de estabilidad, poder y continuidad de las políticas, mientras que la inestabilidad y los cambios principales pueden deberse a interacciones entre instituciones con diferentes reglas y entendimientos, o entre el subsistema de las políticas y el sistema macro político (Cairney y Heikkila, 2014: 377). Para esta teoría, el concepto de fricción institucional describe la cantidad de esfuerzo requerido para superar las reglas establecidas y asegurar el cambio institucional. Una alta fricción puede producir un efecto de presión y una significativa puntuación de la política. Asimismo, la teoría se centra en la atención a los eventos y al cambio endógeno en subsistemas, en ausencia de cambios similares en un ambiente de políticas más amplio (Cairney y Heikkila, 2014: 377).

- *Marco de construcción social (SCF)*

Este marco se enfoca en la configuración de la agenda del diseño de la política en relación al encuadramiento, la asignación de valores, el uso de la caracterización emocional de las personas y los problemas en grupos y población objetivo, llamados ‘buenos’ si son dignos de los beneficios y ‘malos’ si son merecedores de las cargas. Un objetivo clave es considerar el efecto del diseño de las políticas pasadas sobre debates actuales, en cuanto a que puede producir una ‘hegemonía’ cuando el público, los medios y los formuladores de las políticas los toman por garantía y raramente cuestionan su encuadramiento (Cairney y Heikkila, 2014: 377). El SCF no conceptualiza subsistemas ni instituciones, argumentando que los subsistemas se basan mucho en el poder de grupos de interés y que los diseños de las políticas institucionalizan marcos y reglas. Examina la influencia de los grupos de poder en la forma en que los grupos objetivos son encuadrados por los formuladores de las políticas y la distribución acumulativa de beneficios. Determina que las políticas y las estrategias pueden reforzar la hegemonía de



construcciones sociales en base a una interpretación dominante de grupos sociales en ausencia de eventos significativos para cambiar la forma en la que los formuladores de las políticas y el público en general ve a los grupos particulares (Cairney y Heikkila, 2014: 378).

- *Teoría de retroalimentación de políticas (PFT)*

El PFT, con base en el institucionalismo histórico, sugiere que los compromisos de las políticas realizadas en el pasado producen retornos de incrementos, hecho que convierte en costoso elegir un camino diferente. Se enfoca en conceptualizar actores, redes e ideas influenciando su capacidad para movilizar y comprometer individuos y grupos con el fin de proteger programas que representan creencias institucionalizadas o marcos de las políticas para su continuidad o cambio. Asimismo, describe cómo la secuencia de decisiones pasadas configuran el contexto para las políticas actuales y resalta de qué forma eventos significativos pueden ser requeridos para estimular el cambio institucional (Cairney y Heikkila, 2014: 378).

- *Marco de coalición promotora (ACF)*

El ACF establece que las personas participan en las políticas con el fin de trasladar sus creencias en acción, ya sean nucleares (*core*), centrales de la política (*policy core*) o secundarias (*secondary*), asociadas en coaliciones promotoras que compiten unas con otras en un subsistema de políticas, con particulares reglas de compromiso, integrado, entre otros, por gobierno, grupos de interés, académicos y analistas (Cairney y Heikkila, 2014: 379). Adicionalmente, identifica los efectos de otros subsistemas y eventos de las políticas. Sin embargo su foco está en cómo las coaliciones interpretan y responden a choques externos o internos mediante el aprendizaje de las políticas y la revisión de los aspectos secundarios de las creencias de la coalición más que de aspectos nucleares (Cairney y Heikkila, 2014: 377).

- *Marco narrativo de la política (NPF)*

El NPF busca medir como las narrativas (historias con personajes, trama y moraleja) son usadas en la formulación de las políticas para reforzar u oponerse a las

medidas tomadas, dando cuenta de su origen, objetivos, e impactos probables. Esto, a través de un proceso de persuasión (mercadeo) que apela más a las creencias de un público que busca atajos para reunir información, más propenso a aceptar historias simples que confirman sus sesgos explotando sus emociones y confianza, que a los hechos (Cairney y Heikkila, 2014: 379). Este proceso se sitúa dentro del subsistema (nivel meso) de las políticas con coaliciones que compiten para presentar la narrativa más convincente y en instituciones (nivel macro) con el argumento de que las narrativas exitosas pueden incrustarse en la cultura de los sistemas de las políticas. Para el NPF los actores construyen narrativas teniendo en cuenta, por un lado, parámetros legales, normativos, geográficos, económicos y científicos que pueden ser dados por hechos o dominar la atención, y, por el otro, los eventos usados para construir encuadres en situaciones precisas y el reparto de culpas (Cairney y Heikkila, 2014: 379).

- *Marco de análisis y desarrollo institucional (IAD)*

El IAD se enfoca en las vías en las cuales actores toman decisiones dentro de entornos institucionales que estructuran su comportamiento. Para este enfoque diferentes configuraciones de actores e instituciones producen distintos resultados en términos de eficiencia, equidad y rendición de cuentas, entre otros. IAD contiene un conjunto de reglas operacionales anidado en un conjunto de reglas sobre acción colectiva, que a su vez se arraiga en reglas constitucionales. Para el IAD las condiciones físicas y materiales pueden producir reglas como incentivos para que personas actúen egoísta o cooperativamente, o para producir bienes públicos, sostenidos en las preferencias compartidas o normas, en redes más que en subsistemas. En conclusión, IAD se centra explícitamente sobre actores, instituciones y contexto, y más implícitamente en ideas y redes o subsistemas (Cairney y Heikkila, 2014: 379-380).

- *Modelos de difusión de innovaciones (DOI)*

Para el DOI la adopción de una política por una jurisdicción gubernamental puede estar influenciada por las elecciones de políticas de otros gobiernos en sistemas políticos. Esto, en razón al aprendizaje, imitación, presión normativa, competencia y coerción, debido a la percepción de formuladores de política de mantenerse al día con las normas,

sobre todo las más atractivas para los formuladores de políticas. Los actores operan entre estados, incluyendo organizaciones y emprendedores compradores de las políticas, así mismo las instituciones son conceptualizadas como canales de comunicación entre gobiernos que alientan la mezcla y las redes como patrones de comportamientos irregulares en los subsistemas (Cairney y Heikkila, 2014: 380-381). Para DOI el contexto y eventos son muy importantes: crisis económicas o guerras perdidas convierten al gobierno en más vulnerable a la coerción, a las ciudades en entes más probables de que aprendan, que la difusión dependa de las tecnologías de la información y la proximidad física explique la adopción de políticas. DOI entiende la adopción de políticas como una secuencia de eventos que se centran principalmente en actores, ideas y contextos, con otros factores discutidos implícitamente (Cairney y Heikkila, 2014: 381).

El siguiente cuadro identifica de qué forma cada teoría del proceso de las políticas públicas describe los elementos claves del proceso de las políticas y explica cómo interactúan para producir las mismas (Cairney y Heikkila, 2014: 378).

**Figura 2: Tramos del proceso de las políticas para cada teoría**

	Grupos Interés	Impactos	Sostenibilidad	Aprendizaje	Grupos de Interes	Comunicación	Impactos	Sostenibilidad
	ECM	PET	SCF	PFT	ACF	NPF	IAD	DOI
<b>Teorías, enfoques, marco y modelos</b>	Enfoque de Corrientes Múltiples	Teoría del Equilibrio Interrumpido	Marco de construcción social	Teoría de la retroalimentación de política	Marco de Coalición Promotora	Marco de política narrativa	Marco de análisis y desarrollo institucional	Modelo de innovación y difusión en investigación de política
	Kingdon, Zahariadis	Baumgartner, Jones, Mortensen	Schneider, Ingram, deLeon	Mettler, SoRelle	Jenkins-Smith, Norhstedt, Weible, Sabatier	McBeth	Ostrom, Cox, Schlager	Berry, Berry
<b>Actores tomando decisiones</b>	Empresarios de las políticas y formuladores de la política	Ampliamente, grupos de interés y otras organizaciones, así como individuos en grupos y diferentes lugares	Formuladores de política caracterizando grupos objetivo.	Implícitamente, actores quienes son afectados por la política pueden a su vez convertirse en actores políticos	Actores de política quienes forman coaliciones, actúan estratégicamente, aprenden, y así sucesivamente.	Actores y grupos interesados en uso de narrativas políticas estratégicamente para influenciar opinión pública y decisiones	Actores, primordialmente individuos, quienes toman decisiones	Formuladores de la política, expertos, emprendedores

<b>Instituciones como reglas o lugares de decisión o formulación</b>	Informal reglas y lugares formales reconociendo pero no enfatizando instituciones	Lugares institucionales y sus reglas	Implicitamente, "diseños" de la política establece las reglas de juego	Políticas institucionalizadas en reglas y programas	Tipos de lugares de política y reglas en contexto amplio, pero menos directamente.	Parte del contexto	Instituciones como reglas y normas que establecen comportamientos; tipologías de reglas	Indirectamente, "canales de comunicación institucionalizados"
<b>Redes/Subsistemas</b>	Una amplia "comunidad de política" de actores, con relativamente pocos focos en subsistemas aislados	Subsistemas como recursos de estabilidad y poder	No directamente abordado	Grupos movilizándose para proteger programas	Subsistemas y coaliciones	Modifica el flujo de diagrama del ACF en subsistemas y explora la idea de centrarse en los regímenes	Redes dentro de situaciones de acción, pero no atención explícita a subsistemas	Libremente, redes de información
<b>Ideas o creencias</b>	Soluciones de la política propuesto y modificado con el tiempo para convertirse en aceptable para una comunidad política	Monopolios de entendimiento en subsistemas establecidos; nuevas soluciones o ideas que avanzan	Construcciones sociales/marcos de poblaciones objetivas	Ideas acerca de beneficios de la política y actitudes políticas a través de "efectos interpretativos" de la política	Sistemas de creencias que dirigen conductas actores de la política	Estrategias narrativas basados en sistemas de creencias, y formas de pensamiento que están incrustadas en cultura	Preferencias o normas de actores compartidas, pero no explícitas	Soluciones de política emulada o las normas percibidas de adopción de la política que influyen los prestatarios de políticas
<b>Contexto</b>	Estado de ánimo nacional, condiciones de política, grupos de presión, el volumen de negocios de administración y así sucesivamente	Endógeno contexto del subsistema; entorno de política más amplia	Pasado (diseño) de la política, pero también características y conductas de la sociedad	Decisiones pasadas de la política y contexto amplio, pero implícito	Parámetros estables - sociales, culturales, económicos, físicos- e instituciones el subsistema	Legal, parámetros constitucionales, geografía	Condiciones materiales y físicas, características de la comunidad, instituciones preexistentes	Condiciones socioeconómicas, educación, ideología, religión y así sucesivamente
<b>Eventos</b>	Enfocándose en eventos que llaman la atención a problemas	Eventos que desplaza la agenda macro política	Crisis, elecciones de juego cambiantes, y así sucesivamente, que se puede aprovechar para cambiar las construcciones sociales	No directamente abordado.	Eventos internos y externos (shocks, cambio de coalición de gobierno)	No directamente abordados, pero pueden combinar con narrativas para centrar la atención	No directamente abordadas	Indirectamente abordada (crisis), pero parte del contexto.

Fuente: Cairney y Heikkila, 2014: 376.

Los últimos avances de los estudios de la formulación de políticas públicas han estado dominados por los trabajos de Baugmartner y Jones, Sabatier y Jenkins-Smith, Ostrom, Kingdon y Schneider. Sin embargo otros investigadores proponen que un mejor entendimiento del rol de narrativas de las políticas en la construcción de las realidades de la política facilitaría la comprensión del proceso y resultados de las políticas (McBeth *et al.*, 2014: 253-254). Dentro de este espectro, es de interés de esta investigación analizar la aplicación teórica y empírica del Enfoque de las Corrientes Múltiples (Multiple Stream Model).

### III. EL MARCO DE LAS CORRIENTES MÚLTIPLES Y SU DESARROLLO TEÓRICO

#### 1. BASE DEL ENFOQUE DE LAS CORRIENTES MÚLTIPLES

El Enfoque de las Corrientes Múltiples - ECM- de configuración de la agenda política se basa en los trabajos de John W. Kingdon cuya obra principal, *Agendas, Alternatives and Public Policies* se publicó por primera vez en 1984. Este marco analítico alternativo descansa en la adaptación del estudio de las políticas públicas del modelo de toma de decisiones aplicado a las organizaciones denominado ‘cubo de basura’ o ‘papelera’ (*garbage can model*) de Cohen, March y Olsen (1972).

El *garbage can model* trata de extender la teoría de toma de decisión de las organizaciones al campo de la anarquía organizada, caracterizado por la presencia de procesos dinámicos y contingentes con problemas y soluciones no conocidos ni resueltos, donde los problemas y las soluciones no se encuentran conectados y donde los participantes van y vienen. La contribución teórica de este modelo, con respecto a las teorías clásicas de toma de decisiones en las organizaciones, supuso separar los problemas, las soluciones y los actores con capacidad de decisión en el marco decisional de las organizaciones. Así, en el *garbage can model* las decisiones no siguen un proceso ordenado que va del problema a la solución, sino que éstas son el resultado de diferentes corrientes relativamente independientes —problemas, soluciones, oportunidades y participantes— que tienen su origen dentro de la organización y son producto de sus propias dinámicas (Daft: 1982, 139). Estas cuatro corrientes, identificadas por Cohen, March y Olsen (1972) en su conceptualización original, ofrecen un marco de referencia sobre el que, algunos años después, Kingdon elaboraría su teoría del ECM sobre el proceso de formulación de políticas públicas.

Para este modelo explicativo de toma de decisiones en las organizaciones, los problemas son aquellas cuestiones que requieren atención y que generalmente son el resultado de brechas en el desempeño o consecuencia de la incapacidad para predecir el futuro. Los problemas pueden originarse dentro o fuera de la organización y, en el caso

de que sean graves, desencadenan procesos de adopción de decisiones. Las soluciones existen por sí mismas, sin necesidad de que se produzca el problema aunque estén llamadas a resolverlos. Las soluciones son respuestas más o menos activas en busca de una pregunta. Pero, mientras que las soluciones triviales no requieren gran preparación, las soluciones significativas tienen que estar elaboradas incluso antes de la identificación de los problemas que pudieran tener que resolver. De ahí que el papel de los participantes sea tan relevante, puesto que éstos deberán estar preparados, con sus soluciones o sus problemas bien estructurados, hecho que les permite ofrecerse como voluntarios para su defensa en el momento que aparezca la oportunidad de hacerlo, es decir, cuando surja la ocasión en la que la organización desencadene un comportamiento que pueda derivar en una toma de decisión.

La denominación del modelo *garbage can model* se sugirió debido a que las organizaciones tienden a producir numerosas soluciones que desechan por falta de problemas apropiados. No obstante, los problemas pueden surgir prácticamente en cualquier momento y, entonces, se produce la búsqueda de soluciones anteriormente desechadas en la ‘papelera’. Probablemente, el punto de vista más extremo de la aplicación del modelo, tenga lugar en el contexto de las anarquías organizadas, en las que las organizaciones operan sobre la base de preferencias inconsistentes y mal definidas, sus propios procesos no son comprendidos por sus miembros, operan por ensayo y error, sus límites son inciertos y cambiantes y los responsables de toma de decisiones para cualquier elección particular cambian caprichosamente. Para ilustrar estos procesos de organización, se toma la analogía de un cubo (*garbage can*) en el que se vierten diversos tipos de problemas y soluciones a la espera del momento oportuno de poder ser defendida y/o utilizada.

De manera análoga, Kingdon sostiene que el proceso político se organiza en tres grandes corrientes que operan de manera independiente las unas de las otras: los problemas, las políticas y la política, otorgando un papel preeminente a las ideas y a quienes las defienden. De ese modo, los individuos y el proceso de elección de decisiones, soluciones y alternativas será clave en el acoplamiento de las corrientes y en la selección de la solución. Desde esa premisa, la teoría de la racionalidad limitada de Herbert Simon,

señala que la mayoría de las personas son sólo parcialmente racionales y que actúan según impulsos emocionales y no totalmente racionales. Sus acciones están limitadas por tres dimensiones: la información disponible, la limitación cognoscitiva de la mente individual y el tiempo disponible para tomar la decisión. Ello introduce un elemento de análisis interesante en la corriente que permite que finalmente se produzca el acoplamiento (Simon, 1957).

## 2. EL ENFOQUE DE LAS CORRIENTES MÚLTIPLES FRENTE AL CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El ECM se centra en la compleja etapa previa al proceso de formulación de políticas y ofrece un modelo alternativo a las premisas del modelo de ciclo de las políticas públicas (*policy cycle*), que identifica un conjunto de etapas o secuencias lógicas en dicho proceso de formulación. Kingdon llevó a cabo una investigación de estudio de caso sobre la formulación de dos políticas federales en los Estados Unidos en relación a los cambios que se produjeron en las políticas de salud y transporte a lo largo de tres décadas, realizando un total de doscientas cuarenta y siete entrevistas en profundidad con responsables políticos y actores clave en el ámbito político entre 1976 y 1979. A través de este modelo, Kingdon describe cómo la formulación de políticas responde a un proceso que opera dentro de un contexto político en el que existen aportaciones (*inputs*), resultados (*outputs*) y mecanismos de retroalimentación que implican que las tres corrientes que operan —los problemas, las políticas y la política— puedan desarrollarse a la vez o de manera independiente. En este punto, lo determinante es el encuentro o confluencia de las mismas, puesto que dan lugar a lo que el autor denomina ‘ventana de oportunidad’ (*policy window*).

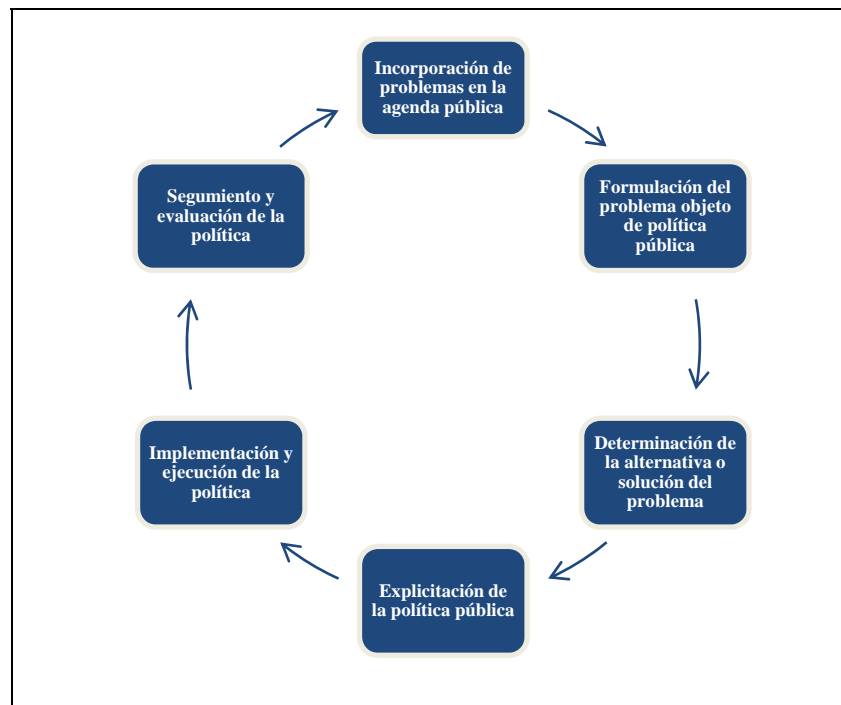
En contraposición a este modelo, se encuentra el del ‘ciclo de políticas’, donde las políticas públicas responden a una lógica más secuencial y el proceso se desarrolla generalmente de la siguiente manera (Delgado, 2009: 14):

- Incorporación de problemáticas en la agenda pública: es el momento en el que el gobierno advierte la existencia de problemas u oportunidades y se plantea si debe actuar o no.

- Formulación de un problema objeto de política pública: una vez que el gobierno ha decidido tomar en consideración el problema, se establecen los objetivos y se estudian distintas opciones o alternativas para solucionarlo.
- Determinación de la solución al problema entre distintas alternativas: una alternativa, o una combinación de ellas, es adoptada con el apoyo de una mayoría política.
- Explicitación de la política pública: en esta fase entra en juego la difusión y comunicación institucional y también la de los medios de comunicación
- Implementación y ejecución de la política pública: las unidades administrativas competentes movilizan recursos económicos y humanos para poner en práctica la política adoptada.
- Seguimiento y evaluación de la política pública: las unidades de evaluación del gobierno determinan en qué medida se han logrado los objetivos de la política pública en cuestión.

En la siguiente figura puede observarse de manera más gráfica el ciclo político, en el que se advierte como cada una de las fases puede retroalimentar a las otras, aunque cabe anotar que la secuencia, número y alcance de cada una de las etapas puede variar dependiendo de los autores (Aguilar, 1996; Lahera, 2002; Knoepfel, 2007; Parsons, 2007). Las etapas del proceso descrito indican los componentes lógicamente necesarios e interdependientes de toda política, integrados a la manera de proceso, pero no como un curso de eventos sucesivos y realmente separables. En la práctica, las etapas pueden sobreponerse y suponerse unas a las otras, condensarse alrededor de una de ellas, anticiparse, atrasarse o repetirse. Se trata, por tanto, de un dispositivo analítico intelectualmente construido para fines de sistematización, explicación y prescripción de una política (Aguilar, 1996: 15; Henríquez y Morales, 2009: 28-29).

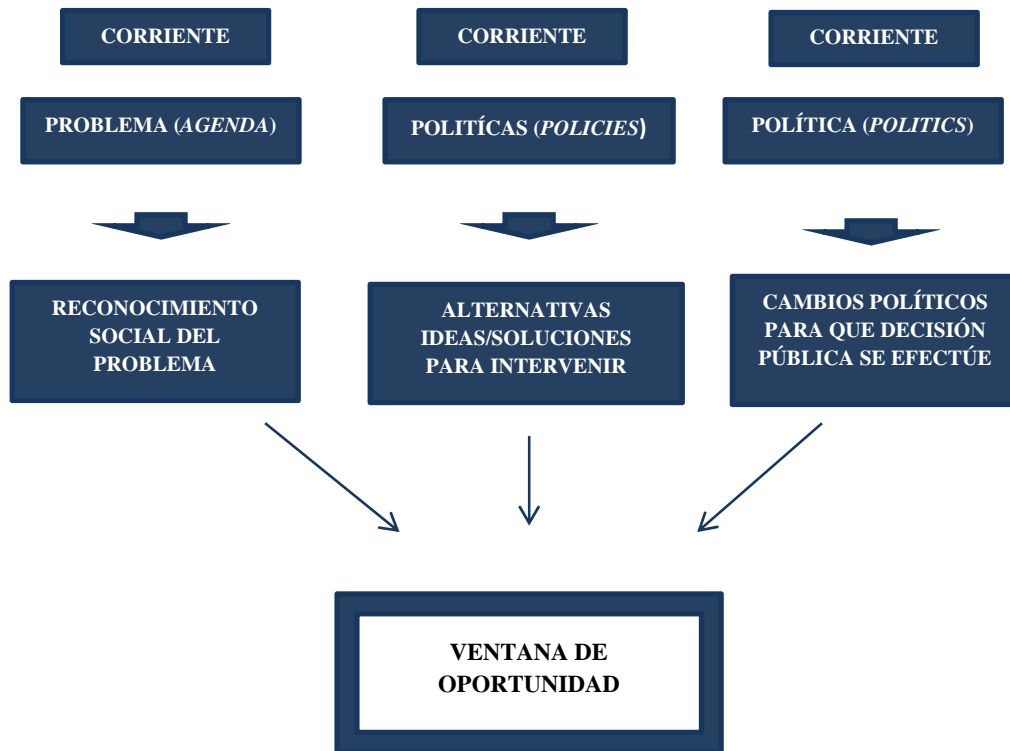


**Figura 3: Ciclo de las Políticas Públicas**

Fuente: (Henríquez y Morales, 2009) .

El enfoque desarrollado por Kingdon va más allá y consigue percibir las políticas públicas con mayor dinamismo que el ciclo político. Para ello, el autor determina la existencia de tres corrientes independientes —los problemas, las políticas y la política— que circulan en el sistema, capaces de acoplarse al producirse una serie de circunstancias concretas, esto es, cuando se abre una ventana de oportunidad. Se trata de una visión fluida en relación a la formulación de políticas, que implica que los problemas, las políticas y la política pueden confluir o alejarse hasta que en un momento y espacio oportuno se abran ventanas de oportunidad, que permiten el surgimiento de una política concreta como respuesta a un problema público. Las corrientes dan lugar a tres procesos: el reconocimiento social de un problema e incorporación a la agenda política (*agenda*); la elaboración de alternativas de solución para intervenir el problema (*policies*); y los cambios políticos que acompañan los otros dos procesos para que la decisión pública se efectúe (*politics*).

**Figura 4: Diagrama del Enfoque de las Corrientes Múltiples (I)**



Fuente: elaboración propia

Esto implica que no necesariamente se detectan en primer lugar los problemas y después se estudian las alternativas de solución, sino que en la mayoría de los casos puede que las soluciones y las ideas ya existan, que el problema subyazca en el ambiente pero no haya adquirido la dimensión de problema social, o que no se haya permitido que emerja como tal. Así, las corrientes pueden existir y no encontrarse, pero cuando las tres corrientes se encuentran surge la ventana de oportunidad, una oportunidad para el cambio o la restricción de una política pública.

### 3. LAS CORRIENTES: PROBLEMAS, POLÍTICAS Y POLÍTICA

A fin de explicar una política pública y cómo se llega a su formulación y adopción, es preciso conocer tres procesos: i) el proceso de diseño de la agenda, a través del cual ingresan y se definen los problemas; ii) el proceso de generación de alternativas para solucionar el problema; y iii) los cambios políticos necesarios para que la solución y alternativa se adopte. De ahí que Kingdon proponga entender la formulación de las políticas públicas a partir de estos tres procesos cuya coincidencia en el tiempo, por cambios en el entorno o la presión social, abren ventanas de oportunidad política. A lo largo de este apartado se exponen los elementos más relevantes que caracterizan cada una de estas corrientes: los problemas y definición de la agenda; las políticas y la generación de alternativas y soluciones; y la política y la toma de decisión.

#### **A) Diseño de la agenda: definición de los problemas**

Comprender como se produce el diseño de la agenda política pasa por constatar como en cualquier momento, personas influyentes o próximas a los gobiernos, atienden a una extensa lista de asuntos. De ese elenco de cuestiones, algunas serán tomadas en consideración y otras serán pospuestas o ignoradas. El porqué de esa selección hace necesario analizar cómo un asunto capta la atención de los responsables políticos y cuáles son los factores, indicadores y variables que determinan el interés por dicha cuestión o problema. En algunas ocasiones el problema es detectado por indicadores más o menos sistemáticos, mientras en otras puede ser la consecuencia de un acontecimiento relevante o evento dramático que alerta sobre una determinada cuestión. Incluso puede ser el resultado del seguimiento o evaluación intermedia de una política pública que muestra que no se están alcanzando los resultados que se pretendían con su implementación. En cualquier caso, la forma de definir los problemas merece algunas consideraciones previas (Kingdon, 1995: 109-110)

- La primera es que existe una diferencia entre una condición y un problema. A lo largo del día se suceden numerosas condiciones: la situación económica, el desempleo, la desigualdad, la pobreza. Pero como expresaba uno de los lobistas entrevistado por Kingdon, “si solo tienes cuatro dedos en una mano, eso no es

un problema, sino una situación”. De modo que las condiciones solo llegan a ser definidas como un problema cuando alguien cree que debe hacerse algo al respecto. Los problemas no son simples condiciones o acontecimientos externos con entidad propia, sino que para que existan tiene que entrar en juego la interpretación o percepción de los mismos.

- En segundo lugar, el rol de los valores en la definición del problema. Los valores juegan un papel sustancial en la definición del problema. La falta de correspondencia entre las condiciones observadas y la concepción de un estado ideal pueden dar lugar a la identificación de un problema. Así, políticos conservadores y progresistas podrían coincidir en que deben configurarse criterios objetivos para la distribución de la población en función de los ingresos, sin embargo de los resultados de esa clasificación pueden derivarse posiciones políticas diferentes. En función de los valores en juego, aquellos que creen en el uso del gobierno para hacer frente a la pobreza definirán la presencia de personas pobres como un problema, mientras que aquellos que no creen en el uso del gobierno para tales fines definirán la pobreza como una condición. Esa diferencia se acentúa si se añade la frase ‘adecuada para la acción del gobierno’. Algunos políticos conservadores podrían conceder que la pobreza es un problema, pero que no es un problema apropiado para la acción gubernamental.
- Tercero, los problemas a veces implican comparaciones. Si uno no está logrando lo que otros están logrando, y si uno cree en la igualdad, la desventaja relativa constituye un problema. Así, el hecho de que algunos reciban atención médica de calidad y otros no, se consideraría como un problema debido a que la comparación está involucrada. En algunas ocasiones las comparaciones se realizan a través de estados o naciones, por ejemplo en relación a las infraestructuras que determinan el grado de desarrollo de un país con respecto a otro.

La incorporación de cierta temática como parte de una política pública requiere de un proceso previo, el haber sido socialmente problematizada y políticamente visibilizada

para así llegar a ser parte de la agenda pública. En la medida en que exista un conjunto de preocupaciones social y culturalmente compartidas por amplios segmentos de la sociedad, se facilita la incorporación de tales problemáticas en la agenda. La agenda es la lista de asuntos de carácter público, considerados y analizados por las instancias gubernamentales para su intervención. Pero, la conformación de la agenda puede ser resultado de dos procesos de incorporación distintos, por ello debe tenerse en cuenta la diferencia entre aquellas cuestiones que preocupan a la sociedad y que conforman la ‘agenda sistémica’ y aquellas cuestiones que preocupan a los poderes públicos y que constituyen la ‘agenda política’, institucional o de gobierno.

**Figura 5: Incorporación de los problemas a la Agenda**



Fuente: elaboración propia

La agenda sistémica está conformada por los temas que captan la atención de la sociedad en general. Por el contrario, la agenda política es la lista de temas que constituyen el foco de atención del gobierno y de quienes, estando fuera del gobierno, intervienen en la formulación de las políticas. Asimismo, también hay que diferenciar entre la agenda gubernamental, que es más amplia e incluye múltiples cuestiones de política pública, y la agenda decisional, más acotada y constituida por una lista reducida de asuntos dentro de la agenda gubernamental.

En síntesis, para definir la agenda es necesario realizar la distinción entre condición y problema. Una condición pasa a convertirse en problema cuando un buen número de

personas considera que esta condición amerita la intervención pública, es decir cuando adquiere reconocimiento social y en su definición intervienen los valores y concepciones de los miembros de la sociedad y entran en juego los intereses de los actores; el problema existe en tanto los actores se sientan afectados y consideren que dicha condición debe ser objeto de intervención pública (Ramírez Brouchoud: 2007, 251). Si una determinada problemática no pasa a formar parte de la agenda pública difícilmente ésta podrá ser objeto de una política pública. Es decir, antes de que una opción de política pública sea realizada, es necesario que una determinada ‘problemática’ en la sociedad sea incorporada como parte de la agenda pública y se priorice como tal en relación a otras. Tras este argumento se encuentra la percepción de que hay algo que está funcionando mal (o que se percibe como un estado insatisfactorio) y que el problema puede ser resuelto mediante la acción pública del gobierno. La agenda opera como un mecanismo de selección entre las diferentes problemáticas, y las políticas públicas intentan, por su parte, resolverlas una vez que han sido conceptualizadas como problemas (Henríquez y Morales: 2009, 31-32). Partiendo de ese hecho, es imprescindible analizar cómo una condición se transforma en problema y, por tanto, cómo llega a captar la atención de los decisores públicos. Según Kingdon esto puede suceder a través de diferentes elementos o factores, tales como indicadores, estudios, acontecimientos de especial relevancia (*focusing events*) o consecuencia de la retroalimentación (*feedback*) de una política.

#### a) Indicadores y estudios específicos

Los indicadores y estudios específicos muestran los problemas de una manera medible, puntual y clasificable, realizados por equipos de investigadores, académicos, universidades, *think tanks*, fundaciones privadas e incluso por la propia administración permiten hacer visible un problema, establecer su magnitud, proyección y urgencia en el tratamiento. Con frecuencia, los problemas llaman la atención de los responsables políticos, no a través de la presión política, sino porque concurren indicadores —más o menos sistemáticos— que demuestran que hay un problema (Kingdon, 1995: 90-92).

Existen numerosos indicadores en el ámbito público y político, puesto que organismos gubernamentales y no gubernamentales monitorean periódicamente hechos,

actuaciones y políticas. Dichos indicadores o estudios no se utilizan específicamente para determinar si existe o no un problema, ya que en la determinación interviene la interpretación que se da a esos indicadores. Pero los responsables políticos y su entorno más próximo los usan para, de una parte, evaluar la magnitud del problema y, de otra, comprobar la evolución del mismo. Por ello, es importante matizar que los indicadores no comportan simplemente el reconocimiento directo de los hechos, ya que las posibles interpretaciones de los datos que ofrecen suelen tener diversas implicaciones.

#### b) Acontecimientos relevantes

Los acontecimientos relevantes (*focusing events*) son aquellos eventos específicos que ponen de relieve el problema y que generalmente llevan aparejadas acciones inmediatas, por ejemplo, ante situaciones de crisis. Y es que, aunque existan indicadores que puedan estar anticipando un problema, a menudo dichos indicadores no son suficientes ni evidencian claramente el problema y su alcance, de ahí que muchos de ellos necesiten un impulso extra para conseguir la atención de la ciudadanía y de los gobiernos. Ese empuje puede ser consecuencia de una crisis, de un desastre, de un símbolo poderoso que capta la atención del problema, o de la implicación de un responsable político en un asunto en concreto (Kingdon, 1995: 94-95).

En ocasiones, los acontecimientos relevantes constituyen un hecho o circunstancia puntual y alcanzan un cierto recorrido, de manera que pueden obtener una posición relevante en la agenda. Dichos acontecimientos no son siempre sencillos de prever, aunque suelen verse afectados por símbolos que les permiten mayor popularidad. En todo caso, la virtualidad de estos eventos es que logran capturar la esencia de lo que la ciudadanía siente o reclama. En primer lugar, hay que tener en cuenta que estos acontecimientos, bien sean crisis, desastres o símbolos, en raras ocasiones consiguen por ellos mismos elevar un tema a la agenda política. Por ello, al igual que los indicadores, los acontecimientos relevantes suelen ser el resultado o el hecho visible de percepciones preexistentes de un problema, permitiendo centrar la atención en algo que ya existía previamente en la conciencia de numerosas personas. En segundo lugar, con frecuencia estos acontecimientos sirven como una alerta temprana que llama la atención sobre algo

que podría ser considerado un problema, incluso si de su posterior consideración pudiera determinarse que no era una condición generalizada necesitada de atención. Y, en tercer lugar, estos acontecimientos pueden afectar a la definición del problema si entran en combinación con otros eventos similares (Kingdon, 1995: 96-100).

### c) Retroalimentación de las políticas

El proceso de retroalimentación de las políticas proviene de la información que recibe la administración respecto a los programas que están en marcha. En el curso normal de los acontecimientos, los responsables políticos reciben informes de seguimiento acerca del desarrollo y resultados de programas existentes. Para ello, se monitorean gastos, se evalúan resultados, se supervisa la ejecución, y se reciben quejas. Esta retroalimentación a menudo llama la atención sobre programas que no están funcionando como estaba previsto y cuya aplicación no cuadra con las líneas del mandato legislativo. Ello implica que los nuevos problemas surgidos a raíz de la promulgación de un programa o las consecuencias no previstas, deben ser subsanadas. En ocasiones el *feedback* proviene de los propios funcionarios en forma de estudios de monitoreo y evaluación, mientras que en otros casos la retroalimentación llega a través de cauces informales. Al margen de los comentarios de la opinión pública, los propios burócratas detectan problemas a través de la administración diaria de un programa (Kingdon, 1995: 101).

La cuestión que se plantea en este punto es cómo la información que fluye a través de estos canales se interpreta como un problema. Puede decirse que existe un problema si la política en cuestión no encaja con la intención legislativa superior, inclusive cuando parte de esa falta de ajuste sea inevitable, voluntariamente o no, ya que en ocasiones los responsables de la ejecución de los mandatos legislativos o administrativos interpretan el mandato de forma diferente a los autores. Además, la información relativa al no cumplimiento de los objetivos de la política desarrollada puede indicar la existencia de un problema, de forma que los supervisores del programa deberán diagnosticar qué está fallando y cuáles son las acciones pertinentes. Por último, existe la posibilidad de que las consecuencias imprevistas de una política pública generen un problema; en este sentido, las consecuencias negativas que se anticiparon pueden crear problemas, pero las



consecuencias que no se anticiparon pueden tener un impacto mayor puesto que no se calcularon, y ello puede implicar la existencia de un diseño deficiente y que, por tanto, debe ser examinado y corregido (Kingdon, 1995: 101-103).

Kingdon intenta dar respuesta a porqué algunos problemas desaparecen o no logran mantenerse en un lugar relevante de la agenda, siendo desplazados por otros. Para el autor, los problemas dejan de interesar a la población por diversas razones, entre ellas la existencia inevitable de ciclos de atención difíciles de mantener por mucho tiempo, incluso en el caso de problemas que se detectan como relevantes. Varias son las conclusiones a las que llega a partir de su investigación. En ocasiones los problemas salen de la agenda porque el gobierno cree que los ha resuelto con la aprobación de una normativa. Sin embargo no todos los problemas se resuelven vía decreto, es más, pueden generarse problemas nuevos en el curso de la implementación de decretos, instrucciones y normativas. Otro de los motivos puede ser que en el proceso de concentración de estos nuevos problemas, la política pública como alternativa al problema no logre parte de sus objetivos. Finalmente, aunque Kingdon ponga en duda que los funcionarios gubernamentales tengan verdaderas capacidades para resolver los problemas, éstos pueden sentir que realmente lo hicieron al aprobarse determinadas resoluciones. Si es así, su atención irá hacia otro lugar y el tema saldrá de sus agendas (Kingdon, 1995: 103).

Sin embargo, no sólo desaparecen los problemas por haber sido resueltos o aparentemente resueltos. Algunos problemas, a pesar de que no se solucionan, desaparecen del panorama. El fracaso en su resolución también puede dar lugar a su evaporación como una cuestión destacada de la agenda. Se necesita tiempo, esfuerzo, movilización de actores y recursos políticos para mantener una cuestión destacada en la agenda. Los problemas a menudo se desvanecen de la vista pública, pues el corto periodo de conciencia del problema y el optimismo para solucionar el mismo dan paso a la comprensión de los costes financieros y sociales de la acción. De la misma manera que la gente se impresionó con un problema, la consciencia de los sacrificios, perturbaciones y costes necesarios derivan en la pérdida de entusiasmo para abordarlo. Incluso cabe afirmar que el interés o desinterés por un tema puede ser un tanto caprichoso, en tanto que se esté frente a un relato novedoso, y en la medida que se disipa esa condición de

novedad, independientemente de la importancia de un asunto determinado, éste puede llegar a convertirse en aburrido y, así que aunque la idea todavía puede ser potencialmente útil, la moda sobre el mismo puede haber pasado (Kingdon, 1995: 105).

## **B) Elaboración de alternativas**

Para entender la corriente de políticas (*political stream*) cabe imaginar que las ideas flotan en una comunidad de especialistas compuesta por miembros del poder legislativo, personal cualificado de la administración, académicos, investigadores, analistas de grupos de interés, etc. Cada uno de estos especialistas tiene sus concepciones sobre las líneas de actuación en un determinado asunto y, en función de ello, elabora propuestas tratando de transmitir sus ideas mediante la circulación de las mismas a través de la publicación de artículos, la presentación de borradores de normativas y la celebración de encuentros formales e informales con representantes políticos y funcionarios de alto nivel con capacidad de influencia. El proceso de transmisión de ideas y propuestas es permanente y suele tardar años. De ahí que Kingdon asemeje el proceso de producción de ideas al proceso de selección natural biológico (*primeval soup*)<sup>4</sup>. Es decir, sólo algunas ideas persisten y logran sobrevivir por estar dotadas de unas características que les permiten mantenerse vivas hasta convertirse en soluciones viables. Las ideas, a pesar de poder ser factibles, no tienen garantizado el hecho de convertirse en preeminentes y pueden llegar a desvanecerse. Que perduren puede suponer un largo proceso de ablandamiento (*softening up*) que implica que dichas ideas deben ser circuladas y expuestas para que comunidades de expertos, representantes políticos y ciudadanía comiencen a hacerse eco de las mismas, reaccionen ante ellas o las modifiquen para que puedan volver a flotar en ese cóctel de ideas y, finalmente, puedan convertirse en la alternativa válida y disponible (Kingdon, 1995: 116-117).

### **a) Comunidades de expertos y *primeval soup***

Las comunidades de expertos son participantes relativamente ocultos y especialistas en un tema, pertenecientes tanto a la administración como al sector privado, que incluyen

---

<sup>4</sup> En el proceso de selección natural muchas moléculas flotaban en el entorno antes de que la vida llegase a ser, es lo que los biólogos llaman la *primeval soup* o ‘sopa primigenia’.

burócratas, investigadores, académicos, consultores o analistas que trabajan para grupos de interés, entre otros. Las comunidades de expertos pueden ser locales, nacionales e internacionales y construyen corrientes doctrinales; aunque actúen con independencia de los acontecimientos políticos, si se ven afectados por ellos suelen reaccionar ante los mismos. Estas comunidades no necesariamente tienen un comportamiento homogéneo, hecho que da lugar a diferentes formas de funcionamiento. Algunas comunidades son extremadamente cerradas y están muy unidas, mientras que otras son más diversas y desintegradas. La consecuencia de la fragmentación de la comunidad de especialistas es la fragmentación de las alternativas políticas por ellas producidas. Cuanto mayor sea el grado de división en la comunidad de especialistas, más segmentación se producirá en las alternativas disponibles. Frente a ello, las comunidades más estrechamente unidas generarán perspectivas, orientaciones y formas de pensar comunes (Kingdon, 1995: 117-122).

Dentro de las comunidades de expertos las ideas que flotan en el ambiente pueden confrontarse o combinarse de diferentes maneras. Los cambios en el *primeval soup* no sólo se producen a través de la aparición de nuevos elementos, sino que con frecuencia son el resultado de la recombinación de elementos previamente existentes. Aquí, un gran número de especialistas elaboran propuestas que desearían que fuesen consideradas seriamente para convertirse en parte del conjunto de opciones destacadas que puedan ser la base de las decisiones políticas. En este contexto, algunas propuestas son rápidamente descartadas, sobre todo si se estima que son demasiado excéntricas. Otras, sin embargo, sobreviven, aunque generalmente de una forma modificada en relación a su concepción original, debido a la influencia de otras ideas. Es por ello que en esta etapa es más fácil que se incluyan un número mayor de alternativas, que en la fase de decisión final, donde solo sobreviven un pequeño grupo de ideas, que con carácter general serán aquellas mejor fundamentadas, pero sobre todo, que logren conectar con la forma de percibir el problema por parte de la sociedad (Kingdon, 1995: 124-127).

## b) Ablandamiento

El *softening up* es el proceso de ‘ablandamiento’ del sistema donde especialistas y participantes interesados presionan para que su idea sea considerada. Aunque las ideas flotan libremente a través del *primeval soup*, los especialistas no permiten que el proceso donde flotan las ideas sea totalmente aleatorio. Éstos intentan suavizar las ideas para el entorno de las comunidades políticas, caracterizado por determinadas inercias y resistencias a los cambios, y para el público en general, utilizando sus ideas para construir la aceptación de su propuesta. Ello es crucial, pues si en el corto plazo surge la oportunidad de introducir la propuesta, ésta tendrá más posibilidades de ser aceptada si el terreno ha sido previamente abonado y se realizó convenientemente el proceso de ablandamiento de la alternativa. Sin en esa labor previa, es muy probable que la propuesta no llegue a ser considerada (Kingdon, 1995: 128).

Llegado a este punto, se plantea la cuestión de cómo de esa comunidad de expertos emergen los emprendedores de las políticas (*policy entrepreneurs*) que tratan de introducir, suavizar y ablandar las ideas. En esta fase de *softening up*, de introducción de las ideas, se trata de educar a los representantes políticos y a la sociedad en su conjunto. Para ello existen múltiples mecanismos. Los burócratas, por ejemplo, disponen de canales privilegiados, por lo que si deciden promover una idea, se aseguran de que aparezca en todos los discursos que elaboran o utilizan la emisión constante de estudios, informes y otros documentos, bien por mandato o por cuenta propia, para lograr la preparación de la comunidad política sobre esa propuesta como futura línea de actuación, incluso a pesar de que los resultados inmediatos no sean evidentes. Aunque el ablandamiento a veces también consiste en hacer un testeo previo mediante globos sonda, donde los burócratas lanzan una idea en un discurso para ver cuál es la reacción tanto en el gobierno como en la ciudadanía (Kingdon, 1995: 129).

Para Kingdon este ablandamiento parece ser necesario antes de considerar seriamente una propuesta, ya que en muchas ocasiones propuestas interesantes caen en saco roto por aparecer antes de que el público en general, el público especializado o las comunidades de expertos estén preparados para escucharla. Así, aunque dichas

propuestas podrían ser rescatadas, sólo será posible después de un período donde se haya allanado el camino. Para convertirse en una base para la acción, la idea debe tanto arrastrar a una comunidad política de expertos como perdurar en la misma (Kingdon, 1995: 130).

c) Criterios para la supervivencia y restricciones del sistema

Si bien muchas de las ideas que flotan en el *primeval soup* pueden persistir, también es constatable que al exponerse a un sistema de selección natural encuentran criterios que permitirán que algunas ideas sobrevivan y prosperen, mientras otras no. Los criterios de selección de las ideas operan como patrones de selección del ruido inicial. Así, aunque los inicios de una idea o propuesta puedan ser algo fortuitos, la supervivencia no lo es. Como en cualquier sistema de selección, hay un patrón de elementos que la sostiene. Si una propuesta inicialmente falla estos test, podría ser reelaborada o combinada con otros elementos y reflotar de nuevo, pero una propuesta que sobrevive generalmente satisface los criterios de viabilidad técnica, aceptabilidad y anticipación ante futuras limitaciones (Kingdon, 1995: 131).

Los partidarios de una propuesta deben profundizar en los detalles y en los tecnicismos, eliminando gradualmente inconsistencias, atendiendo a la viabilidad de la aplicación y la especificación de los mecanismos reales por los cuales la idea tendría lugar en la práctica. Los responsables políticos no siempre anticipan todas las consecuencias que se derivarán de sus acciones, que a menudo son extremadamente complejas. Para que una idea sea considerada seriamente, los responsables políticos deben creer que una propuesta funcionará en caso de aprobarse, incluso aunque la idea parezca descabellada en retrospectiva. Sin esa creencia en la viabilidad técnica de la propuesta, es probable que no sobreviva hasta el punto de ser considerada seriamente como alternativa (Kingdon, 1995: 131).

Las propuestas que sobreviven en la comunidad política deben ser compatibles con los valores de los especialistas. Es evidente que no todos los especialistas comparten los mismos valores y que existen numerosas instancias de desacuerdo entre los expertos. Estos desacuerdos pueden llegar a trasladarse a la arena política, aunque la mayor parte de los especialistas tienen una visión análoga del mundo, por lo que aprueban o

desaprueban enfoques similares a los problemas. En todo caso, si una propuesta no encaja con los valores de los especialistas, ésta tiene menos posibilidades de sobrevivir que las que sí lo hacen (Kingdon, 1995: 133).

Las comunidades políticas saben que, a medida que una iniciativa se desarrolla, algunas limitaciones se impondrán sobre la propuesta, llegando a cuestionar en ocasiones seriamente la viabilidad de la misma. Estas restricciones del sistema son los límites provistos fundamentalmente por la corriente política (presupuestos, reglas de procedimientos, jurisdicciones y competencias, etc.). Algunas ideas no logran obtener una audiencia seria, incluso entre los especialistas, debido a que su futuro puede parecer sombrío, mientras que otras sobrevivirán porque los especialistas presumen que lograrán superar las futuras pruebas que las puedan cuestionar, fundamentalmente las derivadas del presupuesto y de la aceptación pública. Por ello, los miembros de la comunidad política prestan especial atención a esas previsibles limitaciones. Así, en relación a la restricción de presupuesto, los expertos saben que en algún momento a lo largo de la vida de la propuesta deberá ser demostrado que tiene un coste tolerable, y en relación a su aceptación pública, deberán conseguir la conformidad pública, esto es que, en última instancia, su propuesta sea aceptable por la ciudadanía, entendida como conjunto de la sociedad, sector específico o ambos a la vez, según el contexto y el tipo de propuesta (Kingdon, 1995: 137-138).

d) Breve lista de ideas, consenso emergente y alternativa disponible

Tras el *primeval soup*, el proceso de ablandamiento de las ideas y el tamiz de los criterios para su supervivencia, la comunidad de expertos produce una breve lista de ideas. En esta fase no suele haber una sola propuesta en la cual todos los especialistas estén de acuerdo, pero sí surge un conjunto de alternativas a ser consideradas seriamente. Es probable que esta breve lista de ideas se conforme con la transformación de algunas ideas originales, o bien sea el resultado de la combinación con otras, que sirven al propósito de mejorar las propuestas originales. Con ello se consigue que la comunidad se alinee en torno a ciertas líneas de análisis, que la lista de alternativas a través de los debates se reduzca y que algunas ideas surjan como las principales candidatas para ser las

alternativas de más seria valoración.

A través del proceso descrito puede advertirse como el consenso se extiende a través de una comunidad de expertos mediante la difusión de las ideas que, de una parte, generan la conciencia de los problemas y, de otra, ofrecen un acuerdo sobre las soluciones y propuestas. Una vez que eso se produce, un efecto contagio sucede dentro de la comunidad de expertos, donde poco a poco la idea se va asumiendo y las personas que están en el gobierno o cerca del mismo comienzan a tener una 'conciencia cada vez mayor' o a notar un 'aumento de la sensación'. Después de un cierto grado de difusión, se produce un punto de despegue donde muchas personas debaten la propuesta o idea y en ese momento un público cualificado y bien informado conforma el consenso emergente, haciendo referencias a un 'sentimiento generalizado'. Es lo que Kingdon denomina el efecto moda o de 'subirse al carro' (*bandwagons and tipping*), (Kingdon, 1995: 139).

Frente a este efecto de consenso emergente, se produce una reacción de las personas que se encuentran próximas a los gobiernos y que se sienten cómodas con la idea de que nada de lo señalado es realmente nuevo. Kingdon alega que, si las alternativas no cambian por mutación pero sí por recombinación, habrá elementos que siempre serán familiares en las nuevas combinaciones. De esta manera, y puesto que el proceso de ablandamiento es crítico, sería extremadamente sorprendente que nuevas ideas aparecieran de repente en la escena de la política e inmediatamente obtuvieran reconocimiento. De modo que, antes de que una cuestión pueda alcanzar una posición sólida en la agenda de decisiones, la alternativa viable debe estar disponible para que los responsables puedan tenerla en cuenta. Sin embargo, la disponibilidad de una alternativa viable no es condición suficiente para lograr una alta posición en una agenda de decisiones, ya que muchas de ellas pueden ser descartadas tiempo antes de que se ponga atención en ella. La posibilidad de que un problema suba a la agenda gubernamental aumenta exponencialmente si la solución está anexionada al problema, es decir, si el problema viene acompañado de la solución (Kingdon, 1995: 140-143).

### C) La corriente política

La corriente política hace referencia a los procesos políticos concretos, como por ejemplo los cambios políticos por las elecciones, las actividades de grupos de presión, los cambios del personal en la administración, etc. Estos factores determinan en gran medida que una solución se implemente o no.

#### a) Clima político

El clima político (*national mood*) incide en la receptividad que pueda alcanzar una propuesta y se relaciona con los cambios en la opinión pública, las movilizaciones de la población, los asuntos que captan la atención de los medios de comunicación, etc. Los representantes políticos son llamados a valorar ese clima político en cada momento y apostar por políticas que tengan acogida social. El clima político encuentra diversas denominaciones: estado de ánimo nacional, clima en el país, cambio en la opinión pública, o movimiento social amplio. La idea común a estas etiquetas no es otra que un número elevado de personas en el país prestan atención a una cuestión, reflexionan sobre ella y alcanzan percepciones comunes que pueden tener un importante impacto en las agendas políticas. Se habla, por tanto, de un estado de ánimo nacional o clima político como una sensación que la gente en el gobierno a su alrededor intuye, aunque ésta no sea siempre fácil de concretar o especificar. Por ello, preguntas del tipo ‘¿de dónde viene este estado de ánimo?’ son procedentes (Kingdon, 1995: 148).

Kingdon afirma que el estado de ánimo no reside necesariamente en la ciudadanía con carácter general. Pero, si el estado de ánimo nacional no reside en el público de masas, entonces, ¿dónde se puede encontrar? ¿Y cómo lo perciben los gobernantes? Generalmente, los responsables políticos y los que están cerca de ellos tienen diversos cauces para captar los problemas que existen en el ambiente, desde la escucha a grupos de interés, la lectura de las editoriales de los periódicos, la impartición de charlas, el diálogo con actores relevantes en reuniones, la observación del tratamiento de determinados acontecimientos por medios generales y especializados, las relaciones con activistas del partido y con otros políticos conectados con la realidad. Todo ello conforma las fuentes imprescindibles para testar el estado de ánimo o clima social en un momento



determinado (Kingdon, 1995: 149).

b) Intereses organizados en torno a una política

Hablar de intereses organizados supone hacer referencia a partidos, grupos de presión, asociaciones y personal de la administración que puede operar como estímulo o freno para un cambio de política. Para centrar la comprensión de este cálculo es relevante tener en consideración los conceptos de consenso y conflicto entre los intereses organizados. Si un determinado sector de personas relevantes observa a su alrededor y percibe que los grupos de interés u otros intereses organizados apuntan en la misma dirección, ese ecosistema le proporciona un poderoso impulso para avanzar en esa dirección. Por el contrario, si hay una intensa oposición a una propuesta, los responsables políticos a menudo darán marcha atrás frente a una previsible votación donde puede existir una intensa oposición. Una de las razones para no impulsar una iniciativa es que, si amplios sectores van a estar descontentos, es probable que la medida no valga la pena (Kingdon, 1995: 150-151).

c) Cambios en el Gobierno y en la Administración

El tercer elemento principal de la corriente política comprende los eventos que se producen dentro del gobierno. Las ventanas de oportunidad pueden abrirse o cerrarse dependiendo de quién esté al frente de los gobiernos, administraciones e instituciones, de ahí la importancia de las personas, la competencias y la creación del consenso.

Los cambios en personas clave dentro de actores gubernamentales pueden producir cambios en la agenda, bien por el cambio de prioridades o el impulso de nuevos temas por parte de un burócrata, bien por un cambio de personas que aportan nuevas prioridades a la agenda o alteran las existentes. La cuestión competencial es una variable importante, ya que el conflicto de competencias puede ser una barrera para la inserción de una temática en la agenda política. Muchas cuestiones importantes capaces de ser constitutivas de una agenda potencial, en ocasiones no son objeto de la debida atención resultado de conflictos competenciales entre gobiernos y administraciones (Kingdon, 1995: 153). La creación de consenso en la corriente política se basa en gran medida en

los procesos de persuasión y difusión. Si una idea sobrevive al escrutinio del conjunto de criterios para la supervivencia, se difunde dentro de la comunidad política y logra reconocimiento. Por lo tanto, aunque exista consenso en la corriente política, el proceso por el que se logra es radicalmente diferente; en contraste con el énfasis en la persuasión propia de la corriente de políticas (*policy stream*), la creación de consenso de la corriente política (*political stream*) se rige por la negociación. Aquí las coaliciones se construyen a través del otorgamiento de concesiones, esto es, a cambio del apoyo a la coalición los miembros desean obtener beneficios. Unirse a la coalición no ocurre por haber sido persuadido de la virtud de la alternativa, sino porque se teme que de la falta de adhesión resulte la privación de los potenciales beneficios de la participación. En esta etapa la propuesta ya ha sido discutida y perfeccionada en la corriente de políticas por las comunidades de expertos, por lo que los actores tratan de llegar a una coalición ganadora. Manejando el símil de Kingdon, una buena idea es como una bola de nieve que al rodar capta adeptos. En esta corriente es imprescindible el proceso de negociación que implica que las posibles adhesiones a una coalición son el resultado de promesas de algún beneficio o producto del temor a quedarse sin su parte de los beneficios en caso de éxito (Kingdon, 1995: 159-162).

#### 4. EL ACOPLAMIENTO DE LAS CORRIENTES: LA VENTANA DE OPORTUNIDAD

Según Kingdon, cada una de las corrientes descritas es independiente. A pesar de ello, hay momentos donde las tres corrientes confluyen y se acoplan. Las ventanas de oportunidad (*policy windows*) se abren en la corrientes de los problemas o de política, de modo que hay ventanas de problemas y ventanas de política. Ambas son escasas y no están abiertas por mucho tiempo, por lo que si se pierde una oportunidad hay que esperar hasta la siguiente. Cuando se abren, cargan el sistema de problemas y propuestas, obligando a movilizar recursos para mantener la presión para que no se cierre antes de tiempo (Ramírez, 2007).

## A) Ventana de oportunidad

La ventana de oportunidad es una ocasión para que los defensores de propuestas impulsen sus soluciones o llamen la atención sobre los problemas que ellos estiman deben ser considerados. De hecho, los expertos y emprendedores de políticas suelen estar vigilantes, cerca del gobierno, esperando a que los problemas surjan y puedan aplicar sus soluciones o están pendientes del desarrollo de una corriente política que puedan utilizar en su beneficio. En ocasiones las ventanas son predecibles, como por ejemplo en la renovación de un programa, hecho que crea una oportunidad para muchos de los participantes de impulsar su proyecto y llevarlo a consideración. Por el contrario, en otras ocasiones las ventanas son impredecibles. En estos casos los emprendedores de políticas deben estar preparados, su propuesta debe estar lista y su problema bien documentado, para que la oportunidad no pase de largo (Kingdon, 1995: 165).

Las tres corrientes independientes se unen en los momentos críticos. Un problema es reconocido, una solución es desarrollada en la comunidad política, un cambio político hace que sea el momento adecuado para el cambio de políticas, las restricciones potenciales no son graves y entonces se produce el acoplamiento. En la jerga espacial, los *space shots* presentan la oportunidad de un lanzamiento al espacio. Los planetas de destino están alineados correctamente, pero no suelen permanecer así por mucho tiempo. Este lanzamiento debe tener lugar cuando la ventana está abierta para que la oportunidad no se escape. Una vez perdida la oportunidad, puede volver a ocurrir, pero en el ínterin astronautas e ingenieros espaciales deben esperar hasta que ésta se reabra. Del mismo modo, sucede con la ventana de oportunidad en los sistemas políticos: la ventana de oportunidad abre la posibilidad de acción sobre determinadas iniciativas, pero ésta solo permanece abierta durante cortos períodos. Si los participantes no pueden o no toman posiciones de ventaja cuando se abren estas ventanas de oportunidad, deberán esperar hasta que la próxima ocasión se presente. Al abrirse ventanas en la corriente de los problemas o en la corriente de la política, ambos tipos de ventanas de oportunidad van a demandar diferentes alternativas de la corriente de políticas. Si los responsables políticos se convencen de que un problema es urgente, el alcance en la corriente política de una alternativa razonable se puede ver como una solución. Por contra, si los políticos adoptan

un tema para su administración que puede servir para su reelección u otros fines, lo que necesitarán de la corriente de políticas no serán soluciones sino propuestas (Kingdon, 1995: 165).

Pero, ¿por qué razón las ventanas de oportunidad se abren y se cierran? Básicamente, una ventana se abre debido a cambios en la corriente política o porque un nuevo problema capta la atención de los funcionarios gubernamentales y su entorno. Un cambio de administración es probablemente la ventana de oportunidad más evidente en el sistema político. Una vez que se abre la ventana, como ha quedado señalado no lo hace durante mucho tiempo, las razones que lo explican pueden sintetizarse en: i) los participantes sienten que ya se ha abordado el problema de manera suficiente a través de una decisión o de un acto; ii) los participantes no han logrado conseguir que la acción se lleve a cabo; iii) se han producido cambios en las circunstancias que motivaron que la ventana de oportunidad se abriese; y iv) si un cambio en el personal abrió una ventana de oportunidad, otro nuevo cambio en el personal puede afectar nuevamente a la ventana de oportunidad (Kingdon, 1995: 166).

## **B) Acoplamiento**

En el proceso de acoplamiento, lo más frecuente es que las propuestas se encuentren cerca de la corriente política y en un momento determinado, bien porque sea vista como una solución a un problema o porque los responsables políticos encuentren la adecuada financiación para su puesta en marcha. Cuando se abre una ventana, los defensores de una propuesta perciben su oportunidad y se apresuran a obtener ventaja de ello. Los problemas o la política por sí mismos pueden configurar la agenda gubernamental, pero la probabilidad de que un elemento escale en la agenda de decisión aumenta exponencialmente si las tres corrientes se unen. Una alternativa que flota en la corriente política, por ejemplo, puede acoplarse tanto a un problema preeminente como un evento en la corriente política. Si una alternativa se une a un problema como una solución, entonces esa combinación es muy probable que también encuentre apoyo en la corriente política. Del mismo modo, si una alternativa es aprovechada por los responsables políticos, se justifica como una solución a un problema real. Ninguna de las corrientes es

suficiente por sí misma para mantener firme un asunto en la agenda de decisiones. Si uno de los tres elementos se pierde —si la solución no está disponible, si no se identifica el problema o no es lo suficientemente convincente, o el apoyo no es remitido por la corriente política— entonces el lugar en la agenda decisión será fugaz. Si el acoplamiento no se realiza de forma rápida, la ventana puede cerrarse (Kingdon, 1995: 173-178).

Es en este punto donde la intervención de emprendedores de políticas es esencial, pues son los artífices de que el acoplamiento de las corrientes suceda ejerciendo influencia en las diferentes alternativas existentes, tratando de conectar dichas corrientes en el momento oportuno. Sin embargo, los emprendedores hacen algo más que presionar sobre sus propuestas o sus concepciones de los problemas: se encuentran a la espera de que una ventana de oportunidad se abra y juegan un papel central en el acoplamiento de las corrientes. Tomando la analogía del surfista, los emprendedores están dispuestos a remar y prepararse para subir a la ola usando sus fuerzas para mejorar las posibilidades de éxito, aunque haya elementos que escapan a su control. El esfuerzo contribuye al éxito de que su propuesta o solución sea la elegida (Kingdon, 1995: 179-181).

Con carácter general las ventanas de oportunidad son difícilmente predecibles, por lo que los emprendedores de políticas deben desarrollar sus ideas, experiencias y propuestas mucho antes de que la ventana se abra. Sin ese trabajo previo será difícil que se encuentren en una posición ventajosa cuando la ventana se abra, de modo que los emprendedores de políticas deben estar listos en cualquier momento y ante cualquier crisis que pueda generar una oportunidad. Sin la presencia de los emprendedores de políticas, la vinculación de las corrientes puede que no tenga lugar nunca. Por lo tanto, pueden existir buenas ideas desperdiciadas por falta de alguien que las defienda, problemas que no son resueltos por falta de soluciones y acontecimientos políticos no capitalizados por falta de desarrollo de propuestas creativas (Kingdon, 1995: 184-190).

### **C) Aparición de las ventanas y desbordamientos**

Si bien es cierto que un número importante de potenciales asuntos merecen ser considerados seriamente para su incorporación en la agenda, muchos de ellos no llegan a ocupar un papel relevante debido a la enorme concurrencia de asuntos a tratar en un

contexto o momento determinado. El sistema inevitablemente cuenta con límites para procesar una multitud de temas. A pesar de que la aparición de ventanas sea imprevisible, los ciclos regulares de política constantemente pueden suponer la apertura o el cierre de oportunidades. En este caso los emprendedores no necesitan forzar la agenda, ni presionar para que el asunto no sea desplazado por otras múltiples cuestiones, ya que la renovación cíclica de las políticas hará ese trabajo por ellos.

Finalmente, una cuestión que hay que tener en consideración es que la aparición de una ventana de oportunidad en un área habitualmente aumenta la probabilidad de que se abran otras ventanas para asuntos vinculados al tema originario. Kingdon se refiere a esa circunstancias a través del término *spillover*, describiéndolo como una suerte de desbordamiento que favorece la aparición de ventanas que afectan a políticas adyacentes. En ocasiones, este *spillover* es consecuencia de la aprobación de una legislación o la adopción de una decisión que sienta un precedente y logra que un nuevo principio se establezca. Por ello, a partir de ese momento la política pública en una determinada materia ya no será igual y los incrementos sucesivos generados en base a ese nuevo principio provocarán un cambio de mentalidad sobre la forma de entender y hacer las cosas. No obstante, establecer un nuevo principio no implica que automáticamente las políticas adyacentes adopten un nuevo giro dramático, al menos en el corto plazo. El paso podría parecer pequeño, pero la importancia del evento radica en su configuración como precedente, por lo que a partir del mismo los argumentos futuros de la política y las políticas se establecerán en términos diferentes. Una vez que el precedente se establece en un espacio, éste puede ser utilizado para promover un cambio similar en una temática vinculada y, al igual que con la ventana originaria, es importante actuar rápidamente. El éxito original crea efectos indirectos tremendamente poderosos, de ahí que se anime a los emprendedores a trasladarse al siguiente asunto disponible, ya que las coaliciones son transferidas, los argumentos válidos se reeditan y los precedentes pueden afianzar los cambios en la política (Kingdon, 1995: 190-194).

En síntesis, el modelo de análisis que ofrece Kingdon permite observar el fenómeno del cambio de las políticas desde una perspectiva concurrente en el que los problemas, las ideas y la política coexisten de manera independiente, y dónde una ocasión propicia abre

una ventana donde las tres corrientes pueden confluir y dar lugar a un cambio o restricción en una política pública. Se ha considerado interesante incorporar al final de este capítulo un cuadro adaptado con aquellas preguntas clave para el análisis del cambio de las políticas públicas basado en la investigación de Caroline Charles sobre el proceso de cambio en las políticas de educación en artes aplicadas y tecnologías en Ontario (Canadá), puesto que permite ordenar y simplificar el estudio del fenómeno que se desea entender y sirve de marco analítico por las cuestiones que plantea para explicar el cambio o restricción de una política determinada (Charles, 2011: 76).

**Figura 6: Preguntas clave para el análisis del cambio de políticas basado en el ECM**

<b>PROBLEMAS-AGENDA</b>	<b>POLÍTICAS-IDEAS</b>	<b>POLÍTICA-DECISIONES</b>	<b>ACOPLAMIENTO</b>
<p>¿Cuál es la naturaleza del problema para el que se estaba buscando una solución?</p> <p>¿Qué condiciones y antecedente contextualizan para el problema?</p> <p>¿Qué indicadores se utilizaron en la definición del problema?</p> <p>¿Qué investigación se llevó a cabo para descubrir la naturaleza del problema?</p>	<p>¿Qué ideas y propuestas existían en la comunidad de expertos?</p> <p>¿Qué conocimientos especializados existían en la materia?</p> <p>¿Fue la comunidad política limitada a las partes interesadas o fue la investigación del entorno mediante comunidades epistémicas?</p> <p>¿Qué ideologías políticas fueron dominantes en el momento del</p>	<p>¿Cuál era el estado de ánimo del público en el momento del cambio de política?</p> <p>¿Cómo clima social influyó en la agenda política?</p> <p>¿Cómo se organizaron los intereses?</p> <p>¿Quiénes fueron los principales defensores? Y ¿cómo expresaron su mensaje?</p>	<p>¿Qué condiciones específicas existía en el momento del cambio de probablemente abrió ventana política abierta?</p> <p>¿Hubo un cambio en la cultura política antes o en el momento del cambio?</p> <p>¿La ventana de oportunidad se abrió debido a una crisis, un cambio en el estado de ánimo por una elección, o elección inminente?</p>

<p>¿Qué rol jugó la investigación en el proceso político?</p> <p>¿Quiénes fueron los actores más importantes se vieron afectados por el problema?</p> <p>¿Fueron objetivos de la política apropiados considerando el problema?</p> <p>¿Fue el problema (para el que se estaba buscando una solución) el problema adecuado?</p>	<p>cambio de política?</p> <p>¿Compartía la comunidad de expertos creencias similares o hubo disenso con respecto a la naturaleza del problema o de la solución?</p> <p>¿Quiénes fueron los principales emprendedores de políticas)?</p> <p>¿Expertos, líderes, responsables políticos (o una combinación)?</p> <p>¿Qué intereses fueron promovidos y por quién?</p> <p>¿Quién determinó si la solución propuesta era viable y aceptable?</p>	<p>¿Qué partido político que estaba gobernando?</p> <p>¿Cuál fue la posición del gobierno en el momento del cambio?</p> <p>¿Qué impacto tuvo el partido político gobernante sobre el cambio de política?</p>	<p>¿Cómo se acoplaron las corrientes?</p> <p>¿El acoplamiento se hizo gradualmente o fue un acoplamiento oportunista?</p> <p>¿Cómo se hizo avanzar la agenda?</p> <p>¿Por quién?</p>
--	---	--	--

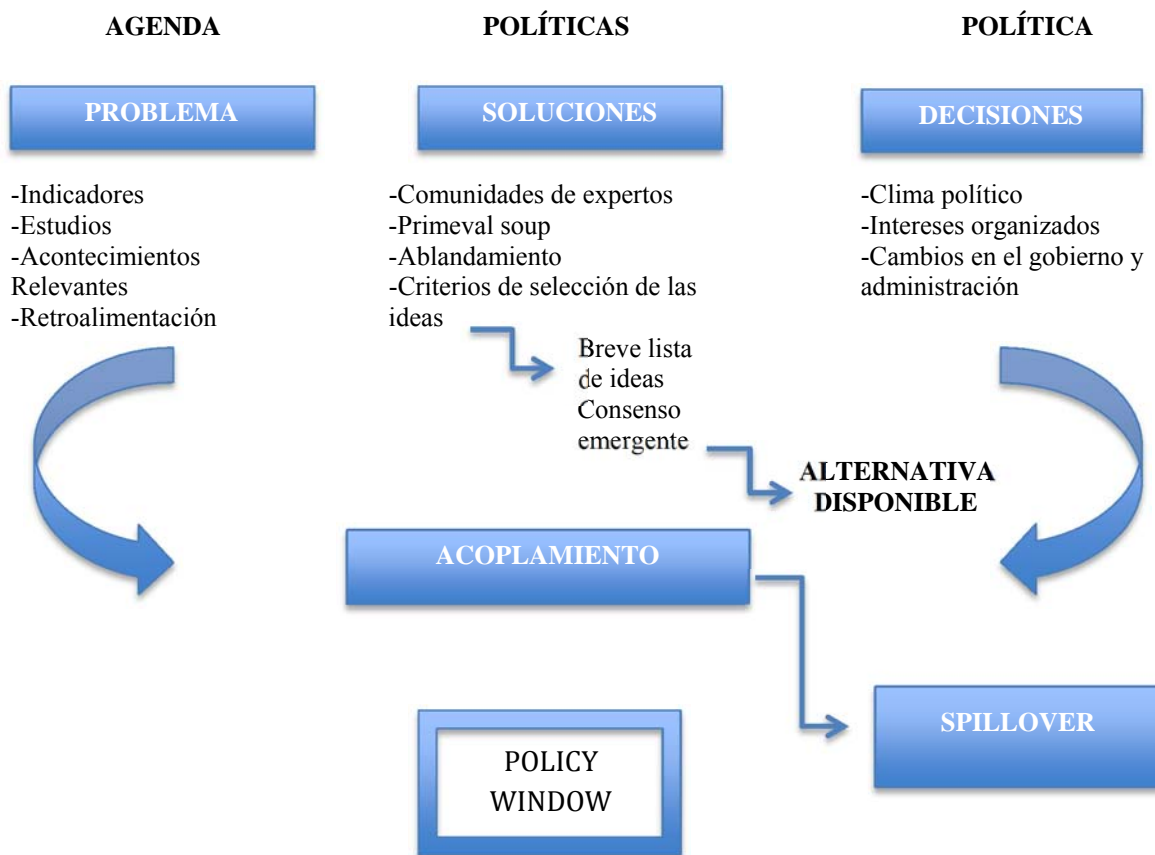
Fuente: Elaboración propia en base a Charles, 2011.

Como se ha expuesto a lo largo de estas páginas, el modelo del ECM del proceso de formulación de políticas públicas identifica tres corrientes: i) los problemas, cuando una cuestión política capta la atención de los responsables políticos; ii) las políticas, donde las ideas y las propuestas se encuentran, generadas por una comunidad de expertos y emprendedores resultado de una acumulación de conocimientos que apuestan para que sus ideas sean aceptadas como soluciones siempre que sean viables y aceptables; y iii) la política, donde las políticas se llevan a cabo por cambios producto de procesos políticos tales como las elecciones, las actividades de grupos de interés, la opinión pública y cambios en la administración. En el ECM, si estas tres corrientes convergen proporcionan el impulso, la restricción o la reacción al cambio. El clima en el gobierno y el grado de



receptividad pueden explicar la importancia del problema y de las opciones políticas, pero se trata de una causalidad múltiple. Es la combinación de las tres corrientes lo que explica el cambio de políticas; sin embargo, para que el cambio de política se produzca, el acoplamiento de las tres corrientes debe tener lugar en el momento oportuno, es decir, cuando se abre una ventana de oportunidad. Para Kingdon la clave para entender el cambio de política no es la idea, pero sí lo que la hace afianzarse y crecer, por ello, las ventanas de oportunidad son la ocasión para que se desarrollen iniciativas políticas o para que se produzcan cambios en la manera en la que hasta ese momento se formulaban. Es difícil predecir exactamente cuándo una ventana se abrirá, aunque lo más probable es que lo haga cuando se produzcan cambios en la política (por ejemplo, cuando hay un cambio de gobierno o un cambio en el ánimo de los ciudadanos). El cierre puede ocurrir cuando los interesados, afectados o ciudadanía en su conjunto siente que el problema se ha abordado suficientemente, las soluciones no han conseguido dar respuesta, el evento que provocó la apertura ha pasado, el personal ha cambiado, cuando la solución a un problema no está disponible, e incluso cuando los emprendedores de políticas pueden optar por no tomar ventaja de la existencia de una ventana abierta por temor a la imprevisibilidad del resultado. Estas ventanas pueden abrirse y cerrarse en cualquier momento, y cuando están abiertas no permanecer así por mucho tiempo, de ahí la importancia de los emprendedores e impulsores de políticas, éstos juegan un papel crucial en el acoplamiento de procesos. Son fundamentales para la comprensión del cambio de política. Los emprendedores políticos son persistentes, y con conexiones políticas. Vinculan problemas con las posibles soluciones. Su función es la unión de las corrientes, ya sea mediante la promoción, la puesta en valor o la negociación. El siguiente diagrama se reflejan los diferentes elementos que conforman la contribución de referencia al ámbito de la ciencia política de Kingdon con la creación de su teoría del cambio en las políticas a través del ECM y la ventana de oportunidad recogido en su obra *Agendas, Alternatives and Public Policies* que servirán de referencia analítica para el estudio del gobierno abierto en España, que se abordará en el siguiente capítulo.

**Figura 7: Diagrama del Enfoque de las Corrientes Múltiples (II)**



Fuente: elaboración propia

## 5 LIMITACIONES DEL ENFOQUE DE LAS CORRIENTES MÚLTIPLES

Tras la publicación de la primera edición en 1984, diversos autores señalaron algunas de las limitaciones a las que se enfrenta el ECM. Neilson señala que este enfoque sólo puede tener éxito en sistemas democráticos occidentales y que su aplicación en Estados no democráticos donde no hay intereses organizados es dudosa (Neilson, 2001). Por su parte, Zahariadis observa que los resultados del modelo de Kingdon pueden ser impredecibles, ya que el ECM no es de suma cero, la especialización puede ampliar la agenda y los partidos políticos deberían tener más peso en función del contexto de cada país. Zahariadis aplicó el ECM para analizar las políticas de telecomunicaciones y de

privatización en dos países, Inglaterra y Francia, y llegó a la conclusión de que el modelo puede aplicarse fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, la investigación en el Reino Unido sugiere que se debe modificar para asignar mayor importancia a los partidos políticos y ampliar el modelo para incluirles en todo el proceso de la formulación de la política (Zahariadis, 1992; Charles, 2011).

Desde una perspectiva constructivista, Stone se interesa por cómo las situaciones son causadas por la acción humana y son susceptibles de ser modificadas por la intervención humana. Su contribución añade otra dimensión al ECM y muestra que tanto las ideas como los intereses tienen peso causal. Además, la presentación de los intereses determina si los temas entran o no en la agenda política, de ahí el papel de los emprendedores de políticas; la forma como éstos envuelven y presentan la solución puede contribuir de manera determinante al movimiento exitoso a la agenda de toma de decisiones (Stone, 1989).

La segunda edición de *Agenda, Alternatives and Public Policies* fue publicada en 1995. En esta edición, Kingdon revisa el ECM y sostiene que, en lo principal, la foto de la configuración de la agenda, las alternativas y la formación de políticas presentada en la primera edición sigue siendo correcta y, por lo tanto útil. El autor decidió mantener el cuerpo del libro exactamente igual que en la primera edición, aunque añadió un capítulo adicional para reflexionar sobre las teorías y las descripciones de los acontecimientos desde la publicación de la primera edición. En el nuevo capítulo, Kingdon agrega información de tres estudios de caso de los principales acontecimientos políticos de la época: la revolución de Reagan en el presupuesto federal de 1981, su reforma de la Ley del Impuesto de 1986, y la iniciativa de atención de la salud de 1993 de la administración Clinton. En la opinión de Kingdon, estos casos adicionales confirman la validez del ECM y su aplicación más amplia. Además, el autor afirma que el caso de la Ley de Reforma Fiscal de 1986 pone de manifiesto que otros modelos de análisis de la política de decisiones no pueden explicar el resultado político, confirmando de ese modo que los conceptos desarrollados en la primera edición de este libro nos ayudan a entender por qué la agenda cambió y por qué la reforma se convirtió en posible.

En la edición de 1995, Kingdon reflexiona sobre su trabajo original a la luz de los comentarios posteriores sobre el ECM. Kingdon aborda la cuestión de si los procesos descritos por el modelo son fluidos, sosteniendo que la afirmación de la fluidez no debe ser interpretada como azar. El modelo tiene estructura, los procesos dentro de las corrientes políticas se ven limitados por muchos aspectos y ofrece una descripción de un río que mana por un cauce que restringe el movimiento de la corriente. Kingdon afirma que los emprendedores de las políticas funcionan dentro de las estructuras y mantiene que el modelo de las corrientes múltiples es comprobable, descriptivo y sigue siendo útil (Kingdon, 1995: 222).

La teoría del equilibrio interrumpido en la teoría social es un método para entender el cambio en los sistemas sociales complejos. El método estudia la evolución del cambio de política, incluida la evolución de los conflictos. La teoría sugiere que en la mayoría de los sistemas sociales existe en un largo período de estancamiento debido a varias restricciones, culturas institucionales, intereses creados o racionalidad limitada de los *policy maker*. Estos periodos son seguidos de momentos de cambios repentinos y radicales debidos a grandes cambios en la sociedad o en el gobierno. Esta aproximación se inspira en gran medida en la teoría biológica de equilibrio interrumpido desarrollado por los paleontólogos Niles Eldredge y Stephen Jay Gould. El modelo de equilibrio interrumpido de cambio de política fue presentada por primera vez por Frank Baumgartner y Bryan Jones en 1993, y ha recibido mucha atención en el institucionalismo histórico. En relación a los cambios bruscos de Baumgartner y Jones (2007), Kingdon disputa a estos autores que la afirmación de que los cambios repentinos en las políticas son siempre el reflejo de elementos o circunstancias puntuales que logran el equilibrio de la política. La adaptación, y no el equilibrio, de acuerdo con Kingdon, es el sello distintivo del proceso político. Además, argumenta que los cambios políticos inesperados pueden parecer un equilibrio puntual, pero, en realidad, las propuestas no se han desarrollado desde cero. Cuando una ventana se abre de pronto, la política necesita de un tiempo considerable para desarrollarse y los expertos deben estar preparados de antemano (Kingdon, 1995: 226).

Kingdon analiza la independencia de las corrientes y hace referencia al enfoque de las coaliciones promotoras (*Advocacy Coalition Framework - ACF*) propuesto a mediados de la década de los noventa por Paul Sabatier y Hank Jenkins-Smith (1993; 1999), cuyo objetivo era estudiar las variables que producen los cambios en las políticas públicas tomando en consideración la función que cumplen los valores y las creencias de los grupos de interés, así como el aprendizaje y el conocimiento al que están expuestos los actores. El ACF concibe el proceso político como una competición entre coaliciones de actores que defienden y promueven creencias e ideas sobre problemas y soluciones en la arena política. Sin embargo, Kingdon vuelve a sostener que cada flujo en el proceso de formulación de políticas tiene una vida propia y, aunque no está de acuerdo con que las corrientes estén estrechamente relacionadas, sí acepta que existen vínculos entre las corrientes y los actores que operan en ellas, debido al hecho de que los acoplamientos se realizan con bastante frecuencia (Kingdon, 1995: 228). El modelo tiene una considerable relevancia actualmente, evidenciado por la publicación de la segunda edición de las *Agendas, Alternatives y Public Policies* como un clásico Longmann en Ciencias Políticas en 2003. Al considerar el potencial del ECM, Kingdon sostiene que el modelo tiene la transferibilidad de análisis de políticas en la praxis y proporciona una lente para ver y examinar el proceso de desarrollo de políticas públicas.

## **CAPÍTULO III. GOBIERNO ABIERTO: ESTADO DEL ARTE**

### **I. INTRODUCCIÓN**

Durante la última década un número cada vez mayor de ciudadanos ha exigido que su derecho a participar en la formulación e implementación de políticas sea reconocido y promovido desde los gobiernos a fin de que pueda ser ejercido de manera efectiva. En respuesta a esta demanda ciudadana, diferentes gobiernos de todo el mundo han comenzado a asumir el concepto de gobierno abierto, en el que la transparencia, la participación y la colaboración constituyen la esencia de este nuevo paradigma de gobernanza (ONU, 2013: 6).

Aunque la idea de gobierno abierto no surgió con el cambio de milenio, éste sí ha supuesto su extensión a un número exponencial de actores, democratizando y ampliando el diálogo y la participación con gobiernos y administraciones a las que hasta ese momento accedían solo determinados participantes cualificados que por lo general respondían a grupos de interés organizados. El origen, los antecedentes y la evolución hasta llegar a la actual carta de naturaleza del gobierno abierto resultan ilustrativos para comprender los factores que favorecieron una hoja de ruta seguramente intangible y no premeditada, en una era menos tecnológica y global como la de principios del siglo XXI. De ahí la necesaria revisión de sus fuentes originales, plasmadas en el reconocimiento del derecho fundamental de acceso a la información, los modelos de gestión pública con influencia en la conformación de este nuevo paradigma, y la asunción de sus presupuestos esenciales por parte de organismos internacionales y países de todo el mundo.

Sin embargo, no fue hasta su lanzamiento a nivel internacional en el año 2011 cuando el concepto de gobierno abierto adquirió entidad propia, con nuevos matices que lo posicionaron en una suerte de paradigma renovado de la acción de gobiernos y administraciones públicas. A partir de ese momento es cuando puede afirmarse que comenzó a gestarse su conformación como una política pública promotora de una novedosa forma de interacción entre gobierno y ciudadanía basada en un esquema más transparente, horizontal y colaborativo.

El reto en estas páginas es sintetizar aquellos elementos de contexto y de concepto que permitan delimitar el estado del arte del gobierno abierto en el momento presente. Éste no es un desafío menor, puesto que el gobierno abierto, aun cuando cuenta con unos elementos básicos que lo identifican, sigue siendo un concepto vivo, dotado de una enorme elasticidad, y que, como muchos autores han afirmado, lo convierten en un concepto paraguas o ‘atrápalo todo’ que agrupa diversas políticas públicas relacionadas entre sí (Villoria, 2012: 70; Cobo, 2012: 102; Martínez Pujón, 2012: 142; Yu & Robinson, 2012: 187-203).

Esto supone que actualmente no exista una definición única, definitiva y autorizada de gobierno abierto. Ello encuentra explicación en que la variedad de delimitaciones conceptuales proceden de una multiplicidad de actores de diversa naturaleza que han desarrollado el significado del concepto. Así, organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales y locales, académicos, investigadores y sociedad civil se han interesado por aproximarse al concepto de gobierno abierto. Sin embargo, la visión de los diferentes actores se encuentra inevitablemente condicionada por la naturaleza de los mismos, así como por contextos culturales, políticos y geográficos diversos. En muchos casos, estas visiones se encuentran influenciadas por una praxis asimétrica, es decir, por un acercamiento a su significado, no por su formulación teórica sino por la práctica concreta del mismo (Peschard Mariscal, 2012: 27).

No obstante, aunque el concepto ofrezca cierta elasticidad, existe un amplio consenso sobre la noción de gobierno abierto como subsistema de políticas públicas<sup>5</sup> que pivota sobre tres ejes esenciales: la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, donde el acceso a la información, la apertura de los datos gubernamentales, las nuevas tecnologías y la web 2.0 juegan un rol esencial. El acuerdo en torno a su idea, unido a la convergencia con otras políticas públicas, abre un interesante elenco de dimensiones que favorecen la comprensión de su alto nivel de integralidad, puesto que sus perspectivas agregadas proporcionan luz acerca de las potencialidades del modelo. El gobierno abierto transita desde ópticas instrumentales y tecnológicas hasta visiones que plantean una revisión profunda del funcionamiento de las instituciones y del Estado. Asimismo, la descripción de los fundamentos teóricos que subyacen al concepto, base en la que se asientan las diferentes tipologías de gobierno abierto, cierra un capítulo destinado a trazar las grandes líneas de este novedoso subsistema (Villoria, 2012: 71).

## II. ANTECEDENTES, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO ABIERTO

El gobierno abierto responde al reto de construir relaciones horizontales y deliberativas entre gobierno y ciudadanía bajo las premisas de la transparencia y la participación en la gestión pública. Pero dicho modelo no es completamente novedoso. La idea de gobierno abierto ha subyacido a la noción misma de democracia y, por tanto, a la mayoría de las leyes fundamentales o constituciones que los estados occidentales democráticos habían desarrollado desde mediados del siglo pasado. Esta consideración permite señalar que los principios que rigen el gobierno abierto se inscriben en la tradición de derechos de primera generación, tales como la libertad de prensa y la libre circulación de información e ideas (Insulza 2012: 9) que, consecuentemente, supuso que numerosos Estados se dotasen de un amplio andamiaje jurídico e institucional para transparentar su acción de gobierno, favorecer espacios de consulta e impulsar la participación ciudadana

---

<sup>5</sup> Una política pública es un sistema de acción pública compuesto a su vez por tres subsistemas: el sistema de actores, el sistema de actividad y el sistema del proceso. En consecuencia, el análisis de cualquier política pública debe empezar por formularse tres preguntas: quién, qué y cuándo (Delgado, 2009: 7).



(Cobo, 2012: 107).

Las primeras alusiones al término gobierno abierto aparecen por primera vez en la década de los setenta del siglo pasado en relación a los secretos de estado y al acceso de información del ciudadano legítimamente soberano en su derecho a estar informado de las cuestiones públicas (Chapman y Hunt, 1987: 12; Ramírez-Alujas, 2011: 101; Villoria, 2012: 69; Yu y Robinson, 2012: 186; Houston, 2012: 328). Tras estas primeras referencias, dos circunstancias acompañaron durante más de dos décadas su alcance. En primer lugar, la limitación restringida de su significado, quedando circunscrito básicamente al derecho de acceso a la información, reconocido por un número importante de países en sus diferentes legislaciones y, en segundo lugar, la influencia de las teorías que sobre nuevos modelos de gobierno y administración surgieron con el *New Public Management* (Nueva Gestión Pública), inspirado en la eficiencia de la gestión empresarial y, fundamentalmente, en la teoría de la Gobernanza, que abría la posibilidad de contar con la sociedad civil y las fuerzas del mercado de forma inclusiva en la co-creación y co-producción de bienes y servicios públicos (Oszalk y Kaufman, 2014: 30).

Ya en el nuevo milenio, el término comenzó adquirir una dimensión propia cuando la OCDE lo definió como “la base jurídica, institucional y política capaz de promover el acceso a la información, la consulta y la participación ciudadana” (OCDE, 2003), y logró su consolidación cuando el recién elegido Presidente de los Estados Unidos lanzó el ‘Memorando sobre Transparencia y Apertura de Gobierno’, punto de partida de las políticas de gobierno abierto iniciadas desde ese momento en el país.

La revisión de estas cuatro etapas clave, aun no respondiendo a una secuencia temporal exacta, sí constituyen una serie de hitos que permiten enmarcar el origen, los antecedentes y la evolución de lo que hoy se entiende por gobierno abierto.

## 1. SECRETOS DE ESTADO VERSUS NORMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Aunque Suecia fue el primer país en abrir el acceso a los documentos públicos con su conocida ‘Ley sobre libertad de prensa’ de 1766, los orígenes del gobierno abierto, se encuentran en los debates que a finales de la década de los setenta del siglo pasado se produjeron en el Reino Unido en relación a la necesidad de abrir determinados aspectos

de la actividad política al escrutinio de la ciudadanía y reducir la opacidad tradicional de gobiernos y administraciones. Así, las referencias al gobierno abierto significaban tratar cuestiones relativas a la libertad de información, a la protección de datos, a la reforma de las leyes sobre secretos oficiales y a la necesidad, en una democracia sana, de poder obtener información sobre las actividades del gobierno (Chapman y Hunt, 1987).

Pronto esta corriente contó con un referente en Estados Unidos, la Ley de Libertad de Información (*Freedom of Information Act*, FOIA) promulgada en 1966 y firmada por el presidente Lyndon B. Johnson gracias al esfuerzo de un numeroso grupo de legisladores, principalmente del político John Moss, que desde 1955 había iniciado sus investigaciones, informes y audiencias sobre las políticas de acceso a la información del gobierno. La FOIA defendió que el derecho a la información tenía que ser una prerrogativa que pudiera hacerse valer en los tribunales y que, a través del mismo, se lograra acceder a los registros de las agencias federales, aunque contuviese excepciones justificadas en nombre de la seguridad nacional. Desde su promulgación, esta norma ha sido objeto de diversas modificaciones legislativas en función del contexto histórico y político. Dichas reformas han ampliado o restringido su ámbito de aplicación<sup>6</sup>, pero este marco legislativo se convirtió en inspiración para otros países que a partir de ese momento comenzaron a desarrollar este derecho.

Según el *Global Right to Information Rating*, actualmente existen más de noventa países con este tipo de normativa<sup>7</sup>: Finlandia inauguró en el siglo XX la ola de legislación en la materia en el año 1951; Dinamarca y Noruega aprobaron leyes equivalentes en 1970; Francia y los Países Bajos en 1978; Australia, Canadá y Nueva Zelanda en 1982; Hungría en 1992; Irlanda y Tailandia en 1997; Corea del Sur en 1998, el Reino Unido en el 2000; Japón y México en 2002; y la India y Alemania en 2005. España ha sido uno de los países

---

<sup>6</sup> Aunque Estados Unidos no cuenta con una ley de secretos oficiales del tipo que se puede encontrar en otros países, los documentos clasificados de conformidad con una orden ejecutiva presidencial pueden ser retenidos. En el ambiente post-9/11, la práctica de clasificar información se incrementó en gran parte del mundo. Esto supuso nuevos obstáculos a ciudadanos que buscan documentos de inteligencia y judiciales. Información obtenida en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos <http://ipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2011/02/20110214133403x0.7895417.html#ixzz3PJR57r6X>

<sup>7</sup> Información obtenida en el sitio web de *Global Right to Information Rating* (Center for Law and Democracy/Access Info): <http://www.rti-rating.org/>

del entorno europeo que más tarde ha aprobado una normativa sobre transparencia en el año 2013.

El impulso de marcos normativos sobre el derecho de acceso a la información pública en numerosos países y el desarrollo de diferentes mecanismos institucionales para potenciar los niveles de transparencia, integridad y participación ciudadana en los asuntos públicos, ha ido ganando terreno en la agenda política en todo el mundo. En este proceso, se ha ido perfeccionando la definición de la capacidad que los ciudadanos poseen en una democracia de exigir un gobierno plenamente responsable de sus acciones (o inacciones) y para evaluar la validez de las medidas que adoptan, incluyendo el derecho de los ciudadanos en relación a la información que de ellos disponen las organizaciones públicas y su adecuado manejo (Ramírez Alujas, 2012: 197).

A su vez, organismos internacionales como Naciones Unidas y el Consejo de Europa favorecieron este proceso mediante diferentes instrumentos jurídicos<sup>8</sup>, insistiendo en que el acceso a la información era un derecho fundamental y, como tal, debía ser promovido, protegido y garantizado por los gobiernos. Este reconocimiento contribuiría al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo de una ciudadanía activa y responsable, y al control a través de la oportuna rendición de cuentas. En la actualidad, un número muy importante de países disponen de marcos normativos adecuados en la materia. A pesar de ello, es un hecho que necesitan ser actualizados como consecuencia de su propia evolución y de los nuevos escenarios que deben ser contemplados, sirva de ejemplo el caso de la reutilización de datos públicos como nuevo derecho emergente (Carnavaggio, 2011: 2-3).

---

<sup>8</sup> La Convención sobre el acceso a los documentos públicos, texto propuesto en 2009 por el Consejo de Europa a la firma de sus 47 Estados miembros. Es el primer instrumento jurídico internacional en este ámbito.

Véase: [http://www.accessinfo.org/documents/Access\\_Docs/Advancing/Council\\_of\\_Europe/Convention\\_on\\_Access\\_to\\_Official\\_Documents\\_CofE\\_es.pdf](http://www.accessinfo.org/documents/Access_Docs/Advancing/Council_of_Europe/Convention_on_Access_to_Official_Documents_CofE_es.pdf).

Este derecho forma parte íntegra de la libertad de expresión, derecho fundamental afirmado por el artículo 19 de la Declaración de 1948. Este artículo se ha convertido en una obligación apremiante con el Pacto relativo a los derechos civiles y políticos de 1966.

La “Convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas” adoptada por la ONU en 2004 y vigente desde diciembre de 2010.

Véase: <http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm>.

Estos antecedentes permiten mostrar que la idea tradicional de transparencia vinculada al derecho a la información es la que posibilita la rendición de cuentas a la autoridad pública y la que abre la oportunidad de participar en los procesos políticos con el propósito de influir en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. De ahí que pueda determinarse que el gobierno abierto se encuentra directamente vinculado a las normas que garantizan el acceso a los datos en poder del Estado (Chapman y Hunt, 2006).

## 2. DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA A LA GOBERNANZA

Otro de los procesos que pueden señalarse como palanca hacia el modelo objeto de análisis, fue aquel que comenzó a gestarse en la década de los ochenta en torno a la idea de modernización gubernamental y administrativa a través de la incorporación de principios propios de la gestión privada en la esfera de la gestión pública. Su objetivo era introducir un cambio de mentalidad en el ámbito público en base a principios de eficiencia, productividad, competitividad y calidad en los servicios, así como impulsar un modelo relacional donde los ciudadanos se convertían en clientes que reciben bienes y servicios de las instituciones públicas. A partir de la década de los setenta se abrió un periodo que marcó la historia en la ciencia política y de la administración, por cuanto se llevaron adelante discusiones, debates intelectuales y académicos, que dieron lugar a nuevas tendencias y teorías, que intentaban explicar el momento de crisis que vivían los Estados. Ello es relevante puesto que las tres causas de la crisis del estado del bienestar – la financiera consecuencia de la crisis del petróleo en los años setenta, la de la restricción del gasto público y limitación del endeudamiento, y la de pérdida de valores y creciente desconfianza de los ciudadanos - lo son también de la administración pública que ha visto cómo se han fracturado los cimientos en los que ésta se asentaba (Arenilla, 2011: 18). Como señala Baena (2000: 106) la crisis financiera activó la transformación del sistema económico con clara incidencia en la esfera política y cultural. La administración pública, como parte del sistema político institucional, ha cumplido su rol en la transmisión a la sociedad de los nuevos valores pero en el camino ha descuidado una parte importante de su misión política y social, puesto que la buena gestión no es suficiente para lograr la legitimidad institucional (Montero, Gunther, Torcal, 1998: 17).

Así, en los últimos cuarenta años se han producido numerosas aportaciones teóricas y prácticas que han intentado modificar los parámetros organizativos y la gestión del sector público para superar a la administración pública tradicional asociada al concepto de burocracia, también llamada “vieja administración pública”, o administración weberiana que pone su énfasis en la legitimidad de la potestad, en el control, en el diseño organizacional, en la seguridad jurídica de sus actos y de sus integrantes y en los procesos más que en los resultados (Ramió, 2001: 3; Bourgon, 2007: 7; Arenilla, 2011: 24). Después de numerosos ensayos de transformación de los parámetros weberianos que han dominado, y que aún dominan, las administraciones públicas surgieron con fuerza durante los años noventa un conjunto de perspectivas reformadoras que bajo el título de Nueva Gestión Pública (NGP) vertebraron un nuevo paradigma conocido como “postburocrático” que se ha llegado a calificar de pensamiento monocolor fácilmente adaptable a las marcas conservadora y socialdemócrata con leves variaciones en el diseño de cada contexto geográfico determinado (Arenilla, 2011:16). La NGP proclama que el mercado garantiza mejor el cumplimiento de los valores sociales y que la administración pública es desventajosa frente a la privada, por lo que ésta debe ser minimizada. La conclusión es que es necesario un nuevo tipo de gestión pública que adopte nuevos principios éticos y la forma de actuar en los negocios (Baena, 2000: 107). Una de las influencias más sólidas de la NGP es el modelo de elección pública o *public choice* que se sustenta en la metodología del análisis microeconómico y que se basa en la existencia de un actor racional, previsor y bien informado que trata de optimizar sus utilidades individuales en un entorno de competencia perfecta (Ormon y Löffler, 1998).

Por ello, para este enfoque, la finalidad de las instituciones públicas debería ser la de adoptar elecciones colectivas que resolviesen los conflictos entre las diversas diferencias individuales donde además los bienes públicos y privados deben adoptar los principios del mercado basados en la eficacia y el equilibrio entre el coste y el beneficio. La administración pública, por tanto es concebida como un sujeto que se encuentra separado de la política pero que condiciona el modelo de Estado en el que se integra. De ahí que Ramió (2001:7) afirme que el cómo no puede responder el qué. Donde el cómo hace referencia a la forma de gestionar, que es lo que intenta aportar y modificar la NGP

y el qué hace referencia al modelo de Estado que se desea implantar para contribuir a generar bienestar a los ciudadanos de un determinado país. En este sentido, primero hay que definir el modelo de Estado y después buscar los mejores instrumentos de gestión acordes con los objetivos y condicionantes del modelo de Estado seleccionado. Las aportaciones de la NGP en sus diversas corrientes y fases se pueden encontrar de una manera más completa en aquellos países donde sus postulados han tenido más acogida como son Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido y Estados Unidos (Denhardt y Denhardt, 2003: 12, 15-9; Kettl, 2000a: 14). El modelo de Estado – institucional, residual, y continental-conservador (incluida su variante mediterránea) – es determinante en la capacidad de interiorizar las estrategias propias de la NGP, de la misma manera que debe abandonarse la idea de que la introducción de valores neoesempresariales en la administración pública es positiva en todo caso. Este escenario sólo es cierto cuando se introducen estos nuevos valores en administraciones públicas institucionalizadas que poseen unos sólidos valores públicos, de lo contrario los medios (economía, eficacia y eficiencia) se transforman en los fines y se puede perder de vista los objetivos últimos de los programas públicos y a los colectivos de ciudadanos a los que van dirigidos (Ramíó, 2001:19).

Sin embargo, paralelamente a este pensamiento, los ciudadanos entienden que las instituciones políticas y administrativas se encuentran muy alejadas de sus intereses reales, pero muy cerca de los intereses de políticos y empleados públicos. A ello se suma la creencia que la sociedad tiene sobre la ineficiencia de la administración pública frente a la eficiencia de la empresa privada, convicción que se aplica no solo a los procesos y resultados, sino también a sus integrantes y a la propia organización. De ahí, que la conclusión lógica es que la administración pública debe regirse por criterios empresariales ya que los controles legales y políticos parecen no dar resultado. Esta es una de las justificaciones de los repetidos intentos en la Administración Pública de importar los enfoques y técnicas provenientes del sector privado.

Pero las críticas no tardaron en hacerse llegar. Así, la primera línea de críticas entiende que la NGP basada en la gestión privada no ha supuesto una alternativa real al no haber implantado una nueva base para la acción pública, ni haber elaborado una

exploración más completa y ambiciosa de la noción de ciudadanía (Pochard, 2007: 27). La debilidad teórica achacable a la NGP también se fundamenta en que la orientación al logro de unos objetivos no es una base filosófica apta para la administración pública. Se concluye, que la NGP no ha cumplido las expectativas, ya que, aunque es cierto que ha favorecido a mejorar la eficacia, lo que es relevante de ser apreciado, se ha olvidado de la democracia o de los ciudadanos *per se* (Pollit, 2007: 40). La NGP parte de una propuesta de valores equivocada que ha dejado fuera de la agenda la equidad, la justicia, la representación o la participación frente a la teoría tradicional de la administración pública que aportó una sólida base de valores y sobre los que se vuelve de nuevo en la actualidad (Pollit, 1990: 138; Bourgon, 2007: 11).

De otro lado, las críticas procedentes del enfoque del nuevo servicio público afirman que en la vida social es difícil separar hechos de valores y que en muchos casos los valores son más importantes que los hechos para entender la actuación humana (Denhardt y Denhardt, 2003: 40). Así, la inserción de los valores de economía, eficiencia y eficacia manifiestan numerosos problemas en el ámbito público ya que las personas no siempre actúan racionalmente, por ello reducir todas las consideraciones al análisis del tipo coste-beneficio puede contradecir los valores sociales, ya que el bienestar personal, la libertad de expresión o el derecho al voto no pueden calcularse económicamente, pero su regulación sigue siendo correcta si refleja los valores de los ciudadanos (Kelman, 1981). En este sentido, se afirma que el modelo cultural de la NGP basado en la eficacia gubernamental no garantiza por sí mismo la democracia de alta calidad (Lijphart, 2000: 280). El concepto de eficacia social apenas es utilizado al hablar de la gestión pública, noción que hace referencia al efecto último logrado por la acción pública, esto es, al impacto que una medida tiene en la sociedad (Savoie, 1995).

Las críticas expuestas han sido rebatidas por los autores gerencialistas que niegan que la NGP carezca de fundamentación teórica, ya que entienden que esta hay que encontrarla en enfoques como *public choice*, que le otorga una calidad teórica al menos tan reseñable como la del modelo tradicional de administración (Guerrero, 2003: 383). Precisamente es en este terreno donde la réplica a las críticas adquiere más contundencia, esto es, en el hecho de que el viejo modelo no funciona adecuadamente en aspectos como

la planificación, la programación de presupuestos, la medición del cumplimiento de los objetivos, la selección de personal y el sistema retributivo (Hughes, 1996: 130). De ahí que la NGP resulte sugerente ya que promueve un proceso sencillo y funcional que resuelve los problemas de eficacia organizativa. En todo caso, la NGP ha tenido un incuestionable éxito en el área de la actividad relacionada con la prestación de servicios, sin embargo no ha logrado introducirse con firmeza en el sustancia de las organizaciones públicas, aunque ha instado a que se hagan preguntas difíciles sobre la gestión tradicional y esto ha dado lugar a algunas transformaciones, que sin perturbar el modelo cultural en el que se asientan las administraciones públicas en algunos países, les ha permitido reflexionar sobre ciertos aspectos relevantes del modelo de gestión de la administración pública (Arenilla, 2011: 42).

La NGP como modelo cuya finalidad era hacer más eficaz el sector público, basada en la defensa de que una gestión orientada a resultados promovería una mayor rentabilidad para los gobiernos, sin que ésta, a su vez, tuviera efectos colaterales en el ámbito público (Hood: 1991) pronto se encontró con otras tendencias en el ámbito de la ciencia de la administración, la vuelta o aparición de los enfoques colectivistas, entre ellos el de la gobernanza donde a los principios de eficiencia y eficacia se incorporaron los de transparencia, rendición de cuentas, participación y coherencia (Arenilla, 2011: 72). Todo ello, en un contexto relacional de actores gubernamentales, mercado y sociedad, que ofrecía una visión más integrada de la gestión pública (Renate Mayntz, 2001: 9). Con el cambio de siglo, la NGP fue cuestionada, especialmente en el Reino Unido y en EE.UU., debido al surgimiento de ideas asociadas a la teoría del valor público (Mark Moore, 1997: 64-65). Esta teoría aportaba un enfoque de mayor atención a la ciudadanía a través del concepto de gobierno en red y el papel de los organismos públicos en el trabajo con los ciudadanos como co-creadores de valor público, que reforzaban los valores de la democracia, la legitimidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía.

La rápida difusión de la gobernanza tradujo la conciencia de un cambio de paradigma en las relaciones de poder, que mostraba la insuficiencia del concepto clásico de gobierno para describir las transformaciones que se han ido produciendo en el contexto de la globalización y que como noción busca explicar una transformación sistémica



compleja que se produce a distintos niveles – de lo local a lo mundial – y en distintos sectores, tanto públicos como privados. La gobernanza como “arte o manera de gobernar tiene como objetivo el logro y desarrollo económico, social e institucional duradero promoviendo una sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”<sup>9</sup> considera que el Estado tiene unas competencias y un rol insustituible, pero no suficiente para lograr por sí solo los objetivos que tiene que alcanzar una sociedad, es por ello que debe incorporarse a una nueva forma en la que debe trabajar como un actor más, acoplándose a las relaciones entre el Estado y la sociedad civil de manera flexible, lo cual no implica negar su rol principal como garante de la convivencia, sino que supone entender mejor el papel de los actores no gubernamentales y de las redes en la participación necesaria de las políticas públicas. El enfoque de la gobernanza indica que se ha pasado de un pensamiento de gobierno en el que el Estado se elevaba como el principal actor en la busca del bienestar común, a una conciencia donde la formulación de las políticas públicas es consecuencia de un proceso de intercambio permanente y habitual de información entre las instituciones políticas y los actores de la sociedad. El crédito de la gobernanza ha sido heterogéneo, pero su conquista como modelo efectivo o teórico se debe a que supone un progreso del modelo de concertación social (Arenilla, 2011: 72). También la UE constató la necesidad de revisar su forma de gobernar, y lo hizo consciente de que aunque existiesen reglas de interacción entre las instituciones, éstas no eran suficientes para contribuir suficientemente a la transparencia y eficacia de las políticas comunitarias. El resultado fue el llamado *Libro Blanco sobre la gobernanza en Europa (2001)*, el cual supuso una de las primeras aproximaciones conceptuales autorizadas del termino gobernanza y una reflexión en torno al proceso político de la UE, estableciéndose como principios que constituyen la base de una “buena gobernanza”: la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia.

El enfoque de gobernanza lleva tácita la obligación del ciudadano de colaborar en la vida política de la comunidad, en el sentido de la democracia directa y los enfoques republicanos (Pettit, 1999). La participación política en la comunidad convierte al

---

<sup>9</sup> Acepción recogida en el Diccionario de la Real Academia Española y que se diferencia del antiguo uso que hacía referencia a la acción y efecto de gobernar o gobernarse.

individuo en ciudadano pleno y le reconoce la posibilidad de alcanzar espacios de libertad y de autonomía en el marco de una democracia deliberativa. A partir de las definiciones de Rhodes (1999: 37), Börzel (1997: 2) y Klinj (2005: 234), se proporciona la que concibe por red de gobernanza el conjunto de actores que se relacionan entre sí de forma más o menos constante en el tiempo con el objetivo de influir, mediante el intercambio de recursos, en la definición o solución de una política pública. Emanadas de esta definición pueden señalarse sus particularidades: la interdependencia de los actores, ya que ningún actor puede por sí sólo conseguir sus objetivos ni puede intervenir de manera categórica sobre las políticas públicas; los esquemas de relaciones que se establecen son de dependencia y se conservan en el tiempo; la pluralidad e importancia del número de actores que representan a grupos e intereses heterogéneos de la sociedad; y la existencia de un objetivo común a pesar de la diversidad de metas individuales (Arenilla, 2011: 74)

Las debilidades del enfoque de gobernanza se desencadenaron desde sus primeras conceptualizaciones y algunas de ellas enlazan con las críticas a la democracia directa y al republicanismo. El primer grupo de limitaciones se vinculan a que la gobernanza puede debilitar la democracia ya que a las redes acceden pocos actores y empodera a los que son fuertes (Prats, 2010: 43 y ss.; Fleury, 2002: 236-237). El segundo grupo de limitaciones se relacionan con la eficacia: lentitud en llegar a acuerdos; disgregación de la responsabilidad, lo que dificulta el cumplimiento de objetivos de la red y la evaluación de las estrategias emprendidas (Fleury 2002: 236-237). Desde una perspectiva teórica, el principal reproche que se puede realizar al concepto de redes de gobernanza gravita en la inequidad de los actores participantes en las mismas. Esta inequidad es de dos tipos, por un lado no todos los actores sociales tienen la misma autoridad en la formulación y realización de las políticas públicas; por otro, continúa existiendo una evidente inestabilidad a favor de los actores públicos que participan en las redes. Su preferencia se basa en el acceso a la información y a los recursos y, de manera determinante, a su legitimidad democrática (Arenilla, 2011:76). Sin embargo, la gobernanza resulta de interés para identificar problemas, fundamentalmente los mal organizados (Chisholm, 1987); brindar soluciones consensuadas; proporcionar información, opciones y soluciones entre un elevado número de actores; disminuir los costes de transacción entre

los actores; institucionalizar la concertación en espacios poco definidos o integrados estructuralmente; ampliar el capital social; promover la corresponsabilidad entre los diversos actores; optimizar la legitimidad de las instituciones públicas y sus responsables; y coadyuvar a la formulación de políticas y a la acción del gobierno. En este sentido, el enfoque de la gobernanza, que aparece como reacción a la pérdida de legitimidad democrática del Estado, será útil en tanto se oriente a reforzarla y no a sustituirla (Arenilla, 2011: 77).

En síntesis, a mediados de la década de los setenta la gestión pública se enfrentaba al reto de modernizar la administración y dar respuesta a las limitaciones de la administración burocrática. Así, ambas corrientes, la NGP y la gobernanza se insertaban en un diagnóstico común: el inmovilismo de las administraciones públicas y la necesidad de su evolución y adaptación a la sociedad a la que pertenecían. Una visión semejante en el punto de partida, en lo que se refería a la necesidad de reformas pertinentes en el nivel operativo, pero con diferencias a nivel teórico en cuanto a su formulación (Zujar, 2012).

Mientras que la NGP se situaba en la lógica empresarial de acometer la prestación de los servicios públicos de forma más eficaz creando un campo de competencia propio y valorando los costes reales de su prestación, la teoría de la gobernanza sostenía una visión positiva del servicio público donde no era necesario adaptarse a la filosofía neo-empresarial para la prestación de los mismos. En este sentido, la gobernanza optaba por la mejora de la capacidad del gobierno creando alianzas a través de la generación de redes mixtas conformadas entre gobiernos y sociedad civil, empresas, instituciones y ciudadanía en general.

**Figura 8: Diferencias entre la nueva gestión pública y la gobernanza**

NUEVA GESTIÓN PÚBLICA	GOBERNANZA
Transferencia de responsabilidades	Reparto de responsabilidades
Adjudicación de prestaciones	Activación de prestaciones
Privatización ( <i>outsourcing</i> )	Autorresponsabilidad

Contratos (corto plazo)	Cooperación (largo plazo)
Dinero y competencia como incentivo	Integración de instrumentos de gobierno (mercado, comunidad, jerarquía)
Relaciones de intercambio económico	Diálogo social y democrático
Optimización vertical	Integración horizontal
Orientación al cliente	Compromiso ciudadano

Fuente: Innerarity, 2006.

La gobernanza se instauró como un modelo que pretendía superar el reduccionismo racional-economicista de la NGP. Su rápida difusión tradujo la conciencia de un cambio de paradigma en las relaciones de poder que mostraba la insuficiencia del concepto clásico de gobierno para describir las transformaciones que se habían ido produciendo en el contexto de la globalización y que buscaba explicar esta evolución del sistema a distintos niveles —de lo local a lo mundial— y en distintos sectores tanto públicos como privados (Rhodes, Pierre, Peters, Koimann, 2005). La figura 8 ofrece una síntesis de los elementos que caracterizan a ambos modelos de forma comparativa para demostrar cómo algunos de los fundamentos que se señalan en la columna de la gobernanza, tales como el reparto de responsabilidades, la cooperación, la integración horizontal y el compromiso ciudadano, constituyen una referencia necesaria en la construcción de modelos de gobierno abierto.

La gobernanza rompe la clásica forma de gobierno —centralizada, jerarquizada y vertical— para convertirse en una forma descentralizada, horizontal y abierta, configurándose en un proceso donde los objetivos de convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos deben llevarse a cabo en un modo de interdependencia-asociación-coproducción y corresponsabilidad entre el estado, el mercado y la sociedad civil (Aguilar, 2007:10). Este modelo instó a que diversos organismos internacionales como la OCDE (1995), el Fondo Monetario Internacional (1997), el Banco Mundial (1999), el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (1997) y la propia Unión Europea (2001b) promovieran cambios en las lógicas de gobierno, instando agendas de innovación

gubernamental y de modernización de la gestión pública. Las diferentes acepciones del concepto y los criterios de juicio normativo relacionados ponían de manifiesto que existían múltiples definiciones de gobernanza. Sin embargo, también demostraban que los objetivos formulados por estas organizaciones eran claros y convergentes alrededor de la idea de refuerzo de la sociedad civil, participación, cooperación, rendición de cuentas, transparencia y buen gobierno.

La confianza ciudadana en las instituciones políticas y en sus integrantes ha caído muy significativamente, lo que ha dañado la legitimidad de la administración pública. Los cambios que se han producido en estas últimas décadas en el ámbito de las administraciones permite resaltar como uno de los más relevantes a aquel que sitúa en una posición distinta al ciudadano frente a sus instituciones políticas y administrativas. En un breve espacio de tiempo se ha pasado de un ciudadano- administrado a otro usuario- cliente, y de aquí a otro ciudadano-democrático. Éste último ya no se conforma con ser un mero espectador del juego desarrollado entre las élites que definen el futuro de la sociedad, sino que anhelan a contribuir y co-crear interviniendo como un participante activo en el establecimiento de las reglas del juego (Arenilla, 2011: 17). Aunque este último papel hasta hace tan sólo unos años no ha sido reivindicado por la mayoría de los ciudadanos, hoy éstos son cada vez más exigentes con sus instituciones públicas debido al creciente desencanto con la política y cuentan con nuevas formas de participación, colaboración e interacción que pueden cristalizarse en modelos de gobierno abierto.

### 3. LA VISIÓN Y EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO ABIERTO EN LA PERSPECTIVA DE LA OCDE

La toma en consideración por parte de los organismos internacionales del modelo de gobernanza, unido a los resultados de las primeras mediciones en torno a la falta de confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, contribuyeron a la profundización y promoción de su desarrollo, tanto en el marco de sus políticas como en la de sus Estados miembros.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a través de la serie internacional de datos comparativa comprendida entre 2007 y 2012,

publicada en su Informe *Governments at a Glance* (2013), concluyó que la baja confianza de los ciudadanos en sus gobiernos comprometía el éxito de muchos programas y ponía en riesgo las políticas públicas que dependían de la cooperación y el cumplimiento de los ciudadanos<sup>10</sup>.

La OCDE, en el marco de su misión promotora de políticas de mejora del bienestar económico y social, puso su mirada en este nuevo paradigma de gobierno abierto, ya que a través de sus tres ejes ofrecía herramientas para ayudar a aumentar la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos, una de las principales preocupaciones de la organización. Ya en su publicación *Open Government: Fostering Dialogue with Civil Society* (2003) la OCDE proporcionaba una primera toma de contacto con el concepto de gobierno abierto, definiéndolo como la base para configurar una adecuada infraestructura jurídica, institucional y política, que promoviese el acceso a la información, la consulta y la participación pública.

En su concepción original hacía referencia a la necesidad de que gobiernos y administraciones conectasen de forma más ágil con la sociedad civil. Poco después avanzó en la noción, proponiendo que “un gobierno abierto es aquel que comprenda transparencia en su acción de gobierno, accesibilidad a los servicios públicos e información y capacidad de respuesta a las nuevas ideas, demandas y necesidades de la sociedad” (OCDE, 2005). Por tanto, bajo ese paraguas, un gobierno abierto sería aquel en el que los ciudadanos, en su sentido más amplio, pudieran ‘saber cosas’ (*know things*) a través del acceso a información relevante y comprensible, ‘conseguir cosas’ (*get things*) a través de servicios y transacciones desde y con el gobierno, y ‘crear cosas’ (*create things*) a través de la participación en el proceso de toma de decisiones.

El término ha evolucionado desde la óptica que alentaba una administración pública transparente, accesible y receptiva, con capacidad de respuesta y responsable (OCDE: 2006) a un enfoque donde se considera que la administración debe ser la plataforma desde dónde co-crear valor público exponiendo los beneficios que de ello se derivaría (OCDE: 2010): i) restablecer una mayor confianza en el gobierno; ii) garantizar

---

<sup>10</sup> Véase *Trust in Government* en <http://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm>

mejores resultados al menor coste; iii) elevar los niveles de cumplimiento; iv) asegurar la equidad de acceso a la formulación de políticas públicas; v) fomentar la innovación y nuevas actividades económicas; y vi) mejorar la eficacia mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de los ciudadanos, que de otra forma se enfrentarían a barreras para participar.

Asimismo, la OCDE ha delimitado cuáles son las áreas relevantes, los conocimientos requeridos y los marcos e instrumentos necesarios para que los Estados puedan abordar reformas sobre gobierno abierto.

**Figura 9: La experiencia de la OCDE en gobierno abierto**

<b>ÁREAS RELEVANTES</b>	<b>CONOCIMIENTOS REQUERIDOS</b>	<b>MARCOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS</b>
Gobernanza Pública	Capacidad estratégica del Estado Coordinación y liderazgo institucional Gestión del Cambio	Estudios sobre gobernanza pública Marco para promover que las reformas sucedan Proyecto de Gobierno Abierto de la OCDE
Acceso a la Información y Open Data	Datos comparativos en normativas sobre Libertad de Información y Transparencia Normativas y políticas sobre gobierno abierto	Marcos para evaluar las políticas de gobierno abierto Apertura e inclusión como principios rectores para la formulación de políticas Marcos de evaluación para iniciativas de datos abiertos
Compromiso Público	Marco político para promover la participación ciudadana Uso de la consulta en el proceso de evaluación del impacto de la normativa	Manual de información, consulta y participación pública en la formulación de políticas Guía para involucrar a los actores pertinentes en el proceso de elaboración de normas

Integridad	Conflicto de intereses en materia de información pública Transparencia en la contratación pública Transparencia en acciones de lobby	Principios de transparencia e integridad para las acciones de lobby Principios para mejorar la integridad en la contratación pública Directrices para la gestión de los conflictos de intereses en la función pública Principios para la gestión de la ética en el servicio público
Uso de las TIC por el sector público	Estrategias de gobierno electrónico Datos sobre el gasto del sector público en las TIC	Marco para evaluar el uso de las TIC por parte del sector público para la apertura, la integridad y la transparencia Información del sector público accesible y pública
Transparencia Fiscal	Publicación de presupuestos Transparencia en el proceso de elaboración de presupuestos	Buenas prácticas en transparencia presupuestaria

Fuente: OCDE, 2015.

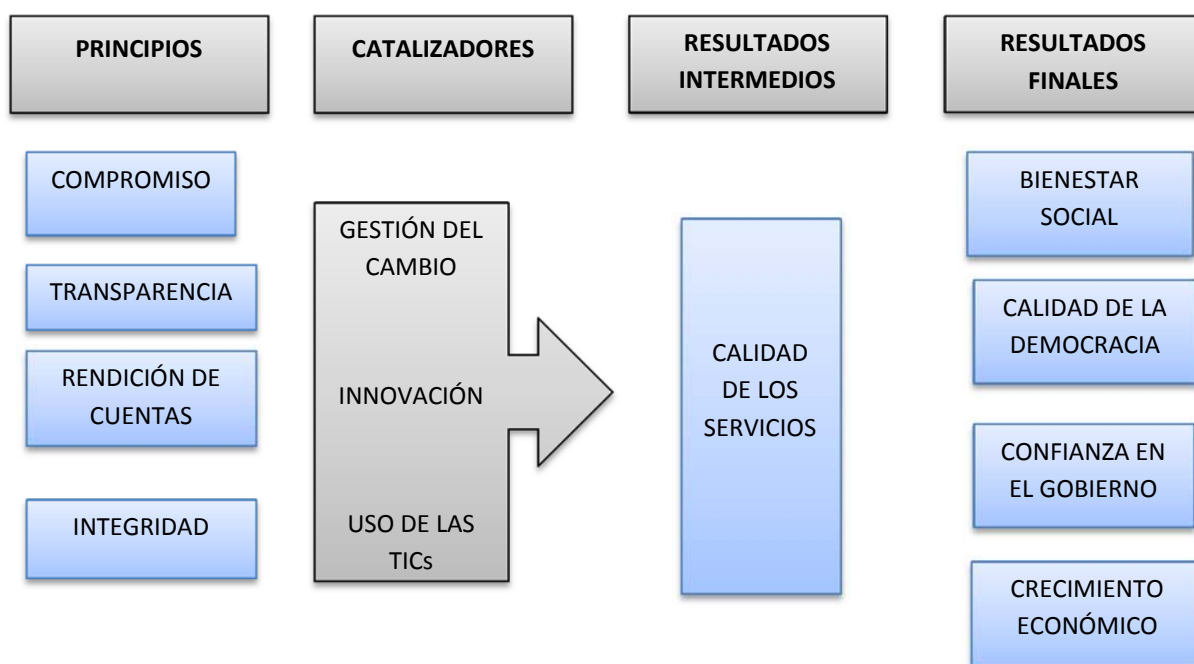
El esquema propuesto para la implementación de reformas tendentes a emprender un gobierno abierto se basa en la necesidad de dar respuesta a la demanda de ciudadanos y de empresas para crear mayor transparencia, modernizar la administración pública y procurar mejores servicios, promover un desarrollo socio económico sostenible y procurar el acceso a buenas prácticas de carácter internacional. En la actualidad el creciente papel de las redes sociales y las TIC ha supuesto que para la OCDE la idea de gobierno abierto se encuentre más conectada a la cooperación y colaboración de las administraciones y la sociedad para instituir un sector público más eficaz y eficiente, pero también más innovador, que dé respuestas a las demandas sociales y al entorno actual de limitación de recursos públicos (OCDE, 2011).

En el corazón de estos esfuerzos está el objetivo de aumentar la confianza de los



ciudadanos y, por ello, en esta línea también se ha instado la medición y comparación de los elementos del gobierno abierto en distintos países<sup>11</sup> que permiten obtener un cuadro de indicadores para normalizar y ajustar el concepto entre los distintos estados miembros (OCDE, 2009). La herramienta utilizada para ello es el ‘Marco de Evaluación para el Gobierno Abierto’, que proporciona un análisis de los esfuerzos necesarios para promover un gobierno abierto a todos los niveles a los países beneficiarios a través de recomendaciones políticas, instrumentos, buenas prácticas y apoyo para su potencial implementación.

**Figura 10: Marco de Evaluación para el Gobierno Abierto**



Fuente: OCDE, 2015.

La OCDE ha proporcionado elementos de reflexión y una visión de conjunto de las cuestiones clave que deben ser consideradas en la construcción de un gobierno abierto

<sup>11</sup> Hoy, la gran mayoría de países miembro de la OCDE cuentan con marcos jurídicos relativos a la idea de gobierno abierto, entre los que se cuentan: i) Legislación sobre el acceso a la información y libertad de prensa; ii) Legislación sobre privacidad y protección de datos; iii) Las leyes sobre procedimientos administrativos; iv) Legislación sobre Defensores del Pueblo (Ombudsman); y v) Leyes sobre las entidades fiscalizadoras.

a través de diversos instrumentos. En los últimos años, la rápida difusión de un modelo de gobernanza traducía la conciencia de un cambio de paradigma en las relaciones de poder, que mostraba la insuficiencia del concepto clásico de gobierno para describir las transformaciones que se han ido produciendo en el contexto de la globalización. De ahí, que en su misión de instar procesos de optimización de la gobernanza e impulso de políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas esté promoviendo políticas de gobierno abierto para contribuir a sentar las bases de una nueva relación entre gobiernos y los ciudadanos, recuperar la confianza y mejorar la calidad de la democracia.

#### 4. DEL MEMORÁNDUM SOBRE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO AL *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP*

Aun cuando el concepto de gobierno abierto fue utilizado desde los años setenta y ochenta, éste no comenzó a hacerse popular hasta el momento en el que el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, presentó en 2009 su ‘Memorándum sobre Transparencia y Gobierno Abierto’. La iniciativa de *Open Government* lanzada por el Presidente Obama respondió a la toma de conciencia de la relevancia de la participación y colaboración de los ciudadanos en el desarrollo de las políticas públicas que regían sus vidas, y que guiarían las vidas de las generaciones futuras. La irrupción de las nuevas tecnologías y la inteligencia en el uso de las mismas que demostró el entonces candidato demócrata en la campaña de primarias a través de la frase “yes, we can”, supuso la generación de un mensaje corto, emotivo, memorable e integrador, que ponía el énfasis en el nosotros: “No se trata de mí, sino de nosotros, de los americanos trabajando juntos por un objetivo común” (Obama, 2009).

No es de extrañar que esta visión política impregnase su acción de gobierno, tal y como demostró al llegar a la Casa Blanca con la puesta en marcha del proyecto *Open Government*, orientado a que los ciudadanos norteamericanos hiciesen suyo un proyecto de país a través de su implicación y participación como protagonistas del cambio, a través de la transparencia, la colaboración y la participación. Con ello se pretendía constituir una opción alternativa al paradigma de gobierno que hasta entonces había predominado en Estados Unidos, vinculado al *New Public Management* y unido a la *Patriot Act* y la lucha

contra el terrorismo, con su característica “dosis de opacidad y autoritarismo inherente” (Villoria Mendieta:, 2012: 69).

A partir de ese momento se generó un movimiento expansivo que dio lugar a que en otros entornos comenzasen a suscribirse iniciativas en relación a los principios de gobierno abierto. La consecuencia inmediata fue que a mediados de 2011 se creó la red ‘Alianza para el Gobierno Abierto’ (más conocida por su denominación en inglés *Open Government Partnership, OGP*), impulsada por un pequeño grupo de países —Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica y Reino Unido bajo el liderazgo de Estados Unidos y Brasil— que se constituyó como una plataforma internacional de actores nacionales comprometidos con la rendición de cuentas en sus respectivos gobiernos, con el objetivo de conseguir un mayor nivel de apertura de las instituciones y mejorar la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos (OGP, 2011).

Así, el gobierno abierto despertó el interés en un mayor número de países, hasta el punto de percibirse como el ideal político, que como expresa Coglianese, parece haberse convertido en el dulce elixir de la gobernabilidad contemporánea (Coroján y Campos, 2012: 122). Estas dos referencias internacionales de obligada mención muestran como el gobierno abierto se ha insertado en la agenda política, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y sirven de guía inicial para acotar el significado y alcance de este renovado modelo de gobernanza.

#### **A) El gobierno abierto en Estados Unidos: el impulso de un nuevo paradigma**

La campaña electoral de Barack Obama introdujo elementos novedosos que hoy se asumen como habituales, puesto que esos factores, en su mayoría relacionados con las nuevas tecnologías y la web 2.0, se han ido incorporando en el día a día de las personas. La campaña electoral marcó un antes y un después en la forma en la que los ciudadanos se relacionaban con sus representantes políticos. Ese fenómeno, el de la conectividad e intercambio de información a niveles que nunca se habían conocido, junto con el diagnóstico de una sociedad americana en crisis, desencantada con sus representantes y avergonzada por las acciones de la anterior administración, dieron lugar a que el recién llegado Presidente lanzará un iniciativa que de alguna manera replicaba la esencia de lo

que había sido su campaña: “Estados Unidos somos todos, y todos juntos podemos volver a estar en la vanguardia, recuperar el país y la credibilidad internacional” (Obama, 2009).

En el diagnóstico de la situación se encontraba un pueblo, el estadounidense, que durante décadas sólo había experimentado la cultura del secreto en Washington. Allí la información estaba en manos de unos pocos, los dólares de los contribuyentes desaparecían sin dejar rastro, y los grupos de presión ejercían una influencia mayúscula. Para los estadounidenses, Washington reforzaba la creencia de que el gobierno solo beneficiaba algunos intereses particulares y no siempre legítimos a expensas del pueblo. Ante esta situación, el Presidente Obama asumió el compromiso de cambiar la forma en que funcionaba el poder de los lobbies en la Calle K<sup>12</sup>, y lanzó una serie de medidas tendentes a contrarrestar los fallos del sistema nada más tomar posesión. El 21 de enero de 2009, en su primer día como Presidente de los EE.UU, firmó el ‘Memorándum sobre Transparencia y Gobierno Abierto’<sup>13</sup> marcando el comienzo de una nueva era destinada a cerrar la brecha entre el pueblo estadounidense y su gobierno a través de tres ejes de actuación inmediatos:

- La reducción en la administración de intereses particulares, mediante la redacción de normas éticas que impidiesen que los grupos de presión se incorporasen al Gobierno o tuvieran puestos en sus Consejo Asesores.
- El seguimiento por parte de la administración de cómo el gobierno utilizaba el dinero, dando publicidad en sitios web de fácil acceso y comprensión<sup>14</sup>.
- El fortalecimiento, a través de la administración, de las capacidades de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, empoderando a los ciudadanos mediante una mayor apertura de los espacios, hasta aquel momento reservados a políticos y tecnócratas, gracias a las nuevas tecnologías que permitirían interactuar e influir

---

<sup>12</sup> La calle K (*K Street*) es una de las calles más importantes de Washington D.C. conocida por ser el centro de numerosos grupos de expertos, grupos de presión y grupos de defensa. En el discurso político, "K Street" se ha convertido en una metonimia de la industria del *lobby* en Washington ya que muchas firmas de cabildeo están ubicadas allí.

<sup>13</sup> Véase en documentos anexos

<sup>14</sup> Algunos de los sitios web habilitados por la Casa Blanca a dicho efecto son: [recovery.gov](http://recovery.gov), [USASpending.gov](http://USASpending.gov) y [IT.usaspending.gov](http://IT.usaspending.gov).

en las decisiones que afectasen a sus vidas.

El memorando establecía que los departamentos y organismos ejecutivos debían tomar medidas en un breve espacio de tiempo para favorecer el cumplimiento del objetivo de crear un gobierno más abierto mediante: i) la publicación de información *on line*, ii) la mejora de la información que debía ser publicada, iii) la creación e institucionalización de una cultura de gobierno abierto y iv) la configuración de un marco propicio para el *open government*.

El 8 de diciembre de 2009 la Casa Blanca publicó una instrucción sin precedentes, la ‘Directiva de Gobierno Abierto’. Dicha Directiva exigía a las agencias federales la toma medidas concretas e inmediatas para lograr hitos clave en materia de transparencia, participación y colaboración. La Directiva de Gobierno Abierto estableció plazos para la acción pero, debido a la presunción de apertura que el Presidente aprobó, se instó a los organismos para que avanzasen en sus iniciativas antes de los plazos marcados. Además de las instrucciones dadas en la Directiva, a principios de ese mismo año se emitieron nuevas directrices para las agencias con respecto a la Ley de Libertad de Información. Con esas directrices, se reforzó el principio de que la apertura era la posición por defecto del Gobierno Federal en relación al derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

En síntesis, para la nueva Administración norteamericana los tres principios de transparencia, participación y colaboración debían constituir la piedra angular del nuevo Gobierno. La transparencia promovería la rendición de cuentas al proporcionar al público información acerca de las actuaciones del Gobierno, la participación permitiría a los miembros del público contribuir con ideas y conocimientos al diseño de políticas públicas y la colaboración mejoraría la eficacia del Ejecutivo, fomentando la asociación y la cooperación, a través de los niveles de gobierno, así como entre las instituciones públicas y privadas.

## **B) La Alianza para el Gobierno Abierto: referencia internacional e isomorfismo institucional**

La Alianza para el Gobierno Abierto (*Open Government Partnership, OGP*)<sup>15</sup>, constituida en el año 2011, surgió como una plataforma internacional de actores comprometidos con la rendición de cuentas en sus respectivos gobiernos con el objetivo de conseguir un mayor nivel de apertura y mejorar la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. Desde entonces, ha pasado de los ocho países fundadores hasta contar con sesenta y cuatro estados miembros (a fecha de cierre de esta investigación). La Alianza que se ha convertido en un referente a nivel internacional tiene como misión que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos con la finalidad de mejorar la calidad del gobierno y la de los servicios públicos que reciben.

De ahí que desde la red se inste a un cambio de normas y cultura para garantizar un diálogo genuino entre gobierno y sociedad civil. Lograr los objetivos establecidos por esta iniciativa multilateral voluntaria pasa por apoyar tanto a los responsables políticos legitimados para llevar a cabo reformas normativas, como involucrar de manera efectiva a la sociedad civil para elevar el gobierno abierto a los niveles más altos del discurso político, proporcionar asesoramiento en aquellas reformas más complicadas, y crear una comunidad de actores con capacidad de reforma en la materia a nivel global.

Para incorporarse a esta red internacional los países deben suscribir los principios de la ‘Declaración de Gobierno Abierto’<sup>16</sup>. Al firmar esta declaración, los países se obligan a “fomentar una cultura de gobierno abierto que empodere y brinde resultados a los ciudadanos, y promueva los ideales del gobierno abierto y participativo del Siglo XXI” (OGP, 2011). En la siguiente figura se puede observar la rápida evolución de la membresía de la iniciativa.

---

<sup>15</sup> La Alianza para el Gobierno Abierto fue constituida formalmente el 20 de septiembre de 2011 cuando los ocho gobiernos nacionales (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos) suscribieron la Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron sus planes de acción nacionales.

<sup>16</sup> Véase en documentos anexos.

**Figura 11: Países miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto**

GRUPOS	PAÍSES	FECHA DE INGRESO
G1 (8)	Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos.	septiembre 2011
G2 (39)	Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, El Salvador, Estonia, Georgia, Grecia, Guatemala, Honduras, Italia, Israel, Jordania, Kenia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Perú, Rumania, República Eslovaca, España, Corea del Sur, Suecia, Tanzania, Turquía, Ucrania y Uruguay.	abril 2012
G3 (7)	Argentina, Costa Rica, Finlandia, Ghana, Hungría, Liberia y Panamá.	abril 2013
G4 (6)	Australia, Irlanda, Malawi, Mongolia, Serbia y Trinidad y Tobago.	abril 2014
G5 (2)	Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde	Septiembre 2014/julio 2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos de OGP.

Esta rápida expansión del gobierno abierto responde a lo que DiMaggio & Powell (1999) denominan isomorfismo institucional. La tesis del isomorfismo de la teoría clásica de la organización sostiene que los actores racionales hacen que sus organizaciones sean cada vez más similares en las estructuras y prácticas resultado de tres tipos de presiones alineadas: coercitivas, miméticas y normativas (DiMaggio & Powell, 1999: 109, Ballcells et al, 2013: 66).

Para estos autores el motor del cambio viene derivado de los desajustes que se producen entre la institución y el entorno que la rodea que se encuentra configurada por campos organizacionales con ritmos de evolución distintos al de la institución. DiMaggio y Powell señalan que el cambio institucional puede generarse bien por contradicciones institucionales internas o por fuerzas exógenas procedentes del entorno (DiMaggio &

Powell, 1991). De ahí que seguir las pautas comúnmente aceptadas lleve a la inevitable homogeneidad de los sujetos, que acaban imitándose unos a otros en busca de la legitimidad. Esta imitación de prácticas aceptadas por las organizaciones como exitosas para dar respuesta a las presiones sociales y del entorno es lo que DiMaggio y Powell denominan isomorfismo institucional. Éste proceso es calificado como la razón dominante por la que las organizaciones adoptan formas análogas (DiMaggio & Powell, 1983). Dicha tendencia a la homogeneización se encuentra condicionada por las siguientes razones: las fuerzas coercitivas del entorno que pueden imponer criterios de estandarización a las organizaciones; las tendencias miméticas para afrontar la incertidumbre o las presiones normativas que se producen a medida que se profesionaliza el trabajo. Estas tres razones dan lugar a los tres tipos de isomorfismo que se contemplan en la teoría institucional (DiMaggio & Powell, 1983; DiMaggio & Powell, 1991):

- Isomorfismo coercitivo: surge como consecuencia de presiones formales e informales por parte de organizaciones de las que la institución depende. El papel de la administración pública resulta el más claro exponente de este tipo de isomorfismo.
- Isomorfismo mimético: en situaciones de incertidumbre en el entorno, de ambigüedad en los fines y objetivos, las organizaciones tienden a imitar y a seguir los patrones de comportamientos de aquellas que consideran más exitosas dentro de su ámbito, puesto que consideran sus prácticas como legítimas. Esto se da aunque no siempre coincida el modelo a seguir con los objetivos de la institución. Cuanto mayor es la incertidumbre, mayores son las prácticas miméticas.
- Isomorfismo normativo: la tendencia a la homogeneidad viene propiciada por las estructuras y normas sociales del entorno. Pone de manifiesto la importancia de las profesiones en el mundo de las organizaciones, puesto que en ellas se elaboran y difunden pautas de actuación y criterios de prestigio, que se introducen en la gestión de las instituciones.

A menudo las instituciones más que eficiencia, lo que buscan es desarrollar explicaciones convincentes de las formas en que incorporan las experiencias vividas en



su organización (DiMaggio & Powell, 1991). De ahí que la Alianza se erija como un entorno de isomorfismo en sus tres vertientes, la coercitiva, por cuanto una vez que se es miembro de la red se derivan obligaciones en relación a la formulación y desarrollo de políticas de gobierno abierto, la mimética porque permite la identificación de las acciones y prácticas en el ámbito del gobierno abierto que se perciben como mejores y más efectivas, y la normativa, porque el OGP establece marcos armonizados de trabajo para los países a través de declaraciones, planes estandarizados y guías para el diseño de políticas de gobierno abierto. Sin embargo la rápida expansión de este nuevo paradigma puede derivar en la réplica del modelo sin llegar a entender realmente que es el gobierno abierto, corriendo el riesgo de adoptar fórmulas institucionales aceptadas en otros entornos sin prestar la debida atención a la realidad propia, a sus condicionantes y posibilidades (Ramíó y Salvador, 2005).

La moda del modelo de gobierno abierto ha impregnado también a gobiernos subnacionales y locales, sin embargo, actualmente sólo los gobiernos nacionales pueden ser miembros de la Alianza. Para unirse formalmente a la red es imprescindible demostrar un nivel mínimo de compromiso en cuatro elementos clave: i) transparencia fiscal; ii) acceso a la información; iii) declaraciones patrimoniales y de ingresos; y iv) participación ciudadana. De este modo, un gobierno podrá ser elegible para tomar parte en el OGP en la medida que cumpla con dichos criterios, que, a su vez, son evaluados a través de indicadores de gobernanza objetivos basados en fuentes de información pública. Asimismo, los gobiernos que deseen formar parte de la Alianza deben cumplir diversas obligaciones, tanto para su incorporación como para su mantenimiento (OGP, 2011):

- Cumplir con los requisitos mínimos de elegibilidad.
- Manifestar un interés firme de incorporarse a la Alianza mediante el envío de una comunicación de intención al Comité Directivo.
- Llevar a cabo una amplia consulta pública con el fin de informar sobre los compromisos del gobierno e identificar o establecer un foro multilateral para el diálogo permanente con la sociedad civil referente de ámbito nacional para la ejecución de las obligaciones derivadas de la participación en la Alianza.
- Elaborar un Plan de acción nacional de gobierno abierto con la colaboración de la

sociedad civil que recoja el desarrollo de compromisos concretos sobre los principios básicos de OGP: transparencia, participación y colaboración ciudadana, rendición de cuentas y tecnología e innovación.

- Apoyar públicamente la Declaración de Gobierno Abierto y presentar el Plan de acción nacional final publicándolo en la página web de la Alianza.
- Elaborar y publicar un informe de autoevaluación sobre los avances realizados tras el primer año de implementación de Plan de Actuación Nacional.
- Contribuir al sostenimiento del Mecanismo Independiente de Evaluación y apoyar la elaboración de sus informes.
- Cooperar en la promoción de la transparencia gubernamental en otros países mediante el intercambio de las mejores prácticas, conocimientos, asistencia técnica, tecnologías y recursos tanto con carácter multilateral como bilateral.
- Cumplir con los plazos que se derivan de todos y cada uno de estos pasos.

La participación también constituye uno de los principios fundamentales de la iniciativa, de ahí que la sociedad civil juegue un importante rol en OGP a nivel internacional a través de su intervención con igual número de representantes que los gobiernos nacionales en el Comité Directivo (órgano ejecutivo de la Alianza), y a nivel nacional, debido a la obligación de los gobiernos a trabajar activamente con la sociedad civil en el diseño de los planes de acción nacional, la evaluación y el monitoreo. De modo que, aunque las organizaciones de la sociedad civil no se incorporan formalmente a la OGP de la misma manera que lo hacen los gobiernos, sí ostentan un papel fundamental en la Alianza tanto a nivel nacional como internacional.

Una cuestión que merece ser resaltada es que tal y como se ha señalado aunque los gobiernos subnacionales y locales no puedan adherirse a la Alianza, los gobiernos nacionales pueden llevar a cabo reformas que incorporen a estos niveles, involucrándolos en el marco de sus compromisos. Por lo tanto, se alienta a los gobiernos subnacionales a participar en los esfuerzos nacionales de la Alianza para explorar la posibilidad de incluir reformas de gobierno abierto a nivel local en los respectivos planes de acción de cada país. Este hecho es de especial consideración para el caso de España, como se analizará a lo largo de esta investigación.

En este punto resulta oportuno señalar los requisitos que los países miembros de la Alianza deben cumplir para poder ser miembro de la red (OGP, 2011):

- Trabajar con la sociedad civil para desarrollar un plan de acción de OGP: cada país participante debe desarrollar un plan de acción de gobierno abierto a través de un proceso multilateral, abierto y participativo. El plan de acción debe incluir compromisos concretos y cuantificables realizados por los gobiernos participantes para impulsar reformas innovadoras en áreas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, para ello deben:
  - Solicitar insumos referentes al plan de acción: los participantes en OGP se comprometen a desarrollar planes de acción nacionales a través de un proceso de múltiples actores interesados, con la participación activa de ciudadanos y sociedad civil.
  - Publicitar los detalles de su proceso de consulta pública así como su cronograma antes de la consulta.
  - Consultar a la población con suficiente anticipación y llevar a cabo acciones de sensibilización para promover la participación pública en la consulta.
  - Realizar consultas a través de una variedad de mecanismos, incluyendo herramientas *on line* y reuniones presenciales para garantizar la accesibilidad de las oportunidades para que los ciudadanos participen del Plan.
  - Consultar ampliamente con la comunidad nacional, incluida la sociedad civil y el sector privado y hacer un resumen de la consulta pública y comentarios individuales recibidos por escrito.
  - Informar sobre sus esfuerzos de consulta en el marco de su autoevaluación.
- Cumplir los compromisos del OGP de acuerdo con el cronograma del plan de acción. Una vez que se cuente con la versión final del plan de acción los países deben centrarse en la implementación del mismo. Durante la implementación, se anima a los países a aprovechar los recursos técnicos y las oportunidades de intercambio de conocimientos que se derivan de participar en esta iniciativa

internacional.

- Elaborar un informe anual de autoevaluación. Los gobiernos están obligados a presentar un informe anual de autoevaluación para analizar el desempeño del gobierno en lo que respecta a los compromisos establecidos en su plan de acción. El informe de auto-evaluación deberá proporcionar una evaluación honesta del desempeño del gobierno en la implementación de sus compromisos de OGP, según los plazos y puntos de referencia incluidos en el plan de acción del país.
- Participar en el proceso de investigación del Mecanismo Independiente de Evaluación (IRM)<sup>17</sup>. este mecanismo ofrece informes periódicos para cada país participante en la Alianza. Los informes evalúan a los países participantes en el desarrollo e implementación de sus planes de acción y ofrecen recomendaciones técnicas para mejorar los planes de acción futuros.
- Contribuir al aprendizaje entre pares en la Alianza. Se espera además que los gobiernos contribuyan al avance de la transparencia gubernamental en otros países mediante el intercambio de mejores prácticas, conocimientos y asistencia técnica. Los países participantes en el OGP se organizan en grupos basados en su fecha de incorporación a la Alianza. Estos grupos permiten mantener asociaciones de países con el mismo calendario, lo que a su vez crea oportunidades para el aprendizaje entre pares.

Como puede comprobarse, la iniciativa internacional constituye una poderosa referencia para los países miembros, tanto en términos de contenidos, asesoramiento, intercambio de conocimientos e impulso de mejoras progresivas en políticas de gobierno abierto. Sin embargo, el marco que ofrece el OGP también otorga cierto grado de flexibilidad a los actores nacionales. Ello implica que el desarrollo de las políticas de gobierno abierto puede adecuarse a cada contexto político, permitiendo transformaciones en las políticas públicas de manera paulatina y generando modelos propios de *open government*. A su vez, esta elasticidad puede dar lugar a incumplimientos sistemáticos de

---

<sup>17</sup> El IRM es un mecanismo fundamental a través del cual todos los actores interesados pueden seguir el progreso y resultados de los países participantes. Por consiguiente, todos los gobiernos participantes están obligados a participar en los procedimientos de presentación de reportes del IRM y cooperar con los investigadores locales proporcionándoles la información necesaria para realizar su trabajo.

los requisitos que establece la Alianza, a que existan disparidades en la evolución en la materia de los países miembros, o a que la ausencia de carácter imperativo de las evaluaciones independientes debilite el papel de la red y la finalidad por la cual se constituyó.

### **III. REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE EL CONCEPTO, DIMENSIONES Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL GOBIERNO ABIERTO**

#### **1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL**

El análisis del alcance e implicaciones del gobierno abierto debe comenzar con una definición del concepto. Una de las primeras evidencias que se constata al realizar una revisión de la literatura y de las iniciativas impulsadas en este ámbito por administraciones de todo el mundo es que no existe una definición única de gobierno abierto y que distintos organismos, instituciones y expertos han adoptado diversas visiones sobre el mismo concepto (ONTSI, 2013: 25). Aunque a través de los antecedentes del gobierno abierto se hayan expuesto algunos de sus rasgos esenciales, la pregunta sobre qué es el gobierno abierto sigue siendo pertinente. Como se expone a continuación, el gobierno abierto como concepto en construcción y, por tanto, como modelo emergente, responde en primera instancia al reflejo del despertar ciudadano. La población cada vez exige más información y a través de más medios, mayor diligencia y responsabilidad a las instituciones y a sus representantes (Insulza, 2012: 9). Sin embargo, se trata también de un concepto que da lugar a numerosas interpretaciones, ideas y opiniones, que le confieren un carácter poliédrico (Martínez Pujón, 2012: 137) que hace necesario el estudio de sus principales referencias para profundizar en su marco teórico.

El gobierno abierto ofrece una idea intuitivamente comprensible; es un poder público que se abre, que es transparente y, por tanto, que ofrece información a los ciudadanos sobre lo que hace, cómo lo hace y con qué medios, en contraposición a los modelos convencionales caracterizados por la opacidad propia de sistemas tradicionales que no permiten conocer el qué, el cuándo y el cómo. Se trata de un modelo de gobierno que busca la implicación *ad intra* de los servidores públicos y la colaboración *ad extra*

de la ciudadanía, facilitada a su vez por las nuevas tecnologías y por los medios de comunicación social que ofrece la web 2.0.

El gobierno abierto, tal y como se definió en el Memorándum de Obama y los estudios posteriores de Nixon (2010) y Lathrop y Ruma (2010) supone una nueva forma de gobernar, una oportunidad que brinda la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación a la política para transformar los sistemas tradicionales de gobierno (Coroján y Campos, 2012: 124). Consecuentemente, favorecer el acceso a la información pública, aumentar los ámbitos en los que la rendición de cuentas se convierta en un principio fundamental, implicar a la ciudadanía en las decisiones de los gobiernos, así como impulsar el trabajo conjunto entre ciudadanos, empresas y administraciones para la producción de servicios públicos, son algunas de las características más significativas que se enmarcan en esta corriente (ONTSI, 2013: 25).

Partiendo de este punto, desde una perspectiva vista maximalista puede afirmarse que un gobierno abierto es aquel que promueve una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que favorece la colaboración entre ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que prestan, que comunica todo lo que decide de forma abierta y transparente, y que lo consigue gracias a las Tecnologías de la Información y Comunicación que facilita la web 2.0. (Calderón y Lorenzo, 2010: 11). Frente a esta definición existe una versión más acotada a los aspectos de *open data*, como la que ofrece Wikipedia: “el gobierno abierto es la doctrina política que sostiene que las actividades del gobierno y de la administración pública deben ser y estar abiertas a todos los niveles posibles para el escrutinio y supervisión eficaz de los ciudadanos” (Villoria, 2012: 71).

Actualmente la idea de un gobierno abierto no se agota en la posibilidad de acceso a la información, ya que, aunque ésta sea condición indispensable, no es suficiente. La información publicada debe estar estructurada, ser comprensible y susceptible de ser reutilizada. Por ello, resulta pertinente destacar la reflexión de Oszlak (2012: 3) cuando afirma que el gobierno abierto es una verdadera filosofía que discierne sobre cómo

governar y cuál es el rol de gobiernos y ciudadanos en la gestión de lo público, donde se debe tener en cuenta que: i) la tecnología favorece la comunicación e interacción entre gobierno y ciudadanos; ii) los gobiernos deben abrir canales para aprovechar la contribución de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, para recolectar las opciones de políticas públicas en la co-producción de bienes y servicios, así como en la supervisión, control y evaluación de los resultados de la gestión pública; y iii) los ciudadanos deben involucrarse activamente para asumir sus responsabilidades en este escenario, siendo vigilantes y corresponsables de las decisiones públicas. Un nuevo concepto de ciudadanía que implica pertenencia a una comunidad política de derechos y cuyo desarrollo debe formalizarse en un nuevo pacto político que favorezca la participación ciudadana en el funcionamiento del Estado. Un acuerdo en el que la sociedad detente más poder y las instituciones asuman la responsabilidad de orientar su acción de gobierno definitivamente a la ciudadanía (Arenilla, 2011:104).

El gobierno abierto se muestra como el medio para reformar la sociedad y el Estado, para transitar de modelos organizativos verticales a redes de colaboración, para ir de la atención de los asuntos públicos individualizados por sectores a la gestión integral, para crear compromisos transversales y generar valor público en colaboración que a medio plazo modifique la morfología de la sociedad y las relaciones entre los diversos actores. En el modelo de gobierno abierto, los Estados abandonan ese rol de ente dotado de poder indisoluble, ilimitado y omnipresente homologable a las monarquías tradicionales en su relación con los súbditos en favor de un Estado constitucional donde se privilegia la interacción con los ciudadanos, en el que se reconocen las libertades fundamentales, los derechos humanos y se pone a la ciudadanía en el centro de las decisiones públicas (Bojórquez Pereznieto, 2012: 171-174).

Siguiendo a Lathrop & Ruma (2010), cabe resaltar la idea de que un gobierno abierto es un gobierno que abre sus puertas al mundo y co-innova con todos, especialmente con los ciudadanos (Cobo, 2012: 112). Se trata, en consecuencia, de un gobierno que comparte recursos anteriormente guardados con celo y que considera una oportunidad el poder que supone la colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones, para superar comportamientos estancos, de competencias exclusivas y

transitar a estructuras renovadas que respondan a la lógica del trabajo y sociedad en red<sup>18</sup>, esto es, gobiernos que trabajen de manera interrelacionada y de forma natural con los socios externos al mismo.

A pesar de la diversidad de enfoques expuestos, una idea ampliamente aceptada de esta nueva forma de gobierno es que busca ser más transparente, confiable, participativa y colaborativa. Por ello, cuando hablamos de gobierno abierto puede afirmarse que existe un amplio consenso respecto a los principios que guían su aplicación práctica. Estos están vinculados a los siguientes aspectos: i) mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos (para ejercer control social sobre los gobiernos y demandar rendición de cuentas) y la reutilización de la información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo económico); ii) facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma de decisiones); y iii) favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-diseñar y/o co-producir valor público, social y cívico (Ramírez-Alujas, 2012: 194). Los cambios profundos en los modelos de democracia, basados en la reestructuración de los Estados y el empoderamiento ciudadano donde el principal reclamo es el reconocimiento de la soberanía en la población, implica que a los gobiernos se les entrega un mandato, pero que el ejercicio de esa atribución debe compartirse con múltiples grupos o sectores de la población que pueden verse afectados por las decisiones que sobre las políticas públicas adopten los gobiernos (Bojórquez Pereznieto, 2012: 171).

No obstante, el éxito en la expansión del concepto ha provocado su generalización

---

<sup>18</sup> El término sociedad red fue acuñado en 1991 por Jan Van Dijk en su obra *De Netwerkmaatschappij - La Sociedad Red* – aunque quien ha contribuido a su mayor desarrollo y popularización ha sido Manuel Castells en *La Sociedad Red*, el primer volumen de su trilogía *La Era de la Información*. En la Sociedad Red la realidad está construida por redes de información que procesan, almacenan y transmiten información sin restricciones de distancia, tiempo ni volumen. Esta nueva forma de entender el funcionamiento de la sociedad se basa en el fenómeno de la globalización, el cual se ha ido desarrollando gracias a Internet. Referencia obtenida en: ([http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad\\_red](http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_red)).



a prácticamente todas las cuestiones que tienen que ver con el gobierno, la transparencia, la protección de datos, el gobierno electrónico, la gestión del conocimiento, la mejora regulatoria, la participación ciudadana, la gobernanza y la creación de valor público. Así pues, “quedarían pocas actividades gubernamentales que no cupieran bajo su acogedor paraguas” (Villoria, 2012: 70). El riesgo al que se expone el concepto es que si gobierno abierto es cualquier cosa, entonces corre el peligro de no ser nada. Por ello es relevante delimitar su marco conceptual deslindando las ideas que están detrás de él para evitar “su disolución en un vaporoso marco referencial sin límites ni coherencia” (Villoria, 2012: 70). Aunque también es posible que en su propio sentido general deba existir una cierta ambigüedad donde la idea de que “el todo es nada, se convierta en la clave para la agenda de la modernización de las administraciones públicas” (Martínez Pujón, 2012: 142).

## 2. DIMENSIONES DEL GOBIERNO ABIERTO

Los tres principios que definen al gobierno abierto (transparencia, participación y colaboración) dibujan un nuevo modelo relacional e interactivo entre gobierno y ciudadanía, que a través de sus diferentes dimensiones ofrece novedosas alternativas de ejercicio de la soberanía en el siglo XXI. Sin embargo, aunque el gobierno abierto esté siendo reconocido como un paradigma emergente, aún es pronto para evaluar el alcance de sus resultados y nivel de desarrollo. Son numerosos los debates que se producen en torno a la idea de gobierno abierto y sus dimensiones, ya que su potencial para gobiernos, administraciones y ciudadanos, no es ajena ni para instituciones ni para el público en general.

En los últimos años, particularmente en el ámbito de la ciencia política, el concepto ha alcanzado una enorme popularidad y protagonismo, dando lugar a una meteórica propagación de su uso a pesar de la desigual velocidad en la profundidad de su definición, contenido y alcance. Sobre el riesgo que ello puede comportar, Merino (2005:11) señala que su debilidad es que sean las circunstancias las que resuelvan el contenido en cada caso concreto, en cada situación y en cada lugar. En esa circunstancia cada quien puede darle una definición y un alcance distintos, y ello, junto su posible utilización como estrategia de marketing institucional o electoral, es una de las principales

inquietudes que giran en torno a la idea de gobierno abierto (Dupuy y Pérez, 2012: 358).

Las dimensiones que se exponen a continuación ponen de manifiesto la existencia de distintas ópticas que sitúan el foco en diferentes elementos que entran en juego, no sólo en lo que se refiere a su definición, sino también a su potencial formulación, desarrollo y ejecución. La dificultad de encajar coherente y equilibradamente todas sus dimensiones —las aquí propuestas u otras que pudieran incorporarse en un futuro— demuestra que efectivamente se está frente a un nuevo paradigma cuyo nivel de integralidad es el reflejo de las diferentes concepciones e ideas que se insertan en él.

#### **A) La gobernanza colaborativa a través de las TIC**

Para entender el surgimiento del gobierno abierto, dos factores esenciales merecen ser destacados: en primer lugar, la influencia de la teoría política de la gobernanza, ya que los objetivos que ésta persigue son claros y convergentes en torno a la idea de refuerzo de la sociedad civil, la participación, la cooperación, la rendición de cuentas, la transparencia y el buen gobierno; en segundo lugar, los procesos de innovación tecnológica que actualmente ofrecen un universo de posibilidades en la comunicación que han modificado los esquemas convencionales de relación, obligando a la sociedad en su conjunto a una adaptación y reciclaje continuo.

En uno de los diez textos de referencia sobre la gobernanza actual, Cerrillo señala que si la gobernanza implica la toma de decisiones en contextos complejos y cambiantes, con pluralidad de actores con intereses diferentes, los principios de buena gobernanza deberían garantizar que: i) participen todos los actores que deben estar con el rol que les corresponda; ii) tengan la legitimidad para poder cumplir con su papel; y (3) estén facultados en la toma de decisiones (Cerrillo, 2005: 19). De ahí que pueda afirmarse que los principios fundamentales que integran la gobernanza (participación, transparencia, *accountability*, eficacia y coherencia) favorecen la puesta en marcha de iniciativas de gobierno abierto. La nueva gobernanza en red aúna a actores sociales, individuales u organizados en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas con el objetivo de mejorar las demandas sociales y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Así través de “un nuevo modelo de democracia participativa, los individuos participan

directamente, canalizan sus intereses a través de actores normalmente ajenos a la articulación partidista y refuerzan la *accountability* horizontal y social frente a la tradicional *accountability* vertical” (Campo y Haro, 2009: 4).

El gobierno abierto, conceptualmente, responde a la decisión de los gobiernos (sea cual sea su ámbito territorial) de optar por la evolución, el progreso y la innovación, desterrando esquemas estáticos, tradicionales y obsoletos. En este contexto el valor del conocimiento de las personas dispuestas a participar es clave. Un conocimiento colectivo que “recoja más ajustadamente la posible sabiduría resultante de la relación de grandes cantidades de datos y de varias personas participantes deliberando en torno a unos objetivos comunes” (Graells i Costa, 2012: 476). El gobierno abierto como filosofía y estrategia cree que los mejores resultados suelen ser impulsados por la asociación entre ciudadanos y gobierno. De ese modo, se centra en el logro de objetivos a través de una mayor transparencia y una mejor gestión mediante una activa participación ciudadana aprovechando las nuevas tecnologías para alcanzar los resultados deseados. El principio de la colaboración, el más novedoso, es el que marca y singulariza este modelo interactivo entre gobierno y sociedad. Se trata de un nuevo patrón de gobernanza colaborativa en el que se coopera, se contribuye, se trabaja conjuntamente para mejorar la formulación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas (Cotino, 2013: 58).

La dimensión de la gobernanza colaborativa sitúa a gobiernos y ciudadanía frente al reto conjunto de llevar a cabo un aprendizaje mutuo para colaborar a través de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la sociedad de la información que están cambiando la manera de ver el mundo y, sobre todo, la manera de gestionarlo. Las TIC brindan la posibilidad de promover un diálogo directo y sin intermediarios en un siglo donde la innovación y las nuevas tecnologías, gracias a la globalización, se han convertido en un instrumento clave de los procesos de desarrollo y de acceso a los derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

La innovación se inscribe en un proceso de cambio y mejora de los individuos, de su entorno y su ámbito, pero bajo ninguna circunstancia puede concebirse como un acontecimiento accidental. Las TIC así lo demuestran, permitiendo a la ciudadanía

acercarse a otras realidades, al conocimiento de experiencias y prácticas de derechos sociales, económicos y culturales que provocan una mayor conciencia de las posibilidades que éstas ofrecen en la esfera pública y privada.

Los gobiernos, conscientes de que este fenómeno ha aumentado vertiginosamente el nivel de exigencia ciudadana, cuentan con un activo muy valioso. Por ello, los procesos de innovación deberían perseguir el objetivo de la plena democratización tecnológica (del acceso a las nuevas tecnologías) como fin político transversal. Siguiendo a Criado (2012: 6), cabe señalar que las tecnologías han reforzado la conciencia ciudadana de derechos y, por tanto, han ampliado la responsabilidad de los gobiernos en la práctica a través de un reflejo tangible en los entornos de la web 2.0, caracterizada por:

- La innovación en el sector público ligada a los actores que se encuentran fuera de los límites de las organizaciones y que tienen la facultad de generar información y contenidos y de analizarla de forma permanente.
- El proceso de creciente desintermediación de las actuaciones entre individuos e instituciones mediante el cambio en los procesos de generación de valor.
- La modificación de las dinámicas de relación al promover vínculos con mayor horizontalidad y menor coste.

Es evidente que gracias a los procesos de innovación tecnológica las formas de comunicación han evolucionado vertiginosamente en los últimos años. Afortunadamente dicha evolución cultural, que supone comprender internet con todo lo que ello implica, está siendo asimilada por gobiernos y administraciones de diversos países, regiones y ciudades. Los distintos niveles de gobierno han entendido que su relación con la ciudadanía debe tender a ser un modelo colaborativo, interactivo y tecnológico, características que se encuentran en el ADN de las iniciativas de gobierno abierto.

## **B) Gobierno electrónico y *open data***

El gobierno abierto es un concepto que comparte principios con otras ramas de la ciencia política, tales como la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, o la administración electrónica. Además, cuenta con un elemento novedoso

que ha transformado la forma de comunicación y de relación de la ciudadanía entre sí y de ésta para con instituciones, administraciones y gobiernos. Sin embargo, es relevante tomar como referencia los conceptos utilizados en la década de los sesenta del siglo XX como ‘gobierno electrónico’ o ‘e-gobierno’ para señalar las oportunidades que se abrieron en la manera de entender la gestión pública con el surgimiento e introducción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que han tenido efectos directos en la forma de gobernar (Coroján y Campos, 2012: 121)

En su origen, existían dos corrientes principales en torno al alcance y límites de la administración electrónica. Un primer grupo de autores como Jaeger (2003), Liikanen (2003), o Parent (2005), consideraban que el gobierno electrónico simplemente suponía una mejora técnica e instrumental de los procesos administrativos, simplificando y mejorando con el uso de la tecnología e internet el acceso y la entrega de información gubernamental a los ciudadanos, empresas, empleados del gobierno y otros organismos, aumentando así la calidad de los servicios. Por el contrario, un segundo grupo, entre los que destacan West (2004) y Coursey y Norris (2008), percibieron que el gobierno electrónico podría ser el inicio de transformaciones más profundas que van más allá de mejoras instrumentales y técnicas y que promueven modificaciones en la cultura de los gobiernos y de la forma de gobernar (Campos y Coroján, 2012: 121-122). Para esta corriente existe un elemento clave en las políticas de gobierno abierto: la apertura de datos. Su lógica es que no puede existir gobierno abierto si, como punto de partida, no existe un acceso libre, abierto y gratuito a datos y a toda la información relacionada (*open data*) y, si no existen los mecanismos necesarios para la participación y acción de los ciudadanos con estos datos (*open action*). Este nuevo intercambio de datos abiertos a la ciudadanía se cimenta en una nueva sociedad colectiva, complementaria a la tradicional, que muestra una implicación práctica y real en la toma de decisiones colectivas, así como en el ejercicio del control social (Campos y Coroján, 2012: 125).

Desde esta óptica, el gobierno abierto supone, por tanto, un paso más allá del gobierno electrónico, en la medida en que éste se refiere principalmente a la aplicación de la tecnología, de las herramientas necesarias para obtener la mayor eficiencia y efectividad de los trámites, procedimientos y servicios que las instituciones y organismos

públicos ponen a disposición de los ciudadanos, y a abrir nuevos canales de comunicación. Por su parte, el gobierno abierto se basa en los avances técnicos para ir más allá de la mera instrumentalización técnica y lograr un nuevo modelo relacional entre gobierno y ciudadanía, superando el esquema del ciudadano-cliente donde la ciudadanía se entiende como uno de los pilares fundamentales del funcionamiento del sistema (Coroján y Campos, 2012: 124).

### **C) Derechos fundamentales e inteligencia cívica**

El gobierno abierto parte de la certera necesidad de “repensar la administración pública, de transformar la sociedad y de contribuir a desarrollar democracias más sanas; de pasar de las jerarquías a las redes, de asumir compromisos transversales y de generar, en conjunto con otros actores sociales y económicos, un mayor valor público” (Ramírez-Alujas, 2012: 103), donde la participación sustantiva de la ciudadanía refleje el ejercicio de su derecho fundamental de formar parte en la toma de decisiones de los asuntos públicos (Dupuy y Pérez, 2012: 359). Por su parte, Cobo (2012:101) subraya que el gobierno abierto ofrece una serie de ideas provocadoras sobre la reconstrucción del concepto gobierno a través de nuevas formas que podrían mejorar las capacidades de las sociedades democráticas para hacer frente con eficacia, de manera sostenible y equitativa a temas de interés común. Esto es, si un gobierno abierto lleva a cabo adecuadamente las ideas de apertura podría mejorar la democracia y la inteligencia cívica, entendida como la persecución de fines de carácter colectivo que ahora, con el avance tecnológico propiciado por la web social y la extensión de internet como red global, es posible poner en práctica de forma masiva y con unos costes asumibles para los estados.

Sin embargo, hablar de gobierno abierto supone también hablar de derechos, en concreto del derecho a la participación y del derecho de acceso a la información pública. Ambos constituyen derechos humanos reconocidos formalmente desde hace varias décadas a través de distintos instrumentos internacionales y en la mayoría de las constituciones de los países desarrollados. Así, el derecho de acceso a la información forma parte íntegra de la libertad de expresión como derecho fundamental en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que se convirtió en una

obligación apremiante con el ‘Pacto relativo a los derechos civiles y políticos’ (ONU, 1966).

En el ámbito europeo el Consejo de Europa reconoció estos derechos en el año 2009 al someter a la firma de sus 47 Estados miembros la ‘Convención sobre el acceso a los documentos públicos’, primer instrumento jurídico internacional con carácter imperativo en la materia (Carnavaggio, 2011: 8-9). La Convención proporciona una base de normas mínimas para que los Estados miembros adapten su legislación a dichos presupuestos esenciales y, aunque actualmente no incluya todos los adelantos que se han producido, en apenas cinco años se ha convertido en un instrumento jurídico de referencia<sup>19</sup>. Del mismo modo, la Unión Europea reconoció el derecho de acceso de los ciudadanos europeos a los documentos de las instituciones europeas, y el Tratado de Lisboa de 2007 lo ha consagró como derecho fundamental<sup>20</sup>. Por ello, Dupuy y Pérez enfatizan la idoneidad de incorporar este enfoque de derechos fundamentales al concepto de gobierno abierto para garantizar que estos derechos sean respetados, protegidos, garantizados y promovidos por el Estado sin tener que depender de la voluntad de los gobiernos de turno. Las autoras ponen el acento en esta reflexión, puesto que en el ejercicio de la práctica del gobierno abierto no contar con una definición clara del mismo puede derivar en que “la atención de las agencias gubernamentales gire hacia la divulgación de información gubernamental en formatos abiertos, por ejemplo, sobre los servicios que provee el Estado, y dejen de lado las reformas legislativas, institucionales y la puesta en marcha de políticas públicas encaminadas a lograr un mayor desarrollo de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación efectiva” (Dupuy y Pérez, 2012: 359).

Abordar políticas de datos abiertos puede ser más sugerente y visible en el marco de las políticas de gobierno abierto de ahí que los gobiernos hayan privilegiado compromisos relativos a la publicación de información gubernamental en formatos abiertos. Mendel lo ha documentado en relación los países que participan en el OGP. En

---

<sup>19</sup> Versión en español de la convención es accesible en: [http://www.accessinfo.org/documents/Access\\_Docs/Advancing/Council\\_of\\_Europe/Convention\\_on\\_Access\\_to\\_Official\\_Documents\\_CofE.\\_es.pdf](http://www.accessinfo.org/documents/Access_Docs/Advancing/Council_of_Europe/Convention_on_Access_to_Official_Documents_CofE._es.pdf)

<sup>20</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E015:FR:HTML>

el año 2012 únicamente el 30% de los miembros se comprometió a realizar reformas legislativas significativas en materia de acceso a la información. Dicho 30% estaba distribuido entre los miembros que contaban con una ley de transparencia (21%) y los miembros que no contaban con dicho instrumento (9%). Ello no debería ir en detrimento de las reformas necesarias en los marcos normativos que favorezcan el desarrollo de modelos integrales de gobierno abierto, favoreciendo no sólo la transparencia y los datos abiertos, sino también la participación y colaboración ciudadana (Mendel, 2012: 1).

#### **D) Reforma del Estado y fortalecimiento de la democracia**

La formulación de una política de gobierno abierto va más allá de una serie de reformas puntuales de modernización de la gestión pública, de la apertura de datos o de la mejora de los niveles de transparencia —todas ellas necesarias— sino que supone profundizar en el ejercicio de la democracia. De ahí que la cuestión planteada por Ramírez y Güemes sobre si gobierno abierto y reforma del Estado son espacios convergentes sea adecuada, ya que permite advertir qué procesos serían necesarios para formular una reforma que conduzca a un modelo de gobierno abierto (Ramírez y Güemes, 2012: 197; Calderón y Lorenzo, 2010: 15; Linares, 2010: 59). La respuesta a esta pregunta es compleja, del mismo modo que abordar esos procesos de cambio lo sería. Se sintetizan a continuación aquellos procesos que los autores estiman más relevantes para marcar la hoja de ruta hacia la consecución de un gobierno abierto:

- El proceso de institucionalización y sedimentación del cambio implica promover y aplicar políticas de gobierno abierto en la infraestructura misma del Estado, entendiéndolo como un proceso de apertura hacia la sociedad que permita generar un círculo virtuoso de la transparencia y rendición de cuentas, la participación y la colaboración.
- El proceso de cambio profundo en la cultura administrativa que resulte en una función pública y servicios públicos como espacios abiertos al diálogo y construcción colectiva, capaces de entrelazar actores que habitan fuera del Estado bajo la amplia etiqueta de sociedad civil y sector privado (donde se concentrarían capacidades disponibles y distribuidas de energía cívica, ideas, talento,



conocimiento, etc.).

- El proceso de fomento de una ciudadanía activa dispuesta a superar prejuicios sobre las instituciones y sus profesionales. No solo se necesitan profesionales de la administración dispuestos a dialogar con los actores sociales, sino ciudadanos interesados en aportar a la construcción de lo público.

El cambio hacia el gobierno 2.0 se traduce en una nueva manera de entender el servicio al ciudadano, con mayor nivel de exigencia, transparencia, eficiencia, colaboración, innovación y control del gasto. Se trata de una práctica centrada en servir a la ciudadanía y dispuesta a compartir con el ciudadano, para lo que según Ramírez y Güemes (2012: 198) es necesario:

- Reflexionar sobre el tipo de organización pública que se requiere para asumir en propiedad el desafío de promover e impulsar este nuevo modelo basado en la transparencia, la colaboración y el trabajo en red.
- Disponer y/o diseñar una arquitectura institucional en los gobiernos y las administraciones —desde la óptica política, organizativa, de gestión pública— que posibilite la promesa del gobierno abierto de cara a la sociedad. La gestión administrativa ofrece en numerosas ocasiones una valoración positiva de la ciudadanía permitiendo acortar el distanciamiento entre los ciudadanos y la acción política (Arenilla, 2011: 26).
- Generar las capacidades adecuadas para promover, adoptar y adaptar medidas ligadas a la idea de gobierno abierto, aprovechando a los profesionales intraemprendedores <sup>21</sup> o agentes de cambio que se encuentran entre los profesionales de la administración pública.

En suma, es necesaria la evolución del Estado en sus formas y valores para el fortalecimiento de la democracia participativa. El siguiente paso debe consistir en democratizar la toma de decisiones, abrir la caja donde se delibera sobre las políticas

---

<sup>21</sup> Un intraemprendedor es un profesional que hace cosas nuevas a las establecidas dentro de una organización. El intraemprendedor o agente de cambio en la administración pública es aquel profesional capaz de repensar, crear y cuestionar cualquier servicio, entender las necesidades de la ciudadanía y no estar sujeto a las bondades de la administración (Sancliment, 2014: 8)

públicas, integrar a los ciudadanos en las discusiones de los asuntos públicos y utilizar las TIC como medio para colaborar y gestionar con los ciudadanos las cuestiones de interés general (Bojórquez Pereznieto, 2012: 173).

### **E) Participación y colaboración: ciudadanía 2.0**

La crisis de confianza en los gobiernos ha sido una constante en diversos contextos geográficos y temporales, consecuencia de la pérdida de expectativas de la población sobre la clase política y su desencanto con las instituciones. Aun así, actualmente podría afirmarse que la crisis de confianza ciudadana en las sociedades desarrolladas está amplificada debido a las posibilidades de acceso a la información y a la oportunidad de compartirla, en una evolución constante y espontánea de opiniones, juicios e ideas. Asimismo, los instrumentos de participación implican la organización de diversos intereses sociales, dotados de nuevos representantes que intervienen en los procesos de toma de decisiones. El éxito de su acceso depende de los recursos que son capaces de congregarse, de su capacidad organizativa y de su destreza para optimizar el juego de interrelaciones con las autoridades administrativas y políticas. La apertura de foros para el debate, la consulta o la codecisión modifica la lógica de la representación mediante el reconocimiento por parte de las autoridades políticas de una línea paralela de representación de intereses individuales a la que se les otorga la facultad de intervenir en las decisiones que afectan a la colectividad (Ruano, 2010: 106)

El impulso en la adopción de medidas que mejoren la democracia representativa a través de políticas de participación en determinados ámbitos de gestión persiguen lograr una mayor implicación de los gobiernos en la toma de decisiones públicas y alcanzar mayores cotas de legitimidad y retorno social. Como afirmó John Wonderlich, Director de Programas de la Fundación *Sunlight*<sup>22</sup>, quien saltó a la fama una vez que el Presidente Barack Obama confiara en él para desarrollar en la administración americana el proyecto

---

<sup>22</sup> La Fundación *Sunlight* es una organización norteamericana, no partidista, sin fines de lucro que utiliza las herramientas de la tecnología cívica, el *open data*, el análisis de políticas y el periodismo para hacer que el Gobierno de los EEUU lleve a cabo una política más responsable y transparente. La visión de esta organización es utilizar las TIC para permitir una participación democrática más completa, equitativa y eficaz. Su objetivo primordial es lograr cambios en las leyes para requerir en tiempo real de toda la información del gobierno, en especial la económica.

*open government*, la iniciativa no se ciñe solo a la administración pública sino que pasa a favorecer la comunicación y el intercambio de datos entre la sociedad y los partidos políticos, asociaciones civiles, colectivos sociales y vecinales, etc. (Wonderlich, 2009). De ahí que este modelo incipiente de gobierno participativo y colaborativo se presentase como un antídoto frente a la crisis de confianza y la desafección pública de los ciudadanos.

La participación ciudadana en la gestión pública como segundo principio del gobierno abierto cuenta hoy con condiciones que no existían hace apenas una década para intervenir en la esfera pública. Actualmente las nuevas herramientas tecnológicas amplían el horizonte de la participación más tradicional, vía partidos políticos, ONGs, asociaciones de vecinos, etc. La denominada generación web, encabezada por los más jóvenes, conoce el poder de la red para participar en múltiples entornos sociales, culturales, profesionales y políticos. Estas nuevas formas de articulación colectiva aún poco visibles en las estructuras decisionales formales pero cuyo potencial de futuro es una fuente de esperanza y nuevas oportunidades (Brugué et al, 2003: 11)

La utilización de movimientos de activismo *on line* como *Anonymous*, una superconciencia basada en internet, o la plataforma *change.org*, empresa social canalizadora de iniciativas y propuestas encaminadas al bien común, lejos de implicar desafección, significa todo lo contrario. Gracias a la universalización de la educación, existen ciudadanos más informados de los asuntos públicos, más conocedores de sus derechos, más exigentes en la rendición de cuentas. En otras palabras, “*más libres; por lo tanto menos manipulables*” (Graells i Costa, 2012: 473).

Sin embargo, las TIC han modificado la manera en que las administraciones y los ciudadanos interactúan, siendo la administración electrónica solo una de las posibilidades que tienen los gobiernos para acercar y transformar la gestión pública. Los ciudadanos cada vez operan más como agentes activos en la producción de contenidos web, convirtiéndose en prosumidores<sup>23</sup>, es decir, en protagonistas de la creación, edición,

---

<sup>23</sup> Actualmente el término se aplica en aquellos usuarios que ejercen de canales de comunicación humanos, lo que significa que al mismo tiempo de ser consumidores, son a su vez productores de contenidos. Un prosumidor no tiene fines lucrativos, sólo participa en un mundo digital de intercambio de información. La

intercambio y evaluación de contenidos web y de la formación de redes sociales a través de las que interaccionan entre ellos. La inteligencia colectiva es la clave del desarrollo y en la actualidad se cuenta con nuevas herramientas, métodos y sistemas que favorecen la cooperación con el objetivo de trabajar para el bien común. Un ejemplo existente es la web *challenge.gov*, una plataforma online en la que el gobierno estadounidense propone o desafía a los ciudadanos a resolver problemas públicos y les invita a participar proponiendo soluciones. Las redes sociales digitales permiten una conversación permanente con la ciudadanía, hecho que facilita la consolidación de nuevos nexos con el entorno y nuevas reglas en relación con los gobiernos que favorecen la colaboración (Criado, 2012: 9-10) a través de: i) la transformación en el proceder de las administraciones, al contar con la incorporación de temas a la agenda pública por parte de los ciudadanos; ii) la implicación en la mejora de los servicios públicos a través de su opinión, no solo a través de presentación de quejas o propuestas *a posteriori*, sino también mediante la participación *a priori* en los procesos de creación de nuevos contenidos que demanden su cooperación; y iii) la concepción de nuevos servicios ligados a la reutilización de los datos públicos. El gobierno abierto otorga a los ciudadanos la posibilidad de convertirse en sujetos activos y en piezas determinantes en el diseño y mejora de la gestión pública, ya que el diálogo directo de los ciudadanos con los representantes electos y la administración supone una variable a considerar por parte de los gobiernos. En este modelo de interacción gobierno-sociedad “el funcionario pierde el monopolio del conocimiento y el *expertise*, debiendo recrear su relación con el ciudadano, ahora ciudadano digitalmente conectado (*netizen*), pasando de una relación vertical a una de colaboración horizontal” (Villoria, 2012: 88).

### 3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ETAPAS

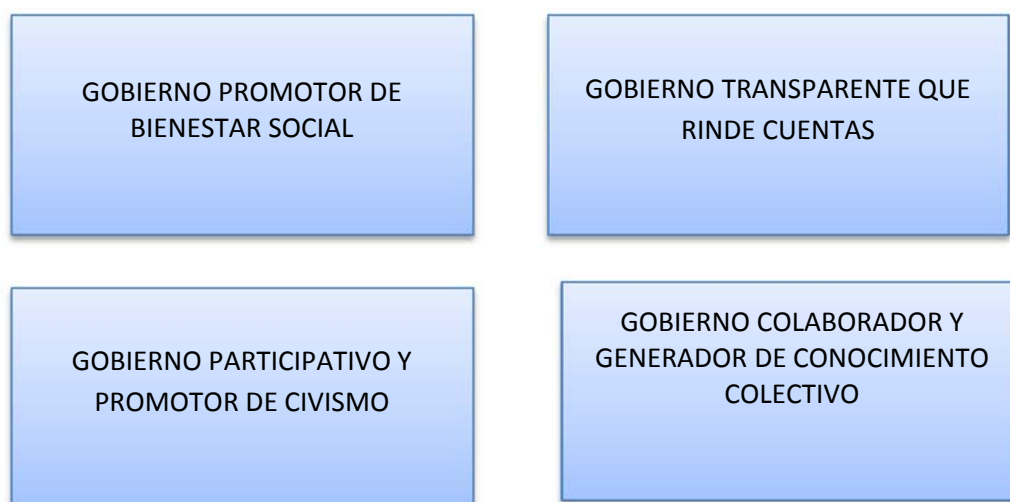
El esquema teórico o conceptual sobre gobierno abierto en apenas cinco años ha avanzado lo bastante como para considerarlo como un modelo consistente de gestión pública. El dinamismo con el que se ha incorporado el concepto de gobierno abierto como

---

palabra prosumidor describe perfectamente a millones de participantes en la revolución del web 2.0 ya que son cada vez más las personas involucradas que suben información a la red y a su vez son consumidores de la misma, creando así un abanico de información en todos los sentidos.

prometedor modelo de administración ha dado lugar a multitud de definiciones y aproximaciones. Debido precisamente a su carácter novedoso, no se ha profundizado lo suficiente sobre las ideas que lo componen y que pueden servir de base para identificar los diferentes modelos de gobierno abierto existentes (Villoria, 2012: 71).

**Figura 12: Fundamentos teóricos del gobierno abierto**



Fuente: Villoria, 2012; 2014

Villoria realiza un análisis sobre cuáles son los cuatro fundamentos teóricos que están detrás del gobierno abierto. Cada una de estas teorías cuenta con sus correspondientes sistemas de creencias, ideas, concepciones de los actores e instrumentos: i) el gobierno promotor de bienestar a través de la capacidad regulatoria; ii) el gobierno transparente que rinde cuentas; iii) el gobierno participativo y promotor de civismo; y iv) el gobierno eficiente, colaborador y generador de conocimiento. Las dos primeras están basadas en la regulación y en el papel del Estado en la generación de instituciones y reglas para promover beneficios en la sociedad, mientras que las dos siguientes se basan en la capacidad de la sociedad para crear mejoras sociales por sí misma y con el Estado (Villoria, 2012: 77-86; 2014: 12).

#### **A) Gobierno promotor de bienestar social**

El gobierno abierto promotor de bienestar social responde a la teoría de la mejora regulatoria dirigida a los ciudadanos, donde el Estado incentiva conductas beneficiosas

para la sociedad y promueve el bienestar colectivo. Aquí las políticas son diseñadas para ayudar a los individuos en la toma de decisiones, pero sin interferir en su autonomía, pudiendo elegir de forma racional y deliberada. Sustain describe este enfoque en el que la regulación por parte de los gobiernos permite a los ciudadanos tomar las mejores decisiones acorde a los objetivos sociales deseables sin tener que forzarles a ello. A través de ideas como ‘la arquitectura de la elección’ el autor expone el papel de las instituciones como orientadoras del cambio de conducta de los ciudadanos indicando como a través de modificaciones concretas en el modo en que son presentadas las opciones a los ciudadanos se pueden obtener grandes transformaciones. Para ilustrar la teoría Sustain utiliza la analogía de un GPS que propone un camino para llegar a un destino y en la que los individuos deciden libremente si seguir o no la ruta sugerida (Sustain, 2014).

En este sentido, destaca que la mejora de los procesos de decisión no sólo involucra a los ciudadanos, sino también a las instituciones en cuanto a la simplificación del diseño y las medidas para generar una arquitectura de fácil elección para las personas. Estaríamos frente a un modelo de paternalismo libertario que implica que aunque haya una medida implementada desde las instituciones (públicas o privadas), la persona conserva su poder de decisión porque tiene la libertad de no adoptarla. En este sentido, las reglas de opciones predeterminadas son importantes en las instituciones porque contribuyen a cambiar las conductas de la población y mejoran el desempeño de las instituciones (Sustain y Thaler, 2003).

El papel de las instituciones en el diseño de una arquitectura de la elección reconoce la relevancia del poder decisorio de la ciudadanía, pero pone el acento en la responsabilidad de las instituciones en su misión de construcción de señales que orienten a una mejor decisión de la población, favoreciendo su ‘navegabilidad’ aunque con el límite de no conducir a la manipulación en la toma de decisiones. El riesgo de un modelo abierto basado en este fundamento reside en los avances realizados en las ciencias del comportamiento humano que pueden ser usados por los *policy makers* para influir conductas en el público de una forma previsible a través del diseño de los entornos propicios en los que los ciudadanos deben realizar sus elecciones (Villoria, 2012: 79).

## B) Gobierno transparente que rinde cuentas

El nuevo institucionalismo abrió nuevas perspectivas para la comprensión de la dinámica de los procesos políticos donde las instituciones ganan una notable influencia en las estrategias de los actores y en las políticas públicas que resultan de ellas (March y Olsen, 1989; Garrido y Parra: 2009: 4). Las instituciones, entendidas como conjunto de reglas interrelacionadas que definen las acciones en términos de relación entre roles de los actores y situaciones, comprenden las estructuras formales, las normas, procedimientos e interpretaciones que hacen más predecible y racional el comportamiento de una organización. Éstas, desde el enfoque sociológico del neoinstitucionalismo, pueden funcionar mediante la lógica de lo apropiado (*logic of appropriateness*) o la lógica de la consecuencia (*logic of consequentialism*) (March y Olsen, 1989, 21). A través de las reglas y la ‘lógica de lo apropiado’, las instituciones políticas generan por un lado orden, estabilidad y predictibilidad, y por otro, flexibilidad y adaptabilidad (Rivarola, 2007: 168; Villoria, 2012: 81).

A partir del desarrollo del nuevo institucionalismo se han llevado a cabo numerosas investigaciones que tratan de definir cuáles son los requisitos de las ‘buenas instituciones’. Puede entenderse que son aquellas que, a partir de un conocimiento acumulativo, acaban siendo legítimas, equitativas, eficientes, estables y flexibles (North, 2005), y, gracias a ello, constriñen conductas ineficientes, fraudulentas e ilegales en la sociedad y en el Estado, incentivando lo contrario (North, 2005; Villoria, 2012: 81). Las instituciones influyen sobre las percepciones, las preferencias y las capacidades de actores individuales o colectivos y sobre la manera en que estos actores interactúan. Por ello, las instituciones constituyen una fuente esencial de información de los actores y el principal factor que incide sobre sus posicionamientos, en el sentido de que pueden reducir los incentivos para seguir ciertas estrategias de acción o aumentar los estímulos para realizar otras (Del Campo, 2008: 8).

El gobierno abierto puede responder a la lógica del gobierno que promueve instituciones transparentes y que rinden cuentas. Aquí la vertiente reguladora se encuentra dirigida al propio gobierno con el objetivo de promover conductas virtuosas en las

instituciones. Este fundamento comparte objetivos con la buena gobernanza en torno a la idea de reforzamiento de la sociedad civil, la participación, la cooperación, la rendición de cuentas, la transparencia y el buen gobierno, a pesar de que el foco de su atención son las instituciones y su buen o mal comportamiento (Villoria, 2012: 80). Sin embargo, los modelos de gobierno abierto basados en este fundamento corren el riesgo de centrar sus acciones exclusivamente en materia de transparencia, que si bien es condición necesaria para la participación, no la garantiza de forma automática, y ello implicaría no alcanzar la integralidad del modelo.

### **C) Gobierno participativo y promotor de civismo**

El gobierno abierto puede encontrar su anclaje teórico en sistemas altamente interactivos, esto es, gobiernos participativos basados en democracias fuertes que buscan una implicación cívica continuada a través de una democracia deliberativa con mayor compromiso de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Ya a mediados de los setenta se publicó el Informe de la Comisión Trilateral sobre la Crisis de la Democracia (Crozier *et al.*, 1975: 158-59). El Informe llegó a la conclusión de que la falta de confianza en el funcionamiento de las instituciones de los gobiernos democráticos se había generalizado en los países con democracias desarrolladas. Desde entonces, hubo expresiones periódicas de preocupación a partir de datos que demostraban que los ciudadanos estaban insatisfechos y desilusionados con las instituciones centrales de la democracia representativa. Dicho descontento no provenía de actitudes antidemocráticas, sino de una tensión entre los ideales democráticos y su percepción acerca del funcionamiento real del sistema (Newton y Norris, 1999a: 2). En virtud de sus expectativas la democracia funcionaba mal, pero ello no era una razón para renunciar a ella sino para exigir su funcionamiento efectivo a través de la demanda de más y mejor democracia. Tal explicación dio lugar a la construcción de la categoría de los ciudadanos críticos, la cual hace referencia a la situación de apoyo global hacia la democracia frente a equívocos conceptos como la de los ciudadanos desencantados, desconfiados, cínicos o descontentos (Norris, 1999b).

Actualmente la categoría de los ciudadanos críticos sigue siendo acertada. Si bien



de acuerdo a los diferentes informes acerca del estado de la democracia el descontento no habría cesado, ninguna democracia ha experimentado una debacle en los últimos años. Incluso las crisis políticas en regímenes autocráticos han sido asociadas a la aspiración democrática de sus ciudadanos, siendo una evidencia significativa lo acaecido recientemente en los países árabes. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, se expresaba así durante la 125ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria en 2011 al referirse al movimiento democrático en Medio Oriente y África del Norte: “los jóvenes han ayudado a cambiar el mundo de hoy, han tomado las calles, exigiendo mayores oportunidades de participar en la vida económica y política. Ellos ya se han convertido en los líderes del hoy. El futuro está en sus manos. Escuchémoslos a ellos” (Ban Ki-moon, 2011).

La participación ciudadana es un elemento consustancial a la democracia, en entornos de gobernabilidad democrática avanzados, e implica la intervención de los ciudadanos en el gobierno, consecuencia precisamente del nivel de desarrollo y formación de sociedades que se vuelven más críticas y exigentes con sus gobernantes. Existen diversos niveles para entender la participación de la sociedad en las políticas públicas, bien sea a través de la participación electoral vía sufragio universal, a través de mecanismos que implican tener en cuenta las preferencias y las opiniones de los ciudadanos en la formulación de políticas o mediante instancias para incidir en las estructuras estatales y en las políticas públicas a través de la cogestión o cogobierno. Esto último implica, desde la perspectiva estatal, un gobierno que: i) promueve la ciudadanía, la integración y la discusión pública; ii) fomenta la participación de los ciudadanos en el diseño y la prestación del servicio; iii) determina la agenda de las políticas, convocando a la mesa a los agentes apropiados; iv) facilita y gestiona soluciones sostenibles para los problemas públicos; y v) difunde la información para enriquecer el debate público y promover una visión compartida de los asuntos públicos (Bourgon, 2007). Frente a la visión simplista de la participación, este modelo entiende la democracia como el derecho del pueblo a equivocarse en su autogobierno (Villoria: 2012: 83). Un modelo de gobierno abierto basado en modelos participativos y promotores de civismo está obligado a realizar reformas profundas en los marcos normativos para adaptarlos a las nuevas demandas de

los nueva sociedad red. Para Manuel Castells la estructura social se crea a través de tres tipos de relaciones: i) relaciones de producción, muy ligadas a la interacción del hombre con la naturaleza y cómo aquel transforma a ésta para la creación de bienes y servicios que satisfagan sus necesidades; ii) relaciones de experiencia, núcleo fundamental de las relaciones humanas y que se han estructurado históricamente alrededor del sexo y la familia; y iii) relaciones de poder, entendido este como la habilidad de ejercer la violencia para garantizar el cumplimiento de las reglas sociales dominantes En la Sociedad Red la realidad está construida por redes de información que procesan, almacenan y transmiten información sin restricciones de distancia, tiempo ni volumen. Esta nueva forma de entender el funcionamiento de la sociedad se basa en el fenómeno de la globalización, el cual se ha ido desarrollando gracias a Internet (Castells, 1999).

#### **D) Gobierno colaborador y generador de conocimiento colectivo**

En cuarto lugar, la dimensión basada en un gobierno abierto generador de conocimiento colectivo a través de la gestión pública cooperativa, basado en el Estado que promueve la colaboración y la cooperación para la creación de ideas a través de la conversación entre actores públicos y privados para la solución de problemas colectivos (Cotino, 2013: 57). El cooperativismo, trabajar conjuntamente colaborando, creando sinergias, dinámicas ganadoras y conciliadoras para todos los actores que intervienen, puede — y debe— ser un valor del que se puede apropiar cualquier tipo de organización social, política o empresarial (Sunyer, 2014).

Hoy en día los ciudadanos disponen de nuevas libertades para actuar en conjunto, aumentar su satisfacción personal, crear valor público y realizar mejoras en la sociedad. La cantidad de valor público y cívico que puede obtenerse del excedente cognitivo<sup>24</sup> es una cuestión fuertemente ligada a la cultura de los grupos que realizan los intercambios y a una nueva sociedad proclive a compartir en masa (Shirky, 2010: 27-28). Estas nuevas formas de colaboración masiva pueden encontrar sus orígenes en uno de los ejemplos

---

<sup>24</sup> Según Shirky, la sociedad actual tiene un excedente de intelecto, energía y tiempo, que él denomina ‘excedente cognitivo’. Durante años, ese potencial ha tenido poca repercusión pues la televisión ha consumido la mayor parte de nuestro tiempo sin revertir de ningún modo el bien común. Ahora, por primera vez, la sociedad está utilizando los nuevos medios digitales que permiten unir esfuerzos a un coste prácticamente inexistente (Shirky, 2010).

paradigmáticos de este ejercicio de cooperación ciudadana. En el año 2007 se creó un servicio llamado '*Ushadidi*' para ayudar a los ciudadanos a realizar un seguimiento de los estallidos de la violencia étnica en Kenia. En aquel momento, una activista política keniana escribió un blog sobre la violencia que se estaba produciendo en el país, mientras que el gobierno de Kenia prohibía que los principales medios de comunicación informaran de ello. Más tarde pidió a sus lectores que le enviaran correos electrónicos o publicaran comentarios en su blog sobre los actos violentos de los que pudieran ser testigos. *Ushadidi* se desarrolló para acumular este conocimiento disponible pero disperso, difícilmente obtenible por la propias autoridades, y evolucionó hasta la posibilidad de aportar información vía mensajes de texto. Pocos meses después, la *Kennedy School of Government* de la Universidad de Harvard realizaba un análisis que comparaba los datos del sitio web con los de los principales medios de comunicación y concluyó que *Ushadidi* había sido mejor al informar sobre los actos de violencia y con una mejor cobertura geográfica, incluidos los entornos rurales. Esta información resultó útil para ilustrar que los gobiernos actúan de forma menos violenta contra sus ciudadanos cuando saben que están siendo observados. Así, las organizaciones no gubernamentales kenianas utilizaron estos datos para dirigir las respuestas humanitarias (Shirky, 2012: 28-30).

Actualmente existen numerosos ejemplos de nuevos modelos de participación que van desde lo global y general a lo local y concreto, así las iniciativas *We, the people* o *Challenge.gov* impulsadas por el Gobierno de los Estados Unidos están inspirando a gobiernos y administraciones de todo el mundo. El derecho de petición ante el Gobierno de los Estados Unidos está garantizada por la Primera Enmienda de su Constitución. *We, the people: your voice in our government* (Nosotros, el pueblo: tu voz en nuestro gobierno) ofrece una nueva forma de presentar una petición al Gobierno para la toma de decisiones sobre cuestiones importantes a las que debe hacer frente el país. De ese modo, si una petición obtiene suficiente apoyo, la Casa Blanca debe emitir una respuesta oficial. *Challenge.gov*, a cargo de más de sesenta y nueve agencias en todo el gobierno federal, es una plataforma donde el gobierno de Estados Unidos busca soluciones innovadoras y reta a la ciudadanía a que le ayude a encontrarlas mediante un concurso en el que compiten

las mejores ideas, se reconoce el talento de la ciudadanía y se embarcan conjuntamente gobierno y ciudadanos en la tarea de resolver los problemas de la sociedad estadounidense.

Otros ejemplos son *Fix my Street* (Arregla mi calle), que nació en Reino Unido como un entorno de colaboración ciudadana para solucionar problemas en las ciudades y que ya ha sido replicada en otros países, o *Change my city* (Cambia mi ciudad) en la India, con su lema “*real change begins with me in my neighbourhood*” (el cambio real empieza en mi barrio), una plataforma digital que ayuda a lograr cambios en las ciudades, movilizar a la comunidad y conectar con el gobierno local, a través de la publicación de una queja y el fomento del voto comunitario para lograr que se resuelva el problema. En España han comenzado a surgir iniciativas análogas, entre las que destacan ‘Kolokvo’ una portal de reciente creación de propuesta-debate-petición que tiene como objetivo que la ciudadanía tome parte en las decisiones mediante procesos participativos, ‘Kuorum.org’, una empresa social cuya misión es mejorar la comunicación entre los ciudadanos y sus representantes políticos a través de la tecnología, ‘CitYsens’ una plataforma que permite a personas e instituciones informarse e informar sobre las iniciativas cívicas y sociales desarrolladas en la ciudad, ‘Hackity App’, una App para reimaginar la ciudad y hacer de los barrios un lugar mejor para vivir, o ‘TalentGob’, una plataforma digital donde los ciudadanos pueden colaborar e innovar con gobiernos y administraciones para solucionar retos del país.

Estos proyectos muestran como, desde una perspectiva de gobierno colaborativo, la ciudadanía pasa de la crítica a implicarse en el diseño de políticas públicas, dejando de ser espectadora para convertirse en evaluadora permanente, contribuyendo a la construcción de una cultura de la prevención y la colaboración, y utilizando la información como parte de su cotidianidad para mejorar su toma de decisiones. En resumen, la ciudadanía se convierte en generadora de valor público asumiendo un papel proactivo, mientras que los gobiernos no solo brindan información, sino que lo hacen de forma abierta, comprensible y tratable. De todo ello puede concluirse que la sociedad está encontrando mecanismos de participación y que las administraciones se adaptan a una realidad que tiende hacia una mayor y mejor participación en la era de la información y

la comunicación. Como muchos otros ejemplos de inteligencia colectiva impulsados por administraciones públicas, estos casos ilustran el modelo de gobierno abierto cooperativo o colaborativo, eje más novedoso en el marco de la adopción de políticas de gobierno abierto.

### **E) Etapas**

La apreciación de las diferentes ideas y principios que conforman la base teórica en la que puede sustentarse el gobierno abierto muestran como este nuevo paradigma responde a cuatro almas. Aunque éstas no están exentas de fricciones, la emergencia de un marco para la implantación de fórmulas de gobierno abierto pasa por su adecuada convivencia. De esa forma los gobiernos incentivan comportamientos beneficiosos para la sociedad, producen conductas virtuosas en las instituciones, generan implicación cívica y cooperan para la solución de problemas colectivos. Estos cuatro fundamentos constituyen una referencia obligada para delimitar el modelo predominante en cada sistema. Una vez identificadas las ideas que subyacen a un determinado modelo, se está en condiciones de abordar las etapas necesarias que permiten una adecuada implementación de una estrategia integral de gobierno abierto. De ahí que Lee y Kwak sugieran que el modelo de implementación del *open government* debe pasar por cuatro etapas: i) mayor nivel de transparencia en los datos; ii) mejora en los niveles de participación abierta al ciudadano; iii) progreso en los niveles de colaboración abierta a la sociedad; y iv) logro de la implicación ciudadana con carácter permanente (Lee & Kwak, 2011: 15-16; Villoria, 2012: 89).

**Figura 13: Desarrollo de un modelo de gobierno abierto**

ETAPAS	OBJETIVOS	RESULTADOS	BENEFICIOS
<b>Etapa 1: Incrementar la transparencia y la apertura de datos</b>	<p>Transparentar los procesos y las acciones del Gobierno</p> <p>Generar datos de calidad</p>	<p>Publicación de información y datos online</p> <p>Alto valor e impacto de los datos publicados</p> <p>Mejora de la calidad de los datos: exactitud, consistencia y oportunidad</p> <p>Opinión de los ciudadano sobre la utilidad y calidad de los datos</p>	<p>Aumento de conocimiento y conciencia de las acciones del gobierno</p> <p>Mayor responsabilidad del gobierno</p> <p>Reducción de las excepciones a la libertad de información</p> <p>Reducción del tiempo del trámite de peticiones de acceso a la información</p> <p>Base para la creación de valor público con la ciudadanía mediante el cambio de cultura hacia la apertura y la calidad de datos públicos</p>
<b>Etapa 2: Mejorar y abrir los mecanismos de participación</b>	<p>Recabar opinión de la población</p> <p>Instaurar un comunicación interactiva</p> <p>Establecer mecanismos de colaboración masiva (crowdsourcing)</p>	<p>Retroalimentación a través de encuestas, votaciones e ideas</p> <p>Respuestas a la ciudadanía en tiempo y forma</p> <p>Crowdsourcing para aprovechar experiencias, ideas y</p>	<p>Retroalimentación en tiempo real por parte de la ciudadanía</p> <p>Conversación con la comunidad acerca de los asuntos de gobierno</p> <p>Reducción de costes y tiempo para la innovación pública</p>

	Fomentar el uso de redes sociales y comunidades virtuales	<p>conocimientos de los ciudadanos</p> <p>Uso generalizado de las principales redes sociales para interactuar entre los ciudadanos y el gobierno</p>	Mayor sentido de comunidad y compromiso público
<b>Etapas 3:</b> <b>Intensificar los mecanismos de colaboración</b>	<p>Fomentar la colaboración intergubernamental e interadministrativa</p> <p>Crear espacios de colaboración abierta con la ciudadanía</p> <p>Instar la co-creación de servicios públicos</p> <p>Generar redes sociales colaborativas</p>	<p>Colaboración interinstitucional en proyectos complejos</p> <p>Cooperación con la ciudadanía para resolver problemas, para la toma de decisiones y elaboración de normas</p> <p>Colaboración público-privada para crear servicios públicos</p> <p>Respuesta colaborativa en caso de emergencias nacionales y desastres naturales</p> <p>Uso de los medios sociales de colaboración tales como Google Docs, wikis, etc.</p> <p>Procesos de colaboración abierto y disponible <i>on line</i></p>	<p>Creación de sinergias interadministrativas: ahorro de tiempo coste y resultados de mayor calidad</p> <p>Ahorro en tiempo y coste: innovación abierta de los ciudadanos</p> <p>Beneficios públicos: servicios de calidad e innovadores desarrollado por el sector privado</p> <p>Nuevas políticas y reglas resultado del proceso de colaboración abierta</p> <p>Respuestas eficaces y eficientes a emergencias nacionales y desastres naturales</p> <p>Participación de la ciudadanía a través de proyectos</p>
<b>Etapas 4:</b> <b>Llevar a cabo los compromisos</b>	Aumentar la transparencia, la participación, y la colaboración	Ampliación del alcance y profundidad de la transparencia, la	Participación continuada de los ciudadanos en actividades y

<b>de manera continuada y en todos los niveles</b>	Alcanza un compromiso público permanente e integrado	<p>participación y las capacidades de colaboración</p> <p>Integración sin fisuras de múltiples medios sociales dentro de las administraciones</p> <p>Integración del uso del móvil y sus aplicaciones en la relación entre gobiernos y ciudadanos.</p> <p>Ecosistema propicio para el compromiso público</p> <p>Incorporación en los procesos de gobierno de los procesos de participación pública.</p>	<p>programas de gobierno a través de plataformas online</p> <p>Creación de compromiso público a través de toda la vida</p> <p>Existencia círculos virtuosos para sostener y mejorar la participación pública</p> <p>Participación de los ciudadanos a través de múltiples canales de comunicación social</p> <p>Cambio de cultura del gobierno: los beneficios de un gobierno abierto son plenamente efectivos</p>
--	--	---	--

Fuente: Lee y Kwak, 2011

Los profesores Lee y Kwak (2011) presentaron esta hoja de ruta para el desarrollo de un modelo de gobierno abierto coincidiendo con el primer aniversario de la publicación de la Directiva de Gobierno Abierto del Gobierno de los Estados Unidos. Así, la publicación de la información del gobierno *on line*, la mejora de la calidad de la información gubernamental, la creación de un marco normativo propicio para el gobierno abierto y la institucionalización de una cultura de gobierno abierto, se convirtieron en los ejes a desarrollar por parte de las agencias estadounidenses.



Aunque el modelo propuesto responde a la lógica del marco político del Gobierno de los Estados Unidos y la obligatoriedad para sus respectivas agencias federales, se trata de un marco extrapolable a otros contextos nacionales en la medida que permite distinguir las diferentes etapas, objetivos, resultados y potenciales beneficios para la formulación de una política integral de gobierno abierto.

## **CAPÍTULO IV. EL GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA**

### **I. ORIGEN Y CONTEXTO: DE LA AGENDA DIGITAL AL GOBIERNO ABIERTO**

Desde el inicio del nuevo milenio, la Unión Europea se ha hecho eco del potencial de las TIC como instrumento de desarrollo económico y social, pero también como elemento integrador de la ciudadanía europea. La Declaración de Mälmo aprobada en el año 2009 por la Comisión Europea (CE) instó a los gobiernos a que en el marco de su relación con la ciudadanía fuesen más abiertos, flexibles y colaborativos, aprovechando la oportunidad que las nuevas formas de comunicación social ofrecían. Para la CE, las nuevas tecnologías favorecen el incremento de la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos y maximizan el valor público. La Declaración es contundente al respecto: Europa debe transitar de una ‘economía de mercado’ a una ‘economía del conocimiento’ y ese conocimiento debía constituirse en el elemento vertebrador para superar las dificultades de la crisis económica. Asimismo, la Declaración también hacía referencia a la necesidad de mejorar las políticas de transparencia de los países miembros y al reto de recuperar la confianza de los ciudadanos a través del diseño conjunto de servicios públicos, en consonancia con los planteamientos del Gobierno de EEUU y de la OCDE (ONTSI, 2013b: 41-42).

España, no siendo ajena a este contexto, comenzó adaptar su marco normativo y estratégico a las directrices europeas, sobre todo en materia de agenda digital. Prueba de ello fue la segunda fase del Plan Avanza, en la que el Gobierno de España aportó una

primera visión sobre el gobierno abierto. El Plan Avanza y su continuación, el Plan Avanza 2, fueron las estrategias del Gobierno en materia de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información desde 2005 hasta la aprobación de la Agenda Digital para España el 15 de febrero de 2013. El Plan se define como una estrategia de interacción entre la administración pública y los administrados con el objetivo de entablar un diálogo permanente con los ciudadanos y conocer sus opiniones para poder tomar mejores decisiones basadas en sus necesidades y preferencias.

La Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza reconoce que el gobierno abierto es una iniciativa incipiente, que a medio plazo podría impulsar la transformación de la administración pública en base a criterios como la transparencia, la apertura de datos y la responsabilidad. Además, plantea el compromiso de crear un marco de referencia en gobierno abierto en la administración estatal y la puesta en marcha de experiencias piloto que demuestren las potencialidades del mismo (ONTSI, 2013b: 10). En esta línea la Agenda Digital para España (2013), el equivalente español de la Agenda Digital europea, dio continuidad al proceso de incorporación del país a la sociedad de la información iniciado por el primer Plan Avanza. La Agenda introdujo una línea de actuación dentro del objetivo de mejora de la administración electrónica relativa al desarrollo de una administración integrada en la sociedad con servicios públicos de calidad centrados en ciudadanos y empresas.

Este fue un periodo donde se produjeron importantes avances normativos en la materia. Destaca la transposición de la Directiva 2003/98/CE sobre reutilización de la información del sector público mediante la Ley 37/2007 de Reutilización de Información del Sector Público y el Real Decreto 1495/2011 que desarrolla las disposiciones para promover y facilitar la puesta a disposición de la información del sector público, para su reutilización con fines tanto comerciales como no comerciales. Otra importante innovación legislativa fue la Ley 11/2007 de Implantación de la Administración Electrónica, que favorece la creación de elementos de transparencia y participación con los ciudadanos mediante la incorporación de las redes sociales generalistas como herramienta de comunicación de uso informativo.

En la misma línea, las comunidades autónomas y las entidades locales tuvieron en cuenta las referencias europeas y estatales para el desarrollo de actuaciones encaminadas a la puesta en marcha de portales de datos abiertos y de uso de la web 2.0 como mecanismo de comunicación institucional. Algunos ejemplos de estos primeros esfuerzos son normativas como la Ley 4/2006 de transparencia y de buenas prácticas en la administración pública gallega y su Decreto 201/2011 de regulación de la presencia en Internet de la administración gallega, la Ley 5/2010 de participación pública del Gobierno de Canarias o los Acuerdos del Gobierno de Cataluña y País Vasco para la apertura de datos públicos. Mención especial merece el Parlamento navarro, pues fue el primero en aprobar una Ley de Transparencia y Gobierno Abierto y una Hoja de Ruta de Gobierno Abierto para la planificación de sus actuaciones en este campo (ONTSI, 2013b: 46).

Este contexto, unido a la influencia de los referentes de carácter internacional, favoreció el actual escenario de gobierno abierto en España. Ante estos avances, el Gobierno de España se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto en septiembre de 2011, formando parte del segundo grupo de países que se integran a la red. Desde esa fecha, el Gobierno de España ha presentado dos Planes de Actuación; el primero tras su ingreso y el segundo, de reciente presentación y en fase de desarrollo. Como el resto de los países miembros de la Alianza, las actuaciones de ese primer Plan fueron objeto de una evaluación independiente sobre el alcance de sus objetivos, ofreciendo un riguroso análisis que arrojó información de calidad sobre las actuaciones emprendidas hasta el momento y los retos a los que debe hacer frente España en la construcción de un sistema de gobierno abierto en el país. Entre las principales medidas que pueden ser destacadas hasta la fecha se encuentran la Ley de 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que fue presentada en su versión Anteproyecto de Ley en el Primer Plan, la constitución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que ha dado debido cumplimiento a la previsión legal de la LTAIBG, y la puesta en marcha del Portal de Transparencia, previsto en el Segundo Plan de Actuación vigente actualmente.

## II. ESPAÑA EN EL *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP*

### 1. INTRODUCCIÓN

España entró a formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (*Open Government Partnership*, OGP) en los últimos meses de la Legislatura 2008-2011. Formalizó su participación el 31 de agosto de 2011 y pasó a ser miembro de la misma el 20 de septiembre de ese mismo año. Solo unos meses después tuvo lugar la celebración de las elecciones generales, en las que se produjo un cambio de gobierno<sup>25</sup>. Como se expuso en el capítulo II, los países que participan en el OGP asumen el compromiso de desarrollar planes de acción bienales que deben integrar compromisos dirigidos a cambiar la práctica habitual en materia de transparencia, participación y colaboración, bien a través de esfuerzos existentes, o bien mediante la identificación y promoción de nuevas acciones. El recién elegido Gobierno fue el legitimado para elaborar el Primer Plan Nacional, que fue presentado por el Ministerio de la Presidencia en abril de 2012. En opinión del Mecanismo de Revisión Independiente, esta circunstancia, unida a la coyuntura del país, supuso que la mayoría de los compromisos incorporados no cumpliesen con las expectativas iniciales y con el espíritu que propugnaba la Alianza (Cruz Rubio, 2014b).

El Primer Plan incluyó medidas encaminadas a reformas institucionales internas más que a una visión de apertura del gobierno a la ciudadanía. No obstante, cabe destacar que entre los trece compromisos presentados se abordó una acción de enorme relevancia en materia de gobierno abierto, la actual Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno<sup>26</sup> (LTAIBG), columna vertebral del modelo de gobierno abierto de España. Tras el desarrollo del Primer Plan, cumpliendo con las obligaciones asumidas por la Alianza, se publicaron dos informes para evaluar sus resultados: i) el Informe de autoevaluación del Gobierno de España y ii) el primer Informe Independiente de Progreso de España (2012-2013), documento de referencia

---

<sup>25</sup> El domingo 20 de noviembre de 2011 se celebraron las elecciones generales para la X legislatura en España. El Partido Popular ganó las elecciones y se produjo el consecuente cambio de gobierno.

<sup>26</sup> Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, publicada en el BOE el 10 de diciembre de 2013, nº 295, sección 1, pág. 97922.

obligada para comprender los avances del Gobierno Abierto en España (Cruz Rubio, 2014b). El Segundo Plan, correspondiente al periodo 2014-2015, siguiendo lo aconsejado por el Informe Independiente de Progreso en España, ofrece algunas respuestas a los déficits de la primera estrategia de gobierno abierto y a los nuevos desafíos que se han producido en el país en torno a esta materia.

## 2. PRIMER PLAN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO (2012-2013)

El Gobierno de España presentó su Primer Plan Nacional de Gobierno Abierto (PPN) apenas tres meses tras la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. Su carta de presentación partía del reconocimiento de una demanda creciente de los gobiernos para responder a las necesidades reales de la sociedad mediante el diseño de modos de gobernar más abiertos y participativos. El PPN venía condicionado por una agenda política con dos cuestiones clave: en primer lugar, que todas las acciones políticas del Gobierno girarían en torno a la transparencia y la rendición de cuentas; y, en segundo lugar, que la austeridad y la eficiencia serían los pilares de la gestión del Gobierno. Esta declaración inicial marcó el enfoque de la estrategia nacional con la que el Gobierno de España comenzó su andadura en la Alianza para el Gobierno Abierto (PPN, 2012: 1).

El marco normativo del que partía el Gobierno de España tenía como base esencial las previsiones constitucionales sobre la libertad de información y los derechos de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, de la iniciativa legislativa popular y del acceso a los archivos y registros administrativos. El corpus jurídico más relevante en materia de derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos se completaba con la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común y con la Ley 37/2007 de Reutilización de Información del Sector Público y la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulaban los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (PPN, 2012: 2). El marco institucional venía delimitado por un conjunto de políticas que respondían a la filosofía del gobierno abierto y que habían favorecido la incorporación de España en el OGP.

En relación a políticas de apertura de datos abiertos y administración electrónica, España contaba con un sitio web de datos abiertos ([www.datos.gob.es](http://www.datos.gob.es)), una iniciativa

creada al amparo de las medidas destinadas a la reutilización de la información del sector público. Debido a su calidad y accesibilidad, en enero de 2012 fue reconocido como el sitio web de datos abiertos más fácil de usar en la Unión Europea<sup>27</sup>. En materia de Administración Electrónica, el país se encontraba a la vanguardia y así lo reconoció Naciones Unidas; en el *Global E-Government Survey* (2010) España ocupó el número uno en Europa y el tercero en el resto del mundo en cuanto a la calidad y cantidad de información administrativa puesta a disposición, trámites en línea y comunicación por correo electrónico. A mayor abundamiento, en cuanto al nivel de servicios en línea, España también ocupaba el segundo lugar en Europa y el quinto a nivel mundial. Los datos que ofreció en aquel momento el Gobierno de España al OGP, hablaban de que más de 2.300 trámites y servicios de la Administración General del Estado podían ser llevados a cabo por medios electrónicos, lo que representaba aproximadamente el 90% del total, y el 99% de los procedimientos anuales globales. Por otra parte, organismos como la autoridad central impuestos, AEAT, Dirección General de Tráfico y Seguridad Social ya utilizaban la notificación electrónica. El PPN también señalaba que existía un Portal de Administración Electrónica (<http://administracionelectronica.gob.es>) que unificaba y centralizaba toda la información sobre administración electrónica, y que se habían creado diferentes instrumentos como la aplicación para dispositivos móviles ‘eAdmon’ y un perfil en twitter ‘@dministración’ (actualmente ‘@eAdmonGob’) que reunía las dos principales tendencias en el acceso a los servicios electrónicos, la movilidad y la interacción dentro de las redes sociales sobre las decisiones del gobierno para hacerlo más accesible y abierto (PPN, 2012: 3).

En relación a políticas de rendición de cuentas e integridad pública, España estaba rezagada en comparación a los países de su entorno. Únicamente había aprobado en el año 2005 un Código de Buen Gobierno, aplicable a Ministros, Secretarios de Estado, y Altos Cargos de la Administración General del Estado, que detallaba los principios y normas éticas de conducta que se esperaba de ellos. Finalmente, otras medidas como la creación en el año 2006 de la Agencia Nacional para la Evaluación de Políticas y Calidad

---

<sup>27</sup> El premio fue otorgado por la red europea LAPSI (*Legal Aspects of Public Sector Information*), un proyecto financiado por la Comisión Europea que reúne a expertos sobre el acceso y la reutilización de sector público información.

de los Servicios Públicos y la aprobación en 2005 de la Ley de la comunicación institucional conformaban el lienzo sobre el que partió el Gobierno para el diseño y elaboración del PPN, cuyos compromisos se sintetizan en la figura siguiente.

**Figura 14. Compromisos del Primer Plan Nacional de Gobierno Abierto 2012-13**

COMPROMISOS	DESCRIPCIÓN
<b>Aumento de la integridad pública</b>	Presentación de un Anteproyecto de Ley sobre Transparencia, Acceso Información Pública y Buen Gobierno <sup>28</sup> para ampliar y fortalecer la transparencia en la actividad pública en todos los niveles de la administración pública, reconocer y garantizar el acceso a la información, regulado como un derecho de largo alcance; y establecer obligaciones de buena gobernanza para los funcionarios públicos y las consecuencias jurídicas del incumplimiento. Para llevar a cabo estas obligaciones de hacer pública la información de manera proactiva el Anteproyecto de Ley de Transparencia incluía la creación de un Portal de Transparencia para garantizar la plena accesibilidad a la información.
<b>Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ayuda Oficial al Desarrollo</b>	Diseño y desarrollo de la plataforma digital info@od, de acceso a la información, datos y el análisis accesible a cualquier institución o ciudadano en el marco de las políticas de ayuda oficial para el desarrollo
<b>Gestión más eficaz de los recursos públicos</b>	Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera <sup>29</sup> como desarrollo del mandato establecido en el artículo 135 de la

<sup>28</sup> La tramitación del Anteproyecto incorporó un proceso de e-consulta pública durante dos semanas por el que cualquier persona pudo hacer observaciones con respecto a la propuesta de texto de la Ley, y proporcionar las sugerencias que consideró oportunas. La previsión de su aprobación se estableció para finales de 2012. Se aprobó a finales de 2013.

<sup>29</sup> La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se encontraba en debate parlamentario en el momento de presentación del PPN.



	Constitución Española, fundamento jurídico y económico de las políticas presupuestarias de todas las Administraciones Públicas, permitiría garantizar la sostenibilidad presupuestaria de las mismas y lograr un mayor rigor en la información sobre todas las fases de la política presupuestaria, fundamentada en la normativa de la Unión Europea en relación a la disciplina fiscal.
<b>Modificación de la Ley de Subvenciones</b>	Modificación del procedimiento de concesión de subvenciones públicas para responder a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, objetividad, igualdad y no discriminación, complementados con la eficacia necesaria en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
<b>Administración de Justicia en red</b>	Creación de una agencia específicamente dedicada a la justicia e intercambio de información entre las administraciones públicas competentes, para facilitar la interoperabilidad a través de un sistema informático que permitiese el acceso en línea inmediato a los datos judiciales y a la información contenida en los registros públicos relacionados con la información de la administración de justicia.
<b>Promoción de redes sociales para facilitar la participación ciudadana en materia de seguridad</b>	Desarrollo de un proyecto piloto de participación ciudadana a través de las redes sociales y las aplicaciones específicas de telefonía móvil en el ámbito de la seguridad por medio del cual los ciudadanos podrían reportar información relacionada con el tráfico de drogas.
<b>Publicación estadísticas de criminalidad</b>	Mejora del acceso a los datos estadísticos sobre delincuencia, publicados trimestralmente referidos para cada tipo de delito, y para cada una de las provincias de España y ciudades autónomas, incluyendo datos de las fuerzas

	policiales de las comunidades autónomas estandarizadas de acuerdo al sistema estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior.
<b>Revisión y simplificación de las regulaciones</b>	Revisión y racionalización de normativas, eliminando regulaciones obsoletas con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica en las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública.
<b>Tecnologías de la información al servicio de la gestión de la salud (e-salud)</b>	Puesta en marcha de la primera fase de la plataforma tecnológica que garantice la interoperabilidad de la historia clínica digital. Con el objetivo de que los pacientes sean tratados con la misma facilidad, sin importar el lugar concreto en el que pudieran encontrarse, primando la atención médica, segura y ágil, frente a trabas administrativas por razón del territorio.
<b>Generalizar de uso del Sistema RED</b>	Sistematizar su uso para agilizar la relación de los ciudadanos con la Seguridad Social a través de la centralización de la gestión a través de un único sistema, que permitiese reducir la utilización de documentos en papel, llevar a cabo los trámites y presentar la información en cualquier momento a través del Internet.
<b>Simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental</b>	Acortar los plazos para la realización de las evaluaciones de los planes, programas y proyectos que son objeto de evaluación ambiental, reducir los plazos de resolución, incorporando mejoras tecnológicas, y hacer que los procesos de toma de decisiones sean más participativos.
<b>Aceleración de los procedimientos para crear nuevas empresas</b>	Favorecer la creación de empresas en un corto período de tiempo mediante la promoción de la red de centros creados para asesorar a

emprendedores y pequeñas y medianas empresas y reducir los requisitos administrativos<sup>30</sup>.

**Reducción de cargas administrativas para los agricultores y ganaderos**

Agilizar el proceso de solicitud de las ayudas directas de la Política Agrícola Común, mediante la estandarización del software de todas las Comunidades Autónomas de España para favorecer la reducción de la burocracia, la transparencia en los procedimientos y la disminución de costes.

Fuente: Elaboración propia a partir del PPN.

Como en el caso del resto de los miembros de la Alianza, el PPN fue publicado y trasladado al OGP para su valoración, seguimiento y evaluación, siendo el Mecanismo de Revisión Independiente el encargado de ofrecer la información necesaria sobre la adecuación o no de los compromisos con los valores de la red y su grado de desarrollo. El siguiente apartado señala las principales conclusiones y recomendaciones que se realizaron por el Mecanismo de Revisión Independiente al Gobierno de España.

### 3. INFORME DEL MECANISMO DE REVISIÓN INDEPENDIENTE (2012-2013)

El Mecanismo de Revisión Independiente (IRM en sus siglas en inglés) es un instrumento a través del que se sigue el progreso y resultados de los compromisos asumidos por los países participantes en la Alianza. Todos los gobiernos participantes están obligados a presentar informes de progreso y cooperar con los investigadores locales para la elaboración de los informes a nivel nacional. De esta forma, mediante las valoraciones que se recogen se promueve el aprendizaje entre pares en la Alianza a través del intercambio de buenas prácticas, asistencias técnicas y sugerencias de mejora específicas del país.

Hasta la fecha solo se ha publicado un Informe del IRM<sup>31</sup> en España, el

<sup>30</sup> Medidas actualmente incorporadas en la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. BOE nº 233, Sec, 1, pág 78787.

<sup>31</sup> Véase en documentos anexos.

correspondiente a la evaluación del PPN, que ofrece un marco de análisis que permite obtener información relevante sobre: i) el proceso de elaboración del Plan; ii) el contenido y desarrollo de los compromisos establecidos; y iii) las recomendaciones para los próximos planes de gobierno abierto a llevar a cabo a nivel nacional. En relación al proceso de elaboración, el Informe puso de manifiesto que el Gobierno de España no habilitó un trámite de consulta pública para la elaboración de su primer Plan, tal y como requiere el OGP. La autoría del Plan de Acción recayó en el Ministerio de la Presidencia, quien señaló que la ausencia de esta consulta pública se debió al escaso margen de tiempo para poder ser elaborado y presentado en plazo. La selección de los compromisos y la redacción del Plan de Acción se llevó a cabo en un periodo de tres meses y medio (entre enero y abril de 2012), y fue el resultado de la recopilación de información e iniciativas obtenidas por comparecencias ministeriales en sede parlamentaria (Cruz Rubio, 2014a: 816). El Informe continua afirmando que la falta de visibilidad de las acciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto se debió a una ausencia de estrategia de divulgación de la incorporación de España en el OGP y, más específicamente en relación al PPN, que favoreció un profundo desconocimiento ciudadano sobre los compromisos asumidos por el gobierno central y las acciones implementadas. El Gobierno tampoco dispuso un *microsite* o sección especial sobre gobierno abierto en su portal, no ofreció información sobre los contenidos del Plan, ni generó un foro permanente para su seguimiento y evaluación de los compromisos (Cruz Rubio, 2014a: 816). Respecto al PPN y al desarrollo de sus contenidos, los planes de acción bienales deben incluir compromisos del gobierno que orienten las modificaciones necesarias para favorecer la transparencia, la participación y la colaboración en los respectivos estados, pudiendo basarse en esfuerzos existentes o en la identificación de nuevas áreas donde emprender acciones. Así, en relación a la adecuación o no de los compromisos establecidos en el PPN, el Informe concluye que con carácter general el primer Plan de Gobierno Abierto de España contiene varios compromisos cercanos al gobierno electrónico (*e-government*) sin una coincidencia clara con los valores del gobierno abierto, y con algunos compromisos enmarcados en políticas de corte económico que carecen de conexión con los objetivos del gobierno abierto (Cruz Rubio, 2014a: 818). A continuación, siguiendo la evaluación del Informe del IRM, se clasifican los

compromisos del PPN en función de su relevancia con los valores del gobierno abierto.

**Figura 15. Clasificación de compromisos del PPN de Gobierno Abierto**

<b>COMPROMISOS RELEVANTES PARA EL GOBIERNO ABIERTO</b>	<b>VALORES DESTACADOS</b>	<b>COMPROMISOS SIN RELEVANCIA PARA EL GOBIERNO ABIERTO</b>
Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno	Transparencia Rendición de Cuentas	Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ayuda Oficial al Desarrollo info@od	Transparencia Rendición de Cuentas Innovación TICs	Administración de Justicia en red
Modificación de la Ley de Subvenciones	Transparencia	Revisión y simplificación de las regulaciones
Promoción de redes sociales para facilitar la participación ciudadana en materia de seguridad	Participación Innovación TICs	Generalizar de uso del Sistema RED
Publicación estadísticas de criminalidad	Transparencia	Aceleración de los procedimientos para crear nuevas empresas
Tecnologías de la información al servicio de la gestión de la salud (e-salud)	Transparencia Innovación TICs	
Simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental	Participación	
Reducción de cargas administrativas para los agricultores y ganaderos	Transparencia	

Fuente: Elaboración propia en base al PPN y Cruz, 2014b.

Puede observarse como el valor más importante en el diseño del Plan fue el de la transparencia, cuyo máximo exponente lo constituyó el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno. En segundo lugar destacó el valor de la innovación desde una perspectiva tecnológica enmarcada en objetivos de eficiencia y eficacia más propios de los principios del gobierno electrónico, pero sin relevancia directa en relación a los valores del gobierno abierto. Finalmente, en cuanto al seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos, el IRM discrepó del Informe de autoevaluación del propio gobierno (Ministerio de Presidencia, 2013). El mecanismo independiente concluyó que se cumplieron cinco de los 13 compromisos y tres tuvieron un avance significativo (Cruz Rubio, 2014a: 818).

Finalmente, en cuanto a las recomendaciones para los próximos Planes Nacionales, es relevante destacar algunas de las sugerencias plasmadas en el IRM como posible guía de actuación para el avance del gobierno abierto en España. Con carácter general, el Informe señaló que el Gobierno de España para la elaboración del Segundo Plan contaría con más tiempo, con el conocimiento previo adquirido del Primer Plan, con las experiencias autonómicas en proceso de desarrollo y, sobre todo, con un marco legal más oportuno como el ofrecido por la Ley de Transparencia. Así, tomando en consideración estas premisas, el Informe del IRM recomendó (Cruz Rubio, 2014b: 67-68):

- abordar una estrategia de política pública de actuación participativa, abierta e integral para lograr la definición colaborativa de próximos compromisos (la estrategia precisaría como prerequisite que el gobierno dejase de entender a los ciudadanos como meros receptores de servicios públicos o emisores de información, sino como actores con voz, aspiraciones, ideas y energías propias);
- clarificar el ámbito territorial de los compromisos, teniendo en cuenta el grado de descentralización del país y su dinámica multinivel (Morata, 2004). El nuevo plan debería implicar a España en su conjunto, en la medida que la estrategia integral para diseñar el nuevo Plan de Acción significaría entender gobierno abierto como aquello que tanto ciudadanía como el gobierno — en sus distintos niveles— han decidido conjuntamente realizar para acercar el gobierno — en todos sus

niveles— a los ciudadanos, a fin de hacerlo más transparente y participativo;

- favorecer una política global de datos abiertos instando la creación de una estrategia para el desarrollo de políticas de open data y la capacitación en gobierno abierto, a fin de potenciar con conocimientos y capacidades a funcionarios y ciudadanos sobre sus valores y herramientas; y
- asentar al gobierno abierto como una política pública transversal permanente orientada a institucionalizar una mayor participación, mejorar regulaciones que permitan la inclusión del sentir ciudadano y con ello profundizar en la transparencia legislativa, mejorar el bienestar a través del desarrollo de políticas sociales abiertas, promover la equidad a través de políticas compensatorias y de servicios públicos y generar más conocimiento usando y compartiendo conocimiento vía aplicaciones informáticas. En suma, promover la transparencia holística a través de publicidad activa, incorporar la transparencia en procedimientos de gestión y planificación estratégica, conectar efectivamente el gobierno abierto con la rendición de cuentas, convertir la evaluación de políticas en una dimensión clave de la apertura de gobiernos y administraciones.

#### 4. SEGUNDO PLAN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO (2014-2015)

Las recomendaciones dirigidas a orientar al Gobierno de España en el marco de su participación en el OGP, encontraron una tímida acogida en el Segundo Plan Nacional (SPN). Este documento, como proponía el Informe de Revisión, estuvo marcado por un procedimiento de elaboración de mayor reflexión, donde se habilitó un procedimiento de consulta abierta para recabar sugerencias y recomendaciones al mismo. Sin embargo, el Plan no logró una participación significativa por falta de una adecuada difusión y de plazo suficiente para realizar contribuciones. Este nuevo plan se enfrentaba al reto de aproximarse a los presupuestos del gobierno abierto, tanto en los contenidos, traducidos en compromisos, como en la forma, esto es, en relación al procedimiento de su elaboración. El nuevo plan se compone de tres bloques relativos a las medidas adoptadas en materia gobierno abierto hasta el momento, a su proceso de elaboración y a los nuevos compromisos.

- En cuanto a las medidas adoptadas, el SPN señala algunas acciones llevadas a cabo a lo largo de los años 2012-2013 que, no siendo acciones propias del PPN, sí se considera que responden a los principios del gobierno abierto. Entre ellas destacan: i) la aprobación de una normativa por la que se crean nuevos medios de control de la deuda comercial en el sector público y la creación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación; ii) los trabajos de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) para reducir duplicidades administrativas, simplificar los trámites administrativos; y iii) la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (SPN, 2014b: 2-5).
- En relación al procedimiento de elaboración del SPN, la competencia siguió recayendo en el Ministerio de la Presidencia, que constituyó un Grupo de Trabajo Interministerial para realizar una identificación de las medidas que pudieran ser susceptibles de incluirse en el borrador de SPN. El Ministerio de la Presidencia hizo una selección e incorporó a una primera versión del borrador aquellas que tendrían más impacto desde el punto de vista del gobierno abierto. El 2 de abril de 2014, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente del Ministerio de la Presidencia, mantuvo una reunión con las principales organizaciones de la sociedad civil en materia de transparencia y buen gobierno, a las que se trasladó información acerca de cómo se estaba elaborando el SPN. El borrador fue sometido a valoración de la sociedad civil a través de la apertura de un proceso de consulta pública que se desarrolló desde el 29 de abril al 31 de mayo de 2014. Para ello se habilitó expresamente una dirección de correo electrónico y el texto del borrador fue publicado en la página web del Ministerio de Presidencia. Como resultado de dicha consulta se realizó una segunda versión del Plan de Acción (SPN, 2014b: p. 6).
- En relación a los nuevos compromisos, como continuación al trabajo desarrollado durante estos meses España presentó su Segundo Plan de Gobierno Abierto con



el objetivo de avanzar en el camino iniciado y trabajar nuevas áreas que permitieran la consolidación de la iniciativa. Los diez nuevos compromisos, que hoy se encuentran vigentes y en fase de desarrollo, se sintetizan a continuación.

**Figura 16. Compromisos del SPN de Gobierno Abierto 2014-15**

COMPROMISOS	DESCRIPCIÓN
Portal de la Transparencia	Portal digital donde se pondrá a disposición del público información sobre la Administración General del Estado y sus órganos, se proporcionará una respuesta completa a las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos y se ofrecerá una gran cantidad de información con estándares comunes en su presentación y en su tratamiento informático.
Mejora del acceso y la calidad de la información de portal de archivos españoles PARES	Adecuación a las directivas europeas en materia de interoperabilidad entre sistemas de información archivística, para mejorar la integración de bases de datos y el rendimiento en el acceso a la información a través de Internet así como incorporación de herramientas electrónicas para la gestión de los servicios públicos de los archivos del Estado.
Recursos educativos abiertos	Desarrollo del espacio Procomún de recursos educativos en abierto mediante la evolución de la plataforma actual (Agrega), a través de la mejora de su usabilidad y la inclusión de lógica de red social con el fin de incrementar la participación de la comunidad educativa. En este espacio estarán accesibles todos los recursos creados por las administraciones educativas, permitiendo además que los profesores y toda la comunidad educativa puedan incorporar contenidos creados por ellos mismos.
Accesibilidad a los micro datos del Sistema Nacional de Salud	Puesta a disposición pública del Banco de Datos del SNS donde gratuitamente podrán descargarse los micro datos completos de las principales estadísticas.
Acceso a la información geográfica y posibilidad de reutilización de la misma	Normalización y estandarización de la información geográfica y de los servicios interoperables basados en la misma. El Centro Nacional de Información Geográfica optimizará y potenciará el acceso a los datos y servicios que proporciona, especialmente facilitando la colaboración público-privada y la creación de cadena de servicios web de valor añadido, con intervención del sector empresarial y profesional.

Programas de apertura de la información y su reutilización en el sector público	El programa promocionará la cultura de la apertura y reutilización de la información dentro del sector público, consolidará el catálogo nacional de información del sector público y asesorarán en la materia a entidades públicas. Estas medidas forman parte del Eje III del “Plan de Impulso de la Economía Digital y los Contenidos Digitales”, uno de los planes operativos para el desarrollo de la Agenda Digital para España. Adicionalmente, se realizará la transposición al marco legal Español de la Directiva 37/2013 de la Unión Europea que revisa el marco legal de reutilización de la información del sector público.
Portal de la Administración de Justicia	Plataforma digital para potenciar el acceso a la información y servicios de la administración de justicia por parte de ciudadanos y profesionales del ámbito judicial.
Mayor control y transparencia de las subvenciones públicas	Se generalizará el régimen jurídico de subvenciones a todas las ayudas concedidas en el sector público administrativo y todas las entregas dinerarias sin contraprestación tendrán la condición de subvenciones, por lo que deberán cumplir lo previsto en la ley. Asimismo, se avanzará en el modelo de coordinación entre las diferentes administraciones públicas. Igualmente, se promoverá una mayor igualdad y transparencia en la concesión de subvenciones, impulsando el procedimiento de concurrencia competitiva y restringiendo los demás modelos de concesión.
Creación del Consejo español de drogodependencias	Racionalización y reorganización de los órganos colegiados dependientes de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que permitirá la participación en la definición de las políticas de drogas de sectores hasta ahora no estaban representados en ninguno de dichos órganos, cumpliendo así con las recomendaciones de la ONU y la UE.
Mejora de la participación de los agentes del sector en la definición de los objetivos de los Planes Nacionales de Salvamento Marítimo	Incorporación de mecanismos de participación previos, de los actores interesados, en la redacción del borrador del Plan Nacional de Salvamento Marítimo, complementarios a los existentes actualmente.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SPN.

Estos diez compromisos suponen un avance conceptual en relación a los objetivos de un modelo de gobierno abierto en el país, como muestran las actuaciones de creación de un Portal de Transparencia, la habilitación de un sistema para el acceso a los micro datos del Sistema Nacional de Salud y la puesta en marcha del Programa de apertura de información y su reutilización en el sector público. Sin embargo, a pesar de estos avances cualitativos, continúan advirtiéndose déficits importantes en el SPN. En primer lugar, aunque el eje prioritario de las políticas de gobierno abierto en España continúa siendo la transparencia (apertura y reutilización de datos públicos), se echa en falta en este segundo plan el diseño de acciones que favorezcan la participación y la colaboración de la ciudadanía, sobre todo contando con las nuevas formas de comunicación y participación facilitadas por la web 2.0. En segundo lugar, resulta llamativo que regiones y gobiernos locales sigan sin estar incorporadas en esta estrategia, teniendo en cuenta que diversas comunidades autónomas han sido pioneras en esta materia y que un número cada vez mayor de gobiernos locales se están convirtiendo en significativos escenarios de ensayo de políticas de gobierno abierto. En tercer lugar, la construcción de un gobierno abierto necesita de dos actores principales: gobernantes y ciudadanía. Lograr que la ciudadanía se implique pasa por dar mayor visibilidad y mayor difusión de este nuevo paradigma, por lo que muchas de las recomendaciones del Informe del IRM continúan vigentes para este segundo Plan.

## 5. PRINCIPALES ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Hasta el momento, los planes no han promovido una estrategia integral de gobierno abierto como política pública transversal. Sin embargo, existen dos medidas que merecen ser resaltadas como actuaciones relevantes en el marco de los compromisos del Gobierno de España con el gobierno abierto. En el año 2012 España decidió cerrar la brecha histórica en materia de transparencia e integridad mediante la elaboración de una normativa sobre transparencia. Ésta se planteaba como un compromiso con el OGP a la vez que trataba de ser un instrumento que permitiera al país homologarse con los estándares de las democracias más desarrolladas.

En el ordenamiento jurídico español diversas normas regulaban el acceso de los ciudadanos a la información que poseen los poderes públicos. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 37, establecía la regulación general del derecho de acceso de los ciudadanos a los registros y los documentos obrantes en los archivos administrativos. Esta regulación adolecía de lagunas y deficiencias notorias, toda vez que limitaba el derecho de acceso a los documentos relacionados con procedimientos terminados y archivados, haciendo depender su efectividad de una decisión discrecional de la administración, a la vez condicionada a su compatibilidad con la eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos. Para hacer frente a esta situación, en la Legislatura 2004-2008 se realizó un importante esfuerzo en la profundización de la transparencia administrativa y ampliación del acceso de los ciudadanos a la información. A este objetivo respondieron la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. A pesar de ello, no se abordó la elaboración de una norma que regulara el acceso a la información pública y fortaleciera, en consecuencia, el ejercicio del control de la actividad pública por parte de los ciudadanos.

Esa situación contrastaba con el entorno más próximo, la Unión Europea y la gran mayoría de sus Estados miembros, que ya contaban con una normativa específica sobre acceso a la información pública. En el Derecho de la Unión Europea, el derecho a la información en poder de las instituciones, órganos y organismos europeos, ya se encontraba reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(2001a)<sup>32</sup>. En este marco, el derecho de acceso se vinculó con el principio democrático y el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, con la obligación de transparencia y la libertad de información correspondiente. Fue

---

<sup>32</sup> Su desarrollo normativo se encuentra en el Reglamento (CE) n° 1049/2001 de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

precisamente la vinculación del derecho de acceso al acervo jurídico de los Estados miembros, lo que llevó a su consagración como derecho fundamental en la Unión Europea. Del mismo modo, el acuerdo sobre la importancia de la transparencia en la actuación de las autoridades públicas impulsó la adopción del Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, el 27 de noviembre de 2008. Este Convenio, abierto a la firma de los Estados Miembros el 18 de junio de 2009, constituyó el primer instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce un derecho general de acceso a los documentos públicos<sup>33</sup>.

#### **A) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno**

En España hasta la aprobación de la LTAIBG el derecho de acceso a la información pública estaba comprendido en el artículo 37 de la LRJPAC, cuyas deficiencias y lagunas eran manifiestas, entre las que destacan la falta de regulación del procedimiento y de previsión de un órgano de control independiente. De ahí que no sea extraño que esta norma de carácter administrativo no tuviera la capacidad de generar una cultura de la transparencia ni en los ciudadanos ni en la propia administración (Guichot, 2014: 19).

Del mismo modo que ha ocurrido en otros países, en España también ha sido el impulso de la sociedad en tiempos de profunda crisis de confianza política, institucional y económica la que ha ubicado a la transparencia en la agenda política de forma efectiva a través de lo que Guichot denomina “la tormenta perfecta de la transparencia”. En los últimos años, el estado de opinión de los medios de comunicación de muy diferente líneas editoriales, académicos y organizaciones no gubernamentales muchas de ellas agrupadas en la llamada Coalición Pro Acceso<sup>34</sup> venían reclamando la necesidad de que España

---

<sup>33</sup> El Convenio establece unas normas de mínimos inspiradas en las experiencias y prácticas de las legislaciones estatales y recoge, de este modo, los principios ya presentes en la Recomendación REC (2002)2 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre acceso a los documentos públicos.

<sup>34</sup> La Coalición Pro Acceso está formada por 68 organizaciones, lleva desde el año 2006 solicitando la aprobación de una ley de transparencia en España y poniendo su conocimiento y experiencia en esta materia a la disposición de distintos gobiernos españoles y fuerzas políticas.

aprobara una ley de acceso a la información planteando propuestas sobre cuál debería ser su contenido (Guichot, 2014: 20).

Esta demanda social comenzó a calar en algunos programas electorales, en especial en los del PSOE, en concreto los correspondientes a las elecciones generales de 2004 y 2008, pero en ninguna de las dos legislaturas se llegó a aprobar un proyecto de ley en esta materia, aunque los mayores esfuerzos se realizaron en la legislatura 2008-2011, un mandato ya marcado por la crisis económica e institucional. Sin embargo en el ecuador de la legislatura el Congreso de los Diputados planteó la petición de presentar un proyecto de ley de acceso a la información pública en el plazo máximo de un año. Así, 2011 se convirtió en el año en el que se pasó del estatismo e inmovilidad al apremio y urgencia en la transparencia en un clima de creciente desafección y de reclamación de medidas de regeneración democrática. El 7 de abril de 2011, Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentó en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica de Principios y Medidas contra la Corrupción y por la Transparencia de la Gestión Pública<sup>35</sup>. Poco tiempo después surgía el Movimiento 15M que entre sus mensajes más simbólicos criticaba la opacidad de los gobiernos y la necesidad de transparentar a los mismos. Los poderes públicos se hicieron eco de esta reivindicación improporogable y el 21 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una moción instando al Gobierno a presentar antes del final de agosto un proyecto de ley de transparencia además de otras medidas conectadas con las reivindicaciones del 15M. El 29 de julio el Gobierno aprobó finalmente un Anteproyecto de Ley de Transparencia a la par que se hizo público el adelanto electoral, por lo que la iniciativa se convertía más en un gesto de cara a la ciudadanía, puesto que era evidente que no podría llegar a ser tramitada por el agotamiento anticipado de la legislatura (Guichot, 2014: 21-22).

Pero el germen de la transparencia ya estaba instalado en la conciencia colectiva y en la agenda política como una solución prioritaria para luchar contra la crisis de confianza en las instituciones. La transparencia se convirtió en una palabra prodigiosa cuya exhortación resultaba atractiva en clave de rédito electoral. De ahí que los programas

---

<sup>35</sup> BOCG (Congreso de los Diputados) 15 de abril de 2011, num.314-1.

electorales de los partidos más representativos, PP, PSOE, IU y UPyD, incorporasen la transparencia y diversas medidas tendentes a ponerla en práctica. Una vez inaugurada la X Legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una Proposición de Ley sobre la base del Anteproyecto anterior y el 23 de marzo de 2012 el Gobierno aprobó su Anteproyecto que contenía elementos parcialmente comunes a los textos del Grupo Socialista. Este Anteproyecto se sometió a un novedoso procedimiento de consulta pública durante dieciséis días, cuyas aportaciones no recibieron publicidad. La recepción por parte de los medios fue crítica poniendo el énfasis en las limitaciones que la Ley contenía. El 18 de mayo del mismo año el Gobierno aprobó un segundo Anteproyecto, que en cierta medida había integrado algunas modificaciones resultado de las sugerencias recibidas en la consulta pública y en especial de un Grupo de expertos creado a tal efecto en el seno del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. La iniciativa se encuadraba en el vértice de prioridades para políticos, administraciones, académicos y ciudadanía (Guichot, 2014: 22-24).

El Anteproyecto fue informado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y dictaminado por el Consejo de Estado, y el Proyecto fue aprobado el 27 de julio de 2012. La tramitación en el Congreso duró más de un año, debido entre otras cuestiones a que el proceso de enmiendas fue prorrogado hasta que no se hubieran terminado las comparecencias de los expertos ante la Comisión Constitucional, cuestión novedosa también en el procedimiento de elaboración de la Ley. Los principales puntos de debate fueron: el reconocimiento del derecho de acceso a la información como integrante del derecho fundamental a la libertad de información, y su, entonces necesaria tramitación como Ley Orgánica; la incorporación de otros sujetos como la Casa Real, los partidos políticos y los sindicatos; la necesidad de incluir sanciones e incentivos para fomentar el cumplimiento de la ley; la obligatoriedad de crear un órgano de control independiente (frente a la propuesta inicial de Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios), o la improcedencia de regular el buen gobierno con el contenido previsto en el Proyecto que generaba dudas de constitucionalidad (Guichot, 2014: 25-26)

Finalmente el 30 de mayo de 2013 se celebró el debate de la totalidad<sup>36</sup>. En el debate la Vicepresidenta del Gobierno anunció importantes cambios tras las diferentes negociaciones mantenidas con los diversos grupos políticos, que en definitiva se circunscribieron a la ampliación de los sujetos obligados por la Ley y a la creación de un Consejo de Transparencia como órgano independiente de nueva creación. A pesar de ello las principales objeciones de los grupos se mantuvieron: el no reconocimiento del derecho al acceso como parte del derecho fundamental a la libertad de información; la imprevisión de sanciones por incumplimiento; la no regulación de los grupos de interés; la previsión del silencio negativo; la regulación del buen gobierno, y los excesos competenciales y defectos de técnica jurídica. El Grupo Socialista no planteó enmienda a la totalidad y se abstuvo de la votación, ya que su posición no era cómoda debido a que el Proyecto bebía directamente de los textos promovidos por él en la anterior legislatura y su principal diferencia se circunscribía a la creación de un organismo independiente *ex novo*, aunque los debates no dejaron duda sobre el clima social y político en el que se desarrolló el Proyecto (Guichot, 2014: 27).

El 12 de septiembre de 2013 tuvo lugar el debate de las enmiendas en el Pleno del Congreso, donde todos los grupos afirmaron que el texto definitivo había sufrido importantes avances, aunque las críticas del ala izquierda se siguieron centrando en el no reconocimiento del derecho de acceso como parte integrante del derecho fundamental de la libertad de información (Izquierda Plural, Compromís-Equo, UPyD). El Grupo Socialista alegó razones de contexto, la falta de explicaciones parlamentarias del Presidente del Gobierno en el caso Bárcenas y de fondo, referidas a algunas enmiendas no admitidas para justificar el voto en contra<sup>37</sup>. El Proyecto finalmente fue aprobado con los votos a favor de los partidos de centro-derecha – PP, CC, CiU, EAJ-PNV – mientras que los partidos de izquierda votaron en contra – Amaiur, Izquierda Plural, la mayor parte del Grupo Mixto, UPyD, y PSOE - . La tramitación en el Senado fue mucho más rápida reproduciéndose las cuatro propuestas de veto y las 269 enmiendas presentadas. El cruce

---

36 DS (Congreso de los Diputados) de 30 de mayo de 2013, num 117

<sup>37</sup> Información obtenida del diario El País, 12 de septiembre de 2013 ([http://politica.elpais.com/politica/2013/09/12/actualidad/1378987190\\_648012.html](http://politica.elpais.com/politica/2013/09/12/actualidad/1378987190_648012.html))



de argumentaciones entre PP y PSOE fue prácticamente idéntico. Finalmente el 28 de noviembre de 2013 fue definitivamente aprobada en el Congreso de los Diputados la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG) (Guichot, 2014: 29-32).

Como puede constatarse de este relato parlamentario, la tramitación de la LTAIBG despertó un enorme interés y expectativas en la ciudadanía, partidos políticos, prensa, ONGs y el mundo académico. La crisis institucional situó a la transparencia en el vértice de las medidas que sobre regeneración democrática debían adoptarse, aunque no debiera ser la única, ya que como se anunciaba por la comunidad de expertos que había participado en su contenido, si ésta no venía acompañada de una mejora de la ética pública de gobernantes y ciudadanos no lograría depurar el funcionamiento de las instituciones. Pero es indudable que la LTAIBG es el instrumento jurídico esencial para lograr una mejor gestión, una mayor participación y como consecuencia, promover un menor grado de corrupción. Las circunstancias del país entorno a la opacidad y los escándalos de corrupción convirtieron a la transparencia en una reivindicación clamorosa. Si bien el paso de la inmovilidad a una aceleración ‘impuesta’, permite hacer lecturas no demasiado positivas del contexto y de la cultura política, ya que no se abordó este problema hasta no lograr unas cotas de desconfianza prácticamente inasumibles, también permite inferir un mensaje positivo, y es el cambio en el establecimiento de prioridades políticas impuesto por parte de la sociedad, no dejando prácticamente ningún margen de maniobra a los representantes políticos, salvo hacer cumplir la voluntad de la ciudadanía (Guichot, 2014: 34).

El texto de la nueva Ley fue aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado<sup>38</sup> en diciembre de 2013, cuya entrada en vigor se estableció de forma progresiva; tras su publicación. Solo la parte relativa al Buen Gobierno entró en vigor inmediatamente, mientras que el grueso de la Ley no fue de aplicación obligatoria hasta finales del año 2014 para la Administración General del Estado, mientras que las entidades locales y las comunidades autónoma, contarían con una moratoria hasta finales


---

<sup>38</sup> Véase en documentos anexos.

del año 2015. La Ley tiene un triple alcance: i) incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas; ii) reconocer y garantizar el acceso a la información regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo; y iii) establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.

**Figura 17. Elementos básicos de la LTAIBG**

<p><b>TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA</b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><b>TRANSPARENCIA ACTIVA</b></p>	<p>La Ley amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos ámbitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información institucional, organizativa y de planificación</li> <li>• Información de relevancia jurídica que afecte directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos</li> <li>• Información de relevancia económica, presupuestaria y estadística</li> <li>• Obligación de publicar toda la información que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso</li> </ul>	<p>AGE entrada en vigor finales 2014</p> <p>CCAA y EELL entrada en vigor finales 2015</p>
<p><b>DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><b>TRANSPARENCIA PASIVA</b></p>	<p>El derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos, establecida en el art. 105.b) de la Constitución y regulada con carácter general en el art. 37 de la Ley 30/1992, adolecía de una serie de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de forma reiterada al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya</p>	<p>AGE entrada en vigor finales 2014</p> <p>CC.AA y EE.LL entrada en vigor finales 2015</p>

	<p>terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulación práctica.</p> <p>La Ley suple algunas de estas carencias, subsana deficiencias y crea un marco jurídico unificado.</p>	
<p><b>BUEN GOBIERNO</b></p> <p></p> <p><b>RECONOCIMIENTO NORMATIVO PRINCIPIOS BUEN GOBIERNO</b></p>	<p>Se incorporan a la norma con rango de ley, pasando a informar la interpretación y aplicación del régimen sancionador al que se encuentran sujetos todos los responsables públicos (con independencia del Gobierno del que formen parte o de la Administración en la que presten sus servicios), principios que hasta ahora eran meramente programáticos y sin fuerza jurídica.</p>	<p>AGE, CC.AA, EE.LL</p> <p>en vigor desde su aprobación</p>

Fuente: elaboración propia a partir de Ley 19/2013.

A pesar del avance que ha supuesto la aprobación de esta normativa, cabe señalar que la norma no garantiza el cumplimiento de las obligaciones que establece, puesto que no se contempla en el texto un sistema independiente de control efectivo de infracciones y sanciones para que se cumplan las distintas normas legales contenidas en la misma. Se exponen a continuación las principales carencias de la norma detectadas por Transparencia Internacional (Lizcano, 2013):

- No se contempla explícitamente en el texto ningún tipo de infracciones ni de sanciones a políticos y funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de publicidad activa y derecho de acceso a la información, solo lo estipula en el ámbito del Buen Gobierno. La publicidad activa ha sido uno de los principales

avances conceptuales en materia de transparencia, ya que implica ofrecer información sin necesidad de que haya sido reclamada. Todo ello de la mano de las nuevas tecnologías y de Internet, que han propiciado la digitalización de la información y el surgimiento de la administración electrónica. La publicidad activa posibilita el conocimiento, la participación y el control de las personas sobre los asuntos públicos. Una Ley de Transparencia adaptada a la actual sociedad de la información debe poner a disposición de todos los ciudadanos la información que les permita participar, controlar y con ello contribuir a una gestión más eficaz y transparente. De ahí que la forma de publicación como se expone en los apartados 4 y 5 del artículo 5 esté caracterizada por ser de acceso gratuito, fácil, universal e interoperable<sup>39</sup> que sea clara, comprensible, esté clasificada y ordenada temáticamente, a través de un buscador avanzado y que preferiblemente sea reutilizable. Esta es una de las características más reclamadas por los expertos, ciudadanía y ONGs que hoy constituye una cuestión pendiente de resolver en la medida que en su conexión con la LRISP cuyo artículo 7 permite someter a tasa o precio público la entrega de documentos para fines comerciales y no comerciales (Guichot et al, 2014:143-145).

- Se establece un régimen de silencio administrativo negativo, que no respeta el derecho de los ciudadanos a tener una respuesta explícita. Es esencial que exista obligación de las instituciones públicas a contestar o resolver las solicitudes recibidas en el citado plazo, o aún después de vencido dicho plazo, fijándose alguna sanción disciplinaria (apercibimiento o multa, por ejemplo) para el funcionario requerido que no cumpla con la petición.
- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, responsable de garantizar el derecho a la información que se contempla en el texto, no es una agencia independiente y se encuentra vinculada al ámbito del Gobierno. Su Presidente es nombrado y cesado de forma discrecional por el Ejecutivo.

---

<sup>39</sup> El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos define interoperabilidad como *la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada*

- El derecho de acceso a la información no se reconoce como un derecho fundamental como hacen las Constituciones más avanzadas. Ello hará que en los posibles casos de conflicto prime la protección de datos sobre la transparencia. La naturaleza del derecho de acceso a la información constituyó uno de los debates más controvertidos tanto en el Parlamento como fuera de él, debido a que un gran número de actores reclamaban su condición de derecho fundamental. Al respecto, y sintetizando las principales posturas, se plantearon dos corrientes doctrinales, una mayoritaria que considera el derecho de acceso como un derecho constitucional autónomo de configuración local diferente al de libertad de información. Mientras que la otra corriente entiende que el acceso a la información es un derecho fundamental, que en España a falta de una reforma del Título I de la CE forma parte del contenido de la libertad de información del art. 20.1.d) en línea con el derecho internacional y europeo y con su propia función en un Estado democrático. Para los defensores de esta postura, su reconocimiento hubiera sido compatible con dotar del rango de orgánicas a las disposiciones sobre el ámbito, el contenido del derecho y sus límites. Asimismo, una de la paradojas que Guichot plantea es la relación entre el artículo considerado como fundamento, el 105.b y el título competencial del art.149.1.18 CE. La LTAIBG se aplica a múltiples sujetos que no son administraciones públicas pero sin embargo se apoya en el artículo que regula el acceso a archivos y registros administrativos incluido en un título dedicado al Gobierno y la Administración, invocando el título competencial de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (Guichot, 2014: 41- 47).
- La Ley no incorpora la publicidad de los informes finales derivados de las actuaciones de Auditoría y Fiscalización llevadas a cabo por los órganos de control interno de las distintas administraciones públicas, carencia que resta transparencia e información a los ciudadanos y dificulta el control social de las administraciones públicas.

Por ello, a pesar del salto incuestionable que supone la existencia de esta nueva Ley, han quedado sin resolver muchas cuestiones necesarias para garantizar una

verdadera política de integridad y transparencia tales como: i) mejoras en los sistemas de archivo y en la trazabilidad de los procesos de toma de decisiones (Gutiérrez, 2015: 24); ii) formación de los funcionarios en esta normativa y en los valores que la misma representa; iii) reorganización de los datos existentes para que se publiquen de forma que sean reutilizables por la ciudadanía; iv) impulso y desarrollo del llamado Gobierno 2.0 a través del diseño e implementación de plataformas de colaboración y el uso intensivo de la web 2.0 y redes sociales; y v) otros sistemas que faciliten la comunicación y la participación de los ciudadanos en este ámbito.

Finalmente, especial atención merece el Título relativo al Buen Gobierno. La Ley plantea como un gran avance la incorporación a una norma con rango de Ley los principios de buen gobierno. Como afirma García de Enterría, el problema básico de la organización “es el de la articulación de un grupo de seres personales, cada uno con su órbita propia de intereses y de tendencias en el marco abstracto e impersonal de la organización que, por otra parte, no puede existir sin que ese grupo de hombres le presten su propia fuerza espiritual potencialmente disociadora”<sup>40</sup>. Es llamativo que la Exposición de Motivos de la LTAIBG no haga mención alguna al texto constitucional al establecer obligaciones de buen gobierno a los responsables políticos y las consecuencias derivadas de su incumplimiento y si lo haga expresamente en relación al acceso de información pública al citar el artículo 105.b CE. Aunque lo realmente notorio es que no contenga ninguna referencia a los motivos que explican la regulación del buen gobierno en relación al clima de malestar social debido a la crisis económica, la mala gestión y los presuntos casos de corrupción principalmente en materia de urbanismo y contratos del sector público exponiendo la necesidad de establecer instrumentos jurídicos para intentar poner fin a esa situación. (Descalzo, 2014: 249-250)

El antecedente inmediato, el Anteproyecto de Ley de Transparencia de la legislatura 2008-2011 no hizo referencia al tema de buen gobierno, pero cabe señalar que en la legislatura 2004-2008 el Consejo de Ministros (el 18 de febrero de 2005) aprobó un Programa de actuaciones para el buen gobierno donde se hacía hincapié en el compromiso

---

<sup>40</sup> García de Enterría E, 1985, ‘La organización y sus agentes: revisión de estructuras’, en *La Administración española*, 4ª edición, Alianza, Madrid, 1985, p. 106.

del Gobierno para elevar el listón del comportamiento exigible a los responsables políticos, entre cuyas medidas se encuentra el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado<sup>41</sup>. En la LTAIBG el buen gobierno aparece configurado inicialmente como un conjunto de principios generales y actuación aplicable a los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la AGE, pero en puridad la previsión de buen gobierno se concreta en un régimen disciplinario y sancionador en materia de gestión económico-financiera y de conflicto de intereses en que pueden incurrir los responsables públicos. Ello implica una interpretación más restrictiva dentro de las muchas acepciones que rodean al concepto de buen gobierno y que han llevado a enmarcarlo bien dentro de la NGP o la Gobernanza, como se reflejan en instrumentos de carácter europeo como el Libro Blanco de la Gobernanza de la Comisión Europea (2001) o en la previsión del art. 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE que reconoce el derecho a una buena administración (Descalzo, 2014: 250-251).

Aunque la Exposición de Motivos no lo recoja expresamente este Título bebe directamente del famoso Informe *Nolan*, que llamaba al altruismo, la integridad, la objetividad, la responsabilidad, la transparencia, la honestidad y el liderazgo de los responsables públicos en el ejercicio de su labor de gobierno<sup>42</sup>. Otras referencias son el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, elaborado en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, del 23 de junio de 2006 y del Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. De ahí que si como dice la Exposición de motivos el buen gobierno responde a la idea de establecer un modelo de ejemplaridad para todos los responsables públicos debería ser obvio que ello debe nutrirse de valores referidos a la integridad y rectitud personal de los cargos públicos susceptibles de guiar sus actuaciones y no sólo limitarse a realizar un catálogo de conductas infractoras cuyo objetivo es castigar ciertos

---

<sup>41</sup> Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, aprobado mediante Orden APU/516/2005 de 3 de marzo por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado

<sup>42</sup> Informe Nolan en Martín Retortillo 'Reflexiones de urgencia sobre el Informe Nolan' Revista Aragonesa de Administración Pública, num. 11 (1997)

mandatos normativos, pues esa, en todo caso, es función del derecho administrativo sancionador. Así las previsiones sobre buen gobierno han perdido la oportunidad de promover esquemas éticos que enfatizen los valores y virtudes públicas que incentiven determinados comportamientos reconociendo a quienes demuestren una mejor predisposición al interés general y a la mejora del servicio público (Descalzo, 2014: 252-253; Rivero, 2012: 90)<sup>43</sup>.

En suma, como plantea Villoria (2014: 62-66) la pregunta clave es si la LTAIBG promoverá la relegitimación de la acción pública, si logrará prevenir la corrupción y si mejorará la eficiencia de nuestras administraciones. Para lograrlo apunta una serie de variables que deberán ser analizadas una vez que la Ley sea implementada de forma efectiva, pero que se sintetizan en: la existencia de un sistema de archivos eficaz; la simplificación de normas y procedimientos para lograr que la información sea clara, estructurada y entendible; la apuesta política de una generación de una interoperabilidad eficaz entre sistemas; la agilidad en la provisión de información, tratamiento y renovación; la garantía de reutilización de los datos, gratis o a bajo coste; el establecimiento de un sistema de incentivos al cumplimiento; el diseño de un sistema de sanciones eficaz en caso de incumplimiento; la sistematización de un buen procedimiento de solicitud, demanda, quejas y recursos; la formación a los funcionarios en gobierno abierto e integridad, la dotación de presupuesto suficiente; la continuidad de un órgano político impulsor con relevancia y peso político; y el funcionamiento del órgano de gestión del sistema con medios suficientes, independencia y transparencia.

Con la aprobación de la Ley de Transparencia el Gobierno de España entró a formar parte de esa corriente de buena gobernanza e integridad gubernamental que se identifica con la dimensión del *open government* conectada a “la transparencia pasiva, derecho a saber, y a la transparencia activa, vinculada a las web gubernamentales donde se sitúan en gran parte las medidas que vinculan gobierno abierto con la lucha anticorrupción” (Villoria, 2012: 80).

---

<sup>43</sup> Rivero Orega, R (2012) La necesaria innovación en las instituciones administrativas. INAP, Madrid, 2012, p.90



## **B) Portal de Transparencia**

La segunda de las medidas significativas que ha dado cumplimiento a uno de los diez compromisos del Segundo Plan Nacional de Gobierno Abierto ha sido la puesta en marcha del Portal de Transparencia del Gobierno de España ([www.transparencia.gob.es](http://www.transparencia.gob.es)), cuya previsión ya quedó reflejada en la LTAIBG. Su objetivo es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

El primer Anteproyecto de LTAIBG planteó de forma novedosa la creación para la Administración General del Estado (AGE) de un Portal de Transparencia que incluyera la información más relevante de la administración estatal pero abriendo la posibilidad de que la AGE, las CCAA y las Entidades locales pudieran adoptar medidas complementarias para el desarrollo de las obligaciones de transparencia. Sin embargo la consulta ciudadana introdujo una serie de recomendaciones en la línea de incorporar peticiones de información y respuestas, prever la posibilidad de adhesiones a peticiones en curso, incluir enlaces a bases de datos ya existentes e incorporar referencias específicas a la publicación de la información en formato reutilizable, así como establecer cauces de participación ciudadana. El segundo Anteproyecto no tomó en consideración estas observaciones, aunque en las comparecencias de los expertos ante la Comisión Constitucional se insistió en la idea de conformar un Portal interoperable o e incluso un Portal de Gobierno Abierto. En su paso por el Congreso también se propusieron medidas para atribuir su gestión a la autoridad independiente de control o para hacer obligatorias las medidas de colaboración (Guichot, 2014: 193-194).

Finalmente la LTAIBG optó por la creación de un Portal de la Transparencia en el que se debía incluir toda la información de publicación obligatoria y aquella que se solicitase con más frecuencia por los ciudadanos, aunque esta condición debía ser desarrollada en un futuro por un reglamento (que actualmente se encuentra en fase de consulta pública). El Portal se configura como un sitio único, dependiente del Ministerio de Presidencia, órgano de gran peso político con capacidad de coordinación y dirección

efectiva, en el que se ha optado por un modelo unidireccional y no de participación y gobierno abierto, lo que según Guichot queda justificado debido a que se trata de la primera ley española general e integral de derecho de acceso a la información, por lo que la inserción de otras fórmulas deben esperar a un mayor nivel de madurez y de funcionamiento útil del Portal de Transparencia (Guichot, 2014: 195-196).

El Portal de la Transparencia del Gobierno de España fue puesto en marcha en diciembre de 2014, un año después de la entrada en vigor de la Ley<sup>44</sup>. A través del mismo se facilita el acceso de los ciudadanos a toda la información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia jurídica, económica, presupuestaria y estadística correspondiente a los Ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales y entidades de Derecho público, pero no contiene información de Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Sociedades Estatales, Fundaciones y Órganos Constitucionales, puesto que dichas administraciones e instituciones deberán desarrollar sus propios portales de transparencia.

De forma análoga a las normas que regulan estos derechos, determinado rango de información no se publicará si afecta a cuestiones sensibles como la seguridad nacional, la defensa o la protección de datos personales. En estos casos, deberá comprobarse si verdaderamente la publicación afecta a los límites que la Ley prevé o, para el caso de los datos personales, si éstos pueden eliminarse del documento que se publique. Uno de los avances del portal ha sido favorecer el principio de publicidad activa puesto que la información más relevante para el ciudadano y de frecuente acceso estará disponible en el Portal de manera accesible, reutilizable e interoperable. Si el interesado necesita más información, en ese caso podrá acceder al servicio de solicitud de información pública, derecho regulado también por la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

Sin embargo, el Portal no ha estado exento de críticas relacionadas con la forma de acceso, la accesibilidad de la información, el tipo y formato de datos y los mecanismos de identificación que necesita cumplimentar el ciudadano a la hora de poder obtener

---

<sup>44</sup> Información obtenida de la página web de Presidencia del Gobierno de España: <http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mpr/Paginas/2014/121114-vicepresupuestos.aspx>

información. Una de las principales objeciones realizadas por parte de la sociedad civil —Fundación Ciudadana Civio y Access Info Europe— ha sido que el nuevo Portal de Transparencia se puso en marcha sin consenso y con una estructura más cercana a un ejercicio de recopilación de información que no a una verdadera apuesta por la transparencia<sup>45</sup>.

### C) Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Para que el derecho de acceso a un bien inmaterial como es la información pueda cumplir con su finalidad como instrumento de participación y control ciudadano es necesario que las garantías del derecho respondan a cuatro principios: inmediatez, asequibilidad, independencia y efectividad. La previsión de autoridades especializadas para garantizar dicho derecho es la tendencia más practicada en el ámbito comparado. En España la LRJPAC no previó disposiciones específicas en materia de derecho de acceso y la vía para reclamar ese derecho se disponía a través del sistema de recursos ordinarios, tanto administrativos como contencioso-administrativos. Por ello, en el momento de elaborar la LTAIBG había que adoptar una decisión política administrativa sobre quién sería el órgano competente para ejercer esas funciones.

Resulta oportuno señalar que el primer Anteproyecto optó por atribuir las competencias a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AEVAL), para no constituir una nueva institución en época donde la crisis comenzaba a agudizarse y con ella los recortes presupuestarios. Aquella opción *no nata*, aunque tuviera cierto sentido por la relación entre transparencia y evaluación de políticas públicas, hubiera acarreado problemas de funcionamiento debido al perfil profesional de la organización y la falta de independencia. Sin embargo la opción del segundo Anteproyecto planteó encargar las funciones de control en materia de transparencia a un órgano, agencia existente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Como sostuvo Guichot ya en 2011 con motivo de los debates previos en torno a esta cuestión, la AEPD contaba con una serie de inconvenientes que volvían hacerse patentes en el nuevo Anteproyecto.

---

<sup>45</sup> Información obtenida en el diario digital Huffington Post, ‘Cinco aspectos que el Gobierno debería mejorar en el Portal de Transparencia’

([http://www.huffingtonpost.es/2014/12/10/portal-transparencia-fallos\\_n\\_6301982.html](http://www.huffingtonpost.es/2014/12/10/portal-transparencia-fallos_n_6301982.html))

Así, sostenía que la Agencia ostentaba un conocimiento especializado en materia de protección de datos y no en materia de acceso a la información pública, por lo que su propia naturaleza la ubicaba en una posición defensiva de ‘protección’ e interpretación restrictiva, además de ser un organismo que ejerce sus competencias no solo respecto a sujetos públicos sino también privados. A todo ello podía sumarse la importante carga de trabajo lo que hubiera implicado una inversión en personal y formación que no hubiera permitido adaptar sus funciones a coste cero (Guichot, 2014: 333-336).

La tramitación en el Congreso supuso un cambio de sentir generalizado, tras el acuerdo de todo el arco parlamentario de la oposición de la defensa de la creación de una Agencia de Transparencia y Acceso a la Información, la Vicepresidenta en el debate de las enmiendas a la totalidad anunció la creación de una autoridad independiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cuyo responsable sería elegido por mayoría absoluta del Congreso y no podría ser cesado salvo por causas tasadas (Guichot, 2014: 338-339). Como dispone el artículo 33 de la LTAIBG, el CTBG, tiene personalidad propia y plena capacidad de obrar con autonomía y plena independencia en cumplimiento de sus fines. Su naturaleza de organismo público le viene conferida por la disposición adicional decima de la LOFAGE y está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, pero no entendido como adscripción orgánica y funcional sino a efectos del diseño y tramitación del presupuesto (Guichot, 2014: 341). Así, el 31 de octubre de 2014 se aprobó el Real Decreto 919/2014, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno<sup>46</sup>).

La Ley, en su artículo 34, le encomienda una cuádruple función de:

*Promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno (2014a).*

Como establece el Proyecto de Plan Estratégico 2015-2016 del CTGB, la primera función (‘promover la transparencia’) es proactiva, por cuanto implica tomar la iniciativa

---

<sup>46</sup> Véase en documentos anexos.

del proceso de implantación de la cultura de transparencia en administraciones y organismos públicos españoles. Por el contrario, las otras tres funciones (‘velar, salvaguardar y garantizar’) son calificadas de reactivas, pues dependen de una actividad previa de otros órganos e instituciones del Estado, que ya vienen obligados por la Ley a implantar una serie de medidas en los ámbitos materiales cubiertos: transparencia, información y buen gobierno (CTGB, 2015: 4). Los objetivos del CTGB en el período incluido en el Plan se encuentran relacionados directamente con las finalidades que señala la Ley de Transparencia y que se sintetizan a continuación:

- Participar en los procesos de elaboración normativa para impulsar la transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno.
- Colaborar en el mismo sentido con los órganos de naturaleza de análoga de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
- Promover la sensibilización social y la formación en las materias contempladas en la Ley de Transparencia.
- Establecer un sistema de información sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, el ejercicio del derecho de acceso y la aplicación de los principios de buen gobierno.
- Establecer un procedimiento eficiente y eficaz de tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos.
- Presentar ante las Cortes Generales las Memorias de cumplimiento de la Ley en 2015 y 2016.

Entre los objetivos del CTGB, uno merece especial consideración a los efectos de esta investigación. El relativo a la colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, tal y como prevé el Estatuto del Consejo en su artículo 5. Así, en el ámbito de sus competencias, el CTGB podrá convocar reuniones periódicas con los representantes autonómicos y con un representante de la administraciones locales nombrado por la FEMP. El CTGB puede celebrar convenios de colaboración con CCAA y entidades locales en el ámbito de sus respectivas competencias.

### III. EL GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO

A pesar de que sólo los gobiernos nacionales pueden adherirse formalmente al OGP, ello no es obstáculo para que iniciativas de gobiernos subnacionales puedan ser incorporadas de forma indirecta a través de los respectivos Planes Nacionales. La posibilidad de involucrar al resto de niveles de gobierno viene marcada por el ‘pueden’ y hasta el momento España no ha incorporado la visión ni las estrategias de los otros dos niveles territoriales de gobierno.

Por definición, el gobierno abierto implica transitar de una lógica jerárquica a una de creación de redes y colaboración horizontal y la diferencia esencial entre una estrategia de gobierno abierto y una de transparencia puntual es la participación activa y continuada de las comunidades. Este tipo de lógica tiene una mejor oportunidad de desarrollo en los niveles más próximos a la ciudadanía, que han decidido coger el testigo de la iniciativa. La práctica del país así lo demuestra, puesto que los gobiernos regionales fueron los que impulsaron estrategias de gobierno abierto y los gobiernos locales tradicionalmente han estado a la vanguardia en el desarrollo de políticas de transparencia y de participación ciudadana. En esta línea, el ONTSI, en el *Estudio sobre objetivos, estrategias y actuaciones nacionales e internacionales en materia de Gobierno Abierto* publicado en 2013, afirmaba que:

*Del análisis del contexto nacional, se puede extraer la conclusión de que las administraciones públicas españolas han comenzado a apostar por el gobierno abierto, siendo el ámbito autonómico el más activo en esta materia. A nivel de la Administración General del Estado, los avances se han materializado en distintas actuaciones promovidas por algunos departamentos y organismos. A nivel local, por regla general, el desarrollo del Gobierno Abierto se circunscribe a un grupo reducido de Entidades Locales de gran tamaño o a determinadas iniciativas desarrolladas por corporaciones de tamaño menor (ONTSI, 2013b).*

Desde la publicación del Informe del ONTSI se ha producido un aumento de iniciativas descentralizadas de gobierno abierto que permiten afirmar, con carácter preliminar, que el desarrollo del gobierno abierto en el ámbito local ya no queda circunscrito a un grupo reducido de gobiernos locales, como se analizará en el Capítulo VI dedicado al gobierno abierto en el ámbito local español. Sin embargo, para hablar de

gobierno abierto en España es necesario aludir al liderazgo que en esta materia ejercieron algunos gobiernos autonómicos tras el lanzamiento internacional de la iniciativa. Se puede calificar de liderazgo destacable, en la medida que se produjo antes de la presentación del Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Por tanto, fue un ejercicio previo a la entrada en vigor de las obligaciones que de ella se desprenden. Así, de entre las actuaciones destacadas en ese tiempo, figuran las de los gobiernos de Cataluña, Castilla y León, y Navarra y País Vasco. Así, el mensaje del Lehendakari Patxi López en el discurso de presentación del Proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno el 27 de julio de 2012 era claro:

*Tenemos que dejar esa zona de confort en la que habitábamos los gobernantes y adaptarnos a las reglas de la nueva era que ha empezado. La transparencia nos obliga a todos a dar cuenta de muchas cosas en las que parecíamos tener un cheque en blanco. Y cuando nos acostumbremos a ello va a ser radicalmente positivo para todos porque sanea las estructuras de la administración y destierra los márgenes de arbitrariedad que sufren los ciudadanos. El objetivo es simple y claro: no podemos tolerar que haya un solo rincón oscuro de nuestras administraciones”* (cit. De los Ríos y Ortiz de Zárate, 2012: 491).

Sin duda Euskadi y su plataforma de gobierno abierto, Irekia, fue pionera en el ámbito del *open government* en España, y su estela fue seguida por otras regiones, que reconocieron el liderazgo de Irekia y se aprovecharon de la plataforma por ella creada<sup>47</sup>. Lo más destacable de Irekia es que situó en el centro de la agenda del Ejecutivo la iniciativa del *open government* impregnando de manera transversal las distintas áreas del gobierno, y contribuyendo a que la llama del gobierno abierto prendiese en el ámbito español. Irekia se presentaba como una herramienta que permitiría a cualquier ciudadano interpelar al responsable directo de cada área del gobierno, sin tener que pasar por lobbies u organizaciones que distorsionasen su voz. Lograba de esta manera abrir una brecha en la cultura de la opacidad, hasta entonces imperante en la administración y extendiendo entre funcionarios, cargos públicos, clase política y ciudadanía la idea de las ventajas de

---

<sup>47</sup> Irekia estuvo representada en la última reunión del *Open Government Partnership* por su Directora Nagore de los Ríos, a pesar de que sólo como país se podía participar, el enorme interés suscitado por la iniciativa vasca entre los miembros de la Alianza hizo que fuesen invitados en el marco de la delegación española, donde obtuvo una magnífica acogida por el sistema implantado de reutilización del software libre de la plataforma.

un modelo de gobierno abierto. Un número importante de Comunidades Autónomas se sumaron a esta corriente y comenzaron a poner en marcha procesos de gobierno abierto en sus respectivos territorios, aunque con diferente grado de desarrollo, profundidad y velocidad, como puede apreciarse en la siguiente figura:

**Figura 18: Iniciativas autonómicas en materia de transparencia, participación y gobierno abierto**

CCAA	NORMATIVA TRANSPARENCIA	GOBIERNO ABIERTO/PARTICIPACIÓN
ANDALUCÍA	Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública en Andalucía	Participa en Andalucía: iniciativa para presentar propuestas en los ayuntamientos andaluces <a href="http://www.participaenandalucia.net">www.participaenandalucia.net</a>
ARAGÓN	Ley 8/2015, de 25 de marzo de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón	Aragón Participa <a href="http://www.aragonparticipa.aragon.es">www.aragonparticipa.aragon.es</a>
ASTURIAS	Proyecto de Ley de Transparencia Proyecto de Ley de Buen Gobierno e incompatibilidad de Altos Cargos	Portal de Transparencia Asturias Participa <a href="http://www.asturiasparticipa.es">www.asturiasparticipa.es</a>
BALEARES	Ley 4/2011 de 31 de marzo de la Buena Administración y del Buen Gobierno de las Islas Baleares	.....
CANARIAS	Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública  Portal de Datos <a href="http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia">www.gobiernodecanarias.org/transparencia</a>	.....
CANTABRIA	Sin Ley ni Proyecto en curso	Portal de Transparencia <a href="http://www.cantabria.es/web/portal-de-transparencia">www.cantabria.es/web/portal-de-transparencia</a>
CASTILLA LA MANCHA	Anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana	Portal de Transparencia y Buen Gobierno <a href="http://transparencia.castillalamancha.es/transparencia">http://transparencia.castillalamancha.es/transparencia</a>



CASTILLA Y LEÓN	Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León	Portal de Gobierno Abierto <a href="http://www.gobiernoabierto.jcyl.es">www.gobiernoabierto.jcyl.es</a>
CATALUÑA	Ley 19/2014 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno	Portal de Transparencia Gencat <a href="http://www.transparencia.gencat.cat">www.transparencia.gencat.cat</a> Datos Abiertos <a href="http://www.dadesobertes.gencat.cat">www.dadesobertes.gencat.cat</a>
EXTREMA-DURA	Ley 4/2013 de 21 de mayo de Gobierno Abierto de Extremadura	Portal de Transparencia <a href="http://www.gobiernoabierto.gobex.es">www.gobiernoabierto.gobex.es</a>
GALICIA	Programa Impulso Democrático de la Xunta 2015-2016  Ley 4/2006 de 30 de junio Transparencia y Buenas Prácticas de la Administración  Elaboración nueva Ley proceso participativo	.....
LA RIOJA	Ley 3/2014 de 11 de septiembre de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja	Dato Abierto Rioja <a href="http://www.larioja.org">www.larioja.org</a>
MADRID	Sin Ley ni Proyecto en curso	.....
MURCIA	Iniciativa Integral para la Transparencia  Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia	.....
NAVARRA	Ley Foral 11/2012 de 21 de junio de la Transparencia y del Gobierno Abierto	Portal de Gobierno Abierto de Comunidad Autónoma Foral de Navarra: Escucha, Participa, Conversa <a href="http://www.gobiernoabierto.navarra.es">www.gobiernoabierto.navarra.es</a>
PAÍS VASCO	Proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno	Irekia: una ventana abierta a la participación ciudadana <a href="http://www.irekia.euskadi.net">www.irekia.euskadi.net</a>
VALENCIA	Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana	Gva Oberta <a href="http://www.gvaoberta.gva.es">www.gvaoberta.gva.es</a>

Fuente: Elaboración propia

El retraso en la aprobación de una Ley estatal de Transparencia ha hecho que muchas CCAA se hayan adelantado aprobando sus propias leyes sobre la materia. Cabe destacar que las leyes autonómicas tienen una muy desigual amplitud en su objeto regulatorio, puesto que las más modernas se contextualizan en el concepto más amplio de gobierno abierto, o mientras que otras optan por un alcance más específico basado en el *open data*, esto es, en la disposición de datos de carácter reutilizable. Probablemente tras la aprobación de la Ley estatal muchas de las normativas deban ser adaptadas y definir con mayor precisión en alcance de sus contenidos (transparencia, open data, gobierno abierto, participación) pero en un marco de coherencia con la normativa del Estado (Guichot, 2014: 49).

En síntesis, aunque en la actualidad no todas las regiones se encuentran en el mismo nivel de desarrollo, ya desde finales de los años noventa se venía defendiendo en el ámbito autonómico la participación ciudadana en el ámbito parlamentario para mejorar la calidad de las leyes y reforzar políticamente la institución (Aja y Larios, 1998: 82). La apuesta por acciones de gobierno abierto a través de la aprobación de normativa sobre transparencia, participación tiene una lectura positiva, puesto que la aprobación de leyes autonómicas específicas y la puesta en marcha de portales de transparencia muestran voluntad de apertura y reforma institucional en la materia. No siendo objeto de esta investigación el análisis en profundidad de las iniciativas autonómicas en relación al gobierno abierto, sí se ha estimado relevante realizar una breve aproximación al respecto, debido esencialmente al impulso dado en un primer momento por determinadas regiones a través de iniciativas como: Irekia en el País Vasco; Navarra y la primera Ley de Gobierno Abierto en España (la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto); Cataluña con sus Datos Abiertos GENCAT y la *Guía de usos y estilo en las redes sociales*; la estrategia ‘Aragón Participa’ y su Portal de participación ciudadana (primera comunidad web construida íntegramente con software libre); la Ley 4/2013 de 21 de mayo de Gobierno Abierto de Extremadura; o la estrategia autonómica y local llevada a cabo por la Junta de Castilla y León que impulsó una hoja de ruta para los ayuntamientos a través de publicación *Open Government: 10 ideas para hacer tu*

*Ayuntamiento abierto*, que han sido esenciales en la generación de una cultura de cambio en las políticas de transparencia y gobierno abierto.

Finalmente, cabe destacar que si bien es cierto que los gobiernos regionales comenzaron liderando la puesta en marcha de iniciativas de transparencia y de gobierno abierto a través de reformas legislativas más avanzadas que la propia Ley de Transparencia del Gobierno (Navarra, País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Aragón), no es menos cierto que los gobiernos locales comenzaron en paralelo a recorrer el camino hacia el gobierno abierto explorando la formulación de políticas de transparencia y participación ciudadana. La proximidad inherente a la gestión local, ha situado a los gobiernos locales en una posición óptima para instar políticas de *open government*, produciéndose un avance significativo en apenas dos años del número de ciudades que han incorporado a sus programas de gobierno medidas propias de un modelo de gobierno abierto.

## **CAPÍTULO V. LA VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA EL GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA**

### **I. CONSIDERACIONES PREVIAS**

La inquietud por la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana no han sido variables clave en la acción de gobiernos y administraciones a lo largo de la democracia en España. De hecho, es difícil encontrar investigaciones anteriores a 2004 sobre transparencia e indicadores de las preocupaciones de los ciudadanos, donde cuestiones como la transparencia, la rendición de cuentas o la participación aparecieran como prioritarias en el mapa de valores anterior a la crisis económica (Villoria, 2015: 1). En contraste con esa realidad, hablar de transparencia, rendición de cuentas y regeneración democrática se ha convertido en un mantra inevitable durante estos últimos años, consecuencia de la información que a diario la ciudadanía ha recibido sobre los efectos derivados de esa falta de transparencia y rendición de cuentas. Esto ha llevado a que desde el año 2013 la ciudadanía perciba la corrupción como el segundo de los problemas del país, después del desempleo, como muestran los barómetros del CIS desde esa fecha. Sin embargo, la preocupación por la transparencia, la rendición de cuentas y la ausencia de mecanismos eficaces de participación ciudadana, no sólo ha constituido un problema en el contexto nacional, sino que se ha convertido en una preocupación que, con más o menos intensidad, ha alcanzado a numerosas democracias desarrolladas. Nos encontramos en una sociedad global, conectada, informada y menos manipulable, que exige responsabilidad a sus representantes y que ha elevado los

estándares de calidad sobre aquellos que considera que deben ser sus líderes y representantes políticos.

La desafección en España en estos últimos años ha alcanzado a las instituciones representativas de la ciudadanía —a nivel nacional, autonómico y local—, a los partidos políticos, al Poder Judicial, a sindicatos, e incluso a la Jefatura del Estado, llegando a cuestionar el propio sistema y su base constitucional. Para reducir ese desafección, incentivar la integridad y responsabilidad de los servidores públicos y prevenir los abusos de poder, comenzaron a surgir ideas, alternativas y propuestas en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Estos originaron un movimiento tendente a la configuración de modelos de gobierno abierto, dotado de nuevos valores que auguraban las reformas institucionales necesarias capaces de generar de nuevo confiabilidad tanto en el sistema como en las instituciones.

En ese contexto de creciente desafección ciudadana, la entrada del Gobierno de España en la Alianza para el Gobierno Abierto parecía marcar un compromiso con la filosofía y los principios de la iniciativa. Este compromiso venía acompañado de un contexto en el que España tenía que lanzar mensajes de credibilidad en clave económica e institucional a la comunidad internacional. El marco temporal en el que surgió la iniciativa, unido a las condiciones específicas del país, dieron como resultado que el Gobierno de España se adhiriese a la red. A partir de ese momento, se generó un incipiente debate entre diversas comunidades de expertos sobre la necesaria transición del actual modelo de gobierno a un sistema más abierto, horizontal y participativo.

A lo largo de las siguientes páginas se muestra como la creciente desafección política por parte de la ciudadanía abrió una ventana de oportunidad para las políticas de transparencia y gobierno abierto, y como este nuevo subsistema de políticas públicas se ha convertido en una de las respuestas esenciales para luchar contra la opacidad, la discrecionalidad, la falta de transparencia y la corrupción en el país, dando lugar a un cambio en las políticas públicas en España en torno a la transparencia en general y al gobierno abierto en particular. Siguiendo el ECM de Kingdon (1984; 1995) se expondrá cómo se definió el problema de grave crisis de confianza de los ciudadanos en el sistema,

cuáles fueron las alternativas valoradas para dar respuesta a dicho problema, como emergió el gobierno abierto como una opción para resolverlo, y qué procesos políticos concretos están siendo determinantes para la adopción de dicha alternativa.

## II. LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (*AGENDA*): LA DESAFECCIÓN POLÍTICA

### 1. LA DESAFECCIÓN EN ESPAÑA

A lo largo de este último lustro, España ha atravesado enormes dificultades que no sólo han estado marcadas por una profunda crisis económica, sino también por una creciente crisis política e institucional. Una crisis que ha agitado la conciencia de la ciudadanía, que ha supuesto la revisión del sistema productivo y que ha llegado a cuestionar un sistema político de más de cuarenta años. Esta percepción de quiebra del sistema ha derivado en un intenso debate sobre la necesidad urgente de llevar a cabo reformas para mejorar su funcionamiento y, con ello, luchar contra la crisis de confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.

El malestar y desencanto en la democracia han sido problemas discutidos en los ámbitos institucionales, ciudadanos y académicos a raíz de la constatación del menoscabo continuo de la participación cívica y electoral, mientras que otras formas de participación han evolucionado como respuesta a la insatisfacción. Sin embargo, a pesar del creciente descontento, éste no ha llegado a cuestionar a la democracia hasta sus últimas consecuencias, debido seguramente a que se desconoce cualquier otro sistema civilizado que en este momento la pueda sustituir (Morán Rubio, 2011). Desde este punto de vista, la crisis de la democracia es vista como una situación relacionada con las expectativas y las demandas de los sujetos en su entorno político. La desafección ha sido objeto de debate en cuanto a su contenido y a sus diferencias con otros conceptos relacionados con ella, originando un amplio campo semántico que integra numerosas locuciones: alienación, anemia democrática, anomia, apatía, cinismo político, crisis de confianza, desafección, desapego, desconfianza, descontento, desinterés, distanciamiento, escepticismo, insatisfacción, negativismo o *non-involved citizens* entre muchas otras (Marotte, 2014).

Pero todas ellas encierran una idea básica: la desafección consiste en el distanciamiento emocional y práctico de un creciente número de ciudadanos con respecto a las instituciones del sistema democrático y a sus gestores (Vallés, 2015).

Para comprender el fenómeno de la desafección suelen referenciarse dos factores que juegan un rol esencial en las relaciones entre ciudadanía y sistema democrático: la confianza social y la igualdad económica. El origen y consistencia de las democracias se ha relacionado con las conductas que se producen entre los miembros de la comunidad y del nexo existente entre confianza individual, confianza social y confianza política. Desde esta perspectiva la confianza social es condición necesaria, aunque no exclusiva, para la confianza política (Vallés, 2015). Tomando como referencia los datos del *European Social Survey (ESS)* y del *World Values Survey (WVS)* la confianza social no es un comportamiento generalmente extendido en las sociedades encuestadas, sin embargo, aquellas que ofrecen índices altos de confianza social también suelen mostrar mejores índices de confianza política. En relación a la igualdad económica, siguiendo a Dahl (2008) “si la renta, el patrimonio y la posición económica son recursos políticos y están distribuidos de manera desigual ¿cómo pueden ser los ciudadanos políticamente iguales? Y si los ciudadanos no pueden ser políticamente iguales ¿cómo puede existir la democracia?”. Aquí se establece una vinculación directa entre escasez de recursos y mayor dificultad en la asunción de responsabilidades en el ámbito público, tanto por ausencia de medios como de situación psicológica de inferioridad. Así, una distribución concentrada de recursos deteriora la cohesión social y sustrae a los más frágiles económicamente de las herramientas intelectuales e instrumentales imprescindibles para una efectiva participación, afectando al conjunto social e induciendo una pérdida generalizada de confianza. De ahí que a mayor igualdad socioeconómica mayor probabilidad de consolidación democrática (Vallés, 2015). En suma, las dos variables – cultural y socioeconómica- revelan una conexión que entraña que una ordenación social sin elevadas diferencias económicas puede ser positiva en la conformación de compromiso cívico y participación política no elitista. Aunque no siempre dicha relación ofrezca la misma intensidad es parte consustancial de un contexto sin cuya incorporación no sería posible comprender el fenómeno de la desafección política (Vallés, 2015).

La crisis de confianza no ha sido un problema exclusivamente nacional, de ahí que un gran número de estudios hayan examinado los elementos fundamentales y los aspectos concurrentes de las principales democracias europeas que muestran como la confianza es mayor en los países del norte de Europa (Marien, 2011; Bovens y Wille, 2011). Los estudios también han coincidido en señalar que las actitudes de confianza o desconfianza suelen manifestar una gran durabilidad en el tiempo debido a un factor cultural íntimamente conectado con procesos de socialización y modernización económica social y cultural (Mishler y Rose, 2011). Así, en el caso de los países del sur de Europa se atestigua la existencia de una ‘cultura política mediterránea’ definida a través de actitudes de pesimismo, conservadurismo, distancia política y escasa participación (Mamadouh, 1997, 1999). Otras líneas de análisis en cambio sustentan que la falta de confianza política se debe al incumplimiento de las expectativas que los ciudadanos tienen respecto del funcionamiento institucional y sus resultados políticos fundados en un componente racional cultural basado en dos tipos de argumentos (Norris, 1999a; Phar y Putnam, 2000, Torcal, 2015): la distancia existente entre los intereses de los representantes y las demandas de ciudadanos, donde los representantes parecen responder más a las indicaciones e intereses de organismos internacionales que a los de la ciudadanía, y a la existencia de arreglos institucionales que promueven la concentración de poder en los partidos mayoritarios que traen como consecuencia problemas de corrupción en el sistema (Alesina y Wacziarg, 2000; Armingeon y Guthman, 2013; Norris, 1999b; Della Porta, 2000). Finalmente, existen otro grupo de propuestas que construyen una relación directa entre desafección y resultados económicos del sistema. En estas teorías se relaciona el desafección con la crisis del modelo capitalista que en Europa ha mostrado su cara más dura con las consecuentes políticas de austeridad y de recortes de servicios (Polavieja, 2013; Vallés, 2015).

La desafección ciudadana frente a las instituciones políticas y sus gestores es observada por diversos autores como un factor de riesgo para la estabilidad de la democracia española (Vallés; Torcal; Villoria; Jiménez, 2015). La tardía y agitada incorporación de España al sistema democrático ha sido un factor determinante del problema de desafección en el país. España comenzó su nuevo proyecto democrático a



finales de la década de los setenta al mismo tiempo que comenzaban los primeros debates sobre la crisis de las democracias liberales tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de la juventud de la democracia en España la primeras referencias a la desconfianza en las instituciones no tardaron en llegar. Así se manifestaron en los primeros años de la transición política, probablemente, resultado de la herencia reciente que había dejado una significativa huella en relación a la mala utilización de las instituciones representativas en manos del poder económico durante la monarquía liberal, a la desaparición de la política y la democracia tras la persecución violenta de las ideologías contrarias al régimen dictatorial franquista y a una transición política sostenida en elites y no en un sustrato de movilización social ciudadana. No obstante, más allá de este contexto, el caso español se encuentra en un margen similar comparado con otras democracias desafectas (Vallés, 2015).

Sin embargo la endémica desafección política en España ha sufrido un importante aumento desde el año 2008 situando al país entre el grupo de países europeos con mayor grado de desafección. El deterioro de la situación económica y sus consecuencias sociales se exponen como factores determinantes de la crisis de confianza (Polavieja, 2013). Pero éstas no son la únicas variables de la ecuación, si ello fuese así la mejora del contexto económico aumentaría automáticamente los índices de confianza ciudadana. La crisis por tanto ha supuesto un test de estrés que ha evidenciado las deficiencias de las instituciones y el comportamiento poco ejemplar de los representantes públicos. Como sostiene Torcal ese razonamiento sólo ofrece una explicación parcial ya que la sociedad también está franqueando una crisis resultado del mal funcionamiento de las instituciones pero que en esta ocasión ha despertado el interés político de la ciudadanía (Torcal, 2015).

Además, la insatisfacción con el funcionamiento del sistema democrático se ha visto agravada por un factor novedoso, la corrupción, y la progresiva intolerancia que el mismo comenzó a provocar en la ciudadanía debido al enorme eco proporcionado por los medios de comunicación. Si a ello se suma las consecuencias objetivas de la crisis: el aumento incontrolable del paro, la precarización de las condiciones del trabajo, la extensión de la pobreza, la fragilidad de las prestaciones y los servicios públicos, el

resultado es la amplificación del pesimismo y la desconfianza, el refuerzo del clima de desafección y el riesgo de la legitimación del sistema (Vallés, 2015).

Esta investigación parte del diagnóstico de que la desafección política ha sido la causa que ha abierto una ventana de oportunidad para el desarrollo de una nueva forma de política, el gobierno abierto, de ahí que sea importante definir y operacionalizar el concepto de desafección política. Torcal y Montero (2000) señalan que la desafección política consta de dos componentes básicos: la desafección institucional, como sentimiento negativo sobre las instituciones y su incapacidad para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, y el desapego político, relacionado con una falta de interés generalizado con lo público. Es relevante señalar que ambas dimensiones en España han estado vinculadas, la desafección política implicaba un escaso interés por la política. Hecho que en el contexto actual ha variado, el nivel de desafección institucional ha aumentado de forma espectacular mientras que el interés por la política, o por otro tipo de política ha crecido (Torcal, 2015). No obstante, esta crisis socioeconómica y su permanencia en el tiempo ha dado lugar a un efecto novedoso: la acentuación de la desafección de una importante mayoría y la activación política de determinados sectores de la población. Muestra de ello son las movilizaciones del 15M o movimiento de los indignados que han dado lugar a la creación de nuevos partidos políticos como Podemos o la conformación de Plataformas ciudadanas a modo de agrupación de interés electoral que recientemente han concurrido a las elecciones municipales de 2015.

Pero incorporar un asunto en la agenda política requiere de un proceso previo: el asunto debe haber sido socialmente problematizado y políticamente visibilizado. Por tanto, la cuestión requiere ser percibida por un individuo, grupo o comunidad como un problema y adquirir reconocimiento social (Kingdon: 1984; 1995: 109; Ramírez Brouchoud: 2007, 251). La inserción en la agenda política nacional del problema de la desafección política de los ciudadanos en el sistema democrático español cuenta con indicadores y acontecimientos relevantes que muestran cómo la desafección se ha convertido en una de las principales preocupaciones de gobiernos, instituciones, partidos políticos, medios de comunicación, comunidades de expertos y sociedad civil, alcanzando un lugar preeminente en la agenda gubernamental nacional, autonómica y local. Los

indicadores, acontecimientos relevantes y estudios específicos que se relacionan a continuación muestran que, en estos últimos años, la crisis de confianza ha pasado de ser una condición estable a convertirse en una de las principales preocupaciones en España. La consecuencia de este hecho ha sido su incorporación en la agenda de gobiernos y administraciones en el país (Kingdon, 1984; 1995: 90-105).

## 2. INDICADORES

### A) Corrupción y percepción de la corrupción

En los últimos años, España se ha visto afectada por un número significativo de casos de corrupción que han salpicado a destacadas figuras políticas, altos funcionarios y líderes empresariales, suscitando un amplio debate público sobre la aparente debilidad del sistema. Esto está estrechamente relacionado con la crisis económica que se inició en 2008 y que ha erosionado gravemente la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos e instituciones. La corrupción en España se ha convertido en un problema grave debido a la incidencia real del fenómeno y a la percepción de los ciudadanos sobre el mismo (Jiménez, 2015). Siguiendo a Laguna existen ciertas variables que han afectado al fomento de la corrupción en el país constituyendo un caldo de cultivo idóneo para su instauración, entre ellas señala: la hegemonía de un mercado global que antepone el pragmatismo del dinero a cualquier otro valor, la mercantilización de todos los aspectos de la vida, el predominio de lo individual frente a lo colectivo y el elevado deterioro de la ética pública (Laguna, 2013: 94-95). Pero uno de los factores más relevantes que han favorecido las prácticas corruptas ha sido el progreso de una economía especulativa frente a la productiva, que ha tenido en el boom urbanístico español su máximo exponente, dando lugar a un notable incremento de la corrupción política en el ámbito municipal. Es lo que se ha conocido como ‘ladrillo y corrupción’ (Jiménez, 2008: 278). La inexistencia de controles o la ineficacia de los existentes, a la hora de hacer transparente la gestión, hace que adquieran relevancia la teoría normativa de la democracia que persigue la transparencia del ágora pública en la que la publicidad es la regla y el secreto la excepción (Bobbio, 1985) y la conocida teoría de Klitgaard (1988: 75) sobre los ingredientes básicos de la corrupción:  $C = M + D - R$

Donde la corrupción (C) equivale a monopolio de la decisión (M) más discrecionalidad (D) menos rendición de cuentas (R). De este modo, cuanto más reducido sea el grupo de actores de quienes depende la decisión sobre el asunto en cuestión a modo de monopolio, cuanto mayor sea el margen de discrecionalidad del que dispongan tales actores para tomar su decisión y, por último, cuantos menos o más ineficientes sean los controles sobre los agentes que toman la decisión, mayor será la probabilidad de que surja la corrupción. Es lo que ha sucedido en España en la última década (Klitgaard 1999:75; Jiménez, 2008: 264).

España no cuenta estadísticas oficiales para medir el nivel de corrupción lo que muestra la falta de atención que ha requerido esta cuestión. Frente esa ausencia es necesario recurrir a los estudios de científicos sociales, barómetros de percepción o bases de datos de los principales medios de comunicación. Atendiendo a los casos de corrupción vinculados con la actividad urbanística que se ha convertido en la fuente principal de la corrupción en España el estudio sobre *Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España* (Jerez, L., Martín, V., y Pérez, R., 2012, 5-18) contabilizó entre los años 2000 y 2010 seiscientos setenta y seis municipios afectados por casos de corrupción, esto es un 8,3 % del total de ayuntamientos en España. Cifra preocupante como media nacional, pero que alcanza niveles muy por encima de la media en el caso de determinadas comunidades autónomas como Murcia (57,8%), Canarias (39,8%), Baleares (35, 8), Asturias (26,9%) y Madrid (25,7%) (Jerez et al, 2012:12, Jiménez, 2015).

Hasta el año 2004, la percepción por parte de los ciudadanos de los niveles de corrupción en España era baja, ya que el país figuraba entre los países menos corruptos, en concreto detentaba el número 22 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que anualmente publica Transparencia Internacional. Sin embargo, la tendencia se invirtió cuando la economía española entró en recesión después de casi quince años de crecimiento económico sostenido. A partir de 2009, el nivel de percepción de la corrupción en España aumentó durante cuatro años de manera consecutiva. En el año 2013, España había descendido dieciocho puestos hasta la posición número 40 en el IPC.

**Figura 19: Índice de percepción de la corrupción en España (2004-2014)**

<b>Año</b>	<b>Posición</b>	<b>Nº Países</b>
2004	22	146
2005	23	159
2006	23	163
2007	26	179
2008	28	180
2009	32	180
2010	30	178
2011	31	182
2012	30	176
2013	40	176
2014	37	175

Fuente: Transparencia Internacional

No obstante, merece la pena ir más allá del orden que ofrece el ranking, y prestar atención a los elementos cualitativos que muestra. A este respecto llama la atención como los encuestados en 2012 señalaban a España como el país más corrupto, por delante de otros europeos como Italia o Grecia, y de terceros como Marruecos o China, cuando el Informe de Transparencia Internacional en aquel momento situaba a España en el lugar 30 de una lista de 175 países, con una nota de 6.5 puntos sobre 10, muy por encima de los países anteriormente citados. Es decir, la percepción magnificaba la dimensión del problema, aunque la explicación parecía estar en que dicha percepción se concentraba en la valoración de la corrupción política y no de la corrupción administrativa (Laguna, 2013: 82).

De este modo, la percepción se ha convertido en la clave que parece presidir la medición de la vida política, social o cultural, un indicador básico, utilizado en multitud de barómetros, para conocer el grado de valoración de un sistema político. La preocupación por conocer la visión de los ciudadanos sobre el sistema político español condujo a los profesores Gómez, Palacios, Pérez y Vargas-Machuca (2010) a desarrollar una amplia investigación para constatar un hecho: la pérdida de confianza en el sistema se debía precisamente a la percepción del importante grado de corrupción. El estudio se basó en la realización de tres mil encuestas a lo largo del año 2007, cuyos resultados más

destacables, a los efectos de esta investigación, es que el 43% de los encuestados afirmaba que la clase política era más corrupta que el resto de la ciudadanía, entre otras razones, porque siete de cada diez consideraban que los políticos se preocupaban más de sus intereses que de los intereses de los ciudadanos (Laguna, 2013: 82). Desde esa fecha hasta el momento actual, la percepción sobre la corrupción en España no ha hecho sino crecer, provocando unos niveles de desconfianza hasta ahora desconocidos en el país, consecuencia de la manifestación de casos de corrupción que han afectado a los partidos tradicionales con responsabilidades de gobierno desde la entrada de la democracia. Los indicadores y barómetros, al menos, así lo muestran.

En las diferentes series sobre la percepción de la situación política en España, el Centro de Estudios Sociológicos (CIS) comenzó a reflejar un cambio de tendencia en el sentir de la población a partir del año 2011. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2013 cuando se produjo una variación significativa en la valoración de los ciudadanos sobre la situación política en España, en la que un 85,7 % de los ciudadanos consideraban que la situación política era mala o muy mala. Este porcentaje se ha mantenido o descendido ligeramente a lo largo de 2014 y 2015, con un 82,2 % y un 75,9 %, respectivamente<sup>48</sup>. Asimismo, en relación a la percepción de los principales problemas en España, fue también en el año 2013 cuando la corrupción irrumpió como una de las tres principales preocupaciones, pasando de ser un problema con casi apenas repercusión en el barómetro del CIS —desde el año 2005 hasta el 2012 los porcentajes variaron de un 1,4 % a un 8,6 % ocupando posiciones de rango inferior en relación a las preocupaciones de los españoles— a ser el segundo problema, solo por debajo del paro y por encima de los problemas de índole económica, alcanzando un 40 % en el mes de febrero de 2013<sup>49</sup>. Este porcentaje ha ido en progresivo aumento tanto en el año 2014 (con un 44,2 %) como en el año 2015 (con un 48,5 % de los encuestados)<sup>50</sup>. También cabe destacar que los políticos en general, los partidos políticos y la política, a partir de esa misma fecha, pasaron a situarse como el cuarto problema para los españoles.

---

<sup>48</sup> Series del CIS números 2472, 2474, 2476.

<sup>49</sup> Serie del CIS número 2476 correspondiente al mes de febrero 2013.

<sup>50</sup> Series del CIS números 2414 (febrero 2014) y 2462 (febrero 2015).

Otro indicador que resulta de interés es el Barómetro del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales (BRIE) que ha prestado atención a la imagen de España y a la opinión pública internacional sobre el país, convirtiéndolo en una de sus áreas de investigación estratégicas<sup>51</sup>. El OPIEX (Observatorio Permanente sobre la Imagen de España en el Exterior) en la 32ª Oleada del BRIE de febrero de 2013 mostraba como la corrupción era el problema de España que más dañaba su imagen en el exterior, arrojando un resultado contundente: el 51,7 % de los españoles consideraba la corrupción como el problema que más daño provocaba, seguido del paro y la pobreza (19,1%), los problemas del sistema financiero (5,9%) y las huelgas y protestas ciudadanas (4,1%).

Los medios de comunicación también han contribuido a paliar la ausencia de estadísticas oficiales sobre corrupción y para ello han desarrollado bases de datos públicas en las que se incluyen números de imputados y condenados en distintos casos de corrupción judicializados en base a la información de los mismos existente en los medios. La edición digital del diario *El Mundo* ha recopilado información<sup>52</sup> desde el año 2000 hasta el 6 de diciembre de 2014 sobre 83 tramas de corrupción de ámbito nacional, autonómico y local mediante un mapa interactivo que revela la existencia de 483 implicados, 82 condenados y 28 personas en prisión. Asimismo la agencia Europa Press a finales de 2014 ha compilado información<sup>53</sup> sobre 130 causas judiciales de corrupción que implican la existencia de 1.900 imputados y 170 condenados.

La Unión Europea también ha mostrado voluntad política de luchar contra la corrupción, ya que como afirma la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,

---

<sup>51</sup> El Barómetro del Real Instituto Elcano se trata de una encuesta periódica, realizada tres veces al año (noviembre, febrero y junio) a una muestra de 1200 personas, representativa de la población general española. Se diferencia de otros sondeos que ya se vienen realizando en el país con regularidad –por ejemplo, el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas– precisamente por estar centrada única y exclusivamente en las opiniones, valores y actitudes ante las relaciones internacionales y la política exterior española en toda su amplitud (cultura de defensa, imagen de países, actitudes ante la Unión Europea, percepción de amenazas y conflictos, etc.).

<sup>52</sup> Información obtenida en la página web de el diario *El Mundo* <http://www.elmundo.es/grafico/espana/2014/11/03/5453d2e6268e3e8d7f8b456c.html> (último acceso 31 mayo 2015)

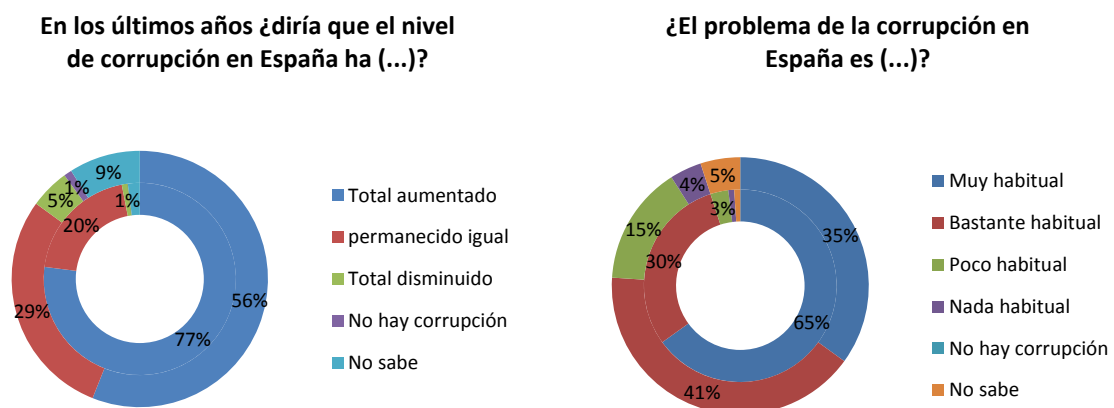
<sup>53</sup> Información obtenida en la página web de la agencia Europa Press <http://www.europapress.es/nacional/noticia-radiografia-corrupcion-espana-mas-1900-imputados-menos-170-condenados-mas-130-causas-20141102111941.html> (último acceso 31 de mayo 2015)

al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo de 6 de junio de 2011:

*La corrupción afecta, con distinto grado de intensidad, a todos los países de la Unión Europea y este fenómeno es nefasto no solo a nivel financiero sino también social, ya que amenaza con socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en sus dirigentes políticos.*

Los diferentes eurobarómetros, que muestran el nivel de percepción de corrupción de cada estado miembro, sitúa a España en comparativa con la media de los países de la Unión Europea.

**Figura 20: Encuesta Eurobarómetro sobre corrupción (octubre 2013)**



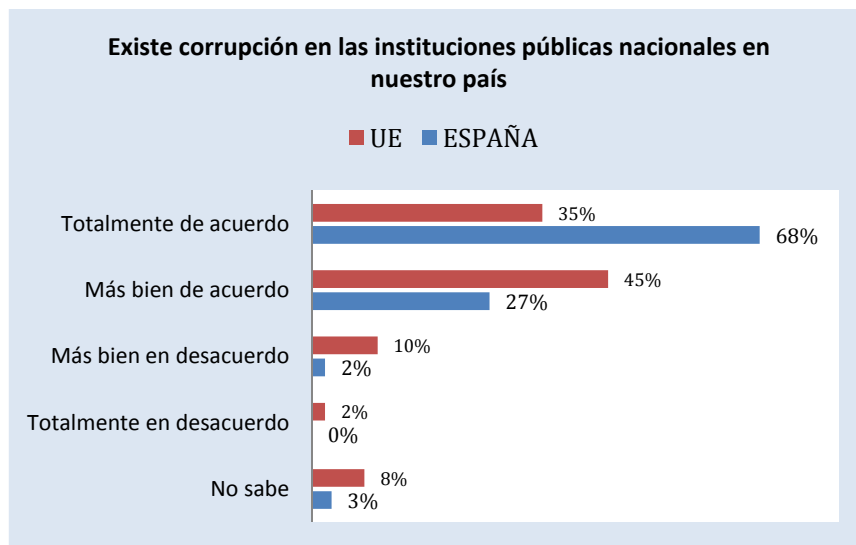
España: gráfico interno/ UE: gráfico externo - Fuente: Eurobarómetro, 2013

Se observa que el 95 % de los encuestados afirmaba que el problema de la corrupción en España era muy habitual o bastante habitual y un 97 % pensaba que en los últimos años la corrupción había permanecido igual o había aumentado. Las cifras que ofrece el gráfico externo de la media de la UE tampoco resultan alentadoras, pero sí permiten comprobar que existe una diferencia porcentual importante entre las respuestas ‘total aumentado’ y ‘muy habitual’ entre España y la media europea.

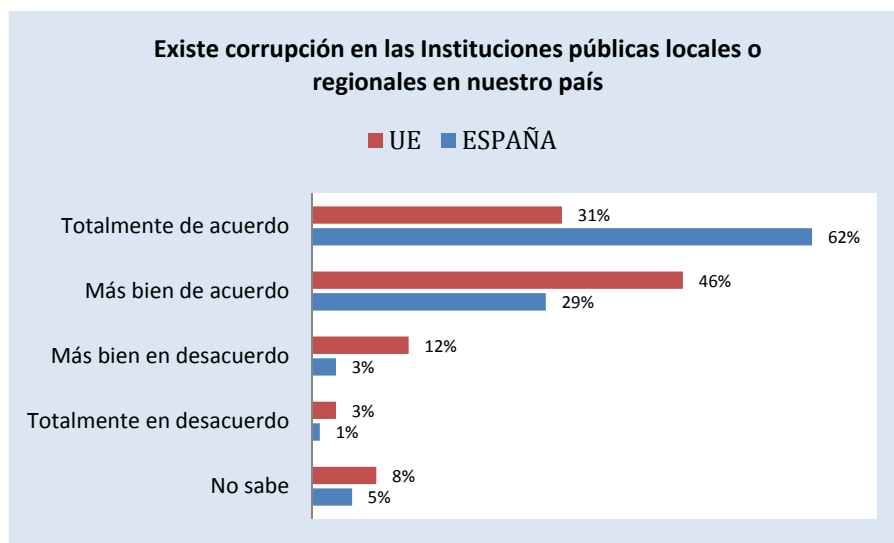


Otros datos del eurobarómetro resultan también ilustrativos, reflejando la percepción de la corrupción en las instituciones del país. Los datos advierten que los porcentajes sobre existencia de corrupción en las instituciones nacionales, regionales y locales son superiores a la media europea. Si se suman los rangos de categoría de aquellos que afirman estar ‘totalmente de acuerdo’ o ‘más bien de acuerdo’ en la respuesta destinada a España en comparación con la media de la UE, podría afirmarse que la percepción que ofrece el eurobarómetro es preocupante tanto para el caso de España como para la media europea. Sin embargo, es importante señalar que en ambas figuras la diferencia porcentual de aquellos que contestan estar ‘totalmente de acuerdo’ es de más treinta puntos entre España y la media de la Unión Europea.

**Figura 21: Datos Eurobarómetro octubre 2013 (I)**



**Figura 22: Datos Eurobarómetro octubre 2013 (II)**



Los datos proporcionados hacen hincapié en la idea de percepción en un momento además en que las mediciones estaban orientadas a constatar el malestar de la ciudadanía en relación a la situación política y económica en el país. Sin embargo, un estudio reciente permite efectuar dos afirmaciones de enorme relevancia: en primer lugar, que la corrupción percibida en España es bastante mayor que aquella que los datos sustentan; y en segundo lugar, que la corrupción que existe en España es, esencialmente, corrupción política y no funcional, aunque se puntualice que esto pueda deberse a la debilidad de la política de represión de los delitos contra la administración (Villoria y Jiménez, 2014: 128-130). Así pues, aunque la corrupción política no sea tan alta como pueda parecer, los autores mantienen que la atención mediática que se otorga a estos sucesos tiene como consecuencia el refuerzo de esa percepción, favoreciendo la desafección institucional. Ello explicaría una visión excesivamente pesimista de la opinión pública sobre la extensión de la corrupción pública (Villoria y Jiménez, 2014: 121).

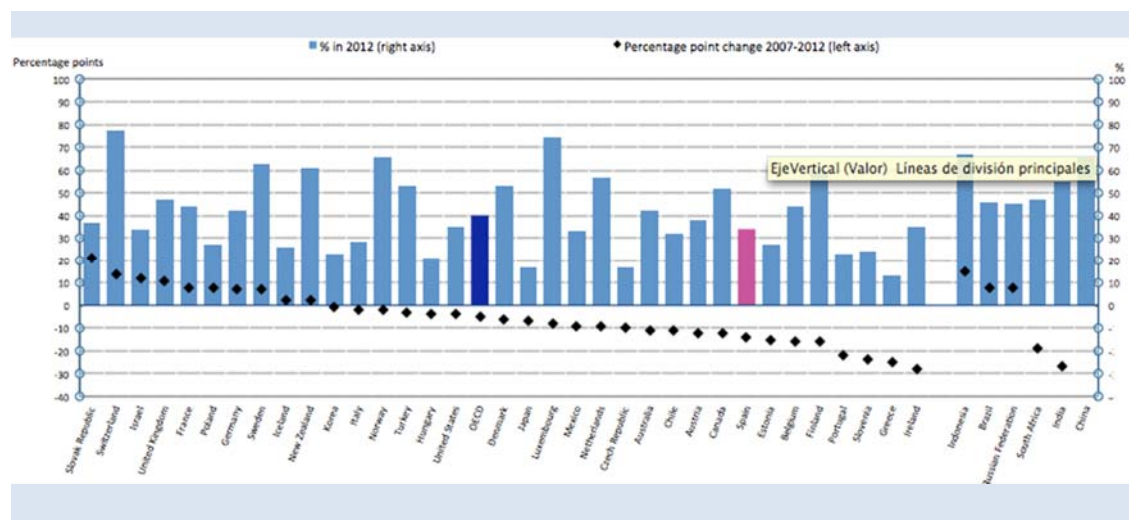
No obstante, se debe tener en cuenta que las mediciones de la percepción se hacen a través de técnicas cuantitativas demoscópicas, que no contemplan en sus resultados los efectos de los medios. Esto implica que se mide la preocupación por cualquier tema de la esfera pública, sin distinguir en el cálculo qué parte es resultado de un debate inducido y qué es resultado de la realidad observada. Esta cuestión nos adentra en un complejo

ámbito que excede de esta investigación, pero que se estima necesario apuntar, puesto que los contenidos informativos de los medios fijan la agenda de la opinión pública, contribuyendo a presentar determinados problemas como más importantes que otros (Laguna 2013: 83), pero también influyen implícitamente al público a pensar de una determinada manera sobre ciertos asuntos (Igartua y Humanes, 2004: 245). Este planteamiento sitúa a los medios como grandes protagonistas, tanto en la denuncia como en la construcción de las opiniones que los ciudadanos pueden tener acerca de comportamientos corruptos. El análisis de la relación entre agenda pública y agenda mediática, por tanto, pone de manifiesto que los medios de comunicación influyen significativamente la percepción que los ciudadanos tienen sobre qué problemas son importantes: cuando aumenta la cobertura mediática de los escándalos de corrupción, aumenta también el número de ciudadanos que consideran que la corrupción se encuentra entre los principales problemas de España (Palau y Ferrán, 2013: 120).

## **B) Desafección institucional y desapego político**

Como se advertía con anterioridad, la preocupación por la crisis de confianza de los ciudadanos en sus gobiernos no ha constituido un problema exclusivamente nacional. Organismos como la OCDE, con más de una década analizando este problema, ha venido planteando soluciones que ya apuntaban a modelos de gobierno abierto, antes incluso, de que la marca adquiriese la notoriedad de la que actualmente goza. Para la OCDE la confianza en el gobierno constituye uno de los cimientos primordiales sobre los que los sistemas políticos deben construirse para gozar de legitimidad y sostenibilidad. La confianza en el gobierno resulta esencial para el funcionamiento correcto y eficaz de las instituciones públicas. Así se desprende de sus informes anuales sobre la calidad de la gobernanza en sus países miembros. En el último *Government at a Glance* (2013) publicado, establece indicadores sobre temas clave de gobierno y gestión pública, tales como la transparencia en la gestión pública, la gobernanza regulatoria y la nuevas formas de prestación de servicios públicos. En este sentido, se estima oportuno mostrar la serie publicada en este último Informe que muestra cómo ha evolucionado la confianza de los ciudadanos en los respectivos gobiernos nacionales entre los años 2007 y 2012.

**Figura 23: Confianza en los gobiernos nacionales en 2012 y evolución desde 2007**



Fuente: OCDE (2013)

En la figura se observa que existe un descenso generalizado de la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos. España, junto con un grupo extenso de países, tales como México, Países Bajos, Australia, Chile, Austria, Canadá o Irlanda, se encuentra en el eje de tendencia negativa; en concreto España pierde 14 puntos de confianza respecto al último quinquenio (2007-2012), donde obtenía un 48 % y nueve puntos más que la media de los países de la OCDE, pasando a estar por debajo de países como Eslovaquia (que en el mismo periodo habían mejorado un 21% y están tres puntos por delante de la confianza que España).

Asimismo, la información que ofrece el *European Social Survey* – Encuesta Social Europea – permite obtener datos sobre los niveles de confianza otorgada a las instituciones de representación (el parlamento), a los actores de la representación (partidos políticos y políticos) y, a las instituciones del Estado (policía y tribunales de justicia).

**Figura 24: Confianza en los Parlamentos Nacionales en Europa 2002-12 (media en una escala de 0 a 10)**

	2002	2004	2006	2008	2010	2012	Media 2002-12
Bulgaria			2,2	1,9	2,4	2,1	2,2
Polonia	3,5	2,4	2,7	3,5	3,4	2,9	3,1
R. Checa	3,6	3,2		3,3	3,3	3,2	3,3
Hungría	2,6	3,6	3,3	2,6	4,2	3,9	3,4
Portugal	4,4	3,7	3,8	3,5	2,9	2,5	3,5
Eslovaquia		3,1	4,2	4,1	3,3	3,1	3,6
Eslovenia	4,0	4,1	4,2	4,1	3,3	3,1	3,6
Grecia	4,8	4,7		3,6	2,0		3,8
Italia	4,8	4,4				3,2	4,1
Estonia		4,2	4,6	3,9	4,2	3,9	4,2
Irlanda	4,4	4,7	4,8	3,8	3,7	3,6	4,2
Francia	4,5	4,3	4,3	4,5	4,2	4,1	4,3
Reino Unido	4,7	4,3	4,2	4,3	4,1	4,3	4,3
Alemania	4,5	4,2	4,2	4,7	4,3	4,9	4,5
España	4,8	5,1	5,0	5,0	4,3	3,4	4,6
Bélgica	5,0	4,7	5,0	4,6	4,5	5,0	4,8
Austria	5,1	4,8	4,9				4,9
Chipre			5,8	5,6	4,6	3,4	4,9
Islandia		5,9				4,2	5,1
Países Bajos	5,2	4,7	5,3	5,6	5,4	5,3	5,2
Luxemburgo	5,7	5,8					5,7
Finlandia	5,8	6,0	6,0	6,0	5,4	5,9	5,8
Noruega	5,7	5,4	5,7	5,8	6,0	6,3	5,8

Suecia	5,9	5,4	5,6	5,7	6,3	5,9	5,8
Suiza	5,8	5,5	5,8	5,8	5,8	6,1	5,8
Dinamarca	6,2	6,3	6,4	6,5	5,8	6,1	6,2

Fuente: Encuesta Social Europea

La figura 24 muestra los niveles comparados de 26 países europeos entre 2002 y 2012.<sup>54</sup> Como puede observarse, España presenta unos niveles de confianza bajos con una media de 4,6 pero los datos son similares a democracias como Francia, Reino Unido, Alemania o Bélgica. Cabe señalar que España pasó de un 5,1 en 2004 a un 3,4 en 2012, nota más baja de todo periodo analizado.

**Figura 25: Confianza en los actores políticos (políticos y partidos políticos) en Europa 2004-10 (media en una escala de 0 a 10)**

	2004	2006	2008	2010	2012	Media 2004-12
Bulgaria		1,7	1,6	2,0	1,8	1,8
Portugal	2,1	2,5	2,3	2,0	1,8	2,1
Polonia	1,9	2,1	2,3	2,6	2,2	2,2
Grecia	3,6		2,5	1,4		2,5
Hungría	2,7	2,6	2,0	3,2	3,2	2,7
R. Checa	2,7		2,8	2,6	2,6	2,7
Italia	3,2				2,0	2,6
Eslovenia	3,2	3,3	3,4	2,2	2,3	2,9
España	3,7	3,5	3,2	2,7	1,9	3,0

<sup>54</sup> Obtener datos comparables y sistemáticos de confianza en las instituciones anteriores es difícil. Existen en el Eurobarómetro, que viene a mostrar lo mismo que se observa aquí, sin embargo los datos se obtienen con una pregunta en la que el entrevistado sólo dice si confía o no confía, restando validez y comparabilidad a esta medida de confianza.

Eslovaquia	2,6	3,6	3,6	2,8	2,8	3,1
Estonia	3,2	3,5	3,3	3,5	3,2	3,3
Francia	3,4	3,3	3,4	3,2	3,2	3,3
Austria	3,3	3,3				3,3
Alemania	3,2	3,3	3,5	3,4	3,8	3,4
Irlanda	4,0	3,8	3,2	3,1	3,0	3,4
Reino Unido	3,6	3,5	3,6	3,5	3,7	3,6
Chipre		4,3	4,4	3,5	2,5	3,7
Bélgica	4,3	4,4	4,0	3,9	4,3	4,1
Islandia	4,9				3,7	4,3
Noruega	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	4,7
Suecia	4,3	4,5	4,7	5,1	4,8	4,7
Finlandia	4,9	5,0	4,9	4,5	4,9	4,8
Suiza	4,7	4,9	4,8	4,9	5,1	4,9
Luxemburgo	5,1					5,1
Países Bajos	4,7	5,1	5,2	5,2	5,1	5,1
Dinamarca	5,6	5,6	5,6	5,1	5,3	5,4

Fuente: Encuesta Social Europea

En la figura 25 se puede percibir como la confianza en los partidos políticos era ya baja en 2008 con un 3,2, pero aún muy próxima a la media europea (3,3). Dicha confianza se ha visto afectada con la crisis reciente llegando a un 1,9 en 2012 y quedando lejos de la media europea con un 3,4. Igualmente afecta a la confianza en los políticos, que en España era baja en 2008 con un 3,3 pero también en línea con la media europea (3,3). El deterioro de la confianza de los políticos en 2012 llega también a un escaso 1,9, alejándose todavía más de la media en Europa (3,4).

**Figura 26: Confianza en las instituciones del Estado (tribunales de justicia y policía) en Europa 2002-12 (media en una escala de 0 a 10)**

	2002	2004	2006	2008	2010	2012	Media 2002-12
Bulgaria			3,1	2,7	3,2	2,9	3,0
Eslovaquia		3,9	4,5	4,6	4,1	3,7	4,2
Polonia	4,3	3,4	4,4	4,5	4,8	4,5	4,3
Eslovenia	4,6	4,3	4,6	4,7	4,0	4,3	4,4
R. Checa	4,4	4,0		4,5	4,5	4,6	4,4
Portugal	4,7	4,5	4,6	4,6	4,3	4,4	4,5
Hungría	5,0	4,8	4,7	4,0	4,8	5,0	4,7
España	4,9	5,3	5,5	5,2	5,3	4,8	5,2
Francia	5,4	5,2	5,3	5,4	5,3	5,5	5,3
Grecia	6,3	5,7		4,8	4,2		5,3
Bélgica	5,0	5,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,4
Estonia		5,3	5,3	5,4	5,7	5,4	5,4
Chipre			5,8	6,1	5,5	4,8	5,6
Italia	6,1	5,6				5,3	5,7
Reino Unido	5,5	5,6	5,5	5,7	5,7	6,1	5,7
Irlanda	5,8	5,9	5,6	5,8	5,8	5,9	5,8
Países Bajos	5,6	5,7	6,0	6,1	6,1	6,2	6,0
Austria	6,3	6,0	6,1				6,1
Alemania	6,2	6,0	6,1	6,3	6,3	6,4	6,2
Luxemburgo	6,3	6,3					6,3
Suecia	6,4	6,1	6,3	6,3	6,8	6,5	6,4
Suiza	6,5	6,5	6,6	6,6	6,7	6,8	6,6
Islandia		6,6				6,8	6,7



Noruega	6,7	6,7	6,9	6,9	7,0	7,2	6,9
Finlandia	7,4	7,4	7,5	7,5	7,5	7,6	7,5
Dinamarca	7,5	7,6	7,6	7,4	7,5	7,8	7,6

Fuente: Encuesta Social Europea

En la figura 26 puede constatarse que ese deterioro es muchísimo menor en el grado de confianza en los Tribunales de Justicia o en la Policía, mostrando una vez más, que la crisis se está dando principalmente con las instituciones y los actores de representación, no en las instituciones del Estado de Derecho. España con un 5,2 alcanza una posición intermedia.

**Figura 27: Interés por la política en Europa 2002-12 (porcentaje de los bastante o muy interesados)**

	2002	2004	2006	2008	2010	2012	Media 2002-2012
R. Checa	31,2	19,8		17,7	19,5	22,1	22,1
España	22,0	28,7	26,1	26,3	28,8	34,8	27,8
Grecia	31,4	32,8		30,4	29,6		31,1
Portugal	38,1	30,2	28,7	30,4	29,5	29,5	31,1
Eslovaquia		36,0	37,6	37,4	38,3	31,4	36,1
Chipre			38,7	45	30	34,6	37,1
Hungría	45,9	37,4	41,4	37	38,5	26,4	37,8
Italia	34,4	35,9				48,7	39,7
Polonia	41,1	38,6	39,4	42,3	39,5	39,7	40,1
Estonia		36,6	41,3	45,1	38,6	39,5	40,2
Eslovenia	41,8	41,6	43,3	49	43,3	41,3	43,4
Luxemburgo	43,5	45,4					44,5

Bélgica	44,8	43,3	44,8	48,4	46,1	45,1	45,4
France	39,8	37,6	52,6	51,7	44,0	47,7	45,6
Irlanda	46,8	45,3	46,1	57,2	41,1	43,4	46,7
Bulgaria			47,1	47	47,9	51,1	48,3
Finlandia	46,5	46,0	47,6	48,4	47,5	54,5	48,4
Noruega	49,7	49,2	48,0	47,1	47,4	50,7	48,7
Reino Unido	52,7	47,5	52,6	56,5	53,5	49,6	52,1
Austria	58,3	52,5	50,3				53,7
Suecia	57,7	57,4	61,8	58,7	61,5	58,0	59,2
Alemania	63,2	55,7	53,7	61,5	57,5	64,3	59,3
Suiza	61,9	59,6	57,8	58,2	58,9	62,0	59,7
Islandia		63,1				58,6	60,9
Países Bajos	66,9	60,9	63,6	66,3	66,4	64,7	64,8
Dinamarca	63,2	64,8	67,8	71,8	69,8	69,9	67,9

Fuente: Encuesta Social Europea, ESS.

Finalmente en relación al interés en la política la figura 27 muestra como España (27,8%), Grecia (31,1%) y Portugal (31,1%) son los países que obtienen los porcentajes más bajos de la encuesta. Los tres países se encuentran a una gran distancia de los países del norte y del centro de Europa occidental que presentan porcentajes de interés por la política muy superiores. Lo que resulta sugerente con respecto al desapego, es que en los últimos años y a partir de la crisis iniciada en 2008, el interés por la política ha empezado a crecer en muchos de estos mismos países donde a la par la desafección institucional ha aumentado. Esto es especialmente significativo en España donde el porcentaje de interesados ha pasado de un 26% en 2008 a un 34% por ciento en 2012. Este cambio, no sólo es cuantitativo, sino cualitativo, ya que la relación entre confianza institucional e interés, que solía ser positiva, es decir mayor interés propiciaba una confianza mayor, se ha mitigado e incluso desaparecido (Torcal, 2015).

Los datos comparados muestran una sociedad española históricamente desafecta, que en estos últimos años ha sufrido un creciente desapego pero que ha sido protagonista de un despertar político expresado en un aumento del interés en la política junto con episodios puntuales de actividades de protesta activa. Este marco no es exclusivo del país, sino que más bien parece ser un fenómeno generalizado que se está produciendo en aquellos países que se han visto más expuestos a la actual crisis económica y a las políticas de austeridad que se han implantado con independencia de los niveles de desafección de los que se partían. Este podría representar el caldo de cultivo en donde se ubican los acontecimientos políticos recientes y la reacción ciudadana que reclama más transparencia y control de la actividad política.

### 3. ACONTECIMIENTOS RELEVANTES: MANIFESTACIÓN DE LA CRISIS DE CONFIANZA

Los indicadores presentados responden fundamentalmente a la percepción de los ciudadanos producto de la profunda crisis económica que comenzó a afectar a millones de personas en el país, del aumento progresivo del desempleo, de la aparente falta de soluciones por parte de las administraciones públicas, de la emergencia de casos de corrupción, y de la ausencia de transparencia y espacios de diálogo con la ciudadanía. Esa circunstancia de descontento generalizado se convirtió en la atmósfera idónea para que la ciudadanía se manifestase y ocupase el espacio público en mayo de 2011 y para que, solo dos años después, debido al surgimiento de importantes casos de corrupción, los ciudadanos volvieran a expresar un sentimiento de emergencia social reflejado en los diferentes indicadores que se han mostrado.

Aunque durante estos últimos años se desencadenaron diferentes eventos que pusieron de relieve el enorme descontento de la ciudadanía con gobiernos, instituciones y partidos políticos, dos acontecimientos relevantes pueden ser considerados como las manifestaciones más destacadas. Éstos ubicaron la crisis de confianza en el país como grave problema y lograron situarlo en una posición relevante de la agenda política.

## **A) 15M y el surgimiento de nuevos movimientos ciudadanos**

La sociedad española, con independencia de su desafección política cultural, comenzó a cuestionar gravemente el sistema democrático. La grave crisis económica, política y social, los altos niveles de desempleo, el grado de desigualdad, y la ausencia por parte de los poderes tradicionales de recetas adecuadas para solucionar los problemas de la ciudadanía a corto, medio y largo plazo derivó en el surgimiento de nuevos movimientos ciudadanos, partidos y liderazgos, que constituyeron una prueba fehaciente del tiempo que estaba viviendo el país.

España ya en 2008 se situaba por encima de la media europea en relación a la participación de protesta (17 %) – a través de manifestaciones y recogidas de firmas para peticiones – y en el año 2012 este porcentaje había aumentado casi el doble (33,2%) situando a los ciudadanos españoles a la cabeza de Europa donde la media actualmente se encuentra en el 20,4% (*ESS*, 2008; 2012). Sin embargo, la manifestación más relevante de ese sentir en España la ejemplifica el ‘Movimiento del 15M’, también llamado ‘Movimiento de los Indignados’. Este movimiento ciudadano apartidista y asindicalista, se conformó a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, a menos de diez días de las elecciones locales y autonómicas. Convocado por diversos colectivos, alrededor de cuarenta personas decidieron acampar en la puerta del Sol esa noche de forma espontánea. Desde ese momento se produjeron una serie de protestas pacíficas con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PP-PSOE, binomio denominado "PPSOE", del dominio de bancos y corporaciones, así como, la reclamación de una auténtica división de poderes y otras medidas tendentes a mejorar el sistema democrático.

El 15M, que actualmente se organiza en torno a asambleas descentralizadas por los barrios de las ciudades de toda España, pone en evidencia la exigencia de la necesidad de una mayor participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto, no conformándose con participar para elegir a sus representantes una vez cada cuatro años. Sin embargo, el efecto del movimiento que surgió en plena campaña de las elecciones locales, no supuso un aumento en la

participación de la ciudadanía en dicho proceso electoral (sólo un 66% de los ciudadanos con derecho a voto lo ejercieron efectivamente, con más de 11 millones de abstenciones y casi 600.000 votos en blanco<sup>55</sup>.

Los indignados recurrieron a frases y lemas simbólicos que intentaban expresar en muy pocas palabras, los sentimientos más íntimos y las conclusiones sobre la situación del país en aquel momento. El movimiento se convertía en la sintomatología y en el diagnóstico de la desesperación y descontento con los poderes públicos. Uno de los lemas paradigmáticos fue “nuestros sueños no caben en vuestras urnas” y, aunque no sea objeto de esta investigación deslindar las causas de la abstención electoral, a mayor abundamiento en un contexto social como el que se vivió en 2011, lo que sí puede sugerirse es que el movimiento mostró como la participación había cambiado radicalmente en la actualidad y que lo seguiría haciendo en los próximos años, a un ritmo y con unas formas por descubrir, pero enmarcadas en una era de la información y la comunicación sin precedentes<sup>56</sup> (Calderón, 2012: 34).

El 15M fue la expresión de un enorme malestar por parte de muchos ciudadanos, que con frases y gestos simbólicos supo expresar lo que de una u otra forma un amplio sector de la población sentía, derivando en la creación y despegue de nuevos partidos políticos a nivel nacional. Así, para Vicenç Navarro (2014) la madurez de dicho movimiento fue la causa de que apareciera ‘Podemos’, cuyo eslogan es una llamada a la acción, con plena conciencia del poder de la población. Una movilización que reclama una segunda transición que consista en la plena realización de la democracia en España mediante reformas que favorezcan la democracia directa y que luchen contra el *establishment* político y mediático que, según sus miembros, dominan el país.

---

<sup>55</sup> Información publicada por el Ministerio del Interior a través de su página web en el siguiente enlace: [http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU99999TO\\_L1.htm](http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU99999TO_L1.htm)

<sup>56</sup> De ello fueron, y son, conscientes el equipo de redes sociales de Podemos, que desde su conformación se dieron cuenta que tanto Twitter como Facebook eran la clave pues tomaron y entendieron la red como un elemento de interacción, no de lanzamiento de mensajes políticos sólo y exclusivamente sino de una manera de interaccionar y contestar a comentarios de las personas, en suma a dialogar con la gente.

## B) La emergencia de la corrupción como segundo problema del país

A la multitud de escándalos de corrupción y la correspondiente preocupación por este fenómeno, medida esencialmente a través de encuestas de percepción, se sumó una sensación de desconfianza enraizada en la crisis económica, que ha afectado a las instituciones representativas, propias del Estado de derecho, con el correspondiente deterioro de la cultura de la legalidad y el refuerzo de los problemas de acción colectiva (Villoria y Jiménez, 2014).

Retomando los datos publicados por el CIS, puede comprobarse como los ciudadanos que consideraban la corrupción el principal problema del país pasaron del 9.5% en noviembre de 2012 al 17.7% en enero de 2013, la cifra más alta alcanzada por este tema en la historia de la democracia. Ese aumento de la preocupación coincidía con la aparición de importantes y mediáticos casos de corrupción: el caso Nóos, también conocido como caso Urdangarín, un asunto de presunta corrupción política que comenzó en el año 2010 como un asunto derivado del caso Palma Arena<sup>57</sup> y que afectaba al Duque de Palma y a una de las Infanta de España; el caso de los ERE<sup>58</sup> en Andalucía, una

---

<sup>57</sup> El "caso Palma Arena" es un proceso judicial por corrupción, con más de 25 piezas separadas, que se inició en octubre de 2007 a raíz de la denuncia del conseller de Deportes del Gobierno Autonómico de las Islas Baleares, el socialista Mateu Cañellas, quien aseguró que el anterior gobierno autonómico del Partido Popular presidido por Jaume Matas había autorizado un gasto total de 90,6 millones de euros para el velódromo, casi el doble de los 48 millones presupuestados. Intervino la Fiscalía Anticorrupción y en agosto de 2008 el Juzgado número 3 de Palma de Mallorca inició la instrucción judicial por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho en relación a la construcción del pabellón. Poco a poco fueron imputadas hasta 30 personas, entre ellas el yerno del Rey Juan Carlos I, Iñaki Urdangarín, encausado el 29 de diciembre de 2011 por la presunta ilegalidad de los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido por él, y el expresidente balear y exministro del PP Jaume Matas.

<sup>58</sup> El caso de los ERE tuvo su origen en la investigación de un caso de cohecho en torno a la empresa municipal Mercasevilla. La empresa Grupo La Raza, que iba a abrir una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla, recibió una subvención de 900.000 euros de la Junta de Andalucía para este propósito. Fue en la investigación del caso del ERE de Mercasevilla llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya, donde se detectó que un militante del PSOE de Andalucía que había sido incluido en un ERE de Mercasevilla sin haber trabajado nunca para esta empresa. El posterior descubrimiento de más falsos prejubilados en otros ERE hizo que se derivara el *caso de los ERE*. El fraude se produce por la inclusión como prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo a personas que no habían tenido relación laboral con esas empresas o indicando que lo habían hecho por unos periodos de tiempo mayores a los reales. La investigación interna detectó 267 prejubilaciones irregulares en un total de 5982 casos analizados. De las 183 irregularidades, 141 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 126 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas.

presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía que se venía investigando desde el año 2011; y el caso Gürtel, una investigación sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular que operaba principalmente en las Comunidades de Madrid y Valencia iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional. Estos presuntos casos de corrupción comenzaron a consolidar la percepción en la ciudadanía de que España tenía un problema grave de corrupción política.

Además, a principios de 2013 el estallido del caso Bárcenas<sup>59</sup> —una nueva dimensión del anterior caso Gürtel— tuvo como efecto que sólo un mes después, en febrero de 2013, la nueva medición del CIS confirmase que para los españoles la corrupción había pasado a ser el segundo problema del país tras el paro (Laguna, 2013: 82). La noticia publicada por ‘El País’ el 31 de enero de 2013 sobre los papeles secretos de Bárcenas se difundió a una enorme velocidad en la sociedad española y esa misma tarde, según datos de Metroscopia, ya estaban al corriente de la noticia siete de cada diez españoles, es decir, prácticamente tantos como votaron en las elecciones generales de 2011. La rápida y masiva atención de esta información provocó una profunda y amplia irritación entre la ciudadanía, cuya primera reacción fue la petición de dimisión inmediata de los dirigentes que aparecían como posibles beneficiarios de pagos irregulares por parte del 80 % de los españoles (y lo que es más significativo, del 59% de los votantes del PP). Aunque se trataba de una respuesta precipitada, más emocional que racional, expresaba claramente el agotamiento de la paciencia y tolerancia ciudadana ante la cascada de noticias referidas a conductas improcedentes en la vida pública, llegando al punto de que un 54 % de los encuestados expresaron la petición de elecciones generales anticipadas, como posible salida a la situación creada (Metroscopia, 2013: 2). En palabras de Ernesto

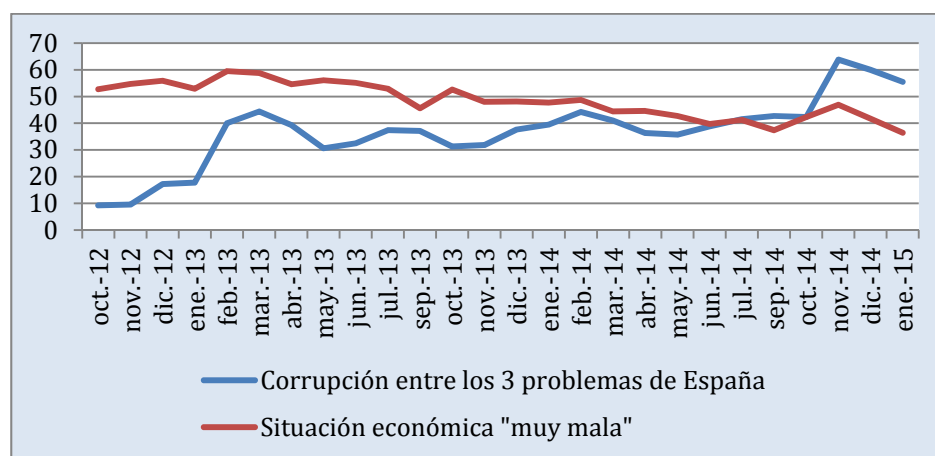
---

<sup>59</sup> El caso Bárcenas hace referencia al caso judicial donde se investiga a Luis Bárcenas y su papel en la financiación del Partido Popular, uno de los principales partidos políticos de España en el periodo posterior a la transición española. El 18 de enero de 2013, el periódico El Mundo publicó que Luis Bárcenas, el entonces tesorero del Partido Popular, supuestamente había pagado sobresueldos en dinero negro por importes que irían de los 5000 a los 15 000 euros mensuales a altos cargos de su partido. El 31 de enero de 2013, el periódico El País publicó una supuesta contabilidad en B del Partido Popular (conocidos como los papeles de Bárcenas) que el ex tesorero habría estado llevando desde 1990 hasta 2009, en los cuales se implicaba a numerosos políticos y empresarios, incluyendo al actual Presidente y presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aunque el PP niega la veracidad de dicha contabilidad.

Ekaizer (2013) ‘con el caso Bárcenas se produjo un antes y un después en la vida política y social de país’.

El clima de desconfianza permaneció hasta que en el otoño de 2014, se volvió a observar un nuevo repunte en la preocupación de los españoles por la corrupción (60%) como muestran los barómetros mensuales del CIS. Esta nueva escalada coincidió con toda una semana de sucesión de noticias en relación a las tarjetas *black* de Cajamadrid; la operación Púnica que llevó a la detención de un gran número responsables políticos del PP o la imputación definitiva de la Infanta Cristina en el caso Noós (Jiménez, 2015).

**Figura 28: La corrupción como problema público en España entre octubre de 2012 y enero de 2015**



Fuente: Barómetro mensual del CIS

La evolución de la preocupación de la corrupción no se sitúa paralelamente a la evolución de la situación económica. Sin embargo el importante aumento de la preocupación por la corrupción puede ofrecer una lectura positiva que consiste en que si la alta preocupación se mantiene durante un cierto tiempo, los líderes políticos tendrán la presión suficiente como para verse obligados-incentivados a introducir políticas anticorrupción eficaces (Jiménez, 2015).



#### 4. ESTUDIOS ESPECÍFICOS SOBRE GOBIERNO ABIERTO

A través de los indicadores y *focusing event* se han destacado aquellas variables que relacionan la crisis de confianza con la crisis económica, la corrupción, la falta de transparencia, la política, los políticos y el defectuoso funcionamiento de la democracia. Pero casi de manera simultánea, comenzaron a proliferar numerosos estudios, artículos e informes que realizaban el diagnóstico del grave problema de crisis de confianza de los ciudadanos y también ofrecían un elenco de ideas, alternativas o soluciones para luchar contra ese enorme desafecto. De entre todos ellos, merecen especial atención, dos estudios del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)<sup>60</sup> por cuanto abordan de forma integral y específica la cuestión del gobierno abierto en España como una de las soluciones a la desafección ciudadana. Los estudios se publicaron en el año 2013, por lo que el contexto de elaboración y análisis se corresponde a uno de los momentos álgidos de la crisis y a una etapa incipiente del gobierno abierto en España. Sin embargo, ambos ofrecen información y reflexiones que deben ser tenidas en en consideración.

El primero de ellos, sobre los *Objetivos, estrategias y actuaciones en materia de gobierno abierto*, refleja el estado de situación de España en la materia desde una perspectiva gubernamental, mientras que el segundo, el estudio de la *Demanda y uso del gobierno abierto en España* analiza desde la óptica de la ciudadanía el nivel de inquietud en torno a la necesidad de políticas de gobierno abierto.

##### **A) Objetivos, estrategias y actuaciones en materia de gobierno abierto**

El estudio sobre *Objetivos, Estrategias y Actuaciones en materia de gobierno abierto* del ONTSI (2013b) aborda los elementos fundamentales que definen y conforman

---

<sup>60</sup> La ONTSI es un órgano adscrito a la entidad pública empresarial Red.es del Ministerio de Industria Energía y Turismo del Gobierno de España, cuyo principal objetivo es el seguimiento y el análisis del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información. Elabora, recoge, sintetiza y sistematiza indicadores, elabora estudios, y ofrece servicios informativos y de actualidad sobre Sociedad de la Información, siendo actualmente el Observatorio público sobre la Sociedad de la Información líder en España.

el concepto y la práctica de gobierno abierto como un modelo de gobierno que incorpora como pilares fundamentales de su funcionamiento los principios de transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía, aprovechando las oportunidades que ofrecen las TIC, con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia y el funcionamiento de los gobiernos y las administraciones públicas (ONTSI, 2013b: 20). A partir de múltiples fuentes de información y de casi un centenar de actuaciones concretas de diferentes gobiernos y organismos internacionales, el estudio analiza las siguientes cuestiones: i) los objetivos que persiguen los gobiernos con las políticas de gobierno abierto; ii) las estrategias que han definido para conseguir los objetivos; y iii) las actuaciones concretas que han desarrollado en este ámbito. A partir de estas cuestiones el estudio propone una definición, un modelo general de gobierno abierto y una aproximación de los retos futuros del gobierno abierto en España.

La información que se desprende del estudio sigue siendo notable pues, aunque la evolución de estos últimos años permita matizar algunas de sus afirmaciones, continúa siendo el primer y único estudio elaborado sobre esta materia por la Administración General del Estado hasta la fecha. Las conclusiones que apunta el Informe sobre el futuro a corto y medio plazo del gobierno abierto en España conservan en gran parte su vigencia puesto que determinan que (ONTSI, 2013b: 73):

- En España continuarán surgiendo iniciativas encaminadas a una mayor apertura de datos públicos y proliferarán portales de *open data* con el objetivo de fomentar la reutilización, aunque la cuestión clave será la naturaleza de los datos publicados y el grado de transparencia que se consiga.
- Las administraciones seguirán apostando por su presencia en las redes sociales más utilizadas por los internautas como medio de canalización de las demandas de participación de los ciudadanos, y practicarán la ‘escucha activa’, que consiste en seguir y conocer lo que preocupa a los ciudadanos en cualquier espacio, principalmente los basados en las TIC.
- El principio menos desarrollado será el de la colaboración con la sociedad (a excepción de la reutilización de datos públicos), ya que aunque se han dado

pasos en la co-prestación de servicios aún es difícil saber si este modelo podrá consolidarse y ser una referencia.

- Finalmente, la delicada situación económico-financiera de las administraciones podría jugar en contra de la incorporación del gobierno abierto como modo de gobierno, al menos hasta que exista mayor conciencia de los potenciales beneficios.

Dos años después de la publicación del estudio, se han producido ciertos cambios y avances en la materia que permiten visibilizar el recorrido de este nuevo paradigma en este lapso de tiempo: i) aprobación y entrada en vigor de la LTAIBG; ii) presentación de un Segundo Plan de Acción al OGP; iii) publicación del Portal de Transparencia del Gobierno de España; iv) puesta en marcha de diversas estrategias descentralizadas de gobierno abierto; y v) presentación de una Propuesta No de Ley (PNL, 2015) por parte del PSOE sobre una estrategia de gobierno abierto en el país.

## **B) Estudio de la demanda y uso del gobierno abierto en España**

El estudio sobre la *Demanda y uso del gobierno abierto en España* partía de la afirmación de que la crisis económica e institucional y la crisis de confianza que vivía el país requerían de un esfuerzo redoblado por parte de gobiernos y administraciones públicas. Los estudios realizados hasta el momento a nivel nacional e internacional sobre el concepto y la oferta de servicios asociados al gobierno abierto señalaban que estas iniciativas podían mejorar la eficacia de las políticas públicas y la confianza de los ciudadanos en los gestores públicos, aprovechando las ventajas que ofrecía internet y las TIC para fortalecer el sistema democrático del país, teniendo en cuenta el importante desarrollo de la sociedad de la información en España como contexto tecnológico en los últimos años. Los objetivos del estudio se centraron en conocer la valoración que los ciudadanos hacían de los servicios y de las políticas relacionadas con el concepto de gobierno abierto, partiendo de los servicios relacionados con la administración electrónica puesto que son aquellos con los que podrían sentirse más familiarizados y, a partir de este punto, centrarse en los aspectos específicos del gobierno abierto para estudiar las posibles barreras de uso, conocer el perfil de los ciudadanos como potenciales

usuarios del mismo, analizar el impacto que la utilización de estos servicios tendrían sobre la percepción, la valoración y la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en los servicios públicos, obtener información relevante sobre las inquietudes de la población respecto a la transparencia y la posibilidad de participación, y por último, examinar las posibilidades que las redes sociales ofrecen a la participación política y la reutilización de información del sector público (ONTSI, 2013a: 8).

Cabe destacar algunos de los principales datos y conclusiones del Informe que confirman como las alternativas que favorecen el gobierno abierto son valoradas como solución a la crisis de confianza de los ciudadanos. Así, los datos revelaron que el 65,2% de los encuestados consultaban las webs públicas para informarse de actividades o actuaciones administrativas, que el 75% de los encuestados creían que la transparencia mejoraría la confianza en el Gobierno, que el 81,4% de la ciudadanía reclamaba nuevos canales para incrementar la participación y apostaba por la convivencia entre canales digitales y canales tradicionales, y que el 53,6% de los usuarios de Internet manifestaban interés en los asuntos políticos frente al 34,8% que no lo hacía. Ello conduce a tres conclusiones significativas (ONTSI, 2013a: 23-26):

- En cuanto a la relación entre el uso de internet y las redes sociales, la actividad política, la demanda y valoración de actuaciones del gobierno abierto, la hipótesis de partida establecía que los internautas son más activos social y políticamente y, en particular los usuarios de redes sociales, son más proclives a utilizar los servicios de gobierno abierto y son más exigentes a la hora de demandar más servicios y de mayor calidad. Según el perfil socio-demográfico realizado, los más interesados en participar son aquellos ciudadanos a quienes la política interesa mucho (el 89,4%). Sin embargo, los resultados ofrecieron una corrección para el caso español, puesto que los internautas y los usuarios de redes sociales votan menos que el resto de los ciudadanos españoles, aunque en general se muestran más interesados en la política. Este resultado, se entiende vinculado a la crisis, a la capacidad de mayor información y a la existencia de movimientos sociales relacionados con las redes sociales que niegan la representatividad a los

partidos políticos o a la clase política, defendiendo formas de participación alternativas.

- Sobre la relación entre el uso de la e-administración y la satisfacción con los servicios públicos, las tres hipótesis de partida eran que el nivel de satisfacción con los servicios públicos digitales es mayor que el de los servicios tradicionales, que los usuarios de servicios públicos digitales tienen una mejor percepción de los servicios públicos en general, y que Internet es una de las formas preferidas por los ciudadanos para interactuar con las administraciones públicas. El estudio confirmó las tres, dada la actual existencia de numerosos servicios de administración electrónica que ya son utilizados por los ciudadanos. Asimismo, se obtuvo una conclusión que no aparecía en las hipótesis de partida, puesto que mostraba que los ciudadanos distinguen entre las administraciones públicas como prestadoras de servicios públicos (bien sean digitales o tradicionales) o como brazo instrumental de los gobiernos. De ahí que la percepción positiva y confianza que genera el uso de servicios de e-administración no pueda ser directamente extrapolable a los servicios asociados al gobierno abierto.
- En relación a la confianza que genera el gobierno abierto, las hipótesis de partida incluían que los ciudadanos que más confían en las administraciones utilizan más los servicios de e-administración, que los ciudadanos más satisfechos con los servicios de e-administración confían más en las administraciones, y que los ciudadanos que conocen y usan las herramientas de participación y consultan datos públicos confían más en las instituciones y en los políticos. De forma general, el estudio valida las hipótesis de que la confianza en las administraciones y el gobierno mejora con las políticas y los servicios de gobierno abierto. Sin embargo, no puede realizarse una traslación automática de la confianza en las administraciones públicas como prestadoras de servicios de e-administración y la confianza en las administraciones públicas como prestadoras de servicios de gobierno abierto. Asimismo, el estudio detecta una brecha cualitativa entre los servicios de e-administración, que son mayoritariamente considerados, y los servicios de gobierno abierto, que todavía no han sido puestos en marcha con carácter general. Ello responde al hecho de

que los ciudadanos los vinculan mucho más a la política en general, introduciéndose un elemento de desconfianza muy relevante que puede proceder de situaciones previas ya existente en un determinado contexto. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos manifestaron que participarían más en los asuntos públicos si existiesen las herramientas adecuadas para hacerlo.

El estudio mostró que en España comenzaba a surgir una demanda importante en relación a la necesidad de políticas de transparencia y participación en los asuntos públicos. A su vez, también detectaba las debilidades del sistema para lograr que el diseño de políticas de gobierno abierto se adecuasen a las necesidades de los ciudadanos que — con carácter general— desconocían de su existencia, circunscribiendo fundamentalmente su relación de mayor confianza en los gobiernos cuando éstos les identificaban con su vertiente administrativa y de prestación de servicios, vía administración o gobierno electrónico.

## 5. RETROALIMENTACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO

En el momento en que un gobierno concibe un plan y lo ejecuta a través de una serie de acciones, periódicamente debe someterse a una evaluación que permita verificar el grado de cumplimiento de sus actuaciones. Ello genera una retroalimentación que puede originar nuevas ideas que favorezcan un perfeccionamiento o ajuste de las políticas emprendidas. Así, entre la propuesta política de origen y la gestión de gobierno existe un circuito que no se cierra, sino que se encuentra en un proceso constante en el que los problemas y las soluciones pueden ser redefinidos.

En materia de evaluación y seguimiento, el gobierno abierto en España parte de ciertas singularidades. En primer lugar, se trata de una política pública que se está desarrollando en los tres niveles de gobierno del país y, por tanto, puede estar dotado de diferentes mecanismos de evaluación y seguimiento. En segundo lugar, su condición de iniciativa de ámbito internacional implica que los procesos de evaluación y retroalimentación también son impulsados por la propia red internacional. Por ello, se considera que actualmente los dos principales instrumentos de evaluación de las políticas

de gobierno abierto en España corresponden a los derivados de las obligaciones y compromisos del país por ser miembro del OGP, esto es, el Informe de Autoevaluación del país y el Informe del Mecanismo Independiente de Revisión de la Alianza.

#### **A) Informe de Autoevaluación del Primer Plan Nacional de Gobierno Abierto**

Todos los Estados miembros del OGP deben elaborar un Informe de Autoevaluación de sus Planes de Acción en el que incorporen tanto los avances y resultados obtenidos, así como las deficiencias, mejoras y retos pendientes que ayudarán a corregir y diseñar acciones que deben ser insertadas en los sucesivos planes de actuación. El Gobierno de España publicó su Informe de Autoevaluación en diciembre de 2013, tras ser sometido a consulta pública en la página web del Ministerio de Presidencia durante tres semanas. Este informe reconoció que aún quedaba mucho camino por recorrer y que, aunque algunos de los compromisos sólo habían adquirido un cumplimiento parcial, se estaba en la senda correcta de desarrollo de una estrategia de gobierno abierto en España. A través del mismo, se propuso un análisis del grado de cumplimiento de los compromisos, se expusieron las circunstancias que impidieron su consecución y se incorporó la valoración realizada por la sociedad civil y grupos de expertos en la materia. En relación a este último punto, se produjo una clara discrepancia entre la valoración que realizó el Gobierno de España y la sociedad civil especializada en la materia a través de organizaciones de reconocido prestigio como Novagob, Acces Info, Civio y Gigapp, que realizaron las siguientes observaciones:

- La necesidad de profundizar en el debate relativo al derecho a la información como derecho fundamental y no como derecho derivado del artículo 105.b de la Constitución Española sobre el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros públicos.
- La importancia de que los compromisos respondiesen a la filosofía y objetivos del gobierno abierto. De los trece compromisos del Primer Plan de Acción seis de ellos no tenían relación o carecían de relevancia para el gobierno abierto,

- La ausencia de una consulta a la sociedad civil previa a la elaboración del Plan no permitió identificar la posición de los ciudadanos con respecto a las medidas planteadas,
- El hecho de que no se tuvieran en cuenta iniciativas que se están desarrollando fuera de la Administración General del Estado.
- Las medidas se encontraban excesivamente orientadas a la apertura de datos (transparencia), pero no a la apertura del gobierno.
- La relevancia de contar con un órgano coordinador que adoptase medidas de formación, avanzase sobre los criterios de actuación, evitase la dispersión de información y generase las sinergias adecuadas.

Finalmente, las conclusiones y retos de futuro del Informe de Autoevaluación se centraron en: i) dar mayor visibilidad a la iniciativa internacional para superar el gran desconocimiento sobre la misma y, por tanto, sobre el gobierno abierto; ii) fomentar una mayor participación y pluralidad de actores y especialistas en el ámbito asociativo y académico; y iii) promover un proceso de consulta más amplio para la elaboración de los respectivos Planes de Acción que permita la identificación y el respaldo por parte de la sociedad civil con los objetivos y medios necesarios.

## **B) Informe del Mecanismo de Revisión Independiente del Primer Plan Nacional de Gobierno Abierto**

El Informe del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM), preceptivo para todos los miembros del OGP, puede considerarse el principal instrumento de evaluación, seguimiento y retroalimentación de políticas en el ámbito del gobierno abierto en España. Con carácter sintético se exponen de nuevo las principales conclusiones<sup>61</sup> que reveló el IRM y que en cierta medida se asimilan a aquellas observaciones realizadas por la sociedad civil recogidas en el Informe de Autoevaluación:

---

<sup>61</sup> Véase Capítulo III



- La necesidad de abordar una estrategia de política pública de actuación participativa, abierta e integral para lograr la definición colaborativa de los próximos compromisos.
- Clarificación en el ámbito territorial de los compromisos, donde el nuevo Plan de Acción debería implicar a España en su conjunto.
- Impulso de una política global de datos abiertos, instando a la creación de un Plan Global para el desarrollo del *open data*.
- Asentamiento del gobierno abierto como una política pública transversal permanente orientada a institucionalizar una mayor y mejor participación.
- Mejora de las regulaciones que permitan la inclusión del sentir ciudadano y con ello profundizar en la transparencia legislativa.

Ambos informes proporcionan una información de suma relevancia, por cuanto analizan y evalúan las políticas de gobierno abierto del Gobierno de España, aunque con metodologías y resultados divergentes. Tanto del Informe de Autoevaluación como del IRM se obtienen reflexiones que permiten extraer conclusiones y reforzar los planteamientos sobre los retos del gobierno abierto en España que se incorporarán al final de esta investigación.

### III. LA CORRIENTE DE POLÍTICAS (*THE POLICY STREAM*)

El diagnóstico de la crisis de confianza y desafección de la ciudadanía, así como su inserción en la agenda política como uno de los principales problemas en el país resultado de la ausencia de respuestas coherentes a las demandas sociales por parte de los poderes públicos, ha coexistido con soluciones y propuestas en un mismo espacio temporal, que han necesitado llegar a la zona de confluencia. En modelos de democracia representativa como el español, la respuesta principal para luchar contra la crisis de confianza hubiese sido lo que O'Donnell denomina *accountability* vertical (2000), es decir, los procesos electorales que permiten corregir y volver a recuperar la confianza con el cambio de gobierno pertinente. Sin embargo, esa respuesta no sirvió para el caso de España. A finales de 2011 hubo elecciones, cambio de gobierno y la desafección no

disminuyó. Y no lo hizo porque las causas que habían provocado el alto grado de desapego no sólo no habían cambiado, sino que la percepción de que habían empeorado consolidó en el ideario colectivo que no podía confiarse en el sistema.

Esta circunstancia —no exclusivamente nacional— ha evidenciado que en diversos entornos geográficos, culturales y políticos, resultado de una sociedad global e interconectada, haya emergido una nueva concepción de democracia. Es lo que Rosanvallon (2007) denomina ‘contrademocracia’, expresada a través de nuevas intervenciones ciudadanas frente a los poderes públicos; no porque esas formas de expresión se opongan a la democracia, sino porque se trata de un ejercicio democrático no institucionalizado, reactivo, una expresión directa de las expectativas y decepciones de la sociedad. Por ello, el contexto en el que deben buscarse soluciones y alternativas a la crisis de confianza debe partir de una realidad contemporánea donde, además de un pueblo elector, también existe un pueblo que vigila, un pueblo que veta, un pueblo que controla y participa. El ciudadano actual cada vez se conforma menos con otorgar su confianza periódicamente a sus gobernantes. Ahora pone a prueba a las élites a través de una evaluación permanente, lo que da lugar a la creación de nuevas formas de legitimación. Esas nuevas vías de legitimación son precisamente las que pueden conducir al gobierno abierto, a través de la imparcialidad y reflexividad, propia de sistemas fuertemente meritocráticos, a la transparencia y a la rendición de cuentas propias de las buenas instituciones, y a la proximidad y a la participación, propias de la nueva ciudadanía (Lee y Kwak, 2011; Villoria, 2015).

## 1. EL *PRIMEVAL SOUP* Y LAS COMUNIDADES DE EXPERTOS: IDEAS, ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE CRISIS DE CONFIANZA

La reflexión en torno a estas nuevas formas de legitimación fueron las que comenzaron a conformar el *primeval soup* de ideas y alternativas con una serie de propuestas consideradas seriamente como solución al problema de la desafección. Estas ideas consistían en propuestas de lucha contra la corrupción, políticas de transparencia y rendición de cuentas, iniciativas de regeneración democrática o de gobierno abierto. La idea de gobierno abierto contenía en sí misma políticas de transparencia, de rendición de

cuentas, de participación y de colaboración. En su concepción, por tanto, podían integrarse la mayoría de las ideas que flotaban en el ambiente como respuesta a la desafección. Su amplia dimensión comenzó a ubicar el gobierno abierto en un lugar preeminente en la comunidad de expertos.

En el ámbito del gobierno abierto conviven comunidades de expertos de alcance nacional e internacional que se retroalimentan y que han generado dinámicas de conocimiento y difusión de este nuevo modelo. En este sentido, el OGP puede considerarse como una gran comunidad de expertos que comparte y transfiere conocimientos y soluciones tendentes a dar respuesta a los déficits democráticos que sufren sus países miembros impulsando mejoras en los sistemas del país. Asimismo, en el ámbito nacional se ha configurado una comunidad de expertos relevante en torno a las políticas de transparencia y gobierno abierto que destaca por su gran heterogeneidad; en ella participan representantes políticos, funcionarios, tecnócratas, expertos, comunidades científicas y sociedad civil<sup>62</sup>. Es importante advertir que los miembros de la comunidad de expertos que son parte de la administración se han convertido en emprendedores de políticas y agentes de cambio en sus respectivos gobiernos en favor de las políticas de gobierno abierto.

## 2. EL ABLANDAMIENTO (*SOFTENING UP*) DEL CONCEPTO DE GOBIERNO ABIERTO

Desde el lanzamiento de la iniciativa a nivel internacional se ha producido un proceso de expansión y difusión del concepto entre las comunidades especializadas. Pronto la notoriedad del gobierno abierto llegó a España. La influencia internacional, por tanto, fue un elemento destacado en este proceso de ablandamiento. El eco de los discursos de grandes potencias como Estados Unidos, Brasil y México en relación al gobierno abierto facilitó un escenario de isomorfismo institucional (DiMaggio y Powell,

---

<sup>62</sup> Organizaciones de la Sociedad civil, Fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro, comunidades académicas, Universidades, tales como Transparencia Internacional, Coalición Pro Acceso, Accés Info, Civio, Novagob, Giggap, han contribuido al impulso y la definición del gobierno abierto en España, poniendo sobre la mesa el modelo que se propugnaba en el ámbito internacional y participando de los debates y propuestas en torno al mismo.

1991) determinante en el proceso de inserción de la idea sobre gobierno abierto en el país.

El proceso de *softening up* del gobierno abierto en España pivotó sobre el eje de la transparencia, el *open data*, el uso de las nuevas tecnologías y la web 2.0. A su vez estuvo marcado por el impulso de iniciativas autonómicas como Irekia, el portal de gobierno abierto del País Vasco, que llevó a otras regiones a seguir su modelo, coincidiendo en el tiempo con la entrada del Gobierno de España en la Alianza. También los discursos y debates en el Congreso en materia de transparencia y regeneración de la vida democrática favorecieron la consolidación, al menos en el ámbito de la administración, de un paradigma que parecía convertirse en la nueva bandera de numerosos representantes políticos, con independencia de su adscripción política. De ahí que la transparencia, el buen gobierno y el gobierno abierto comenzasen a aparecer como compromisos en los programas electorales de la mayoría de los partidos políticos<sup>63</sup>.

Del mismo modo, los emprendedores de políticas en las diferentes administraciones han sido elementos clave en el proceso de ablandamiento institucional. Ellos han favorecido la inserción en discursos y programas de gobierno. Sin embargo, el proceso de *softening up* de la idea de gobierno abierto entre la ciudadanía aún tiene un largo recorrido. Cabe advertir que, aunque los ciudadanos hayan incorporado a su mapa axiológico los valores de la transparencia y de las nuevas vías de participación ciudadana como principios irrenunciables del ejercicio de la política, con frecuencia no conocen todavía las potencialidades, implicaciones y beneficios del gobierno abierto.

Finalmente, hay que destacar que el proceso de inserción y difusión de una idea, de un concepto, alternativa y solución, cuenta hoy con herramientas que elevan exponencialmente la capacidad de conocimiento e intercambio entre actores. La oportunidad de transmisión de información y de generación de entornos colaborativos que permiten compartir ideas, debatirlas y mejorarlas convierte el proceso de ablandamiento en un mecanismo mucho más rápido y de mayor alcance de lo que Kingdon pudo haber imaginar cuando elaboró su famosa obra *Agenda, Alternatives and*

---

<sup>63</sup> Los principales partidos políticos en España (incluye PP, PSOE IU) incorporaron en sus programas electorales de las elecciones generales de noviembre de 2011 y las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 medidas de transparencia, buen gobierno y regeneración democrática.

*Public Policies* (1984; 1995).

### 3. LA SELECCIÓN DE IDEAS, EL CONSENSO EMERGENTE Y LA ALTERNATIVA DISPONIBLE

Las alternativas disponibles se han centrado en políticas de transparencia, de regeneración democrática, de buen gobierno, de lucha contra la corrupción y gobierno abierto. Aunque todas ellas requerían de reformas en el ordenamiento jurídico cumplían con los criterios que las convertían en alternativas a ser consideradas seriamente. Entre ellas, el gobierno abierto emergió como una alternativa en la que medidas de transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción quedaban subsumidas en el nuevo paradigma.

El gobierno abierto se convirtió en una alternativa técnicamente viable. Su condición de política paraguas en la que se podían integrar acciones existentes que encajasen con sus principios y nuevas actuaciones que fortaleciesen sus ejes principales han favorecido su adopción. Dos factores beneficiaron su selección. En primer lugar, la existencia de un anteproyecto de ley de transparencia que supuso un avance enorme en materia de contenido y técnica legislativa de la futura norma. La elaboración de la Ley de Transparencia del nuevo Gobierno contaba con un trabajo y un precedente importante que favoreció la viabilidad técnica de la iniciativa. En segundo lugar, España se encontraba en una posición de liderazgo en el desarrollo de la administración electrónica y de las nuevas tecnologías, encontrándose entre los más importantes *e-government* a nivel europeo y mundial, tal y como fue reconocido por el Global E-Government Survey en el año 2010.

En cuanto a su aceptación, dentro de la comunidad de expertos ésta fue mayoritariamente asumida. La ciudadanía reclamaba más transparencia y necesitaba pruebas de ello, convirtiendo el proceso de apertura de acceso a la información en irreversible. El Gobierno debía abordar reformas en materia de transparencia, rendición de cuentas, y el gobierno abierto encajaba perfectamente en esa estrategia. Por tanto, a pesar de la grave crisis económica, las restricciones presupuestarias no fueron lo

suficientemente fuertes para frenarla, pues el alto grado de desconfianza requería medidas urgentes que visibilizasen un cambio en las políticas y lanzasen un mensaje contundente en relación a la apuesta por nuevos modelos de gobierno abiertos, transparentes y que rindiesen cuentas.

Las políticas de transparencia y gobierno abierto emergieron como la breve lista de soluciones, viables técnicamente, aceptadas por la comunidad política y la ciudadanía en general, y sin restricciones presupuestarias lo suficientemente importantes que impidiesen su formulación, desarrollo e implementación. El consenso que se produjo en torno a ambas ideas como alternativas a la crisis de confianza, alineó a las diferentes comunidades de expertos y a diferentes partidos políticos, produciéndose el efecto arrastre o de subirse al carro (*bandwagon and tipping*) (Kingdon, 1984; 1995, 139-142).

Así la alternativa se vio reflejada en diversas iniciativas como la presentación del Primer Plan de Acción Gobierno Abierto (2012-2013) —que incorporó como compromiso destacado la elaboración de una Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (2013)—, el Segundo Plan de Acción (2014-2015) —que incorporó la creación de un Portal de Datos Abiertos—, iniciativas sobre normativas y portales de datos a nivel autonómico y local, e instrumentos de reciente aparición y mayor profundidad en la materia, como la Proposición no de Ley<sup>64</sup> (PNL) del Partido Socialista sobre una estrategia de gobierno abierto en el país.

Aunque cabe afirmar que el consenso en torno a la transparencia y gobierno abierto se produjo como una de las respuestas viables para luchar contra la crisis de confianza, su materialización en políticas concretas no ha estado exenta de tensiones y críticas. Existen valores diferentes entre las diversas comunidades de expertos con efecto directo en el diseño de políticas de gobierno abierto; para algunas comunidades el gobierno abierto es una receta, un tratamiento para la crisis de confianza, mientras que para otras el gobierno abierto además también es la respuesta necesaria para la mejora de la calidad de la democracia.

---

<sup>64</sup> Véase en documentos anexos.

#### IV. LA CORRIENTE POLÍTICA (*THE POLITICAL STREAM*)

Como nos expone la teoría de Kingdon (1984; 1995, 117-143) el *political stream* o corriente política hace referencia a los procesos políticos concretos, es decir, a los cambios políticos por las elecciones, a las actividades de grupos de intereses organizados o al ‘clima político’, entre otros factores determinantes para que una solución se implemente o no.

##### 1. EL CLIMA POLÍTICO EN ESPAÑA 2011-2014

Desde 2009, año en el que comenzaron a advertirse los primeros síntomas de la crisis, hasta el año 2013, momento de mayor desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, como señalan los diferentes indicadores y barómetros, el clima político en España se caracterizó por un sentimiento generalizado de decepción, impotencia e indignación debido a la grave crisis económica, política. Indicadores, estudios y acontecimientos relevantes como el 15M, parecían constatar una realidad: se había descuidado la democracia como bien máspreciado del que los españoles se habían dotado cuarenta años atrás. Por lo tanto, se extraía un diagnóstico severo vinculado a una democracia enferma, a causa de la presunta, aunque generalizada y sistemática, vulneración de los principios de ética pública que debían cumplir los representantes políticos.

El *Informe sobre la calidad de la democracia en España* ponía de manifiesto que a lo largo del año 2013 España había dado un gran paso atrás. La crisis económica y la gestión que se hizo de ella, entre otros factores, provocaron una crisis social, política e institucional sin precedentes en la historia de la España democrática. El informe continuaba afirmando que el estado de la democracia había empeorado considerablemente en el país alcanzando una posición preocupante con respecto a los países con mejor salud democrática como a los que tradicionalmente han estado peor (Estefanía et al., 2013).

**Figura 29: Clima social en España (enero 2013)**

¿Hasta qué punto existe corrupción en la vida política española actual? (en porcentajes)	Total entrevistados	Votantes de	
		PP	PSOE
Mucho + Bastante	96	95	97
Poco + Nada	3	4	3
¿Diría que hay ahora más o menos corrupción en la vida política española que hace 20 o 30 años? (en porcentajes)	Total entrevistados	PP	PSOE
Más	63	63	66
Igual	26	26	28
Menos	5	6	4
* La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentaje corresponde a No sabe/No contesta			

Fuente: Metroscopia, 2013

En la misma línea, el *Informe sobre el Clima social de España* de enero 2013 de Metroscopia concluía que España era un país que, en conjunto, padecía un nivel bajo de corrupción, aunque podría ser aún menor atendiendo al IPC de Transparencia Internacional de 2012. Sin embargo, no era esa la sensación que predominaba entre la ciudadanía. La gran mayoría de ciudadanos consideraba que existía mucha o bastante corrupción en la vida política, que el grado de corrupción era más elevado que el de hacía dos o tres décadas, que era superior al que existía en los países del entorno y que estaba más extendida en el ámbito político que en otras esferas de la sociedad. Los propios encuestados matizaban estas afirmaciones reconociendo de forma mayoritaria que no existía tanta corrupción, pero que los graves casos minoritarios eran suficientes como para poner en entredicho el buen nombre de los demás (Ferrándiz, 2013: 8).

El informe constataba que en los diversos sondeos llevados a cabo desde el inicio de la crisis los ciudadanos reclamaban la necesidad de un gran pacto nacional entre los principales partidos para afrontar la crisis económica. A su vez, mostraba un cierto pesimismo por parte de los mismos, puesto que vaticinaban que ese pacto no se iba a



producir al considerar que la élite política española no estaba a la altura del momento. Su preocupación por resolver intereses partidistas antes que nacionales, su facultad de crear problemas antes que resolverlos y su incapacidad para llegar a acuerdos en cuestiones importantes eran rasgos que según la amplia mayoría de ciudadanos definían a los actuales dirigentes. El cierre de este informe sobre el clima social en España, con carácter general, sentenciaba que los políticos actuales no solo eran peores que los de hace veinte o treinta años, sino que para la mayoría con su perfil y talante no se hubiera podido conseguir la transición a la democracia (Ferrándiz, 2013: 8).

Entre los años 2011 y 2013 la crisis política e institucional en España alcanzó cotas desconocidas en la historia reciente de la democracia y, aunque este proceso no fue exclusivo del país puesto que otros estados del entorno europeo también sufrieron sus estragos, es cierto que el contexto de cuestionamiento profundo del sistema democrático español puso en jaque a las instituciones y abrió una profunda reflexión que alcanzó a todos los poderes del Estado. Precisamente el siguiente *Informe sobre la Democracia en España* ahondó en las tres heridas que la crisis y la gestión de la misma habían producido, señalando que uno de los principales efectos era la emergencia de una sociedad desigual, empobrecida y desafecta, aunque no pasiva. El resultado era una clase política superada por las circunstancias, impotente y seriamente dañada por la corrupción, marcada por un deterioro institucional que había afectado a la práctica totalidad de las instituciones, desde el Gobierno hasta la Monarquía (Estefanía et al: 2014).

En síntesis, este panorama de crisis sistémica derivó en un intenso debate a todos los niveles: académicos, gubernamentales, periodísticos, ciudadanos, etc., conformando un clima social que influyó de manera determinante en el posicionamiento de esta cuestión en la agenda política reclamando reformas urgentes y radicales en torno a la falta de transparencia, a los abusos de la clase política y a una improrrogable regeneración democrática.

## 2. EL CAMBIO DE GOBIERNO: LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011

El clima político de la sociedad en el país fruto de la crisis económica, la amenaza de rescate por parte de la UE y la reforma con carácter urgente de la Constitución, dieron

lugar a que en el verano de 2011 el entonces Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciase un adelanto electoral cuatro meses antes de agotar la legislatura. El argumento era la conveniencia que el Ejecutivo que saliese elegido de las urnas afrontase, desde el 1 de enero de 2012, el ejercicio político y las responsabilidades económicas en un escenario de estabilidad. Consecuentemente, las elecciones se celebraron en noviembre de 2011 y el Partido Popular salió vencedor con mayoría absoluta, haciéndose efectivo en 2012 el cambio de gobierno.

La situación económica del país había forzado a realizar recortes presupuestarios importantes en todas las áreas públicas. En el plano social se sumaba una tasa de desempleo que, según datos de la Encuesta de Población Activa del 4º Trimestre de 2012 se situaba en el 26%, con un nivel de endeudamiento familiar situado en enero de 2012 en 901.730 millones de euros, según los datos del Banco de España. Estos datos, correspondientes al conjunto del ejercicio 2011, indicaban que la riqueza de las familias había caído el 4,12% en 2011 hasta 786.359 millones de euros, lo que en términos absolutos suponía una reducción de 33.764 millones de euros (ONTSI, 2013: 17). Por tanto, el paro, los recortes presupuestarios, la contracción de la riqueza de las familias y el aumento del nivel de endeudamiento marcaban duramente la realidad española del momento

La ciudadanía había comenzado a hacer una correlación entre crisis económica, enriquecimiento ilícito de la clase política, mala utilización de los recursos públicos, ineficiencia de la administración, falta de transparencia y ausencia de mecanismos adecuados de participación. Por ello, el nuevo Gobierno del Partido Popular debía abordar numerosas medidas para hacer frente a la grave crisis económica, pero también a la ya diagnosticada crisis de confianza. Así, el nuevo ejecutivo se encontró, en relación a esta cuestión, con tres presupuestos de base que favorecieron el acoplamiento de las diferentes corrientes objeto de examen:

- Un problema creciente de falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones que necesitaba de respuestas, soluciones y alternativas. Aunque los indicadores expuestos manifestaban la misma desconfianza en los políticos y los

partidos políticos con independencia de sus siglas, el simple cambio de gobierno ofrecía una nueva expectativa y una oportunidad de abordar este problema de desafección.

- Un déficit en el ordenamiento jurídico en materia de transparencia. En el ordenamiento jurídico español, aunque diversas normas regulaban el acceso de los ciudadanos a la información que poseen los poderes público<sup>65</sup>, hasta ese momento no se había abordado la elaboración de una norma que regulara el acceso a la información pública y fortaleciera, en consecuencia, el ejercicio del control de la actividad pública por parte de los ciudadanos. La ausencia de una norma sobre transparencia en España contrastaba con el entorno más próximo, puesto que la Unión Europea y la gran mayoría de sus Estados miembros contaban con normativas específicas sobre el derecho de acceso a la información pública. El nuevo Gobierno, consciente del clima social y las demandas de la ciudadanía, emprendió la tramitación de una Ley de Transparencia. Sin embargo, esta iniciativa no partía de cero puesto que el Gobierno anterior contaba en su última legislatura con un Anteproyecto normativo sobre transparencia que no pudo entrar en el trámite parlamentario debido al adelanto electoral.
- España había entrado a formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto en los últimos meses de mandato del gobierno socialista. A partir de 2012 comenzó a agravarse la crisis de confianza y a principios de 2013 pasó a convertirse en uno de los principales problemas para los gobiernos a nivel estatal, autonómico y local. El nuevo Gobierno de España, como miembro del OGP, tenía que presentar un primer Plan de Acción Nacional que mostrase el compromiso de España con las políticas de gobierno abierto mediante el planteamiento de reformas que diesen respuesta a la situación y permitieran recuperar la

---

<sup>65</sup> Tales como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

credibilidad perdida a través de mejoras legislativas que impactasen directamente en el funcionamiento del sistema institucional.

### 3. INTERESES ORGANIZADOS Y POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO

Hablar de intereses organizados supone hacer referencia a partidos políticos, grupos de presión, asociaciones o personal de la administración que pueden operar como estímulo o freno para un cambio de políticas (Kingdon, 1995; Campo, 2002). Cómo se organizaron los intereses en torno al gobierno abierto es una cuestión que merece atención especial. Con el cambio de gobierno se abrió una oportunidad para poner en marcha iniciativas tendentes a reparar la maltrecha confianza de los ciudadanos. El hecho de que la profunda falta de confianza afectase a amplios sectores y actores del sistema democrático tuvo como resultado que diferentes intereses se organizaran para desarrollar políticas y reformas encaminadas a luchar contra la crisis de confianza a través de la puesta en marcha de políticas de transparencia, gobierno abierto y de regeneración democrática. De los diversos grupos de interés que se organizaron sobre esta cuestión pueden destacarse aquellos que operaron dentro de los márgenes institucionales o gubernamentales y los que se enmarcaron fuera de los gobiernos y administraciones.

Los grupos de interés en el marco de los gobiernos y administraciones se conformaron a nivel nacional, autonómico y local. El recién elegido Gobierno de España, con un compromiso adquirido del anterior Ejecutivo de pertenecer al OGP, con un anteproyecto de Ley de Transparencia no nato y unos niveles de desafección ciudadana crecientes, debía afrontar necesidades específicas de legitimación. El efecto discursivo de las políticas de apertura de información y la existencia de instrumentos tecnológicos para hacer frente al reto de la transparencia dio lugar a que la Vicepresidenta del Gobierno asumiera un liderazgo interno, germen de la coalición promotora que se conformó dentro del Ejecutivo a favor de una hoja de ruta hacia una política de transparencia y gobierno abierto (Villoria, 2014: 14).

En el ámbito autonómico y local también comenzaron a generarse intereses en torno a las políticas de gobierno abierto. El efecto Irekia, primera iniciativa líder en gobierno abierto a nivel autonómico en el momento de su lanzamiento, generó una

corriente de consenso emergente entre diversas comunidades de expertos especializados en la materia. Ello derivó en el diseño de propuestas de gobierno abierto adaptadas a los diferentes territorios y promovidas por grupos de interés dentro de las respectivas administraciones. A partir de ese momento, todos los niveles de la administración, funcionarios, técnicos, empleados públicos y responsables políticos se han ido constituyendo en grupos de intereses organizados en favor de las políticas de gobierno abierto.

Por otro lado, se conformaron grupos de interés externos a gobiernos y administraciones. En el entorno de la sociedad civil existían numerosas demandas en relación a la necesidad de abordar un problema de falta de transparencia en el escenario político español. Así, organizaciones de gran tradición y reconocimiento internacional como Transparencia Internacional y otras que en los últimos años habían adquirido un elevado reconocimiento y contribuido con sugerencias y demandas como la Coalición Pro Acceso, Acces Info, Civio o comunidades académicas y científicas, como Novagob y Gigapp, aportaron importantes reflexiones en relación al nuevo paradigma, ejerciendo una importante influencia en el conocimiento y difusión del mismo y favoreciendo su incorporación en diferentes iniciativas gubernamentales.

Los partidos políticos, también han sido uno de los principales intereses organizados en torno al gobierno abierto. Todos sin excepción comenzaron a incluir en sus discursos y programas la transparencia como una política pública improrrogable. Con carácter general, los partidos reclamaron que la elaboración de la regulación en materia de transparencia cumpliera los estándares de las legislaciones más desarrolladas del entorno y colmase las expectativas de los ciudadanos. El principal partido de la oposición ahondó en la idea de establecer los pilares necesarios sobre los que se pudiera construir un modelo de gobierno abierto en el país. Esta circunstancia seguramente obedeció a que fue el último gobierno socialista quien impulsó la entrada de España en el OGP. Dicha red internacional, aunque no pueda configurarse estrictamente como un interés organizado, favoreció a través de su impulso, seguimiento, evaluación la conformación de dichos intereses organizados.

Puesto que este tipo de soluciones sólo se pueden poner en marcha por los propios gobiernos, cabe preguntarse por qué los gobiernos también estuvieron interesados en ser transparentes, ceder poder a su administración y someterse a una rendición de cuentas más severa. La teoría DBO (Hedström, 2010) explica que las acciones son el resultado de los deseos (*desires*), entendidos como la voluntad de que algo suceda, las creencias (*beliefs*), entendidas como una proposición sobre el mundo que se considera cierta, y las oportunidades (*opportunities*), entendidas como el menú de alternativas de acción disponible para el actor, independientemente de las creencias del actor sobre las mismas (Hedström, 2010). En el caso objeto de análisis, las creencias sobre los deberes, derechos y obligaciones de los gobiernos, así como las creencias sobre cómo debe entenderse y qué puede esperarse de la democracia y el Estado, son esenciales para explicar las opciones reales por un tipo u otro de rediseño institucional encaminado a la búsqueda de la legitimidad a través de procesos o el logro de réditos electorales en escenarios de alta competencia (Villoria, 2015: 4). En este sentido existen estudios que exponen como existe una cierta prevención en el uso de herramientas tecnológicas de *e-government* para acciones de alto impacto comunicativo, excepto cuando existe un elevado grado de competencia política en el territorio respectivo percibiéndose en ese contexto como un elemento esencial la comunicación ágil y *on line* con la ciudadanía (Ahn, 2011).

Aquí es importante exponer como desde principios del año 2014 todas las fuerzas políticas han puesto en marcha una ofensiva basada en hacer propuestas en torno a la participación, la transparencia y la regeneración democrática para contrarrestar la opinión de la ciudadanía sobre la incapacidad de los partidos tradicionales de enfrentarse a la corrupción y a la opacidad en la gestión pública de manera ejemplar. Las iniciativas, medidas y mensajes lanzados por los diferentes partidos políticos en un escenario de alta competencia electoral, como el que se ha producido en España desde el año 2012, debido a la descapitalización de las dos fuerzas mayoritarias PP y PSOE y la irrupción de nuevos partidos políticos a nivel nacional como Ciudadanos y Podemos, ha dado lugar a la asunción y defensa de políticas de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana. Así lo muestra el análisis que el diario El País realizó en noviembre de 2014 sobre el estado de salud de a las principales fuerzas políticas en España. Este estudio fue

planteado de manera similar a los test de estrés que la Autoridad Bancaria Europea realiza periódicamente a los bancos de la región.

El estudio examina ocho aspectos: evolución electoral y encuestas, afiliación, financiación, transparencia, participación, buen gobierno, corrupción y programas electorales. Del mismo se desprenden cuestiones que merecen ser destacadas. En relación a la transparencia, se constata que es el área donde se han llevado a cabo los mayores esfuerzos por parte de todos los partidos políticos tras la entrada en vigor de la LTAIBG, aunque con diferentes matices. Unión Progreso y Democracia (UPyD) y PSOE encabezan las clasificaciones en este ámbito. Aunque con carácter general sigue habiendo un importante camino por avanzar en la materia sobre todo en lo que se refiere a la publicación de presupuestos de las campañas electorales, es relevante señalar que la mayoría de los partidos han publicado portales de transparencia<sup>66</sup> en sus respectivas páginas web. Este tipo de avances responden al impulso de entidades como Transparencia Internacional que el 3 de noviembre de 2014 publicó una declaración institucional que instaba a que los Partidos y responsables políticos adoptasen un conjunto de medidas drásticas y urgentes contra la corrupción. El resultado hasta el momento ha sido la firma de Convenios por la transparencia y contra la corrupción a lo largo del primer semestre de 2015 con PSOE, Ciudadanos, UPyD y Convergencia. En cuanto a la participación es el apartado donde existen más diferencias por los distintos estilos de cada partido. Todas las fuerzas a excepción del PP, celebran elecciones primarias para elegir a sus candidatos, y en algunos casos incluso esas primarias están abiertas a los simpatizantes como es el caso del PSOE e Izquierda Unida (IU), o constan de dos vueltas como es el caso de Partido Nacionalista Vasco (PNV). La participación de los ciudadanos se convierte en uno de los principales puntos de competencia entre las distintas formaciones políticas, donde PSOE, IU y Podemos, luchan por un electorado similar y están desarrollando todo tipo de asambleas abiertas o canales digitales para abrirse al debate público. En relación a normas

---

<sup>66</sup> Portal de transparencia PSOE <http://www2.psoe.es/transparencia/>; Portal de transparencia de Ciudadanos <https://www.ciudadanos-cs.org/transparencia>; Portal de transparencia de Podemos <http://transparencia.podemos.info/>

de buen gobierno, excepto el PNV, que desde su conformación ha tenido en sus estatutos unas normas de comportamiento muy estrictas, el resto de partidos políticos han lanzado en estos últimos años códigos de conducta como respuesta a los casos de corrupción, sin duda, el asunto más delicado y que más ha afectado a la reputación de los partidos, sobre todo a las dos grandes formaciones a escala nacional. Por ello, los programas electorales y el diseño de las campañas se convierten en un elemento esencial que permiten calibrar como en un contexto como el actual los ejes sobre los que versan mensajes y propuestas se encuentran alineados en torno a la transparencia, la regeneración democrática, el buen gobierno y el gobierno abierto.

Los recientes programas electorales correspondientes a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015 así lo demuestran. El programa electoral del PP contiene 14 medidas sobre transparencia sobre un total de 196 en el que declara que se ha hecho de “la transparencia una norma de obligado cumplimiento y hemos aprobado el conjunto de normas más ambiciosas para luchar contra la corrupción” (PP, 2015: 4). El Programa Marco Municipal del PSOE dedica su primer capítulo a la democracia y buen gobierno local, con un apartado específico sobre ayuntamientos abiertos y gobiernos transparentes (PSOE, 2015a: 8-11); IU en su Programa Maco Municipal y Autonómico recoge en el eje sobre democracia cuatro cuestiones: administraciones democráticas, democracia participativa, medidas contra la corrupción y transparencia (IU, 2015: 1-5); Ciudadanos en el Programa electoral de Madrid habla de “un Madrid administrado de forma, honesta, rigurosa y transparente” (Ciudadanos, 2015: 4-11); Finalmente Podemos y sus 215 Medidas para un proyecto de país, incorpora como acciones prioritarias instituciones para la democracia, medidas contra la corrupción y participación ciudadana.

Aunque probablemente confluyan diferentes deseos, creencias y oportunidades, los intereses se organizaron a favor de la transparencia y el gobierno abierto, de modo que para el gobierno a nivel nacional, del Partido Popular, era una reforma sobre la que prácticamente no tenían elección. La crisis de confianza se había impuesto en la agenda de gobierno y existía una presión internacional derivada de la pertenencia al OGP. Para el principal partido de la oposición, el PSOE, aparecía como un espacio natural de su discurso. Fue el partido de gobierno que incorporó el país a la Alianza Internacional y,



por tanto, se sentían legitimados para reclamar reformas y erigirse en los máximos defensores de modelos de gobierno abierto. Para las administraciones descentralizadas, al margen de su color político, el gobierno abierto podía convertirse en una solución que, de ser desarrollada en profundidad, cambiaría la forma de gobernar y les otorgaría mayor legitimidad, favoreciendo la imagen institucional y siendo útil en clave de rédito electoral. Para la sociedad civil y las comunidades de expertos suponía un reconocimiento y el logro de que sus propuestas sobre gobierno abierto se convirtieran en la alternativa disponible para luchar contra la crisis de confianza de la ciudadanía. Por ello, todos los grupos de interés y otras organizaciones apuntaron en la misma dirección, proporcionando un poderoso impulso para avanzar hacia la incorporación de políticas de gobierno abierto en los distintos niveles de la administración española.

## V. EL ACOPLAMIENTO DE LAS CORRIENTES: LA VENTANA DE OPORTUNIDAD DEL GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA

A lo largo de estas páginas se han descrito las tres corrientes que, siguiendo el Esquema de las Corrientes Múltiples de Kingdon, fluyeron de manera independiente. En relación a la corriente problema, se diagnosticó la grave crisis de confianza de los ciudadanos en el sistema; en relación a la corriente políticas, existían alternativas e ideas en relación a la transparencia y al gobierno abierto que comenzaban a emerger como propuestas viables de lucha contra la desafección; y en relación a la corriente política, se produjo un cambio de gobierno y un clima social propicio para que las corrientes confluyeran y se abriera una oportunidad para el cambio para las políticas de transparencia y participación a través del gobierno abierto.

Así, es posible afirmar que a lo largo del período analizado 2011-2014 se abrió una ventana de oportunidad para el gobierno abierto en España. Las ventanas de oportunidad, como se analizó en el capítulo II, se abren en la corriente problemas o en la corriente política. En el caso de España, el problema de grave crisis de confianza de los ciudadanos en el sistema fue el que abrió la ventana de oportunidad, consecuencia de la presión de la opinión pública, que entre los años 2012 y 2013 alcanzó niveles

desconocidos en democracia. La crisis de confianza paso a formar parte de la agenda sistémica antes de lograr una posición preeminente en la agenda política.

La ventana de oportunidad, generada por la crisis de confianza, cargó el sistema de alternativas y soluciones donde la comunidad de expertos contaba con propuestas de solución centradas en políticas de transparencia, buen gobierno y gobierno abierto. El cambio político, resultado de las elecciones generales de finales del año 2011, permitió que las tres corrientes confluyeran y se acoplasen en el momento crítico.

El acoplamiento de las corrientes promovió el cambio en la cultura política, de modo que al problema de crisis de confianza se unió la solución. Consiguientemente, el contexto político validó la alternativa como solución al problema. Las tres corrientes expuestas existían de forma simultánea en el mismo marco temporal, aunque el papel de los emprendedores de políticas fue determinante en la defensa de la propuesta. Como se ha expuesto, diferentes comunidades de expertos —dentro y fuera de la administración— venían defendiendo propuestas sobre transparencia, buen gobierno, participación y gobierno abierto. Alternativas que requerían reformas pero cuyos valores prometían ser una receta adecuada contra la enorme crisis de confianza.

En el caso objeto de análisis, no es fácil concluir si la ventana de oportunidad para el gobierno abierto en España fue predecible. Desde una visión global e internacional, para una determinada comunidad de expertos, es muy probable que sí lo fuera y sólo estuvieran esperando el momento propicio para plantear sus propuestas.

El hecho de que la crisis de confianza no fuese un problema exclusivamente nacional, sino que fuese una preocupación de numerosos países y de la propia comunidad internacional, ofrecía indicios de que las recetas que se estaban generando para superar la desafección de la ciudadanía podían aterrizar en España. La duda era si la ventana se abriría a iniciativa de los ciudadanos o de los propios gobiernos, dependiendo de ello su forma de entrada en la agenda política. Se puede señalar que la adhesión al OGP por parte del anterior gobierno socialista podría haber sido una pequeña ventana de oportunidad para el gobierno abierto. Sin embargo, la difusión, aceptación y reconocimiento de su virtualidad como una solución válida se produjo cuando el problema, las ideas y la política

confluyeron, promoviendo los cambios a través de decisiones políticas que se han materializado en reformas normativas a nivel nacional, autonómico y local.

## **CAPÍTULO VI. EL GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO LOCAL ESPAÑOL**

### **I. DEL DIAGNÓSTICO (DESAFECCIÓN) A LAS PROPUESTAS DE REFORMA: BUEN GOBIERNO Y GOBIERNO ABIERTO LOCAL**

En tiempos de crisis global en los que la actividad política está desprestigiada y la percepción sobre la corrupción es alta, la brecha entre representantes y representados se incrementa provocando un sentimiento de desafección ciudadana cada vez mayor. En este contexto la transparencia y la participación se manifiestan como una fórmula necesaria para reconstruir lo político, y la esfera local se concibe como un lugar preferente para poner en práctica estrategias que aproximen a la ciudadanía a los procesos democráticos (Ruiloba, 2014: 57).

La historia reciente de las administraciones locales se encuentra estrechamente vinculada a las políticas de participación ciudadana como herramienta de incorporación de la ciudadanía a dinámicas propias de los gobiernos locales. Así, desde hace más de una década desde el ámbito local se han desarrollado diferentes experiencias con el objetivo de promover gobiernos locales más horizontales, cercanos y transparentes. El nivel local parece haberse convertido en el lugar idóneo para ensayar nuevas formas de hacer política frente a la crisis de legitimidad de lo político, acercando gobiernos y ciudadanía en un mundo cada vez más interconectado con el fin de incrementar la cohesión y reducir la desafección ciudadana (Borja y Castells, 1998).

Pero también en estos últimos años el marco institucional y jurídico en el que se ha desarrollado la gestión local ha encontrado ámbitos, como el urbanístico, que ha favorecido la corrupción debido a dos factores esenciales: el hecho de la enorme repercusión económica de las decisiones públicas sobre el uso del suelo y la insuficiencia de los mecanismos de control del sistema político y legal para evitar los beneficios particulares en el desempeño de un cargo público. Ello ha dado lugar a importantes problemas en cuatro planos: el normativo, por cuanto el exceso de regulación deja abierta la arbitrariedad en la toma de las decisiones, el burocrático, en la medida que los controles internos para garantizar la legalidad manifiestan importantes deficiencias, el político, donde el ejercicio de la oposición no ha sido eficaz, bien por falta de información, por impopularidad social, o por connivencia con las actuaciones de la entidad local y el judicial, porque la jurisdicción contenciosa prolonga las causas una media de unos ocho años lo cual convierte en ineficaz el control en la práctica. Reducir la probabilidad de corrupción y mejorar el funcionamiento de las instituciones pasa por reforzar el pilar de la representatividad para conseguir un diseño más equilibrado que potencie políticas no solo más efectivas, sino más razonables y que generen mayor confianza de los ciudadanos en el sistema político. Para ello es necesario introducir reformas que limiten eficazmente el ejercicio del poder de los gobiernos. La situación de crisis de confianza y los niveles que ha alcanzado la preocupación por la corrupción han abierto una ventana de oportunidad para llevar a cabo las reformas adecuadas (Ganuza y Francés, 2008, Jiménez, 2015).

La restauración de la afección, la confianza y la cercanía pasa por el establecimiento de nuevas dinámicas y políticas que permitan el acceso sistemático y eficaz de la ciudadanía a los asuntos públicos mediante fórmulas que les permitan percibir que su participación tiene impacto en las decisiones que finalmente se toman en la esfera política. La idea de gobernanza local remite al conjunto de normas formales e informales, estructuras y procesos mediante los cuales los actores locales solucionan colectivamente sus problemas y encaran conjuntamente las necesidades sociales (Bovaird, 2002). Este proceso inclusivo donde cada actor local aporta importantes habilidades y recursos permite generar confianza y capital social en el territorio.

La gobernanza local revaloriza el papel de la participación ciudadana en los procesos de adopción de decisiones, puesto que en el ámbito local la acción de gobernar no se limita a la organización municipal, sino que comprende a otros actores, bien sean públicos, privados, individuales o institucionales (Natera, 2004). Por ello, los gobiernos locales, con las adecuadas capacidades competenciales y de financiación, son el escenario idóneo para la puesta en práctica de modelos de buen gobierno y gobierno abierto, en la medida que la proximidad inherente a su condición de entidad territorial básica le permite estar en las mejores condiciones para fomentar la igualdad y la justicia social, consolidar la democracia e imaginar nuevas formas de participación. Si un nivel de administración puede articular mecanismos de apertura, de consensos, de sensibilidad, de igualdad, de participación, de transparencia y de rendición de cuentas, ese es el nivel local (López Pagán *et al*, 2012: 94).

Como afirma Held “una democracia solo hace honor a su nombre si los ciudadanos tienen un verdadero poder de actuar como tales, es decir, si son capaces de disfrutar de una serie de derechos que les permitan demandar participación democrática y considerar dicha participación como un título” (Held, 2001: 335). De ahí que esta investigación asuma que la democracia representativa y la democracia participativa no constituyen alternativas contrapuestas, sino que se complementan y se refuerzan la una a la otra. La participación ciudadana contribuye a mejorar la democracia, la eficiencia y la eficacia de las decisiones políticas. El consenso ciudadano aumenta la legitimidad de los sistemas políticos, optimiza el rendimiento institucional y forma mejores ciudadanos y políticos (FEMP, 2009). El desarrollo de una democracia local participativa pasa, en primer lugar por activar los roles de los ciudadanos y en segundo lugar, por otorgar de sentido colectivo el incremento de la relación entre gobernantes y gobernados (Brugué *et al*, 2003, 15). De ahí que la participación requiera de la implicación de los ciudadanos en aquellas actividades que están destinadas a influir en la ejecución de actuaciones políticas concretas (Toto, 2000). Desde estas premisas, el impulso de medidas de buen gobierno que mejoren la democracia representativa por parte de los gobiernos locales, a través de políticas de participación ciudadana en determinados ámbitos de gestión, fomentan una

mayor implicación de la ciudadanía y permiten alcanzar mayores cotas de legitimidad y retorno social en relación a dichas decisiones.

Entre los principales precedentes del buen gobierno en el ámbito local destaca el ‘Código Europeo de Conducta para la integridad política de los representantes locales electos’, aprobado en 2005 por el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa (CPLRE). El texto abogaba por la promoción de códigos de conducta para los representantes locales como instrumentos que permitiesen crear confianza entre los políticos y los ciudadanos, impulsando el desempeño de funciones por parte de los representantes públicos en base a los principios de transparencia, eficiencia y eficacia. Inspirado en ese referente, en el año 2009 la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó el ‘Código de Buen Gobierno Local’. El Código nació con el objetivo de contribuir a la mejora de los modelos de gestión de los gobiernos locales como garantes de la igualdad y solidaridad en el territorio y mostraba un compromiso con la ética pública y la calidad democrática en el ámbito local. La incorporación de los principios de buen gobierno en un instrumento normativo a nivel local, a pesar de su carácter potestativo, supuso uno de los primeros pasos a nivel nacional de la traslación de dichos principios éticos en medidas específicas.

Los gobiernos locales tradicionalmente han estado a la vanguardia en el desarrollo de políticas de transparencia y de participación ciudadana, debido a un factor de origen esencial: su proximidad en la gestión. La apuesta por este tipo de políticas ha respondido a una voluntad de generar confianza y complicidad con los actores del propio territorio; por ello, los entornos locales han emergido como el espacio adecuado para la puesta en práctica de formas de gobernanza abierta, horizontal y deliberativa (Blanco y Gomà, 2003: 9-11). La participación ciudadana ha tenido en el ámbito local su espacio de mayor desarrollo en las últimas dos décadas. Si a ello se agrega la necesaria búsqueda de soluciones innovadoras para dar respuesta al alto grado de desafección, los gobiernos locales suponen auténticos laboratorios de *open government* donde la colaboración, la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la ‘innovación colaborativa’ se pueden convertir en una fórmula a consolidar dentro de las administraciones locales (Sroker, 1998; Prats i Catalá, 2005; Peters y Pierre, 2000, 2005; Subirats, 2011).

## II. INSTRUMENTOS PARA LA TRANSPARENCIA, EL BUEN GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN

El trabajo en red de la administración local se ha convertido en una actividad esencial de intercambio de conocimiento, creación de alianzas colectivas para la búsqueda de soluciones e impulso de instrumentos que pueden favorecer el diseño o perfeccionamiento de políticas públicas. Apoyo institucional, colaboración y co-creación se han convertido en distintivos del trabajo de la administración local, en especial en aquellos espacios fuertemente descentralizados como es el caso de España. Por ello, la aprobación de instrumentos para mejorar la transparencia, el buen gobierno y la participación se enmarcan en esa lógica de trabajo y colaboración en red. A continuación se presentan algunos de los ejemplos que muestran como la ubicación de la desafección ciudadana en la agenda política local ha dado lugar a la generación de herramientas de uso colectivo que pretende favorecer la acción de los gobiernos locales en los ámbitos de la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana.

### 1. ORDENANZA TIPO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN

La Ordenanza Tipo de transparencia, acceso a la información y reutilización<sup>67</sup>, aprobada por la FEMP en mayo de 2014, constituye un instrumento normativo de referencia que puede dotar de mayor seguridad jurídica a las entidades locales en el marco de las obligaciones que se derivan de la LTAIBG. El contexto social y tecnológico de los últimos años ha demandado con fuerza que los derechos de acceso a la información, garantizados hasta el momento en la Constitución Española (1978) y en disposiciones aisladas, se vieran reforzados con un marco jurídico adecuado y al nivel de los países del entorno (FEMP, 2014b) . Así, el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, establece que:

---

<sup>67</sup> La FEMP aprobó el 27 de mayo de 2014 una Ordenanza tipo sobre transparencia, acceso a la información y reutilización apenas cinco meses después de que entrase en vigor la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Véase en documentos anexos.



*Las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado.*

Este precepto debe ser puesto en conexión con el nuevo párrafo ñ) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, según el cual corresponde a los Ayuntamientos la promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Asimismo, la LTAIBG, en su disposición final novena establece que “los órganos de las comunidades autónomas y entidades locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”. A tal efecto, las entidades locales debían iniciar un proceso interno de adaptación a dicha norma, siendo conveniente regular integralmente la materia a través de una Ordenanza.

La propuesta de la FEMP se divide en siete capítulos. El primero de ellos establece como objeto de la norma la regulación de la transparencia de la actividad de la entidad local, así como del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La Ordenanza se aplicará tanto a la organización principal como a todas las entidades dependientes a través de las cuales ejerce su actividad (incluidas las empresas privadas, contratistas y concesionarias de servicios). Todos ellos tienen la obligación de elaborar, difundir y mantener actualizada, preferiblemente por medios electrónicos, la información cuya divulgación se considere relevante.

También deben establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada, poner en marcha las medidas que permitan gestionar la información y facilitar su localización, publicar la información de forma clara y comprensible, y difundir la información relativa a los términos de reutilización de la información de forma precisa para los ciudadanos. En cuanto a los derechos de los ciudadanos, la Ordenanza Tipo les reconoce el derecho a acceder a la información con sujeción a las obligaciones de publicidad; el derecho a ser informados si los documentos que contienen la información solicitada obran en poder del órgano o entidad; a ser

asistidas en la búsqueda de información; a recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles sobre su derecho de acceso; a recibir la información solicitada de forma gratuita dentro de los plazos, en el formato elegido y, en caso de denegación, a saber en qué se fundamenta. Para ello, las entidades locales deberán disponer de medios que garanticen el acceso a la información bien a través de oficinas de Información, páginas web, sedes electrónicas, servicios de atención telefónica u otras dependencias, departamentos o medios electrónicos habilitados por la entidad local. Asimismo, ésta deberá habilitar una unidad responsable de la información pública cuyas funciones quedan detalladas en la propia Ordenanza.

El segundo de los capítulos está dedicado a la información pública. Este concepto hace referencia a los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de las Administraciones Públicas y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El capítulo regula las diferentes maneras que tienen los ciudadanos de acceder a la información pública y establece los requisitos que deben tener los datos, contenidos y documentos considerados ‘información pública’ a efectos de la Ordenanza, aclarando las limitaciones generales de acceso a esta información y mostrando una especial protección hacia los datos de carácter personal.

La transparencia activa, pasiva y colaborativa centran los contenidos de los tres capítulos siguientes de la Ordenanza. La transparencia activa, regulada en el capítulo III, hace referencia a la información pública que las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ordenanza deben publicar de oficio y a través de medios electrónicos, siendo una actividad básica de la administración local y la de mayor demanda social. La transparencia pasiva es el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, “sin previa exigencia de condición alguna de ciudadanía, vecindad o similar”, y aparece detallada en el Capítulo IV. En este punto se recoge que la denegación del acceso a dicha información habrá de ser en base a alguno de los límites regulados cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público o privado superior que justifique el acceso.

A efectos de garantizar el derecho a la información pública, la Ordenanza establece un procedimiento ágil para su resolución, incluida la posibilidad de reclamación si dicha resolución fuera desestimatoria. Finalmente, el ejercicio de la transparencia colaborativa por parte del sector público, uno de los aspectos más avanzados de esta normativa, se plasma en la reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades a las que afecta la aplicación de la ordenanza. Su objetivo de dotar de valor público a dicha información en los ámbitos social, innovador y económico. Así lo recoge el Capítulo V, que destaca además que la reutilización no se aplicará a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial.

Los últimos capítulos de la Ordenanza Tipo regulan el régimen de quejas y reclamaciones —que incluye las reclamaciones ante la propia administración y ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno— y el régimen sancionador en materia de reutilización de la información pública local. Las infracciones (muy graves, graves y leves) pueden llevar aparejadas sanciones como multas, prohibición de reutilizar documentos o revocación de autorizaciones concedidas. En cuanto a la evaluación, la ordenanza regula un sistema de evaluación y seguimiento de la norma —que corresponde a la Alcaldía o Presidencia—, así como los objetivos y actuaciones anuales para mantener y desarrollar la transparencia. Esta última previsión constituye un elemento novedoso en la regulación a nivel local, puesto que sitúa a las entidades locales en una posición de liderazgo en materia de desarrollo de políticas de transparencia y gobierno abierto.

## 2. NUEVO CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL

El Código de Buen Gobierno Local de la FEMP (2009) permitió la introducción formal de la ética en el ámbito local, convirtiéndose en el primer instrumento normativo de carácter potestativo que tradujo los principios de buen gobierno en obligaciones concretas. Sin embargo, el actual marco normativo, las demandas de la ciudadanía, la evolución de las nuevas tecnologías y la web 2.0, han promovido su revisión y posterior actualización a través de una nueva versión de reciente aprobación<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> El nuevo Código de Buen Gobierno Local fue aprobado en la Junta de Gobierno de la FEMP el 24 de marzo de 2015.

El Nuevo Código de Buen Gobierno Local<sup>69</sup> (FEMP, 2015b) pone el énfasis en dos cuestiones esenciales. En primer lugar, en los principios del buen gobierno local, estableciendo que los sujetos destinatarios del Código ajustarán la gestión de los intereses públicos y el desarrollo de la democracia participativa para la realización efectiva del gobierno abierto como mínimo en los términos de la normativa vigente en cada momento. En segundo lugar, en las medidas para la mejora de la democracia participativa, indicando que se procurará la mejora de los procedimientos de codecisión y la transformación de las estructuras burocráticas desactualizadas para la consecución de una gobernanza real mediante un modelo de gobierno abierto, participativo, transparente y equitativo. Entre sus objetivos específicos pueden señalarse los siguientes: i) la integración de la dimensión ética en el funcionamiento de las entidades locales; ii) la incorporación de estrategias de actuación para la consecución de una democracia real y efectiva a través de la participación ciudadana y el gobierno abierto; iii) la definición de las líneas básicas que deben presidir la gestión pública local; iv) el refuerzo de los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades públicas; y v) la delimitación de las pautas para las adecuadas relaciones internas entre los ámbitos de gobierno y administración.

Uno de los aspectos más novedosos del nuevo Código hace referencia a la irrupción de las nuevas tecnologías que ofrece las web 2.0 en el ámbito de la administración local. El texto reconoce que la utilización masiva por parte de la ciudadanía supone un desafío para los usos y costumbres empleados en la participación ciudadana hasta el momento. Por ello, recomienda la incorporación de las administraciones públicas locales a este fenómeno social mediante la puesta en marcha de iniciativas innovadoras que adapten la participación, tal y como se conoce hasta ahora, a una participación multicanal 2.0 que aproveche las nuevas oportunidades de relación con la ciudadanía.

---

<sup>69</sup> Véase en documentos anexos.

### 3. EL TRABAJO EN RED EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

#### A) La Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación

La reciente iniciativa de creación de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP<sup>70</sup> abre una nueva etapa que exige dotar a las entidades que se integran en ella, de las herramientas e instrumentos necesarios para desarrollar adecuadamente sus obligaciones legales y sus compromisos éticos en materia de gestión pública en general, y con los ciudadanos en particular. La Red nace con vocación de promover la innovación y mejorar la relación entre gobiernos locales y ciudadanos bajo los principios del gobierno abierto y mediante el intercambio de experiencias, el trabajo en red y el desarrollo de proyectos conjuntos (FEMP, 2015a)

En base a estas premisas, sus objetivos generales se desarrollan en tres ámbitos: los gobiernos locales, la ciudadanía y el valor público. En el marco de los gobiernos locales, el objetivo es promover el avance de las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana en el conjunto de las entidades locales españolas para lograr marcos de convivencia estables que favorezcan el desarrollo económico y social de los territorios. En relación al segundo ámbito, la ciudadanía, el objetivo de la Red es facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación a los ciudadanos a través de su implicación y compromiso con la acción pública. Finalmente, en cuanto al valor público, la Red persigue incrementar la confianza ciudadana en los gobiernos locales, asumiendo compromisos de buen gobierno y de recopilación de prácticas ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, participación en la toma de decisiones y evaluación de los servicios públicos.

---

<sup>70</sup> La Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana, aprobada el 24 de febrero de 2015, se constituye de conformidad con lo previsto en el Artículo 44 de los Estatutos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local. Podrán ser Socios Titulares de la Red todas las Entidades Locales integradas en la FEMP, que manifiesten, mediante el correspondiente acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, su voluntad expresa de adherirse a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana y de cumplir sus fines estatutarios. El número de entidades locales adheridas a la Red a fecha de 30 de abril de 2015 es de noventa y una.

Estos objetivos generales se concretan en varios objetivos específicos. Entre ellos destacan aquellos que persiguen alinear estrategias y recursos entre gobiernos locales y otros niveles de la administración a través de convenios de colaboración con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y con la Administración General del Estado para la participación en un futuro Plan de Acción de España en materia de gobierno abierto. Finalmente, en relación a la ciudadanía la Red tiene como objetivos específicos colaborar con asociaciones, organizaciones no gubernamentales y movimientos cívicos en el ámbito de la transparencia para conocer sus perspectivas y proyectos y explorar fórmulas de colaboración.

A la nueva Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana se han adherido hasta el momento ciento diecinueve gobiernos locales de diferente tamaño de población<sup>71</sup>. El Plan de trabajo de esta nueva red para el próximo mandato municipal puede constituir una referencia para comenzar a establecer una mayor correlación entre las políticas de transparencia y las de participación ciudadana.

## **B) La Red de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia**

La Red de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia<sup>72</sup> se constituyó en el marco de la Asociación Vasca de Municipios (EUEDEL) el 30 de enero de 2013, meses antes de que se aprobara la LTAIBG. Entre sus objetivos destacan: i) facilitar a los ayuntamientos un espacio de intercambio de conocimientos, buenas prácticas y estrategias; ii) aportar metodologías, herramientas y materiales; y iii) acompañar en el impulso de la transparencia en sus respectivos gobiernos y administraciones locales. Las líneas de trabajo en las que se ha centrado la Red han permitido difundir experiencias municipales, diseñar una estrategia de partida y un modelo de gestión de la transparencia municipal partiendo de las nuevas obligaciones y plazos fijados por la Ley de Transparencia. El compromiso de la red con la transparencia ha dado como resultados los siguientes instrumentos para los ayuntamientos vascos:

---

<sup>71</sup> Véase en documentos anexos.

<sup>72</sup> A fecha de 1 de mayo de 2015 la Red de Ayuntamientos vascos por la transparencia está compuesta por treinta y un ayuntamientos.

- *Guía para la puesta en marcha y gestión de la transparencia municipal.* Esta guía se estructura en base a las acciones concretas que es preciso llevar a cabo por un ayuntamiento una vez definida la estrategia en materia de transparencia, incluyendo recomendaciones para su puesta en marcha.
- *80 Buenas prácticas para lograr un ayuntamiento transparente.* Publicación que incluye una recopilación de ejemplos de transparencia desarrollados con éxito por entidades locales españolas.
- *Hoja de Ruta hacia la Transparencia: Estrategia y herramientas para construir un ayuntamiento más transparente.* Documento que incorpora un modelo de cuestionario para la ciudadanía, fórmulas de autoevaluación, indicadores de priorización y recomendaciones para presentar información económico-financiera de forma clara y comprensible.

El compromiso de los ayuntamientos vascos con las políticas de transparencia materializado en una acción colectiva liderada por EUDEL pone de manifiesto la relevancia del trabajo en red en el ámbito local que permite sumar esfuerzos en la formulación de políticas de transparencia en el ámbito local.

### III. POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO LOCAL ESPAÑOL: UN ANÁLISIS CUANTITATIVO

#### 1. PRESENTACIÓN

Desde el año 2012 hasta el momento presente, un número creciente de gobiernos locales en España ha puesto en marcha políticas de gobierno abierto. Este nuevo modelo parte del reconocimiento de que el gobierno de la ciudad no está sólo en el ayuntamiento pero que los gobiernos locales están en disposición de abordar transformaciones en la gestión a través de la mejora de sus niveles de transparencia, de la participación en redes sociales y del impulso de plataformas que permitan dialogar con la ciudadanía a través de las ventajas que brinda Internet y la web 2.0.

El análisis cuantitativo sobre las políticas de gobierno abierto en el ámbito local tiene como finalidad ofrecer información sobre el grado de desarrollo de políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana en las entidades locales españolas; delimitar en qué medida un nivel efectivo de transparencia favorece dinámicas de participación y colaboración ciudadana; e identificar los retos a los que se enfrentan los gobiernos locales en materia de gobierno abierto. El marco del análisis empírico parte de una serie de premisas sobre el desarrollo de políticas de gobierno abierto en el ámbito local:

- La proximidad en la gestión pública y política sitúa a los ayuntamientos en una posición privilegiada para llevar a cabo políticas de gobierno abierto.
- Las obligaciones derivadas de la LTAIBG, así como las de las normativas autonómicas existentes, crean un contexto favorable para la puesta en marcha de acciones en la materia.
- Los gobiernos locales aspiran a mejorar los procesos de legitimación de su acción de gobierno, desde el convencimiento que la administración pública debe estar sometida a una evaluación continua.
- El trabajo en red, en el que los gobiernos locales tienen gran experiencia, fomenta la difusión y réplica de iniciativas de gobierno abierto.
- Los instrumentos autonómicos, nacionales e internacionales influyen en el desarrollo de políticas de gobierno abierto a nivel local.

A través del análisis cuantitativo sobre políticas de gobierno abierto en el ámbito local español se pretende validar las hipótesis específicas planteadas en la presentación de la investigación:

- Hipótesis 1: El alto grado de desafección ciudadana en las instituciones y en el sistema democrático es el punto de partida de la elaboración de políticas de gobierno abierto en el ámbito local.



- Hipótesis 2: El creciente número de gobiernos locales que han puesto en marcha políticas de transparencia y gobierno abierto es fruto de un proceso de isomorfismo institucional.
- Hipótesis 3: La adopción de políticas de gobierno abierto es consecuencia de acciones de cálculo electoral.

Asimismo, el estudio también trata de verificar una serie de cuestiones adicionales:

- Los avances en políticas de transparencia y buen gobierno responden a la aparición de nueva legislación.
- El desarrollo de políticas de transparencia tiene un efecto directo en la formulación de dinámicas de participación y colaboración ciudadana
- Las ciudades con mayor gasto público por habitante llevan a cabo más iniciativas en materia de gobierno abierto.
- Los ayuntamientos gobernados por partidos políticos progresistas son más sensibles a la puesta en marcha de políticas de gobierno abierto.

## 2. DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA

El gobierno abierto, como política pública emergente en el ámbito local español que promueve la transparencia y el acceso a la información, la participación ciudadana y la colaboración entre múltiples actores, requería de un análisis cuantitativo que permitiera comprobar la evolución producida en torno al mismo desde la incorporación de España al OGP, así como demostrar de qué manera la formulación de este tipo de políticas ha emergido en la esfera local consecuencia de la grave desafección ciudadana que también ha afectado a los niveles locales de gobierno.

Para llevar a cabo el estudio, se ha diseñado un cuestionario *on line* cerrado sobre ‘Políticas de Gobierno Abierto en el ámbito local español’<sup>73</sup>, cuya finalidad es analizar si

---

<sup>73</sup> Véase en documentos anexos.

los gobiernos locales están poniendo en marcha acciones que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información y si se incorporan nuevos medios de participación y colaboración haciendo uso de las nuevas tecnologías y de los cauces de comunicación que brinda la web 2.0. En consecuencia, los objetivos de la encuesta son:

- Mejorar el conocimiento sobre el desarrollo de políticas de transparencia, participación y colaboración en las entidades locales españolas;
- Analizar en qué medida un nivel efectivo de transparencia y apertura informativa favorece dinámicas de participación y colaboración ciudadana;
- Identificar los instrumentos más utilizados por parte de los gobiernos locales en materia de gobierno abierto;
- Señalar líneas de mejora en el desarrollo de iniciativas de gobierno abierto en el ámbito local y futuros proyectos de investigación.

El cuestionario se compone de veintitrés preguntas, estructuradas en cuatro bloques temáticos para facilitar a los encuestados su participación. Así, el primer bloque está dedicado a recabar los datos básicos de la entidad local; el segundo trata las cuestiones relativas a transparencia, acceso a la información y buen gobierno; el tercero comprende los temas de participación, colaboración y redes sociales; y finalmente la encuesta se cierra con unas cuestiones generales sobre gobierno abierto. Adicionalmente, se ha incorporado una pregunta abierta opcional para recabar comentarios que puedan incrementar el conocimiento sobre la materia. El periodo de recolección de información se llevó a cabo entre los meses de enero y marzo de 2015.

El marco jurídico para emprender políticas de gobierno abierto a nivel local encuentra su base fundamental en la LTAIBG y en las respectivas normativas autonómicas existentes en materia de transparencia y participación. Ello, habilita competencialmente a las administraciones para formular políticas de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno, independientemente del tamaño de su población. Asimismo, completan este marco normativo el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local que

establece que los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos y el artículo 25.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, según el cual corresponde a los ayuntamientos la promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

No obstante, aunque la base competencial afecte a todos los municipios independientemente del tamaño de su población, el estudio se ha centrado en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, pues son éstos los que están en disposición de prestar por sí mismos los servicios de administración electrónica, en base a los artículos 31.2.a) y 36.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (texto consolidado con las modificaciones introducidas por el artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local):

Artículo 31.2.a) *‘Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en particular: asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal’.*

Artículo 36.1.g) *‘Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que les atribuyan, en este concepto, las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso: g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes’.*

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2014 el número de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en España asciende a un total de 399, de los cuales la presente encuesta recoge los resultados de 120 ayuntamientos. Así pues, los gobiernos locales encuestados representan un 30% del número total de ciudades españolas de más de 20.000 habitantes, con una población de 19.080.013 ciudadanos, cifra que representa un 41,06% de la población total de España.

**Figura 30. Fórmula utilizada para calcular el tamaño de la muestra**

$\frac{\frac{z^2 \times p(1-p)}{e^2}}{1 + \left( \frac{z^2 \times p(1-p)}{e^2 N} \right)}$	
N	Universo, número total de individuos de la población objeto de estudio (en este caso los 399 municipios españoles de más de 20.000 habitantes)
e	Margen de error (como decimal). Porcentaje que describe lo cerca que las respuestas obtenidas están del “valor real” de la población. Cuanto menor es el margen de error, más cerca se está de tener la respuesta exacta a un nivel de confianza determinado. Para la encuesta de la investigación, se considera apropiado un margen de error del 8%.
z	Mide la cantidad de desviaciones estándar de una proporción determinada respecto de la media. Para un nivel de confianza del 95 %, se utiliza 1.96 como valor de z.
p	Proporción que se espera encontrar. En este caso, y como regla general, se usa p=0,5

Fuente: Datos obtenidos a través de la plataforma *on line* a través de la que se realizó la encuesta (*survey monkey*)

Como puede comprobarse en la figura 30 el nivel de confianza obtenido en la encuesta es del 95% con un margen de error del 8%. Así pues, para cumplir estos parámetros en la primera investigación sobre el grado de implantación del gobierno abierto a nivel local en España ha sido necesaria una muestra de 120 municipios de más de 20.000 habitantes, lo que implica que los datos obtenidos en la investigación son representativos de los gobiernos locales españoles más habitados.

A pesar del innegable valor de los resultados ofrecidos por la encuesta, se debe hacer notar la posible existencia de un sesgo en el número de respuestas ofrecidas por aquellos ayuntamientos más activos en materia de gobierno abierto. Se puede deducir de

los resultados obtenidos que las ciudades más dinámicas en este ámbito poseen un mayor incentivo para contestar un cuestionario de estas características, puesto que les permite dar a conocer y poner en valor los avances realizados hasta la fecha.

Por el contrario, se puede inferir que los ayuntamientos que todavía no han emprendido este tipo de políticas o se encuentran en una fase inicial tienen una motivación menor por hacer pública la información relativa a sus iniciativas en materia de transparencia y gobierno abierto. Se estima, en todo caso, que los datos recabados ofrecen información sustancial sobre un número importante de ayuntamientos, certifican los avances que se han producido en este ámbito, identifican tendencias de cara al desarrollo de nuevos instrumentos y muestran obstáculos cuya superación será básica para implantar o mejorar los sistemas de gobierno abierto en el nivel local.

A continuación se ofrece información básica de los resultados de la consulta en relación a las ciudades encuestadas, la distribución de respuestas por comunidades autónomas, por tramos de población y por partidos políticos, hecho que permite obtener una primera perspectiva de los datos que se han obtenido.

**Figura 31. Gobiernos locales que han respondido al cuestionario (+20.000 hab.)**

<b>Gobiernos locales (+20.000 habitantes)</b>		
A Coruña	Gavà	Palma del Río
Alaquàs	Getafe	Pamplona
Albacete	Getxo	Parla
Alcobendas	Gijón	Portugalete
Alicante	Girona	Puente Genil
Almonte	Granollers	Quart de Poblet
Arganda del Rey	Guadaira, Alcalá de	Rubí
Aranjuez	Huelva	Sabadell

Arona	Illescas	Salamanca
Ávila	Irún	San Cristóbal de la Laguna
Avilés	Jaen	San Fernando de Henares
Badalona	Jerez de la Frontera	San Pedro del Pinatar
Baena	L'Hospitalet de Llobregat	San Sebastián de los Reyes
Barberà del Vallès	La Pobla de Vallbona	Sant Cugat del Vallès
Barcelona	Leganés	Sant Vicenç dels Horts
Basauri	León	Santa Coloma de Gramenet
Benidorm	Lleida	Santa Cruz de Tenerife
Bilbao	Logroño	Santander
Blanes	Lorca	Santiago de Compostela
Burgos	Lucena	Sitges
Cáceres	Lugo	Soria
Calatayud	Madrid	Talavera de la Reina
Calp	Majadahonda	Tías
Cambrils	Málaga	Torrejón de Ardoz
Cartagena	Manlleu	Torrent
Castelldefels	Manresa	Tudela
Castellón de la Plana	Marbella	Valdemoro
Catarroja	Mataró	Valencia
Ciudad Real	Mérida	Valladolid
Córdoba	Mijas	Vigo
Cornellà de Llobregat	Miranda de Ebro	Vila-seca
Cuenca	Molina de Segura	Viladecans
Culleredo	Mollet del Vallès	Vilanova i la Geltrú

Donostia/ San Sebastián	Montcada i Reixac	Villa de Agüimes
El Ejido	Móstoles	Villanueva de la Serena
El Prat de Llobregat	Murcia	Villena
El Puerto de Santa María	Onda	Vitoria-Gasteiz
Esplugues de Llobregat	Oviedo	Zamora
Fuengirola	Paiporta	Zaragoza
Gandía	Palma de Mallorca	Zarautz

**Figura 32. Resumen de participación por Comunidades Autónomas**

<b>COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>Ayuntamientos +20.000 hab</b>	<b>Encuestados +20.000 hab</b>	<b>Porcentaje de respuestas por CCAA</b>
Andalucía	81	16	19,8%
Aragón	4	2	50%
Asturias	7	3	42,9%
Baleares	13	1	7,7%
Canarias	28	5	17,9%
Cantabria	5	1	20%
Castilla - La Mancha	15	5	33,3%
Castilla y León	15	8	53,3%
Cataluña	64	28	43,8%
Extremadura	7	3	42,9%
Galicia	21	5	23,8%
La Rioja	2	1	50%

Madrid	34	13	38,2%
Murcia	17	5	29,4%
Navarra	3	2	66,7%
País Vasco	18	8	44,4%
Comunidad Valenciana	65	14	21,5%
TOTAL	399	120	

Como puede observarse en la figura 32, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia han sido las autonomías que han ofrecido un mayor número de respuestas. Además, cabe destacar que se han obtenido datos de más del 40% de los municipios mayores de 20.000 habitantes en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Navarra y el País Vasco.

Asimismo, es importante señalar que en el caso del País Vasco y Castilla León, han participado en el cuestionario todas las capitales de provincias, de modo que aunque no pueda establecerse una correlación demostrada entre las políticas de las respectivas Comunidades Autónomas y el nivel de respuesta de los ayuntamientos radicados en su territorio —puesto que requería de una análisis que rebasa a esta investigación— sí se desea llamar la atención que de las Comunidades Autónomas señaladas, Castilla y León, Cataluña, y País Vasco, lideran el ranking del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) que Transparencia Internacional viene publicando desde el año 2010, mientras que Andalucía, Madrid y Valencia, actualmente son las autonomías afectadas por los casos de corrupción más importantes del país en los últimos años.



**Figura 33. Distribución de respuestas por rango de población**

Rango de población	Total ciudades España	Resultados encuesta	Porcentaje
20.000 – 75.000	301	53	17,6%
75.000 – 200.000	69	43	62,3%
200.000 – 500.000	23	19	82,6%
+500.000	6	5	83,3%

En relación a los resultados obtenidos atendiendo a los tramos de población se constata que aunque el porcentaje de respuesta de ayuntamientos de entre 20.000 y 75.000 habitantes sea menos representativo, se observa una tendencia positiva a medida que aumenta la población. Preliminarmente se percibe que a mayor número de habitantes, más proclive es el gobierno local a formular políticas de transparencia y gobierno abierto.

**Figura 34. Distribución de respuestas por partido político**

PARTIDOS POLÍTICOS	GOBIERNOS LOCALES +20.000 HAB
PP	62
PSOE - PSC	32
CIU	9
PNV	3
CC	3
UPN	2
BILDU	2
ESQUERRA	2
IU	1

FAC	1
ICV	1
LOS VERDES	1
Independiente	1
TOTAL	120

En relación a la distribución por partidos políticos, es preciso realizar una consideración previa, y es que el periodo de análisis coincide con el mandato 2011-2015, en el que 62 ayuntamientos de los 120 encuestados han estado gobernados por el PP, obteniendo un porcentaje de respuesta de un 24%, frente a los 32 gobernados por el PSOE, alcanzando un porcentaje de respuesta de un 25%. De ahí que tomando como referencia los datos de los dos principales partidos del espectro nacional no se pueda obtener una conclusión definitiva sobre si la implementación de políticas de gobierno abierto en el ámbito local está vinculada a una sensibilidad ideológica determinada.

### 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

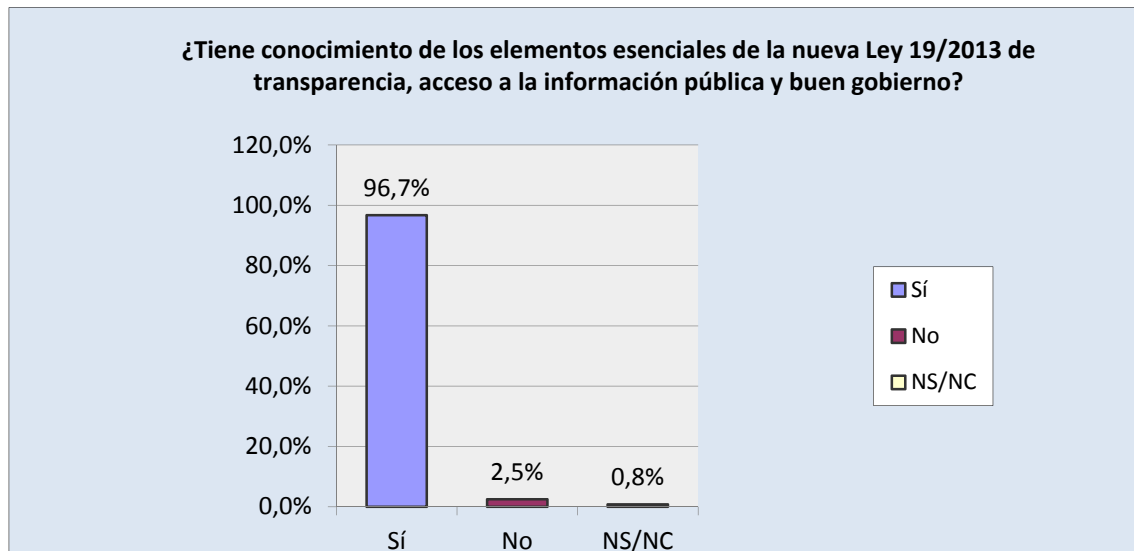
#### A) Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno

En el bloque sobre ‘Transparencia, acceso a la información y buen gobierno’ se plantearon cuestiones sobre el nivel de conocimiento de la LTAIBG, los órganos responsables de la materia en el ayuntamiento, la existencia de normativa específica, la publicación de portales de transparencia, así como, el grado de desarrollo existente y la fecha en la que se iniciaron las políticas en materia de transparencia y buen gobierno.

La figura 35 constata como la gran mayoría de encuestados (96,67%) afirma tener conocimiento de la LTAIBG. La norma de aplicación a todos los niveles de la administración establece en su Disposición Final Novena que la regulación referida a la transparencia y derecho de acceso a la información entrará en vigor a los dos años desde la aprobación de la misma. Sin embargo, numerosos gobiernos locales tienen plenamente aplicada la norma en lo relativo a publicidad activa y operan de forma normalizada bajo

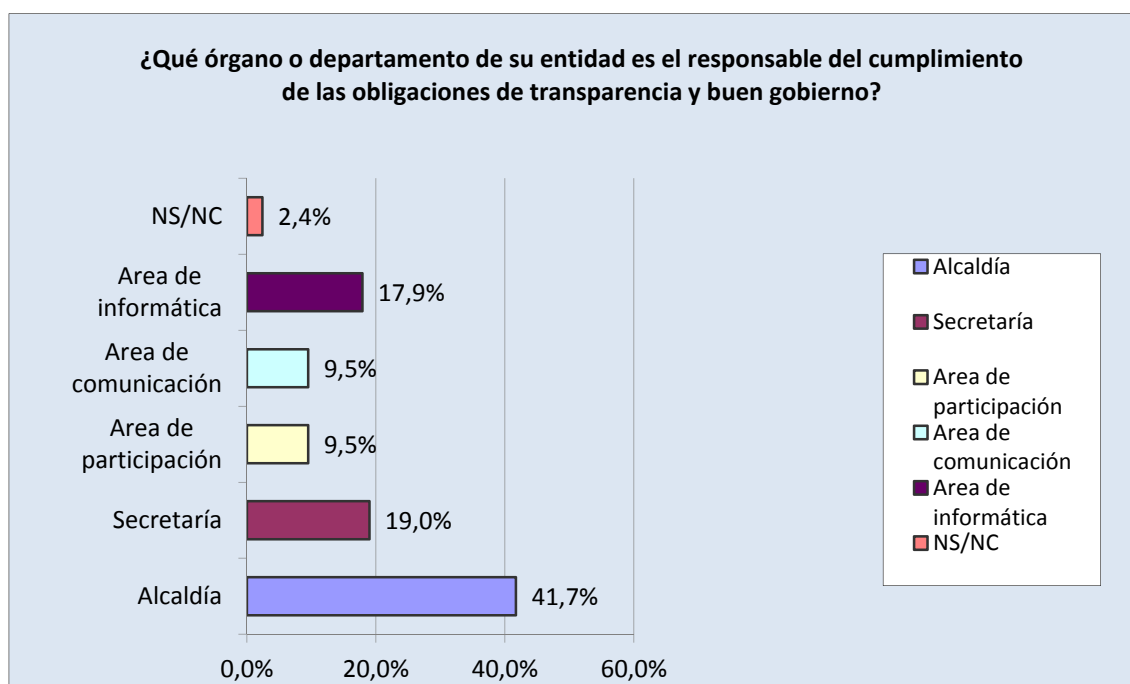
tal paradigma desde hace más de un año, tal y como se señala en el epígrafe tres de este capítulo.

**Figura 35. Conocimiento de la Ley 19/2013**



En relación al órgano responsable de las políticas de transparencia y buen gobierno en los ayuntamientos encuestados, se observa que hay una multiplicidad de departamentos responsables de la materia. La mayoría de los gobiernos locales (41,7%) sitúan las políticas de transparencia y buen gobierno en Alcaldía. En el 19% de los casos es la Secretaría quien se hace cargo de ellas mientras que un 17,9% las ubica en el área de informática como área responsable de implementar las medidas de gobierno abierto. Finalmente, en el 9,5% de los ayuntamientos recae en el área de comunicación, y otro tanto (9,5%) en el área de participación. De estos datos puede deducirse que se trata de un ámbito relativamente nuevo y que, en muchos casos, depende orgánicamente del área de Alcaldía. Sin embargo, esta circunstancia también constata que las políticas de transparencia son transversales y deben ser de aplicación en toda la organización, de ahí que su ubicación en el ámbito de Alcaldía muestre como se han insertado en el órgano que se encuentra al frente de la administración política del gobierno de la ciudad.

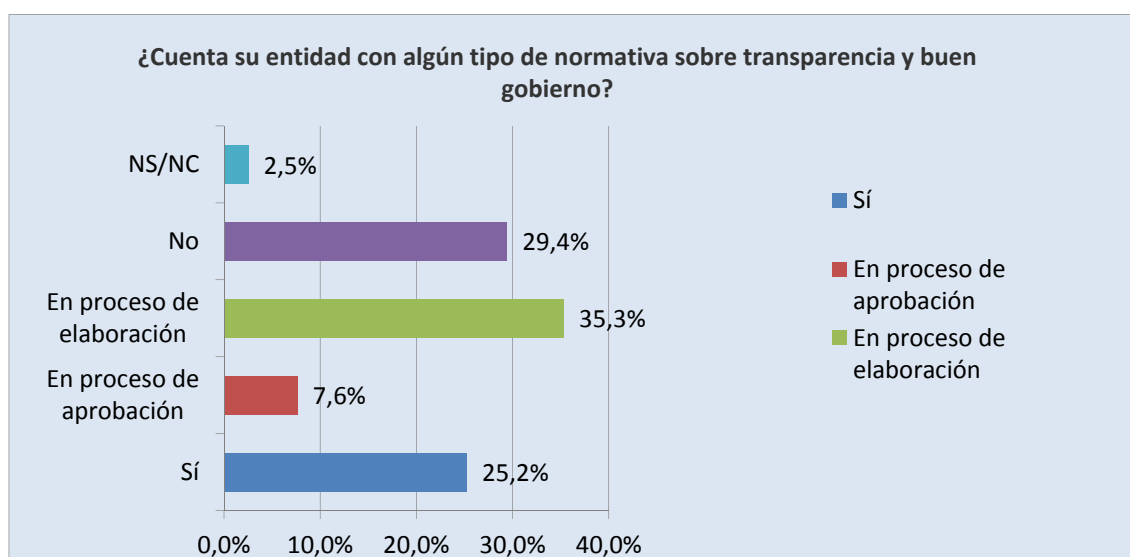
**Figura 36. Órgano responsable políticas transparencia y buen gobierno**



El hecho de que en el 17,9% de los casos las políticas de gobierno abierto estén enmarcadas en el área de informática puede responder a la necesaria puesta en marcha de procesos de gestión de la información, en los que las nuevas herramientas tecnológicas con las que hoy cuentan las administraciones locales son esenciales para su mejor desempeño. Por otra parte que un 9,5% de estas políticas se sitúen en el área de participación demuestra la inherente vinculación entre las políticas de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana. Cabe destacar que a la hora de responder a esta cuestión, un número significativo de ayuntamientos ha especificado el área o departamento en el que se ubican las políticas de transparencia y buen gobierno. El amplio abanico de especificaciones incluye diversos ámbitos, tales como áreas de modernización, calidad e innovación, departamentos de régimen interior y planificación, área de servicios jurídicos, órganos de información y atención al ciudadano y áreas de nuevas tecnologías. También es interesante señalar que diversos ayuntamientos han señalado que dichas políticas no sólo se encuentra ubicadas en un área, sino que de la misma se derivan competencias compartidas por diferentes concejalías, mientras otras han indicado que

están pendientes de decidir cuál debe ser el órgano competente. De las 120 respuestas, solo una señaló la existencia de una concejalía de gobierno abierto (Quart de Poblet, Valencia) como responsable de las políticas de transparencia del ayuntamiento (Cuenca et al, 2013). Es de suponer que, a medida que se generalicen las políticas de gobierno abierto, éstas adquirirían una posición transversal y tenderán a ser aplicadas en todas las áreas de las corporaciones municipales.

**Figura 37. Normativa sobre transparencia y buen gobierno**

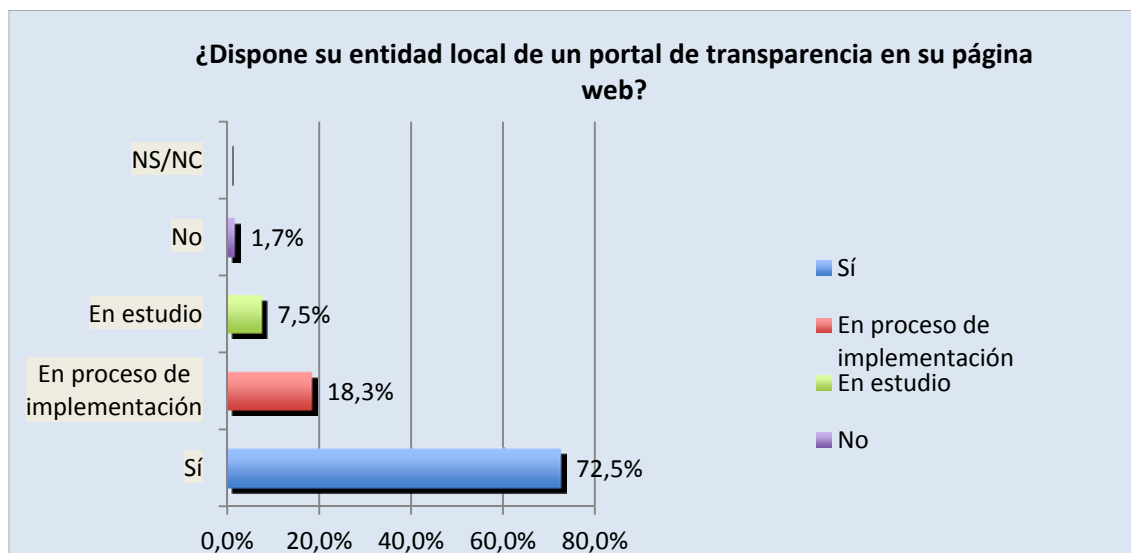


A la pregunta sobre si el ayuntamiento cuenta con algún tipo de normativa sobre transparencia y buen gobierno, los resultados de la encuesta revelan que un 25,2% de los casos, los ayuntamientos ya cuentan con normativa propia en este ámbito. Destaca que, en el 7,6% de los gobiernos locales encuestados, este tipo de normativa está en proceso de aprobación, mientras que en la mayoría de los casos (35,3%) el gobierno local se encuentra en fase de elaboración. Por otro lado, prácticamente un tercio de las respuestas (29,4%) indica que un porcentaje importante de los gobiernos locales aún no dispone de una normativa sobre transparencia y buen gobierno, ni ha comenzado el proceso de elaboración de la misma.

En este punto se debe tener en cuenta que, aunque de los resultados de la muestra obtenida casi un 70% de ayuntamientos cuentan con normativa en la materia o se encuentran en proceso de elaboración y/o aprobación, el sesgo mencionado —es

presumible que los ayuntamientos que no han avanzado en materia de transparencia y gobierno abierto sean menos proclives a contestar la encuesta— no permita extrapolar ese porcentaje al resto de ayuntamientos, en especial a aquellos que se encuentran en el tramo entre 20.000 y 75.000 habitantes. En este aspecto, la Ordenanza Tipo de la FEMP parece ser un elemento importante que está facilitando la elaboración de normativas específicas y permita cumplir con el plazo fijado para ejecutar las obligaciones de transparencia y el derecho de participación y acceso a la información de los ciudadanos que se derivan de la LTAIBG. El modelo elaborado por la FEMP puede animar a los ayuntamientos a iniciar un proceso interno de adaptación para desarrollar la Ley y plasmar los resultados finales en una ordenanza. Al mismo tiempo, parece ser un incentivo para iniciar la implantación en las entidades locales de estas políticas “con un grado de anticipación y eficacia muy superior al que se derivaría de un escenario huérfano de Ordenanzas” según reza el texto, con el doble objetivo de desarrollar la Ley y de fomentar la efectividad del principio de transparencia (FEMP, 2014b).

**Figura 38. Disponibilidad portal transparencia web**



Como complemento de los datos obtenidos en la pregunta sobre la existencia de normativa local en materia de transparencia y buen gobierno, la figura 38 muestra como la mayoría de ayuntamientos (72,5%) afirma disponer de un portal de transparencia en su página web. Además, un 18,3% afirma estar inmerso en el proceso de implementación de

esta herramienta. Por lo tanto, un 90,8% de los gobiernos locales encuestados dispone, o va a disponer en breve, de un portal de transparencia en su página web. Entre la información publicada, o en proceso de ser publicada en el portal, las ciudades encuestadas incluyen las siguientes cuestiones:

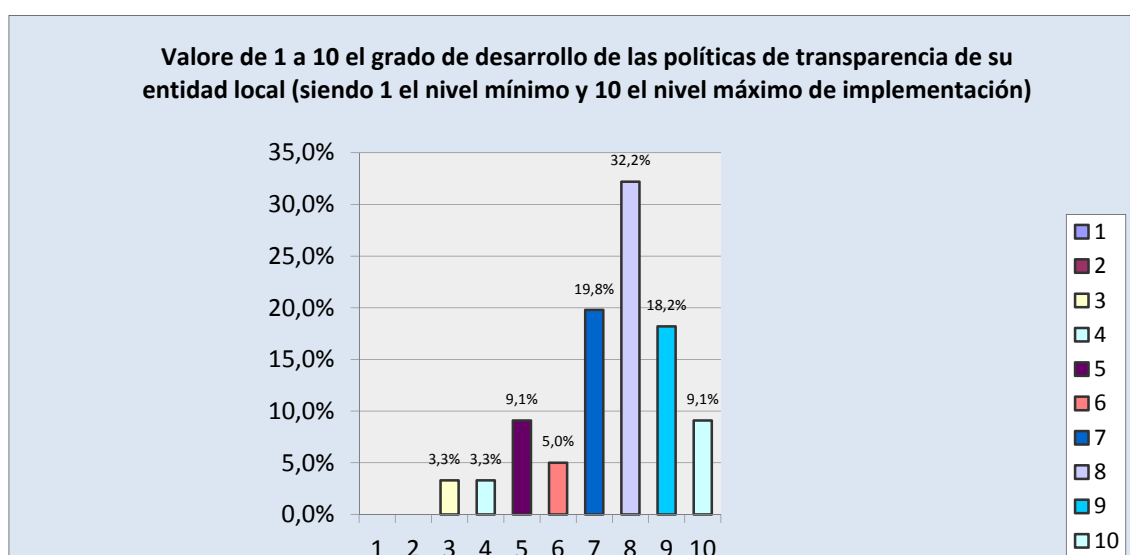
- Estructura organizativa (97,3%)
- Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos (76,1 %)
- Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento (46%)
- Normativa, directrices, acuerdos y circulares (95,6%)
- Contratos y convenios suscritos (90,3%)
- Subvenciones y ayudas públicas (85,8%)
- Presupuestos y cuentas anuales (97,3%)
- Retribuciones de los altos cargos (86,7%)
- Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos (57,5%)

Puede comprobarse que existen diferencias poco significativas en términos porcentuales entre los diversos ítems publicados, excepto en lo que se refiere a la evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia (46%) y las declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos (57%). Asimismo, muchos de los encuestados señalan que se procura incorporar la información correspondiente con los indicadores del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) de Transparencia Internacional o el sello ‘Infoparticipa’ de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En este punto cabe señalar que a finales del mes de abril de 2015, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la FEMP han firmado un acuerdo marco de colaboración resultado de un estudio previo llevado a cabo por la Federación que ha favorecido ese marco de cooperación intergubernamental (FEMP, 2015c). El convenio se encuentra destinado a promover y facilitar a las corporaciones locales el uso de la tecnología desarrollada en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.<sup>a</sup> Los datos de la FEMP revelan que en general, la disponibilidad de páginas web en los ayuntamientos es casi generalizada. Así el 85% de los ayuntamientos que

respondieron a la encuesta cuentan con página web, sin embargo, en relación a la puesta en marcha de portales de transparencia los resultados indican que sólo un 16% declaran tenerlo. Asimismo, en cuanto a la publicación de datos abiertos apenas un 9% afirma disponer de este tipo de datos. En los tres casos son las ciudades de más de 75.000 habitantes las que cuentan con un mayor desarrollo de estos instrumentos que favorecen las políticas de transparencia. En el caso de existencia de páginas web se alcanza el 100%, en el de portales abiertos el porcentaje llega casi al 75% mientras que en relación a los datos abiertos el porcentaje sólo alcanza a un 41% (FEMP, 2014a). El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de este acuerdo pondrá a disposición de las entidades adheridas, y sin costes, una plataforma técnica habilitada en el citado Portal que se denominará “Portal de la Transparencia Local”. La adhesión también supone que se gestionará, con los organismos de la Administración General del Estado que posean fuentes de información de modo centralizado, el establecimiento de modelos de intercambio de datos que posibiliten la incorporación automática de la información existente respecto a la administración adherida.

**Figura 39. Valoración del grado de desarrollo de políticas de transparencia**



Un porcentaje importante de los encuestados (32,2%) valora con un 8 sobre 10 el grado de desarrollo de las políticas de transparencia en su institución. Las siguientes notas

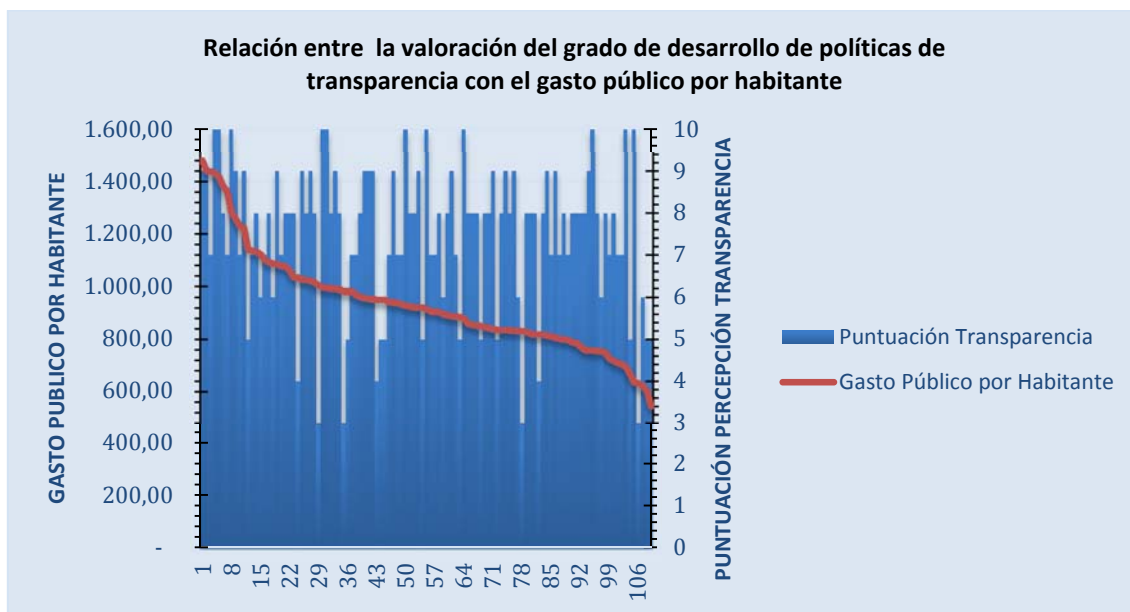


más valoradas son, en ese orden 7, 9 y 10. Por lo tanto, el 80% de los encuestados valora con una nota superior a 7 el grado de desarrollo de las políticas en su entidad local. Llama la atención que, aunque se esté en una fase de desarrollo incipiente de las políticas de transparencia en España, la valoración sea generalmente alta, puesto que la nota media es de 7,5. Quizás, en la conformación de esta percepción, influye la alta puntuación media que los Ayuntamientos alcanzan en el ITA, donde en el año 2014 el resultado fue de 85'2 puntos (sobre 100).

Por otro lado, cabe destacar que se obtienen datos interesantes de analizar las autovaloraciones sobre el grado de desarrollo de las políticas de gobierno abierto en relación a la posición del encuestado en el ayuntamiento, la pertenencia a la comunidad autónoma y al partido político gobernante. En primer lugar, cabe señalar que existen diferencias sensibles entre las puntuaciones que se han otorgado en relación a la posición de encuestados. Se observa que la máxima puntuación es ofrecida por el área de Alcaldía, que puntúan con una media de 8 el grado de desarrollo de las políticas de transparencia de la entidad local. Asimismo, los directivos y empleados públicos valoran con una media de 7,9 y 7,6 respectivamente. En el otro extremo, se encuentran los habilitados nacionales que ofrecen una nota media más baja (6,5). Como puede observarse sólo un 6,6% puntúa por debajo de un 5 a sus ayuntamientos en políticas de transparencia.

Asimismo se ha incorporado en el análisis la relación entre la formulación de políticas de transparencia y el presupuesto local destinado a su desarrollo, teniendo en cuenta que uno de los posibles obstáculos para las mismas podían encontrarse en los recortes y medidas de austeridad y en la capacidad presupuestaria propia de cada ayuntamiento. Aunque dicha relación requeriría de un examen más profundo, en la siguiente figura se expone la relación entre el gasto público por habitante y la autoevaluación del grado de desarrollo de las políticas de transparencia que se otorgan los encuestados.

**Figura 40. Desarrollo de políticas de transparencia y gasto público**



Como puede observarse la figura 40 indica que en la actualidad no existe una clara relación directa entre el gasto público por habitante (presupuesto local) y el desarrollo de políticas de transparencia. Por lo tanto no se puede afirmar que los municipios con mayor presupuestos sean más transparentes. Pero sí cabe señalar que no parece que la cuestión presupuestaria se haya convertido en un obstáculo relevante para la puesta en marcha de políticas de transparencia.

**Figura 41: Valoración de políticas de transparencia por CCAA**

CCAA (número de respuestas)	Valoración media ciudades por CCAA (sobre 10)	ITA 2014 DISTRIBUCIÓN CCAA (sobre 100)
Cantabria (1)	9	97,5
La Rioja (1)	9	93,8
Castilla-León (8)	8,4	91,0
Aragón (2)	8	76,3

Asturias (3)	8	98,8
Cataluña (28)	7,8	92,9
Castilla-La Mancha (5)	7,6	87,7
Navarra (2)	7,5	90,0
País Vasco (8)	7,5	98,3
Andalucía (16)	7,5	77,5
Valencia (14)	7,4	78,7
Murcia (5)	7,4	87,9
Madrid (13)	7,3	90,1
Baleares (1)	7	100
Canarias (5)	6,6	78,8
Extremadura (3)	6	51,3
Galicia (5)	5,6	74,7

Al analizar por Comunidad Autónoma, cabe subrayar que la máxima puntuación se encuentra en Cantabria y La Rioja (con una media de 9), seguidas de cerca por Castilla-León, Aragón y Asturias, con más de 8 sobre 10 en la valoración. Por el contrario, Galicia es (con un 5,6) la comunidad con una valoración más baja en el grado de desarrollo de las políticas de transparencia a nivel local, seguida por Extremadura y Canarias, con un 6 y un 6,6 respectivamente. En la columna de la derecha se incorpora la medición del ITA 2014 por Comunidades Autónomas que permite comprobar en la mayoría de los casos una tendencia similar en relación a la puntuación sobre el grado de desarrollo de las políticas de transparencia.

**Figura 42: Valoración de políticas de transparencia por partido político**

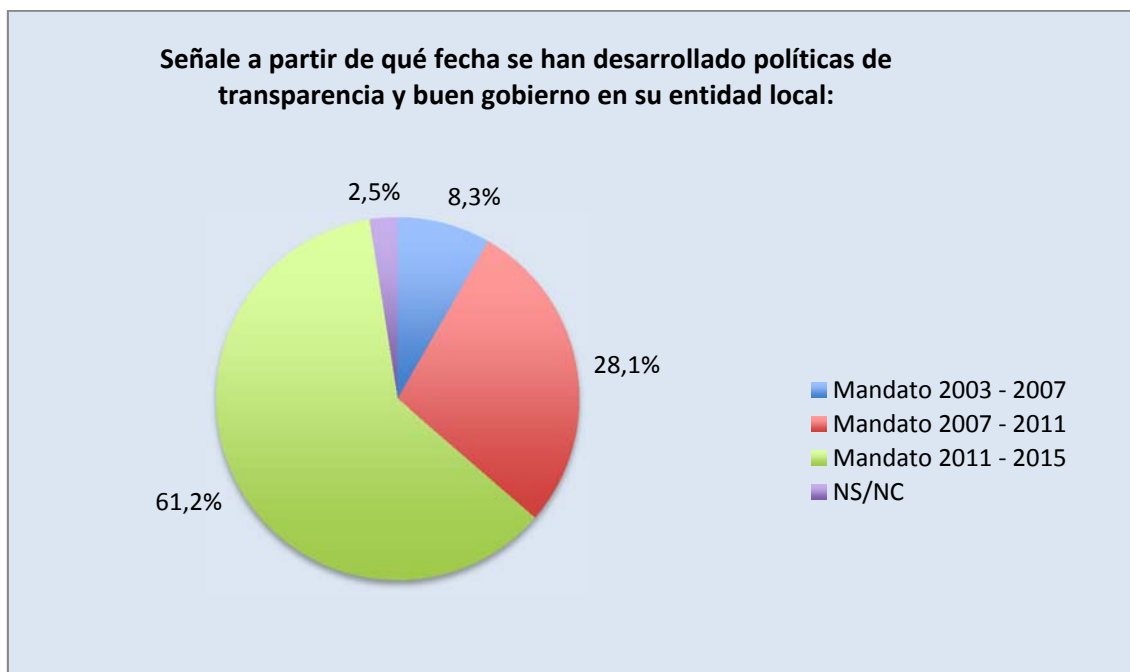
Partido Político (número de respuestas)	Valoración media por partido
CiU (9)	8
PNV (3)	8
FAC (1)	8
Verdes (1)	8
PP (62)	7,6
ERC (2)	7,5
UPN (2)	7,5
PSOE-PSC (32)	7,4
CC (3)	7,3
ICV (1)	7
BILDU (2)	6,5
IU (1)	5
Independiente (1)	4

Finalmente, no se observan diferencias destacables en virtud del partido político de gobierno a nivel local, siendo los partidos nacionalistas (CiU y PNV) los que mejor valoran el grado de desarrollo de sus propias iniciativas en materia de transparencia. Tampoco se advierten grandes diferencias entre los hasta ahora principales partidos a nivel nacional; mientras el PP obtiene una puntuación de 7,6 el PSOE se sitúa cerca, con un 7,4%.

A continuación, como puede apreciarse en la figura 43, la generalización de las iniciativas de transparencia y gobierno abierto en el ámbito local español es reciente y corresponde al mandato local vigente al cierre de este análisis cuantitativo. La mayoría de entidades locales (61,2%) ha iniciado sus iniciativas de buen gobierno en el mandato

2011-2015. Con anterioridad, durante el mandato 2007-2011, un 28,1% de ayuntamientos pusieron en marcha este tipo de actuaciones mientras que sólo el 8,3% las iniciaron durante el mandato 2003-2007. En el periodo anterior al 2011, la inquietud por mejorar la gestión, la calidad de la democracia y avanzar en participación y transparencia tomó como referente el concepto de buen gobierno y como instrumento principal la aprobación de códigos de conducta como el Código de Buen Gobierno Local aprobado en la FEMP en 2009. El buen gobierno y la transparencia empezaron a convertirse en políticas que ciudades de más de 20.000 habitantes incorporaron a su acción de gobierno. Sin embargo, es evidente que ha sido en estos últimos años cuando se ha producido el mayor desarrollo en materia de transparencia en el ámbito local. Tal y como se ha venido exponiendo a lo largo de esta investigación, la Ley de Transparencia marca un antes y un después en la materia, no solo por las obligaciones que de ella se derivan para todas las administraciones (isomorfismo normativo y coercitivo), sino porque la asunción de las mismas se ha producido de manera mucho más generalizada y ágil en la administración local que en los otros niveles de gobierno consecuencia del trabajo en red tan propio de estas administraciones (isomorfismo mimético)

**Figura 43. Mandato de inicio de políticas de transparencia y buen gobierno**



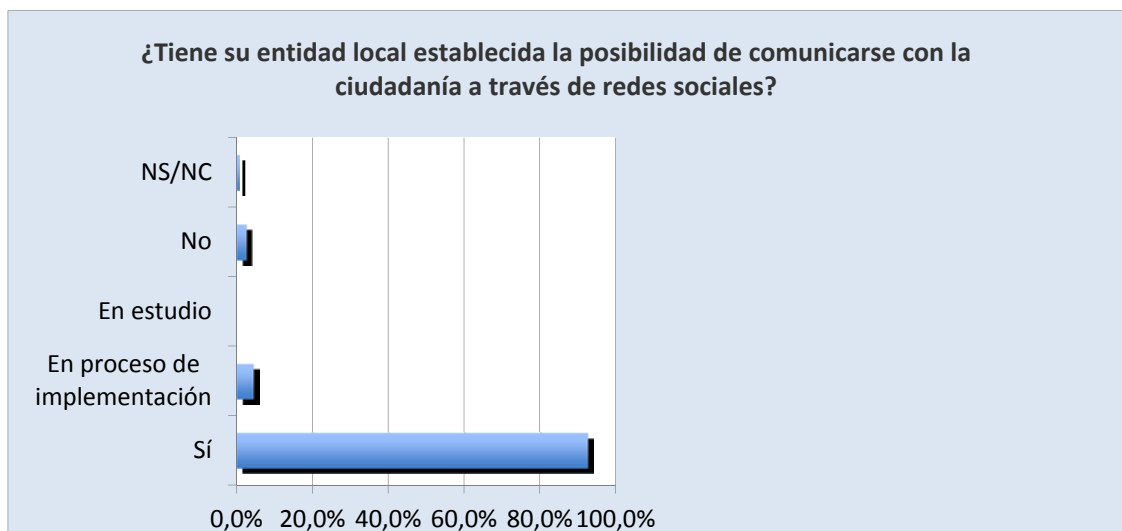
Asimismo, es importante resaltar que dichos avances se han venido produciendo incluso con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, consecuencia de los efectos de la crisis de confianza por parte los ciudadanos, también en su administración más cercana, que ha provocado que políticas de transparencia y gobierno abierto sean una respuesta a dicha desafección, generando una ventana de oportunidad para la puesta en marcha de instrumentos de gobierno abierto en el ámbito local.

## **B) Participación, colaboración y redes sociales**

En el bloque sobre ‘Participación, colaboración y redes sociales’, las cuestiones versan sobre el órgano competente, los medios de comunicación, participación y colaboración con la ciudadanía y la publicación de datos en formato abierto y reutilizable. En este sentido, más del 80% de las entidades locales encuestadas sitúa las políticas de participación en el área de participación. Tan sólo un 12,2% las situó en el área de Alcaldía, coincidiendo que la mayoría de ayuntamientos integrados en ese porcentaje pertenecen al tramo de población de 20.000 a 75.000 habitantes. De los resultados obtenidos, se infiere que las políticas de participación ciudadana encuentran un espacio propio dentro de las diferentes entidades locales, lo cual implica su reconocimiento y asentamiento como política local. No obstante, en un esquema de gobierno abierto, los ejes deberán interrelacionarse e impregnar a toda la organización para que los nuevos mecanismos de conversación y participación local logren ser realmente efectivos. A continuación se ofrecen algunos datos al respecto.

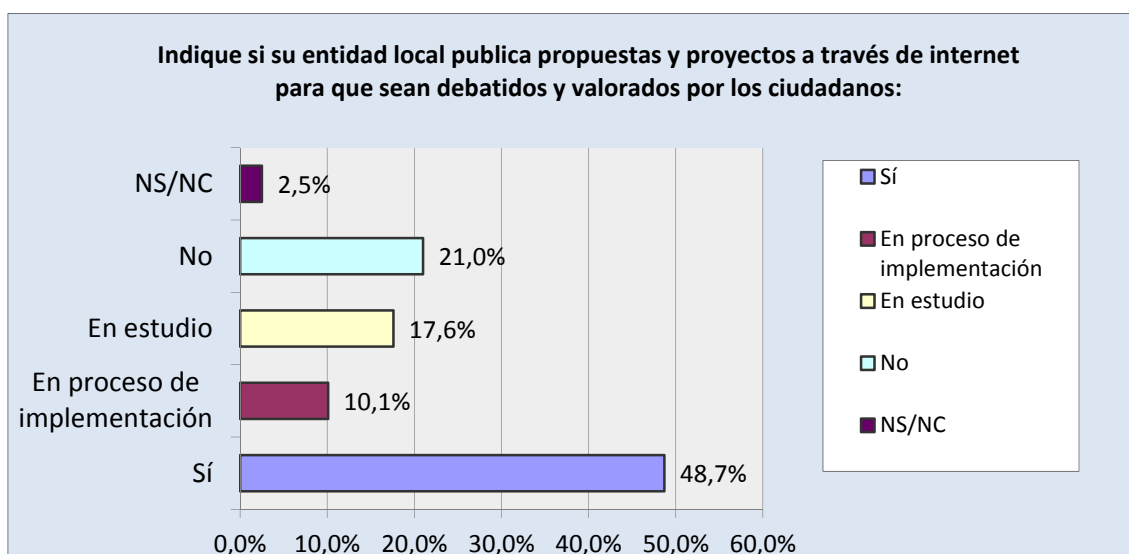
El 92,4% de los gobiernos locales encuestados dispone de instrumentos para comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales como Facebook, Twitter o blogs de la entidad. Por lo tanto, a pesar de lo reciente de las políticas de transparencia y gobierno abierto, 9 de cada 10 de los ayuntamientos encuestados ya disponen de ese tipo de instrumentos (a pesar de que seguramente pueden ser perfectibles).

**Figura 44. Comunicación vía redes sociales**



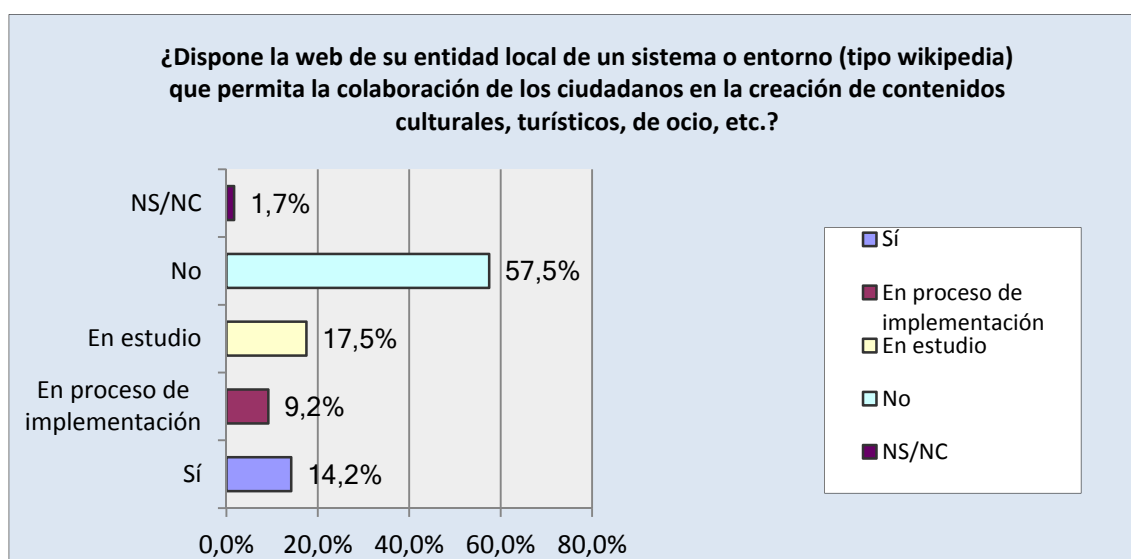
La evolución de Internet ha conllevado la necesidad de adaptar la forma de comunicarse de las administraciones públicas. Así, si con la web 1.0 la estrategia de comunicación perseguía tener presencia (necesidad de estar), con la web 2.0 (web social) se han elevado exponencialmente las posibilidades de relación y de creación de conversaciones. Los ayuntamientos han sabido ver como el principal medio para ello son las redes sociales, de ahí el elevado porcentaje de respuestas afirmativas a la existencia de este tipo de instrumentos.

**Figura 45. Debates *on line***



Las figuras 44 y 45 muestran información relativa a las acciones en el ámbito de la participación y la colaboración ciudadana, donde casi la mitad (48,7%) de los ayuntamientos encuestados afirma publicar propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos. Sin embargo, teniendo en cuenta que los instrumentos más utilizados como vía de comunicación son Facebook y Twitter, no parecen ser éstas las herramientas más adecuadas para este tipo de acciones.

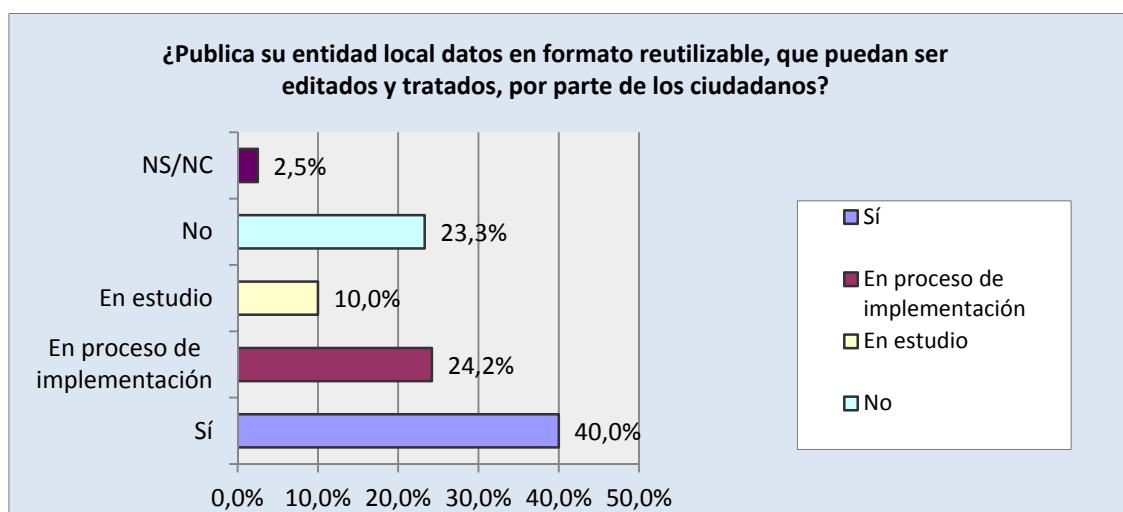
**Figura 46. Entornos web de colaboración**



Los gobiernos locales españoles parecen utilizar las redes sociales y la comunicación con la ciudadanía de forma unidireccional. Tan sólo el 14% de los ayuntamientos dispone de un sistema que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos. Así pues, se constata que el principio de la colaboración en el marco de las políticas de gobierno abierto es el menos desarrollado por los ayuntamientos. Sin duda, de ello se deduce la necesidad de crear instrumentos y programas específicos para el intercambio y la discusión de iniciativas públicas



**Figura 47. Publicación de datos reutilizables**



Desde las administraciones públicas se ha advertido la necesidad que tienen los ciudadanos de acceder a cierta información hasta ahora no disponible. Por eso la voluntad de avanzar hacia un gobierno más abierto, basado en los valores de transparencia, participación, servicio y eficiencia, requiere promover la creación de valor favoreciendo la reutilización de la información pública, facilitando la ordenación interna de los sistemas de información dentro de las administraciones y fomentando la interoperabilidad entre servicios del sector público.

La reutilización eficiente de la información pública puede permitir desarrollar nuevos productos, servicios y mercados que logren mayor desarrollo económico y creación de puestos de trabajo, de ahí que el 40 % de los ayuntamientos españoles encuestados publique sus datos de forma reutilizable, mientras que en el 24,2% de los casos esté en fase de implementación. Sólo en un 10% de casos se encuentra en proceso de estudio, fase en la que se deben identificar las necesidades ciudadanas para que la administración decida qué datos deben poner a su disposición y cuál es el formato más adecuado para hacerlo, a fin de que los datos se puedan reutilizar.

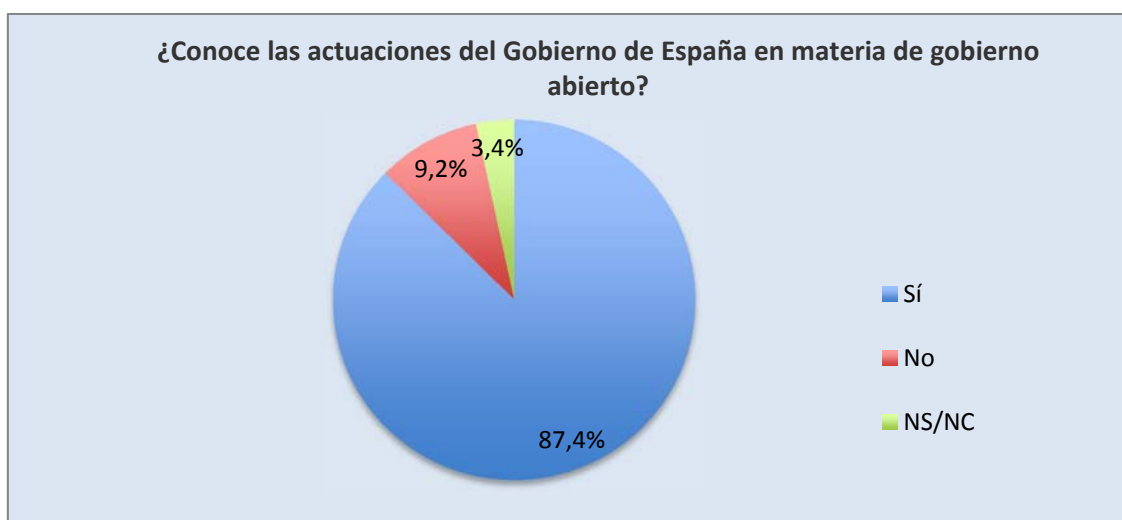
### **C) Cuestiones generales sobre gobierno abierto**

El bloque sobre cuestiones generales sobre gobierno abierto pretende verificar hasta qué punto los ayuntamientos conocen de dónde proviene la iniciativa y cuál es su

dimensión internacional, así como comprobar si se tiene conocimiento de las actuaciones en materia de gobierno abierto del Gobierno de España en su condición de miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Ante la pregunta sobre el conocimiento de la iniciativa internacional ‘Alianza para el Gobierno Abierto’ la mitad de los encuestados contestaron que sí, con un 50,4%, mientras que un 49, 5% contestó que no, o que no sabía o no contestaba. Sin embargo, la gran mayoría de entidades locales afirmaron conocer las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto (87,4%).

**Figura 48. Conocimiento de actuaciones de gobierno abierto en España**



Se debe significar que el conocimiento de la iniciativa internacional ‘Alianza para el Gobierno Abierto’ por parte de solo la mitad de los encuestados, posiblemente resultado de la ausencia de difusión de la misma, contrasta con el elevado grado de conocimiento de las actuaciones a nivel nacional, probablemente resultado de las recientes iniciativas en materia de transparencia, reflejadas en la LTAIBG (conocida por el 97,2% de los encuestados) y el Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (conocido por el 92,5% de los encuestados).

#### **D) Comentarios adicionales**

Finalmente, merecen ser considerados los comentarios adicionales incorporados por una parte de los encuestados, pues aportan reflexiones, observaciones y sugerencias de carácter cualitativo que permiten obtener conclusiones y observar tendencias. Tras un análisis detallado de los veintiún comentarios adicionales, se presentan las principales cuestiones planteadas:

- El gobierno abierto supone un cambio radical en la gestión de las entidades locales, pero necesitará de una mayor financiación y ayudas públicas.
- Se disponen de diferentes mecanismos participativos y colaborativos para que propuestas y proyectos sean debatidos por la ciudadanía y para la elaboración de contenidos, pero la mayoría de ellos de carácter presencial. Aún es difícil identificar una vía adecuada para que hacerlos mediante las nuevas tecnologías no sea excluyente y se profundice aún más en la brecha digital.
- Es imprescindible que exista una estrategia nacional con recursos alineados para vertebrar el sector público en el ámbito de la transparencia y la participación ciudadana. La aprobación de leyes sin una estrategia ordenada y sin recursos para implantar herramientas globales dificultará el éxito de las mismas.
- El diseño de una buena política de gobierno abierto requiere de más recursos económicos y humanos en el ámbito local, como administración más próxima a la ciudadanía, y una hoja de ruta que marque prioridades por parte de los cargos electos y directivos del ayuntamiento.
- El reconocimiento al trabajo de Transparencia Internacional, a través del ITA, ha permitido avanzar y mejorar los niveles de transparencia en los ayuntamientos desde antes que surgiera la iniciativa de gobierno abierto.
- El Gobierno de España debería aportar plataformas integradoras a las diferentes administraciones para evitar la adquisición individual de portales de datos abiertos, de transparencia y de participación.
- A fin de garantizar un estudio real y efectivo sobre el cumplimiento de los niveles de transparencia, es necesario que desde el Gobierno, y en base a la LTAIBG, se establezcan la indicadores para medir la transparencia de los ayuntamientos, ya

que en la actualidad hay múltiples estudios con indicadores y resultados muy diferentes que pueden tergiversar la realidad del cumplimiento o no de los niveles de transparencia.

- Sería óptimo establecer un método armonizado de evaluación de la transparencia ya que las diversas evaluaciones —ITA, Infoparticipa, Dyntra— pueden convertirse en un elemento de distorsión para la administración local.
- La labor de las redes de municipios como la FEMP o EUDEL son esenciales, puesto que ayudan implantar políticas de transparencia y buen gobierno y permiten unificar criterios en el ámbito local.
- Las políticas de gobierno abierto son esenciales para un buen gobierno, permiten conectar los intereses de la ciudadanía, pero si la publicación de datos no se realiza mediante fórmulas más amigables y comprensibles se corre el riesgo de que el efecto para con los ciudadanos sea el contrario.
- Es fundamental cumplir con las medidas de accesibilidad del World Wide Web Consortium (W3C)<sup>74</sup>. Asimismo, son necesarias herramientas de ayuda a las entidades locales para la interpretación de las nuevas leyes y normas que afectan a la transparencia y buen gobierno.
- Debe mejorarse el uso de las redes sociales, pues en este momento son más un canal de información y no de relación/conversación.
- El Estado debería convocar subvenciones para apoyar el desarrollo de proyectos innovadores en materia de transparencia y gobierno abierto, así como convocar premios a las mejores prácticas.

#### 4. RESUMEN DE ASPECTOS DESTACADOS Y DEMOSTRACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

La mayoría de los encuestados (97,7%) conoce los elementos esenciales de la nueva LTAIBG y está dando cumplimiento a las obligaciones que de la norma se derivan, incluso con antelación al periodo de *vacatio legis* que les concede la Ley. El hecho que

---

<sup>74</sup> El World Wide Web Consortium (W3C) es una comunidad internacional que desarrolla estándares que aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo.

el 25,2% de los ayuntamientos encuestados disponga de normativa sobre transparencia y buen gobierno, que el 7,6% esté en fase de aprobación de este tipo de normativa, y que en el 35,3% de los casos se encuentre en fase de elaboración, ilustra la preocupación de los gobiernos locales por dotarse de mayor seguridad jurídica en este ámbito. Así pues, un gran número de ayuntamientos opta por crear normativa propia adaptada a su contexto. Estos datos permiten constatar que los avances en las políticas de transparencia y buen gobierno responden a la aparición de nueva legislación y demuestran la hipótesis (2) que enuncia que el creciente número de gobiernos locales que han puesto en marcha políticas de transparencia y gobierno abierto es fruto de un proceso de isomorfismo institucional de carácter normativo y coercitivo resultado de la aparición de nueva legislación en la materia.

Los ayuntamientos han puesto en marcha portales de transparencia ofreciendo un nivel de información que en muchos casos se encuentra por encima de la media de los que obligatoriamente deben incorporar por Ley (72,5%). Sin embargo, los déficits detectados afectan a elementos esenciales, tanto para las políticas de transparencia como de gobierno abierto; en concreto solo 4 de cada diez entidades locales publican una evaluación del grado de cumplimiento de sus obligaciones, mientras que 5 de cada diez no publican las declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos. La nota media del grado de desarrollo de las políticas de transparencia que se otorgan los ayuntamientos es de 7,5 hecho que contrasta con la reciente incorporación de estas políticas en la cultura política del país como de la propia sociedad. En relación al órgano competente dentro de la organización municipal, aunque actualmente un número importante de ayuntamientos ubiquen esta materia en el máximo órgano de representación municipal (Alcaldía, en un 41,7% de los casos), de la encuesta se desprende que existe una multiplicidad de departamentos o concejalías a los que se atribuye esta cuestión, consecuencia de las diferentes políticas públicas y áreas que deben alinearse en torno a esta materia

Finalmente, cabe destacar que en un contexto marcado por la crisis de confianza de los ciudadanos en el sistema, la entrada en vigor de la LTAIBG ha conducido a una mayoría de ayuntamientos (61,2%) a desarrollar políticas de transparencia y buen

gobierno durante el mandato 2011-2015. Ello demuestra las hipótesis (1 y 3) que exponen como el alto grado de desafección ciudadana en las instituciones y en el sistema democrático y las acciones de cálculo electoral han sido el punto de partida de la elaboración de políticas de gobierno abierto de cara a incrementar la confianza ciudadana, mejorar la reputación de los gobiernos que la implantan, así como mejorar sus posibilidades de optar a la renovación de sus mandatos.

La información obtenida en el segundo bloque indica que en relación a los órganos competentes en materia de participación y colaboración más del 80% de los encuestados afirman contar con un área específica en materia de participación ciudadana, lo que implica que el eje del gobierno abierto referido a la participación ciudadana cuenta con un anclaje institucional superior que el relativo a la transparencia. Estos datos revelan que no existe un modelo único para la implementación de políticas de gobierno abierto a nivel local. Adicionalmente se constata que en lo concerniente a la posibilidad de comunicación con la ciudadanía a través de redes sociales, el 92,4% de los encuestados ya cuenta con perfiles en las redes sociales como Facebook y Twitter, como herramienta de comunicación institucional y de relación con los ciudadanos. Sin embargo, aunque un 48,7% afirme publicar propuestas a través de internet para que sean debatidas y valoradas por los ciudadanos, no parece que los canales de comunicación mayoritariamente utilizados por éstos, sean los más adecuados para dicho propósito.

Los datos sobre si existe en la web local un entorno colaborativo en el que los ciudadanos puedan co-crear contenidos y si la entidad local publica datos en formato reutilizable, indican que un 57,5% de los encuestados no dispone de esa opción colaborativa y que sólo el 40% actualmente publica datos en formato abierto y reutilizable, lo que confirma que el eje de la colaboración es el que menor desarrollo ha obtenido aún en el ámbito local español. Los datos permiten afirmar que aunque la transparencia sea condición indispensable para recuperar la confianza de los ciudadanos y por tanto promover su participación, la transparencia y apertura informativa no generan dinámicas de participación y colaboración ciudadana de manera automática, por lo que sigue siendo prioritario mejorar la calidad de la transparencia, en lo que se refiere a la

trazabilidad de las decisiones que se adoptan y la promoción de políticas de participación y colaboración adecuadas a las exigencias de los ciudadanos y al contexto actual.

En relación a la cuestiones verificables sobre si existe relación entre mayor gasto público por habitante y mayor número de iniciativas de gobierno abierto, y sobre si los ayuntamientos gobernados por partidos políticos progresistas son más sensibles a la puesta en marcha de políticas de gobierno abierto los datos no muestran que actualmente esas dos variables sean decisivas a la hora de poner en marcha políticas de gobierno abierto. En cuanto al conocimiento general del *open government*, un 87% de los ayuntamientos encuestados conoce las actuaciones que en materia de gobierno abierto ha desarrollado el Gobierno de España, mientras que sólo un 50,4% de las ciudades encuestadas conoce la iniciativa internacional ‘Alianza para el Gobierno Abierto’. Esta última, que obliga a la mejora y desarrollo de las políticas de transparencia, participación y colaboración en el país y de la cual España es miembro desde 2011, no ha sido suficientemente difundida (como indica el Informe del Mecanismo de Revisión Independiente del OGP) aunque ello no ha sido un obstáculo para el proceso de isomorfismo mimético que se ha experimentado a nivel país y del que las entidades locales han sido partícipes.

Finalmente los comentarios adicionales giraron en torno a que el gobierno abierto en el ámbito local puede implicar un cambio profundo en la manera de gestionar lo público, siendo para ello básico aprovechar las ventajas de las nuevas herramientas digitales y de la web 2.0. Sin embargo, es necesario prestar especial atención a la brecha digital y trabajar para su reducción. Existe una demanda generalizada de una estrategia nacional coordinada, que esté dotada de recursos y genere indicadores comunes para evaluar el grado de transparencia de las administraciones locales españolas. Dos elementos en los que incidieron la gran mayoría de los encuestados son la necesaria mejora de la calidad de la transparencia mediante datos abiertos, comprensibles y tratables, y la necesaria adaptación de la forma en la que la administración local se comunica con sus ciudadanos, que debe evolucionar desde modelos unidireccionales a modelos de conversación permanente.

## CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES

El cierre de una investigación es un momento en el que el conocimiento acumulado sobre los objetivos a alcanzar, las hipótesis a demostrar y la trascendencia del fenómeno que se desea explicar permite realizar afirmaciones con un nivel de certeza difícil de imaginar al inicio de la misma. La elección del gobierno abierto como tema de investigación en un momento como el actual ha permitido realizar un análisis profundo sobre cuestiones de máxima actualidad, reflexionar sobre las quiebras del sistema democrático y meditar sobre un nuevo esquema de relación entre gobiernos y ciudadanía como corresponsables del presente y futuro del desarrollo de la sociedad.

A lo largo de estas páginas se ha examinado cómo en España se ha abierto una ventana de oportunidad para el gobierno abierto y cómo los gobiernos locales se han convertido en uno de los escenarios más interesantes de desarrollo de políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana. Para llegar a ello se ha detallado el origen, los referentes internacionales, los fundamentos teóricos, el contexto político y las acciones a nivel nacional y local de este modelo de gobernanza. El marco teórico aplicado— Enfoque de las Corrientes Múltiples—y el estudio cuantitativo sobre políticas de gobierno abierto en el ámbito local han permitido validar las hipótesis de las que partía esta investigación. A continuación se exponen las principales conclusiones de la misma.



## I. LA MARCA *OPEN GOVERNMENT* : ISOMORFISMO INSTITUCIONAL DE UN NUEVO MODELO DE RELACIÓN ENTRE GOBIERNO Y CIUDADANÍA

El gobierno abierto constituye un renovado paradigma de gobernanza cuyo origen subyace a la noción misma de democracia, vinculado a las normas que garantizan el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos. Así, aunque la esencia del gobierno abierto sea anterior a la iniciativa lanzada por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, su actual conceptualización ha delimitado el término y dotado de un contenido preciso que ha permitido su conocimiento y expansión a nivel global a través de un proceso de homogeneización o isomorfismo institucional. El hecho que la iniciativa sobre *open government* fuese impulsada como una medida prioritaria por la primera potencia mundial lo convirtió en un símbolo de modernidad y apertura que derivó en un modelo a seguir por otros países. La imagen de un recién elegido Barack Obama como Presidente de los Estados Unidos mandando un mensaje de corresponsabilidad a la ciudadana para abordar conjuntamente los retos de la nación desplegó un amplio debate en el marco de una sociedad moderna, informatizada y conectada a través de las nuevas tecnologías. La comunicación del Presidente de los Estados Unidos significaba reconocer que el gobierno no tenía todas las respuestas y que los servidores públicos debían recurrir al talento de los ciudadanos para el diseño y desarrollo de las políticas públicas. El mensaje partía de la convicción de que la manera de resolver problemas debía pasar por encontrar nuevas formas de aprovechar el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos estadounidenses en la formulación de las políticas que afectan a sus vidas.

En esta línea, la constitución del *Open Government Partnership* fue un paso más en ese mensaje de modernidad y de impulso de un modelo que comenzó a replicarse como respuesta a las restricciones comunes que afrontaban distintas organizaciones en diferentes regiones del mundo. Un pequeño grupo de países compartieron una visión, la de adaptarse a la sociedad actual para lograr un mayor progreso aprovechando una sociedad en red generadora de conocimiento colectivo. Hoy el OGP cuenta con sesenta y cuatro países miembros y ha conseguido que el gobierno abierto forme parte de la agenda internacional y ofrezca un espacio en el que construir conjuntamente un nuevo modelo de relación entre ciudadanía y gobierno. Un modelo que con las nuevas herramientas

tecnológicas de la sociedad del siglo XXI abre infinitas posibilidades para transformar la realidad contemporánea. A pesar de ello, la reciente creación de la red entraña una enorme heterogeneidad de actuaciones de los países socios. Ello implica que los miembros participan de un entorno dinámico, a diferentes velocidades y abierto al conocimiento, pero a su vez, el riesgo de dispersión y falta de coherencia global en las actuaciones puede amenazar la legitimidad del organismo y su pretensiones de implantación de los fines que lo presiden. De ahí que el OGP aún deba consolidar mecanismos de seguimiento y mejora de las acciones de gobierno abierto de los países miembros para no diluir su labor y efectividad en el cumplimiento de su misión.

Los avances de este nuevo modelo de relación entre gobierno y ciudadanía responden a la constitución de un marco internacional de referencia, a la aparición de nueva legislación y a la generación de un proceso de isomorfismo institucional global que ha tenido una manifestación notable en el ámbito local español. Actualmente el gobierno abierto es un concepto joven, fuerte e ilusionante. El consenso existente sobre sus elementos esenciales —transparencia y derecho de acceso a la información, participación ciudadana para incidir en la toma de decisiones y la colaboración para la co-creación de valor público— hacen que gobiernos y gobernantes suscriban públicamente sus bondades. Sin embargo, las distintas dimensiones que muestran la naturaleza integral de este nuevo modelo deben convivir y cooperar para que la promesa del gobierno abierto pase del discurso teórico a la formulación política.

Las profundas transformaciones de las normas que regulan los marcos de convivencia tienen que valorar las nuevas vías de participación ciudadana que ofrece actualmente la sociedad de la información. Hoy los ciudadanos reclaman cada vez más, mayor transparencia, protagonismo y capacidad de decisión ejerciendo su ciudadanía en tiempo real y de forma directa. Por ello, la elección por parte de los gobiernos de un modelo de gobierno abierto, donde el valor del conocimiento de las personas dispuestas a participar sea clave, puede otorgar la legitimidad necesaria para superar la crisis de confianza. El gobierno abierto es una filosofía que cree que los mejores resultados suelen ser impulsados por la asociación entre ciudadanos y gobierno. Por ello, el principio de la colaboración, el más novedoso, es el que marca y singulariza este modelo de relación

interactivo entre gobierno y sociedad, un nuevo patrón de gobernanza colaborativa en el que se coopera, se contribuye, se trabaja conjuntamente para mejorar en la formulación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas.

Una colaboración que implica una nueva relación donde se reinventen los roles convencionales de gobierno y ciudadanía, en un marco donde ambos deben aprender a relacionarse. Desde esta perspectiva de gobierno colaborativo, la ciudadanía debe pasar de la crítica *per se* a implicarse en el diseño de políticas públicas, a ser evaluadora permanente, a dejar de ser simple espectadora, a contribuir a la construcción de una cultura de la prevención y a utilizar la información como parte de su cotidianidad para mejorar su toma de decisiones. En resumen, la ciudadanía pasa a ser generadora de valor público asumiendo un papel proactivo, mientras que los gobiernos no solo deben brindar información de calidad, sino también deben enseñar cómo utilizarla y, sobre todo, deben rendir cuentas.

Para que este nuevo modelo de relación entre gobierno y ciudadanía sea viable debe contar con los instrumentos que la administración posee para su potencial desarrollo. El Gobierno, como organización que representa al Estado para el cumplimiento de sus aspiraciones, necesita de su máxima expresión institucional, la Administración, para llevarlas a buen término. La función de conexión entre la ciudadanía y los poderes políticos que ejerce la administración en los asuntos de interés general la convierten en el eje principal de este prometedor modelo. Por ello, es esencial abordar reformas ponderadas pero audaces que favorezcan un cambio de cultura, para que la administración transite hacia un modelo de administración abierta que aproveche todo su potencial (sus talentos), articulando la sinergia entre Estado y ciudadanía (inteligencia colectiva), e involucrando a los ciudadanos (valor añadido). Sin esa transformación, el gobierno abierto corre el riesgo de convertirse en una batería de propuestas que difícilmente podrán desarrollarse, o peor aún, en campañas de marketing institucional que pueden generar mayor desconfianza, frustración y apatía por lo público, pues no todo lo que se autodenomina gobierno abierto efectivamente lo es.

## II. LA VENTANA DE OPORTUNIDAD DEL GOBIERNO ABIERTO EN ESPAÑA: UNA RESPUESTA PARA LA DESAFECCIÓN CIUDADANA

La crisis de confianza en las instituciones públicas es el punto de partida de la elaboración de políticas de gobierno abierto en el ámbito local. El debate sobre la falta de transparencia, rendición de cuentas y regeneración democrática está ligado en la actualidad a los acontecimientos que la ciudadanía percibe. La lucha en todos los frentes contra la corrupción y la opacidad en el modo de gobernar debió haber emergido hace mucho tiempo como una gran prioridad nacional; decepción, indignación e impotencia se han manifestado como síntomas de un sistema democrático enfermo del que no se obtenían respuestas coherentes y creíbles. Un sistema donde los estándares de ética pública que debían haber cumplido los representantes políticos han sido vulnerados sistemáticamente, mientras que a la ciudadanía se le exige el cumplimiento de la ley.

Aunque España haya tenido unos niveles elevados de desafección que han permanecido estables incluso en tiempos de bonanza económica, los acontecimientos de los últimos años, una crisis económica con efectos dramáticos en la población y la emergencia de importantes casos de corrupción, se ha convertido en un ‘test de estrés’ que ha puesto a prueba el funcionamiento de los principales mecanismos de representación de la democracia, donde España ha suspendido a los ojos de la ciudadanía. Una ciudadanía que ante la magnitud de la crisis y sus visibles consecuencias ha prestado una mayor atención a la política, llegando a la conclusión de que los actuales mecanismos de representación no representan sus intereses, dando lugar a una visión aún más negativa respecto de sus instituciones y representantes políticos. Todos los niveles de gobierno, nacional, autonómico y local, y los partidos políticos que los sustentan, han tenido que realizar una profunda reflexión sobre nuevas fórmulas y soluciones para luchar contra esa enorme desconfianza.

Así, la crisis del país en un mundo globalmente conectado ha evidenciado los fallos del sistema, creando estados de opinión masivos. Esto ha dado lugar a que la ciudadanía cuestione los mecanismos que conforman la democracia. La incorporación en la agenda política (nacional, autonómica y local) del problema de la desafección

ciudadana en España, cuenta con indicadores y acontecimientos relevantes (especialmente el movimiento 15M y la aparición de la corrupción como el segundo problema del país) que han demostrado como la desafección se ha convertido en una de las principales preocupaciones de gobiernos, instituciones y partidos políticos. Este contexto ha generado un estado de ánimo que ha influido de manera determinante en la reclamación de reformas urgentes en torno a la falta de transparencia, a los abusos de la clase política y a la adopción de medidas de regeneración democrática.

Siguiendo en el ECM de Kingdon (1995), en España se ha abierto una ventana de oportunidad para el gobierno abierto al confluir tres situaciones: i) la enorme grave crisis de confianza de los ciudadanos en el sistema (problema); ii) la existencia de alternativas en materia de transparencia y gobierno abierto para luchar contra la desafección (políticas); y iii) el cambio de gobierno – resultado de las elecciones generales en 2011 – y el clima social propicio para la reforma de las políticas de transparencia (política).

Entre los años 2012 y 2013, la crisis de confianza alcanzó niveles desconocidos en España. Hoy el clima político del país continúa exigiendo la necesidad de firmar un nuevo pacto con la ciudadanía donde la integridad, la ética y la política conformen un círculo virtuoso que logre luchar contra la corrupción, recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y promover su participación e implicación en los asuntos públicos. Las instituciones públicas tienen la obligación de alcanzar un mayor grado de legitimidad y de calidad democrática, para ello es necesario diagnosticar con precisión las fisuras del sistema para corregirlas, fomentar aquellas prácticas que logren regenerar el sistema democrático, diseñar e impulsar políticas de transparencia y de gobierno y administración abierta en el marco de una sociedad más comprometida, informada, preparada y conectada. El gobierno abierto es una etiqueta que no proporciona una receta mágica pero sí un modelo en el que diversas iniciativas pueden cobrar sentido. Hoy es imprescindible recuperar tanto la legitimidad como la inteligencia que aporta la democracia, de manera que el sistema político-administrativo debe impregnarse de transparencia, diálogo, interacción, liderazgo y valores (Brugué, 2013:36)

### III. POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO LOCAL: HOMOGENEIZACIÓN, LEGITIMACIÓN DE PROCESOS Y ESTRATEGIA ELECTORAL

Desde la aprobación del Código de Buen Gobierno Local (2009), el contexto económico, social y político del país ha provocado que el alto grado de desconfianza alcance a los gobiernos locales. Así, la incorporación de políticas de transparencia y gobierno abierto en el ámbito local español constituye una de las respuestas a la crisis de confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y en las instituciones. La adhesión de España a la Alianza para el Gobierno Abierto y los procesos de reforma institucional derivados de ella, en concreto la aprobación y entrada en vigor de la LTAIBG, han dado lugar a que un número considerable de ayuntamientos hayan emprendido iniciativas en materia de transparencia, participación y colaboración. Los gobiernos locales, desde la formalización de este nuevo paradigma, identificaron el gobierno abierto como un marco de referencia para integrar el trabajo que en esta materia venían desarrollando e incorporar las nuevas herramientas que ofrecían las TIC para mejorar sus políticas de transparencia y participación ciudadana.

El estudio sobre políticas de gobierno abierto en el ámbito local realizado en 2015 que representa a un 30% de ciudades españolas de más de 20.000 habitantes y a más de diecinueve millones de habitantes (41,06% de la población española) plantea como objetivos ofrecer información sobre el nivel de desarrollo de políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana, analizar en qué medida un nivel efectivo de transparencia y apertura informativa puede contribuir a instaurar o mejorar dinámicas de participación y colaboración ciudadana, e identificar líneas de mejora en el desarrollo de iniciativas de gobierno abierto. Los resultados del mismo muestran como un número creciente de gobiernos locales está desarrollando acciones en materia de gobierno abierto centradas principalmente en la promoción de políticas de transparencia, el impulso del *e-government*, la apertura de datos, y el uso de las redes sociales y la web 2.0.

Como muestra la información recabada, los avances en materia de gobierno abierto en el ámbito local se han visto favorecidos por la aparición de nueva legislación

en materia de transparencia en un contexto de isomorfismo institucional derivado de: criterios de estandarización en relación a un nuevo modelo de gobernanza; tendencias miméticas para afrontar la incertidumbre de la gestión en un momento de crisis económica, política y social; y de presiones normativas resultado de la sofisticación de las medidas aparentemente exitosas para afrontar los retos de una nueva sociedad. Ello unido al interés de los principales actores políticos del país de recuperar la confianza de los ciudadanos, la reputación propia y renovar mandatos en un escenario de alta competencia electoral como el que vive el país, a través de medidas incorporadas en la acción gubernamental y en los programas electorales recientes, ha favorecido la adopción de un discurso en el que la transparencia y el gobierno abierto emergen como prioritarios en la agenda gubernamental de los gobiernos locales en España.

De este modo, los datos de la encuesta indican que los gobiernos locales han puesto en marcha políticas de transparencia y gobierno abierto como respuesta a la crisis de confianza en las instituciones. El 61,2% de los gobiernos locales han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno durante el mandato 2011-2015. Además, destaca que el 87% conoce las actuaciones que ha desarrollado el Gobierno de España en materia de gobierno abierto (aunque el 50,4% no conoce que ello deriva de la pertenencia de España del OGP). De ahí que, el 97,7% de las respuestas muestren el alto grado de conocimiento de las obligaciones que se derivan de la nueva Ley de Transparencia, que más del 80% de los encuestados cuentan con un área específica en materia de participación ciudadana y que el 72,5% de los ayuntamientos encuestados haya desarrollado portales de transparencia. Entre los instrumentos más utilizados, destaca que el 92,4% cuenta con un perfil en Facebook o Twitter como herramienta de comunicación institucional y relación con la ciudadanía, pero solo el 40% publica datos en formato reutilizable. De ello se deduce que no siempre se utilizan las herramientas correctas y que queda camino por recorrer en el ámbito del gobierno abierto. Como valoración global, la nota media que se ponen los gobiernos locales españoles en materia de transparencia y buen gobierno es de 7,5 sobre 10, lo cual destaca con el reciente desarrollo de políticas de gobierno abierto en el país con carácter general.

En suma, el estudio constata que un gran número de gobiernos locales han configurado prácticas merecedoras de análisis que, a su vez, se han visto reforzadas con iniciativas en red tales como la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización de la FEMP, el nuevo Código de Buen Gobierno Local de la FEMP, la Red de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia y la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP. Sin embargo, el estudio también revela que un nivel efectivo de transparencia y apertura informativa no necesariamente contribuye a instaurar o mejorar dinámicas de participación y colaboración ciudadana. Estas políticas necesitan de un impulso propio y de mecanismos que las favorezcan. En todo caso, queda superada la afirmación del Observatorio Nacional para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información que señalaba que a nivel local el desarrollo del gobierno abierto se circunscribía a un grupo reducido de entidades locales de gran población o a iniciativas puntuales desarrolladas por corporaciones de tamaño menor (ONTSI, 2013). Por ello, puede afirmarse que tras el impulso inicial del Gobierno de España y de ciertas regiones, ha sido el ámbito local el que ha incorporado con mayor naturalidad a su gestión la idea de este nuevo modelo de gobierno.

Las transformaciones que puede emprender un gobierno local en aspectos como la participación en redes sociales, la puesta en marcha de plataformas que permitan escuchar las opiniones de la ciudadanía para mejorar la transparencia en la gestión municipal, la apertura de datos públicos a través de Internet, la colaboración de los empleados públicos para mejorar su trabajo diario, y, en definitiva, todas aquellas medidas encaminadas a conseguir un ayuntamiento más abierto que ofrezca un mejor servicio público a los ciudadanos, están aún pendientes de desarrollo por un número importante de ayuntamientos. Es aquí donde el *open government*, a través de las TIC ligadas a la web 2.0, puede marcar la diferencia para lograr que los gobiernos locales sean verdaderamente permeables a la cooperación de los actores que operan en un territorio determinado, gracias al impulso de políticas locales transversales y a un intercambio de conocimientos de la ciudadanía, puesto que “las administraciones locales del futuro serán en red y abiertas o no serán” (Criado, 2012: 8).



#### IV. RETOS EN MATERIA DE GOBIERNO ABIERTO

En materia de gobierno abierto España se enfrenta a retos globales y a retos propios. Para abordarlos se debe atender al camino emprendido hace una década en relación a políticas de buen gobierno, tomar en consideración la tipología de gobierno abierto que se está desarrollando actualmente, contar con los actores que están promoviendo este nuevo paradigma, y favorecer la creación de una estrategia a nivel estatal que incorpore a ciudadanía, gobiernos locales y regiones.

- Creación de una estrategia a nivel país: ciudadanía y gobiernos

España entró a formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto en los últimos meses de mandato del gobierno socialista. Formalizó su participación el 31 de agosto de 2011. Meses después tuvo lugar la celebración de las elecciones generales en las que el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta. El cambio de dirección política en el país supuso una revisión de aquellas iniciativas y compromisos emprendidos por el anterior ejecutivo, entre las que se encontraba la participación de España en el OGP. Ello condicionó la elaboración de la primera estrategia del Gobierno de España en materia de políticas de gobierno abierto, cuya única medida plenamente coincidente con la filosofía de la iniciativa fue el anteproyecto de ley, hoy LTAIBG. El Primer Plan evidenció precipitación y falta de conocimiento sobre este nuevo modelo. A ello se sumó una clara ausencia de difusión y participación de la sociedad civil especializada en la materia. Por ello, esta investigación comparte casi en su totalidad las conclusiones y recomendaciones que se plasmaron en el Informe del Mecanismo de Revisión Independiente del OGP. Dicho informe puso de manifiesto que una gran parte de los contenidos del Plan no tenían una relación directa con los objetivos de gobierno abierto y apuntó una serie de sugerencias de mejora de la acción de España para próximas estrategias.

La elaboración del Segundo Plan tuvo la oportunidad de subsanar los déficits señalados por el IRM. Éste solo corrigió y avanzó tímidamente en algunas cuestiones, a pesar de que el país contaba con un marco normativo favorable para la construcción de un modelo de gobierno abierto en España, la LTAIBG. Cabe señalar que, si bien el

formato de este Segundo Plan mejoró en relación a su sistemática, muchas de las recomendaciones propuestas por el IRM no fueron abordadas. Por tanto, el Gobierno de España ha comenzado a desarrollar reformas en materia de gobierno abierto, fundamentalmente a través del eje de la transparencia, pero siguen pendientes el desarrollo de avances de gran calado. Entre ellos destaca la necesidad de elaborar de una estrategia nacional. El OGP pretende lograr compromisos a nivel país, de modo que estima favorable la incorporación de estrategias regionales y locales en los planes. El Gobierno de España aún no ha abordado una estrategia de gobierno abierto con carácter participativo, no ha clarificado el ámbito territorial de los compromisos y no ha asentado al gobierno abierto como una política pública transversal. En consecuencia, actualmente no cabe hablar de una estrategia a nivel estatal de gobierno abierto. También resulta imprescindible la mejora de sus actuaciones en materia de transparencia y datos abiertos y el desarrollo de los pilares de la participación y la colaboración, prácticamente inexistentes en los planes. Otra reforma pendiente es el diseño de planes de acción nacional que cuenten con la colaboración y concertación de la sociedad civil, tal y como requiere el OGP. España debe superar el déficit en términos de participación de la ciudadanía en un debate serio con respecto al diseño y elaboración de una estrategia nacional. Finalmente, es clave difundir los valores de un modelo de gobierno abierto entre la ciudadanía y recoger compromisos concretos desarrollados bajo los principios básicos del OGP (transparencia, participación y colaboración ciudadana, rendición de cuentas y tecnología e innovación).

- Gobierno abierto multinivel: política de estado y referente internacional.

La gobernanza multinivel se ha convertido en una fórmula para entender la interacción entre diversos niveles de gobierno. En el caso español, el avance de la descentralización a partir de la Constitución Española de 1978 y la incorporación al proceso de integración europea a partir de 1986 facilita la dispersión de soberanía y la aparición de competencias compartidas. Desde una perspectiva de ciencia política, la gobernanza multinivel es un instrumento teórico que permite interpretar la existencia de diversos niveles y las interacciones que existen entre ellos.

En este sentido, la complejidad institucional española, debe estar acompañada de la incorporación de mecanismos de coordinación para el mejor ejercicio de las políticas de transparencia en los distintos niveles de administración. Como se ha desarrollado a lo largo de esta investigación son numerosas las iniciativas que se están produciendo en este ámbito, tanto a nivel regional como local. Por ello, teniendo en cuenta la propia naturaleza descentralizada del país, queda pendiente a abordar una adecuada estrategia de gobierno abierto multinivel que a medio plazo pueda convertirse en una política de estado y en un referente internacional.

- Desarrollo del eje colaboración: generación de valor público, social y cívico de forma duradera.

El reto de la colaboración, en el que el gobierno abierto otorga a los ciudadanos la posibilidad de convertirse en sujetos activos en el diseño y mejora de la gestión pública, requiere de corresponsabilidad, confianza y complicidad. Debe favorecerse un ecosistema de colaboración que fomente la inteligencia colectiva y genere entornos creativos que faciliten una conversación permanente con la ciudadanía, que permitan incorporar temas a la agenda pública, que logren su implicación en la mejora de los servicios públicos, que generen nuevos servicios ligados a la reutilización de los datos públicos, e incluso que permitan resolver problemas para los que los poderes públicos no siempre tienen solución. Gracias a la evolución en la capacidad para conectar con los demás, hoy se puede obtener más valor de la participación ciudadana de lo que nadie hubiera podido imaginar hace tan sólo una década. Se está abandonando una era en la que la interacción con los poderes públicos estaba limitada a élites y a reducidos grupos de presión. La disminución de costes para dirigirse a la ciudadanía y el incremento de la población conectada permite que conjuntos masivos de pequeñas contribuciones y talentos dispersos generen valor público y social de forma duradera. La recuperación de la virtud cívica y el valor público emergen como elementos esenciales en la educación de forma endógena, pero no como consecuencia de una inversión por parte de gobiernos y administraciones, de ahí la relevancia de que las políticas educativas del futuro deban recuperar dicha virtud cívica. Los ciudadanos han encontrado formas de opinar, participar, colaborar y crear valor público, algo que los gobiernos no deben desaprovechar.

- Gobierno y administración local abierta: transversalidad, gestión horizontal e intraemprendimiento

La administración abierta debe ser un eje fundamental entre estado y ciudadanía, puesto que puede promover una actitud abierta y colaborativa dentro y fuera de las instituciones. Los principales promotores e impulsores deben ser aquellos que componen la administración, tanto los responsables políticos como los empleados públicos. Para avanzar hacia un modelo de gobierno abierto es necesario contar con el presupuesto de partida de insertar una transformación en la cultura de la función pública, puesto que, la viabilidad del modelo exige contar con los instrumentos a disposición de la administración.

En este sentido, tres elementos son esenciales para iniciar el proceso hacia una administración abierta: la transversalidad, la gestión horizontal y el intraemprendimiento. Las jerarquías organizativas no permiten responder en tiempo y forma a las exigencias de la ciudadanía en un mundo marcado por las redes. La lógica de gestión horizontal descansa en la necesidad de disponer de profesionales a los que se les motive para que actúen con las herramientas de hoy, no con los procedimientos de ayer. Asimismo, es básico el impulso de los agentes de cambio en el sector público (intraemprendedores), puesto que la administración cuenta con profesionales con capacidad de innovar, repensar, crear y entender las necesidades de la ciudadanía. Estos profesionales deben ser agentes de cambio, un ejército de profesionales con los que afrontar el reto de conseguir una administración abierta. La administración pública, debe aprovechar a sus profesionales formándoles en la materia, canalizando la motivación de los equipos y el desarrollo profesional de cada uno de los mismos y, consecuentemente, obteniendo mejoras organizativas, innovando y mejorando los servicios de los ciudadanos.

- Conexión entre políticas de transparencia y participación ciudadana

Actualmente, las políticas de gobierno abierto se encuentran en una fase de formulación y desarrollo. Es necesario construir sistemas de evaluación para garantizar una correcta aplicación de las mismas e identificar si los tres ejes que la dotan de carta de

naturaleza encuentran el equilibrio adecuado. En este sentido uno de los retos detectados en la profundización de modelos de gobierno abierto, tanto con carácter general, en España, como en particular, en los gobiernos locales españoles, es establecer un adecuado enlace entre políticas de transparencia y políticas de participación y colaboración ciudadana. Si bien la transparencia ha focalizado el interés de las administraciones en el marco de estrategias de gobierno abierto, la participación y la colaboración requieren de una mejora de la calidad de la transparencia, mediante la incorporación de mecanismos que ofrezcan a los ciudadanos información sobre la trazabilidad de las decisiones que se adoptan, así como de un impulso propio para su desarrollo que permita la consecución de un modelo integral de gobierno abierto.

\* \* \* \*





## BIBLIOGRAFÍA

- AGUILAR, L. F. (1996), 'Estudio Introductorio', en Aguilar L.F (1996) *El Estudio de las Políticas Públicas*, Segunda edición, Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 15-74.
- (2007), 'El aporte de la política pública y la nueva gestión pública a la gobernanza', *XII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública*, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 30 oct.-2 nov. 2007.
- AHN, M. J. (2011), 'Adoption of E-Communication Applications in U.S. Municipalities: The Role of Political Environment, Bureaucratic Structure, and the Nature of Applications', *The American Review of Public Administration*, 41(4), págs. 428-452.
- AHUMADA FIGUEROA, L. (2001), *Teoría y cambio en las organizaciones: un acercamiento desde los modelos de aprendizaje organizacional*, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso.
- AJA, E., Y LARIOS, M.J. (1998), *Parlamentos autonómicos y participación popular: la participación de los grupos sociales en la elaboración parlamentaria de las leyes*, publicado por Cortes de Valencia, Valencia.
- ALLISON, G. (1969), 'Conceptual models and the Cuban missile crisis', *American Political Science Review*, 63 (3): 689–718.
- ANDUIZA, E., CRESPO, I., MÉNDEZ, M., (2011), *Metodología de la Ciencia Política*, Cuadernos Metodológicos, 28 (2ª ed.), Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.
- ARENILLA, M. (2011) "Marco teórico actual de la Administración Pública", en M. Arenilla (Dir.), *Crisis y reforma de la Administración pública*, Oleiros, Netbiblo, págs. 1-137.



- ARMINGEON, K., KAI, G., (2014), 'Democracy in crisis? The declining support for national democracy in European countries, 2007–2011', *European Journal of Political Research*, 53 (1): 423-442.
- BAENA, M., (2000), *Curso de Ciencia de la Administración*, volumen I (4ª ed.), Madrid, Tecnos.
- BALCELLS, J., PADRÓ-SOLANET, A., SERRANO, I. (2013), 'Twitter en los ayuntamientos catalanes. Una evolución empírica de usos y percepciones', en Criado, I., Rojas, F., *Las redes sociales digitales en la gestión y las políticas públicas. Avances y desafíos para un gobierno abierto*, Col·lecció d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya.
- BAN KI-MOON (2011), Discurso ante la 125ª Asamblea de Unión Interparlamentaria, Berna.
- BARÓMETRO DEL REAL INSTITUTO ELCANO (BRIE), 32ª Oleada BRIE, febrero 2013.
- BAUMGARTNER, F. Y JONES, B. (1993), *Agendas and Instability in American Politics*, Chicago, Chicago University Press.
- BLANCO, I., Y GOMÀ, R. (2003), 'Gobiernos locales y redes participativas: retos e innovaciones', *Revista del CLAD. Reforma y Democracia*, 26, págs. 1-15.
- BLAXTER, L, ET AL (2000), *Como se hace una investigación*, Colección Herramientas Universitarias, Gedisa, Barcelona.
- BOBBIO, N. (1985), *El futuro de la democracia*, Barcelona, Plaza y Janés.
- BOIVARD, T. (2002), *Developing Local Governance. Networks in Europe*, Baden-Baden, Nomos Verlag.
- BOJÓRQUEZ PEREZNIETO, J.A. (2012), 'La caja negra del Estado: el reto del gobierno abierto' en Hofmann, A., Ramírez Alujas, A. y Bojórquez Pereznieto, J.A., *La Promesa del Gobierno Abierto* (publicación online).
- BORJA, J., Y CASTELLS, M. (1998), *Local y global. La gestión de las ciudades en la era de*

*la información*, Madrid, Taurus.

BÖRZEL, T. (1997), '¿Qué tiene de especial el concepto de policy networks?', *Revista Redes*, disponible: <http://revista-redes.rediris.es/webredes/textos/policynet.pdf>.

BOURGON, J. (2007), 'Gobierno receptivo, responsable y respetado. Hacia una "nueva" teoría de la Administración Pública', *Revista Internacional de Ciencias Administrativas* vol. 73, no 1, marzo, págs. 5-26.

BOVENS, M., Y WILLE, A. (2011) 'Falling or Fluctuating Trust Levels? The case of the Netherlands', en Zmerli S., Hooghe, M., (eds.), *Political Trust. Why Context Matters*, Colchester, ECPR Press, págs. 49-66.

BRIONES, G. (1996), *Metodología de la Investigación cuantitativa de las ciencias sociales democrática*, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, Bogotá

BRUGUÉ, J. (2013), 'Regeneración democrática: un marco para desarrollar el gobierno abierto', *Revista Deliberación*, núm. 3, Gobierno de Aragón.

----, FONT, J. Y GOMÁ, R. (2003), 'Participación y democracia. Asociaciones y poder local' en Funes Rivas, M.J. y Adell, R. (eds.), *Movimientos sociales cambio social y participación*, Madrid, UNED.

CAIRNEY, P. (1997), 'Advocacy Coalitions and Policy Change', en Stoker, G., y Stanier, J. (eds.), *Contemporary Political Studies*, Nottingham, PSA.

---- (2007), 'A 'Multiple Lenses' Approach to Policy Change: The Case of Tobacco Policy in the UK', *British Politics*, 2, 45–68.

CAIRNEY, P., Y HEIKKILA, T. (2014), 'A Comparison of Theories of the Policy Process' en Sabatier, P., y Weible, C. (eds.), *Theories of the Policy Process* (3ª ed.), Boulder, Westview Press.

CALDERÓN, C., LORENZO, S. (2010), *Open Government*, Colección Algón 5, Algón Editores, Jaén.

- CAMPO, E. del. (2002) 'Los grupos de presión', en Román Marugán, P. (coord.). *Sistema político español*, Madrid, McGraw-Hill.
- (2008), 'La implementación de una agenda local innovadora y estratégica', *Plataforma de Liderazgo Local*, Urb-al III, Barcelona.
- CAMPO HARO, A. (2009), 'A la búsqueda de la gobernanza responsable: descentralización y mecanismos de rendición de cuentas en los municipios bolivianos', *Revista del CLAD Reforma y Democracia* núm. 44, Caracas.
- CAMPOS, E., COROJÁN, A. (2012), 'Estado del arte del Gobierno Abierto: promesas y expectativas' en Hofmann, A., Ramírez Alujas, A. y Bojórquez Pereznieta, J.A (2012) *La Promesa del Gobierno Abierto*.
- CANAVAGGIO, P. (2011), 'El acceso a la información pública en el mundo: un derecho humano emergente', *7º Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica*, Rio de Janeiro, 27 junio - 1 julio 2011.
- CASTEL GAYAN, S. (2013), 'La política de participación ciudadana e innovación democrática en la Comunidad Autónoma de Aragón', *IV Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG*, 23 - 24 de septiembre, Madrid.
- CASTELLS, M. (1999), *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red*, Vol. 1 Madrid, Alianza Editorial.
- CHAPMAN, R. HUNT, M. (1987), *Open Government. A study of the prospects of open government within the limitations of the British political system*, Londres, Routledge.
- CHARLES, C. A. (2011), *Policy windows and changing arrangements: an analysis of the policy process leading to the colleges of applied arts and technology act, 2002*, Tesis, University of Toronto.
- CHISHOLM, D. (1987), 'Ill-structured Problems, Informal Mechanisms and the Design of Public Organizations', en Lane, J. E. (ed.), *Bureaucracy and Public Choice*,

Londres, Sage.

CIUDADANOS (2015a), *Portal de transparencia de Ciudadanos*, disponible en <https://www.ciudadanos-cs.org/transparencia>.

---- (2015b), *Programa electoral elecciones municipales 2015. El Madrid que queremos los ciudadanos*, disponible en <http://madrid.ciudadanos-cs.org/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/programa-Madrid1.pdf>.

COBO, C. (2012), 'Gobierno Abierto: de la transparencia a la inteligencia cívica' en Hofmann, A., Ramírez Alujas, A. y Bojórquez Pereznieta, J.A (2012) 'La Promesa del Gobierno Abierto'.

COHEN, M, MARCH, J.G, OLSEN, J.P. (1972), *A Garbage Can Model of Organizational Choice*, Administrative Science Quarterly, Vol. 17, No. 1, University of Michigan.

COMISIÓN EUROPEA (2001a), *Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea*, recogida en el Reglamento CE 1049/2001 de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, Bruselas.

COMISIÓN EUROPEA (2001b), *Libro Blanco sobre la Gobernanza*, COM (2001) 428, Diario Oficial nº. 287 de 12/10/2010, Bruselas.

---- (2003), *Directiva 2003/98/CE sobre reutilización de la información del sector público*, Bruselas.

---- (2009), *Declaración Ministerial de Malmö sobre Administración electrónica*, [http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae\\_000006301.pdf](http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_000006301.pdf)

---- (2010), *Agenda Digital para Europa*, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:ES:PDF>

---- (2011), Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo de 6 de junio de 2011, *La lucha contra la corrupción en la Unión Europea* [COM(2011) 308 final, Bruselas.

COMTE, A. (1980), *Discurso sobre el espíritu positivo* (edición de Julián Marías), Madrid, Alianza.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (1985), Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, BOE núm. 80, de 03/04/1985.

---- (1992), Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, BOE núm. 285, de 27/11/1992.

---- (2003), Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, BOE núm. 301, de 17/12/2003.

---- (2007a), Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, BOE núm. 150, de 23 de junio de 2007, páginas 27150 a 27166.

---- (2007b), Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, BOE, núm. 276, de 17 de noviembre de 2007, páginas 47160 a 47165.

---- (2013a), Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, BOE, núm. 295, Sec. I, pág. 97922.

---- (2013b), Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2013, páginas 106430 a 106473.

CONSEJO DE EUROPA (2005), *Código Europeo de Conducta para la integridad política de los representantes locales electos*, Estrasburgo.

---- (2008), *Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos*,

doc. 18-VI-209, Estrasburgo.

CONSEJO DE MINISTROS (2005), Orden APU/516/2005 de 3 de marzo por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, 18 de febrero de 2005.

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (2015), *Proyecto de Plan Estratégico (2015-2016)*, Madrid.

COTINO, L. (2013), 'Derecho y «Gobierno Abierto». La regulación de la transparencia y la participación y su ejercicio a través del uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales por las Administraciones públicas. Propuestas concretas', Monografías de la *Revista Aragonesa de Administración Pública*, XIV, Zaragoza, 2013.

COURSEY, D., NORRIS, D. (2008), 'Models of e-government: Are they correct? An empirical assessment', *Public Administration Review*, 68(3), 523-536.

CRIADO, J. I. (2012), 'Redes sociales y *Open Government*: hacia unas Administraciones Locales en red y abiertas', nº 18/19 *Revista Democracia y Gobierno Local*, Madrid.

CROZIER, M., HUNTINGTON, S., Y WATANUKI, J. (1975), *The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission*, New York, New York University Press.

CRUZ RUBIO, C. N. (2011), 'Convergencias y disparidades en las teorías sobre el cambio de las políticas públicas: una revisión preliminar y una propuesta de integración tipológica'. *Administración & Desarrollo*, 39(54), 99-118, Bogotá.

---- (2014a) 'Compromisos y Evaluación del Plan de Gobierno Abierto de España en el marco del OGP 2012-2013' en Mendizábal Allende, R. (2014) *Gobierno Abierto y Open Data*, *Revista Actualidad Administrativa*, núm. 7-8, monográfico especial, pp. 815-826.

---- (2014b), *Informe de Avance España 2012-2013*, Independent Reporting Mechanism, Open Government Partnership, Washington, D.C.

- CUENCA, J. *ET AL* (2013), 'Un gobierno abierto y transparente en los municipios españoles: el caso de Quart de Poblet (Valencia)', XI Congreso AECPA, Sevilla, 18-20 de septiembre de 2013.
- DAHL, R. (2008), *La igualdad política*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- DE LOS RÍOS, N., ORTIZ DE ZÁRATE, A. (2012), 'Gobierno Abierto, la experiencia del País Vasco' (Irekia y Open Data Euskadi)' en Hofmann, A., Ramírez Alujas, A. y Bojórquez Pereznieto, J.A (2012) *La Promesa del Gobierno Abierto*.
- DELLA PORTA, D., (2000), 'Social Capital, Beliefs in Government, and Political Corruption', en Pharr, S. J., Putnam, R. D., (eds.), *Disaffected Democracies. What's Troubling the Trilateral Countries*, Princeton, Princeton University Press, pp. 202-228.
- DENHARDT, J. V. Y DENHARDT, R. B. (2003), *The New Public Service: Serving, not Steering*, Armonk, M. E. Sharpe.
- DESCALZO, A. (2014), 'Buen gobierno: ámbito de aplicación, principios generales y de actuación, infracciones disciplinarias y conflicto de intereses', en Guichot, E. *et al.*, *Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: Estudio de la ley 12/2013 de 9 de diciembre*, Tecnos, Madrid.
- DIMAGGIO, P., POWELL, W. (1983), 'The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields' *American Sociological Review*, volume 48, Issue 2 (April 1983) Yale University, Connecticut.
- (1991), *The New Institutionalism Organizational Analysis*, University Chicago Press, Chicago.
- DOLOWITZ, D.P. Y MARSH, D. (2000), 'Learning from abroad: the role of policy transfer in contemporary policy-making', *Governance*, 13 (1), 5–24.
- DUPUY, J., PÉREZ, H. (2012), 'Gobierno abierto y publicidad oficial: de la teoría a la práctica' en Hofmann, A., Ramírez Alujas, A. y Bojórquez Pereznieto, J.A (2012) *La Promesa del Gobierno Abierto*.

- DURKHEIM, E. (2001), *Las reglas del método sociológico*, Fondo de Cultura Económica, México.
- EASTON, D. (1965), *A System Analysis of Political Life*, Chicago, Chicago University Press.
- EISENHARDT, K. M. (1989), 'Building Theories from Case Study Research', *Academy of Management Review*, 14 ( 4): 532-550.
- ESTEFANÍA (dir.) et al. (2014), *Informe sobre la democracia en España: democracia sin política*, Fundación Alternativas, Madrid.
- (dir.) et al. (2013), *Informe sobre la democracia en España: un gran salto hacia atrás*, Fundación Alternativas, Madrid.
- EUDEL (2013), *Guía para la puesta en marcha y gestión de la transparencia municipal*, Bilbao.
- FEMP (2009), *Código de Buen Gobierno Local*, Madrid.
- (2014a), *Informe de resultados sobre portales de transparencia y datos abiertos*, Madrid.
- (2014b), *Ordenanza Tipo de transparencia, acceso a la información y reutilización*, Madrid.
- (2015a), 'Nace la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la participación ciudadana', *Revista de la Federación Española de Municipios y Provincias*, Madrid, Febrero 2015.
- (2015b), *Nuevo Código de Buen Gobierno Local*, Madrid.
- (2015c), Nota de prensa 'La FEMP y el MINHAP comprometidos con la transparencia y el buen gobierno en las entidades locales', noticia en página web:[http://femp.es/Portal/Front/ContenidoDetalle/\\_fxSSGDnKJvMHONf6iLM8g\\_3x8Zm115bqd-KeyFuJCmI](http://femp.es/Portal/Front/ContenidoDetalle/_fxSSGDnKJvMHONf6iLM8g_3x8Zm115bqd-KeyFuJCmI)



- FERNÁNDEZ, L. (2017), '¿Cómo se elabora un cuestionario? Bolletí La Recerca, Ficha 8 de marzo, Universidad de Barcelona, Barcelona.
- FERRÁNDIZ J.P. (2013), 'La corrupción en la vida pública y la clase política' en Metroscopia, *Clima social en España*, enero 2013, Madrid.
- FLEURY, S. (2002), 'El desafío de la gestión de las redes de actores', *Revista Instituciones y Desarrollo*, 12-13: 221-247.
- FMI (1997), *Good Governances: The IMF'S Role*, Washington D.C
- GANUZA, E., FRANCÉS, F.J. (2008), '¿A qué llamamos participar en democracia? Diferencias y similitudes en las formas de participación', *Revista Internacional de Sociología*, LXVI (49), pp. 89-113.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, E., (1985), 'La organización y sus agentes: revisión de estructuras', en *La Administración Española* (4ª ed.), Madrid, Alianza.
- GARRIDO, A., Y PARRA, F. (2009), 'Nuevo Institucionalismo y Políticas Públicas', Comunicación IX Congreso AEPCA, 23-24 de septiembre, Málaga.
- GOBIERNO DE EEUU (2009), *Memorandum on Transparency and Open Government*, Executive Office of the President of United States of America, Washington DC.
- GOBIERNO DE ESPAÑA (2012), *Primer Plan Nacional de España de Gobierno Abierto (2012-2013)*, Madrid.
- (2014a), Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. BOE 5-11-2014 (Sec. I, pág. 90451).
- (2014b), *Segundo Plan Nacional de España de Gobierno Abierto (2014-2015)*, Madrid.
- (2015), Portal de Transparencia del Gobierno de España [www.transparencia.gob.es](http://www.transparencia.gob.es), Madrid.

- GÓMEZ FORTES, B., PALACIOS, I., VARGAS-MACHUCA, R. Y PÉREZ YRUELA, M. (2010), *Calidad de la democracia en España. Una auditoría ciudadana*, Editorial Ariel, Barcelona.
- GONZÁLEZ SANMAMED, M. (1993), *Perspectivas para el desarrollo del conocimiento profesional de los profesores en formación*, Tesis Doctoral, Universidad de Santiago de Compostela.
- GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (2015), *Proposición no de ley para la aprobación de la Estrategia de Gobierno Abierto*, Congreso de los Diputados, Registro 20/3/2015.
- GÜEMES, C. M., RAMÍREZ-ALUJAS, A. (2012), ‘Gobierno abierto, reforma del Estado y modernización de la gestión pública: alcances, obstáculos y perspectivas en clave Latinoamericana’ en Hofmann, A., Ramírez Alujas, A. y Bojórquez Pereznieto, J.A (2012), *La Promesa del Gobierno Abierto*.
- GUERRERO, O. (2003), ‘Nueva gerencia pública: ¿gobierno sin política?’, *Revista Venezolana de Gestión*, 8 (23): 379-395.
- GUICHOT, E. ET AL. (2014), *Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Estudio de la ley 12/2013 de 9 de diciembre*, Tecnos, Madrid.
- GUTIERREZ, E. (2015), *Casuística comparada en derecho de acceso: el Reino Unido y la Unión Europea. Criterios orientadores para el ámbito local español*. Seminario Alta Dirección, Fundación Ortega Marañón, Madrid.
- HARLAN, Y., ROBINSON, D.G. (2012), ‘The New Ambiguity of Open Government’, *UCLA Law Review Discourse*, 178, Los Ángeles.
- HEDSTRÖM, P. (2005), *Dissecting the Social: On Principles of Analytic Sociology*, Cambridge University Press, Cambridge.
- HELD, D. (2001), *Modelos de democracia*, Alianza Editorial, 3a edición, Madrid.

- HENRÍQUEZ, O., MORALES, M. (2009) *Guía Metodológica para la formulación de políticas públicas regionales*, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administración, Gobierno de Chile.
- HOOD, C. (1989), 'Public administration and public policy: Intellectual challenges for the 1990s', *Australian Journal of Public Administration* 48, University of Camberra.
- HOUSTON, B., (2010), 'Freedom of Information Acts: promises and realities' en *Open Government: Transparency, Collaboration and, Participation in Practice*, editado por Lathrop & Laurel R.T. Ruma, O'reilly e-books.
- HUGHES, O. E. (1996), 'La Nueva Gestión Pública', en Subirats, J., y Brugué, J. (coords.), *Lecturas de Gestión Pública*, Madrid, INAP.
- INNERARITY, D. (2006), 'El Poder Cooperativo: Otra forma de Gobernar' *Cuadernos de Liderazgo*, núm. 2, sesión académica ESADE, 2 de Febrero de 2006, Barcelona.
- IZQUIERDA UNIDA (2015), *Programa Maco Municipal y Autonómico 2015*, disponible en [http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Programa\\_Marco\\_Electoral\\_Municipales\\_Autonomicas\\_IU\\_2015.pdf](http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Programa_Marco_Electoral_Municipales_Autonomicas_IU_2015.pdf)
- JAEGER, P.T. (2003), 'The endless wire: E-Government as global phenomenon', *Government Information Quarterly*, 20, págs. 323–331.
- JIMÉNEZ, F. (2015), 'La corrupción y sus dimensiones', en Llera, F., *Desafección política y regeneración democrática en la España actual* (pendiente de publicación).
- JOHN, P. (1998), *Analysing Public Policy*, London, Continuum.
- JONES, B. Y BAUMGARTNER, F., (2005), *The Politics of Attention*, Chicago, University of Chicago Press.
- JORDAN, A.G. Y RICHARDSON, J.J. (1987), *Government and Pressure Groups in Britain*, Oxford, Clarendon Press.
- KELMAN, S. (1981), 'Cost-Benefit Analysis: An Ethical Critique', *AEI Journal on*

- Government and Society Regulation* (January/February), págs. 33-40.
- KETTL, D. F. (2006), 'La Modernización del Gobierno: un Simposio', *Revista Internacional de Ciencias Administrativas*, 72 (3): 331-5.
- KINGDON, J.W. (1984), *Agendas, Alternatives and Public Policies*, New York, Harper Collins.
- (1995), *Agendas, alternaives and public policies* (2ª edición), Nueva York, Harper Collins.
- KLIJN, E. H. (1998), 'Redes de actores públicas: una visión general', disponible en: <http://revista-redes.rediris.es/webredes/textos/Complex.pdf>
- KLITGAARD, R. (1988), *Controlling corruption*, Berkeley, University of California Press.
- KNOEPFEL, P. et al. (2007), *Public Policy Analysis*, Police Press, Bristol.
- KOIMAN, J. (2005), *Governing in Governance*, SAGE Publications, Londres.
- LAGUNA PLATERO, A (2013), 'La percepción de la corrupción, factor mediatizante de la democracia' *OBETS Revista de Ciencias Sociales*, Vol. 8, nº 1, págs. 79-98.
- LAHERA, E. (2002), *Introducción a las Políticas Públicas*, FCE, Santiago de Chile.
- LEE, G., KWAK, Y. H. (2011), *An Open Government implementation model: moving to increased public engagement*, IBM Center for the Business of Government, Washington D.C.
- LIKANEN, E. (2003), 'La administración electrónica para los servicios públicos europeos del futuro', *Lección inaugural del curso académico 2003-2004 de la UOC*, Barcelona, UOC, disponible en <http://www.uoc.edu/inaugural03/esp/article/index.html>.
- LIJPHART, A. (1971), 'Comparative Politics and the Comparative Method', *American Political Science Review*, Vol. 65, No. 3, págs. 682-693.
- (2000), *Modelos de democracia*, Barcelona, Ariel.

- LINARES, J. (2010), 'Las 10 claves para entender la colaboración en el Modelo Open Government', en Calderon, C., Lorenzo, S., *Open Government*, Colección Algón 5, Algón Editores, Jaén.
- LINDBLOM, C.E. (1979), 'Still muddling, not yet through', *Public Administration Review*, 39: 517–525.
- LIZCANO ÁLVAREZ, J. (2013), 'Diagnóstico y propuestas sobre la nueva Ley de Transparencia', en sitio web de Transparencia Internacional España.
- LÓPEZ PAGÁN, J. (2013), 'Open Government: un modelo interactivo entre el gobierno y la sociedad', *IV Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG*, Instituto Nacional de Administración Pública, 23 y 24 de septiembre de 2013, Madrid.
- *et al.* (2012), 'Transparencia, rendición de cuentas y participación: una agenda común para la cohesión social y la gobernanza en América Latina', nº 6 *Colección de Estudios sobre políticas locales y regionales*, URB-AL III, Barcelona.
- MARIEN, S. (2011), 'Measuring Political Trust across Time and Space', en Zmerli S., Hooghe, M., (eds.), *Political Trust. Why Context Matters*, Colchester, ECPR Press, pp. 13-37.
- MAROTTE, J. (2014) 'El campo semántico de la desafección política', *Revista de Ciencia Política de la ciudad de Buenos Aires a la Aldea global*, Revista nº 21 'Teoría política e historia'.
- MARSH, D. Y RHODES, R.A.W. (1992), 'Policy Communities and Issue Networks: Beyond Typology', en Marsh, D. y Rhodes, R.A.W. (eds.), *Policy Networks in British Government*, Oxford, Oxford University Press.
- MARTÍNEZ, F (2002), 'El cuestionario: un instrumento para la investigación en las ciencias sociales', Laertes Psicopedagogía, Barcelona.
- MARTÍNEZ CARAZO, P. C. (2006), 'El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica', *Pensamiento y Gestión*, núm. 20, julio, págs. 165-

193, □ Universidad del Norte □ Barranquilla.

MARTÍNEZ PUJÓN, R. (2012), ‘Gobierno Abierto: ¿más gobierno o más ciudadanía?’ en Hofmann, A., Ramírez Alujas, A. y Bojórquez Pereznieto, J.A (2012) *La Promesa del Gobierno Abierto*.

MCBETH, M., JONES, M., Y SHANAHAN, E., (2014), ‘The Narrative Policy Framework’ en Sabatier, P., y Weible, C. (ed.), *Theories of the Policy Process* (3ª ed.), Boulder, Westview Press.

MENDEL, T., Y KARANICOLAS, M. (2012), *Open Government Without RTI? The conspicuous weakness of RTI reform within OGP Action Plans*, Center for Law and Democracy, Washington D.C.

MERINO, M. (2005), *Transparencia: libros, autores e Ideas*, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) – Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México.

METROSCOPIA (2013) ‘Clima social en España febrero 2013: el caso Bárcenas’, disponible en <http://www.metroscopia.org/datos-recientes/climasocial>

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (2011), *Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza* 2, disponible en [http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Estrategia2011/Documents/Estrategia\\_2011-2015\\_PA2.pdf](http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Estrategia2011/Documents/Estrategia_2011-2015_PA2.pdf)

MISHLER, W., ROSE, R. (2001), ‘What Are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies’, *Comparative Political Studies*, 34(1): 30-62.

MONTERO, J. ET AL. (2007), *Ciudadanos, asociaciones y participación en España*, Madrid, CIS.

MOORE, M.H. (1997), *Creating Public Value: Strategic Management in Government*, Harvard’s Kennedy School of Government, Harvard University Press, Cambridge.

- MORÁN RUBIO, I. (2011), *Aversión por la política versus ¿valoración de la democracia?*, disponible en <http://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/articulo/opinion/2011/1/30/5760.html>.
- MORATA, F. (2004), *Gobernanza multinivel en la Unión Europea*, Barcelona, Tirant lo Blanch.
- NATERA, A. (2004), *La noción de gobernanza como gestión pública participativa y reticular*, Documentos de Trabajo, Política y Gestión 2/2004, Universidad Carlos III, Madrid.
- NAVARRO, V., (2014), *Por que surgió el 15M y porqué le siguió Podemos*, Periódico digital El Público, Madrid.
- NEILL, J. (2011), 'The Mutual Dependence of Institutions and Citizens. Dispositions in Liberal Democracies', en *Public Reason*, 3 (1): 3-21.
- NEILSON, S. (2001), *Knowledge Utilization and Public Policy Processes: A Literature Review*, IDRC Supported Research and its influence in public policy, December 2001.
- NEWTON, K., NORRIS, P. (1999), *Confidence in Public Institutions: Faith, Culture or performance*, Harvard University, J. F. Kennedy School of Government, Cambridge.
- NORRIS, P. (1999a). 'Introduction: The Growth of Critical Citizens?' en Norris, P., (ed.), *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government*, Oxford, Oxford University Press, pp. 1-27.
- (1999b). "Institutional Explanations for Political Support," in Norris, P., ed., *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government*, Oxford, Oxford University Press, pp. 217-235.
- NORTH, D. (2005), *Understanding the process of economic change*, Princeton University Press, Princeton.

- O'DONELL, G. (2000), 'Teoría Democrática y Política Comparada', en *Desarrollo Económico*, vol. 39, No 56, enero-marzo, págs. 519-570, Buenos Aires.
- OCDE (1995), *Governance in transition, public management reforms in OECD countries*, París.
- (2005), *Modernizing government: the way forward*, París.
- (2006), *La modernización del Estado: el camino a seguir*, INAP-MAP, Madrid.
- (2009), *Open Government: beyond static measures*, París.
- (2010), 'OECD Guiding Principles for Open and Inclusive Policy Making' en *Building an open and innovative government for better policies and service delivery*, París, 8-9 de junio de 2010.
- (2011), *Together for Better Public Services*, París.
- (2013), *Government at a glance*, París.
- (2015), *The OECD: A partner in Open Governments reforms*, París.
- OGP (2011), *Declaración de Gobierno Abierto*, Washington D.C
- ONTSI (2013a), *Estudio de la demanda y uso del Gobierno Abierto en España*, Madrid.
- (2013b), *Estudio sobre objetivos, estrategias y actuaciones nacionales e internacionales en materia de gobierno abierto*, Madrid.
- ONU (1966), *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 2200 A(XXI), 16 de diciembre de 1966, Nueva York.
- ORMON, D. Y LÖFFLER, E. (1998), 'New Public Management: what to take and what to leave', *III International Conference of CLAD on State and Public Administration Reform*, Madrid.
- OSZLAK, O. (2012), 'Gobierno Abierto: Promesas, Supuestos, Desafíos', Trabajo



presentado en la VIII Conferencia Anual INPAE 2012 ‘Gobierno Abierto: Por una gestión pública más transparente, participativa y colaborativa’, 25 de abril de 2012, San Juan de Puerto Rico.

---- Y KAUFMAN, E. (2014), *Teoría y práctica del gobierno abierto: Lecciones de la experiencia internacional*, OEA, Washington D.C.

PALAU, A.M., DAVESA, F. (2013), ‘El impacto de la cobertura mediática de la corrupción en la opinión pública española’. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 144, págs. 97-126, Madrid.

PARENT, M. ET AL. (2005), ‘Building citizen trust through e-government’, en *Government Information Quarterly*, 22, págs. 720-736.

PARSONS, W. (2007), *Políticas Públicas. Una Introducción a la Teoría y Práctica del Análisis de Políticas Públicas*, FLACSO México.

PARTIDO POPULAR (2015), Programa Electoral ‘Aún queda mucho por hacer’, elecciones municipales 2015, disponible en [http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/af\\_pp\\_programa-municipales\\_2015\\_actualizado-20.03.15.pdf](http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/af_pp_programa-municipales_2015_actualizado-20.03.15.pdf)

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (2015a), *Programa Marco Municipal. Elecciones 24 de mayo de 2015* en <http://www.psoe.es/source-media/000000626500/000000626914.pdf>

---- (2015b), Portal de transparencia en <http://www2.psoe.es/transparencia/>

PESCHARD MARISCAL, J. (2012), ‘Del gobierno abierto a la transparencia proactiva: la experiencia del IFAI en 2011’ en Hofmann, A., Ramírez Alujas, A., Bojórquez Pereznieto, J.A, *La Promesa del Gobierno Abierto* en <http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/La%20promesa%20del%20Gobierno%20Abierto.pdf>

PETERS, B. G., PIERRE, J. (2005), ‘¿Por qué ahora el interés por la gobernanza?’ en Cerrillo Martínez, A. (coord.), *La gobernanza hoy: 10 textos de referencia*,

Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública.

PETTIT, P. (1999), *Republicanism. Una teoría sobre la libertad y el gobierno*, Barcelona, Paidós.

PHARR, S. J., PUTNAM, R.D. (2000), *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?*, Princeton, Princeton University Press.

PNUD (1997), *Reconceptualising Governance* Discussion Paper, 2, Management Development and Governance Division, Bureau for Policy and Programme Support, Nueva York.

POCHARD, M. (2007), 'Sobre el gobierno receptivo, responsable y respetado. Hacia una 'nueva' teoría de la Administración pública, por Jocelyne Bourgon', *Revista Internacional de Ciencias Administrativas*, 73 (1): 27-29.

PODEMOS (2015a), *215 Medidas para un proyecto de país; el Programa del cambio*, en [http://podemos.info/wp-content/uploads/2015/05/prog\\_marco\\_12.pdf](http://podemos.info/wp-content/uploads/2015/05/prog_marco_12.pdf)

---- (2015b), *Portal de transparencia de Podemos*, disponible en <http://transparencia.podemos.info/>

POLAVIEJA, J. (2013), 'Economic Crisis, Political Legitimacy, and Social Cohesion,' en Gallie, D. (ed.), *Economic Crisis, Quality of Work and Social Integration: The European Experience*, Oxford, Oxford University Press, pp. 256-278.

POLLIT, CH. (1990), *Managerialism and the Public Services. The Anglo-American Experience*, Oxford, Blackwell.

---- (2007), 'Hacia una 'nueva' teoría de la Administración pública: algunos comentarios sobre la V Conferencia Braibant, de Jocelyne Bourgon', *Revista Internacional de Ciencias Administrativas*, 73 (1): 39-43.

PRATS I CATALÀ, J. (2005), *De la burocratización al management, del management a la gobernanza*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública.

RAMIÓ, C. (2001), 'Los problemas de la implantación de la Nueva Gestión Pública en las

Administraciones Públicas Latinas: modelo de Estado y cultura institucional’, *Revista del CLAD Reforma y Democraci*, núm. 21, Caracas.

----, Y SALVADOR, M. (2005), *Instituciones y Nueva Gestión Pública en América Latina*, Barcelona, Fundación CIDOB, Barcelona.

RAMÍREZ ALUJAS, A. (2010), ‘Innovación en la Gestión Pública y Open Government (Gobierno Abierto): Una vieja nueva idea’, *Revista Buen Gobierno*, núm 9, México D.F., págs. 94-133,.

---- (2011), ‘Gobierno abierto y modernización de la gestión pública: Tendencias actuales y el (inevitable) camino que viene. Reflexiones seminales’. *Revista Enfoques*, núm. 15, Universidad Central de Chile, Santiago de Chile págs. 99-125,.

---- (2012), ‘Gobierno abierto es la respuesta: ¿Cuál era la pregunta?’, *Revista Más Poder Local*, núm 12, Madrid, págs. 14-22.

----, Y GÜEMES, C. (2012), ‘Gobierno Abierto: oportunidades y desafíos. Una reflexión socio-política con la mirada puesta en Latinoamérica’, *XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles*, Nov 2012, Madrid, Trama editorial, CEEIB, pp.369-384.

RAMÍREZ BROUCHOUD, M.F. (2007), *El diseño de la agenda política y la construcción de alternativas de solución en la política de inmigración española*, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.

REAL DATO, J. (2007) ‘Mecanismos de cambio en las políticas públicas: propuesta de un marco teórico conceptual sintético’, VIII Congreso Español de Ciencia Política y Administración ‘Política para un mundo en cambio’, 18-20 de septiembre, Valencia.

RETORTILLO, M. (1997), ‘Reflexiones de urgencia sobre el Informe Nolan’, *Revista Aragonesa de Administración Pública*, núm. 11.

RHODES, R. A. W. (1999), *Understanding governance. Policy networks, governance, reflexivity and accountability*, Filadelfia, Open University Press.

- RIVAROLA, A. (2007), 'Espejos de cambio: empresarios industriales en Chile y Uruguay', *Revista CEPAL* núm. 91.
- RIVERO ORTEGA, R (2012), *La necesaria innovación en las instituciones administrativas*, Madrid, INAP.
- RODRÍGUEZ PEÑUELAS, M.A. (2010), *Métodos de investigación: diseño de proyectos y desarrollo de tesis en ciencias administrativas, organizacionales y sociales*, Universidad Autónoma de Sinaloa.
- ROSANVALLON, P. (2007), *La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*, Manantial, Buenos Aires.
- RUANO DE LA FUENTE, J.M. (2010), 'La participación: discurso y realidad de las experiencias de participación ciudadana', *Política y Sociedad*, 2010, Vol. 47 Núm. 3: 93-108.
- RUILOBA, J. (2014), '¿Es el gobierno local un nuevo espacio para la participación ciudadana? El punto de vista de los alcaldes. El caso español', *Estudios Políticos*, núm. 44, enero-junio, Instituto de Estudios Políticos Medellín, Colombia, 2014, págs. 55-73.
- SABATIER, P. (1993), *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*, Boulder, CO, Westview Press.
- (1998), 'The advocacy coalition framework: revisions and relevance for Europe', *Journal of European Public Policy*, 5 (1): 98-130.
- Y JENKINS-SMITH, H. (1988) 'An Advocacy Coalition Model of Policy Change and the Role of Policy Oriented Learning Therein', *Policy Sciences* 21, págs. 129-168.
- Y JENKINS-SMITH, H. (1993), *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*, Boulder, Westview Press.
- SANCLIMENT CASADEJÚS, X. (2014), 'Intraemprendedores dentro de la Administración Pública: liderazgo del proceso de cambio hacia el Open Government', *V*

*Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG, INAP*, 29, 30 de septiembre y 1 octubre 2014, Madrid.

SAVOIE, D. (1995), 'What is Wrong with the New Public Management', *Canadian Public Administration Review*, 38(1): 112-121.

SHIRKY, C. (2012), *Excedente cognitivo: creatividad y generosidad en la era conectada*, Deusto, Grupo Planeta, Barcelona.

SIMON H.A. (1957) *Models of Man: Social and Rational*, Nueva York, John Wiley and Sons.

STOKER, G. (1998), 'Governance as Theory: Five Propositions', *International Social Science Journal*, 50 (155), págs. 17-28.

STONE, D. (1989), 'Causal Stories and the Formation of Policy Agendas' *Political Science Quarterly* 104, págs. 281-300.

SUBIRATS, J. (2001), 'Nuevos mecanismos participativos y democracia', en Font, J. (coord.), *Ciudadanos y decisiones públicas*, Barcelona, Ariel.

---- (2011), *Otra Sociedad. ¿Otra Política?*, Icaria, Barcelona.

SUNSTEIN, C. (2014), *The Case for Libertarian Paternalism*, Conferencia Magistral celebrada en CIDE, México D.F.

---- Y THALER, R. (2003) 'Libertarian Paternalism', *The American Economic Review*, 93 (2), Pittsburg, University of Virginia.

SUNYER, R. (2014), *¿Hacia una gestión pública cooperativa y colaborativa?*, Universitat Oberta de Catalunya , Barcelona.

TAMAYO, M. (2007), *El proceso de la investigación científica*, México DF, Limusa Noriega.

THEOBALD, C., (1999), 'The World Bank: Good Governance and the new institutional economics', *Law and State*, vol. 59/60.

- TORCAL, M. (2015), 'Desafección política en España en una perspectiva comparada', en Llera, F., *Desafección política y regeneración democrática en la España actual* (pendiente de publicación).
- Y MONTERO, J. (2000), 'La desafección política en España: un legado que condiciona el presente', *Revista de Occidente*, 227, abril 2000, págs. 15-30, Fundación Ortega y Gasset, Madrid.
- TORRADO, M. (2004), 'Estudios de encuesta', en Bisquerra, R. (coord.), *Metodología de la investigación educativa*, Madrid, Muralla.
- TOTO, M. C. (2000): 'Participación ciudadana', en Baca Olamendi, L. et al., *Léxico de la Política*, FLACSO-SEPCONACYT, Fundación Heinrich Böll, Fondo de Cultura Económica, México.
- TRUE, J.L., JONES, B.D. BAUMGARTNER, F.R. (2007), 'Punctuated-Equilibrium Theory' en Sabatier, P. *Theories of the Policy Process*, Second Edition, Boulder, Westview Press, págs. 155-188.
- VALLÈS, J.M. (2015), '¿Regeneración democrática sin contexto? Las condiciones difíceles para un cambio', en Llera, F., *Desafección política y regeneración democrática en la España actual* (pendiente de publicación).
- VELÁSQUEZ, R. (2009), 'Hacia una nueva definición del concepto "política pública"', *Revista Desafíos*, Bogotá, Colombia, (20) 149-187.
- VILLORIA, M. (2006a) '¿Por qué desconfiamos de los políticos? Una teoría sobre la corrupción de la política', *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, núm 34, febrero.
- (2006b), "Corrupción y Liderazgo Público", Ponencia en VII Congreso Español de Ciencia Política y Administración: Democracia y Buen Gobierno.
- (2012), 'El Gobierno Abierto como subsistema de políticas: una evaluación desde el institucionalismo discursivo' en Hofmann, A., Ramírez Alujas, A. y Bojórquez Pereznieto, J.A. (2012), *La Promesa del Gobierno Abierto*, en

<http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/La%20promesa%20del%20Gobierno%20Abierto.pdf>

- (2014), *La publicidad activa en la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno: posibilidades e insuficiencias*, Govern Obert, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
- (2015), ‘Transparencia y Rendición de Cuentas’, en Llera, F., *Desafección política y regeneración democrática en la España actual* (pendiente de publicación).
- Y JIMÉNEZ, F. (2012) ‘La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción y efectos’, *REIS*, 138, abril-junio 2012, págs.109-134, Madrid.
- WEIBLE, C. (2014), ‘Introduction’ en Sabatier, P., y Weible, C. (eds.), *Theories of the Policy Process* (3ª ed.), Boulder, Westview Press.
- WEST, M. (2004), ‘E-government and the transformation of service delivery and citizen attitudes’, *Public Administration Review*, 64 (1), 15–26.
- YIN, R. K., (2003), *Case Study Research. Designs and Methods* (3ª ed.), Thousand Oaks, Sage.
- ZAHARIADIS, N., (1992) ‘To Sell or Not to Sell? Telecommunications Policy in Britain and France’, *Journal of Public Policy* 12 (1992), Cambridge University Press, Cambridge (UK)
- ZÚJAR, J.A. (2012), *Relación entre Gobernanza y Nueva Gestión Pública*, en [joseantoniozujar.blogspot.com](http://joseantoniozujar.blogspot.com).

## **DOCUMENTOS ANEXOS**



## ÍNDICE DE DOCUMENTOS ANEXOS

ANEXO 1	DECLARACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO (OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP)
ANEXO 2	MEMORÁNDUM SOBRE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO (BARACK OBAMA, 2009)
ANEXO 3	LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
ANEXO 4	INFORME ESPAÑA 2012-2013 - MECANISMO DE REVISIÓN INDEPENDIENTE (OGP)
ANEXO 5	PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA PARA LA APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO
ANEXO 6	ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN (FEMP)
ANEXO 7	NUEVO CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL (FEMP)
ANEXO 8	LISTADO DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS A LA RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN (FEMP)
ANEXO 9	CUESTIONARIO SOBRE 'POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO LOCAL ESPAÑOL'
ANEXO 10	RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE 'POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO LOCAL ESPAÑOL'

## **ANEXO 1**

### **MEMORÁNDUM SOBRE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO (BARACK OBAMA, 2009)**



## **MEMORÁNDUM SOBRE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO**

**Presidente de los Estados Unidos de América  
Barack Obama (2009)**

Mi administración está comprometida con la creación de un nivel sin precedentes de apertura en el Gobierno. Vamos a trabajar juntos para recuperar la confianza de los ciudadanos poniendo en marcha mecanismos de transparencia, participación y colaboración. La apertura fortalecerá nuestra democracia y promoverá la eficiencia y la eficacia en el gobierno.

El gobierno debe ser transparente. La transparencia promueve la rendición de cuentas y proporciona información a los ciudadanos sobre lo que su Gobierno está haciendo. La información en poder del Gobierno Federal es un bien nacional. Mi administración adoptará las medidas apropiadas, de conformidad con la legislación y la política, para divulgar información de forma ágil y que puedan utilizar fácilmente. Departamentos y organismos ejecutivos deberán aprovechar las nuevas tecnologías para publicar información *on line* acerca de sus actuaciones. Departamentos y organismos ejecutivos también deben solicitar opinión a la ciudadanía para identificar la información de mayor utilidad para el público.

El gobierno debe ser participativo. El compromiso público mejora la eficacia del Gobierno y mejora de la calidad de sus decisiones. El conocimiento está ampliamente disperso en la sociedad y las autoridades públicas deben tener acceso a ese conocimiento disperso para poder beneficiarse del mismo. Departamentos y agencias deben ofrecer a los estadounidenses mayores oportunidades de participar en la formulación de políticas y proporcionar a su Gobierno los beneficios de su experiencia. Departamentos y organismos ejecutivos también deben solicitar la opinión pública sobre cómo podemos aumentar y mejorar las oportunidades para la participación de los ciudadanos en el Gobierno.

El gobierno debe promover la colaboración. La colaboración involucra activamente a los estadounidenses en el trabajo de su Gobierno. Departamentos y organismos ejecutivos deben utilizar herramientas innovadoras, métodos y sistemas para cooperar entre sí mismos, a través de todos los niveles de gobierno, y con las organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y particulares del sector privado. Departamentos y organismos ejecutivos deben solicitar opinión a los ciudadanos sobre el impacto de las políticas para realizar una adecuada evaluación para mejorar su nivel de colaboración e identificar nuevas oportunidades de cooperación.

Dirijo el Oficial Jefe de Tecnología, en coordinación con el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto y al Administrador de Servicios Generales, para coordinar el desarrollo del presente Memorándum en los próximos 120 días entre los departamentos y agencias ejecutivas que deberán cumplir con las recomendaciones de la Directiva de Gobierno Abierto Directiva, que emitirá el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto que instruirá a los departamentos y organismos para tomar acciones específicas de aplicación de los principios enunciados en la presente declaración. Los organismos independientes también deben cumplir con la Directiva de Gobierno Abierto.

Este memorándum no pretende, y no, crea ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutable en derecho o en equidad por una parte contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona.

Barack Obama

## **ANEXO 2**

**DECLARACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO (OPEN  
GOVERNMENT PARTNER SHIP)**



## DECLARACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO

Septiembre de 2011

Como integrantes de la Alianza para el Gobierno Abierto, comprometidos con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno:

Reconocemos que los pueblos del mundo entero exigen una mayor apertura en el gobierno. Piden mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y buscan la forma de que sus gobiernos sean más transparentes, sensibles, responsables y eficaces.

Reconocemos que los países se encuentran en diferentes etapas en sus esfuerzos por promover la apertura en el gobierno y que cada uno de nosotros busca un planteamiento coherente con nuestras prioridades y circunstancias nacionales y las aspiraciones de nuestros ciudadanos.

Aceptamos la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer nuestros compromisos con miras a promover la transparencia, luchar contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para que el gobierno sea más eficaz y responsable.

Defendemos el valor de la apertura en nuestro compromiso con los ciudadanos para mejorar los servicios, gestionar los recursos públicos, promover la innovación y crear comunidades más seguras. Adoptamos los principios de transparencia y gobierno abierto para que haya más prosperidad, bienestar y dignidad humana en nuestros propios países y en un mundo cada vez más interconectado.

Juntos, declaramos nuestro compromiso a:

Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales. Los gobiernos recogen y almacenan la información en nombre de las personas, y los ciudadanos tienen derecho a solicitar información sobre las actividades gubernamentales. Nos comprometemos a promover un mayor acceso a la información y divulgación sobre las actividades gubernamentales en todos los niveles de gobierno.

Nos comprometemos a esforzarnos más para recoger y publicar de forma sistemática datos sobre el gasto público y el rendimiento de las actividades y los servicios públicos esenciales. Nos comprometemos a proporcionar activamente información de alto valor, incluidos los datos primarios, de manera oportuna, en formatos que el público pueda encontrar, comprender y utilizar fácilmente, y en formatos que faciliten su reutilización.

Nos comprometemos a proporcionar acceso a recursos eficaces cuando la información o los registros correspondientes sean retenidos indebidamente, incluso mediante una supervisión eficaz del proceso de recurso. Reconocemos la importancia de los estándares abiertos para promover el acceso de la sociedad civil a los datos públicos, así como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información del gobierno.

Nos comprometemos a solicitar comentarios del público para saber cuál información le es más valiosa, y nos comprometemos a tomar en cuenta esos comentarios en la mayor medida posible.

Apoyar la participación ciudadana. Valoramos la participación de todas las personas, por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas. La participación del público, incluida la participación plena de las mujeres, hace aumentar la eficacia de los gobiernos, que se benefician de los

conocimientos, las ideas y la capacidad de la gente para proporcionar supervisión. Nos comprometemos a hacer más transparentes la formulación de políticas y la toma de decisiones, mediante el establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, y el aumento de la participación del público en la realización, el seguimiento y la evaluación de las actividades gubernamentales. Nos comprometemos a proteger la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil para que su funcionamiento sea coherente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, de asociación y de opinión. Nos comprometemos a crear mecanismos que permitan una mayor colaboración entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y las empresas.

Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros gobiernos. Un gobierno responsable requiere altos estándares éticos y códigos de conducta para sus funcionarios públicos. Nos comprometemos a tener políticas, prácticas y mecanismos sólidos contra la corrupción, que garanticen la transparencia en la gestión de las finanzas públicas y las compras gubernamentales, y que fortalezcan el imperio de la ley. Nos comprometemos a mantener o establecer un marco jurídico para hacer pública la información sobre los ingresos y bienes de los altos funcionarios públicos nacionales. Nos comprometemos a promulgar y aplicar normas que protejan a los denunciantes. Nos comprometemos a poner a disposición del público información sobre las actividades y la eficacia de nuestros organismos encargados de aplicar las leyes contra la corrupción y de evitarla, así como los procedimientos de recurso a esos organismos, respetando la confidencialidad de información específica relativa a la aplicación de las leyes. Nos comprometemos a aumentar el número de elementos disuasivos contra el soborno y otras formas de corrupción en los sectores público y privado, así como a intercambiar información y experiencia.

Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para el intercambio de información, la participación del público y la colaboración. Tenemos la intención de aprovechar estas tecnologías para hacer pública más información de maneras que permitan a la gente entender lo que sus gobiernos hacen e influir en las decisiones. Nos comprometemos a crear espacios accesibles y seguros en línea como plataformas para la prestación de servicios, la participación del público y el intercambio de información e ideas. Reconocemos que el acceso equitativo y asequible a la tecnología es un reto y nos comprometemos a buscar una mayor conectividad en línea y móvil, al mismo tiempo que identificamos y promovemos el uso de otros mecanismos para la participación ciudadana. Nos comprometemos a hacer que participen la sociedad civil y la comunidad empresarial para identificar prácticas eficaces y enfoques innovadores para aprovechar las nuevas tecnologías a fin de empoderar a las personas y promover la transparencia en el gobierno. Reconocemos también que un mayor acceso a la tecnología implica apoyar la capacidad de los gobiernos y los ciudadanos para su uso. Nos comprometemos a apoyar y desarrollar el uso de innovaciones tecnológicas por parte de los empleados públicos y los ciudadanos. También entendemos que la tecnología es un complemento y no un sustituto de una información clara, aprovechable y útil.

Reconocemos que el gobierno abierto es un proceso que requiere un compromiso permanente y sostenible. Nos comprometemos a informar públicamente sobre las medidas tomadas para hacer realidad estos principios, a consultar con el público sobre su aplicación y a actualizar nuestros compromisos a la luz de nuevos desafíos y oportunidades.

Nos comprometemos a dar el ejemplo y a contribuir en el avance de un gobierno abierto en otros países mediante el intercambio de mejores prácticas y experiencia y mediante la realización de los compromisos expresados en la presente Declaración, sobre una base no vinculante, con carácter voluntario. Nuestro objetivo es fomentar la innovación y estimular el progreso, y no definir los estándares que han de utilizarse como condición previa para la cooperación o asistencia ni para clasificar a los países. Para fomentar la apertura, destacamos la importancia de un enfoque integral y la disponibilidad de asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento de la capacidad y de las instituciones.

Nos comprometemos a adoptar estos principios en nuestro compromiso internacional, y trabajar para fomentar una cultura mundial de gobierno abierto que empodere a los ciudadanos y les cumpla, y avance los ideales de un gobierno abierto y participativo en el siglo XXI.

### **ANEXO 3**

## **LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO**

# **Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno**

BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, páginas 97922 a 97952

## **PREÁMBULO**

I

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico. La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas–, reconoce y garantiza el acceso a la información –regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública–. En estas tres vertientes, la Ley supone un importante avance en la materia y establece unos estándares homologables al del resto de democracias consolidadas. En definitiva, constituye un paso fundamental y necesario que se verá acompañado en el futuro con el impulso y adhesión por parte del Estado tanto a iniciativas multilaterales en este ámbito como con la firma de los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia.

II

En el ordenamiento jurídico español ya existen normas sectoriales que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. Así, por ejemplo, en materia de contratos, subvenciones, presupuestos o actividades de altos cargos nuestro país cuenta con un destacado nivel de transparencia. Sin embargo, esta regulación resulta insuficiente en la actualidad y no satisface las exigencias sociales y políticas del momento. Por ello, con esta Ley se avanza y se profundiza en la configuración de obligaciones de publicidad activa que, se entiende, han de vincular a un amplio número de sujetos entre los que se encuentran todas las Administraciones Públicas, los órganos del Poder Legislativo y Judicial en lo que se refiere a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, así como otros órganos constitucionales y estatutarios. Asimismo, la Ley se aplicará a determinadas entidades que, por su especial relevancia pública, o por su condición de perceptores de fondos públicos, vendrán obligados a reforzar la transparencia de su actividad. La Ley amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos ámbitos. En materia de información institucional, organizativa y de planificación exige a los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación la publicación de información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento. En materia de información de relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionarán una mayor seguridad jurídica. Igualmente, en el ámbito de la información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, se establece un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los recursos públicos. Por último, se establece la obligación de publicar toda la información que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de transparencia se cohonesten con los intereses de la ciudadanía. Para canalizar la publicación de tan ingente cantidad de información y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones de publicidad activa y, desde la perspectiva de que no se puede, por un lado, hablar de transparencia y, por otro, no poner los medios adecuados para facilitar el acceso a la información divulgada, la Ley contempla la creación y desarrollo de un Portal de la Transparencia. Las nuevas tecnologías nos permiten hoy día desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita que, a través de un único punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la información disponible.

La Ley también regula el derecho de acceso a la información pública que, no obstante, ya ha sido desarrollado en otras disposiciones de nuestro ordenamiento. En efecto, partiendo de la previsión contenida en el artículo 105.b) de nuestro texto constitucional, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrolla en su artículo 37 el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos. Pero esta regulación adolece de una serie de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de forma reiterada al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulación práctica. Igualmente, pero con un alcance sectorial y derivado de sendas Directivas comunitarias, otras normas contemplan el acceso a la información pública. Es el caso de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que regula el uso privado de documentos en poder de Administraciones y



organismos del sector público. Además, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a la vez que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, se sitúa en un camino en el que se avanza con esta Ley: la implantación de una cultura de transparencia que impone la modernización de la Administración, la reducción de cargas burocráticas y el empleo de los medios electrónicos para la facilitar la participación, la transparencia y el acceso a la información.

La Ley, por lo tanto, no parte de la nada ni colma un vacío absoluto, sino que ahonda en lo ya conseguido, supliendo sus carencias, subsanando sus deficiencias y creando un marco jurídico acorde con los tiempos y los intereses ciudadanos. Desde la perspectiva del Derecho comparado, tanto la Unión Europea como la mayoría de sus Estados miembros cuentan ya en sus ordenamientos jurídicos con una legislación específica que regula la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. España no podía permanecer por más tiempo al margen y, tomando como ejemplo los modelos que nos proporcionan los países de nuestro entorno, adopta esta nueva regulación. En lo que respecta a buen gobierno, la Ley supone un avance de extraordinaria importancia. Principios meramente programáticos y sin fuerza jurídica se incorporan a una norma con rango de ley y pasan a informar la interpretación y aplicación de un régimen sancionador al que se encuentran sujetos todos los responsables públicos entendidos en sentido amplio que, con independencia del Gobierno del que formen parte o de la Administración en la que presten sus servicios y, precisamente por las funciones que realizan, deben ser un modelo de ejemplaridad en su conducta.

### III

El título I de la Ley regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas mediante un conjunto de previsiones que se recogen en dos capítulos diferenciados y desde una doble perspectiva: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. El ámbito subjetivo de aplicación de este título, recogido en su capítulo I, es muy amplio e incluye a todas las Administraciones Públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, en la medida en que tengan atribuidas funciones de regulación o control sobre un determinado sector o actividad, así como a las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades públicas. En relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, la Ley se aplica también a las Corporaciones de Derecho Público, a la Casa de Su Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, así como al Banco de España, Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. También se aplica a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por ciento, a las fundaciones del sector público y a las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades a las que se ha hecho referencia. Asimismo, se aplicará a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y a todas las entidades privadas que perciban una determinada cantidad de ayudas o subvenciones públicas. Por último, las personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas también están obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquélla de las obligaciones de esta Ley. Esta obligación es igualmente aplicable a los adjudicatarios de contratos del sector público.

El capítulo II, dedicado a la publicidad activa, establece una serie de obligaciones para los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título I, que habrán de difundir determinada información sin esperar una solicitud concreta de los administrados. En este punto se incluyen datos sobre información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística. Para favorecer de forma decidida el acceso de todos a la información que se difunda se creará el Portal de la Transparencia, que incluirá, además de la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. El Portal será un punto de encuentro y de difusión, que muestra una nueva forma de entender el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Se prevé además en este punto que la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa.

El capítulo III configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Asimismo, dado que el acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección de los datos personales, la Ley aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios. Así, por un lado, en la medida en que la información afecte directamente a la organización o actividad pública del órgano prevalecerá el acceso, mientras que, por otro, se protegen – como no puede ser de otra manera– los datos que la normativa califica como especialmente protegidos, para cuyo acceso se requerirá, con carácter general, el consentimiento de su titular.

Con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. En materia de impugnaciones se crea una reclamación potestativa y previa a la vía judicial de la que conocerá el

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo de naturaleza independiente de nueva creación, y que sustituye a los recursos administrativos.

El título II otorga rango de Ley a los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Igualmente, se clarifica y refuerza el régimen sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la que están sujetos. Este sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad. Para cumplir este objetivo, la Ley consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el ámbito económico-presupuestario resulta destacable que se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversión de los fondos a los que se refieren la normativa presupuestaria equivalente. De esta manera se introduce un mecanismo de control fundamental que evitará comportamientos irresponsables y que resultan inaceptables en un Estado de Derecho. La comisión de las infracciones previstas dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos que ocupe el infractor, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Debe señalarse que estas sanciones se inspiran en las ya previstas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones muy graves no puedan ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre 5 y 10 años.

El título III de la Ley crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente al que se le otorgan competencias de promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Se crea, por lo tanto, un órgano de supervisión y control para garantizar la correcta aplicación de la Ley. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura como un órgano independiente, con plena capacidad jurídica y de obrar y cuenta con una estructura sencilla que, a la vez que garantiza su especialización y operatividad, evita crear grandes estructuras administrativas. La independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones vendrá garantizada, asimismo, por el respaldo parlamentario con el que deberá contar el nombramiento de su Presidente. Para respetar al máximo las competencias autonómicas, expresamente se prevé que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sólo tendrá competencias en aquellas Comunidades Autónomas con las que haya firmado Convenio al efecto, quedando, en otro caso, en manos del órgano autonómico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume el Consejo.

Las disposiciones adicionales abordan diversas cuestiones como la aplicación de regulaciones especiales del derecho de acceso, la revisión y simplificación normativa –en el entendido de que también es un ejercicio de buen gobierno y una manifestación más de la transparencia el clarificar la normativa que está vigente y es de aplicación– y la colaboración entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos en la determinación de criterios para la aplicación de los preceptos de la ley en lo relativo a la protección de datos personales. Las disposiciones finales, entre otras cuestiones, modifican la regulación del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, amplían la publicidad de determinada información que figura en el Registro de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado y la obligación de publicidad prevista en el apartado 4 del artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Por último, la Ley prevé una entrada en vigor escalonada atendiendo a las especiales circunstancias que conllevará la aplicación de sus diversas disposiciones.

## **TÍTULO PRELIMINAR**

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

## **TÍTULO I.- Transparencia de la actividad pública**

### **CAPÍTULO I.- Ámbito subjetivo de aplicación**

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. Las disposiciones de este título se aplicarán a:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.

- b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
- c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
- d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.
- e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
- f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
- g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.
- h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.
- i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación.

2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.

### Artículo 3. Otros sujetos obligados.

Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a:

- a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
- b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

### Artículo 4. Obligación de suministrar información.

Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato.

## **CAPÍTULO II.- Publicidad activa**

### Artículo 5. Principios generales.

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.
4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.  
Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas.
5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

## Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación.

1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.
2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente. En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas.

## Artículo 7. Información de relevancia jurídica.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:

- a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
- b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación.
- c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
- d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.
- e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

## Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística.

1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación:

- a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente.  
Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
- b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
- c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
- d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
- e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.
- f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
- g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.
- h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
- i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.

2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública.

3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

#### Artículo 9. Control.

1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.

3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

#### Artículo 10. Portal de la Transparencia.

1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación.

2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

3. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo.

#### Artículo 11. Principios técnicos.

El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:

a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.

b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.

c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo.

### **CAPÍTULO III.- Derecho de acceso a la información pública**

#### Sección 1.ª Régimen general

#### Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

#### Artículo 13. Información pública.

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

#### Artículo 14. Límites al derecho de acceso.

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- a) La seguridad nacional.
- b) La defensa.
- c) Las relaciones exteriores.
- d) La seguridad pública.
- e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
- g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
- h) Los intereses económicos y comerciales.
- i) La política económica y monetaria.
- j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
- k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
- l) La protección del medio ambiente.

2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.

#### Artículo 15. Protección de datos personales.

1. Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley.

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:

- a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
- c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
- d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
- 4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
- 5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

#### Artículo 16. Acceso parcial.

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.

#### Sección 2.ª Ejercicio del derecho de acceso a la información pública

#### Artículo 17. Solicitud de acceso a la información.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas.

2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:

- a) La identidad del solicitante.
- b) La información que se solicita.
- c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
- d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud.

4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión.

#### Artículo 18. Causas de inadmisión.

1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

- a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
- b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
- c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
- d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.
- e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.

2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.

#### Artículo 19. Tramitación.

- 1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.
- 2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.
- 3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
- 4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.

#### Artículo 20. Resolución.

- 1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
- 2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2.
- 3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.
- 4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
- 5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24.
- 6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

## Artículo 21. Unidades de información.

1. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones:

- a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley.
- b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
- c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
- d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.
- e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
- f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
- g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.
- h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley.

3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.

## Artículo 22. Formalización del acceso.

1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.

2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.

3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.

4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.

## Sección 3.ª Régimen de impugnaciones

### Artículo 23. Recursos.

1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

### Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.

5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.



6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.

## **TÍTULO II.- Buen gobierno**

### **Artículo 25. Ámbito de aplicación.**

1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.

A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses.

2. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.

### **Artículo 26. Principios de buen gobierno.**

1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.

2. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes:

#### **a) Principios generales:**

1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.

2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.

3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.

4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.

5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.

6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.

7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

#### **b) Principios de actuación:**

1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.

2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.

3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.

4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.

5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.

6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.

7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.

8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.

9.º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.

3. Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este título.

### **Artículo 27. Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses.**

El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación.

#### Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:

- a) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes.
- b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.
- c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.
- d) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria.
- e) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.
- f) El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 de la citada Ley.
- g) La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorización o, habiéndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los límites previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- h) La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- i) La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Administración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- j) La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- k) El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento.
- l) La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- m) La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio, según corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- n) La no adopción del acuerdo de no disponibilidad o la no constitución del depósito, cuando así se haya solicitado, previstos en el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- ñ) La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se hubiere solicitado o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- p) El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

#### Artículo 29. Infracciones disciplinarias.

##### 1. Son infracciones muy graves:

- a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.
- b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
- c) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

- d) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
- e) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
- f) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
- g) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
- h) La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
- i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
- j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
- k) El acoso laboral.
- l) La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.

## 2. Son infracciones graves:

- a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
- b) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
- c) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave.
- d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
- e) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
- f) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.

## 3. Son infracciones leves:

- a) La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados.
- b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuación del artículo 26.2.b) cuando ello no constituya infracción grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma.

## Artículo 30. Sanciones.

### 1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación.

### 2. Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor algunas de las siguientes sanciones:

- a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial que corresponda.
- b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo.

### 3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior.

### 4. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.

### 5. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los siguientes:

- a) La naturaleza y entidad de la infracción.
- b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
- c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.
- d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.
- e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.
- f) La reparación de los daños o perjuicios causados.

En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.

6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.

7. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el artículo 28, pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento sancionador.

8. En todo caso la comisión de las infracciones previstas en el artículo 28 conllevará las siguientes consecuencias:

- a) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.
- b) La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

#### Artículo 31. Órgano competente y procedimiento.

1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos.

La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.

2. El órgano competente para ordenar la incoación será:

- a) Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
- b) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
- c) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento.

3. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el supuesto contemplado en el apartado c) la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente.

4. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá:

- a) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
- b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado.
- c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate.

5. Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en este título serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

#### Artículo 32. Prescripción.

- 1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.
- 2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.
- 3. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos apartados anteriores, así como para las causas de su interrupción, se estará a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

### **TÍTULO III.- Consejo de Transparencia y Buen Gobierno**

Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Artículo 34. Fines.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Artículo 35. Composición.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos:

- a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
- b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión.

Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

1. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá todas las competencias que le asigna esta Ley, así como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.

2. Dicha Comisión estará compuesta por:

- a) El Presidente.
- b) Un Diputado.
- c) Un Senador.
- d) Un representante del Tribunal de Cuentas.
- e) Un representante del Defensor del Pueblo.
- f) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.
- g) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
- h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

3. La condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración con excepción de lo previsto en el artículo siguiente.

4. Al menos una vez al año, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. A esta reunión podrá ser convocado un representante de la Administración Local propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación.
2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
3. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.

## Artículo 38. Funciones.

1. Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones:

- a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.
- b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.
- d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
- e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.
- g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.
- h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las siguientes funciones:

- a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.
- b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo II del título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.
- c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta Ley.
- d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.
- e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el procedimiento.
- f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
- g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

## Artículo 39. Régimen jurídico.

1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se registrá, además de por lo dispuesto en esta Ley, por:

- a) Las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que le sean de aplicación. Anualmente elaborará un anteproyecto de presupuesto con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Gobierno y su posterior integración en los Presupuestos Generales del Estado.
- b) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- c) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y, en lo no previsto en ella, por el Derecho privado en sus adquisiciones patrimoniales.
- d) La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las demás normas aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado, en materia de medios personales.
- e) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por la normativa que le sea de aplicación, en lo no dispuesto por esta Ley, cuando desarrolle sus funciones públicas.

2. El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se establecerá su organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

3. Con carácter general, los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno serán desempeñados por funcionarios públicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las normas de función pública aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado. El personal laboral podrá desempeñar puestos de trabajo que se ajusten a la normativa de función pública de la Administración General del Estado. Asimismo, el personal que pase a prestar servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante los procedimientos de provisión previstos en la Administración General del Estado mantendrá la condición de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislación aplicable.

4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contará para el cumplimiento de sus fines con los siguientes bienes y medios económicos:

- a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Generales del Estado.
- b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo.
- c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

#### Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.

##### Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública.

1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.
2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.
3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización.

##### Disposición adicional segunda. Revisión y simplificación normativa.

1. La Administración General del Estado acometerá una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de su ordenamiento jurídico. Para ello, habrá de efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que queden afectadas.
2. A tal fin, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes elaborará un Plan de Calidad y Simplificación Normativa y se encargará de coordinar el proceso de revisión y simplificación normativa respecto del resto de Departamentos ministeriales.
3. Las Secretarías Generales Técnicas de los diferentes Departamentos ministeriales llevarán a cabo el proceso de revisión y simplificación en sus ámbitos competenciales de actuación, pudiendo coordinar su actividad con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que, en ejercicio de las competencias que le son propias y en aplicación del principio de cooperación administrativa, lleven a cabo un proceso de revisión de sus respectivos ordenamientos jurídicos.

##### Disposición adicional tercera. Corporaciones de Derecho Público.

Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el título I de esta Ley, las corporaciones de Derecho Público podrán celebrar convenios de colaboración con la Administración Pública correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la representación en su ámbito concreto de actividad.

##### Disposición adicional cuarta. Reclamación.

1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas.  
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, contra las resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones análogas al Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas reclamaciones sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.
2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias.
3. Las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán designar sus propios órganos independientes o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, celebrando al efecto un Convenio en los términos previstos en el apartado anterior.

##### Disposición adicional quinta. Colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos adoptarán conjuntamente los criterios de aplicación, en su ámbito de actuación, de las reglas contenidas en el artículo 15 de esta Ley, en particular en lo que respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

##### Disposición adicional sexta. Información de la Casa de Su Majestad el Rey.

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de las disposiciones de esta Ley.

Disposición adicional séptima.

El Gobierno aprobará un plan formativo en el ámbito de la transparencia dirigido a los funcionarios y personal de la Administración General del Estado, acompañado, a su vez, de una campaña informativa dirigida a los ciudadanos. El Gobierno incorporará al sector público estatal en el Plan Nacional de Responsabilidad Social Corporativa.

Disposición adicional octava.

El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas regularán en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta Ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los siguientes términos:

Uno. El artículo 35.h) pasa a tener la siguiente redacción:

«h) Al acceso a la información pública, archivos y registros.»

Dos. El artículo 37 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 37. Derecho de acceso a la información pública.

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Se modifica la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado en los siguientes términos:

El apartado 4 del artículo 14 queda redactado como sigue:

«4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás altos cargos previstos en el artículo 3 de esta ley se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado", en los términos previstos reglamentariamente. En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Se modifica el apartado 4 del artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que quedará redactado como sigue:

«Las entidades que deban aplicar principios contables públicos, así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el Registro Mercantil, publicarán anualmente en el "Boletín Oficial del Estado", el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial, un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales y el informe de auditoría de cuentas. A estos efectos, la Intervención General de la Administración del Estado determinará el contenido mínimo de la información a publicar.»

Disposición final cuarta. Modificación de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el cual quedará redactado en los siguientes términos:



«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se registrarán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley.»

Disposición final quinta.

El Gobierno adoptará las medidas necesarias para optimizar el uso de los medios técnicos y humanos que se adscriban al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en los siguientes términos:

Uno. Se añade un apartado 5 al artículo 2, con la redacción siguiente:

«5. Serán aplicables al administrador nacional del registro de derechos de emisión previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, las obligaciones de información y de control interno contenidas en los capítulos III y IV de la presente Ley.»

Dos. Se añade un apartado 6 al artículo 7, con la redacción siguiente:

«6. Reglamentariamente podrá autorizarse la no aplicación de todas o algunas de las medidas de diligencia debida o de conservación de documentos en relación con aquellas operaciones ocasionales que no excedan de un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumulado por periodos temporales.»

Tres. Se da nueva redacción al artículo 9, con el siguiente tenor literal:

«Artículo 9. Medidas simplificadas de diligencia debida.

Los sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.»

Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 10, con el siguiente tenor literal:

«Artículo 10. Aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida.

La aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida será graduada en función del riesgo, con arreglo a los siguientes criterios:

- a) Con carácter previo a la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de un determinado cliente, producto u operación de los previstos reglamentariamente, los sujetos obligados comprobarán que comporta efectivamente un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
- b) La aplicación de las medidas simplificadas de diligencia debida será en todo caso congruente con el riesgo. Los sujetos obligados no aplicarán o cesarán de aplicar medidas simplificadas de diligencia debida tan pronto como aprecien que un cliente, producto u operación no comporta riesgos reducidos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
- c) Los sujetos obligados mantendrán en todo caso un seguimiento continuo suficiente para detectar operaciones susceptibles de examen especial de conformidad con lo prevenido en el artículo 17.»

Cinco. Se da nueva redacción al artículo 14, con el siguiente tenor literal:

«Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.

1. Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este artículo en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública.

Se considerarán personas con responsabilidad pública las siguientes:

a) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por elección, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Unión Europea o terceros países, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública.

b) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el Estado español, tales como los altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado; los parlamentarios nacionales y del Parlamento Europeo; los magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de España; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional, con inclusión de la Unión Europea.

c) Asimismo, tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de Gobierno, así como los altos cargos y los diputados autonómicos y, en el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás altos cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Autónoma de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, o cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales o partidos políticos españoles.

Ninguna de estas categorías incluirá empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.

2. En relación con los clientes o titulares reales que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por elección, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Unión Europea o en un país tercero, los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia debida, deberán en todo caso:

a) Aplicar procedimientos adecuados de gestión del riesgo a fin de determinar si el cliente o el titular real es una persona con responsabilidad pública. Dichos procedimientos se incluirán en la política expresa de admisión de clientes a que se refiere el artículo 26.1.

b) Obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.

c) Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos.

d) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios.

3. Los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia debida, deberán aplicar medidas razonables para determinar si el cliente o el titular real desempeña o ha desempeñado alguna de las funciones previstas en los párrafos b) y c) del apartado primero de este artículo. Se entenderá por medidas razonables la revisión, de acuerdo a los factores de riesgo presentes en cada caso, de la información obtenida en el proceso de diligencia debida. En el caso de relaciones de negocio de riesgo más elevado, los sujetos obligados aplicarán las medidas previstas en los párrafos b), c) y d) del apartado precedente.

4. Los sujetos obligados aplicarán las medidas establecidas en los dos apartados anteriores a los familiares y allegados de las personas con responsabilidad pública. A los efectos de este artículo tendrá la consideración de familiar el cónyuge o la persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por análoga relación de afectividad. Se considerará allegado toda persona física de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente con una persona con responsabilidad pública, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma.

5. Los sujetos obligados aplicarán medidas razonables para determinar si el beneficiario de una póliza de seguro de vida y, en su caso, el titular real del beneficiario, es una persona con responsabilidad pública con carácter previo al pago de la prestación derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza. En el caso de identificar riesgos más elevados, los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia debida, deberán:

a) Informar al inmediato nivel directivo, como mínimo, antes de proceder al pago, rescate, anticipo o pignoración.

b) Realizar un escrutinio reforzado de la entera relación de negocios con el titular de la póliza.

c) Realizar el examen especial previsto en el artículo 17 a efectos de determinar si procede la comunicación por indicio de conformidad con el artículo 18.

6. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores, cuando, por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 17, proceda el examen especial, los sujetos obligados adoptarán las medidas adecuadas para apreciar la eventual participación en el hecho u operación de quien ostente o haya ostentado en España la condición de cargo público representativo o alto cargo de las Administraciones Públicas, o de sus familiares o allegados.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando las personas contempladas en los apartados precedentes hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados continuarán aplicando las medidas previstas en este artículo por un periodo de dos años.»

Seis. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 26, con el siguiente tenor literal:

«4. Las medidas de control interno se establecerán a nivel de grupo, con las especificaciones que se determinen reglamentariamente. A efectos de la definición de grupo, se estará a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio.»

Siete. Se da nueva redacción al artículo 42, con el siguiente tenor literal:

«Artículo 42. Sanciones y contramedidas financieras internacionales.

1. Las sanciones financieras establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a la prevención y supresión del terrorismo y de la financiación del terrorismo, y a la prevención, supresión y interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y de su financiación, serán de obligada aplicación para cualquier persona física o jurídica en los términos previstos por los reglamentos comunitarios o por acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad.

2. Sin perjuicio del efecto directo de los reglamentos comunitarios, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá acordar la aplicación de contramedidas financieras respecto de países terceros que supongan riesgos más elevados de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El acuerdo de Consejo de Ministros, que podrá adoptarse de forma autónoma o en aplicación de decisiones o recomendaciones de organizaciones, instituciones o grupos internacionales, podrá imponer, entre otras, las siguientes contramedidas financieras:

- a) Prohibir, limitar o condicionar los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como las transferencias, de o hacia el país tercero o de nacionales o residentes del mismo.
- b) Someter a autorización previa los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como las transferencias, de o hacia el país tercero o de nacionales o residentes del mismo.
- c) Acordar la congelación o bloqueo de los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas nacionales o residentes del país tercero.
- d) Prohibir la puesta a disposición de fondos o recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas nacionales o residentes del país tercero.
- e) Requerir la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de nacionales o residentes del país tercero.
- f) Establecer la comunicación sistemática de las operaciones de nacionales o residentes del país tercero o que supongan movimientos financieros de o hacia el país tercero.
- g) Prohibir, limitar o condicionar el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación de las entidades financieras del país tercero.
- h) Prohibir, limitar o condicionar a las entidades financieras el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación en el país tercero.
- i) Prohibir, limitar o condicionar las relaciones de negocio o las operaciones financieras con el país tercero o con nacionales o residentes del mismo.
- j) Prohibir a los sujetos obligados la aceptación de las medidas de diligencia debida practicadas por entidades situadas en el país tercero.
- k) Requerir a las entidades financieras la revisión, modificación y, en su caso, terminación, de las relaciones de corresponsalía con entidades financieras del país tercero.
- l) Someter las filiales o sucursales de entidades financieras del país tercero a supervisión reforzada o a examen o auditoría externos.
- m) Imponer a los grupos financieros requisitos reforzados de información o auditoría externa respecto de cualquier filial o sucursal localizada o que opere en el país tercero.

3. Competerá al Servicio Ejecutivo de la Comisión la supervisión e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.»

Ocho. Se da nueva redacción al artículo 52.1.u), con el siguiente tenor literal: «u) El incumplimiento de la obligación de aplicar sanciones o contramedidas financieras internacionales, en los términos del artículo 42.»

Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario.

El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta Ley. El Consejo de Ministros aprobará, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial del Estado», un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Disposición final octava. Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.1.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución. Se exceptúa lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 6, el artículo 9, los apartados 1 y 2 del artículo 10, el artículo 11, el apartado 2 del artículo 21, el apartado 1 del artículo 25, el título III y la disposición adicional segunda.

Disposición final novena. Entrada en vigor.

La entrada en vigor de esta ley se producirá de acuerdo con las siguientes reglas:

- Las disposiciones previstas en el título II entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- El título preliminar, el título I y el título III entrarán en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 9 de diciembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

## **ANEXO 4**

### **INFORME ESPAÑA 2012-2013 - MECANISMO DE REVISIÓN INDEPENDIENTE (OGP)**



MECANISMO DE REVISIÓN INDEPENDIENTE:

# ESPAÑA INFORME DE AVANCE 2012-13

D. César Nicandro Cruz-Rubio  
Investigador del GIGAPP  
Primer Informe de Avance





# RESUMEN EJECUTIVO

## MECANISMO DE REVISIÓN INDEPENDIENTE (IRM) ESPAÑA INFORME DE AVANCE 2012-13

La aprobación de la nueva Ley de Transparencia, aunque con defectos, fue el logro más importante de este primer Plan. A pesar de ser un proceso cuestionado, ha proporcionado muchas lecciones para mejorar futuros procesos. El segundo Plan de Acción se fortalecerá al incluir actividades nuevas y medibles y al vincular más claramente los compromisos con los valores del gobierno abierto. Así, el segundo plan tendrá mayor potencial para mejorar la integridad pública, lo cual es un cambio necesario dada la situación española actual.

La Alianza para Gobierno Abierto (OGP) es una iniciativa voluntaria que busca obtener compromisos concretos de los gobiernos hacia sus ciudadanos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y usar nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. El Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) lleva a cabo una evaluación bianual de las actividades de cada país participante en la OGP.

España suscribió la OGP en abril de 2011. Formalizó su participación el 20 de septiembre de ese año.

El órgano responsable del diseño, redacción, presentación y seguimiento a los compromisos asumidos en el Plan de Acción de España es la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y su Subdirección General de Propuestas Normativas y Documentación Parlamentaria, pertenecientes ambos al Ministerio de la Presidencia. Esta Secretaría de Estado fue la responsable de elaborar el primer plan de Acción así como también de elaborar el Informe de Autoevaluación.

### EL PROCESO OGP

Los países participantes en la OGP siguen un proceso de consulta con la sociedad civil para el desarrollo e implementación de sus Planes.

El Gobierno de España preparó el primer plan de Acción sin realizar proceso de consulta pública, y al hacerlo, no cumplió las recomendaciones de la OGP. La autoría del Plan en su totalidad recayó en el Ministerio de la Presidencia, quien ha indicado que esta ausencia se debió a falta de tiempo, al tratarse de un gobierno recién llegado y cuyo equipo de colaboradores tomó posesión de sus cargos a finales de 2011.

Posteriormente, el gobierno de España evitó abrir la participación durante la implementación del Plan. El investigador local IRM no encontró evidencia de esfuerzos gubernamentales orientados a promover un mayor conocimiento sobre la OGP en la ciudadanía, o para implicarse con la sociedad civil, el sector privado u otros actores relevantes en esta fase.

Aunque se abrió un periodo de consulta pública para ofrecer comentarios al borrador de la autoevaluación, sus resultados fueron bastante limitados dada la falta de publicidad y del conocimiento ciudadano respecto de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de España en materia de gobierno abierto.

### VISTA RÁPIDA

PARTICIPANTE DESDE: 2011  
NÚMERO DE COMPROMISOS: 13  
(NÚMERO DE HITOS: 16)

#### NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

COMPLETO: 5 de 13  
SUSTANTIVO: 4 de 13  
LIMITADO: 3 de 13  
NO INICIADO: 1 de 13

#### PUNTUALIDAD:

A TIEMPO: 6 de 13

#### ÉNFASIS DE LOS COMPROMISOS

ACCESO A INFORMACIÓN: 6 de 13  
PARTICIPACIÓN: 3 de 13  
RENDICIÓN DE CUENTAS: 1 de 13  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: 3 de 13  
NO CLARO: 5 de 13

#### NÚMERO DE COMPROMISOS QUE FUERON:

CLARAMENTE RELEVANTES CON ALGÚN VALOR OGP: 8 de 13  
DE IMPACTO POTENCIAL MODERADO O TRANSFORMADOR: 8 de 13  
REALIZADOS CON AVANCES SUSTANTIVOS O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADOS: 9 de 13

CON LOS 3 CRITERIOS (★): 4 de 13

## IMPLEMENTACION DE LOS COMPROMISOS

Como participantes en la OGP los países tienen que realizar Planes de Acción bianuales con compromisos puntuales. El siguiente gráfico resume el nivel de cumplimiento de cada compromiso, su impacto potencial, si éste se cumplió en el tiempo establecido y cuáles son los próximos pasos a seguir en planes de acción futuros. La segunda tabla resume la evaluación del investigador IRM para cada compromiso. La sociedad civil ha mostrado profundo interés en la Ley de Transparencia, pero escaso interés en los restantes 12 compromisos de este Plan. España completó 7 de 16 hitos (5 de 13 compromisos), y tal y como han sido redactados en el Plan, 5 de los 13 compromisos parecen carecer de relevancia con los valores de gobierno abierto.

**Tabla 1 | Análisis de cumplimiento por compromiso**

NOMBRE COMPROMISO Y RESUMEN	IMPACTO POTENCIAL				NIVEL DE CUMPLIMIENTO				PUNTUALIDAD	PRÓXIMOS PASOS
✦ EL COMPROMISO COMO ESTÁ ESCRITO ES CLARAMENTE RELEVANTE CON LOS VALORES DE LA OGP, TIENE UN IMPACTO POTENCIAL SIGNIFICATIVO Y HA SIDO SUSTANCIALMENTE O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.	NINGUNO	POCO	MODERADO	TRANSFORMADOR	NO INICIADO	LIMITADO	SUSTANTIVO	COMPLETO		
✦ 1. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno										
En total									Atrasado	
1.a) Aprobación de la Ley: Aprobar definitivamente el texto final.									Atrasado	Nuevo compromiso basado en la implementación existente
1.b) Portal de transparencia: Poner a disposición información gubernamental, con plenas garantías de accesibilidad.									Atrasado	Trabajo continuado en la implementación básica
✦ 2. Transparencia y rendición de cuentas en la ayuda oficial al desarrollo										
En total									Atrasado	
2.a) info@OD: Mejorar el sistema de información con una herramienta de consulta y publicaciones periódicas y rápidas.									Atrasado	Nuevo compromiso
2.b) Informe Anual Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID): Publicarlo con información de ejecución presupuestaria.									A tiempo	Nuevo compromiso
2.c) Transparencia total: Obligar a todos los actores que reciben fondos públicos españoles a apertura y transparencia.									Atrasado	Trabajo continuado
3. Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: Aprobarla para mayor rigor en la información de Administraciones.									A tiempo	Nuevo compromiso



NOMBRE COMPROMISO Y RESUMEN	IMPACTO POTENCIAL				NIVEL DE CUMPLIMIENTO				PUNTUALIDAD	PRÓXIMOS PASOS STEPS
★ EL COMPROMISO COMO ESTÁ ESCRITO ES CLARAMENTE RELEVANTE CON LOS VALORES DE LA OGP, TIENE UN IMPACTO POTENCIAL SIGNIFICATIVO Y HA SIDO SUSTANCIALMENTE O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.	NINGUNO	POCO	MODERADO	TRANSFORMADOR	NO INICIADO	LIMITADO	SUSTANTIVO	COMPLETO		
<b>4. Reforma a la Ley de Subvenciones:</b> Eliminar las subvenciones con carácter general para transparentar su otorgamiento y concesión.									Atrasado	Trabajo continuado
<b>5. e-Justicia:</b> Crear la Agencia de Administración de Justicia Electrónica para apoyar interoperabilidad de información entre Administraciones.									Atrasado	<b>Revisión del compromiso</b> para ser más realizable o medible
★ <b>6. Uso de las redes sociales:</b> Desarrollar proyectos para facilitar participación ciudadana, incluyendo los consejos locales de seguridad.									Atrasado	Nuevo compromiso
<b>7. Publicación de los datos estadísticos de criminalidad:</b> Publicar al menos con carácter trimestral las mediciones de los últimos 12 meses por tipo de delito y ubicación.									A tiempo	Nuevo compromiso
<b>8. Revisión y simplificación normativa:</b> Obligar a las administraciones a eliminar normas obsoletas.									A tiempo	Revisión del compromiso
★ <b>9. e-Salud:</b> Universalizar el Sistema de la Historia Médica Digital para aumentar interoperabilidad y reducir trabas burocráticas.									Atrasado	Nuevo compromiso
<b>10. Sistema RED:</b> Generalizar uso del Sistema electrónica de remisión de datos seguridad social.									A tiempo	Implementación completa
<b>11. Simplificación de procedimientos de evaluación ambiental:</b> Mejorar los tiempos de ejecución de los trámites y hacer el proceso de toma de decisiones más participativo.									A tiempo	Implementación completa
<b>12. Agilización del procedimiento para crear nuevas empresas:</b> Potenciar, por una Ley, la red de asesoramiento y simplificar requisitos.									A tiempo	Implementación completa
<b>13. Reducir cargas administrativas para ganaderos y agricultores:</b> Agilizar la solicitud de ayudas directas, haciendo su tramitación transparente.									Atrasado	Trabajo continuado

Tabla 2 | Resumen de resultados de los compromisos

NOMBRE DEL COMPROMISO	RESUMEN DE LOS RESULTADOS
<p>★ = EL COMPROMISO COMO ESTÁ ESCRITO ES CLARAMENTE RELEVANTE CON LOS VALORES DE LA OGP, TIENE UN IMPACTO POTENCIAL SIGNIFICATIVO Y HA SIDO SUSTANCIALMENTE O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.</p>	
<p>★ 1. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia Valores OGP: Clara</li> <li>• Impacto potencial: Transformador</li> <li>• Cumplimiento: Sustantivo</li> </ul>	<p>Este es el compromiso más importante y con su aprobación se supera un retraso histórico. Su elaboración tuvo un proceso de consulta ciudadana con claroscuros, caracterizados por prisa, falta de transparencia y debilidad del formato de la consulta. La ley aprobada no cumple con estándares internacionales y no reconoce el acceso a la información pública como derecho fundamental. El Portal de Transparencia no está aún operativo.</p> <p>Respecto de la Ley, es importante que las medidas de la Ley se garanticen en todo el territorio español, de ahí que pueda ser recomendable aclarar su ámbito de competencia a fin de extenderlo, sin perjuicio de que las comunidades complementen sus propios compromisos, reconociendo en su caso el poder vinculante del Consejo de Transparencia, y limitando al máximo los requisitos para solicitar información.</p> <p>Respecto del portal de transparencia, se recomienda redoblar esfuerzos para darle cumplimiento al mismo, articulando de forma ambiciosa la estrategia de transparencia, abriendo el portal en 2014 y potenciando la interacción y participación ciudadana en el mismo. Podría habilitar por ejemplo foros virtuales de debate sobre temas de interés ciudadano, haciendo abierto y accesible el registro de las gestiones que realice del Consejo de Transparencia, o incorporando reportes periódicos sobre las solicitudes de información solicitadas por la ciudadanía, o haciendo que la información proporcionada a un ciudadano sea pública para todos y accesible en el portal, etc.).</p> <p>Si se desea profundizar en el uso de la consulta pública como herramienta para hacer partícipe a la ciudadanía en la elaboración de leyes, los procesos de consulta abiertos para recibir comentarios del Anteproyecto de Ley deberían proporcionar información relevante que permita el adecuado diseño e integración de estos procedimientos participativos en el futuro. Además podrían aplicarlos sistemáticamente en la labor legislativa impulsada por el Gobierno Central, haciendo que estas consultas se realicen mediante convocatorias amplias y anticipadas en el tiempo, con comunicación bidireccional entre ciudadano y gobierno, transparente y con mecanismos de rendición de cuentas <i>a posteriori</i>.</p>
<p>★ 2. Transparencia y rendición de cuentas en la ayuda oficial al desarrollo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia Valores OGP: Clara</li> <li>• Impacto potencial: Transformador</li> <li>• Cumplimiento: Sustantivo</li> </ul>	<p>El sistema info@OD es un programa de gestión presupuestaria de proyectos de cooperación. Integra la información de varias entidades y las unifica en un sistema de cooperación, este compromiso apoya la transparencia en la materia. Su módulo Informante esta operativo pero es de uso restringido, mientras el módulo Analista pensado para permitir consultas dinámicas, está disponible para su acceso sin necesidad de usuario y contraseña. El AECID por su parte publicó su memoria 2012 tal como se comprometió, pero no publicó su calendario de publicaciones. No ha habido avances respecto de mejorar los criterios de obligación de transparencia para las entidades contrapartes. Tampoco se mejoró el acceso a los informes y documentación de proyectos aunque sí se avanzó en una mayor transparencia (vía publicación activa) en las subvenciones que otorga la AECID así como en los criterios de valoración utilizados de las convocatorias de ONGD y las calificaciones de los proyectos. Se recomienda redoblar estos esfuerzos abrir el portal de la cooperación española, promocionar el módulo Analista del sistema info@OD, a fin de permitir su uso y el acceso de la ciudadanía a toda la información que contiene.</p>

<b>3. Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia Valores OGP: No clara</li> <li>• Impacto potencial: Moderado</li> <li>• Cumplimiento: Completo</li> </ul>	<p>La Ley se aprobó en 2012. Con la publicación obligatoria en el Boletín Oficial del Estado BOE de las cuentas y las auditorías de las entidades públicas anuales, se facilita el acceso a la información sobre la situación presupuestaria de las distintas entidades. No obstante, su publicación se hace en formato PDF dificultando así su análisis, y no hay un sitio web en específico en donde consultar estas cuentas anuales. El investigador IRM recomienda nuevos compromisos de mayor transparencia de las administraciones públicas, que vayan más allá del imperativo de estabilidad presupuestaria y de proporcionar información sobre las cuentas.</p>
<b>4. Reforma a la Ley de Subvenciones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia Valores OGP: Clara</li> <li>• Impacto potencial: Poco</li> <li>• Cumplimiento: Limitado</li> </ul>	<p>La reforma a la Ley aún no ha comenzado su trámite. Como primer paso se amplió la base de datos accesible vía web de ayudas y subvenciones para las PYMES, a fin de contar así con un solo repositorio. Pero no queda claro cómo su realización se relaciona con mayor transparencia en los procesos de concesión de subvenciones, ya que el principal problema no es la transparencia sino el desvío de recursos como resultado de “subvenciones nominativas de carácter general” cuyo uso abusivo así lo ha permitido. El investigador IRM recomienda comenzar el trámite de reforma incluyendo en la Ley mecanismos de transparencia activa.</p>
<b>5. e-Justicia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia Valores OGP: No clara</li> <li>• Impacto potencial: Poco</li> <li>• Cumplimiento: Limitado</li> </ul>	<p>La Agencia no se creará por restricciones presupuestarias, en su lugar el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE) comenzará su trabajo a fin de dar pasos hacia la interoperabilidad. Aún no tiene hoja de ruta definida para dar inicio a su labor. Se prevé tal paso para el primer semestre de 2014. Orientado internamente, no queda claro cómo el compromiso implica los valores del gobierno abierto. En una posible estrategia de apertura de datos, se recomienda ampliar y potenciar los recursos y finalidades del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).</p>
<b>★ 6. Uso de las redes sociales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia Valores OGP: Clara</li> <li>• Impacto potencial: Moderado</li> <li>• Cumplimiento: Sustantivo</li> </ul>	<p>Las varias campañas hechas dentro del compromiso son de tipo informativas o donde se busca la colaboración ciudadana en materia de seguridad pública. La reactivación de los consejos locales de seguridad aún no se realizó. El investigador IRM recomienda la definición de nuevas iniciativas en materia de seguridad pública que desarrollen efectivamente mecanismos de participación ciudadana. Estos mecanismos, apoyados en los perfiles y estrategia de redes sociales existentes y/o en aquellos de nueva creación.</p>
<b>7. Publicación de los datos estadísticos de criminalidad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia Valores OGP: Clara</li> <li>• Impacto potencial: Poco</li> <li>• Cumplimiento: Completo</li> </ul>	<p>Con el logro de este compromiso, se cubre un vacío demandado por la ciudadanía, aunque no está del todo claro si cumple las expectativas de los ciudadanos. En un primer momento, se recomienda consolidar el servicio de entrega de los balances trimestrales de criminalidad existente y analizar la posibilidad de incrementar su periodicidad y hacer públicos los datos originales. En un segundo momento se recomienda profundizar en la relevancia y puntualidad de información.</p>
<b>8. Revisión y simplificación normativa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia Valores OGP: No clara</li> <li>• Impacto potencial: Moderado</li> <li>• Cumplimiento: No iniciado</li> </ul>	<p>No se ha iniciado el compromiso, aunque se señala que se han celebrado reuniones para conformar el Plan de Simplificación y Calidad Normativa en el que se basa este compromiso. Aunque sin duda podría ser muy positivo este compromiso, no está claro cómo puede tener relevancia como medio para mejorar la transparencia y/o desarrollar el gobierno abierto. Se recomienda reorientarlo a fin de articular este proceso en clave abierta y participativa.</p>
<b>★ 9. e-Salud</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia valores OGP: Clara</li> <li>• Impacto potencial: Transformador</li> <li>• Cumplimiento: Sustantivo</li> </ul>	<p>Evidentemente, este compromiso y sus logros se centran en una estrategia de gobierno electrónico que se basan en la eficiencia y calidad del sistema. Pero estas iniciativas no generan acercamiento claro de los ciudadanos a los procesos de toma de decisiones, aunque sí permiten a los pacientes un acceso y control simplificados sobre la información personal sanitaria. El investigador IRM recomienda informes periódicos sobre el desempeño de instituciones sanitarias, a través de herramientas interactivas que permiten que usuarios sepan el impacto del Sistema.</p>

<b>10. Sistema RED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia Valores OGP: No clara</li> <li>• Impacto potencial: Poco</li> <li>• Cumplimiento: Completo</li> </ul>	<p>Este es un servicio que ofrece la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a empresas y profesionales, cuya misión es permitir el intercambio de información y documentos a través de internet. Así descrito este compromiso no tiene clara relevancia como medio para desarrollar el gobierno abierto. Dada esto, no hay recomendaciones.</p>
<b>11. Simplificación de procedimientos de evaluación ambiental</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia Valores OGP: Clara</li> <li>• Impacto potencial: Poco</li> <li>• Cumplimiento: Completo</li> </ul>	<p>El Proyecto de Ley finalizó su trámite parlamentario el 28 de noviembre de 2013. En opinión de algunas OSC, no ha existido una correcta participación pública en su elaboración y pese a los avances en la materia tampoco está claro cómo se hace más participativo el proceso de toma de decisiones o más transparente el proceso de evaluación ambiental. Las próximas modificaciones a esta Ley deberán tomar en consideración la directiva europea 2011/92/EU, en donde se apuesta de lleno por una mayor transparencia, participación y rendición de cuentas.</p>
<b>12. Agilización del procedimiento para crear nuevas empresas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia Valores OGP: No clara</li> <li>• Impacto potencial: Moderado</li> <li>• Cumplimiento: Completo</li> </ul>	<p>Con La Ley 14/2013 se regula las funciones del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), aunque el mismo no tiene clara relevancia como medio para desarrollar el gobierno abierto. Si éste desea reorientarse hacia el gobierno abierto, podría incluirse nuevos compromisos tales como abrir la información del Registro Mercantil Español, a fin de hacerlo gratuito y de acceso libre, Incluir en los informes mensuales de avance de las PYMES magnitudes o indicadores sobre el uso de CIRCE y sus impactos en el desarrollo del tejido empresarial. Desarrollar (o promover el desarrollo de) aplicaciones (apps) que permitan ofrecer a los ciudadanos información gráfica y en tiempo real, sobre el registro mercantil y sobre la creación de nuevas PYMES e integrar en paralelo información sobre adjudicación de ayudas o subvenciones a PYMES, por localidades, sectores, tipos de PYME, etc, y ofrecer estos datos en raw data</p>
<b>13. Reducción de cargas administrativas para ganaderos y agricultores</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevancia Valores OGP: Clara</li> <li>• Impacto potencial: Moderado</li> <li>• Cumplimiento: Limitado</li> </ul>	<p>El objetivo de este compromiso es desarrollar una única herramienta informática para gestionar las solicitudes de ayudas directas. Así definido, este compromiso no tiene clara relevancia como medio para desarrollar el gobierno abierto, si no incorpora mecanismos de transparencia en la adjudicación de subvenciones. Podría profundizarse la oferta de información al ciudadano respecto del estado y los criterios de las solicitudes de ayudas, no sólo respecto de dar a conocer el estado de tramitación de sus propios expedientes.</p>

## RECOMENDACIONES

Al elaborar el segundo Plan de Acción, el Gobierno de España no sólo cuenta con tiempo, sino con la experiencia previa del primer Plan, con las experiencias destacadas al nivel autonómico y con una Ley de Transparencia que (con sus limitaciones) deberá dotar de instrumentos e implementar. También tiene avances que valorar y retos de futuro a los que desafiar. Así pues, se recomienda que el Gobierno de España atienda a cabalidad los requerimientos de la OGP para promocionar amplias consultas públicas en la conformación del segundo Plan. Específicamente:

- *Que diseñe, para elaborar el segundo Plan de Acción, una estrategia de política pública de actuación participativa, abierta e integral.* Esta estrategia nacionalmente organizada deberá:
  - o ser multiplataforma, retomando los avances logrados y las experiencias aprendidas,
  - o incluir los desafíos pendientes de cumplimiento, y
  - o ofrecer espacios presenciales y online de interacción con la ciudadanía. Mecanismos tales como los talleres o las encuestas deliberativas podrían ser muy útiles.

- Que clarifique el ámbito territorial de los compromisos, a fin de que el Plan de Acción sea lo que tanto ciudadanía como el gobierno en sus distintos niveles decidan conjuntamente proponer y realizar, a fin de acercar el gobierno abierto a los ciudadanos, lo que supone abrir la puerta a los gobiernos autonómicos a colaborar activa y participativamente en la definición de compromisos.
- Que el gobierno abierto se implemente como una política transversal orientada hacia:
  - o la institucionalización de una mayor y mejor participación,
  - o mejoras regulatorias que profundicen en la transparencia legislativa,
  - o la promoción del bienestar y la equidad con el desarrollo de políticas sociales abiertas,
  - o la generación de más conocimiento a través del gobierno abierto vía el uso de aplicaciones informáticas,
  - o la promoción de una transparencia holística y global a través de la publicidad activa,
  - o la transparencia en procedimientos de gestión y planificación estratégica,
  - o la conexión del gobierno abierto con la rendición de cuentas y la evaluación de políticas.

#### Respecto de las propuestas de contenido para incorporar como compromisos dentro del próximo plan:

- La instauración y regulación de sistemas abiertos de contratación pública para la AGE.
- Desarrollar una presencia radical de las administraciones ahí donde están los ciudadanos, como valor clave en la planificación y evaluación de las políticas públicas de la AGE.
- La creación de un Plan Global para el desarrollo del Open Data, que permita a la sociedad ofrecer soluciones con el apoyo de una entidad coordinadora de estas iniciativas.
- Formación y capacitación en gobierno abierto, a fin de potenciar con conocimientos y capacidades a funcionarios y ciudadanos sobre sus valores y herramientas.

## REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD : 2012

Para participar en la OGP, los gobiernos tienen que demostrar su adhesión a los valores del gobierno abierto, conformado con criterios mínimos en cuatro dimensiones claves. Se usan indicadores objetivos para determinar el progreso del país en cada dimensión. Para más información visite <http://www.opengov-partnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria> . Los puntos otorgados por la OGP parecen entre paréntesis.

### TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA:

Ambos documentos públicos

4 de 4

### ACCESO A INFORMACIÓN:

Ley borrador

1 de 4

### DIVULGACIÓN DE PATRIMONIO:

cargos elegidos: pública,  
funcionarios: interna

3 de 4

### PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

10 de 10

4 de 4



GIGAPP es una iniciativa académica nacida en 2010, basada en los valores de

apertura, rigor, conocimiento aplicado e innovación, e impulsada por un equipo de investigadores, estudiantes doctorandos y académicos de España y América Latina, cuyo principal propósito es contribuir al debate y la generación de nuevos conocimientos, conceptos, enfoques, herramientas y marcos de análisis bajo tres ejes temáticos: gobierno, instituciones y comportamiento políticos, administración y gestión públicas, y análisis y evaluación de políticas públicas. ([www.gigapp.org](http://www.gigapp.org))



La OGP busca obtener compromisos concretos de los gobiernos para ampliar la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y usar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. El Mecanismo de Revisión Independiente IRM evalúa el diseño e implementación de planes de acción nacionales para ampliar el diálogo entre las partes interesadas y mejorar la rendición de cuentas.



# III | PROCESO: CONSULTA DURANTE IMPLEMENTACIÓN

**Como parte de la participación en la OGP, los gobiernos se comprometen a identificar un foro para consultar regularmente sobre la implementación de la OGP a las diversas partes interesadas. Dicho foro puede ser una entidad nueva o una ya existente. Esta sección resume esa información.**

Como señala el Gráfico 1 en la sección anterior, el Gobierno de España no creó ningún foro (ni identificó uno existente) en el cual apoyarse para compartir información sobre los avances, integrar un proceso participativo de seguimiento o de consulta durante la implementación, y en donde pudieran participar la ciudadanía y estar efectivamente representados los distintos actores relevantes o afectados.

En opinión del investigador IRM, la ausencia de un proceso participativo en la elaboración y redacción del Plan condicionó que el Gobierno no diera ulteriores pasos necesarios para la apertura de espacios de consulta ciudadana en la etapa de implementación. Aunque se reconoce en paralelo (por ser parte central del Plan de Acción) la realización de una consulta pública vía formulario web a propósito del Proyecto de Ley de Transparencia (ver compromiso 1), el investigador IRM no encontró evidencias de esfuerzos gubernamentales tendentes a la implicación con la ciudadanía, las OSC en general y del sector privado durante el proceso de implementación de este Plan de Acción.<sup>1</sup> De hecho, no figura en ninguna parte del Plan de Acción el objetivo o deseo de implicar a la ciudadanía en estos procesos. En el plan presentado el Gobierno se asume como actor único responsable en la implementación de los compromisos identificados,

mientras los ciudadanos y ciudadanas son entendidos como los receptores pasivos y finales de los servicios o beneficios en materia de transparencia gobierno electrónico derivados de la implementación de los compromisos.<sup>2</sup>

Aunque la ciudadanía, la academia y las OSC han mostrado un enorme interés por el proceso de hechura, contenido, análisis y tramitación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (compromiso 1 y pieza central del Plan), la ciudadanía no ha podido dar un seguimiento ciudadano eficaz a la implementación de los doce compromisos restantes del Plan (pues además de ser definidos sin su participación, no ha habido por parte del Gobierno la comunicación del Plan de Acción, ni de sus avances, ni ha habido la apertura de tales foros específicos de consulta o participación).

De hecho, el único foro abierto respecto del Plan de Acción en Gobierno Abierto en España es el que organizó el GIGAPP en octubre de 2013, a propósito de apoyar el proceso de evaluación en el que se basa este informe independiente, y en donde también se invitó a participar como exponente y representante del Gobierno a Dña. Esperanza Zambrano, enlace ante la OGP, la cual - según notificó por motivos de agenda - no pudo participar.

<sup>1</sup> Esta perspectiva de actuación no está en consonancia con aquellos principios vinculados a la participación ciudadana e incluidos en la Declaración de Gobierno Abierto, y dentro de los cuales los países participantes (España incluido) se han comprometido a promover una forma de participación ciudadana cuya manifestación va más allá de la simple consulta. Ver: <http://www.opengovpartnership.org/node/2727>

<sup>2</sup> En el Plan de Acción, sólo en el compromiso 1 se hace referencia a un proceso participativo de consulta pública electrónica, respecto de la Ley de Transparencia, y éste tiene que ver con la elaboración y no con la implementación del compromiso. Solamente en el compromiso 4 "Impulso a la redes sociales para facilitar la participación ciudadana" se habla de permitir acciones ciudadanas específicas en materia de seguridad pública, denominándola "participación ciudadana". Sin embargo, esta implicación se orienta a dar uso a unos instrumentos de seguridad pública previamente diseñados y preestablecidos, en cuyo caso mejor podría hablarse de apoyo (o colaboración) ciudadana en operativos de seguridad pública, antes que de participación ciudadana para el diseño, seguimiento, implementación o evaluación de políticas de seguridad pública.



# IV | IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS

Los países participantes en la OGP desarrollan planes de acción bianuales. Los gobiernos deberían empezar sus planes explicando los esfuerzos corrientes relacionados a los OGP Grandes Desafíos escogidos, incluyendo estrategias específicas de gobierno abierto y programas en marcha. Luego, los planes deberían proponer los compromisos del gobierno, los cuales debieran modificar la práctica gubernamental en ese sector. Estos compromisos pueden basarse en esfuerzos existentes, identificar nuevos pasos para completar reformas en andamio o iniciar acción en nuevas áreas.

Los compromisos deberían enfocarse en un set de cinco “grandes desafíos” que todos los gobiernos enfrentan. La OGP reconoce que cada país empieza desde un distinto punto de referencia. Por lo tanto, los países son los encargados de elegir los grandes desafíos y compromisos concretos relacionados, que sean más relevantes al contexto único nacional. Ningún plan de acción, estándar o de compromiso específico, será impuesto en ningún país.

Los cinco grandes desafíos son:

1. *Mejorar los servicios públicos —medidas que abarcan el espectro total de servicios al ciudadano, incluidos la salud pública, justicia, agua, electricidad, telecomunicaciones y cualquier otro servicio relevante para fomentar mejoras en los servicios o innovación privada.*
2. *Ampliar la integridad pública —medidas que abarcan corrupción y ética pública, acceso a la información, reformas al financiamiento político y libertad de los medios de comunicación y de la sociedad civil. Manejar eficientemente los recursos públicos —medidas que abarcan presupuestos, adquisición, recursos naturales y la ayuda extranjera.*
3. *Crear comunidades más seguras —medidas que abarcan la seguridad pública, el sector de seguridad nacional, respuesta a desastres, crisis y amenazas ambientales.*

4. *Mejorar la rendición de cuentas corporativa —medidas que abarcan la responsabilidad corporativa en temas como medioambiente, anticorrupción, protección al consumidor, y relaciones con las comunidades.*

Si bien el diseño de los compromisos concretos con un gran desafío debe ser flexible para adaptarse a las circunstancias únicas de cada país, los compromisos para con la OGP deben ser relevantes a los valores de la OGP descritos en los *OGP Articles of Governance* y *Open Government Declaration*, firmada por todos los países participantes en la OGP. El IRM usa las siguientes definiciones orientativas para evaluar la relevancia respecto de los valores clave de Gobierno Abierto.

- **Transparencia**— estos compromisos:
  - o abarcan la información que tiene el gobierno;
  - o no se restringen solamente a datos sino que se aplican a todo tipo de información;
  - o pueden incluir transparencia proactiva o reactiva;
  - o pueden asociarse al fortalecimiento del derecho a la información; y
  - o tienen que proveer acceso abierto a la información (no se puede privilegiar o restringir internamente al gobierno).
- **Participación** — los gobiernos buscan movilizar a los ciudadanos para participar en el debate público y contribuir de una manera que haga la gobernanza más responsiva, innovadora y efectiva. Compromisos sobre participación ciudadana:
  - o abren la toma de decisiones a todos los miembros interesados del público. Los foros suelen ser ‘desde arriba’ en el sentido de ser creados por el gobierno (o actores empoderados por el gobierno) para informar la toma de decisiones;



- o suelen incluir elementos de acceso a la información para garantizar que las contribuciones de los miembros interesados del público sean significativas para las decisiones;
- o suelen incluir el derecho del ciudadano a ser escuchado aunque no necesariamente el derecho a ser obedecido.
- **Rendición de cuentas** — deben existir reglas, regulaciones y mecanismos para que los actores gubernamentales justifiquen sus acciones, actúen en respuesta a las críticas y acepten las consecuencias de las faltas de cumplimiento con leyes o compromisos.
  - o como parte del gobierno abierto tales compromisos tienen un elemento 'abierto' en el sentido de no ser sistemas internos o cerrados de rendición de cuentas sin una cara pública.
- **Tecnología e innovación** — estos compromisos:
  - o promueven nuevas tecnologías que ofrecen oportunidades públicas de compartir información, participar y colaborar;
  - o deben hacer pública más información de manera que permita a la sociedad entender lo que hace el gobierno e influir en sus decisiones;
  - o pueden desarrollar la capacidad del gobierno y la ciudadanía para usar tecnología para mejorar la transparencia y rendición de cuentas;
  - o pueden igualmente apoyar el uso de tecnología de parte de funcionarios públicos o ciudadanos.

Los países pueden enfocar sus compromisos en el nivel nacional, local o subnacional, donde consideren que los esfuerzos tendrán el mayor impacto.

Dado que lograr compromisos de gobierno abierto requiere un proceso de varios años, los gobiernos deberían incluir cronogramas y puntos de referencia en sus compromisos para indicar lo que lograrán completar cada año, en la medida de lo posible.

Esta sección del informe detalla cada uno de los compromisos que incluyó el Gobierno de España dentro de su Plan de Acción. En esta se presentan los 13 compromisos en el mismo orden en el que se plasmaron originalmente, por tanto su numeración coincide con la del Plan.

Aunque en su mayor parte las medidas son metodológicamente claras y objetivas, algunas merecen explicación.

- **Relevancia:** El investigador del IRM evaluó cada compromiso en su relevancia a los valores y "grandes desafíos" de la OGP.
  - o *Valores OGP:* Algunos compromisos no son claros en su relación a los valores de la OGP. Para identificar tales casos, el investigador tomó su decisión basándose en una lectura rigurosa del texto del compromiso, el cual identifica los compromisos que mejor pueden articular su relación con los problemas fundamentales de Gobierno Abierto.
  - o *Grandes desafíos:* Mientras algunos compromisos pueden ser relevantes a más de un gran desafío, el investigador solo cifró el desafío identificado por el gobierno, ya que la mayoría de los compromisos se orientan a uno.
- **Ambición:**
  - o *Impacto potencial:* Los países participantes deben hacer compromisos ambiciosos, con actividades nuevas o pre-existentes, que cambien la práctica del gobierno en el sector relevante. Para contribuir a una definición amplia de ambición, el investigador del IRM determinó cuán potencialmente transformador podría ser cada compromiso, según la evidencia de la investigación y la experiencia del investigador como experto en gobernanza.
  - o *Nuevo o ya existía:* También recordó, sin juicio, si el compromiso se fundamentaba en una acción que ya existía antes del plan.
- **Plazos:**
  - o *Cumplimiento proyectado:* Los OGP Articles of Governance animan a los países participantes a hacer compromisos con resultados claros y hitos anuales esperados. En los casos en que esta información no está disponible, el investigador usa la evidencia y su experiencia para tomar una decisión en cuanto al cumplimiento esperado para el final del periodo de implementación.



# V | AUTO-EVALUACIÓN

**El Gobierno de España publicó un borrador de Autoevaluación del Primer Plan de Acción el 7 de octubre de 2013, y no fue sino hasta el 28 de noviembre de 2013 cuando, desde el Ministerio de la Presidencia, se hizo llegar al investigador IRM el informe definitivo en castellano. Esta entrega coincidió con la aprobación definitiva de la Ley de Transparencia. Dña. Esperanza Zambrano, responsable del mismo y enlace ante la OGP, informó que tan pronto se finalizara la traducción de la autoevaluación al inglés serían remitidos ambos documentos a la OGP.**

El borrador de la autoevaluación del Gobierno fue sometido a observaciones ciudadanas mediante formulario web (en formato HTML) habilitado durante 3 semanas, del 7 al 28 de octubre de 2013. Después del 28 de octubre el contenido del borrador seguía disponible, pero días después fue eliminado de la web del Ministerio de la Presidencia. Según el informe de autoevaluación, tan sólo fueron recibidas 3 observaciones al borrador y se tuvieron casi 900 visitas, cifras que distan mucho de aquellas obtenidas en el proceso de consulta del Anteproyecto de Ley de Transparencia realizado un año antes en este mismo formato. El Borrador y el Informe Definitivo

de autoevaluación tienen prácticamente la misma redacción en consideración el contenido de los 13 compromisos. La autoevaluación definitiva tiene una introducción ampliada y una sección que incorpora la valoración de la sociedad civil respecto del proceso, cuya fuente fue la Jornada de Debate que organizó el investigador IRM en colaboración con varios investigadores GIGAPP en Madrid, en la sede de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón el 23 de octubre de 2013, así como los dos documentos de las OSC con observaciones al borrador del Plan de Acción ya citados.



## Gráfico 2 | Pauta de Auto-Evaluación

¿Se publicó un informe de auto-evaluación anual?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Se publicó el informe de acuerdo a los plazos preestablecidos?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
¿Está disponible el informe en la lengua local?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Según las partes interesadas, es adecuada la publicación en esta(s) lengua(s)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Está disponible el informe en inglés?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Proveyó el gobierno un periodo de dos semanas para recibir comentarios públicos en los borradores del informe de auto-evaluación?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No tres semanas
¿Se recibieron algunos comentarios?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Se colocó el informe en el portal OGP?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Incluyó el informe de auto-evaluación una revisión de los esfuerzos de consulta?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
¿Abarcó el informe todos los compromisos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Evaluó el cumplimiento según el plazo del compromiso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Reafirmó el informe el compromiso del gobierno en materia de transparencia?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Describe la relación entre el Plan de Acción y las áreas de los Grandes Desafíos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No



# VI | ¿CÓMO AVANZAR?

**Esta sección coloca el Plan de Acción dentro del contexto específico nacional y destaca los próximos pasos potenciales, como resultado del análisis precedente junto con las prioridades de los actores implicados.**

## Contexto español

España se ha enfrentado desde 2008 a una crisis económica muy severa, que vinculada con otras causas y problemas estructurales han hecho que la misma persista con tenacidad, y cuyos efectos también han hecho evidente una crisis político-institucional también pronunciada. En mayor o menor medida, desde 2008 a la fecha, estas crisis y sus efectos han condicionado profundamente las agendas gubernamentales y las prioridades de actuación.

En el contexto de un creciente desempleo (que ha llegado a más del 26 %), emergieron movimientos sociales de protesta ciudadana de calado (como el 15M) que dieron cuenta del descontento social. Después del rescate bancario de 2012, la principal actuación gubernamental se ha centrado en la reducción del déficit y en el recorte del gasto público. De forma generalizada y como resultados adversos de tales medidas, también se han visto incrementados de forma dramática los indicadores de pérdida de poder adquisitivo de las familias, de pobreza, y donde los presupuestos públicos y el reparto presupuestario hacia las autonomías se han reducido sensiblemente, profundizando en algunos casos las tensiones políticas territoriales y/o nacionalistas.

Este proceso de crisis económica se mezcla con los escándalos de corrupción política salidos a la luz pública en los anteriores años, vinculados a supuestas o comprobadas tramas urbanísticas ilegales, financiaciones irregulares de partidos políticos o formaciones sindicales, obras públicas faraónicas en desuso o en quiebra y corrupción política general en varios frentes al nivel local, subnacional y nacional. En ellos se han visto implicados cargos públicos, miembros destacados de los principales partidos políticos, presidentes autonómicos e incluso miembros de la Casa Real, lo que ha devenido en el incremento de la desafección política y una erosión de la confianza ciudadana en su clase política y en las instituciones.

Respecto de este contexto, TI-España informó recientemente que para 2013 España había bajado en 10 puestos respecto del Índice de Percepción de Corrupción, para pasar del puesto 30 al 40 en sólo un año.<sup>1</sup>

El Gobierno de España reaccionó a tales acontecimientos buscando la aprobación de un paquete de medidas legales de “regeneración democrática,”: Anteproyecto de Ley Orgánica de Control de la actividad Económica-financiera de los Partidos Políticos y Anteproyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado. Con estos instrumentos se pretende elevar controles en la financiación de los partidos políticos y en el ejercicio de las funciones de los altos cargos públicos de la AGE.

En la vertiente administrativa, el Gobierno ha reaccionado a estas restricciones presupuestarias con medidas lideradas por la Comisión Virtual para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), basadas en la racionalización de estructuras, recursos y procedimientos, a fin de reducir el gasto en el sector público y hacer una simplificación jurídica y administrativa. En materia de administración electrónica puede decirse que la penetración y aceptación de la misma en la ciudadanía es bastante considerable, y donde el número de trámites y el volumen de ciudadanos usuarios no han parado de crecer. Además, la política de reutilización de datos implementada también sigue su avance con el apoyo y trabajo de entidades como [www.datos.gob.es](http://www.datos.gob.es)

Ahora bien, cabría preguntarse: ¿de qué forma todos estos conocimientos y avances impactan o influyen en el desarrollo de estrategias de gobierno abierto? Claramente, estas actuaciones en gobierno electrónico y eficiencia de las administraciones públicas han podido dar como resultado una mejora significativa en los servicios públicos, pero (por sí mismos) no brindan pautas para articular adecuadamente acercamientos



o estrategias de largo plazo en materia de gobierno abierto. En palabras de Alberto Ortiz de Zárate, ex director de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco y especialista en materia de gobierno abierto, esto puede ser resultado “de la herencia de trabajo pasada que está basada en los aportes de la administración electrónica, y que en España al momento de conformar el Plan de Acción, se consolidaron varios objetivos más cercanos al e-government, que no tienen por qué caer en el rubro del gobierno abierto pues no implican ni participación, colaboración o transparencia.”<sup>2</sup>

Es necesario explicar que en España existe un alto grado de descentralización administrativa, en donde las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla gozan de un alto grado de poder de decisión, teniendo en algunos casos competencia exclusiva sobre la gestión de las políticas y servicios públicos, así como potestad de regular sobre su propia administración autonómica. En el contexto subnacional, España ha avanzado mucho en materia de transparencia y gobierno abierto. Antes que el gobierno central, varias comunidades autónomas y provincias contaban ya con sus portales de transparencia, datos abiertos y/o de gobierno abierto (País Vasco, Cataluña, Cantabria, La Rioja, Asturias, Aragón), algunos de los cuales han sido pioneros y referentes al nivel nacional e internacional (como el caso de IREKIA en el País Vasco). Algunas otras comunidades autónomas gozan además de Leyes específicas en materia de transparencia y gobierno abierto (como la Comunidad Foral Navarra y más recientemente Extremadura) mientras otras comunidades están en proceso de consulta pública para la elaboración de una propia (por ejemplo Andalucía, Canarias, Murcia). Aunque significativos, estos avances no han sido contemplados en el marco del Plan de Acción, ni sus experiencias han sido recogidas en el diagnóstico del mismo. En opinión del investigador IRM, la sociedad civil, la academia, los funcionarios públicos, los gobiernos subnacionales, el sector privado y la ciudadanía en general, actores todos que estuvieron prácticamente ausentes por no ser convocados en el proceso de conformación del primer Plan de Acción, tienen un muy importante papel que desempeñar en el desarrollo del próximo Plan de Acción, a fin de definir

y dar seguimiento de forma informada y participativa a las próximas estrategias de gobierno abierto que impulse el Gobierno de España, que ya no puede prescindir más de su implicación y presencia.

Con base en este contexto, si en 2012 el problema para diseñar en clave participativa el Plan de Acción fue la falta de tiempo, en esta ocasión de elaborar el segundo Plan el Gobierno de España no se tiene este problema. No sólo tiene tiempo, sino también la experiencia previa del primer Plan de Acción, así como experiencias destacadas al nivel autonómico. También tiene avances que valorar y algunos retos de futuro identificados a los que desafiar. Tiene además ya una Ley de Transparencia que (con sus limitaciones) deberá dar cauce, dotar de instrumentos e implementar.

### **Prioridades de los actores implicados**

En el desarrollo del gobierno abierto, la ciudadanía en su conjunto y los actores implicados han considerado abrumadoramente al primer compromiso (la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno), como el más relevante de los trece incluidos en este primer Plan de Acción. Su proceso de tramitación parlamentaria ha suscitado la mayor atención por parte de las OSC implicadas y medios de comunicación. En contraste, frente al profundo conocimiento ciudadano y de la sociedad civil demostrado respecto de este compromiso, se evidenció en general poca familiaridad con el proceso OGP y con los 12 compromisos restantes.

Basadas en el desarrollo de los compromisos y como resultado de la Jornada de Debate organizada el 23 de octubre 2013 y de las entrevistas en profundidad realizadas a actores clave, además de la Ley de Transparencia, hay muchas otras prioridades y propuestas que no están en el plan de acción pero que son identificadas para su inclusión en futuros planes. De forma implícita estas prioridades se centran en normativas, capacidades y estrategias de actuación de la Administración General del Estado (AGE).

Podrían definirse como normativas o disposiciones legales, de cumplimiento general, para la articulación de acciones en los distintos niveles de gobierno, a fin de para regular y formalizar la implicación de la AGE en materia de gobierno abierto, que se basan en:



1. La instauración y regulación de “sistemas abiertos” de contratación pública para la AGE.
2. La incorporación de iniciativas basadas en una “presencia radical” de las administraciones, ahí donde están los ciudadanos, como valores clave en la planificación estratégica y en la evaluación de las políticas públicas de la AGE.<sup>3</sup>
3. La creación de un Plan Global para el desarrollo del open data, que permita a la sociedad ofrecer soluciones para favorecer un proceso de integración y una mayor legitimidad democrática,<sup>4</sup> a través de una “apertura de datos radical”. Esta propuesta requiere la creación de una entidad coordinadora e integradora de estas iniciativas en todos los niveles del gobierno,<sup>5</sup> bajo el cobijo (o no) de la iniciativa Datos.gob.es impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España, y gestionada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI). Esta entidad tendrá que incluir en su estructura de gobierno a miembros del sector privado y OSC, a fin no sólo de asesorar y vigilar la adecuada implementación del mismo, sino también con potestad para definir políticas, prioridades y estándares.
4. Formación y capacitación en gobierno abierto. Acompañar en la apertura del gobierno a los funcionarios públicos de la AGE implicados en la implementación de tales iniciativas, a fin de potenciar una mayor dotación de conocimientos, habilidades y capacidades y de brindar una mayor formación sobre estos temas. Ello es fundamental pues el gobierno abierto “no es casi nunca una cuestión técnica, sino de cultura política, y donde sin formación es muy difícil operar el cambio.”<sup>6</sup>

## Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones tienen como fin avanzar adecuadamente en el desarrollo del gobierno abierto en España y permitir una adecuada integración de las necesidades, puesta en común de prioridades, preferencias y aspiraciones de la ciudadanía e implicar de forma decidida las energías de los gobiernos subnacionales. Como se ha destacado, éstos son depositarios de mucha experiencia en materia de gobierno abierto.

Se recomienda pues que el Gobierno de España atienda a cabalidad los requerimientos de la OGP (véase Sección II de este documento) para permitir y promocionar amplias consultas públicas. Al respecto, no se trata llanamente- como se señala en la redacción del Informe de Autoevaluación - de hacer “(u)n proceso de consulta más amplio” (pág. 22), sino de reflejar un proceso de diálogo y deliberación que garantice la factibilidad, sustentabilidad y apropiación del Plan de Acción. Sobre este tema se recomienda tomar en cuenta tres cuestiones clave:

### **1. Se recomienda que el Gobierno de España diseñe, antes de elaborar en solitario el segundo Plan de Acción, una estrategia de política pública de actuación participativa, abierta e integral, orientada precisamente a lograr la definición colaborativa de los próximos compromisos.**

Esta estrategia precisa como prerequisite, que el gobierno deje de entender a los ciudadanos como meros receptores de servicios públicos o emisores de información, sino como actores con voz, aspiraciones, ideas y energías propias.<sup>7</sup> Debería incluir varias acciones específicas como campañas de promoción nacionalmente organizadas en los medios y en redes sociales, en diversos perfiles y plataformas. Sus contenidos deberían retomar los avances logrados y las experiencias hasta ahora aprendidas, incluirlos desafíos pendientes de cumplimiento y ofrecer espacios de interacción con la ciudadanía a través de internet, además de otras herramientas de consulta e implicación ciudadana de carácter presencial. Las experiencias de la campaña “Mi Casa a Salvo” y otros componentes relacionados al Compromiso 6 podrían ser útiles a tal fin, pero su articulación deberá incluir el desarrollo de actividades presenciales que favorezcan la interacción. Las estrategias de este diseño previo no debe usar solamente una participación ciudadana basada en la consulta, sino también técnicas y herramientas que permitan una adecuada implicación de las asociaciones, ciudadanía y gobiernos, asegurándose que las aspiraciones y preocupaciones del público son consistentemente comprendidas y consideradas. Mecanismos tales como los talleres o las encuestas deliberativas podrían ser muy útiles a tal fin, y en donde se puede hacer copartícipes clave a las Comunidades Autónomas.



**2. El nuevo Plan de Acción debe ser de España, y debe implicar a España en su conjunto.** Se trata en definitiva de clarificar el ámbito territorial de los compromisos, y de “redefinir el eje troncal del plan” para transformarlo “de una visión desde dentro hacia un enfoque integral hacia afuera”.<sup>8</sup> La estrategia integral para diseñar el nuevo Plan de Acción significa que no debe entenderse como “aquello que debe hacer el Gobierno o la administración General del Estado (AGE)” en materia de gobierno abierto, sino como “aquello que tanto ciudadanía como el gobierno en (sus distintos niveles) han decidido conjuntamente realizar para acercar el gobierno (de nueva cuenta en todos sus niveles) a los ciudadanos, a fin de hacerlo más transparente y participativo”.<sup>9</sup> Implica abrir la puerta por ejemplo, a que gobiernos autonómicos puedan concertar y canalizar con su liderazgo y capacidades la realización de uno o varios hitos en el marco de un compromiso, o colaborar en red en la definición de más compromisos dentro del próximo plan, para lo cual podría ser muy útil usar como foro las conferencias intergubernamentales, y en específico, la Conferencia de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, foro horizontal de trabajo de los gobiernos autonómicos. La gran debilidad del primer Plan de Acción ha sido no entender que el gobierno abierto puede existir (como de hecho ocurre) más allá de la AGE, y donde varias autonomías ya tienen camino avanzado en materia de gobierno abierto, y que pueden por tanto ofrecer su trabajo, energías y experiencia para articular una estrategia integral, orientada al desarrollo del gobierno abierto a escala nacional. Ello por supuesto, sin dejar de lado el papel fundamental que juega la dimensión local, pues según se recoge expresamente la Ley de Bases de Régimen Local (Art. 1.1) los municipios “son entidades

básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.

**3. El nuevo Plan de Acción debe asentar el terreno para instaurar al gobierno abierto como una política pública (o estrategia de actuación) transversal permanente.** En opinión de expertos como Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos,<sup>10</sup> el gobierno abierto en España debería orientarse hacia:

- institucionalizar una mayor y mejor participación,
- mejorar regulaciones que permitan la inclusión del sentir ciudadano y con ello profundizar en la transparencia legislativa
- mejorar el bienestar a través del desarrollo de políticas sociales abiertas,
- promover la equidad a través de políticas compensatorias y de servicios públicos,
- generar más conocimiento a través del gobierno abierto usando y compartiendo conocimiento vía aplicaciones informáticas,
- promover la transparencia holística a través de publicidad activa, incorporando la transparencia en procedimientos de gestión y planificación estratégica,
- conectar efectivamente el gobierno abierto con la rendición de cuentas, y donde la evaluación de políticas es una dimensión clave en la apertura.

Así definida, esta estrategia situaría en España al gobierno abierto como un enfoque transversal en la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas.

<sup>1</sup> García Pedraz, Javier: “España es el segundo país donde más aumenta la percepción de corrupción” El País.com URL: <http://goo.gl/SQsr8J> (Consultado 04 diciembre 2013)

<sup>2</sup> Entrevista a Alberto Ortiz de Zárate: 9 octubre 2013. (entrevista realizada por Cruz Rubio, César). URL: <http://www.screenr.com/0dqH> a propósito de la Evaluación IRM del Plan de Acción de España en Gobierno Abierto.

<sup>3</sup> Entrevista a Guzmán Garmendia. 18 octubre 2013. (entrevista realizada por Cruz Rubio, César). URL: <http://goo.gl/FMrYwF> a propósito de la Evaluación IRM del Plan de Acción de España en Gobierno Abierto.

<sup>4</sup> Entrevista a Jordi Graells 11 octubre 2013. (entrevista realizada por Cruz Rubio, César). URL: <http://goo.gl/FMrYwF> a propósito de la Evaluación IRM del Plan de Acción de España en Gobierno Abierto.

<sup>5</sup> Entrevista a Alberto Abella. 07 octubre 2013. (entrevista realizada por Cruz Rubio, César). URL: <http://goo.gl/FMrYwF> a propósito de la Evaluación IRM del Plan de Acción de España en Gobierno Abierto.

<sup>6</sup> Entrevista a Antoni Gutiérrez Rubí. 14 octubre 2013. (entrevista realizada por Cruz Rubio, César). URL: <http://goo.gl/FMrYwF> a propósito de la Evaluación IRM del Plan de Acción de España en Gobierno Abierto.

<sup>7</sup> Usando las palabras de Antoni Gutiérrez Rubí. Véase: Entrevista a Antoni Gutiérrez Rubí. 14 octubre 2013. (entrevista realizada por Cruz Rubio, César). URL: <http://goo.gl/FMrYwF> a propósito de la Evaluación IRM del Plan de Acción de España en Gobierno Abierto.

<sup>8</sup> Usando las palabras de Antoni Gutiérrez Rubí. Véase: Entrevista a Antoni Gutiérrez Rubí. 14 octubre 2013. (entrevista realizada por Cruz Rubio, César). URL: <http://goo.gl/FMrYwF> a propósito de la Evaluación IRM del Plan de Acción de España en Gobierno Abierto.

<sup>9</sup> Usando las palabras de Antoni Gutiérrez Rubí. Véase: Entrevista a Antoni Gutiérrez Rubí. 14 octubre 2013. (entrevista realizada por Cruz Rubio, César). URL: <http://goo.gl/FMrYwF> a propósito de la Evaluación IRM del Plan de Acción de España en Gobierno Abierto.

<sup>10</sup> Memoria Jornada de Debate del Plan de Acción de España en Gobierno Abierto: avances, desaciertos, cuestiones pendientes y propuestas”. 23 octubre 2013. URL: <http://goo.gl/JeRgcn> (Consultado 05 noviembre 2013)



# ANEXO | METODOLOGÍA

**Como complemento a la auto-evaluación nacional, investigadores del país participante elaboraron un informe independiente. Estos expertos usan una metodología común que sigue las pautas de la OGP basadas en una combinación de entrevistas con partes interesadas locales y análisis y revisión de documentos.**

## Introducción

El Análisis del Progreso en los planes de acción de la OGP es resultado de una combinación de entrevistas, análisis de documentos e información obtenida en reuniones con interesados no-gubernamentales. El informe incorpora la auto-evaluación del gobierno y otras evaluaciones realizadas por la sociedad civil u organizaciones internacionales.

Los investigadores nacionales IRM se reúnen con los interesados a fin de garantizar que éstos relatan en forma correcta los eventos del proceso de la OGP. Dadas las restricciones financieras y temporales, el IRM no puede consultar a toda la gente afectada y/o interesada. Por lo tanto, el IRM intenta ser metodológicamente transparente y, cuando es posible, hace público el proceso de participación de los interesados. Más abajo, en esta sección, se detalla este proceso. El IRM protege la identidad de los informantes que la requieran en los contextos nacionales, pertenezcan o no al gobierno.

Este informe fue revisado por integrantes del Panel Internacional de Expertos del IRM para certificar que cumple con los estándares más altos de investigación. Adicionalmente, el IRM estimula decididamente el comentario público en los borradores de los documentos nacionales.

## Selección de los participantes

Se hizo evidente desde el comienzo que la sociedad civil en España era poco consciente de la OGP, la cual se podría atribuir a la falta de visibilidad de las acciones del Gobierno de España respecto del Plan de Acción. Adicionalmente, esta falta de consciencia también puede atribuirse en parte a que la ciudadanía y las OSC en España están más abocadas a cuestiones locales, y menos enfocada a asuntos de nivel nacional. Hay excepción con aquellas con vocación internacional

que tratan temas vinculados con la transparencia y el acceso a la información en España y muchas de las cuales son aglutinadas en la llamada Coalición Pro-Acceso que lidera Access-Info Europe. Con todo ello, las posibilidades de implicación y control ciudadano o por parte de las OSC eran limitadas.

En realidad, las organizaciones Access Info Europe, la Open Knowledge Foundation-España, La Fundación Ciudadana Civio, Transparencia Internacional España, todas ellas integradas en la citada Coalición Pro-Acceso, han tenido y tuvieron una participación y presencia activa destacada durante el proceso de tramitación de la Ley de Transparencia, pero su participación y conocimiento respecto del Plan de Acción OGP era más limitado. Como puede advertirse en este informe, tan sólo Access-Info Europe y el grupo de trabajo ciudadano organizado en la red social Novagob, profundizó en su globalidad para analizar la implicación de España dentro de la OGP y en su primer Plan de Acción.

Ante la ausencia de foros de consulta abiertos durante la implementación o elaboración del Plan de Acción y ante la ausencia de información relevante respecto de la participación y postura de la OSC en este proceso, el investigador optó por una estrategia metodológica de recopilación de información cualitativa fundamentalmente, basada en la organización de una jornada de debate, la creación de un microsite, la realización de entrevistas en profundidad con actores clave, la realización y documentación en vídeo de comprobaciones y elaboración y levantamiento de cuestionarios de opinión.

En el Workshop IRM celebrado en la Ciudad de Panamá en septiembre de 2013, el investigador sometió a consideración del staff IRM este esquema metodológico con las acciones generales a llevar



a cabo para la elaboración de este informe<sup>1</sup> y que contó con su visto bueno. Los detalles en el uso de estas herramientas y sus resultados se detallan a continuación.

Finalmente, para certificar el nivel de cumplimiento en una parte importante de los 13 compromisos, se requería realizar una serie de comprobaciones a través de internet. A tal fin, el investigador documentó tales comprobaciones en formato de vídeo, y las incluye como pruebas documentales que soportan algunas afirmaciones y conclusiones relevantes.

### Entrevistas en profundidad: octubre 2013

Como resultado de charlas con asociaciones y actores, el investigador identificó y concertó citas con informantes considerados clave, documentando en vídeo un total de 6 entrevistas en profundidad, cuyos enlaces están disponibles en la web [www.gigapp.org](http://www.gigapp.org).

- *Alberto Abella*, Director de la consultora Rooter España y presidente de la Open Knowledge Foundation (OKF Spain)
- *Antoni Gutiérrez Rubí*, consultor en comunicación política y columnista
- *Marc Garriga*, consultor experto en smart-cities y open data
- *Guzmán Garmendia*, Ex director de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra, Consultor en open government y miembro de la OKF-Spain
- *Alberto Ortiz de Zárate*, ex director de participación ciudadana del Gobierno Vasco, consultor y experto en gobierno abierto
- *Jordi Graells Costa*, experto en open data de la Generalitat de Catalunya

Además de estas entrevistas en profundidad, el investigador mantuvo reuniones con funcionarios responsables de algunos de los compromisos, en los ministerios de la Presidencia, Interior, Asuntos Exteriores y Cooperación, y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Estas reuniones fueron concertadas para hablar del nivel de progreso de los compromisos y obtener información sobre algunos de los hitos.

### Microsite

Previamente, el investigador diseñó y montó un microsite específico en la web [www.gigapp.org](http://www.gigapp.org)<sup>2</sup> para apoyar las acciones desarrolladas en el marco de la Jornada de Debate, a fin de informar a los participantes respecto del proceso de evaluación que estaba siendo realizado. Habilitó un cuestionario on-line emulando aquel distribuido en impreso, así como un foro virtual. Proporcionó un repositorio de documentación complementaria de interés. ([www.gigapp.org/gobiernoabierto](http://www.gigapp.org/gobiernoabierto))

### Jornada Especial de Debate: 23 de octubre de 2013

El investigador diseñó y promocionó (junto con el apoyo de varios investigadores del GIGAPP Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas), una Jornada Especial de Debate sobre el Plan de Acción en Gobierno Abierto. Esta Jornada, de carácter gratuito y con aforo limitado a 100 personas, fue celebrada en Madrid en la Sede de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón el 23 de octubre de 2013.<sup>3</sup> En ella participaron académicos, miembros de las OSC, funcionarios públicos y ciudadanos. Se distribuyó en la misma un cuestionario para ser cumplimentado a título individual, anónimo (opcional) y voluntario. Aunque poca y con poco margen de tiempo, la difusión de esta Jornada se realizó eficazmente diez días antes, a través de correo electrónico y boletines en las redes de contactos de la Propia Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, del GIGAPP, y de la Asociación Española de Ciencia Política, de la Red Social Novagob y su difusión en varios perfiles de Twitter.

A esta jornada se registraron un total 66 personas, de las cuales 49 asistieron a la jornada, entre ellos académicos, funcionarios y miembros de las OSC, a los que se les facilitó el citado cuestionario. De los 18 cuestionarios recabados y validados, se ha podido obtener información cualitativa de diagnóstico y propuestas, mucha de la cual se recupera en la sección de este informe "Cómo Avanzar".



En la citada jornada, se cuidó que existiera la participación de reputadas organizaciones y ciudadanos. A tal efecto, abrió el espacio para que académicos de prestigio y las principales OSC implicadas y miembros de la Coalición Pro Acceso (Access Info-Europe, Transparencia Internacional España, Fundación Civio, Openkratio) presentaran sus comentarios y observaciones al borrador del Informe de Autoevaluación, obteniendo con ello información relevante de estos actores respecto del citado proceso y sobre sus puntos de vista.

#### *Detalles de la Jornada de Debate*

La jornada comenzó a las 9:40 y finalizó a las 14:20 aproximadamente. Todos los participantes invitados a participar como tertulianos acudieron a la cita. No hubo tiempo de visionado público en el canal de Youtube de entrevistas en profundidad, según se propuso originalmente en programa. En general, por el grupo de personas participante, se valoró la actividad como muy positiva para conocer, aprender y proponer, aunque por parte de algunos asistentes se echó en falta de más tiempo para las participaciones y/o debate y que se respetaran mejor los tiempos.

Como primera parte de la Jornada, César Nicandro Cruz-Rubio, investigador GIGAPP responsable del informe de progreso IRM-OGP y coordinador de esta Jornada de Debate, agradeció su participación y asistencia e informó sobre qué es la Alianza para el Gobierno Abierto OGP, sobre su Mecanismo de Revisión Independiente IRM-OGP y de la estructura básica de un reporte de progreso de país IRM. Entonces explicó los objetivos perseguidos y el Plan de Trabajo para dicha Jornada.

Comenzó la ronda de ponentes invitados, D. Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de Transparencia Internacional España (TI-España), quien habló de los instrumentos, informes e indicadores que a través de esta organización están desarrollando y publicando, así como de la postura de TI-España respecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de España, que estaba finalizando su trámite parlamentario.

Dña. Victoria Anderica, de Access Info Europe, participó con su presentación “¿Está España avanzando hacia un gobierno abierto?”, dando una valoración respecto de los 13 compromisos asumidos en el Plan de Acción. En esta valoración, y poniendo en antecedente lo que es y lo que no es o puede ser entendido como gobierno abierto, ofreció un reporte crítico respecto de la autoevaluación con apreciaciones y cambios fundamentales en varios de ellos, en función del nivel de cumplimiento declarado por el gobierno en su borrador de autoevaluación.

D. David Cabo, de Civio Fundación Ciudadana, participó con su presentación “Progresos y situación del Open Data en España”, dando una breve charla sobre las potenciales ventajas del open data y de su aplicación en España, realizando una valoración sobre la situación de España en la materia ofreciendo a tal efecto comparaciones de experiencias internacionales y de varios rankings a tal efecto diseñados.

Después de un receso, los Sres. D. Ignacio Criado y D. Félix Ontañón, de las organizaciones Novagob y Openkratio respectivamente, participaron en nombre del grupo ciudadano mayor que, compuesto por estudiosos independientes, ciudadanos, académicos y funcionarios públicos, operaron en la red social Novagob el desarrollo de un debate independiente. Organizaron mediante trabajo colaborativo una evaluación ciudadana respecto del borrador a la autoevaluación, en donde identificaron y analizaron casi todos los 13 compromisos. Se indicaron a tal efecto correcciones de forma a y fondo a este documento respecto del nivel de cumplimiento declarado por el gobierno. Este mismo informe fue previamente enviado el domingo 20 de octubre al formulario web habilitado por el Ministerio de la Presidencia a tal efecto.



Acabada la parte de diagnóstico de la Jornada, se desarrolló una ronda de preguntas y comentarios que luego fue completada con última de las participaciones. D. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, finalizó la ronda de ponentes y habló del futuro y de los efectos potenciales no deseados del open government, y ofreció un conjunto de propuestas de cara al futuro.

En la segunda ronda de intervenciones se abrió el debate y expusieron varias inquietudes, dudas y propuestas vinculadas no sólo al Plan de Acción sino también, y fundamentalmente, respecto de qué debe entenderse como gobierno abierto, y sobre el rol determinante del funcionario público como actor dinamizador del cambio en todos estos procesos y compromisos. Gran parte de estas aportaciones se vieron reflejadas en los cuestionarios.

#### **Datos arrojados por el cuestionario de opinión**

De los 18 cuestionarios recabados se ha podido obtener información cualitativa de diagnóstico y propuestas, y de la información cuantitativa tan sólo se destacan 3 datos.

“¿Cuáles de los compromisos del Plan de Acción considera Ud. que son los más relevantes? Se enumeran aquí según el orden presentado en el Plan de Acción. Puede escoger uno o varios, según entienda su mayor relevancia.” Como respuesta, claramente el compromiso 1, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se marcó 16 veces, seguida por el compromiso 3 Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el 6, Impulso de las redes sociales para facilitar la participación ciudadana (ambos 8 veces).

Ante la pregunta de opinión respecto del nivel de ambición o relevancia gubernamental sobre cada uno de los compromisos, los entrevistados respondieron lo siguiente. Sobre la Ley de Transparencia, la mitad de los encuestados opinaron que el nivel de ambición gubernamental era moderado, frente el resto se dividió en partes iguales opinando de forma polarizada (es decir, un 22% opinión que la ambición del gobierno era transformadora y un porcentaje igual opinó que era mínima). Sobre el compromiso 6, Impulso de las redes sociales para facilitar la participación ciudadana, la mitad opinaron la ambición del gobierno como moderada, repartándose las opiniones restantes de ambición gubernamental entre transformadora o mínima. La información cualitativa está incluida en la sección de este documento “Cómo Avanzar”.

Posteriormente a la celebración de esta Jornada de Debate, el investigador elaboró un documento resumen de esta Jornada de Debate<sup>4</sup> informando de algunos resultados cuantitativos relevantes del cuestionario,<sup>5</sup> y recogió de forma textual y despersonalizada la información cualitativa recabada en los mismos respecto de las percepciones y propuestas de los participantes, agrupándolas temáticamente. Este documento fue remitido a todos los participantes y compartido también con Esperanza Zambrano, del Ministerio de la Presidencia para su conocimiento, pues aún estaba abierto el periodo de recepción de observaciones y comentarios al Borrador de Autoevaluación.

Cabe destacar que en el microsite referido se puede también descargar en formato CSV los datos de los cuestionarios, para quien desee reutilizarlos.

## **ANEXO 5**

### **PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA PARA LA APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO**





Grupo  
Parlamentario  
Socialista  
de Cortes  
Generales

Grupo  
Socialista  
del Congreso



### A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Carrera de San  
Jerónimo, 40  
28014 Madrid

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente **Proposición no de ley para la aprobación de la Estrategia de Gobierno Abierto**, para su debate en Pleno.

En el Palacio de Congresos de los Diputados, a 16 de marzo de 2015.

LA DIPUTADA

María González Veracruz

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

39/ovr

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

España sufre la mayor crisis institucional desde la llegada de la democracia. Diversas encuestas indican un amplio consenso ciudadano en torno a la necesidad de mejorar y reforzar nuestro sistema democrático. La ciudadanía demanda nuevas formas de participación que permitan incrementar su implicación en la definición de las políticas y en la toma de decisiones por parte de los diferentes poderes públicos, reformas para avanzar en la mejora de nuestro sistema democrático.

La participación cívica, como libre expresión del pluralismo y la diversidad, son grandes señas de identidad de la sociedad española, pero requiere más espacios para la participación política, más cauces para la expresión de sus propuestas e instrumentos más actualizados y eficaces para cumplir con el contenido de los artículos 20 y 23 la Constitución, que reconocen el derecho a la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social.

La exigencia constitucional de eliminar obstáculos que impidan o dificulten su plenitud obliga a mejorar y reformar nuestro ordenamiento jurídico, contemplando con mayor precisión y claridad todas las medidas necesarias para mejorar la transparencia, el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y su participación en los asuntos públicos. Estos cambios constituyen la base para la mejora institucional y de gobierno.

Al tiempo, la revolución que ha supuesto Internet a nivel global todavía no ha llegado suficientemente a los poderes públicos. Internet hace posible técnicamente que cualquier persona, prácticamente desde cualquier sitio, pueda acceder, conocer y controlar en tiempo real las actuaciones de la Administración. Se trata del mayor foro imaginable para el debate y la participación política de la ciudadanía.

En una sociedad democrática avanzada los ciudadanos y ciudadanas, además de ver reconocidos sus derechos más elementales dentro de un procedimiento administrativo

como parte interesada, tienen que poder saber, tomar parte y colaborar activamente. Esto reforzará nuestra democracia y servirá de impulso para una acción de gobierno transparente y para una administración más eficaz, cercana y servicial.

Ante esta realidad surge la idea de caminar hacia un Gobierno Abierto. Un Gobierno, unas instituciones y unos políticos capaces de entablar una conversación permanente con los ciudadanos y ciudadanas, de escuchar lo que dicen y solicitan. Capaces de tomar decisiones teniendo en cuenta las necesidades y preferencias ciudadanas, facilitando la participación y la colaboración de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas, proporcionando información y comunicando de forma transparente de aquello que se decide y hace, sometiéndose a criterios de calidad y de mejora continua, rindiendo cuentas y asumiendo responsabilidades ante la ciudadanía a la que ha de servir.

Es imprescindible, por tanto, hacer más accesibles, horizontales y plurales los mecanismos de consulta y de definición de políticas, la toma de decisiones y la rendición de cuentas, como parte fundamental del proceso de empoderamiento ciudadano. Para ello, es necesario incorporar herramientas y procedimientos para caminar hacia Gobiernos Abiertos, liderando las acciones necesarias para garantizar que las herramientas tecnológicas sean accesibles a toda la ciudadanía, luchando por reducir la brecha digital.

La práctica del Gobierno Abierto como respuesta a la demanda y necesidad de nuestra sociedad de más y mejor democracia. Durante la pasada legislatura, tanto en el gobierno central como en otras administraciones públicas españolas, se hicieron avances notables en este sentido. Ejemplo de ello son iniciativas de apertura de datos como las de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno Vasco y del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón, entre otras experiencias. Modelos ejemplares de Gobierno Abierto como el de Reino Unido, Estados Unidos, Euskadi (Irekia) y Navarra, o la ley de Gobierno Abierto de Extremadura –la única en nuestro país, impulsada por el grupo

socialista y aprobada por unanimidad de la Cámara- son casos prácticos a seguir por la Administración General del Estado y del Ejecutivo central.

En 2011, España ocupaba el tercer puesto en el ranking mundial de índice de E-participación (participación electrónica), mejorando 31 puestos respecto a 2008. Además era 9ª en el índice de Naciones Unidas del desarrollo de gobierno electrónico y fue premiada por la ONU por los avances en la administración electrónica. Pero hoy en día no es suficiente preservar lo conseguido. Mientras España se detiene y retrocede el resto del mundo sigue avanzando en políticas públicas tecnológicas. En 2014, España ya no se encuentra entre los primeros 10 puestos, actualmente ocupa la 12ª posición en el índice de desarrollo de gobierno electrónico; de hecho, no ha recuperado su posición anterior al informe previo del 2012, cuando pasó del 9º al puesto 23º. En el ranking de e-participación nos encontramos en el puesto 19, confirmandose la preocupante tendencia descendente de los últimos cuatro años y colocándonos en el vagón de cola de los países europeos.

Nuestro país necesita retomar esfuerzos y liderazgo para hacer posible mejorar la calidad de nuestra democracia, a través de la consecución de un gobierno y administración abierta, transparente y participativa.

Recientemente se ha puesto en marcha el Portal de Transparencia, como viene recogido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. No obstante, este portal carece de muchos de los indicadores y estándares internacionales para ser reconocido como un portal de transparencia real y accesible para la ciudadanía. Para poder iniciar una estrategia de Gobierno Abierto en nuestro país es imprescindible contar con un portal de transparencia a la vanguardia. Sin el acceso a la información del sector público, el Gobierno difícilmente puede actuar de forma transparente, rendir cuentas a la sociedad o colaborar con distintos actores. La ciudadanía, por su parte, no puede participar en la toma de decisiones o aportar sus ideas a las políticas públicas.

En definitiva, el objeto principal de esta Proposición No de Ley es impulsar una estrategia completa y transversal para hacer nuestra democracia más participativa y conseguir un control más eficaz por parte de la ciudadanía sobre los poderes públicos que les representan. La política debe abrir lo público a la sociedad, haciéndolo más transparente, obligando a la publicación de las decisiones o actuaciones en materia de personal, remuneraciones de cargos públicos, contrataciones, subvenciones, urbanismo, gestión patrimonial, impacto ambiental o sobre el patrimonio histórico-artístico, así como de cualquier otra que sea de interés público.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

### **PROPOSICIÓN NO DE LEY**

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Impulsar en el plazo máximo de dos meses la elaboración y aprobación de una estrategia de Gobierno Abierto en la Administración General del Estado, mediante un proceso abierto y participativo, que incluya:

a.- Puesta en marcha de un Portal de Gobierno Abierto, que permita implementar adecuadamente los pilares de transparencia, participación y colaboración. Promoviendo la escucha activa y la conversación entre la ciudadanía y la Administración Pública.

b.- Puesta en marcha de una estrategia de apertura de datos, que suponga la publicación de toda la información que maneja y elabora el sector público. Publicando todos los datos sobre actividad organizativa, programación, contratos, concesión de servicios, convenios, subvenciones, ayudas, presupuesto, etc. Datos que deberán ser publicados bajo licencias abiertas y en formatos reutilizables, facilitando el acceso y su utilización por parte de la ciudadanía.



c.- La creación, dentro del Portal de Gobierno Abierto, de un canal que permita la comunicación directa, la interacción y la colaboración entre la ciudadanía y la administración. Pudiendo opinar, instar, solicitar, aportar, colaborar y, en definitiva, interactuar con los poderes públicos y con la Administración General del Estado. Permitiendo que todas las leyes, decretos, medidas o decisiones de otro tipo que tome el Gobierno puedan ser debatidas, valoradas, criticadas y completadas (incluso antes de su elaboración) con las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas. Estas aportaciones se podrán realizar sobre las medidas impulsadas por el Gobierno pero también la ciudadanía podrá plantear sus propias propuestas, ideas, iniciativas para ser discutidas y analizadas entre todos y todas de manera abierta y pública.

e.- Potenciar una cultura de la participación entre la ciudadanía. Garantizando el acceso de la ciudadanía a la tecnología, potenciando el software libre, la alfabetización tecnológica y la conectividad de toda la población, reduciendo la brecha digital.

f.- Realizar un proceso de mejora del Portal de Transparencia, atendiendo a las recomendaciones de organismos y colectivos, a fin de facilitar y mejorar el acceso de la ciudadanía a la información, la comprensión de los datos y la puesta a disposición de los mismos en formato abierto.

## **ANEXO 6**

### **ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN (FEMP)**



FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

---

## **ORDENANZA TIPO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN**

**(APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO FEMP DE 27-5-2014)**



## ÍNDICE

<b>EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPÍTULO I "DISPOSICIONES GENERALES"</b>	
Artículos del 1 al 7.....	7
<b>CAPÍTULO II "INFORMACIÓN PÚBLICA"</b>	
Artículo del 8 al 11.....	11
<b>CAPÍTULO III "PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACIÓN"</b>	
<b>SECCIÓN 1ª RÉGIMEN GENERAL</b>	
Artículos del 12 al 15.....	12
<b>SECCIÓN 2ª. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS</b>	
Artículos del 16 al 22.....	14
<b>CAPÍTULO IV "DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"</b>	
<b>SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO</b>	
Artículos del 23 al 24.....	17
<b>SECCIÓN 2ª. PROCEDIMIENTO</b>	
Artículos del 25 al 31.....	18
<b>CAPÍTULO V "REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN"</b>	
Artículos del 32 al 40.....	20
<b>CAPÍTULO VI "RECLAMACIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR"      25</b>	
<b>SECCIÓN 1ª. RECLAMACIONES</b>	
Artículo 41.....	25
<b>SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN SANCIONADOR</b>	
Artículos del 42 al 46.....	25
<b>CAPÍTULO VII "EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO"</b>	
Artículos del 47 al 51.....	27
<b>Disposición transitoria única. Medidas de ejecución.      28</b>	
<b>Disposición final única. Entrada en vigor .....</b>	<b>28</b>
<b>GRUPO TRANSPARENCIA .....</b>	<b>29</b>
<b>Documentos complementarios .....</b>	<b>30</b>

## ORDENANZA TIPO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios fundamentales en los estados modernos. La Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima importancia y protección:

- a) "A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" (artículo 20.1.d).
- b) "(...) a participar en los asuntos públicos, directamente (...)" (artículo 23.1).
- c) "El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas" (artículo 105.b).

El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar con más fuerza estos derechos, garantizados en parte hasta el momento mediante disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Estos derechos tienen asimismo su plasmación en el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya disposición final tercera se refiere específicamente a las administraciones locales.

Por otra parte, el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, establece literalmente con una redacción similar a la citada disposición final:

"...las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado".

Este precepto debe ser puesto en conexión con el nuevo párrafo ñ) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, según el cual corresponde a los Ayuntamientos la promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, junto con otras normas recientes o actualmente en tramitación, reguladoras del llamado "gobierno abierto", nos permiten afirmar que las Entidades Locales tienen suficiente base jurídica para implantarlo, siendo uno de sus pilares esenciales el citado principio de transparencia. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final novena establece que "los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley". A tal efecto, las Entidades Locales han de iniciar un proceso interno de adaptación a dicha norma, siendo conveniente, entre otras medidas, regular integralmente la materia a través de una Ordenanza. Una de las finalidades por tanto, de esta Ordenanza es, junto a la habitual de desarrollar la ley, generar un incentivo e iniciar la efectiva implantación en las Entidades Locales de las medidas propias de los gobiernos locales transparentes, con un grado de anticipación y eficacia muy superior al que derivaría de un escenario huérfano de Ordenanzas, o con alguna de ellas dictada aisladamente. En este sentido la Ordenanza tiene un doble objetivo: el regulatorio y el de fomento de la efectividad del principio de transparencia.

En cuanto a la identificación de este gobierno abierto y sus principios (transparencia, datos abiertos, participación, colaboración) con la administración local, no cabe ninguna duda. Gobierno abierto es aquel que

se basa en la transparencia como medio para la mejor consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público. El Gobierno Abierto se basa en la transparencia para llegar a la participación y la colaboración. Consideramos que es el momento de ser conscientes de que en la sociedad aparece un nuevo escenario tras la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones a principios del siglo XXI. Un gobierno que no rinde cuentas ante el ciudadano no está legitimado ante el mismo. Dado que la Administración local es la administración más cercana al ciudadano y el cauce inmediato de participación de este en los asuntos públicos, parece ser sin duda la más idónea para la implantación del Gobierno abierto. Igualmente, se debe tener muy en cuenta que en el presente momento histórico dicha participación se materializa fundamentalmente a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), si bien no cabe ignorar mecanismos no necesariamente “tecnológicos” como la iniciativa popular (artículo 70 bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril) o los presupuestos participativos.

En cuanto a la participación ciudadana, históricamente la legislación sobre régimen local ha venido regulándola de forma amplia, tanto a nivel organizativo como funcional, legislación que podía y debía completarse con una Ordenanza o Reglamento de Participación (artículo 70 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril). En cuanto a la articulación de la participación ciudadana a través de las tecnologías de la información y la comunicación, tampoco puede considerarse una novedad, y como hemos visto hace más de una década se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril, uniendo y vinculando el impulso de la utilización de las TIC con el fomento de la participación y la comunicación a los vecinos, y también como medio para la realización de encuestas y consultas ciudadanas –sin perjuicio de su utilidad para la realización de trámites administrativos-. Todos estos derechos de participación presuponen un amplio derecho de información, sin el cual su ejercicio queda notablemente desvirtuado.

En cuanto a la estructura de la presente Ordenanza, esta se divide en siete capítulos. En el capítulo I, bajo el título “Disposiciones Generales”, se establece el objeto de la norma, que es la regulación de la transparencia de la actividad de la Entidad Local, así como del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La Ordenanza se aplicará no solo a la Administración matriz, sino en su caso a todas las entidades dependientes a través de las cuales también ejerce su actividad la entidad pública principal, incluidas las empresas privadas, contratistas y concesionarias de servicios. Todas estas entidades tienen la obligación de ser transparentes, para lo cual deben cumplir las condiciones y tomar las medidas establecidas en el artículo 3. En relación con estas obligaciones, los ciudadanos ostentan los derechos que vienen enunciados en el artículo 4, que podrán ejercerse presencialmente o por vía telemática en igualdad de condiciones, estando prevista en todo caso la creación de una unidad responsable de la información pública. Concluye el capítulo I con el establecimiento de los principios generales por los que se va a regir la regulación contenida en la Ordenanza.

El capítulo II, dedicado a la información pública, a partir de la definición de la misma contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula, en primer lugar, las distintas formas que tienen las personas de acceder a la información pública. A continuación establece los distintos requisitos que han de tener los datos, contenidos y documentos que conforman dicha información a los efectos de esta Ordenanza. Finalmente, se desarrollan las limitaciones generales al acceso a la información pública, siendo los únicos límites los establecidos expresamente en el artículo 10 o en la normativa específica, siendo objeto de especial protección los datos de carácter personal de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley y el artículo 11 de la presente Ordenanza.

En el capítulo III se regula la transparencia activa, esto es, la información pública que las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ordenanza deben publicar de oficio por ser la más representativa de la actividad de la Administración local y la de mayor demanda social. Dicha información se publicará por medios electrónicos: en las sedes electrónicas, páginas webs institucionales o portales de transparencia de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ordenanza. La información pública que será objeto de publicación activa por parte de las entidades enumeradas en el artículo 2, será la detallada en los artículos 16 a 22, dividida en las siguientes categorías: información sobre la institución, su organización, planificación y personal; información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades; información de relevancia jurídica y patrimonial; información sobre contratación, convenios y subvenciones; información económica, financiera y presupuestaria; información sobre servicios y

procedimientos; e información medioambiental y urbanística.

El capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, cuya titularidad corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, sin previa exigencia de condición alguna de ciudadanía, vecindad o similar. La denegación del acceso a dicha información habrá de ser en base a alguno de los límites previamente regulados, cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público o privado superior que justifique el acceso. Para el ejercicio del derecho regulado en este capítulo, la Ordenanza establece un procedimiento ágil cuya resolución, y en el supuesto de que sea desestimatoria, puede ser objeto de la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En el caso de resolución estimatoria, la información pública se facilitará junto con dicha resolución o, en su caso, en un plazo no superior a diez días desde la notificación.

El capítulo V se dedica a la transparencia colaborativa, regulando el régimen de reutilización de la información pública, cuyo objetivo fundamental es la generación de valor público en la ciudadanía en los ámbitos social, innovador y económico. Esta reutilización no se aplicará a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio del resto de límites establecidos en la normativa vigente en la materia, particularmente en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. En todo caso y con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable siguiendo la modalidad sin sujeción a condiciones, lo que conlleva la no necesidad de autorización previa y la gratuidad del acceso y reutilización, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario y siempre que se cumplan las condiciones de accesibilidad así como las establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza, y se satisfaga, en su caso, la exacción que corresponda.

El capítulo VI regula en su sección primera el régimen de quejas y reclamaciones por vulneración de la misma, estableciendo en primer lugar la posibilidad de presentar quejas cuando la Administración no cumpla sus obligaciones en materia de publicidad activa, a fin de evitar tener que solicitarla a través del procedimiento regulado en el capítulo IV. En segundo lugar, se regula la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La sección segunda regula el régimen sancionador en materia de reutilización de la información pública local, en base al Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dada la ausencia de normativa sectorial específica que le atribuya la potestad sancionadora en esta materia. Se tipifican las infracciones clasificándolas en muy graves, graves y leves y se establece un régimen sancionador consistente en multas y, en el caso de infracciones muy graves y graves, la prohibición de reutilizar documentos durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y la revocación de autorizaciones concedidas.

Por último, el capítulo VII regula el sistema de evaluación y seguimiento de la norma, que establece la competencia general de la Alcaldía-Presidencia para el desarrollo, implementación y ejecución de la misma, dictando en su caso las medidas organizativas, así como de formación, sensibilización y difusión que correspondan. Asimismo, los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia se explicitarán en planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de estos planes y medidas será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable en colaboración con el resto de los servicios.



## CAPÍTULO I

### Disposiciones Generales

#### **Artículo 1.** *Objeto y régimen jurídico.*

1. La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, a través del establecimiento de unas normas que regulen la transparencia de la actividad de la Entidad Local, así como del ejercicio del derecho de reutilización y acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos.

2. El derecho de las personas a acceder a la información pública y a su reutilización se ejercerá en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, en la normativa autonómica dictada en desarrollo de ambas leyes cuando en su ámbito de aplicación se encuentren las entidades locales y en esta Ordenanza.

#### **Artículo 2.** *Ámbito de aplicación.*

1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a:

- a) La Entidad Local de...
- b) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Entidad Local de ...
- c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.
- d) Las fundaciones de iniciativa pública local o de participación mayoritaria de las Entidades Locales, ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos de gobierno.
- e) Las asociaciones constituidas por la Entidad Local, organismos y demás entidades previstos en este artículo.

2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza potestades administrativas de titularidad local, en todo lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas, deberá proporcionar a la Entidad Local la información que sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ordenanza. Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos que se establezcan en los respectivos contratos y se especificará la forma en que dicha información deberá ser puesta a disposición de la Entidad Local.

#### **Artículo 3.** *Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información*

1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y reutilización y en los términos previstos en esta Ordenanza, las entidades mencionadas en el artículo 2.1 deben:

- a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus páginas web o sedes electrónicas, la información cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
- b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos, legibles por máquinas que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.
- c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
- d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.
- e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas.
- f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al



procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.

g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la información de forma clara y precisa para los ciudadanos.

h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.

i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.

2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

3. Toda la información prevista en esta Ordenanza estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiéndose por tal aquella que sea suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

#### **Artículo 4. Derechos de las personas.**

1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las personas tienen los siguientes derechos:

a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.

b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos documentos.

c) A ser asistidas en su búsqueda de información.

d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso.

e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.

f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.

g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las exacciones que correspondan por la expedición de copias o transposición a formatos diferentes del original.

2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos contemplados en esta Ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.

3. La Entidad Local no será en ningún caso responsable del uso que cualquier persona realice de la información pública.

#### **Artículo 5. Medios de acceso a la información.**

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza están obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social.

2. A estos efectos, la Entidad Local ofrecerá acceso a la información pública a través de algunos de los siguientes medios:

a) Oficinas de información.

b) Páginas web o sedes electrónicas.

c) Servicios de atención telefónica.

d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos de la Entidad Local habilitados al efecto.

#### **Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.**

La Entidad Local designará una unidad responsable de información pública, bajo la dirección y responsabilidad de la Secretaría<sup>1</sup> de la Entidad Local, que tendrá las siguientes funciones:

- a) La coordinación en materia de información para el cumplimiento de las obligaciones establecida en esta Ordenanza, recabando la información necesaria de los órganos competentes del departamento, organismo o entidad.
- b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo previsto en el artículo 41.
- c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas.
- d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de acceso.
- e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre en poder de la entidad local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.
- f) La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa, reutilización y derecho de acceso a la información pública.
- g) La difusión de la información pública creando y manteniendo actualizados enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.
- h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posible.
- i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información pública se haga disponible en bases de datos electrónicas a través de redes públicas electrónicas.
- j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta Ordenanza.

#### **Artículo 7. Principios generales.**

1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la información obrante en la Entidad Local.
2. Publicidad activa: La Entidad Local publicará por iniciativa propia aquella información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad así como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía, permitiendo el control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de las personas.
3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y la presente Ordenanza.
4. Acceso a la información: La Entidad Local garantiza el acceso de las personas a la información pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la presente Ordenanza.
5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La Entidad Local establecerá los medios para que el acceso a la información pública pueda ser a través de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También se procurará que la publicación y puesta a disposición se realice incluyendo además formatos electrónicos reutilizables siempre que sea posible, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a las personas a elegir el canal a través del cual se comunica con la Entidad Local.
6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y puesta a disposición se indicará la unidad responsable de la información y la fecha de la última actualización. Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la información a publicar, dotándola de una estructura, presentación y redacción que facilite su completa comprensión por cualquier persona.
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados públicos locales ayudar a las personas cuando éstas lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación específico entre la Entidad Local y los destinatarios de la

---

<sup>1</sup> Las peculiaridades organizativas de algunas Entidades Locales o entes dependientes, pueden determinar la atribución de esta responsabilidad a otros órganos de carácter directivo.

información.

## CAPÍTULO II

### Información Pública

#### **Artículo 8.** *Información pública.*

Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

#### **Artículo 9.** *Requisitos generales de la información.*

Son requisitos generales de la información pública regulada en esta Ordenanza:

- a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre en formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea único, compartido, accesible, estructurado, descrito, con información sobre las limitaciones de uso y, en su caso, ubicado geográficamente.
- b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre y gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.
- c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y estructurar la información pública se publicarán en la página web de la entidad para que las personas puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.
- d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición de forma que no se incluirán restricciones que impidan o dificulten la explotación de su contenido.
- e) Las personas con discapacidad accederán a la información y su reutilización a través de medios y formatos adecuados y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

#### **Artículo 10.** *Límites.*

La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser limitada, además de en los supuestos recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, según prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que la Entidad Local posea y que pudiera afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las Leyes.

En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.

#### **Artículo 11.** *Protección de datos personales.*

1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta Ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados de la protección de datos de carácter personal, en los términos regulados en la legislación específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la publicidad activa y el acceso a la información pública cuando el titular del dato haya fallecido, salvo que concurran otros derechos.

Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos los hubieran hecho manifiestamente públicos previamente o fuera posible la disociación de los datos de carácter personal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin que sea posible la identificación de las personas afectadas.

3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública de los órganos, los datos de las personas físicas que presten sus servicios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.

**CAPÍTULO III**  
**Publicidad activa de información**

**SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN GENERAL**

**Artículo 12.** *Objeto y finalidad de la publicidad activa.*

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia y de manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización de la información y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 22. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados.

Para el cumplimiento de dicha obligación la Entidad Local podrá requerir la información que sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, en los términos previstos en el respectivo contrato.

2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.

**Artículo 13.** *Lugar de publicación.*

1. La información se publicará en la página web o sede electrónica de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación, o, en su caso, en un portal específico de transparencia.

2. La página web o sede electrónica de la entidad local contendrá, asimismo, los enlaces a las respectivas páginas web o sedes electrónicas de los entes dependientes de la entidad local y el resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les sea de aplicación.

3. La entidad local podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos abiertos de otras entidades.

**Artículo 14.** *Órgano competente y forma de publicación.*

1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información relativa a los órganos competentes responsables de la publicación activa regulada en este capítulo.

2. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el contenido de la información, ésta resultase compleja por su lenguaje técnico, se realizará una versión específica y más sencilla para su publicación.

3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa, indicando el órgano o servicio del que procede la información, la frecuencia de su actualización, la última fecha de actualización, los términos de su reutilización y, en su caso, la información semántica necesaria para su interpretación.

**Artículo 15.** *Plazos de publicación y actualización.*

1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate.

2. La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos:

- a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21, mientras mantenga su vigencia.

b) La información mencionada en el artículo 19, mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos años después de que éstas cesen.

c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco años a contar desde el momento que fue generada.

d) La información en el artículo 22, mientras mantenga su vigencia y, al menos, cinco años después de que cese la misma.

3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más breve posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de actualización anunciada, de acuerdo con las características de la información, las posibilidades técnicas y los medios disponibles.

4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el mismo lugar en que se publica la información pública se mantenga la información que deja de ser actual.

## SECCIÓN 2ª. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

**Artículo 16.** *Información sobre la institución, su organización, planificación y personal.*

1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con el alcance previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, publicarán información relativa a:

- a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas por delegación.
- b) La normativa que les sea de aplicación.
- c) Identificación de los entes dependientes, participados y a los que pertenezca la Entidad Local, incluyendo enlaces a sus páginas web corporativas.
- d) Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: identificación de los distintos órganos decisorios, consultivos, de participación o de gestión, especificando su sede, composición y competencias
- e) Identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en el párrafo d), especificando su perfil y trayectoria profesional.
- f) Estructura administrativa departamental de la entidad, con identificación de los máximos responsables departamentales.
- g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.
- h) Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de planificación, especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
- i) Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
- j) Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.
- k) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de planificación de personal.
- l) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la provisión de necesidades de personal.
- m) Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.
- n) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal.

2. La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo caso, en la sede electrónica.

**Artículo 17.** *Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades.*

En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publicará, como mínimo, la siguiente información:

- a) Las retribuciones percibidas anualmente.
- b) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.



- c) Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo del cese de los mismos.
- d) Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril. Cuando el reglamento orgánico no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.

**Artículo 18.** *Información de relevancia jurídica y patrimonial.*

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 a) y b) publicarán información relativa a:

- a) El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de la Entidad Local.
- b) Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, incluyendo las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
- c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
- d) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación.
- e) Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

**Artículo 19.** *Información sobre contratación, convenios y subvenciones.*

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:

- a) Todos los contratos formalizados por la Entidad Local, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse, al menos, trimestralmente.
- b) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos señalados en el párrafo a).
- c) El perfil del contratante.
- d) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
- e) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
- f) Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
- g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

**Artículo 20.** *Información económica, financiera y presupuestaria.*

1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:

- a) Los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada al menos trimestralmente sobre su estado de ejecución.
- b) Las modificaciones presupuestarias realizadas.
- c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- d) La liquidación del presupuesto.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre dichas cuentas se emitan.

f) Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. La información referida en el apartado f) se ha de publicar, en todo caso, en la sede electrónica.

#### **Artículo 21.** *Información sobre servicios y procedimientos.*

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:

a) El catálogo general de los servicios que presta, con información adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos.

b) Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección, horarios de atención al público y enlaces a sus páginas web corporativas y direcciones de correo electrónico o canales de prestación de los servicios.

c) Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromisos de niveles de calidad estandarizados con los ciudadanos, así como los documentos que reflejen su grado de cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración.

d) El catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación del objeto, formas de iniciación, documentación a aportar, trámites, normativa aplicable, plazos de resolución y sentido del silencio administrativo, así como, en su caso, las instancias y formularios que tengan asociados, especificando los que son realizables vía electrónica.

#### **Artículo 22.** *Información medioambiental y urbanística*<sup>2</sup>

La Entidad Local publicará información relativa a:

a) Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente.

b) Las políticas, programas y planes de la Entidad Local relativos al medioambiente, así como los informes de seguimiento de los mismos.

c) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre niveles polínicos y contaminación acústica.

d) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a elementos medioambientales.

e) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones, así como los convenios urbanísticos.

### **CAPÍTULO IV**

#### **Derecho de acceso a la información pública**

##### **SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO**

#### **Artículo 23.** *Titularidad del derecho.*

Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es titular del derecho regulado en el artículo 105 b) de la Constitución, de conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo reglamentario que tenga carácter de normativa básica.

---

<sup>2</sup> Se trata de información exigible en virtud de la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derecho de acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

**Artículo 24.** *Limitaciones.*

1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los límites enumerados en los artículos 10 y 11, cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público o privado superior que justifique el acceso.
2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se analizará previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.

## SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO

**Artículo 25.** *Competencia.*

1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información relativa a los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública.
2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán de tramitarlas cuando, aun tratándose de información pública que posean, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro. Asimismo, se inhibirán cuando no posean la información solicitada, pero conozcan qué órgano competente para resolver, la posea.

En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la solicitud al órgano que se estime competente y se notificará tal circunstancia al solicitante.

3. En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por la Administración, organismo o entidad al que se encuentren vinculadas.

**Artículo 26.** *Solicitud.*

1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública no requerirán a los solicitantes más datos sobre su identidad que los imprescindibles para poder resolver y notificar aquéllas.

Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al solicitante para la identificación de la información pública solicitada.

2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pública. No obstante, el interés o motivación expresada por el interesado podrá ser tomada en cuenta para ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.
3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.
4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda producir el silencio administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo.



**Artículo 27. Inadmisión.**

1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, serán interpretadas restrictivamente en favor del principio de máxima accesibilidad de la información pública.
2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de elaboración o publicación general, se informará del tiempo previsto para su conclusión.
3. Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No obstante, esto no impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en los artículos 10 y 11, pudiera resultar perjudicado.

**Artículo 28. Tramitación.**

1. Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya sido identificada suficientemente, y de audiencia a los titulares de derechos e intereses debidamente identificados, que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para dictar resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como de la ampliación del plazo para resolver, se informará al solicitante para que pueda tener conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución.

**Artículo 29. Resolución.**

1. La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en los artículos 10 y 11 será motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración de los límites del derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de los derechos que concurren para determinar cuál es el bien o interés protegido que debe preservarse.
2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la causa de denegación esté vinculada a un interés que afecte exclusivamente a la entidad local competente.

**Artículo 30. Notificación y publicidad de la resolución.**

1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información pública se notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos e intereses afectados que así lo hayan solicitado.

En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra la resolución la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administrativo.

2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10, se hará pública, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez se haya notificado a los interesados.

**Artículo 31. Materialización del acceso.**

La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso o, en su caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación. En el caso de que durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se materializará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a acceder a la información.

Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución de la reclamación potestativa

previa, dado que cabe contra ella recurso contencioso-administrativo.

## CAPÍTULO V

### Reutilización de la información

#### **Artículo 32.** *Objetivos de la reutilización.*

La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza constata el ejercicio de la transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo fundamental la creación de valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos:

- a) Social: el derecho de acceso al conocimiento e información del sector público constituye un principio básico de la democracia y del estado del bienestar. Construir ese estado de bienestar responsable empieza con una ruptura de las brechas y asimetrías de información entre, por un lado, quien define y presta los servicios del estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa y los financia. La reutilización da valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la confianza en el sector público.
- b) Innovador: la información pública debe permanecer abierta para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innovadora por sectores de la sociedad con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá la creación de productos y servicios de información de valor añadido por empresas y organizaciones.
- c) Económico: el tamaño del mercado potencial basado en la información agregada del sector público y su reutilización, junto con su impacto en el crecimiento económico y creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el esfuerzo y la contribución de todas las administraciones en esta materia.

Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza realizarán los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información pública reutilizable junto con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en plataformas comunes, como <http://datos.gob.es>, con el único objetivo de colaborar en la construcción de un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar la actividad del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así el valor social, innovador y económico generado por la transparencia colaborativa del sector público.

#### **Artículo 33.** *Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos.*

1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial especialmente por parte de terceros.

A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual los derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección específicas.

2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de los entes incluidos en su ámbito de aplicación.

3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.

#### **Artículo 34.** *Criterios generales.*

1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos anteriores dentro de los límites establecidos por la normativa vigente en materia de reutilización de la información del sector público.

2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario.

3. En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de publicidad activa tanto en esta ordenanza como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, seguirá siempre la modalidad de reutilización sin

sujeción a solicitud previa y/o condiciones específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por máquinas y en formato abierto que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento siguiendo siempre en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información, aprobada por Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o norma que la sustituya.

**Artículo 35.** *Condiciones de reutilización.*

1. La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las siguientes condiciones:

- a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y desnaturalización de la información, de forma que puedan darse interpretaciones incorrectas sobre su significado.
- b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la información como fuente y una mención expresa de la fecha de la última actualización de la información reutilizada.
- c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente ha publicado la información patrocina, colabora o apoya el producto, servicio, proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos que se contengan en el mismo.
- d) Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la información, siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar.

2. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que originariamente publica la información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios para desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo permitido por la Ley.

3. En la misma sección página web o sede electrónica en la que se publique información, se publicarán las condiciones generales para la reutilización.

**Artículo 36.** *Exacciones.*

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán exigir exacciones sobre la reutilización de la información para permitir cubrir los costes del servicio o actividad incluyendo en dichos costes los relativos a la recogida, producción, reproducción, puesta a disposición y difusión<sup>3</sup>.

2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información pública, se incluirá en la página web o sede electrónica de la Entidad Local la relación de los mismos, con su importe y la base de cálculo utilizada para su determinación, así como los conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables.

**Artículo 37.** *Exclusividad de la reutilización.*

1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la información. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en información del sector público. Los contratos o acuerdos de otro tipo existentes que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.

2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo.

---

<sup>3</sup> Téngase en cuenta la reciente Directiva 2013/37/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, que una vez traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, impedirá incluir los costes de recogida y producción de la información pública.

3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de recursos culturales, se estará a la regulación específica de la materia.

4. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán transparentes y se pondrán en conocimiento del público.

**Artículo 38. Modalidades de reutilización de la información.**

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza clasificarán la reutilización de toda la información que obra en su poder y que sea publicada de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de reutilización:

a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa ni condiciones específicas, respetándose los criterios generales y las condiciones de reutilización del artículo 35<sup>4</sup>.

b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización previa. De forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la reutilización de información puesta a disposición con sujeción a condiciones específicas establecidas en una licencia-tipo o a una previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo, condiciones específicas.

2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:

- a) Serán claras, justas y transparentes.
- b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.
- c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.
- d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la entidad titular de la información.

3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones específicas y éstos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable electrónicamente. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados por la propia entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e internacional<sup>5</sup> o aquellas que hayan sido consensuadas con o por otras Administraciones públicas. Los modos de uso limitados serán publicados en la web municipal.

4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán modificar el contenido de las condiciones específicas y modos de uso limitado ya existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a conjuntos de datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a partir de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de los datos o documentos que se realice después de que la modificación haya sido publicada o, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.

**Artículo 39. Publicación de información reutilizable.**

1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de reutilización, así como las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la reutilización que será accesible por medios electrónicos para que los agentes reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago.

2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza facilitará sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por

---

<sup>4</sup> Esta modalidad sigue de forma similar las pautas establecidas por la licencia Creative Commons (BY) de uso extendido en la sociedad actual.

<sup>5</sup> Creative Commons u otras similares.

máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas. Concretamente, se utilizarán estándares clasificados en su correspondiente categorías con tipología de abiertos, en su versión mínima aceptada y estado admitido siguiendo lo establecido en el anexo de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catalogo de Estándares al amparo del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información.

3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza estén obligada, para cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá exigirse a las citadas entidades que mantengan la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.

4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada permitirá la indicación de búsqueda de información reutilizable.

#### **Artículo 40.** *Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización.*

1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que tengan carácter de normativa básica.

2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. Cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el plazo de resolución otros quince días. En este caso, deberá informarse al solicitante de la ampliación del plazo, así como de las razones que lo justifican.

3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información regulado en el capítulo IV y la reutilización de dicha información, se tramitará conjuntamente por el procedimiento establecido en el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de resolución previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

## **CAPÍTULO VI**

### **Reclamaciones y régimen sancionador**

#### **SECCIÓN 1ª. RECLAMACIONES**

##### **Artículo 41.** *Reclamaciones.*

1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información de carácter público que debería estar publicada, de acuerdo con el principio de publicidad activa que preside esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 16 a 22, podrá cursar queja ante el órgano competente en materia de información pública a través del sistema de avisos, quejas y sugerencias. Dicho órgano deberá realizar la comunicación correspondiente en un plazo máximo de 10 días desde que se registró la reclamación, o en el plazo determinado por los compromisos de calidad establecidos por el propio sistema de avisos, quejas y sugerencias de ser éste inferior.

2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y con los plazos y vías de reclamación, plazos de resolución y términos de notificación que dicho artículo establece.



## SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN SANCIONADOR

### **Artículo 42.** *Infracciones.*

1. Se consideran infracciones muy graves:

- a) La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
- b) La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.

2. Se consideran infracciones graves:

- a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente autorización en los casos en que ésta sea requerida.
- b) La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se concedió.
- c) La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
- d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable.

3. Se consideran infracciones leves:

- a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información.
- b) La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
- c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta ordenanza.
- d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable.

### **Artículo 43.** *Sanciones.*

1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se impondrán las siguientes sanciones:

- a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
- b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves.
- c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves.

2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso limitado durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización o modo de uso limitado concedida.

3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se refieren a la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

### **Artículo 44.** *Régimen jurídico.*

1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o

penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las correspondientes normas legales.

**Artículo 45.** *Órgano competente.*

Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones cometidas contra las disposiciones de la presente Ordenanza el órgano que resulte de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

**Artículo 46.** *Régimen disciplinario.*

El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio de la Entidad Local, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la normativa de carácter disciplinario.

## **CAPÍTULO VII**

### **Evaluación y seguimiento**

**Artículo 47.** *Órgano responsable.*

1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de dirección del gobierno y de la administración local, se ejercerá o delegará en otros órganos la competencia para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo, implementación y ejecución del contenido de la presente Ordenanza.
2. Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las funciones derivadas del cumplimiento de la normativa vigente, al que se le encomendarán los objetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa en la materia y la elaboración de circulares y recomendaciones, así como la coordinación con las áreas organizativas en la aplicación de sus preceptos.

**Artículo 48.** *Municipios de gran población.*

1. En aquellos municipios en que resulte de aplicación el régimen previsto en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrá ser objeto de ampliación el ámbito objetivo de la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones en los municipios de gran población para los cometidos relativos a la evaluación y seguimiento en materia de transparencia, acceso a la información y reutilización. Asimismo podrá colaborar en la ejecución de dichas funciones el Defensor del Ciudadano o figura equivalente, en aquellos municipios en que exista.
2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las especialidades internas de la organización municipal, órganos de participación ciudadana existentes, así como de la posibilidad de la extensión lo establecido en el apartado anterior a los municipios de régimen común.

**Artículo 49.** *Actividades de formación, sensibilización y difusión.*

La Entidad Local realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. A tal efecto diseñará acciones de publicidad a través de sus medios electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana existentes en su ámbito territorial. Asimismo articulará acciones formativas específicas destinadas al personal, así como de comunicación con las entidades incluidas en el artículo 2.

**Artículo 50.** *Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo, evaluación y seguimiento.*

Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de evaluación y seguimiento se exigirán según lo previsto en el capítulo VI.

**Artículo 51.** *Plan y Memoria anual.*



Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia, acceso a la información y reutilización se concretarán en planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y de estas disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable, para lo que contará con la colaboración de todos los servicios que estarán obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación.

En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración estructurada de lo realizado y se recopilarán propuestas de actuación a la ciudadanía a través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros mecanismos de participación.

### **Disposición transitoria única. *Medidas de ejecución***

En el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se llevará a cabo la adecuación de las estructuras organizativas para su ejecución. A tal efecto, la Entidad Local iniciará el correspondiente proceso de rediseño interno y de revisión del reglamento orgánico, así como cuantas disposiciones, circulares o instrucciones internas pudieran resultar afectadas por la norma, dictando las instrucciones precisas para su adaptación.

### **Disposición final única. *Entrada en vigor.***

La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma, en su caso<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Se recomienda que la entrada en vigor no se produzca antes del 10 de diciembre de 2014, fecha prevista en la Disposición final novena de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para la entrada en vigor de los Títulos Preliminar, Primero y Tercero de dicha Ley.



## **ANEXO 7**

### **NUEVO CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL (FEMP)**



FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

---

## **CÓDIGO BUEN GOBIERNO LOCAL FEMP**

**(Aprobado en Junta de Gobierno de 24 de Marzo de 2015)**



En un contexto económico, social y político en el que la ciudadanía manifiesta un alto grado de desconfianza respecto de la política, las instituciones y los responsables públicos, se hace necesario canalizar esta situación como una oportunidad, como motor para la profundización democrática. De este modo, las entidades locales deben redoblar esfuerzos por restablecer el valor de la política local y recuperar la confianza de la ciudadanía mediante una intensificación y exteriorización efectiva de los valores públicos, de los estándares de conducta y de la actitud ética de los cargos públicos y de los directivos locales.

En dicho contexto, la revisión del Código de Buen Gobierno (CBG) de la FEMP resulta una herramienta adecuada a tal fin, reforzada por la existencia de un nuevo marco jurídico integrado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, las normas autonómicas en la materia y la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de la FEMP. La sujeción de las administraciones públicas al principio de jerarquía normativa y al sistema de fuentes establecido en nuestro ordenamiento jurídico determinará la posición obligacional del presente Código.

Siguiendo la línea del CBG de la FEMP aprobado en el año 2009, como una herramienta de introducción formal de la ética en el ámbito local con carácter innovador, se realiza una adaptación al actual marco normativo y a las demandas de la ciudadanía. Sobre una estructura sencilla se apuntan las líneas estratégicas para la adecuada gestión pública local desde la consideración del buen gobierno, sentando las bases para el desarrollo posterior de cada una de ellas.

Tras la definición de sus ámbitos objetivo y subjetivo, se incorporan los principios del buen gobierno local, definiendo aquellos sujetos afectados por las declaraciones contenidas en el mismo y la finalidad a que obedece en su suscripción. El contenido sustancial se articula en torno a cinco ejes: estándares de conducta para la mejora de la democracia local, compromisos éticos en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y retribuciones, relaciones entre cargos electos y empleados públicos y medidas para la mejora de la democracia participativa.

Además de la determinación de los principios y estándares de actuación, así como la fijación de un marco relacional entre los niveles de gobierno y administración se incide en dos aspectos. El primero, los compromisos en materia de conflictos de intereses, advertido el mayor impacto que en la dignidad y reconocimiento de legitimidad de gobiernos y administraciones públicas genera en los ciudadanos.

El segundo, como uno de los aspectos más novedosos del nuevo Código, la irrupción, en el ámbito de la administración local, de las tecnologías sociales, y en concreto de las redes sociales digitales. Su utilización masiva por parte de la ciudadanía supone un desafío para los usos y costumbres empleados en la participación ciudadana hasta el momento. Las administraciones públicas locales deben incorporarse a este fenómeno social mediante la puesta en marcha de iniciativas innovadoras que adapten la participación tal y como la conocemos hasta ahora, en una participación multicanal que aproveche las nuevas oportunidades de relación con la ciudadanía.

La iniciativa para la creación de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP abre, para el ámbito local, una nueva etapa que exige dotar a las entidades que se integran en él, de las herramientas e instrumentos necesarios para desarrollar adecuadamente no sólo sus obligaciones legales sino también sus compromisos éticos con la gestión pública, en general, y con los ciudadanos, en particular. El CBG se erige en la pieza central de esta estrategia que será objeto de desarrollo a través de los mecanismos que se definan en el seno de la Red.

### **Ámbito objetivo**

El Código de Buen Gobierno tiene por objeto el establecimiento de los principios a respetar en el desempeño de las responsabilidades políticas de gobierno y administración, así como las de dirección y gestión local, fijando los compromisos que reflejen los estándares de conducta recomendados y reforzando la calidad democrática de las instituciones locales.

Como objetivos específicos pueden señalarse los siguientes:

- La integración de la dimensión ética en el funcionamiento de las entidades locales.
- Incorporar las estrategias de actuación para la consecución de una democracia real y efectiva, a través de la participación ciudadana y el gobierno abierto.
- Definir las líneas básicas que deben presidir la gestión pública local.
- Reforzar los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades públicas.
- Delimitar las pautas para las adecuadas relaciones entre los ámbitos de gobierno y administración, normalizando las relaciones personales internas.

### **Ámbito subjetivo**

El presente Código, en su condición de instrumento inspirador de la actuación de las Entidades Locales y del personal a su servicio, se aplicará a:

- a. Los miembros de las Corporaciones Locales, en su condición de representantes electos, con independencia de su integración o no en el respectivo gobierno.
- b. Los miembros de los órganos de gobierno de los Organismos Autónomos, Entidades públicas empresariales locales y Sociedades mercantiles locales, así como Fundaciones de naturaleza local.
- c. Los titulares de órganos directivos, según la definición de la normativa en materia de régimen local y función pública.
- d. El personal que desempeñe funciones directivas y predirectivas al servicio de la administración local, entendiéndose por tal a aquéllos que ejerzan funciones de gestión o ejecución de carácter superior, ajustándose a las directrices generales fijadas por el órgano de gobierno de la Corporación, adoptando al efecto las decisiones oportunas y disponiendo para ello de un margen de autonomía, dentro de esas directrices generales.
- e. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

A efectos de clarificar terminológicamente el ámbito subjetivo en el desarrollo del CBG las referencias a los empleados públicos incluidos en el mismo, se utilizará la expresión “directivos públicos locales”.

Con carácter previo a la asunción de un cargo público, responsabilidad política o función ejecutiva en la organización, se deberá suscribir el CBG al que se haya adherido la respectiva entidad local.

Esta delimitación no excluirá la suscripción de sus objetivos por la totalidad de los empleados públicos locales, sujetos a este respecto al Código ético y de conducta recogido en la normativa sobre función pública, así como a aquellos sujetos proveedores de servicios a la administración local y perceptores de fondos públicos.

### **Principios del buen gobierno local**

Los sujetos destinatarios del CBG ajustarán la gestión de los intereses públicos y el desarrollo de la democracia participativa a la realización efectiva del gobierno abierto y sus principios de transparencia, participación y colaboración ciudadana, como mínimo en los términos de la normativa vigente en cada momento, en una gestión orientada a la ciudadanía.

Para la consecución de dichos objetivos su actuación estará orientada al cumplimiento de los siguientes principios, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a ellos:

- a) Actuarán en el desempeño de sus funciones de acuerdo con la Constitución, los respectivos Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas y ajustarán su actividad a los principios éticos y de conducta contenidos en el presente Código de Buen Gobierno Local.
- b) El desarrollo de las labores de gobierno estará presidida por los principios de eficacia, economía, eficiencia, satisfacción del interés general, así como de racionalización y optimización de los recursos públicos.
- c) Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular, asegurando un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
- d) Ejecutarán de las políticas públicas conforme a los principios de publicidad, innovación, transparencia y buen servicio a la ciudadanía, defendiendo los intereses generales y la generación de valor con dedicación al servicio público
- e) Respetarán las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses, los deberes de honestidad, buena fe, sigilo y discreción en relación con los datos e informes de los que tengan conocimiento por razón del cargo.
- f) Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados, evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones, no se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
- g) Incorporarán a su actuación valores como la inclusión social de colectivos más desfavorecidos, la tolerancia y el fomento de la diversidad, la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente o la ordenación racional y sostenible del territorio, garantizando el principio de igualdad y equilibrio territorial en el acceso a los servicios públicos.
- h) Respeto de la disciplina presupuestaria y financiera, a efectos de garantizar la correcta administración de los recursos públicos.
- i) El ejercicio de las competencias locales establecidas en el marco normativo y las capacidades de gestión asociadas, se desarrollará bajo el principio de mejor servicio ciudadano, proximidad y subsidiariedad.
- j) Impulso a la adopción de modelos de gestión pública que alineen recursos a estrategia y garanticen una orientación a los resultados ante la sociedad y a la generación de valor público como máxima garantía de fortalecimiento del sector público, sus instituciones y organizaciones públicas.
- k) Apuesta por una dirección pública y gestión de los recursos humanos profesional como elemento clave de un adecuado funcionamiento de la administración pública.

### **Estándares de conducta para la mejora de la democracia local**

La plasmación del carácter democrático de las entidades locales exige su reflejo en la actuación por parte de sus miembros, ajustando el desempeño de las responsabilidades públicas a las siguientes líneas de conducta:

1. Asumirán la responsabilidad en todo momento de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin derivarla hacia sus subordinados sin causa objetiva y sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
2. Fomentarán los valores cívicos y utilizarán un tono respetuoso, esmerado y deferente en sus intervenciones y en el trato con los ciudadanos.
3. Todos los miembros de la Corporación, tanto los integrantes en el gobierno como los que formen parte de la oposición deberán basar su actuación en la lealtad institucional, información y transparencia, colaborando en la definición de los objetivos estratégicos y procurando alcanzar consensos en los asuntos de mayor relevancia.

4. La toma de decisiones perseguirá la satisfacción de los intereses generales y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común y el trato igual y no discriminatorio.
5. Responderán frente a los ciudadanos durante todo su mandato, atendiendo diligentemente a cualquier solicitud de información relativa al desempeño de sus funciones, los motivos de su actuación, o el funcionamiento de los servicios y departamentos de los que son responsables.
6. Garantizarán que la gestión pública tenga un enfoque centrado en la ciudadanía con un compromiso de mejora continua en la calidad de la información, la atención y los servicios prestados.
7. Potenciarán los instrumentos necesarios para garantizar la participación y cooperación ciudadana en el diseño de las políticas públicas y en su evaluación.
8. Impulsarán la implantación de una administración receptiva y accesible, mediante la utilización de un lenguaje administrativo claro y comprensible para todas las personas, la simplificación, la eliminación de trabas burocráticas, y agilización de los procedimientos, el acceso electrónico a los servicios y la mejora de la calidad de las normas y regulaciones.
9. Los cargos electos respetarán la voluntad de la ciudadanía y actuarán con lealtad política, comprometiéndose a asumir el Código de conducta política en relación con el transfuguismo en las Corporaciones Locales.
10. Con motivo de los desplazamientos derivados del ejercicio de las funciones propias de cargo, utilizarán el medio de transporte adecuado al objeto del mismo, teniendo siempre en cuenta las necesidades de la Corporación y la mejor relación en cuanto al coste.
11. Facilitarán las actuaciones de control y supervisión que las autoridades internas o externas competentes adopten, absteniéndose de obstaculizar la ejecución de cualquier medida de supervisión que las autoridades internas o externas relevantes pudieran decidir tomar con la debida justificación y transparencia.
12. Responderán diligentemente a las solicitudes de información formuladas por los medios de comunicación en relación con el desempeño de sus funciones, absteniéndose, por el contrario, de suministrar cualquier dato confidencial o información sujeta a protección de datos de carácter personal y articularán medidas que fomenten la cobertura por parte de los medios de comunicación del desempeño de sus funciones y el funcionamiento de los servicios y departamentos a su cargo.
13. Promoverán la transformación de la administración local mediante el desarrollo de la gestión desde la óptica de la innovación y la calidad, simplificación y reducción de cargas administrativas, garantizando la definitiva implantación de la administración electrónica.
14. Se fomentará la creación de instrumentos de control y seguimiento de la contratación pública para garantizar a los operadores económicos un trato igualitario y no discriminatorio y un procedimiento basado en la transparencia, así como la introducción de criterios de responsabilidad social en los contratos.

### **Compromisos éticos en materia de conflictos de intereses**

El desempeño de responsabilidades públicas exigirá el respeto a la normativa en materia de conflicto de intereses basando su actuación en los siguientes compromisos

1. En el ejercicio de sus facultades discrecionales, se abstendrán de conceder ninguna ventaja a ellos mismos o a otra persona o grupo de personas con el fin de obtener un beneficio personal directo o indirecto de los mismos.
2. Se abstendrán de participar en cualquier deliberación, votación o ejecución de aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, ya sea directo o indirecto.
3. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio propio o su entorno o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros o del interés general.
4. No aceptarán, recibirán o solicitarán, directamente o a través de terceros, regalos que sobrepasen los usos habituales, sociales o de cortesía por parte de entidades o personas o, en cualquier caso, que sobrepasen la cuantía de ciento cincuenta euros.
5. Rechazarán cualquier favor o servicio en condiciones ventajosas por parte de personas físicas o entidades privadas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones.



6. El desempeño de cargos en órganos ejecutivos de dirección de partidos políticos y organizaciones sindicales dicha actividad en ningún caso menoscabará o comprometerá el ejercicio de sus funciones.

### **Régimen de incompatibilidades y retribuciones**

El adecuado cumplimiento de las exigencias normativas impuestas por el régimen de incompatibilidades y la estructura retributiva en el ámbito local se ajustará a los siguientes parámetros:

1. Los representantes locales, y los directivos públicos locales formularán con motivo de su toma de posesión, con ocasión del cese y al final de su mandato, declaraciones tanto sobre causas de posible incompatibilidad y cualquier actividad que proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Asimismo, comunicarán cualquier modificación de las mismas en plazo máximo de un mes.
2. Asimismo habrán de presentar declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.
3. Evitarán cualquier conflicto de intereses con motivo del ejercicio de sus funciones públicas, absteniéndose de utilizar sus competencias y prerrogativas institucionales a fin de otorgar para sí o para terceras personas algún tipo de beneficio así como absteniéndose de llevar a cabo cualquier tipo de actividad privada que, directa o indirectamente, colisione con los intereses públicos locales de su responsabilidad.
4. El ejercicio de responsabilidades ejecutivas en el gobierno local, una vez finalizado el mandato o producido el cese y durante un periodo de dos años, conllevará el cumplimiento de las limitaciones para el ejercicio de actividades privadas establecidas en la legislación reguladora de conflictos de intereses que les sea aplicable.
5. El régimen de dedicación exclusiva y parcial, así como las demás retribuciones de los representantes locales se fijarán, con pleno respeto a los límites establecidos en la legislación de Régimen Local, con proporcionalidad y atendiendo a características de la entidad y del puesto a desempeñar tales como población, presupuesto, situación financiera y competencias y responsabilidades a ejercer.

### **Gobierno y administración: relaciones entre cargos electos y empleados públicos**

Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos se ajustarán a los principios éticos recogidos en la normativa en materia de transparencia y empleo público, entre otros: respeto de la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico, lealtad institucional, objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a los derechos humanos y a la igualdad entre mujeres y hombres.

Cada persona al servicio de los intereses públicos locales asumirá su cometido y funciones de forma legal y coordinada con el resto de responsables públicos, políticos, técnicos y administrativos. Para garantizar la existencia de un entorno de trabajo en armonía y para el correcto desarrollo de los servicios públicos se articularán vías alternativas a la solución de las discrepancias o conflictos que, en su caso, pudieran producirse.

Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos se instrumentarán a través de la implementación de los mecanismos físicos y telemáticos necesarios que garanticen la posibilidad de interlocución directa y el desarrollo de un procedimiento de mediación, presencial o electrónico, entre las partes en conflicto.

Los cargos electos impulsarán la formación en principios de integridad y orientaciones del Buen Gobierno para el conjunto de empleados públicos.

### **Medidas para la mejora de la democracia participativa**

El principio de proximidad en el ámbito local configura a las entidades locales como el espacio de gobierno y administración idóneo para alcanzar la máxima participación ciudadana e instrumentar las vías y cauces que hagan posible su materialización en niveles óptimos.

A efectos de conocer con precisión las necesidades y expectativas de la ciudadanía, así como de garantizar la existencia de cauces de interlocución se adoptarán las siguientes medidas:

1. Se regulará una carta de derechos y deberes ciudadanos, como instrumento en el que definir y facilitar su ejercicio.
2. Se promoverá la utilización de encuestas, realizadas en los propios servicios, en la web y redes sociales, o a pie de calle, los buzones de quejas y sugerencias, el cliente misterioso, los recursos administrativos y otros canales de participación tales como las Juntas de Distrito, las Asociaciones Vecinales, el Consejo Social, o la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
3. Se procurará la mejora de los procedimientos codecisión y la transformación de las estructuras burocráticas desactualizadas para la consecución de una gobernanza real, como gobierno abierto, participativo, transparente y equitativo.
4. Se convocará a todos los grupos de interés (asociaciones, universidad, etc.), invitándoles a expresar sus opiniones y sugerencias, incluso a colaborar en la redacción de las normas locales, con la posibilidad de pactarlas en el marco de la potestad material de decisión política.
5. Se implementarán los presupuestos participativos como instrumentos de mejora de la participación de la ciudadanía en la asignación de los recursos públicos y en la definición de objetivos prioritarios de gestión.
6. Se atenderá a las necesidades sociales en las diferentes etapas de la vida y se procurará la conciliación de tiempos de trabajo con los que no lo son (ocio, formación).

Asimismo se facilitará el ejercicio del derecho a la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos normativos en materia de la competencia local. Igualmente, a través de las entidades ciudadanas reconocidas de interés local, se establecerán las vías para solicitar a la Administración Local que se lleven a cabo actividades de interés público y de competencia local y con la aportación de medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal.

La atención ciudadana se estructurará a través de un doble mecanismo:

1. Se coordinará una atención generalista, integrada en un sólo servicio (Oficinas de Atención Ciudadana) consiguiendo beneficios claros en homogeneización de los datos, en accesibilidad de los ciudadanos, en el establecimiento de criterios uniformes, en la selección y formación de los operadores, en la adopción de decisiones, y en el reconocimiento de las singularidades propias del funcionamiento del servicio
2. Atención e información especializada, suministrada desde las propias Unidades que la generan. Dada la orientación al ciudadano, habrá que sentar las bases tecnológicas, de gestión, técnicas, y legales, incluidas las económicas, para conseguir que su relación con la administración sea más accesible en tiempo y coste.



Se entiende el derecho de acceso a la información como parte esencial del derecho genérico de participación ciudadana en los asuntos públicos<sup>1</sup>

### **Marco para la participación ciudadana 2.0**

El entorno cambiante y la transformación de la administración local exige el establecimiento de un marco para la participación ciudadana con un enfoque 2.0 basado en las siguientes medidas y estrategias:

1. Contemplar el uso de las tecnologías sociales como herramienta de mejora de la participación ciudadana mediante la superación de las tradicionales barreras de espacio y tiempo, abriendo espacios digitales abiertos a la participación sin restricciones y desarrollar comunidades virtuales que favorezcan el bien común.
2. Facilitar y promover la iniciativa y la participación ciudadana tanto individual como colectiva en la gestión local, sin perjuicio de las facultades de decisión correspondientes a los órganos locales correspondientes.
3. Hacer efectivos y velar por los derechos y deberes de la ciudadanía recogidos en la legislación aplicable y en la normativa local.
4. Acercar la gestión local a las ciudadanas y los ciudadanos en aras de alcanzar una democracia de proximidad real.
5. Diseñar órganos y mecanismos que garanticen los derechos de la ciudadanía relativos a participación ciudadana.
6. Lograr la integración de todos los sectores sociales en los mecanismos, espacios y dispositivos recogidos en la correspondiente normativa local.
7. Afianzar la participación ciudadana estratégica en la política local con el desarrollo de una cultura participativa que imprima carácter a toda la actividad en todo su ámbito territorial.
8. Adaptar la normativa local a la nueva realidad social, mediante la presencia y participación de la entidad local en las redes sociales digitales más utilizadas por la ciudadanía y mediante la creación de comunidades virtuales locales.
9. Servir de soporte y complemento a las estrategias y planes de actuación locales en materia de participación.

La participación ciudadana 2.0 se articulará como una participación accesible, plural, representativa, activa y abierta, facilitando la igualdad de oportunidades e integración de todos los sectores de la población directa y se explorará el desarrollo de un procedimiento de mediación, presencial o electrónico, para la resolución de conflictos.

Además de las redes y cauces de información y comunicación institucionales, los cargos electos y directivos públicos locales tendrán preferiblemente presencia en las redes sociales en aras a una mayor transparencia y mejor servicio público a la ciudadanía.

### **Aprobación del Código de Buen Gobierno por las Entidades Locales**

La aprobación del CBG por las Entidades Locales se llevará a cabo mediante la adopción del correspondiente acuerdo de adhesión por el Pleno de las respectivas entidades, para facilitar la íntegra suscripción de sus principios y valores por la totalidad de los miembros de la Corporación, gobierno y oposición.

La adecuada ejecución del CBG exigirá la asignación individualizada de dicha responsabilidad en el marco de la organización política y administrativa, a efectos de garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

---

<sup>1</sup> Las condiciones y ejercicio vienen establecidos en la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y reutilización aprobada por la Junta de Gobierno de la FEMP el 27 de mayo de 2014, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica con rango de ley.



Los órganos y personal responsables de dicha función adoptarán cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento del CBG, con especial incidencia en garantizar su conocimiento por la ciudadanía, su incorporación al ordenamiento jurídico local y la máxima difusión entre los agentes sociales, económicos y culturales.

Los acuerdos de adhesión al CBG serán comunicados a la FEMP para su conocimiento y, en su caso, seguimiento. Las entidades locales adheridas al CBG promoverán su incorporación a la Red de Entidades locales Local por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP.

### **Evaluación y seguimiento**

La adhesión al CBG requerirá la determinación de las estrategias para su desarrollo, evaluación y seguimiento en el ámbito de cada entidad local, encajando dichas actuaciones en el marco legislativo vigente y las peculiaridades de la respectiva entidad, con una visión participativa y colaboradora.

A tal fin, las EELL adheridas al CBG elaborarán, con la periodicidad que se determine, un informe de evaluación sobre su cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración, que incorporará, a su vez, el resultado de los procesos de evaluación y seguimiento de los instrumentos de planificación, las cartas de servicios y otros compromisos de calidad existentes en la respectiva entidad local. Se procederá a la creación de un Observatorio de evaluación de la transparencia, la calidad y el buen gobierno, a efectos de valorar la aplicación del Código y, proponer, actuaciones de implementación y mejora, así como de evaluación y seguimiento, sin perjuicio de la asignación de otras finalidades<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> La Red de Entidades locales Local por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP puede ser ámbito adecuado para su ubicación y también para la aprobación y desarrollo de líneas de trabajo y divulgación de instrumentos específicos, y complementarias a este código de aspectos tales como las relaciones entre gobiernos y empleados públicos, participación 2.0, utilización de redes sociales..etc.

## **ANEXO 8**

### **LISTADO DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS A LA RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN (FEMP)**

**LISTADO DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS A LA RED DE  
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA FEMP  
(Abril 2015)**

Puentes Viejas
Gandía
Torrejón de Ardoz
Llerena
Valverde del Hierro
Calamonte
Castellón de la Plana
Escorial
Almussafes
El Romeral
Utebo
Guadix
Villafranca de los Barros
Chapinería
San Cristobal de la Laguna
Burgos
Córdoba
Ávila
Bellreguard
Albacete
Avilés
Villacarrillo
Palma del Río
Palma de Mallorca
Huesca
La Matanza de Acentejo
Sevilla La Nueva
Las Herencias
Badalona
San Sebastián de los Reyes
Gúdar-Javalambre
Xeraco
Valdepeñas de la Sierra
Ubrique
Cornellà de Llobregat
Sevilla
Hoyo de Pinares
Lleida
Móstoles

Meco
Alfajar
Molina de Segura
Majadahonda
Canfranc
Matet
Boal
La Villa de Don Fadrique
Puente Genil
Tudela
Riudarenes
Sant Feliu de Llobregat
Santander
San Ildefonso
Arganda del Rey
Calatayud
Logroño
Algete
Cordobilla de Lacara
Alicante
del Jiloca
Segovia
Almoradi
Valencia
Las Torres de Cotillas
Centelles
Arona
Jaén
Gijón
El Campello
Icod de los Vinos
Horche
Ibi
Buñol
Girona
Alameda
Algeciras
Tenerife
Torreldones
Getafe

Alcañiz
La Yesa
Vigo
Torrent
Alaior
Moixent
Miguelturna
Maella
El Carpio
Castro del Río
Rota
La Pobla de Vallbona
Pedro Bernardo
Almassora
Puerto de Lumbreras
Vilanova i la Geltrú
León
Talavera de la Reina
Morella
Doña Mencía
Tórtola de Henares
Alcorcón
Palma d'Ebre
Piedrabuena
Graus
Algorfa
Pelabravo
Valladolid
El Puerto de Santa María
Teruel
Villena
Argoños
Madrid
Caravaca de la Cruz
Muel
Torre Pacheco
Zaragoza
Santa Eugènia
La Palma del Condado
Polopos - La Mamola

## **ANEXO 9**

### **CUESTIONARIO ‘POLITICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO LOCAL ESPAÑOL’**

## CUESTIONARIO

### POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO LOCAL ESPAÑOL

#### PRESENTACIÓN

El Gobierno Abierto es una política pública emergente que promueve la transparencia y el acceso a la información, la participación ciudadana y la colaboración entre múltiples actores, tanto en la formulación de políticas públicas como en la provisión de servicios.

Sus tres pilares - transparencia, participación y colaboración - suponen por una parte, voluntad política para que los gobiernos tomen acciones proactivas que garanticen el ejercicio del derecho al acceso a la información, y por otra, incorporan nuevos medios de participación y colaboración haciendo uso de las nuevas tecnologías y de los cauces de comunicación que brinda la web 2.0. y las redes sociales.

El presente cuestionario se enmarca en el proyecto de investigación de Tesis Doctoral sobre Gobierno Abierto en España. Los objetivos de esta investigación incluyen:

- Mejorar el conocimiento sobre el desarrollo de políticas de transparencia, participación y colaboración en las entidades locales españolas;
- Analizar en que medida un nivel efectivo de transparencia y apertura informativa favorece dinámicas de participación y colaboración ciudadana; e
- Identificar líneas de mejora en el desarrollo de iniciativas de gobierno abierto en el ámbito local y futuros proyectos de investigación.

El cuestionario compuesto de 23 preguntas está dividido en cuatro bloques: (1) Datos básicos de la entidad local; (2) Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; (3) Participación, colaboración y redes sociales y; (4) Cuestiones Generales sobre Gobierno Abierto.

El tiempo estimado para su cumplimentación es de 8 a 10 minutos aproximadamente.

Para cualquier información adicional, póngase en contacto con la investigadora principal a través del siguiente correo electrónico: [gobiernoabierto.iuog@gmail.com](mailto:gobiernoabierto.iuog@gmail.com)

Muchas gracias por su colaboración.

#### DATOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD LOCAL

**1. Indique el nombre de su municipio, diputación, consejo o cabildo**

**2. Indique la provincia a la que pertenece su entidad local**

**3. Indique su posición en la entidad local**

- ☐ Cargo electo
- ☐ Directivo
- ☐ Empleado público
- ☐ Habilitado nacional
- ☐ Otro (especifique)

**4. ¿Cuántos habitantes tiene su entidad local?**

- ☐ Entre 1 y 5.000 habitantes
- ☐ Entre 5.000 y 20.000 habitantes
- ☐ Entre 20.000 y 75.000 habitantes
- ☐ Entre 75.000 y 200.000 habitantes
- ☐ Entre 200.000 y 500.000 habitantes
- ☐ Más de 500.000 habitantes

**5. ¿Cuántos empleados públicos tiene su entidad local?**

- ☐ Entre 1 y 100
- ☐ Entre 100 y 500
- ☐ Entre 500 y 1.000
- ☐ Entre 1.000 y 2.000
- ☐ Entre 2.000 y 5.000
- ☐ Más de 5.000

**6. ¿Cuál es el número de concejales y/o diputados que componen el Pleno?**

- ☐ 7
- ☐ 7
- ☐ 9
- ☐ 11
- ☐ 13
- ☐ 17
- ☐ 21
- ☐ 25
- ☐ Más de 25

**TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DATOS ABIERTOS**

**7. Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la nueva Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?**

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ NS/NC

**8. ¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?**

- ☐ Alcaldía
- ☐ Secretaría
- ☐ Área de participación
- ☐ Área de Comunicación
- ☐ Área de Informática
- ☐ NS/NC
- ☐ Otro (especifique)

**9. ¿Cuenta su entidad con algún tipo de normativa sobre transparencia y buen gobierno?**

- ☐ Sí
- ☐ En proceso de aprobación
- ☐ En proceso de elaboración
- ☐ No
- ☐ NS/NC

**10. ¿Dispone su entidad local de un portal de transparencia en su página web?**

- ☐ Sí
- ☐ En proceso de implementación
- ☐ En estudio
- ☐ No
- ☐ NS/NC

**11. En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su entidad local**

- ☐ Estructura organizativa
- ☐ Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
- ☐ Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento
- ☐ Normativa, directrices, acuerdos y circulares
- ☐ Contratos y convenios suscritos
- ☐ Subvenciones y ayudas públicas
- ☐ Presupuestos y cuentas anuales
- ☐ Retribuciones de los altos cargos
- ☐ Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
- ☐ Otro (especifique)

**12. Valore de 1 a 10 el grado de implementación de las políticas de transparencia de su entidad local (siendo 1 el nivel mínimo y 10 el nivel máximo de implementación)**

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

**13. Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su entidad local:**

- ☐ Mandato 2003 - 2007
- ☐ Mandato 2007 - 2011
- ☐ Mandato 2011 - hasta la fecha
- ☐ NS/NC

**PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN CIUDADANA Y REDES SOCIALES**

**14. ¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?**

- ☐ Alcaldía
- ☐ Secretaría
- ☐ Área de Participación
- ☐ Área de Comunicación
- ☐ NS/NC
- ☐ Otro (especifique)



**15. ¿Tiene su entidad local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de redes sociales (Facebook, Twitter, comunidades virtuales, etc.)?**

- ☐ Sí
- ☐ En proceso de implementación
- ☐ En estudio
- ☐ No
- ☐ NS/NC

**16. En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:**

- ☐ Twitter
- ☐ Facebook
- ☐ Google+
- ☐ Instagram
- ☐ Tumblr
- ☐ Blog de la entidad local
- ☐ Otro, (especifique)

**17. Indique si su entidad local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:**

- ☐ Sí
- ☐ En proceso de implementación
- ☐ En estudio
- ☐ No
- ☐ NS/NC

**18. ¿Dispone la web de su entidad local de un sistema o entorno (tipo wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc.?**

- ☐ Sí
- ☐ En proceso de implementación
- ☐ En estudio
- ☐ No
- ☐ NS/NC

**19. ¿Publica su entidad local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?**

- ☐ Sí
- ☐ En proceso de implementación
- ☐ En estudio
- ☐ No
- ☐ NS/NC

#### **CUESTIONES GENERALES DE GOBIERNO ABIERTO**

**20. ¿Conoce la iniciativa internacional “Alianza para el Gobierno Abierto”?**

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ NS/NC

**21. ¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?**

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ NS/NC

**22. En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:**

- ☐ Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
- ☐ Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
- ☐ Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
- ☐ Medida en e-salud
- ☐ Redes sociales y seguridad ciudadana
- ☐ Otras, (especifique)

**23. Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales.**

*Los datos recopilados en este cuestionario serán tratados de forma anónima y serán analizados con fines exclusivamente académicos.*

*Si desea recibir información relativa a los resultados del estudio, le ruego facilite su dirección de correo electrónico.*

**MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN**

## **ANEXO 10**

### **RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE 'POLITICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO LOCAL ESPAÑOL'**

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	A Coruña
Provincia a la que pertenece:	La Coruña
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	245.923
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Área de Planificación
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	3
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Alaquàs
Provincia a la que pertenece:	Valencia
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	30.273
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	No
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Si
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	No
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Albacete
Provincia a la que pertenece:	Albacete
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	172.693
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Servicio de Modernización y Calidad
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2003 - 2007
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Google+
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
	Medidas en e-salud
	Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Alcobendas
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	112.196
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Dpto. de Servicios Interactivos (Área Administración Municipal)
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos IRPF cargos electos, información sobre los partidos políticos...
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook  Blog de la Entidad Local  Instagram YouTube
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno  Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Alicante/Alacant
Provincia a la que pertenece:	Alicante/Alacant
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	335.052
Número de empleados públicos:	Entre 2.000 y 5.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Blog de la Entidad Local
Otro (especifique):	espacio de participación ciudadana portal web
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Almonte
Provincia a la que pertenece:	Huelva
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	22.964
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	10
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Blog de la Entidad Local
	Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
	Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Aranjuez
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	57.728
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Si
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	No
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En Estudio
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	6
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	2011-Hasta la Fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Participación y Atención al Ciudadano
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Si
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Facebook
	Twitter
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Si
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Arganda del Rey
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	55.981
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Concejalía de Innovación y Calidad de la Administración
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook   Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Arona
Provincia a la que pertenece:	Santa Cruz de Tenerife
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	80.987
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	CC-PNC-CCN
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Servicio de Atención Ciudadana
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	Inventario municipal, PGOU,
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	Youtube, Flickr
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Hemos participado desde 2009 en evaluación de los índices de transparencia de los ayuntamientos (ITA) que organiza Transparencia Internacional España.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Avila
Provincia a la que pertenece:	Avila
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	59.258
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Si
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Administración Local (Incluye Nuevas tecnologías y Atención al Ciudadano)
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Si
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Si
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Si
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Avilés
Provincia a la que pertenece:	Asturias
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	82.568
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En estudio
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Entiendo que lo complicado es la publicar los datos y documentos en un lenguaje "más amigable" para los ciudadanos.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Badalona
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	219.708
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	
Otro (especifique):	Personal Eventual
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	Área de Gobierno
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	NS/NC
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	10
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	Consensus
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En proceso de implementación
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Baena
Provincia a la que pertenece:	Córdoba
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	20.358
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de comunicación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En estudio
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	4
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Medidas en e-salud
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Barberá del Vallés
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	32.580
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de aprobación
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	No
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Barcelona
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Más de 500.000 habitantes
Número de habitantes:	1.611.822
Número de empleados públicos:	Más de 5.000
Partido Político en el Gobierno:	CIU
Puesto / Cargo en la Entidad:	
Otro (especifique):	Comisionado (miembro gobierno no electo)
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de participación
Otro (especifique):	Área de Gobierno Abierto
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	10
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook Tumblr Blog de la Entidad Local Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Basauri
Provincia a la que pertenece:	Vizcaya
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	41.799
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	EAJ-PNV
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	No
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Benidorm
Provincia a la que pertenece:	Alicante/Alacant
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	73.768
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de comunicación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook  Google+ Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
Otro (especifique):	Redes sociales y seguridad ciudadana
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Bilbao
Provincia a la que pertenece:	Vizcaya
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	349.356
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	EAJ-PNV
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	Todo aquello que ha solicitado Transparencia Internacional para los indicadores del año
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2003 - 2007
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Blanes
Provincia a la que pertenece:	Girona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	39.660
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE-PSC
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En estudio
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	6
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En estudio
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Burgos
Provincia a la que pertenece:	Burgos
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	179.097
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook Blog de la Entidad Local Instagram <a href="http://www.ciudadanosconectados.com/">http://www.ciudadanosconectados.com/</a>
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> ) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo ( <a href="mailto:info@od">info@od</a> ) Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Cáceres
Provincia a la que pertenece:	Cáceres
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	95.925
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	Instagram Buzón de quejas
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	Redes sociales y seguridad ciudadana Plataformas de Open Data
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Calatayud
Provincia a la que pertenece:	Zaragoza
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	20.926
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	
Otro (especifique):	Servicio externalizado
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	De forma coordinada área de participación, comunicación e informática
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	Redes sociales y seguridad ciudadana
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Calpe/Calp
Provincia a la que pertenece:	Alicante/Alacant
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	29.442
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Si
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Si
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Si
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos Convenios,
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Si
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En proceso de implementación
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En proceso de implementación
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Si
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Si
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Cambrils
Provincia a la que pertenece:	Tarragona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	33.775
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	CIU
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	No especificado, pero lidera proyecto desde Nuevas Tecnologías
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de aprobación
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	Los indicados por infoparticipa, ITA i GCI del banco mundial
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	Redes sociales y seguridad ciudadana
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Cartagena
Provincia a la que pertenece:	Murcia
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	217.641
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de comunicación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	
Otro (especifique):	CONCEJALÍA DE RELACIONES VECINALES
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	PÁGINA WEB
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	No
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Castelldefels
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	63.077
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Blog de la Entidad Local
	Instagram
Otro (especifique):	Flickr
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En estudio
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
Otro (especifique):	Portal de Transparència Generalitat de Catalunya
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	agradecería que compartierais con nosotros los resultados de vuestro estudio. Organització@castelldefels.org

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia a la que pertenece:	Castellón/Castelló
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	180.185
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	Dirección de Modernización y Calidad
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook  Google+
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno  Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Catarroja
Provincia a la que pertenece:	Valencia
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	27.654
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Presupuestos y cuentas anuales
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	5
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Sería muy necesario que exista una estrategia nacional con recursos alineados para vertebrar el sector público en este ámbito de la transparencia y la participación ciudadana. no tiene sentido que se aprueben leyes sin una estrategia y recursos para implantar herramientas globales que permitan el éxito en evaluación de resultados e impactos de estas políticas públicas.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Ciudad Real
Provincia a la que pertenece:	Ciudad Real
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	74.872
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Si
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Si
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Si
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Si
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Si
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Si
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Córdoba
Provincia a la que pertenece:	Córdoba
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	328.704
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Área de Hacienda y AAPP
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos Información de Organismos Autónomos y Empresas Municipales
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	Buzón de Sugerencia
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	No
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Cornellá de Llobregat
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	86.687
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Presidencia, Comunicación, Informática y Proyectos transversales
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	y el resto que contempla la normativa
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2003 - 2007
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Blog de Entidad Local
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
Otro (especifique):	Redes sociales y seguridad ciudadana
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Cuenca
Provincia a la que pertenece:	Cuenca
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	56.107
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Habilitado nacional
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Si
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Área de Hacienda
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Si
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Si
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	5
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	NS/NC
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Si
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Si
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	NS/NC
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	NS/NC
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	No
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Culleredo
Provincia a la que pertenece:	La Coruña
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	29.415
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de aprobación
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	3
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En proceso de implementación
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Donostia/San Sebastián
Provincia a la que pertenece:	Guipúzcoa
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	186.500
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	BILDU-EA-ALTERNATIBA
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2003 - 2007
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Blog de la Entidad Local
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En proceso de implementación
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	El Ejido
Provincia a la que pertenece:	Almería
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	82.983
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	6
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Esplugues de Llobregat
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	46.667
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	Tenemos el sello Infoparticipa con el 100% de los indicadores cumplidos.
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	Google+ Instagram YouTube, Flickr, Distintos blogs
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En proceso de implementación
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En proceso de implementación
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	Redes sociales y seguridad ciudadana
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Pregunta 17.- Disponemos de diferentes mecanismos participativos para que propuestas y proyectos sean debatidos por la ciudadanía, pero todos ellos son presenciales. Pregunta 18.- Disponemos de mecanismos participativos para conseguir la colaboración de la ciudadanía en la elaboración de contenidos, pero de carácter presencial. Pregunta 19.- Estamos trabajando para publicar en las próximas semanas ficheros en formato abierto "open data".

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	El Puerto de Santa María
Provincia a la que pertenece:	Cádiz
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	89.142
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	Repartidas Secretaria / Comunicación / Nuevas Tecnologías
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	Los requeridos por Transparencia Internacional
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Blog de la Entidad Local
	Google+
	Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Falta homogeneización por parte del Estado y un benchmarking oficial



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	El Prat de Llobregat
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	63.419
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	ICV-EUiA-E
Puesto / Cargo en la Entidad:	Habilitado nacional
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	
Otro (especifique):	Concejalía de Ciudadanía
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Instagram
Otro (especifique):	Flickr
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	Ley de transparencia 19/2014 (autonómica-Cataluña))
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Fuengirola
Provincia a la que pertenece:	Málaga
Tramo población:	Entre 75.000 Y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	75.856
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 100
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Si
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	NS/NC
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Si
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2003-2007
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de Participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Si
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
	Instagram Google+
Otro (especifique):	Pinterest y youtube
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Si
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Si
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Si
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Redes sociales y Seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Gandía
Provincia a la que pertenece:	Valencia
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	78.543
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Gavá
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	46.377
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	contratos y convenios suscritos
	subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	Área de participación
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Redes sociales y Seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Gerona
Provincia a la que pertenece:	Gerona
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	97.292
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	CIU
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Google+
	Instagram
Otro (especifique):	youtube, blogs
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	SI
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Getafe
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	172.526
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Coordinación de Gobierno
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos DAR CUMPLIMIENTO AL CUESTIONARIO DEL ITE
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook  Google+
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	NS/NC
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	NS/NC
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	El Ayuntamiento de Getafe ha aumentado no solo los aspectos de transparencia obligados en la ley sino también los que recoge el cuestionario de la ITA. Además de adaptaciones de la web para cumplir las medidas de accesibilidad w3c para que todas las personas puedan acceder.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Getxo
Provincia a la que pertenece:	Vizcaya
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	79.839
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	EAJ-PNV
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Calidad
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos Todos los que indica ITA 2014 y algunos más
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook Tumblr
Otro (especifique):	Hoja web, pinterest, youtube, Blogs..
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En proceso de implementación
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Gijón
Provincia a la que pertenece:	Asturias
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	275.274
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	FAC
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Planificación y Modernización
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos 80 indicadores ITA más observa.gijón.es
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
	Google+
Otro (especifique):	Ver <a href="http://www.gijon.es/page/2840-redes-sociales">http://www.gijon.es/page/2840-redes-sociales</a> y también portal observa.gijon.es
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> ) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	En Gijón acabamos de poner en marcha el portal observa.gijon.es que permite que los ciudadanos participen en la elaboración de información, su difusión vía redes sociales, blogs y web así como la posibilidad de realizar aportaciones, comentarios y opiniones. También se permite que se publiquen conjuntos de datos y que se puedan reutilizar, colaborar con la realización de gráficos y análisis de la información publicada tanto por el Ayuntamiento como por los propios ciudadanos y asociaciones.



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Granollers
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	59.753
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Área de Planificació estratègica y Ciudadanía
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
	Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Huelva
Provincia a la que pertenece:	Huelva
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	148.101
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Concejalía de Transparencia en la gestión municipal
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	Todos los datos establecidos en las Leyes 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Inform
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Illescas
Provincia a la que pertenece:	Toledo
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	25.382
Número de empleados públicos:	Entre 1 y 100
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	No
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En estudio
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	10
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de comunicación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Facebook
	Google+
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	NS/NC
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Irun
Provincia a la que pertenece:	Guipúzcoa
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	61.113
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos Seguimiento de obras públicas, cartas de servicio y su grado de cumplimiento, etc., etc.
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook  Google+
Otro (especifique):	Ultimándose un avanzado buzón ciudadano participativo, como evolución del sistema de
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En estudio
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Necesidad de colaborar para desarrollar políticas comunes y coherentes en esta materia. En Euskadi se está realizando a través de la Red de Municipios Vascos por la Transparencia impulsada por EUDEL. Tomamos parte también en las iniciativas de la FEMP en esta materia.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Jaén
Provincia a la que pertenece:	Jaén
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	116.176
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	Dentro de la Concejalía de Hacienda y Comunicación
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En estudio
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	5
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	
Otro (especifique):	Concejalía de Participación Ciudadana
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En estudio
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> ) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	A fin de garantizar un estudio real y efectivo sobre el cumplimiento de los niveles de transparencia, entendemos que es necesario que desde el Gobierno y en base a la Ley 19/2013 se establezcan los indicadores para medir la transparencia de los ayuntamientos, ya que en la actualidad hay múltiples estudios con indicadores y resultados muy diferentes que tergiversan la realidad del cumplimiento o no de los niveles de transparencia

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Jerez de la Frontera
Provincia a la que pertenece:	Cádiz
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	211.670
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos Periodo medio de pago, carta de servicios
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Pobla de Vallbona (la)
Provincia a la que pertenece:	Valencia
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	22.499
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	Servicio Jurídico
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y PATRIMONIAL
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de comunicación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	APP LOCAL; BUZÓN CIUDADANO VIRTUAL
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Leganés
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	186.995
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	5
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2003 - 2007
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	León
Provincia a la que pertenece:	León
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	130.601
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	10
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	En proceso de implementación
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	NS/NC
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Hospitalet de Llobregat (L)
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	254.056
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Lleida
Provincia a la que pertenece:	Lleida
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	139.809
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE-PSC
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos Plantilla de personal y catálogo de puestos de trabajo y retribuciones. Inventario de bien
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	y la concejalía de Participación Ciudadana
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	Instagram Xat
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	NS/NC
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	Redes sociales y seguridad ciudadana
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Logroño
Provincia a la que pertenece:	La Rioja
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	153.066
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Comisión de transparencia (técnica)
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook  Blog de la Entidad Local   Programa de sugerencias, quejas y reclamaciones. app logroño.es
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno    Otro (especifique):
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Lorca
Provincia a la que pertenece:	Murcia
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	92.718
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Lucena
Provincia a la que pertenece:	Córdoba
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	42.754
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Habilitado nacional
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	5
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	NS/NC
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	No
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Lugo
Provincia a la que pertenece:	Lugo
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	98.761
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de aprobación
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	6
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	No
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	NS/NC
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Madrid
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Más de 500.000 habitantes
Número de habitantes:	3.207.247
Número de empleados públicos:	Más de 5.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Área de calidad y evaluación (Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administraci
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	Procesos selectivos, información financiera, Inventario bienes, participación ciudadana,
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2003 - 2007
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook  Blog de la Entidad Local Google+
Otro (especifique):	Blogger, Youtube, Flickr, Vimeo, Wikipedia, Likedin, Pinterest
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En proceso de implementación
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno  Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Mahadahonda
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	70.386
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Si
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de comunicación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Si
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos Todo lo que pide Transparencia Internacional
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Si
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Si
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Si
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Málaga
Provincia a la que pertenece:	Málaga
Tramo población:	Más de 500.000 habitantes
Número de habitantes:	568.479
Número de empleados públicos:	Entre 2.000 y 5.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de aprobación
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	10
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook Tumblr  Google+ Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En proceso de implementación
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En proceso de implementación
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno  Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Sería interesante que el gobierno aportase plataformas integradoras a las diferentes Administraciones para no tenga cada una que adquirir portales de datos abiertos, transparencia o participación. Y muy importante, un método de evaluación de la transparencia único pues ahora mismo ha muchas evaluaciones y cada una diferente de las demás: ITA, infoparticipa, Dyntra,...

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Manlleu
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	20.435
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	ERC
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Área de Organización y Administración Electrónica
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos Agenda de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook    Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno   Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Manresa
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	76.170
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	CIU
Puesto / Cargo en la Entidad:	
Otro (especifique):	Cargo de confianza
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de comunicación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	Los requeridos por la ITA o por el Sello Infoparticipa de la UAB
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook  Blog de la Entidad Local Google+
Otro (especifique):	Flickr, Youtube, Slideshare, Isuu
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Marbella
Provincia a la que pertenece:	Málaga
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	142.018
Número de empleados públicos:	Entre 2.000 y 5.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de comunicación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Mataró
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	124.099
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	CIU
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	Whatsapp y telegram
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En estudio
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Mérida
Provincia a la que pertenece:	Badajoz
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	59.049
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Presupuestos y cuentas anuales
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	3
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En estudio
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Mijas
Provincia a la que pertenece:	Málaga
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	85.600
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	No
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Miranda de Ebro
Provincia a la que pertenece:	Burgos
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	37.648
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	No
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	5
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	
Otro (especifique):	Alcaldía
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Google+
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	NS/NC
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Molina de Segura
Provincia a la que pertenece:	Murcia
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	68.450
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	Youtube
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Mollet del Vallès
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	51.954
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Alcaldía y gerencia
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	NS/NC
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2003 - 2007
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Montcada i Reixac
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	34.863
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	
	Contratos y convenios suscritos
	Presupuestos y cuentas anuales
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	3
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En proceso de implementación
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	No
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Móstoles
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	206.451
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Concejalía de Coordinación Estratégica, Institucional y Administración Pública
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
	Google+
Otro (especifique):	youtobe, sms, paticipa _mos, aplicación mejora Móstoles
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Murcia
Provincia a la que pertenece:	Murcia
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	438.246
Número de empleados públicos:	Entre 2.000 y 5.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook Tumblr Blog de la Entidad Local
Otro (especifique):	YouTube, Picasa
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Onda
Provincia a la que pertenece:	Castellón/Castelló
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	25.572
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Habilitado nacional
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Oviedo
Provincia a la que pertenece:	Asturias
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	225.089
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Oficina de Transparencia
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos Todos los indicadores del ITA
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook  Blog de la Entidad Local    
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno    
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Paiporta
Provincia a la que pertenece:	Valencia
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	24.787
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Habilitado nacional
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Si
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	5
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Si
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	
	Facebook
Otro (especifique):	Página web institucional del Ayuntamiento (www.paiporta.es)
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	No
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Palma de Mallorca
Provincia a la que pertenece:	Baleares
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	398.162
Número de empleados públicos:	Entre 2.000 y 5.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Departamento de Calidad
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook  Google+
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	NS/NC
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	No
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Palma del Río
Provincia a la que pertenece:	Córdoba
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	21.582
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	Alcalde
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Área de Atención al Ciudadano (Coordinación). Secretaría General e Intervención de Fo
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	Equipamientos, Canales para la participación, actividades municipales, incidencias, eve
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	También interviene el Área de Atención al Ciudadano
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	El Ayuntamiento de Palma del Río viene trabajando para que la transparencia, participación, colaboración y buen gobierno sean verdaderamente los ejes para una nueva relación entre la ciudadanía y la administración local, por ello estamos muy interesados en el desarrollo de los citados ejes, en este caso en el de gobierno abierto, agradeciendo las iniciativas que nos puedan llegar para mejorar nuestro trabajo. Estamos seguros que las conclusiones de este proyecto de investigación nos podrán orientar y ayudar en el proceso de mejora en el que estamos inmersos.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Pamplona/Iruña
Provincia a la que pertenece:	Navarra
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	196.955
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	UPN
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Gerencia Municipal
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	Emisión en directo y en diferido de plenos y ruedas de prensa, relación de pagos a prove
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook  Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	NS/NC
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno  Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Parla
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	125.634
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	5
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Blog de la Entidad Local
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Portugalete
Provincia a la que pertenece:	Vizcaya
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	47.233
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	web de participación ciudadana <a href="http://www.portugaleteon.org">www.portugaleteon.org</a> y app móvil de comunicación e
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En proceso de implementación
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> ) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Puente Genil
Provincia a la que pertenece:	Córdoba
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	30.244
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
Otro (especifique):	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	6
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Blog de la Entidad Local
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Quart de Poblet
Provincia a la que pertenece:	Valencia
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	25.174
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Concejalía de Gobierno Abierto
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de aprobación
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	INGRESOS, GASTOS Y DEUDAS MUNICIPALES. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN.
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Blog de la Entidad Local
Otro (especifique):	Plataforma "Ajuntament Obert! BLogs de las áreas municipales
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En proceso de implementación
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En proceso de implementación
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Rubi
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	74.468
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE-PSC
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> ) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Sabadell
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	207.649
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE-PSC
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Àrea de Presidencia, Economia i Serveis Centrals
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos Actividad y participación social
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	
Otro (especifique):	Servicio de Relaciones Ciudadanas
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook    Instagram Youtube, Flickr
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno     Otro (especifique):
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	El Estado debería convocar Subvenciones para apoyar el desarrollo de proyectos, y la innovación, en materia de Transparencia y Gobierno Abierto. También convocar premios a las mejores prácticas.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Salamanca
Provincia a la que pertenece:	Salamanca
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	149.528
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Régimen Interior
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	10
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
	Google+ Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	NS/NC
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	San Cristóbal de la Laguna
Provincia a la que pertenece:	Santa Cruz de Tenerife
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	151.718
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	CC-PNC-CCN
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	área de presidencia y planificación
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de aprobación
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En estudio
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	No
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	San Fernando de Henares
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	41.226
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	IU
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Declaración anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	5
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	San Pedro del Pinatar
Provincia a la que pertenece:	Murcia
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	24.102
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Colaboración Secretaria, Partic. ciudadana e informatica
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En estudio
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	4
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Blog de la Entidad Local
Otro (especifique):	correo electrónico
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En estudio
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Serían necesarias herramientas de ayuda a las Entidades Locales para la interpretación de las nuevas Leyes y Normas que afectan a las Transparencia y Buen Gobierno

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	San Sebastián de los Reyes
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	82.090
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de comunicación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Blog de la Entidad Local
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Sant Cugat del Vallès
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	86.108
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	CIU
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Gerencia
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	10
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook  Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Sant Vicenç dels Horts
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	28.181
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	ERC
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de comunicación
Otro (especifique):	Es una tÁrea compartida entre el Área de Comunicación y el Área de Secretaría
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	No
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Google+
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Se necesitan más recursos económicos y humanos para tirar adelante una buena política de gobierno abierto en los Ayuntamientos, administraciones más próximas a la ciudadanía que cualquier otra. Y sobre todo, una hoja de ruta que marque prioridades por parte de los cargos electos y directivos del Ayuntamiento.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Santa Coloma de Gramenet
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	120.029
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE-PSC
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de aprobación
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En estudio
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	No
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Santa Cruz de Tenerife
Provincia a la que pertenece:	Santa Cruz de Tenerife
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	206.593
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	CC-PNC-CCN
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	Jefe de servicio
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	NS/NC
Otro (especifique):	Por determinar en este momento
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	5
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	NS/NC
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
Otro (especifique):	HERRAMIENTA EN WEB PROXIMAMENTE
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	NS/NC
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Santander
Provincia a la que pertenece:	Cantabria
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	177.123
Número de empleados públicos:	Entre 1.000 y 2.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	En proceso de implementación
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Santiago de Compostela
Provincia a la que pertenece:	La Coruña
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	96.041
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Área de Régimen Interior y Atención a la Ciudadanía
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	Proyecto Aporta, Opening up educación
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Sitges
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	29.140
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	CIU
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En estudio
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Blog de la Entidad Local
	Instagram
Otro (especifique):	FLICKR
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Soria
Provincia a la que pertenece:	Soria
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	39.753
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	PAG. WEB CON FORMULARIOS
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Talavera de la Reina
Provincia a la que pertenece:	Toledo
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	88.548
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	No existe. Se ha creado una Delegación especial en materia de transparencia
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Contratos y convenios suscritos Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	6
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Tías
Provincia a la que pertenece:	Las Palmas
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	20.451
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	17
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En estudio
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Torrejón de Ardoz
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	123.761
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	10
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En estudio
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> ) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Estamos trabajando en colaboración con la FEMP para implantar aún más políticas de transparencia y buen gobierno, que sean comunes a todos los municipios.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Torrent
Provincia a la que pertenece:	Valencia
Tramo población:	Entre 75.000 y 200.000 habitantes
Número de habitantes:	80.759
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Habilitado nacional
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Área de Información al Ciudadano
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	Urbanística, Medioambiental, Personal, etc...
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	10
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	
Otro (especifique):	Área de Información Ciudadana
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
	Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En estudio
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Tudela
Provincia a la que pertenece:	Navarra
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	35.369
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	UPN
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Organización y Calidad y Atención Ciudadana
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	Cumplimos 56 indicadores de los 80 de ITA
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Muchas gracias por facilitarnos la posibilidad de participar. Nos encantaría el poder disponer de los resultados que se obtengan y de las novedades que surjan.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Valdemoro
Provincia a la que pertenece:	Madrid
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	71.578
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En estudio
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	5
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Facebook
	Twitter
	Tuenti
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Ley 19/2013 de Transperencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Valencia
Provincia a la que pertenece:	Valencia
Tramo población:	Más de 500.000 habitantes
Número de habitantes:	792.303
Número de empleados públicos:	Entre 2.000 y 5.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de aprobación
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	En proceso de implementación
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En proceso de implementación
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En proceso de implementación
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> ) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Valladolid
Provincia a la que pertenece:	Valladolid
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	309.714
Número de empleados públicos:	Entre 2.000 y 5.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Área de Presidencia
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	Todos los del cuestionario ITA
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
	Blog de la Entidad Local
Otro (especifique):	Youtube pinterest fíkr
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En proceso de implementación
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od) Medidas en e-salud Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Resultan de gran interés las iniciativas de la Federación Española de Municipios y Provincias para unificar criterios en el ámbito local.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Vigo
Provincia a la que pertenece:	Pontevedra
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	296.479
Número de empleados públicos:	Entre 2.000 y 5.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	9
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	En proceso de implementación
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En proceso de implementación
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En proceso de implementación
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Viladecans
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	65.444
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento
	Presupuestos y cuentas anuales
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
	Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Vilanova i la Geltrú
Provincia a la que pertenece:	Barcelona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	66.275
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	CIU
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos Publicación de 74 de los 80 indicadores ITA
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	7
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	En proceso de implementación
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook    Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno   Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	En referencia a la pregunta 15, nuestro ayuntamiento dispone de distintas redes sociales activas pero actualmente tan solo se utilizan como canal de información, no aún de relación.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Vila-seca
Provincia a la que pertenece:	Tarragona
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	21.689
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	CIU
Puesto / Cargo en la Entidad:	Directivo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En estudio
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	6
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2003 - 2007
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	No
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Villanueva de la Serena
Provincia a la que pertenece:	Badajoz
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	26.157
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Secretaría
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
	Retribuciones de los altos cargos
	Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Google+
	Instagram
Otro (especifique):	Teléfono Villanueva avisa
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En proceso de implementación
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	En proceso de implementación
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	Son esenciales para un buen gobierno, te permite estar pegado al terreno y a los intereses de los ciudadanos.

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Villena
Provincia a la que pertenece:	Alicante
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	34.834
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	LOS VERDES
Puesto / Cargo en la Entidad:	Secretario del Alcalde
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de Informática
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de qué fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
	Blog de la Entidad Local
	Google+
	Instagram
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En proceso de implementación
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En estudio
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es)
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Vitoria-Gasteiz
Provincia a la que pertenece:	Álava
Tramo población:	Entre 200.000 y 500.000 habitantes
Número de habitantes:	241.386
Número de empleados públicos:	Entre 2.000 y 5.000
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Comisión compuesta por concejales y técnicos de diferentes departamentos
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook Blog de la Entidad Local Google+
Otro (especifique):	Buzón ciudadano
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Zamora
Provincia a la que pertenece:	Zamora
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	64.986
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	PP
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	NS/NC
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	NS/NC
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	En proceso de elaboración
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos
	Normativa, directrices, acuerdos y circulares
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	No
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	NS/NC
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Zaragoza
Provincia a la que pertenece:	Zaragoza
Tramo población:	Más de 500.000 habitantes
Número de habitantes:	682.004
Número de empleados públicos:	Entre 2.000 y 5.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	Más de 25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	Sí
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	Sí
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos DatosAbiertos.zaragoza.es GobiernoAbierto.zaragoza.es
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	10
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2003 - 2007
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook
Otro (especifique):	Flickr, Youtube
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	Sí
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	Sí
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	NS/NC
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Portal de Transparencia sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (info@od)
Otro (especifique):	Redes sociales y seguridad ciudadana
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	



Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Zarautz
Provincia a la que pertenece:	Guipúzcoa
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	22.760
Número de empleados públicos:	Entre 100 y 500
Partido Político en el Gobierno:	BILDU-EA-ALTERNATIBA
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Alcaldía
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	4
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	NS/NC
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter Facebook Blog de la Entidad Local
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	Sí
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	En proceso de implementación
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	No
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Alcalá de Guadaira
Provincia a la que pertenece:	Sevilla
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	73.876
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1.000
Partido Político en el Gobierno:	PSOE
Puesto / Cargo en la Entidad:	Empleado público
Otro (especifique):	
Número de concejales :	25
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	
Otro (especifique):	Organización
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa Planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento Normativa, directrices, acuerdos y circulares Contratos y convenios suscritos Subvenciones y ayudas públicas Presupuestos y cuentas anuales Retribuciones de los altos cargos Declaraciones anuales de bienes y actividades de los cargos electos
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	8
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2011 - hasta la fecha
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	
Otro (especifique):	Delegación de Participación Ciudadana
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	No
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado (transparencia.gob.es) Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	

Preguntas:	Respuestas
Nombre de la Entidad Local:	Villa de Agüimes
Provincia a la que pertenece:	Las Palmas
Tramo población:	Entre 20.000 y 75.000 habitantes
Número de habitantes:	30.214
Número de empleados públicos:	Entre 500 y 1000
Partido Político en el Gobierno:	RA
Puesto / Cargo en la Entidad:	Cargo electo
Otro (especifique):	
Número de concejales :	21
¿Tiene conocimiento de los elementos esenciales de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?	Sí
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno?	Área de informática
Otro (especifique):	
¿Cuenta su Entidad Local con algún tipo de normativo sobre transparencia y buen gobierno?	No
¿Dispone su Entidad Local de un portal de transparencia en su página web?	En proceso de implementación
En caso de que la respuesta sea afirmativa o en proceso de implementación, señale qué tipo de datos publica su Entidad Local:	Estructura organizativa
	Contratos y convenios suscritos
	Subvenciones y ayudas públicas
	Presupuestos y cuentas anuales
Otro (especifique):	
Valore del 1 al 10 el grado de cumplimiento de las políticas de transparencia de su Entidad Local:	4
Señale a partir de que fecha se han desarrollado políticas de transparencia y buen gobierno en su Entidad Local:	Mandato 2007 - 2011
¿Qué órgano o departamento de su entidad es el responsable de las políticas de participación ciudadana?	Área de participación
Otro (especifique):	
¿Tiene su Entidad Local establecida la posibilidad de comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales?	Sí
En caso afirmativo, indique a través de cuál o cuáles:	Twitter
	Facebook
Otro (especifique):	
Indique si su Entidad Local publica propuestas y proyectos a través de internet para que sean debatidos y valorados por los ciudadanos:	En estudio
Dispone la web de su Entidad Local de un sistema o entorno (tipo Wikipedia) que permita la colaboración de los ciudadanos en la creación de contenidos culturales, turísticos, de ocio, etc?	No
¿Publica su Entidad Local datos en formato reutilizable, que puedan ser editados y tratados, por parte de los ciudadanos?	No
¿Conoce la iniciativa internacional 'Alianza para el Gobierno Abierto'?	Sí
¿Conoce las actuaciones del Gobierno de España en materia de gobierno abierto?	Sí
En caso de conocer alguna de ellas indique cuál o cuáles:	Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Estado ( <a href="http://transparencia.gob.es">transparencia.gob.es</a> )
	Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
	Redes sociales y seguridad ciudadana
Otro (especifique):	
Finalmente, si lo desea, incluya los comentarios que considere oportunos sobre las políticas de gobierno abierto en las entidades locales:	